

Unión Patriótica

Expedientes contra el olvido

Roberto Romero Ospina



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
HUMANA

Unión Patriótica

Expedientes contra el olvido

Roberto Romero Ospina

Alcalde Mayor de Bogotá
Gustavo Petro Urrego

Secretario Distrital de Gobierno
Guillermo Asprilla Coronado

**Subsecretario de Asuntos para la
Convivencia y Seguridad Ciudadana**
Édgar Augusto Ardila Amaya

**Alta Consejera para los Derechos
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación**
Ana Teresa Bernal

Director de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia
Camilo Castellanos Rodríguez

**Representante en Colombia de la
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo**
Julián Artacho Valverde

Director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Camilo González Posso

Equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

Darío Colmenares Millán
José Darío Antequera
Alejandra Gaviria Serna
Carlos Eduardo Espitia Cueva
Juan Carlos Jiménez
Roberto Romero Ospina
Diego Luis Angulo Martínez
Marcela Ceballos
Antonio González
Juan Diego Delgadillo
María del Mar Pizarro

Comité editorial

Camilo González Posso
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Roberto Romero Ospina
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Juan Carlos Jiménez
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación



**Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament**



**BOGOTÁ
HUMANANA**

© Roberto Romero Ospina

© Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Primera edición: 18 de octubre de 2011
Segunda edición: octubre de 2012

ISBN: 978-958-8411-52-1

Edición, diseño & diagramación
TALLER DE EDICIÓN • ROCCA® S. A.
taller@tallerdeedicion.com
www.tallerdeedicion.com

Fotografías
Archivo Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Archivo *Semanario Voz*, Lara, Reiniciar, H.I.J.O.S,
Colombia, Presidencia de la República.

Impresión y acabados
PERIÓDICAS S.A.S.

Bogotá, octubre de 2012

*El texto aquí presentado sólo compromete al autor
de la obra y no a las instituciones editoras, Alcaldía
Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Gobierno,
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y la
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo*

*A todas las víctimas de la Unión Patriótica, que dieron
la vida en aras de sus principios; a mi hijo Roberto
José, a Marina Córdoba, por su colaboración en la
pesquisa de los datos de las víctimas; a Camilo González
Posso, por tomar la iniciativa que dio luz a esta obra.*

Agradecimientos

Este libro no hubiera sido posible sin el concurso del *Semanario Voz*, que tercamente lleva cincuenta y cuatro años difundiendo “la verdad del pueblo” junto a su director Carlos Lozano. El semanario puso todos sus archivos al servicio de esta investigación, así como su colección fotográfica, fuente única en la historia de la izquierda colombiana. Van también los agradecimientos a Martha, por su generosa ayuda en la búsqueda de los documentos del semanario, al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y su activa colaboradora, Luz Marina, encargada de los archivos; a Judith, por su invaluable cooperación en la transcripción de las entrevistas y el registro de nombres, a Johan, por su paciente labor en la elaboración de las gráficas del horror, al poeta José Luis Colegial, por sus consejos a la hora de escribir estas notas. Y por supuesto, a Clara López Obregón, la Alcaldesa Mayor de Bogotá, quien creyó, como Mariella Barragán, Secretaria de Gobierno, en este proyecto, e impulsaron la primera edición de esta obra en octubre de 2011. A Ana Teresa Bernal, Alta Consejera para las Víctimas y la Reconciliación, de la Administración del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, por su apoyo a esta segunda edición. Y finalmente a Camilo González Posso, el caballero de la paz, y a todo su equipo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Índice

Agradecimientos	6
No olvidamos a las víctimas Ana Teresa Bernal	11
La gloriosa Unión Patriótica Clara López Obregón	13
El legado de la Unión Patriótica Mariella Barragán Beltrán	15
Prólogo Camilo González Posso	17
Presentación Roberto Romero Ospina	21
1 Los nombres del genocidio	25
Lista parcial de homicidios y desapariciones de miembros y simpatizantes de la UP (1984-1997)	27
2 Índice de nombres	109
3 Las cifras del horror	127
4 Esperanza y tragedia de un pueblo	141
Democracia y genocidio no van de la mano	144
El nacimiento de un proyecto civilista	148
A veces llegan cartas	153
Los avances electorales de la UP y la guerra sucia	158
La masacre de Segovia: un crimen de Estado y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia	162
Y la tragedia de la división	164
El horror de la impunidad y la gestión de la Fiscalía	168

5 Presencias ausentes	173
El centro cultural en su nombre	175
La muerte golpea la escuelita de San Andrés	177
Una mochila llena de votos	178
Leonardo Posada, el primer magnicidio de la UP	179
Pedro Nel Jiménez, el primer senador de la UP asesinado	181
Jaime Pardo Leal, el alma de la UP	183
La Unión Patriótica lanza el candidato de la opción popular	185
La masacre de la Casa de la JUCO	190
El Volkswagen amarillo	192
Rodrigo, el sastre que tejía los hilos de Voz	194
La masacre de Ringo Rango	195
Orlando, el líder petrolero	196
Teófilo, el campesino que se convirtió en líder obrero	198
José Antequera, el luminoso Caribe	199
Los criminales estrechan el círculo	202
“Venga esa mano, país”	204
Lograr la apertura democrática	207
Bladimiro, el zapatero de los destechados	210
El silencio de los asesinos	211
El dolor de Caño Sibao	213
El “viejo Peter”	214
El exterminio sistemático	215
Manuel Cepeda, “La Flecha en el Blanco”	217
Julio Poveda, el líder agrario curtido en el Sumapaz	222
La tragedia de los Mayuza, o cómo el genocidio de la UP no termina	223
 6 Entre la apertura y el terror (1982-1997)	 225
Cronología	227
 7 Haciendo memoria	 297
■■■■■ Áida Abella	
Los altos mandos militares hacían listas de los condenados a muerte de la UP y se jactaban de ello	299
■■■■■ Iván Cepeda	
Se han generado premisas que van a forjar la comprensión correcta del genocidio y el renacimiento político de la UP	311
■■■■■ Álvaro Vásquez	
Con la UP se vislumbraba una nueva situación política que no iba a permitir el régimen	320

Jaime Caycedo La Unión Patriótica sentó las bases programáticas de la paz que está por hacerse en Colombia	327
Medófilo Medina La UP resultó atacada desde diversos flancos y distintos fuegos, los más notables provenían de las Fuerzas Armadas	335
Mario Upegui Ante la guerra sucia, las FARC nos llamaron a unirnos, pero decidimos no renunciar a las conquistas obtenidas por la UP	342
Omer Calderón El genocidio contra la UP era la expresión política más acabada del exterminio contra todo el movimiento popular	348
Óscar Dueñas No haber participado en las elecciones presidenciales de 1990 fue el más grave error de la Unión Patriótica	356
Carlos Lozano La Unión Patriótica recibió un bautismo de fuego, impidiendo que fuera una alternativa de oposición	363
Álvaro Delgado Las veces que las FARC plantearon la paz se les respondió con fuego, que después continuó contra la Unión Patriótica	371
Jahel Quiroga Carrillo De nada sirve una reparación política sólo para la UP, si el país que causó el genocidio no se transforma	378
Gustavo Gallón El fallo de la Corte Interamericana en el caso Cepeda hace pensar que adopte una medida similar por el genocidio de la UP	386
Alberto Rojas Puyo Los Acuerdos de La Uribe son la mejor prueba de que sí es posible buscar caminos de paz	391
Carlos Romero La experiencia de transitar por ese camino inédito para la paz, abierto por la UP, era una tarea histórica inaplazable	397

Sebastián González

Nos metimos en este proceso bajo el lema de Bernardo Jaramillo y José Antequera: “por la vida, hasta la vida misma”

404

8 Anexos de historia

411

Acuerdos de La Uribe

413

Plataforma de lucha de la Unión Patriótica

417

Pido perdón

424

Colombia no llegará a la paz sin que se esclarezca el genocidio de la UP

427

No olvidamos a las víctimas

La tragedia de la Unión Patriótica es parte de la tragedia del pueblo colombiano. Por casi tres lustros –de 1985 a finales de 2000–, el país presenció una de las peores catástrofes históricas de América Latina: el exterminio de todo un partido político, la Unión Patriótica.

Pero sería más adecuado decir permitió, pues en esos años de sacrificio de miles de líderes, militantes y simpatizantes de este grupo que nació tras los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz firmados por las guerrillas de las FARC y el gobierno de Betancur, en marzo de 1985, primó la indiferencia frente al genocidio.

Todos y todas de mi generación vivimos esos años terribles con el corazón en la mano cuando oíamos las noticias en la radio, leíamos los periódicos o veíamos los noticieros: día a día caían asesinados por las balas de la intolerancia, integrantes de ese movimiento surgido en los Acuerdos de Paz. Habían asumido las lides por la renovación social con fuertes convicciones democráticas como las de Jaime Pardo Leal, José Antequera o Bernardo Jaramillo Ossa, para sólo citar a algunos.

El libro *Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido*, del periodista Roberto Romero Ospina, sobreviviente él mismo de la *razzia* sin nombre, traza un cuadro bien acabado de lo que significa aún para el país el holocausto de la UP, mediante una documentada investigación que resalta ante todo los nombres completos de 1.598 víctimas en todo el país. Un prólogo alarmante que se presenta por primera vez al país.

El texto, que viera su primera edición en octubre de 2011 –iniciativa del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Administración Distrital–, y que hoy presentamos de nuevo en esta segunda edición, recorre el proceso de génesis de la Unión Patriótica a través de la presentación crítica del recurso de la entrevista periodística. Por esas páginas desfilan los más destacados exdirigentes sobrevivientes que explican, incluso desde ángulos opuestos, el proceso de formación, los aciertos y errores del proyecto. Aparecen también, defensores de derechos humanos que desde su óptica explican esta desdicha que jamás debió ocurrir, y de cuya reparación integral aún está en mora toda la sociedad colombiana.

El derecho a la memoria hace parte de las mismas formulaciones principistas de las Naciones Unidas. “El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio, y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva” (ONU 1997).

Y como nos lo recuerda el padre Javier Giraldo, en su trabajo *Memoria, silencio y acción psicosocial*, al conmemorar el cincuenta aniversario de la Segunda Guerra Mundial, el 11 de junio de 1995, el papa Juan Pablo II afirmó: “Mantener vivo el recuerdo de cuanto sucedió es una exigencia no sólo histórica, sino también moral. No hay que olvidar. No hay futuro sin memoria. No hay paz sin memoria”. Palabras que bien caben frente a la amarga lección de la Unión Patriótica.

Con la reaparición de esta obra fundamental para la comprensión de uno de los aspectos más graves de la violencia política que asola a nuestro país, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, creada por el Decreto 059 del 7 de febrero de 2012, reivindica el derecho a no olvidar, parte integral de su política pública.

No olvidar para que jamás se vuelvan a repetir estos hechos que avergüenzan el alma nacional.

Hoy, que en el centro de la agenda de la Nación está el reconocimiento de los derechos de las víctimas, y la restitución de tierras como lo expresa la Ley 1448, la Alta Consejería diseña y promueve la implementación del Sistema Distrital Integral de Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas, donde tienen cabida los sobrevivientes de la Unión Patriótica, que desde los años del genocidio se refugiaron en Bogotá, en este compromiso capital contra el olvido.

ANA TERESA BERNAL
Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas,
la Paz y la Reconciliación
Alcaldía Mayor de Bogotá

La gloriosa Unión Patriótica

No se me escapa la coincidencia. Hace veintitrés años participaba como candidata de una coalición de izquierdas liderada por la Unión Patriótica en la primera elección popular de alcaldes en 1988. En ese entonces arreciaba la guerra sucia y el exterminio físico de la Unión Patriótica. Fue Jaime Pardo Leal quien primero me planteó la candidatura, no para ganar las elecciones, sino para utilizarlas de tribuna de denuncia del genocidio en pleno desarrollo. Todavía siento el escalofrío que invadió mi cuerpo cuando, saliendo del Palacio de San Francisco donde yacía en cámara ardiente el cuerpo de Teófilo Forero, me despedí de Patricia Ariza diciendo, “nos vemos en el próximo entierro”. La magnitud de lo dicho, la impotencia frente a la inevitabilidad de muchos atentados y homicidios por venir y la indolencia generalizada de una opinión nacional que negaba lo que estaba sucediendo, todo eso y más, se resumía en una frase inconscientemente pronunciada que todavía me conmueve.

¿Cómo pudo toda una sociedad vivir semejante holocausto sin aceptar siquiera que estaba sucediendo? A la salida de mi casa, sobre la Circunvalar, colocaban toda clase de grafitos amenazantes. La campaña la hicimos con Bernardo Jaramillo, pues Jaime Pardo no sobrevivió para inscribir mi candidatura. A la gente le daba miedo recibir la papeleta –todavía no se había implementado el tarjetón– y los restaurantes se desocupaban cuando entrábamos con Carlos Romero a comer algo.

César Gaviria, por esa época ministro de Gobierno, había mostrado en el Senado un mapa con la presencia de unos treinta o cuarenta grupos paramilitares. A ese mapa le sobrepuse los resultados electorales de la UP en las elecciones presidenciales anteriores, en las cuales sacó una votación inesperadamente alta, y lo presenté como ponencia a un foro de candidatos convocado por la Presidencia de la República. Era el mismo mapa, pero no recibió la atención debida. Justo antes de las elecciones de ese año se iniciaron las masacres en las haciendas La Negra y Honduras, en el Urabá antioqueño. Ya no iban sólo contra los dirigentes sino también contra los votantes. El mensaje era claro. Les siguió Segovia y tantas, tantas más.

Así, en medio de un río de sangre se desvaneció la promesa de la UP, que surgió como un ensayo de incorporación de la insurgencia armada a la vida civil y pacífica. A manera de avanzada, en medio de esa tregua fallida durante el gobierno de Belisario Betancur, varios dirigentes guerrilleros se incorporaron a la vida civil y se presentaron como candidatos a las corporaciones públicas, logrando un éxito inculcable. En menos de un quinquenio, la situación política del país creó expectativas

esperanzadoras que fueron frustradas e interrumpidas por la presencia activa del crimen organizado con ramificaciones ya al descubierto en autoridades civiles y militares, que contribuyeron a planificar y ejecutar uno de los crímenes continuados más horrorosos y vergonzosos de la historia colombiana.

Los lamentos por la liquidación a sangre y fuego de la Unión Patriótica apenas si se registran en la opinión pública, cuando cualquier propósito de paz tendría que pasar por rendirle culto a la UP por el holocausto de toda una generación de líderes sólo comparable con los pogromos dirigidos contra los judíos. Quedan todavía muchos interrogantes sobre este asesinato masivo. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Cuáles los hilos de financiación de los paramilitares? ¿Quiénes fueron los individuos que orquestaron esa alianza *non sancta* de narcotraficantes, ganaderos, políticos e integrantes de la Fuerza Pública que llevó a cabo el exterminio? ¿Quiénes son los autores intelectuales?

La violencia política ha sido una constante en la historia del país. Así lo demuestran la masacre de las bananeras, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la primera Violencia, así con mayúscula, la muerte de Guadalupe Salcedo y el exterminio de la Unión Patriótica. La “Mano Negra” de todos los tiempos ha estado presente, aunque muchos tratan de invisibilizarla. Pero de todos los crímenes que se han perpetrado contra los dirigentes y organizaciones políticas de avanzada, el de mayores consecuencias ha sido el que se cometió contra la UP, que no sólo era un proyecto político nuevo, sino una propuesta de paz, una propuesta de reconciliación nacional, una propuesta de democratización del país.

El esclarecimiento y la solución de los interrogantes planteados son el presupuesto básico para cualquier proyecto de paz y de reconciliación nacional. No es posible reconciliarnos en medio de la impunidad. Para que Colombia se incorpore al proceso de democratización y cambio social que vive América Latina, se requiere recorrer el camino de la búsqueda y aceptación de la verdad. Ése es el objetivo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación que ha impulsado este documento histórico, *Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido*, como aporte a la necesaria reparación de las víctimas. Es nuestro deber vencer la impunidad como presupuesto para construir nuevos caminos de paz y reconciliación.

CLARA LÓPEZ OBREGÓN*
Alcaldesa Mayor de Bogotá (D)

* Se ha conservado este texto que acompañó la primera edición de este libro en octubre de 2011.

El legado de la Unión Patriótica

“Unión Patriótica” es un nombre con múltiples significados. Uno de los más recurrentes es el que se refiere al exterminio sistemático del que fue objeto este movimiento político, constituyéndose en el caso emblemático de las vulneraciones a los derechos humanos como consecuencia de la violencia política que ha caracterizado a la historia colombiana.

Este lugar visible, como caso que no debe repetirse, ha sido producto de una larga, legítima y amorosa lucha de las víctimas, los familiares y sobrevivientes motivados por la conciencia de la dignidad, por romper la lógica de negación y justificación con que se pretendió marcar a la Unión Patriótica. “Brazo político de las FARC” y “experimento de combinación de todas las formas de lucha”, han sido las expresiones con las que se ha pretendido ocultar el carácter de la Unión Patriótica como la iniciativa audaz para alcanzar la solución política del conflicto social y armado mediante reformas que atacaran las causas del mismo y su reproducción.

No obstante, ese carácter como proyecto de paz, como escenario político de construcción creativa, de renovación de las costumbres políticas, merece aún mucha mayor visibilidad y atención. Trascender la noción de la UP como caso emblemático de genocidio, sin negarla, significa un ejercicio consciente por rescatarla también como legado general valorable.

Hacer memoria, para quienes hemos sido parte y testigos de una lucha como la de la Unión Patriótica, es necesariamente un ejercicio de actualización, de defensa de una perspectiva por la paz y la justicia. Somos muy distintos de quienes éramos en aquellos años en que el país y el mundo se afectaban por la llamada “tercera ola de las democracias”, con sus avances y retrocesos. Pero somos también los mismos, con la misma perspectiva que reconoció a las víctimas del siglo XX como motivo de transformación necesaria de las relaciones injustas donde se cultivan las mayores barbaries. Por eso, hoy como ayer, concebimos la memoria como un punto de vista que parte del reconocimiento de los sufrimientos humanos, más allá de la contemplación, como interpelación del presente.

Así mismo, entonces, podemos observar nuestra propia historia. La Unión Patriótica representa uno y miles de casos de dolor, de sometimiento, de muerte y exterminio. La UP representa silenciamiento, quiebre de elevadas esperanzas y miedo sembrado por toda la patria. Con ello hemos tenido que vivir como sociedad, y así también nuestros hijos e hijas. Por eso, verdad, justicia y reparación integral son

demandas fundamentales si se trata de construir un futuro de dignidad para todos y para todas. Pero la Unión Patriótica representa también a una generación de hombres y mujeres que trasegaron por la experiencia de ver directo a la verdad histórica de las violencias y los conflictos, ofreciendo sus vidas a la causa de un movimiento político civil que sintetizara las banderas de los cambios democráticos, demostrando a quienes han levantado sus armas para mantener o cambiar el *statu quo*, que no hay mejor arma que las ideas. Una experiencia de la que debemos aprender todos y todas como país, acerca de nuestro proceso de construcción, de nuestros miedos, de nuestras dificultades, de nuestros prejuicios y, por supuesto, de nuestros errores.

Hoy, el avance logrado por tantos actores sociales que han mantenido la memoria de la Unión Patriótica y reivindicado los derechos de las víctimas del genocidio del que fue objeto, constituye una oportunidad.

El Día Distrital de la Memoria, inscrito en el Acuerdo 174 de 2005 en que conmemoramos el Día por las Víctimas y Sobrevivientes del Genocidio contra la Unión Patriótica; la designación de las Instituciones Educativas con los nombres de militantes de la UP como Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal, Leonardo Posada, Orlando Higueta, Manuel Cepeda Vargas; la construcción del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación; las medidas de construcción de memoria histórica que se avanzan en el país y a las que se suman los museos, los centros culturales, los colegios, etcétera, implican escenarios para el reconocimiento del genocidio, pero también para aproximarnos a comprender la experiencia compleja que nos pertenece ampliamente.

Bajo esa premisa hemos querido entregar a la ciudad el libro *Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido*. No queremos, de ninguna manera, una memoria de la UP estática, ni monolítica. No aspiramos a la sacralización de la experiencia individual y colectiva. Por el contrario, queremos contribuir al debate, a la interpelación, dando voz a las víctimas y sobrevivientes de cara a la sociedad en su conjunto, ávida de profundizar desde miradas comprometidas con la indiscutible garantía de los derechos humanos.

Como testigo de excepción de este proceso, puedo decir que esta entrega constituye un verdadero acto de expresión de la dignidad, de amor por mi propia historia y por la de todas aquellas mujeres que me he encontrado en tantos años, con tantos silencios atragantados y tantos recuerdos. Por todos esos sentimientos, este acto de reconocimiento, desde el debate político, llegará a manos de las nuevas generaciones como un testimonio para la defensa de la vida y de la diversidad.

Con profundo compromiso con la verdad, la justicia y la reparación integral, consecuentes con la búsqueda de la paz, siempre.

MARIELLA BARRAGÁN BELTRÁN*
Secretaria Distrital de Gobierno

* Se ha conservado este texto que acompañó la primera edición de este libro en octubre de 2011.

El alma de estas memorias de la Unión Patriótica es su definición como un proyecto de paz, y el debate sobre la validez del proceso iniciado con los Acuerdos de La Uribe en 1984. Este es uno de los mensajes de *Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido*, que se teje con la impresionante lista parcial de asesinados y desaparecidos entre 1984 y 1997, las semblanzas de algunas víctimas y las reflexiones y testimonios de los líderes de este partido sometido al aniquilamiento sistemático.

El libro se basa en una juiciosa investigación promovida por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y realizada por Roberto Romero Ospina, quien fuera periodista del *Semanario Voz* durante veinte años. Su cercanía cotidiana al proceso de la Unión Patriótica, como militante y cronista de la época, le facilitó revisar quince años de registros, y los archivos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, para rescatar allí 1.598 nombres, sitios de ocurrencia de los hechos, relación de las víctimas con la UP y presuntos responsables.

Este trabajo de memoria se une a otros de gran importancia que se han divulgado en libros, documentales y obras de teatro. Además es complemento a los incansables esfuerzos de la Corporación Reiniciar, que durante más de una década ha recorrido el país para contactar a familias de las víctimas e identificar a miles de ellas.

Dar visibilidad a los nombres de las víctimas es un hecho trascendental en el camino de la reivindicación de su dignidad y de sus derechos. Pero tan importante como eso, es el reconocimiento público de que se trató de una operación sistemática y deliberada para liquidar un colectivo político, cuya trascendencia se desprende de la doble condición de movimiento político legal, y de tener origen en acuerdos entre el Gobierno colombiano y una organización guerrillera para llevar a cabo un proceso de paz.

En este caso la víctima es un sujeto colectivo, y el daño causado a las personas es la forma escogida para atentar en contra de la posibilidad de avances, en un intento de superar el conflicto armado con un esquema inédito de ampliación de la democracia y de reformas sociales.

En 1984, año que hace parte de la cronología que se inicia en estas páginas en 1982, se firmaron los Acuerdos de La Uribe entre los comisionados por el gobierno de Belisario Betancur y los voceros de las FARC. El itinerario para avanzar desde el cese al fuego hasta la completa integración de los insurgentes a la vida civil es un diseño audaz de esa Administración, que de haberse realizado le habría evitado a Colombia tres décadas de horror y muchos de los sesenta mil asesinatos políticos.

Según lo pactado, en una primera fase se encontraban los ceses de fuego y de hostilidades declarados por las partes. La guerrilla, en acuerdo con el Partido Comunista, invita al proceso a partidos y grupos legales y forma un movimiento político –la Unión Patriótica, UP–, en el que combatientes desarmados y no combatientes intervienen en las elecciones y en la vida civil. En un segundo paso, sólo con pocos meses de desfase, el Gobierno se compromete a promover reformas de ampliación de la democracia, como la elección de alcaldes y gobernadores y el estatuto para la oposición. Además, declara su determinación de impulsar una reforma agraria y desmontar cualquier grupo paramilitar. Con la consolidación de esas medidas, la guerrilla en tregua indefinida iría mutando en autodefensa campesina fijada a los territorios y a su desarticulación definitiva como estructura militar. Como acompañamiento del proceso se crearon comisiones de verificación ubicadas en nueve regiones.

Como advierten muchos analistas y algunos de los entrevistados, ese diseño que en el papel parecía plausible para transitar en una década a la paz, fue atacado desde el primer momento por quienes los voceros del Gobierno denominaron “los enemigos agazapados de la paz” al interior del Estado. El expresidente Betancur no encontró suficiente respaldo en el bipartidismo y chocó con la directa oposición de militares, de empresarios, terratenientes y políticos de las regiones con mayor influencia de la guerrilla o de la oposición. Y en el otro extremo, otras guerrillas tomaron distancia del pacto de La Uribe y transitaron desde el “diálogo nacional” a la intensificación de las confrontaciones armadas. El holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, y el manejo dado a la retoma, marcó la fractura entre el Gobierno y las cúpulas militares y lo dejó en una profunda crisis, debilitado para imponerse entre sus propias fuerzas.

Las cifras del horror que se compilan en este libro, dan cuenta de la dimensión de las operaciones de exterminio, que no hubieran podido llevarse a cabo sin la determinación de centros de poder militar y político y sin la extensa trama de complicidades denunciada por los líderes de la UP y el Partido Comunista.

Las reflexiones incluidas en el texto muestran diversos matices de interpretación sobre el momento histórico, las causas y autores de lo que se conoce como el “Genocidio de la UP”. En tanto ejercicio de memoria, la contribución de algunos de los líderes de la UP es un capítulo esencial que se debe completar con testimonios y relatos que han realizado otros protagonistas de los Acuerdos de Paz que actuaron como mediadores, comisionados por el Gobierno, verificadores o contrapartes de las negociaciones en instituciones del Poder Ejecutivo o en el Congreso de la República.

Las entrevistas publicadas parten de puntos comunes, como el señalamiento de la responsabilidad central del Estado en lo que algunos califican como “crimen del sistema”, que responde a un patrón característico: los asesinatos y desapariciones ocurren en todas las regiones del país en donde el joven movimiento político ha comenzado a incidir en las instituciones, en organizaciones sindicales o campesinas; los autores materiales de los asesinatos actúan en acción conjunta con agentes del Estado o con la complicidad de miembros de la Fuerza Pública o los servicios de inteligencia, y la operación de exterminio es anunciada y acompañada de campañas de intimidación,

amenazas y acusaciones a toda la militancia de la UP de ser activos combatientes de las FARC.

Pero las entrevistas compiladas incursionan en dimensiones que no han sido visibles y que se refieren a las reflexiones o debates afrontados en la dirección de la UP, con el Partido Comunista o frente a las decisiones de las FARC a lo largo del proceso. ¿Se justificaban los Acuerdos de La Uribe en el contexto existente? ¿Cuáles eran en realidad las relaciones entre las FARC y la dirección comunista? ¿Los cuadros de la UP debieron aceptar la invitación de las FARC de pasar a la clandestinidad cuando la ola de asesinatos y la frecuencia de hostilidades indicaban que el pacto estaba en crisis? La decisión de la UP y el Partido Comunista fue cerrar el capítulo de la alianza política con las FARC, ¿por qué esto no fue suficiente para detener la matanza? ¿Se respondió con eficacia a la acusación de ser el brazo político de la guerra? ¿Qué lecciones deja esta tragedia para la lucha por la paz?

Todas estas preguntas y muchas más forman parte de la reconstrucción de una memoria viva que encuentra hoy en Colombia un escenario propicio. La promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se da en un momento de efervescencia de los ejercicios de memoria realizados desde las comunidades, organizaciones de diverso signo y por iniciativa de entidades territoriales. Sin descontar las críticas que hacen a esa ley las organizaciones de víctimas, ella estimula el debate sobre el papel reparador y transformador de la memoria y de la verdad histórica sobre décadas de violencias y conflictos armados.

En ese contexto es altamente significativo que el gobierno de Juan Manuel Santos haya tomado la determinación de cumplir el mandato de la Corte Interamericana sobre el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica. Como capítulo de este libro se incluye el discurso del ministro del Interior y de Justicia, en la sesión solemne del Congreso de la República en pleno, en donde formalmente se reconocen las responsabilidades del Estado en este asesinato y se pide perdón a los familiares, a los copartidarios y al país. Se incluyen también las palabras del representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, en las que acoge con satisfacción que el Gobierno honre su compromiso internacional y la memoria de su padre asesinado.

Nuevas páginas de memoria enriquecerán el aporte de esta publicación. La lista de miles de víctimas del genocidio de la Unión Patriótica será incluida, al lado de decenas de miles de estas épocas de horror, en el Memorial por la Vida que se erige como puerta de entrada al Centro de Memoria y Paz en el Parque de la Reconciliación en Bogotá. El recuerdo permanente de las víctimas en ese Memorial será testimonio contra lo que no debió haber sucedido y será el llamado para no olvidar lo que no se puede repetir.

CAMILO GONZÁLEZ POSSO*
Director del Centro de Memoria,
Paz y Reconciliación

* Se ha conservado este texto que acompañó la primera edición de este libro en octubre de 2011.

Presentación

La presente obra pretende solamente proporcionar al lector una visión general sobre la ocurrencia de una de las peores tragedias de la historia colombiana: el genocidio de la Unión Patriótica. Para ello, el libro comienza de entrada con lo que algún editor pudiera señalar como una rara presentación: el inmenso listado que abarca 1.598 víctimas, entre asesinados y desaparecidos en el holocausto del joven movimiento al que no se le permitió vivir.

De entrada, también, esto significa que los mártires son y serán lo primero, los protagonistas de esta historia, a través de centenares de nombres concretos que compartían el sueño de una sociedad mejor. Allí están sus datos elementales, su actividad, el cargo en la organización, o si eran sencillos simpatizantes, el lugar donde cayeron y quiénes le segaron su aliento.

Quizá sea, entonces, el más insólito preámbulo que sólo se corresponde con el absurdo que representó este asesinato colectivo, que no debió ocurrir jamás y que llena de vergüenza a toda la sociedad colombiana que lo toleró, seguramente por estar envuelta en ese paralizante ovillo de terror impuesto por los enemigos de la paz.

Y una importante aclaración. Toda la información aquí presentada tiene como fuentes primarias los ricos archivos del *Semanario Voz* y los registros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

La investigación se basó esencialmente en los datos publicados por dicho órgano periodístico –donde ejercí siempre este oficio de periodista–, cruzados con las listas del CPDH. *Voz* también es una fuente permanente de este Comité. Fueron examinados los números del periódico correspondientes a las ediciones de junio de 1982 a diciembre de 1997. Es decir, se tuvieron a la vista 748 ejemplares y 17.952 páginas.

Voz prácticamente era el vocero de la Unión Patriótica y desde el nacimiento de esta, en marzo de 1985, puso a entera disposición sus páginas para la difusión de todas las actividades del movimiento. Incluso la UP llegó a contar con una separata mensual de ocho páginas que se mantuvo por año y medio.

Y el día en que asesinaron al candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990, *Voz* salió a la calle con una edición extraordinaria de veinticuatro páginas y una tirada de cincuenta mil ejemplares que se agotó rápidamente.

Siendo el Partido Comunista la columna vertebral de la UP, que estuvo en su pila bautismal, era lógico que su principal órgano de expresión se volcara hacia la nueva propuesta política. Allí era frecuente ver las aceradas plumas de Jaime Pardo Leal,

Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda, José Antequera, Teófilo Forero y tantos otros cuadros de la izquierda que nos fueron arrebatados.

No había campaña electoral que no se cubriera, incluso con enviados especiales a las grandes capitales o a los más apartados lugares de Colombia.

Uno de los más acuciosos era Manuel Cepeda, quien fuera director del semanario de 1967 a 1989. En sus correrías no sólo recogía notas para su publicación, sino que él mismo tomaba las fotos. Una de ellas es la que ilustra la cubierta de este libro, detenida en su lente el 24 de febrero de 1990 en el sepelio de los seis campesinos de la UP masacrados en el Bajo Cumaral, Medellín del Ariari, Meta. Cepeda no se amilanaba y, conmovido por la matanza, viajó a la propia boca del lobo del paramilitarismo siendo director del semanario y un día después de la jornada de exterminio de Segovia, el 12 de noviembre de 1988, para relatar a sus lectores y con sus propias instantáneas el espanto de aquel día.

Voz contaba con una extensa red de corresponsales en el país que enviaban sus escritos por correo o daban la información a través del teléfono. Por eso aparecen miles de nombres en sus páginas, entre ellos los de las víctimas del genocidio de la UP que *Voz* se esforzaba por denunciar con la mayor precisión.

En el periodo registrado en las páginas de *Voz* se contabilizan 1.426 personas entre dirigentes, militantes de base y simpatizantes de la UP asesinados o desaparecidos. Se completa la lista con los datos del CPDH para tener este voluminoso expediente de 1.598 víctimas. 1.598 razones para no olvidar.

Es posible que algunos datos tomados de las fuentes tengan errores: trátense de una fecha, un sitio, o un nombre. Este libro debe precisamente servir, no sólo para que el público lector, al repasar el listado, sopesa la realidad de lo que fue el genocidio y sus móviles políticos, sino que además se anime a participar en la pesquisa para que lleguemos todos a configurar el retrato más fidedigno de esta catástrofe histórica sin paralelo en América Latina.

Varias ONG de derechos humanos que perseveran en el caso de la UP, reconstruyendo su historia, acopiando información y divulgando este panorama de horror que no podíamos haber permitido, hablan de dos, tres y hasta cuatro mil víctimas de la infamia.

Seguramente es así; lo que dimensiona aún más el cuadro de estremecimiento. Creemos que todas las víctimas deben ser conocidas por todos para que nadie ni nada quede en el olvido. Como la forma más elemental de comenzar a hacer justicia. En este sentido se han dado a conocer muchos nombres por parte de Reiniciar, Nunca Más, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Noche y Niebla, ASFFADES y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, entre otras organizaciones.

Se publican aquí también veintitrés semblanzas de otras tantas víctimas de la UP, a través de crónicas periodísticas de lo que fueron sus vidas de lucha y entrega a una causa que consideraron el norte de su esencia. Están desde el más sencillo militante, como el campesino que salió el día de las elecciones presidenciales de 1986, con su mochila llena de votos y sueños por Jaime Pardo Leal, para ser acribillado en su vereda;

y el destacado jefe político que quebró como un tiesto ese día de urnas el mito de la invencibilidad del bipartidismo, alzándose en menos de seis meses de campaña con 328.756 votos para la izquierda. Hubiéramos querido que todos estuvieran con sus historias de vida en estas páginas.

Finalmente se incluye una cronología que relata el día a día de la espiral de acontecimientos en que se movía el proyecto político más audaz del último medio siglo, más vigente que nunca, y las entrevistas con quince personajes, todos sobrevivientes, que llaman al debate. El lector sacará sus propias conclusiones.

Se tomaron como fechas en todos los casos, el comienzo del proceso de conversaciones entre las FARC y el gobierno de Betancur, iniciadas en 1983, que dieron nacimiento al proyecto político de la Unión Patriótica, y 1997 como año final de análisis. En esta fecha el movimiento, en las elecciones para asambleas departamentales, sólo alcanzó 41.028 votos, después de haber logrado más de 328 mil votos con la candidatura de Pardo Leal a la Presidencia de la República, resultado que sintetiza hasta dónde llegó el exterminio.

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, perteneciente a la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá y feliz iniciativa de Camilo González Posso, su director, espera de esta manera haber contribuido en el empeño de encontrar la verdad de lo sucedido con la Unión Patriótica, a través de esta investigación y la publicación del listado parcial de víctimas, verdad que comienza precisamente por lo que más nos enlaza al recuerdo de todos ellos: sus nombres.

ROBERTO ROMERO OSPINA*

* Se ha conservado este texto que acompañó la primera edición de este libro en octubre de 2011.

1

Los nombres del genocidio



Página anterior: Más de doscientas mil personas acompañaron los restos mortales de Jaime Pardo Leal, desde el Capitolio Nacional al Cementerio Central, el 14 de octubre de 1987, tres días después del magnicidio ocurrido en la vía La Mesa-Bogotá.
(Foto: Lara, *Semanario Voz*)

Lista parcial de homicidios y desapariciones de miembros y simpatizantes de la UP (1984-1997)

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1	Asesinato	Milcíades Contento	Campesino miembro del PCC y de la UP	Vereda Alto del Palmar, Viotá, Cundinamarca	4/6/84	Paramilitares
2	Asesinato	Jesús Eduardo Vasco	Dirigente del PCC, miembro del Comité Central	Sabana de Torres, Santander	5/26/84	Paramilitares
3	Asesinato	Adelfa Tulia Campo de Vasco	Militante, dirigente, UMD, esposa de Jesús Eduardo Vasco	Sabana de Torres, Santander	5/26/84	Paramilitares
4	Asesinato	Nemesio Montoya	Concejal de Murindó por el Frente Democrático, militante del PCC	Murindó, Antioquia	7/31/84	Sicarios del MAS
5	Asesinato	Robertino Galeano Zea	Dirigente cívico, militante del PCC, integrante de la Coordinadora Regional de Catatumbo y distribuidor de Voz	Cúcuta, Norte de Santander	8/15/84	F2
6	Asesinato	Manuel Rodríguez Casas	Concejal y dirigente comunista de Curillo	Curillo, Caquetá	9/2/84	Paramilitares
7	Desaparición	Miguel Ángel Díaz	Dirigente de FENALTRASE y del PCC	Puerto Boyacá, Boyacá	9/5/84	DAS
8	Desaparición	Faustino López	Dirigente del PCC, Magdalena Medio	Puerto Boyacá, Boyacá	9/5/84	DAS
9	Asesinato	Antonio León Arango	Presidente del Comando del Frente Democrático y del PCC	Apartadó, Antioquia	10/8/84	Sicarios
10	Asesinato	Rodrigo Flórez	Activista	Medellín, Antioquia	11/17/84	Paramilitares
11	Asesinato	Juan de Dios Beltrán	Concejal del Frente Democrático de Planadas	Planadas, Tolima	11/24/84	Policía Nacional
12	Asesinato	Idalba Flórez	Militante de la Juventud Comunista (JUCO)	Medellín	11/27/84	Policía Nacional
13	Asesinato	Teresa David	Activista	Turbo, Urabá, Antioquia	1/1/85	Paramilitares
14	Masacre	Ernesto Castro	Campesino militante	Rionegro, Santander	1/3/85	Tropas de la V Brigada del Ejército

Fuentes: Semanario Voz - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
15	Masacre	Ana Francisca de Castro	Campesina militante	Rionegro, Santander	1/3/85	Sin datos
16	Masacre	José Naranjo	Campesino militante	Rionegro, Santander	1/3/85	Sin datos
17	Masacre	Ricaurte Lozano	Campesino militante	Rionegro, Santander	1/3/85	Sin datos
18	Masacre	Rafael Arturo Alfaro	Activista	Yumbo, Valle del Cauca	1/6/85	Paramilitares
19	Masacre	Gustavo Adolfo Santos	Activista	Yumbo, Valle del Cauca	1/6/85	Paramilitares
20	Masacre	Álvaro Rodríguez	Activista	Yumbo, Valle del Cauca	1/6/85	Paramilitares
21	Asesinato	Guillermo Cruz Cruz	Dirigente UP	Venecia, Cundinamarca	2/3/85	Paramilitares
22	Asesinato	Giovani Parra Pinzón	Dirigente juvenil UP	Vereda Playa Rica, Meta	2/15/85	Paramilitares
23	Asesinato	Alias “Alberto”	Activista electoral de las FARC-EP según Acuerdos de Paz	Jamundí, Valle del Cauca	2/28/85	Ejército
24	Asesinato	Alias “Silvio”	Activista electoral de las FARC-EP según Acuerdos de Paz	Jamundí, Valle del Cauca	2/28/85	Ejército
25	Asesinato	José Ricardo Lozada	Campesino militante	Vereda Galilea, Tolima	3/1/85	Ejército
26	Asesinato	Alias “Alfonso”	Frente 12 FARC, gestor político en tregua	San Agustín, Huila	3/1/85	Ejército
27	Asesinato	Humberto Vanegas	Campesino activista	Bogotá D. C.	3/8/85	Grupo armado
28	Asesinato	José Fernando Cifuentes	Campesino activista	Bogotá D. C.	3/8/85	Grupo armado
29	Asesinato	Marlene Antiry de Carvalo	Activista	Valparaíso, Caquetá	3/15/85	Paramilitares
30	Asesinato	Israel Forero Castro	Dirigente del Sindicato ETB, militante	Bogotá D. C.	3/17/85	Paramilitares
31	Asesinato	Alias “Alfonso”	Delegado electoral por las FARC-EP según Acuerdos de Paz	No registra lugar	3/24/85	Ejército
32	Asesinato	Alias “Avelino”	Activista electoral de las FARC-EP según Acuerdos de Paz	No registra lugar	3/31/85	Ejército
33	Asesinato	Alias “Rubén”	Activista electoral de las FARC-EP según Acuerdos de Paz	No registra lugar	3/31/85	Ejército
34	Asesinato	Arsenio Parra	Activista	Algeciras, Huila	4/4/85	Ejército - Policía
35	Masacre	José Bernardo Díaz	Militante	Yumbo, Valle del Cauca	4/4/85	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
36	Masacre	Ramón Zapata Muriel	Militante	Yumbo, Valle del Cauca	4/4/85	Paramilitares
37	Masacre	Rolando Vallejo Domínguez	Militante	Yumbo, Valle del Cauca	4/4/85	Paramilitares
38	Asesinato	Alias "Willington"	Activista electoral Frente 13 FARC-EP según Acuerdos de Paz	San Agustín, Huila	4/4/85	Ejército
39	Asesinato	Carlos Parra	Simpatizante	No registra lugar	4/11/85	Paramilitares
40	Asesinato	Humberto Gaitán	Campesino militante del PCC y dirigente cívico	Yacopí, Cundinamarca	4/24/85	Paramilitares
41	Asesinato	Gregorio Téllez	Campesino militante	Yacopí, Cundinamarca	4/25/85	Ejército
42	Asesinato	Álvaro Camacho	Campesino militante	Vereda El Morro, Yacopí, Cundinamarca	4/26/85	Ejército
43	Asesinato	Humberto Perdomo	Campesino militante	Algeciras, Huila	4/28/85	Policía
44	Asesinato	Alias "Franklin"	Insurgente de las FARC-EP, activista en tregua	Becerril, Cesar	4/30/85	Ejército
45	Asesinato	Alias "William"	Activista electoral de las FARC, en tregua	San Agustín, Huila	4/30/85	Ejército
46	Desaparición	Benjamín Quiguana	Indígena simpatizante	Vereda Carbonera, municipio de Pradera, Valle del Cauca	5/1/85	Ejército
47	Asesinato	Mario Aguilar	Insurgente del Frente 14 FARC-EP, activista en tregua	Vereda El Cedro, Florencia, Caquetá	5/3/85	Ejército
48	Asesinato	John Jairo Baena	Activista	Yumbo, Valle del Cauca	5/6/85	Paramilitares
49	Asesinato	Heriberto García	Campesino militante	Vereda La Símbola, Belalcázar, Cauca	5/8/85	Paramilitares
50	Asesinato	Eufasio Mahecha	Dirigente UP	Vereda Bejucales, Yacopí, Cundinamarca	5/8/85	Paramilitares del MAS
51	Asesinato	Ignacio Roncancio	Campesino militante	Vereda Bejucales, Yacopí, Cundinamarca	5/8/85	Paramilitares del MAS
52	Asesinato	Alias "Gerardo"	Insurgente de las FARC, activista en tregua	Florencia, Caquetá	5/9/85	Ejército
53	Desaparición	Salomón Bernal	Campesino militante del PCC	Base militar de Yacopí, Cundinamarca	5/9/85	Ejército
54	Asesinato	Alias "Gilma"	Insurgente de las FARC, en tregua	Florencia, Caquetá	5/10/85	Ejército
55	Asesinato	Omar Ramos	Dirigente UP	Zaragoza, Buenaventura, Valle del Cauca	5/11/85	Paramilitares
56	Asesinato	Domingo Occa	Indígena militante del PCC	Sitio El Alto, corregimiento Los Andes, Corinto, Cauca	5/18/85	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
57	Asesinato	Julio Occa	Indígena (hijo de Domingo Occa), Militante PCC	Sitio El Alto, corregimiento Los Andes, Corinto, Cauca	5/18/85	Paramilitares
58	Asesinato	Álex Zuleta Martínez	Militante	Santa Marta, Magdalena	5/18/85	Policía
59	Asesinato	Héctor Saldaña Pérez	Militante	Santa Marta, Magdalena	5/18/85	Policía
60	Asesinato	Manuel J. Medina	Dirigente PCC	Vereda La Suiza, no registra municipio	5/21/85	Ejército
61	Asesinato	Alcides Ortegón	Frente 2° FARC-EP, en tregua	Algeciras, Huila	5/21/85	Paramilitares
62	Asesinato	Carlos Julio Álvarez	Campesino activista	Yacopí, Cundinamarca	5/22/85	Ejército
63	Asesinato	Alias “Diomedes”	Frente 6° FARC-EP, en tregua	Acevedo, Huila	5/31/85	Ejército
64	Asesinato	Alias “Yira”	Frente 13 FARC-EP, en tregua	Palestina, Huila	5/31/85	Ejército
65	Asesinato	Nicolás López Londoño	Presidente del Sindicato New Stetic y Dirigente del PCC	Medellín, Antioquia	5/31/85	Paramilitares
66	Asesinato	Marcos Cruz	Insurgente del Frente 6° FARC-EP, activista en tregua	Norte del Cauca	5/31/85	Ejército
67	Asesinato	José Cornelio Ordóñez	Campesino, militante PCC	Yacopí, Cundinamarca	6/5/85	Ejército
68	Masacre	Alias “Uriel”	Frente 3° FARC-EP, gestor político en tregua	Mesitas, Garzón, Huila	6/6/85	Ejército
69	Masacre	Alias “Esperanza”	Frente 3° FARC-EP, gestor político en tregua	Mesitas, Garzón, Huila	6/6/85	Ejército
70	Masacre	Alias “Mauricio”	Frente 3° FARC-EP, gestor político en tregua	Mesitas, Garzón, Huila	6/6/85	Ejército
71	Asesinato	Esperanza N.	Activista UP	Mesetas, Meta	6/6/85	Sin datos
72	Asesinato	Alias “Gilma”	Frente 3° FARC-EP, en tregua	Florencia, Caquetá	6/9/85	Ejército
73	Asesinato	Alias “Gerardo”	Frente 3° FARC-EP, en tregua	Florencia, Caquetá	6/9/85	Ejército
74	Asesinato	Alias “Henry”	Frente 3° FARC-EP, en tregua	Vereda La Cristalina, El Paujil, Caquetá	6/14/85	Ejército
75	Asesinato	Joaquín Velandia	Campesino activista	Vereda Isandía, San Vicente de Chucurí, Santander	6/15/85	Paramilitares del MAS
76	Asesinato	Carlos García Velandia	Campesino activista	Vereda Isandía, San Vicente de Chucurí, Santander	6/15/85	Paramilitares del MAS

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
77	Asesinato	Ezequiel Ramírez	Insurgente de las FARC, activista en tregua	Arauca, Arauca	6/17/85	Ejército
78	Asesinato	Octavio Velásquez	Insurgente de las FARC, activista en tregua	Arauca, Arauca	6/17/85	Ejército
79	Asesinato	Fabiola Ortega	Activista	Timaná, Huila	6/30/85	Ejército
80	Asesinato	Alias "Samuel"	Frente 13 FARC-EP, activista en tregua	Timaná, Huila	6/30/85	Ejército
81	Asesinato	Alias "Carlos"	Frente 3° FARC-EP, activista en tregua	Vereda El Cedro, Florencia, Caquetá	6/30/85	Paramilitares
82	Asesinato	Jesús Leal Guerrero	Campesino militante	Vereda Caño Saldados	6/30/85	Ejército
83	Asesinato	José Arsenio Ordóñez	Campesino militante	Yacopí, Cundinamarca	6/30/85	Ejército
84	Asesinato	Hidalgo Real	Campesino militante	Yacopí, Cundinamarca	6/30/85	Ejército
85	Asesinato	Misael Rojas	Campesino militante	San Pablo, Bolívar	6/30/85	Paramilitares
86	Asesinato	Medardo Palacios	No registra actividad	No registra lugar	**/**/85	Paramilitares
87	Masacre	Juan Elber Quintero	Activista JUCO	Planadas, Tolima	**/**/85	Militares
88	Masacre	Ricardo Antonio Ceballos Rondón	Activista JUCO	Planadas, Tolima	**/**/85	Militares
89	Masacre	Elcira Chala	Activista JUCO	Planadas, Tolima	**/**/85	Militares
90	Desaparición	Luis Enrique Rodríguez	Campesino militante	Puerto Gutiérrez, Puerto Boyacá, Boyacá	7/1/85	Paramilitares
91	Desaparición	Juan Céspedes	Campesino militante	Vereda Puerto Gutiérrez, Puerto Boyacá, Boyacá	7/1/85	Paramilitares
92	Asesinato	Carmelo Helves Orjuela	Campesino militante	Tibú, Norte de Santander	7/4/85	Paramilitares
93	Asesinato	Ramiro Delgado	Campesino militante	Yacopí, Cundinamarca	7/8/85	Ejército
94	Asesinato	Jorge Delgado	Campesino militante	Yacopí, Cundinamarca	7/8/85	Ejército
95	Desaparición	Germán Arturo Garro	Militante JUCO Medellín, Antioquia	Bogotá D. C.	7/13/85	Agentes del Estado
96	Desaparición	Jorge Enrique Soto Gallo	Corresponsal de Voz, Medellín, dirigente estudiantil, dirigente JUCO, miembro del Comité Central y secretario político de Urabá, director nacional de la UNES	Bogotá D. C.	7/13/85	Agentes del Estado
97	Masacre	Armando Pabón	SINTAGRO Urabá	Urabá, Antioquia	7/13/85	Ejército
98	Masacre	Cristóbal Arias	SINTAGRO Urabá	Urabá, Antioquia	7/13/85	Ejército
99	Masacre	Argemiro Giraldo	SINTAGRO Urabá	Urabá, Antioquia	7/13/85	Ejército

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
100	Desaparición	Jesús Calderón Molina	Campesino militante	Puerto Jardín, Arauca	**/07/85	Unidades militares
101	Desaparición	Demetrio García	Campesino militante	Puerto Jardín, Arauca	**/07/85	Unidades militares
102	Asesinato	Joaquín Ernesto Toro Posada	Simpatizante	Instalaciones Batallón 21 Vargas Granada, Meta	7/19/85	Batallón 21 Vargas Granada
103	Asesinato	Carlos Alberto Cerón Caicedo	Estudiante de medicina militante	Almaguer, Cauca	7/26/85	Paramilitares
104	Asesinato	Celso Rojas	Fiscal Acción Comunal	San Rafael, Antioquia	7/26/85	Paramilitares
105	Asesinato	Jesús López	Miembro Acción Comunal	San Rafael, Antioquia	7/29/85	Paramilitares
106	Desaparición	Ramiro Cunda	Dirigente UP	Miranda, Cauca	8/3/85	Agentes del Estado
107	Asesinato	William Parra	Simpatizante	Yumbo, Valle del Cauca	8/4/85	Paramilitares
108	Asesinato	Teresa N.	Activista	Sede de la UP de San José de Isnos, Huila	8/9/85	Ejército
109	Asesinato	Ramiro Sandino	Activista	Sede de la UP de San José de Isnos, Huila	8/9/85	Ejército
110	Asesinato	Neftalí Calle (o Cala)	Dirigente UP	Cáchira, Gramalote, Norte de Santander	8/13/85	Paramilitares
111	Asesinato	Ángel Arroyave	Maestro militante	Carepa, Antioquia	**/08/85	Paramilitares
112	Asesinato	Guastumal Carlosama	Dirigente indígena y militante	Buenaventura, Valle del Cauca	8/16/85	Policía
113	Asesinato	Alberto Ardila	Ganadero y dirigente del PCC	Turbo, Urabá antioqueño, Antioquia	8/18/85	Paramilitares
114	Asesinato	Luis Hernán España	Simpatizante	Yumbo, Valle del Cauca	8/21/85	Policía
115	Asesinato	Carlos Alberto Álvarez	Simpatizante	Apartadó, Antioquia	8/23/85	Paramilitares
116	Asesinato	José Taborda	Militante comunista	El Tambo, Cauca	8/24/85	Agente del Estado
117	Asesinato	Rubén Antonio Villada	Frente 10° FARC-EP, activista político en tregua	Florián, Santander	8/24/85	Ejército
118	Asesinato	Luis Humberto Álvarez Cuenca	Frente 10° FARC-EP, gestor político en tregua	Florián, Santander	8/24/85	Ejército
119	Asesinato	Miguel Puerta	Profesor militante	Apartadó, Antioquia	8/27/85	Paramilitares
120	Asesinato	Jesús Antonio Quintero	Simpatizante	Yumbo, Valle del Cauca	8/28/85	Paramilitares
121	Asesinato	N. Villarreal	Dirigente agrario y activista	Yacopí, Cundinamarca	8/31/85	Ejército-Paramilitares
122	Asesinato	Ignacio Real	Militante y dirigente agrario	Yacopí, Cundinamarca	8/31/85	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
123	Desaparición	Alberto Rocha	Concejal municipios de Paz de Ariporo y Morales y dirigente comunista	Paz de Ariporo, Casanare	8/31/85	Paramilitares
124	Asesinato	Alias "Carlos"	Insurgente en tregua del Frente 20 FARC-EP	San Alberto, Cesar	9/1/85	Ejército
125	Asesinato	Alipio Miguel Aguilar	Campesino militante	Vereda Los Cocos, Yacopí, Cundinamarca	9/1/85	Paramilitares del MAS
126	Asesinato	Carlos Bernal	Dirigente comunista de Florida	Florida, Valle del Cauca	9/5/85	Paramilitares
127	Asesinato	Alias "Fredy"	Insurgente del Frente 20 FARC-EP, activista en tregua	Hacienda Morelia, vereda La Llana, San Alberto, Santander	9/10/85	Paramilitares
128	Asesinato	Alias "Milena"	Insurgente de las FARC, activista en tregua	Zona urbana de San Alberto, Santander	9/13/85	Ejército
129	Asesinato	Alias "Eduardo"	Insurgente de las FARC, activista en tregua	Zona urbana de San Alberto, Santander	9/13/85	Ejército
130	Desaparición	María Eugenia Castañeda Granda	Dirigente UP	Usme, Cundinamarca	9/13/85	Militares
131	Asesinato	Alias "Heli"	Frente 20 FARC-EP, activista en tregua	El Cáchira, Norte de Santander	9/14/85	Ejército
132	Desaparición	Pablo Caicedo Siachoque	Educador y miembro del Comité Regional del PCC del Valle del Cauca	Cali, Valle del Cauca	9/14/85	Ejército
133	Desaparición	Marco Fidel Castro	Educador y dirigente	Cali, Valle del Cauca	9/14/85	Ejército
134	Asesinato	Luis Alberto Grijales	Militante	Yumbo, Valle del Cauca	9/15/85	Ejército
135	Asesinato	César N.	Dirigente UP	El Cáchira, Norte de Santander	9/16/85	Ejército
136	Asesinato	Alberto Álvarez	Simpatizante	Obando, Valle del Cauca	9/23/85	Ejército
137	Asesinato	Luis Alfonso García	Presidente Junta Patriótica UP	Obando, Valle del Cauca	9/24/85	Grupo Ricardo Franco
138	Asesinato	Alfonso Garzón	Dirigente UP	Obando, Valle del Cauca	9/24/85	Paramilitares
139	Desaparición	Jesús Velásquez Mejía	Militante	Obando, Valle del Cauca	9/24/85	Sin datos
140	Asesinato	Luis Antonio Pérez Sánchez	Exconcejal de Puerto Gaitán, exdiputado Asamblea Departamental Meta, Abogado de causas indígenas	Puerto Gaitán, Meta	9/25/85	Paramilitares
141	Asesinato	Luis Santos Pérez	Dirigente UP	Mariquita, Tolima	9/25/85	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
142	Asesinato	Dionisio Hernán Calderón	Presidente Sindicato Trab. Obras Públicas Yumbo, dirigente regional del Partido Comunista	Yumbo, Valle del Cauca	9/29/85	Militares - Paramilitares
143	Asesinato	Marco Tulio N.	Presidente Junta UP La Victoria	La Victoria, Valle del Cauca	9/30/85	Ejército
144	Asesinato	Jairo López	Campesino, presidente Junta UP vereda Malavar, dirigente UP	Mariquita, Tolima	9/30/85	Paramilitares
145	Asesinato	Fabio López	Campesino militante	Zona urbana de Puerto Gaitán, Meta	9/30/85	Paramilitares
146	Desaparición	Roberto Miller	Dirigente UP	Puerto Libertador, Córdoba	10/6/85	Ejército
147	Masacre	Martín Humberto Coy	Concejal de Palestina, Huila	Vereda El Tabor, Huila	10/11/85	Paramilitares
148	Masacre	Jesús Antonio Galindo	Concejal de Palestina, Huila	Vereda El Tabor, Huila	10/11/85	Ejército
149	Masacre	Jaime Loaiza	Concejal de Palestina, Huila	Vereda El Tabor, Huila	10/11/85	Paramilitares
150	Masacre	Yesid Tunjo	Concejal de Palestina, Huila	Vereda El Tabor, Huila	10/11/85	Paramilitares
151	Asesinato	Víctor Manuel Pinzón	Campesino militante del PCC	Saravena, Arauca	10/25/85	Policía
152	Asesinato	Miller Rivas	Vicepresidente UP Huila, dirigente Magisterio y PROVIENDA Sur del Huila	Pitalito, Huila	10/30/85	Paramilitares
153	Asesinato	Carlos Julio Romero	Dirigente UP	Acevedo, Huila	11/1/85	Paramilitares
154	Asesinato	Eduardo Ángel Arroyave Restrepo	Educador, activista Magdalena Medio antioqueño	Magdalena Medio antioqueño	11/1/85	Paramilitares
155	Asesinato	Carlos Arturo Roldán Betancur	Expresidente del Concejo de Apartadó	Apartadó, Antioquia	11/1/85	Paramilitares
156	Asesinato	Juan Alberto Rodas Rúa	Educador, activista Magdalena Medio antioqueño	Magdalena Medio antioqueño	11/1/85	Paramilitares
157	Masacre	Orlando Galindo	Militante	Acandí, Urabá chocoano	11/1/85	Paramilitares
158	Masacre	José Serna	Militante	Acandí, Urabá chocoano	11/1/85	Paramilitares
159	Masacre	Gilberto Morena	Militante	Acandí, Urabá chocoano	11/1/85	Paramilitares
160	Masacre	Nicolás N.	Militante	Acandí, Urabá chocoano	11/1/85	Paramilitares
161	Masacre	Ramón N.	Militante	Acandí, Urabá chocoano	11/1/85	Paramilitares
162	Masacre	Domingo N.	Militante	Acandí, Urabá chocoano	11/1/85	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
163	Asesinato	Manuel López Ospina	Campesino	Valle del Cauca	11/8/85	Ejército
164	Asesinato	Corpus Guauña	Trabajador finca del dirigente de la UP, Jairo Carvajal	Vereda Cristo Rey, Acevedo, Huila	11/8/85	Paramilitares
165	Asesinato	Darío López	Campesino activista	Puerto Valdivia, Antioquia	11/13/85	Ejército
166	Asesinato	Ricardo Lara Parada	Dirigente FAMM	Barrancabermeja, Santander	11/14/85	Paramilitares
167	Desaparición	Pablo Caicedo	Dirigente JUCO Valle del Cauca	Cali, Valle del Cauca	11/19/85	Policía - DAS
168	Asesinato	Ángela Trujillo	Activista	Bogotá D. C.	11/20/85	Paramilitares
169	Asesinato	Alejandro Arcila	Activista	Bogotá D. C.	11/20/85	Paramilitares
170	Asesinato	Roque Jacinto Yate Roca	Indígena activista	Coyaima, Tolima	11/22/85	Policía
171	Asesinato	Andrés Luna	Indígena activista	Coyaima, Tolima	11/22/85	Policía
172	Asesinato	Rubén Darío Castaño Jurado	Exconcejal de Manizales, presidente de la Federación de Trabajadores de Caldas y directivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, Partido Comunista Colombiano y Unión Patriótica	Manizales, Caldas	11/25/85	Paramilitares
173	Asesinato	Hernando Yate Bonilla	Presidente Concejo Municipal de San Juan de Arama y concejal Granada, presidente del sindicato de trabajadores agrícolas independientes del Meta	Granada, Meta	11/27/85	Plan Cóndor
174	Asesinato	José López	Dirigente UP	Medellín, Antioquia	11/29/85	Paramilitares
175	Asesinato	Rogelio Sánchez	Dirigente agrario	Chigorodó, Antioquia	11/29/85	XV Brigada del Ejército
176	Asesinato	Luis Alberto Bohórquez	Campesino militante	Vuelta Acuña, Cimitarra, Santander	11/30/85	Paramilitares
177	Asesinato	José Demetrio Leal	Campesino militante	Santander	11/30/85	Paramilitares
178	Asesinato	José del Carmen Lascarro	Militante	Santander	11/30/85	Paramilitares
179	Asesinato	Francisco Melo	Militante	Bogotá D. C.	12/5/85	Paramilitares
180	Asesinato	Jesús Alberto García	Dirigente JUCO	Bogotá D. C.	12/5/85	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
181	Asesinato	Jaime Quintero Cruz	Activista	Bogotá D. C.	12/7/85	Paramilitares
182	Asesinato	Javier Sanabria Murcia	Militante	Florencia, Caquetá	12/8/85	B2, F2 Plan Cóndor
183	Asesinato	Héctor Gaitán	Campesino militante	San Cayetano, Cundinamarca	12/15/85	Ejército
184	Asesinato	Jorge Monsalve	Insurgente de las FARC-EP en tregua, destacado para el trabajo electoral de la UP	Yacopí, Cundinamarca	**/12/85	Ejército
185	Asesinato	Wenceslao Pinto	Simpatizante	Afuera de la población Puerto Príncipe, Vichada	12/18/85	VII Brigada del Ejército - Paramilitares
186	Asesinato	Alcibiades León	Campesino militante	Escuela Artillería	12/18/85	Escuela Artillería
187	Asesinato	Braulio Ismael N.	Militante	Guerima, Vichada	12/21/85	Ejército
188	Asesinato	Enrique N.	Militante	Guerima, Vichada	12/21/85	Ejército
189	Asesinato	Alias "Yuri"	Insurgente de las FARC, activista en tregua	Palermo, Huila	12/29/85	Paramilitares
190	Asesinato	Alias "Ever"	Insurgente FARC-EP activista en tregua	Palermo, Huila	12/29/85	Paramilitares
191	Asesinato	Jorge Parra	Activista	No registra lugar	12/30/85	Paramilitares
192	Asesinato	Héctor Calvo	Campesino activista	Obando, Valle del Cauca	1/1/86	Paramilitares
193	Asesinato	Gustavo Rodríguez Pinzón	Simpatizante en Quimbaya	Municipio Finlandia, Quindío	1/6/86	Ejército
194	Asesinato	Pedro Contreras	Dirigente USO, militante	Tibú, Norte de Santander	1/6/86	Paramilitares
195	Asesinato	Jaime Bronstein Bonilla	Dirigente ANUC	No registra lugar	1/8/86	Paramilitares
196	Asesinato	Faeriel Santana	Dirigente Sindical	Ocaña, Norte de Santander	1/9/86	Paramilitares
197	Masacre	José Dolores Bello	Campesina activista	Yacopí, Cundinamarca	1/10/86	Paramilitares
198	Masacre	Hijo 1 de José Dolores Bello	Campesino activista	Yacopí, Cundinamarca	1/10/86	Paramilitares
199	Masacre	Hijo 2 de José Dolores Bello	Campesino activista	Yacopí, Cundinamarca	1/10/86	Paramilitares
200	Asesinato	Carlos Enrique Martínez	Militante	Yumbo, Valle del Cauca	1/12/86	Paramilitares
201	Asesinato	José Ángel Motta	Militante	Yumbo, Valle del Cauca	1/12/86	Paramilitares
202	Asesinato	Gabriel Anchique	Médico, dirigente cívico	Ibagué, Tolima	1/14/86	Paramilitares
203	Asesinato	Alberto Valencia Bustos	Activista	Yumbo, Valle del Cauca	1/24/86	Paramilitares
204	Asesinato	José Luis Prado	Militante	Yumbo, Valle del Cauca	1/25/86	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
205	Asesinato	Carmen Rosa García	Activista	Yumbo, Valle del Cauca	1/26/86	Paramilitares
206	Asesinato	Celio Valencia	Dirigente agrario, militante	Montenegro, Quindío	1/26/86	Paramilitares
207	Asesinato	Benilda Quiroga	Dirigente comunal, militante	Palermo, Huila	1/29/86	Ejército
208	Asesinato	Jorge Emiro Ortega	Campesino militante	Aguachica, Cesar	1/30/86	Paramilitares
209	Masacre	Fabiola Rojas de Castro	Campesina militante	Timaná, Huila	2/2/86	Policía
210	Masacre	Flor Castro	Campesina militante, hija de Fabiola Rojas	Timaná, Huila	2/2/86	Policía
211	Masacre	Dagoberto Castro	Campesino militante hijo de Fabiola Rojas	Timaná, Huila	2/2/86	Policía
212	Asesinato	Javier Peña Vida	Activista	Yumbo, Valle del Cauca	2/3/86	Paramilitares
213	Asesinato	Aguirre Guerrero	Campesino militante	Saravena, Arauca	2/3/86	Patrulla Base R. Pizarro del Ejército
214	Asesinato	José Libardo Ortiz	Campesino militante	Altamira, Huila	2/4/86	F2 Batallón Magdalena
215	Asesinato	Marco Aurelio Calderón	Campesino militante	Altamira, Huila	2/4/86	F2 Batallón Magdalena
216	Asesinato	Tomás Carreño	Campesino simpatizante	Yarima, San Vicente de Chucurí, Santander	2/5/86	Paramilitares del MAS
217	Asesinato	Crisóstomo Fuentes Bayona	Campesino simpatizante	Yarima, San Vicente de Chucurí, Santander	2/5/86	Paramilitares del MAS
218	Asesinato	Esteban Londoño	Militante y dirigente cívico	Pereira, Risaralda	2/7/86	Paramilitares
219	Asesinato	Israel Ramírez	Campesino militante	Cuatro Bocas, Yondó, Antioquia,	2/7/86	Ejército
220	Desaparición	Simón Pérez	Campesino simpatizante	Vereda La Esperanza, San Pablo, Bolívar	2/7/86	Ejército
221	Asesinato	Abraham Montaña	Campesino militante	Arauquita, Arauca	2/8/86	Patrulla Base R. Pizarro del Ejército
222	Desaparición	Ángel Gabriel Patiño	Activista	Jamundí, Valle del Cauca	2/9/86	Ejército
223	Desaparición	Jorge Troches	Candidato por la UP al Concejo	Jamundí, Valle del Cauca	2/9/86	Ejército
224	Asesinato	Samuel Tapasco	Campesino militante	Vereda San Francisco, Yondó, Antioquia	2/9/86	Ejército
225	Asesinato	Luis Carlos Henríquez	Simpatizante	Yumbo, Valle del Cauca	2/10/86	Paramilitares
226	Asesinato	Víctor Sasson Sawil	Industrial simpatizante	Bogotá D. C.	2/14/86	Paramilitares del MAS

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
227	Asesinato	Catalina Gómez Aggen	Industrial simpatizante	Bogotá D. C.	2/14/86	Paramilitares del MAS
228	Asesinato	Raúl González	Campesino simpatizante	El Pato, Huila	2/14/86	Ejército
229	Asesinato	Eluvin Yomamusa Ojeda	Campesino simpatizante	Corregimiento de la Esmeralda, Arauquita, Arauca	2/15/86	Ejército - Policía
230	Asesinato	José del Carmen Barbosa	Campesino militante	Corregimiento de la Esmeralda, Arauquita, Arauca	2/15/86	Ejército - Policía
231	Desaparición	Hernando Quintero	Candidato al Concejo por la UP	Roncesvalles, Tolima	2/16/86	Paramilitares
232	Desaparición	Emilson Alape	Activista	Roncesvalles, Tolima	2/16/86	Paramilitares
233	Asesinato	Lisandro Forero Castro	Campesino simpatizante	Natagaima, Tolima	2/21/86	Paramilitares
234	Asesinato	José Díaz Garavito	Deportista simpatizante	Paime, Cundinamarca	2/22/86	Paramilitares
235	Asesinato	Carlos Campuzano Álvarez	Activista	Yumbo, Valle del Cauca	2/22/86	Paramilitares
236	Asesinato	Miguel Ángel Martínez	Activista	Yumbo, Valle del Cauca	2/22/86	Paramilitares
237	Asesinato	Carlos Enrique Peralazo	Activista	Yumbo, Valle Cauca	2/22/86	Paramilitares
238	Masacre	Gustavo Tolosa	Dirigente	Campo Capote, Santander	2/25/86	Paramilitares del MAS
239	Masacre	Eduardo Barrera	Militante	Campo Capote, Santander	2/25/86	Paramilitares del MAS
240	Masacre	Rosendo Alquiever	Militante	Campo Capote, Santander	2/25/86	Paramilitares del MAS
241	Masacre	Serafín Ávila	Militante	Campo Capote, Santander	2/25/86	Paramilitares del MAS
242	Masacre	Leonardo Álvarez	Militante	Campo Capote, Santander	2/25/86	Paramilitares del MAS
243	Asesinato	Antonio Jiménez	Candidato listas Concejo UP Cunday	Casa ubicada en el sitio Alto Cielo, vereda San Luis de Vichía, municipio de Cunday, Tolima	2/26/86	Ejército
244	Masacre	Dagoberto Rubio	Activista	Vista Hermosa, Meta	3/7/86	Paramilitares
245	Masacre	Misael Monguí	Activista	Vista Hermosa, Meta	3/7/86	Paramilitares
246	Masacre	José Antonio Pulido	Activista	Vista Hermosa, Meta	3/7/86	Paramilitares
247	Asesinato	Luis Eduardo Rojas	Vicepresidente UP Bagre	Puerto Triana, Bagre, Antioquia	3/16/86	Paramilitares
248	Asesinato	Gabriel Ramírez	Dirigente UP	Vía al corregimiento de San Joaquín, Mercaderes, Cauca	3/18/86	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
249	Asesinato	Gloria Delgado Ortiz	Activista	Yumbo, Valle del Cauca	3/18/86	Paramilitares
250	Asesinato	Hernán Hoyos Ruiz	Dirigente UP	Mercaderes, Antioquia	3/20/86	Paramilitares
251	Desaparición	Orlando Sanabria	Campesino militante	Vereda Tambo, Barranquilla, Atlántico	3/21/86	Grupo armado
252	Asesinato	Alberto Pineda Vanegas	Estudiante, músico, militante	Bucaramanga, Santander	3/21/86	Ejército - paramilitares
253	Asesinato	Eliel Salazar	Empleado municipal militante	Yumbo, Valle del Cauca	3/24/86	Paramilitares
254	Asesinato	Ancízar Medina	Militante	Yumbo, Valle del Cauca	3/24/86	Paramilitares
255	Asesinato	William Tamayo	Militante	No registra lugar	3/29/86	MAS Rodrigo Valencia, Córdoba, alias "Yuli"
256	Asesinato	Hernando García	Dirigente Juvenil	Turbo, Antioquia	4/1/86	Paramilitares
257	Masacre	Domingo Rivera Medina	Militante	Vereda Media Naranja y Quebraditas, Corinto, Valle del Cauca	4/3/86	Paramilitares
258	Masacre	Manuel Ley Campo	Militante	Vereda Media Naranja y Quebraditas, Corinto, Cauca	4/3/86	Paramilitares
259	Masacre	Hernando Ley Campo	Militante	Vereda Media Naranja y Quebraditas, Corinto, Valle del Cauca	4/3/86	Paramilitares
260	Masacre	Gabriela Campo Chacón	Militante	Vereda Media Naranja y Quebraditas, Corinto, Valle del Cauca	4/3/86	Paramilitares
261	Asesinato	Aldemar Sánchez	Trabajador Activista	Bogotá D. C.	4/5/86	Policía
262	Asesinato	Alejandro Imbachi	Campesino militante	Los Mangos, Argelia, Cauca	4/7/86	Policía
263	Masacre	Eugenio Caldera	Obrero bananero militante	Caucasia, Antioquia	4/12/86	Paramilitares
264	Masacre	Miguel Martínez	Obrero bananero militante	Caucasia, Antioquia	4/12/86	Paramilitares
265	Masacre	Daniel Martínez	Obrero bananero militante	Caucasia, Antioquia	4/12/86	Paramilitares
266	Masacre	César Antonio Velasco Suárez	Obrero bananero militante	Turbo, Antioquia	4/12/86	Paramilitares
267	Masacre	Simeón Ramírez Bastidas	Obrero bananero militante	Turbo, Antioquia	4/12/86	Paramilitares
268	Masacre	Dagoberto Mora Calderón	Obrero bananero militante	Turbo, Antioquia	4/12/86	Paramilitares
269	Masacre	Maximiliano Vargas Ospina	Obrero bananero militante	Turbo, Antioquia	4/12/86	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
270	Asesinato	Carlos Alirio Ortiz	Exconcejal del municipio de Turbo, Antioquia. Expersonero del municipio de Acandí, corresponsal del <i>Semanario Voz</i> en el municipio de Cimitarra, activista agrario y militante del PCC	Necloclí, Nechí, Antioquia	4/21/86	Paramilitares
271	Asesinato	Señora de Ortiz	Esposa de Carlos Alirio Ortiz	Necloclí, Nechí, Antioquia	4/21/86	Paramilitares
272	Asesinato	Pedro Julio Rivera	Peluquero militante	Aguachica, Cesar	4/29/86	Ejército
273	Asesinato	Pedro Nel Carmona	Fiscal Junta UP Municipal	La Tebaida, Quindío	5/2/86	Paramilitares
274	Asesinato	Luis Reyes	Conductor y simpatizante	Saravena, Arauca	5/7/86	Policía
275	Asesinato	José Cardona Hoyos	Dirigente UP	Cali, Valle del Cauca	5/8/86	Paramilitares
276	Asesinato	José Diomedes Cedeño	Concejal UP de Tello, Huila, Dirigente sindical	Tello, Huila	5/15/86	Paramilitares
277	Asesinato	Héctor Perdomo Soto	Educador y dirigente UP	San Andrés de Tello, Huila	5/15/86	Paramilitares
278	Asesinato	José Leonardo Martínez	Dirigente cívico y político simpatizante	Vereda Cócora, Ibagué, Tolima	5/25/86	Paramilitares
279	Asesinato	Danilo Zuluaga	Fiscal de la Junta UP del municipio	La Tebaida, Quindío	6/2/86	Paramilitares
280	Asesinato	Hilario Valencia	Activista	Florida, Valle del Cauca	6/2/86	Paramilitares
281	Asesinato	José Domingo Terapué	Indígena dirigente sindical azucarero	Florida, Valle del Cauca	6/2/86	Paramilitares
282	Asesinato	Ángel Asprilla	Dirigente UP	Corregimiento Domingó, municipio Riosucio, Chocó	6/8/86	Paramilitares
283	Asesinato	Baltazara Asprilla	Dirigente UP	Corregimiento Domingó, municipio Riosucio, Chocó	6/8/86	Paramilitares
284	Asesinato	Diego Muñoz Taborda	Simpatizante, dirigente liberal	Sucre, Cauca	6/15/86	Policía
285	Asesinato	Antonio Linares	Militante	Yacopí, Cundinamarca, vereda El Carmelo, Cundinamarca	6/21/86	Paramilitares, Plan Cóndor
286	Asesinato	Arnulfo Linares	Militante	Vereda El Carmelo, Yacopí, Cundinamarca,	6/21/86	Paramilitares, Plan Cóndor
287	Masacre	Moisés Rodríguez	Campeño militante	Inspección de Piñalito, Meta	6/22/86	Ejército
288	Masacre	Manuel Amaya	Campeño militante	Inspección de Piñalito, Meta	6/22/86	Ejército

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
289	Masacre	N.N. Campesino 1	Campesino militante	Inspección de Piñalito, Meta	6/22/86	Ejército
290	Masacre	N.N. Campesino 2	Campesino militante	Inspección de Piñalito, Meta	6/22/86	Ejército
291	Asesinato	José ("Chepe") Gil	Campesino militante	Inspección de Policía, Canaguaro, Granada, Meta	6/23/86	Agente Javier Ramírez. Policía
292	Asesinato	Jorge Eugenio Pinilla Ángel	Concejal de Rionegro	Finca el Gamonal, Rionegro, Santander	6/26/86	Paramilitares
293	Asesinato	José Avilio Cortés Cortés	Concejal de la Dorada	La Dorada, Caldas	6/28/86	Paramilitares del MAS
294	Asesinato	Julián Taquinás	Indígena militante del PCC	Vereda Potreritos, Miranda, Cauca	6/28/86	Paramilitares
295	Asesinato	José Manuel Mahecha	Campesino militante	Vereda Sardinas, Yacopí, Cundinamarca	6/29/86	Paramilitares
296	Asesinato	Alicia Rojas	Exconcejal del PCC, presidente UMD Puerto Boyacá	Puerto Boyacá, Boyacá	6/29/86	Plan Cóndor
297	Asesinato	Víctor Jiménez Mora	Militante	Acacías, Meta	6/29/86	Paramilitares
298	Asesinato	Ignacio Tovar	Campesino militante del PCC	Vereda Sardinas, Corregimiento Llanomateo, sitio Alto del Rejo, Yacopí, Cundinamarca	6/29/86	Ejército
299	Asesinato	Roosevelt Enciso	Dirigente del PCC	Vereda Media Naranja, Corinto, Cauca	6/29/86	Paramilitares
300	Asesinato	Alias "Carlos"	Insurgente del Frente 3º FARC, activista en tregua	Vereda El Cedro, Florencia, Caquetá	6/30/86	Militares - Paramilitares
301	Asesinato	Nelly Flórez Uribe	Activista de la UP acogida al proceso de paz	La Putana, municipio Betulia, Santander,	7/3/86	Paramilitares, Plan Cóndor
302	Asesinato	Édgar Flórez Uribe	Campesino dirigente UP	La Putana, municipio Betulia, Santander	7/3/86	Paramilitares, Plan Cóndor
303	Masacre	José Arcesio Rodríguez Hurtado	Militante	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
304	Masacre	Ana Belén de Rodríguez	Militante	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
305	Masacre	Leonor Ortiz Cervera	Militante	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
306	Masacre	Hernando de Jesús Gómez Restrepo	Militante	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
307	Masacre	Gladys Niño de Gómez	Militante	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
308	Masacre	Gilmer de Jesús Patiño Arias	Militante	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
309	Masacre	Adán Afanador Nieto	Militante	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
310	Masacre	Luis Alberto Durán Martínez	Menor de dieciséis años, hijo de concejal	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
311	Masacre	Lily Valencia Gómez	Militante	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
312	Masacre	Adriana Ávila Alfaro	Militante	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
313	Masacre	Sandra Ávila Alfaro	Militante	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
314	Masacre	Neftalí Quimbaya Malagón	Militante	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
315	Masacre	Soledad del Carmen Cárdenas	Esposa de Neftalí Quimbaya	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
316	Masacre	Wilson E. Quimbaya Solórzano	Cinco años de edad, nieto de Neftalí y Soledad	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
317	Masacre	Luz Dary Rodríguez	Niña de diez años	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
318	Masacre	Yorley Rodríguez Rodríguez	Militante	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
319	Masacre	Jairo Durán Barreto	Militante	Caño Sibao, Castillo-Granada, Meta	7/3/86	Paramilitares en conexión con el Ejército
320	Asesinato	Rodrigo Zúñiga	Presidente Junta UP Bolívar	Bolívar, municipio de Sucre, Cauca	7/3/86	Paramilitares, Plan Cóndor
321	Asesinato	Édgar Flórez	Militante	Saravena, Arauca	7/8/86	Paramilitares
322	Asesinato	Aníbal Asprilla	Militante	Riosucio, Chocó	7/8/86	Paramilitares
323	Asesinato	Benjamín Rivas Rojas	Concejal UP de Puerto Gaitán	Cárcel de Puerto Gaitán, Meta	7/13/86	Policía

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
324	Masacre	Eurípides Hernández	Campesino simpatizante	Yacopí, Cundinamarca - Otanche, Boyacá	**/07/86	Paramilitares - Militares del Batallón Baraya
325	Masacre	Leonel Hernández	Campesino simpatizante	Yacopí, Cundinamarca - Otanche, Boyacá	**/07/86	Paramilitares - Militares del Batallón Baraya
326	Masacre	N. Hernández, hijo de Leonel Hernández	Campesino simpatizante	Yacopí, Cundinamarca - Otanche, Boyacá	**/07/86	Paramilitares - Militares del Batallón Baraya
327	Masacre	Marco Antonio Castro	Campesino simpatizante	Yacopí, Cundinamarca - Otanche, Boyacá	**/07/86	Paramilitares - Militares del Batallón Baraya
328	Masacre	Antonio Bermúdez	Campesino simpatizante	Yacopí, Cundinamarca - Otanche, Boyacá	**/07/86	Paramilitares - Militares del Batallón Baraya
329	Asesinato	Jorge Enrique Hoyos	Militante JUCO	Yumbo, Valle del Cauca	7/23/86	Paramilitares
330	Asesinato	Jorge Eliécer Sánchez Acosta	Dirigente del PCC	Granada, Meta	7/26/86	Paramilitares
331	Asesinato	Jorge N.	Campesino desmovilizado	Vereda Vergel, Gigante, Huila	7/26/86	Ejército
332	Asesinato	Jaime N.	Campesino desmovilizado	Vereda Vergel, Gigante, Huila	7/26/86	Ejército
333	Asesinato	Héctor Ramiro Jiménez Mora	Presidente UP Acacias y dirigente PCC	Acacias, Meta	7/28/86	Paramilitares
334	Asesinato	José Agustín Melo	Activista	Acacias, Meta	7/28/86	Paramilitares
335	Asesinato	José Rafael Reyes Malagón	Concejal y diputado del Meta	Granada, Meta	7/30/86	Paramilitares
336	Masacre	Juan Cárdenas	Campesino militante	Yacopí, Cundinamarca	8/3/86	Paramilitares
337	Masacre	Carlos Triviño	Campesino militante	Yacopí, Cundinamarca	8/3/86	Paramilitares
338	Masacre	Arquímedes Fajardo	Campesino militante	Yacopí, Cundinamarca	8/3/86	Paramilitares
339	Asesinato	Jairo Tapias Pinilla	Dirigente sindical de FECODE y la UP	El Carmen, Santander	8/5/86	Paramilitares
340	Asesinato	Álvaro Falla	Activista	Bogotá D. C.	8/7/86	Ejército
341	Asesinato	Mesías Cadena	Campesino convocado a reunión por la UP	La Pesa, vereda San Isidro, Santa Elena del Opón, Santander	8/17/86	Ejército
342	Asesinato	José Ignacio Mejía	Concejal Campoalegre y dirigente	Campoalegre, Huila	8/17/86	Paramilitares
343	Asesinato	Tiberio Díaz Naranjo	Campesino militante	(Camino) El Castillo, Meta	8/10/86	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
344	Asesinato	Esteban Marín	Activista	Chigorodó, Antioquia	8/14/86	Paramilitares
345	Asesinato	Eucaris Areiza	Campesina convocada a reunión por la UP	La Pesa, vereda San Isidro, Santa Elena del Opón	8/15/86	Ejército
346	Asesinato	Eliécer Ipuz Tovar	Dirigente UP	Vereda Betania, Algeciras, Huila	8/20/86	Ejército
347	Asesinato	Diego Medina o Puerta	Dirigente PCC	Vereda Betania, Algeciras, Huila	8/20/86	Ejército
348	Asesinato	Dimas Ríos	Activista	Puerto Parra, Santander	8/24/86	Paramilitares - Ejército
349	Asesinato	Leonardo Posada Pedraza	Representante a la Cámara Barrancabermeja	Barrancabermeja, Santander	8/30/86	Paramilitares
350	Asesinato	Enrique Duque Mora	Mecánico simpatizante	Aransazu, Caldas	8/30/86	Paramilitares
351	Asesinato	Cornelio Velasco Escue	Concejal de Tambo	Tambo, Cauca	8/31/86	Paramilitares
352	Asesinato	Cristian Tintimaya Montejo	Dirigente UP	Rosas, Cauca	8/31/86	Paramilitares
353	Asesinato	Pedro Nel Jiménez Obando	Senador de la República por el Meta	Villavicencio, Meta	9/1/86	Paramilitares
354	Asesinato	Félix Antonio Camacho	Concejal de Villarica	Villarica, Tolima	9/3/86	Paramilitares
355	Asesinato	Crispulo Hilario Muñoz	Concejal de San José del Guaviare	San José del Guaviare, Guaviare	9/3/86	B2 del Ejército
356	Asesinato	Jahir López	Activista	San José del Guaviare, Guaviare	9/3/86	B2 del Ejército
357	Asesinato	Humberto Márquez	Filósofo, poeta, crítico literario, exvicerrector Univ. Antonio Nariño, dirigente UP	Pasto, Nariño	9/3/86	Paramilitares
358	Asesinato	José Eduardo Fuenmayor Muñoz	Dirigente magisterio Mocoa, Putumayo, dirigente	Mocoa, Putumayo	9/7/86	Paramilitares
359	Asesinato	Albeiro Antonio Marulanda Zapata	Presidente Junta UP médico veterinario	Caldas, Antioquia	9/20/86	Paramilitares
360	Asesinato	Luis Ángel Benítez	Militante	Vereda El Zancudo, Caldas, Antioquia	9/23/86	F2
361	Asesinato	Isidro Bustamante	Dirigente y miembro Junta UP	Vereda El Zancudo, Caldas, Antioquia	9/23/86	F2
362	Asesinato	Darío Henao Torres	Concejal de Fredonia, activista del Partido Socialista Revolucionario PSR, abogado	Fredonia, Antioquia	9/26/86	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
363	Asesinato	Eudoro Merchán	Médico activista	Sitio El Pepino, Mocoa, Putumayo	9/28/86	Paramilitares
364	Desaparición	Pedro Muñoz	Campesino militante	Vereda El Naranjito, Cimitarra, Santander	10/4/86	XVI Brigada del Ejército, Proyecto Nunca Más
365	Desaparición	José Navia	Campesino militante	Vereda El Naranjito, Cimitarra, Santander	10/4/86	Ejército XIV Brigada, Proyecto Nunca Más
366	Asesinato	Víctor Hugo Quijano Calero	Simpatizante	Santander de Quilichao, Cauca	10/4/86	Policía
367	Asesinato	Jaime Berrío Cardona	Dirigente sindical	Barrancabermeja, Santander	10/7/86	Empresarios
368	Asesinato	Óscar Jaramillo Marín	Dirigente agrario, presidente de la UP	Vereda Cominales, Sevilla, Valle del Cauca	10/8/86	Paramilitares
369	Asesinato	José Roselino Rosero Morales	Dirigente local UP	Inspección Puerto Caldas, Granada, Meta	10/9/86	Paramilitares
370	Asesinato	Hernán Galindo Zárate	Militante	Puerto Lleras, Granada, Meta	10/9/86	Paramilitares
371	Asesinato	Santiago Noreña Gallego	Simpatizante	Marsella, Risaralda	10/9/86	Agentes del Estado
372	Asesinato	Azael Gutiérrez	Simpatizante y ANUC	Vereda Palmicha, El Tambo, Cauca	10/9/86	Paramilitares
373	Desaparición	Federico Grijalba	Campesino militante	Santander de Quilichao, Cauca	10/15/86	III Brigada del Ejército
374	Desaparición	José Luis Grijalba	Campesino militante, hijo de Federico Grijalba	Santander de Quilichao, Cauca	10/15/86	III Brigada del Ejército
375	Desaparición	Jesús Álvaro Grijalba	Campesino militante, hijo de Federico Grijalba	Santander de Quilichao, Cauca	10/15/86	III Brigada del Ejército
376	Asesinato	Diego Collazos	Dirigente Junta Comunitaria UP	Vereda El Danubio, Inspección San Antonio de Getucha, Florencia, Caquetá	10/17/86	Paramilitares
377	Asesinato	Luis Antonio Tique	Dirigente Junta Comunitaria UP	Vereda El Danubio, Inspección San Antonio de Getucha, Florencia, Caquetá	10/17/86	Paramilitares
378	Asesinato	Ramón Londoño	Activista	San José del Guaviare	10/21/86	Paramilitares
379	Masacre	Francisco Serna	Minero activista	Vereda Vijagual, Nechí, Antioquia	10/23/86	Ejército
380	Masacre	Javier Sucerquía	Minero activista	Vereda Vijagual, Nechí, Antioquia	10/23/86	Ejército
381	Masacre	Luis Arrieta	Minero activista	Vereda Vijagual, Nechí, Antioquia	10/23/86	Ejército

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
382	Masacre	Julio César Arrieta	Minero activista	Vereda Vijagual, Nechí, Antioquia	10/23/86	Ejército
383	Asesinato	Miguel Rivero Rey	Dirigente UP	Acacias, Meta	11/8/86	Paramilitares
384	Asesinato	José Manuel Cervelión Mirillo	Dirigente PCC y sindical Puertos de Colombia	Buenaventura, Valle del Cauca	11/9/86	Paramilitares
385	Asesinato	José Galindo	Militante	Acacias, Meta	11/10/86	Paramilitares
386	Asesinato	Omar Castaño y/o Castañeda	Militante	Villavicencio, Meta	11/10/86	Paramilitares
387	Asesinato	Juan Alberto Guachetá	Concejal UP Morales, Cauca	Vereda Los Quingos, municipio de Buenos Aires, Cauca	11/10/86	Paramilitares
388	Asesinato	Mónica Guachetá	Hija del concejal UP Juan Alberto Guachetá	Vereda Los Quingos, municipio de Buenos Aires, Cauca	11/10/86	Paramilitares
389	Asesinato	Juvenal Torres	Dirigente UP	Yondó, Antioquia	11/10/86	Paramilitares
390	Asesinato	Hernán Lara	Poeta, compositor militante	Carretera Villavicencio, San Martín, Meta	11/15/86	Paramilitares
391	Desaparición	Manuel Salvador Ceballos Sierra	Presidente JAC, campesino	Remedios, Antioquia	11/18/86	XIV Brigada del Ejército
392	Asesinato	Juan José Rojas	Activista	Vereda Puerto Esperanza, municipio La Macarena, Meta	11/19/86	Paramilitares del MAS
393	Asesinato	Ulises Rubio	Militante	Vereda San José, municipio La Macarena, Meta	11/19/86	Paramilitares del MAS
394	Asesinato	Gustavo Garzón	Concejal por la UP	Rioblanco, Tolima	11/19/86	Ejército
395	Asesinato	Ramiro Silva	Militante	Vereda Los Quingos, Morales, Cauca	11/20/86	Paramilitares
396	Asesinato	Mercedes N.	Militante	Vereda Los Quingos, Morales, Cauca	11/20/86	Paramilitares
397	Masacre	Mario Huertas Solórzano	Militante	Medellín del Ariari, Meta	11/22/86	Ejército
398	Masacre	Manuel Galindo Pedraza	Militante	Medellín del Ariari, Meta	11/22/86	Ejército
399	Masacre	Jorge Antonio Guerra	Militante	Medellín del Ariari, Meta	11/22/86	Ejército
400	Masacre	Miguel Ángel Montoya	Militante	Medellín del Ariari, Meta	11/22/86	Ejército
401	Masacre	Ángel María Rodríguez	Militante	Medellín del Ariari, Meta	11/22/86	Ejército
402	Masacre	Vidal Ramírez	Militante	Medellín del Ariari, Meta	11/22/86	Ejército

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
403	Asesinato	Alberto Delgado Díaz	Sociólogo, dirigente UP	Sevilla, Valle del Cauca	11/23/86	Policía - Paramilitares
404	Desaparición	Samuel Tuirán	Dirigente UP	Inmediaciones del municipio de Vélez, Santander	11/25/86	Ejército
405	Desaparición	Beatriz Casadiego	Campesino militante	La Estrella, al sur de Bolívar	11/25/86	Ejército
406	Desaparición	Heriberto Chacón	Campesino militante	La Estrella, al sur de Bolívar	11/25/86	Ejército
407	Asesinato	Alonso Macías Borja	Dirigente JUCO Urabá	Corregimiento de Bajirá, municipio de Mutatá, Antioquia	11/26/86	Sicarios al servicio de Militares del Batallón Voltigeros
408	Asesinato	Plutarco Caicedo	Activista	San José del Guaviare, Guaviare	11/29/86	Paramilitares
409	Asesinato	Olga Soto	Activista	Yacopí, Cundinamarca	**/12/85	Ejército
410	Asesinato	José Heberto Barriga de la Cruz	Militante	Vereda Guateca, Santa Marta, Magdalena	12/6/86	Paramilitares
411	Asesinato	Germán Barriga de la Cruz	Militante	Santa Marta, Magdalena	12/6/86	Paramilitares
412	Asesinato	Luis Ander Guevara	Militante	Inspección La Colonia, Villarica, Tolima	12/6/86	Ejército
413	Asesinato	Esteban Portela	Campesino simpatizante	Inspección La Playa, Granada, Meta	12/7/86	Paramilitares
414	Asesinato	Antonio Córdoba	Dirigente sindical Puerto Nare	Sede del MAS de Puerto Boyacá, Boyacá	12/8/86	Paramilitares del MAS
415	Asesinato	Julio César Uribe Rúa	Concejal de Puerto Nare, presidente Sindicato Cementos Nare, directivo CUT, FEDETA, presidente seccional SUTIMAC y miembro FENALTRACONCEM	Puerto Boyacá, Boyacá	12/8/86	Paramilitares
416	Asesinato	Octavio Vargas Cuéllar	Representante Cámara por Territorios Nacionales, dirigente agrario y del PCC	San José del Guaviare, Guaviare	12/14/86	Paramilitares
417	Asesinato	Everto Martínez	Militante	Cartagena, Bolívar	**/12/86	Paramilitares
418	Asesinato	Ciro Morales	Campesino activista	Corregimiento La Aguada, jurisdicción de Paz de Ariporo, Casanare	12/18/86	Ejército
419	Asesinato	Francisco Granda	Campesino militante	El Castillo, Meta	12/22/86	Paramilitares
420	Asesinato	Juan Bautista	Simpatizante	Paz de Ariporo, Casanare	12/23/86	DAS
421	Asesinato	Salvador Cruz	Simpatizante	Paz de Ariporo, Casanare	12/23/86	DAS

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
422	Asesinato	Gerardo Castaño Trujillo	Campesino militante	Puerto Lucas, Vista Hermosa, Meta	12/27/86	Ejército
423	Asesinato	Enrique Verda	Dirigente UP	Tame, Arauca	1/7/87	F2, teniente de apellido Rojas
424	Asesinato	Sotero Escobar	Dirigente, consejero intendencial, Arauca, Arauca	Finca cercana a Betoyes, jurisdicción municipio de Tame	1/7/87	Paramilitares del MAS, “un criminal de apellido Forero”
425	Asesinato	Cesáreo Rincón	Campesino simpatizante	Región de Yacopí, Cundinamarca	**/01/87	Paramilitares del MAS
426	Asesinato	Carlos Darío Cruz	Dirigente JUCO, miembro Comité Central	Región de Yacopí, Cundinamarca.	1/18/87	Paramilitares del MAS
427	Asesinato	Eulalia Anzola	Activista	Yacopí, Cundinamarca	1/18/87	Sin datos
428	Desaparición	Marcial Alonso González	Activista	Puerto Boyacá, Boyacá	2/4/87	Batallón Bárbula
429	Asesinato	Luis Guevara	Dirigente UP	Vereda La Colonia, municipio de Villarrica, Tolima	2/14/87	Paramilitares
430	Asesinato	Milton Manuel Aroca	Candidato al Concejo Villarrica	Vereda La Colonia, municipio de Villarrica, Tolima	2/14/87	X Brigada del Ejército
431	Asesinato	Didier Guaracas	Estudiante activista, de diecisiete años de edad	Vereda La Jamina, municipio Ataco, Tolima	**/02/87	Militares
432	Desaparición	Albertino Romero	Activista	Colombia, Huila	2/19/87	Ejército
433	Asesinato	Ovidio Cano	Dirigente sindical bananero Urabá	Apartadó, Antioquia	2/20/87	Paramilitares
434	Asesinato	Víctor Manuel Aroca	Exconcejal y candidato listas Concejo UP Cunday	Casa ubicada en el sitio Alto Cielo, vereda San Luis de Vichía, municipio de Cunday, Tolima	2/26/87	Ejército
435	Asesinato	Luis Miguel Silva Díaz	Concejal de Yondó	Casco urbano de Yondó, Antioquia	3/3/87	Paramilitares
436	Asesinato	Leonel Forero	Consejero intendencial de Arauca, Arauca	Arauca, Arauca	3/4/87	Paramilitares
437	Asesinato	José Nelson Jaramillo	Concejal de la UP de Medellín del Ariari, líder agrario	Medellín del Ariari, Meta	3/7/87	Cabo de Policía
438	Asesinato	Dumar Peralta	Concejal Fuente de Oro	Fuente de Oro, Meta	3/7/87	Paramilitares
439	Asesinato	José Peralta	Militante, hermano de Dumar Peralta	Fuente de Oro, Meta	3/7/87	Paramilitares
440	Desaparición	Walter Villa Arce	Activista	Puerto Bogotá, Puerto Berrío, Boyacá	3/8/87	Paramilitares
441	Desaparición	Luis Antonio Gómez Henao	Activista	Corregimiento La Sierra, Puerto Boyacá, Boyacá	3/8/87	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
442	Asesinato	Daniel Peralta	Concejal Puente de Oro	Puente de Oro, Meta	3/8/87	Paramilitares
443	Asesinato	Jaime Alonso Herrera Alzate	Simpatizante	Segovia, Antioquia	3/9/87	Paramilitares
444	Asesinato	Jesús Antonio Molina	Dirigente de UP y sindical de SUTIMAC	Puerto Nare, Antioquia	3/9/87	Sicarios
445	Asesinato	Gabriel Alfredo Briceño	Concejal de Villavicencio, dirigente PC del Meta, presidente CENAPROV, secretario general del CE PCC del Meta	Villavicencio, Meta	3/10/87	Paramilitares del MAS
446	Asesinato	Julio Figueroa	Aliado UP	Pitalito, Huila	**/03/87	IX Brigada del Ejército
447	Asesinato	Marco Quiñones	Activista	Paujil, Caquetá	3/20/87	Militares
448	Asesinato	Freddy Conde	Activista	Paujil, Caquetá	3/20/87	Militares
449	Asesinato	Jaime Londoño	Concejal UP	Curillo, Caquetá	3/23/87	Paramilitares
450	Asesinato	Blanca Nubia Ballesteros de Benjumea	Activista	San José de Guaviare, Guaviare	3/26/87	Paramilitares
451	Asesinato	Samuel Valdéz	Dirigente, presidente Sindicato Pequeños Agricultores del Magdalena	Tenerife, Magdalena	3/27/87	Paramilitares
452	Asesinato	Alfonso Miguel Lozano	Directivo sindicato COLCARBUROS, Nare	Inmediaciones corregimiento La Sierra, Antioquia	3/30/87	Sicarios
453	Asesinato	Lucio Serrano Luna	Dirigente de SUTIMAC, militante	Puerto Nare, Antioquia	3/30/87	Sicarios
454	Asesinato	Félix Natanael Sáenz Bedoya	Dirigente JUCO	Ciénaga de Oro, Córdoba	3/31/87	Paramilitares
455	Asesinato	Felipe Rafael Sáenz Bedoya	Dirigente JUCO	Ciénaga de Oro, Córdoba	3/31/87	Paramilitares
456	Asesinato	José Darío Rodríguez Vásquez	Coordinador departamental UP y candidato Alcaldía Pitalito	Suaza, Huila	4/1/87	Batallón Magdalena
457	Asesinato	Fabiola Ruiz	Activista	Suaza, Huila	4/1/87	IX Brigada del Ejército
458	Masacre	Gustavo Alberto Vallejo Agudelo	Concejal de El Bagre, Antioquia	El Bagre, Antioquia	4/1/87	Ejército
459	Masacre	Myriam Luz Ruiz Mendoza	Simpatizante	El Bagre, Antioquia	4/1/87	Ejército
460	Masacre	N. Piñeros	Simpatizante	El Bagre, Antioquia	4/1/87	Ejército
461	Asesinato	José Antonio Quiroz Rivero	Concejal conservador aliado UP	Becerril, Cesar	4/14/87	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
462	Asesinato	Diego Fernández	Personero de San Sebastián	San Sebastián, Cauca	4/4/87	Paramilitares
463	Asesinato	Amado Vanegas	Activista	Vereda Alto Seco, Yacopí, Cundinamarca	4/7/87	Paramilitares
464	Asesinato	Domingo Garzón	Activista	Vereda El Chirche, Yacopí, Cundinamarca	4/7/87	Paramilitares
465	Asesinato	Francisco Javier Calderón	Activista, Vista Hermosa	Vista Hermosa, Meta	4/10/87	Paramilitares
466	Masacre	Paulino Chacón	Dirigente UP	San Agustín, Huila	4/11/87	Paramilitares
467	Masacre	José Víctor Medina	Activista	San Agustín, Huila	4/11/87	Paramilitares
468	Masacre	Alcides Boada	Activista	San Agustín, Huila	4/11/87	Paramilitares
469	Masacre	Jaime Astudillo	Activista	San Agustín, Huila	4/11/87	Paramilitares
470	Asesinato	Gerardo Ortiz Sierra	Dirigente La Jagua de Ibirico	La Jagua, Cesar	4/13/87	Paramilitares
471	Asesinato	Marcos Dimas Yandé Guachetá	Dirigente indígena	Morales, Cauca	4/14/87	Paramilitares
472	Asesinato	Elizabeth María Hurtado Villamarín	Activista	Popayán, Cauca	4/16/87	Paramilitares
473	Asesinato	Fernando Valencia	Activista	Popayán, Cauca	4/16/87	Paramilitares
474	Asesinato	Álvaro Miranda Fuentes	Activista	Nechí, Antioquia	4/17/87	Paramilitares
475	Asesinato	Rubén Lasso Mazuera	Coordinador de la UP del Meta, presidente CENAPROV	Villavicencio, Meta	4/20/87	Paramilitares
476	Asesinato	Darío Cruz	Dirigente UP	Yacopí, Cundinamarca	4/27/87	Paramilitares
477	Asesinato	Víctor Hugo Giraldo Hernández	Activista estudiantil	Medellín, Antioquia	5/3/87	Paramilitares
478	Asesinato	Roberto Amaya	Dirigente agrario	Yacopí, Cundinamarca	5/3/87	Paramilitares
479	Asesinato	Sandra Rondón	Activista	Barrancabermeja, Santander	5/3/87	Sin datos
480	Asesinato	Víctor Molano	Dirigente UP	Ciénaga del Opón, Santander	5/5/87	Paramilitares
481	Asesinato	José Miguel Rojas Parrado	Alcalde de San José del Guaviare	San José del Guaviare, Guaviare	5/5/87	Paramilitares
482	Asesinato	Marco Tulio Chiquillo Herrera	Tesorero Junta de Ornato, militante UP	San Martín, Meta	5/17/87	Paramilitares del MAS
483	Asesinato	Tito Julio Forero Pineda	Vicepresidente UP Guaviare	Puerto López, Meta	5/20/87	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
484	Asesinato	Fernán Díaz	Dirigente agrario, simpatizante	Corregimiento San Luis, municipio de Sampués, Sucre	5/29/87	Paramilitares
485	Asesinato	Hamley Bechara Cuesta	Simpatizante	Población de Chocó (paro cívico)	5/30/87	Militares
486	Asesinato	Jairo Cutiva	Militante de catorce años de edad	Florencia, Caquetá	6/6/87	Autodefensas del Comité Democrático del Caquetá se adjudicaron el hecho
487	Asesinato	Mercedes Nevado	Activista UP Puerto Boyacá, Boyacá. Madre de Jaime Nevado, concejal del PCC asesinado en 1983	Trayecto Medellín - Puerto Boyacá - La Sierra, Antioquia	6/11/87	Paramilitares
488	Asesinato	Reynaldo Alzate	Profesor, activista	Palestina, Huila	6/19/87	Paramilitares
489	Asesinato	Arcesio Flor	Dirigente indígena	Corregimiento San Antonio, Jamundí, Valle del Cauca	6/22/87	Policía de Cali, Valle del Cauca
490	Asesinato	Carlos Julio Rodríguez	Simpatizante	Florencia, Caquetá	**/**/87	Paramilitares
491	Asesinato	Donato Ariza	Dirigente UP	Pulí, Cundinamarca	7/1/87	Paramilitares
492	Asesinato	Diomedes Pineda	Activista	Pulí, Cundinamarca	7/1/87	Paramilitares
493	Asesinato	Nicasio Jeréz Guisa	Activista	Bucaramanga, Santander	7/1/87	Paramilitares
494	Asesinato	Roque Jeréz Guisa	Activista de dieciséis años	Bucaramanga, Santander	7/6/87	Paramilitares
495	Asesinato	Jesús Márquez	Dirigente UP	Saravena, Arauca	7/7/87	Sicarios
496	Asesinato	Javier Vásquez	Dirigente UP	La Paz, Arauca	7/9/87	Sicarios
497	Asesinato	Fernando Bahamón	Concejal de San Vicente del Caguán, periodista	San Vicente del Caguán, Caquetá	6/6/87	Paramilitares
498	Masacre	Bernardino García	Presidente de SINDIGAS, federal de USITRAS y coordinador UP	Sitio Los Curos del municipio de Piedecuesta, Santander	7/16/87	Paramilitares
499	Masacre	Jairo Blandón	Fiscal SINDIGAS, militante PCC	Sitio Los Curos del municipio de Piedecuesta, Santander	7/16/87	Paramilitares
500	Masacre	Luis Francisco Guzmán	Vocal SINDIGAS, militante PCC	Sitio Los Curos del municipio de Piedecuesta, Santander	7/16/87	Paramilitares
501	Asesinato	Sanguino Hernando	Dirigente Asociación Educadores de Norte de Santander	Ocaña, Norte de Santander	7/23/87	Sicarios
502	Asesinato	Marco Sánchez Castrillón	Dirigente, abogado, periodista	Santa Marta, Magdalena	8/4/87	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
503	Asesinato	Freddy Carrillo	Simpatizante	Vereda Chenchito del municipio de Prado, Tolima	8/7/87	Policía
504	Asesinato	William Alfonso Cadena	Secretario SINDICHOCOL (sindicato de choferes), simpatizante	No registra lugar	8/9/87	Sicarios
505	Asesinato	Rafael Antonio Duarte	Presidente del Consejo Comisarial del Guaviare, dirigente	Calamar, Guaviare	8/13/87	Sicario al servicio del Ejército, Marco Melquisedec Páez
506	Asesinato	Fabio León Aguirre	Activista	Yarumal, Antioquia	8/14/87	Paramilitares
507	Asesinato	Pedro Luis Valencia	Senador UP por Antioquia	Asesinado en su residencia de la Carrera 81 B No. 51-52 Barrio Calazans-Ferrini, Medellín, Antioquia	8/14/87	Policía
508	Asesinato	Noel Salazar Martínez	Activista	Yarumal, Antioquia	8/14/87	Paramilitares
509	Masacre	Álvaro Garcés Parra	Alcalde de la UP Sabana de Torres	Sabana de Torres, Santander (fiesta popular)	8/16/87	Sicario
510	Masacre	Carlos Gamboa	Escolta y activista	Sabana de Torres, Santander (fiesta popular)	8/16/87	Sicario
511	Masacre	Elia Rocío Amaya	Activista	Sabana de Torres, Santander (fiesta popular)	8/16/87	Sicario
512	Desaparición	Jacobo Anacona	Concejal de la UP	Palestina, Huila	8/19/87	Paramilitares
513	Desaparición	Gustavo Anacona	Activista	Palestina, Huila	8/19/87	Paramilitares
514	Asesinato	Fidel Antonio Ardila	Concejal UP San Martín y candidato a la Alcaldía de San Martín	San Martín, Meta	8/22/87	Paramilitares
515	Asesinato	Demetrio Aldana	Concejal de la UP de Planadas, presidente de APEMECAFÉ, candidato a la Alcaldía de Planadas	Planadas, Tolima	8/22/87	Paramilitares
516	Asesinato	Leonardo Betancur	Exconcejal de Medellín por el Frente Democrático	Medellín, Antioquia	8/25/87	Paramilitares
517	Asesinato	Delfín Velásquez	Candidato a la Alcaldía de Puerto López, Meta	Puerto López, Meta	8/26/87	Paramilitares
518	Asesinato	Alejandro José Gómez	Obrero bananero	Apartadó, Antioquia	8/28/87	Paramilitares
519	Asesinato	José Remigio López	Concejal suplente San Vicente de Chucurí	San Vicente de Chucurí, Santander	8/31/87	Paramilitares
520	Asesinato	Campo Elías Ávila	Miembro Comité Regional PC Huila	No registra lugar	9/2/87	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
521	Asesinato	José Paulino López	Dirigente secretario de SINTAGRO, Apartadó	Apartadó, Antioquia	9/4/87	Paramilitares
522	Asesinato	Marciano Berrio Salas	Dirigente sindical de Carepa	Carepa, Urabá, Antioquia,	9/4/87	Paramilitares
523	Asesinato	Norberto Velásquez	Presidente del Concejo de Vista Hermosa	Puerto Triste, Meta	9/5/87	Paramilitares
524	Asesinato	Nelson Cañón Trujillo	Dirigente JUCO	Puerto López a Vista Hermosa, Meta	9/7/87	Paramilitares
525	Asesinato	Henry Sepúlveda	Dirigente JUCO	Puerto Triste, Meta	9/7/87	Paramilitares
526	Asesinato	José Vicente Cárdenas Sánchez	Concejal de Puerto López	Puerto López, Meta	9/11/87	Paramilitares
527	Asesinato	Arturo Betancur	Concejal de La Victoria	Vereda Fierritos de la Victoria, Caldas	9/13/87	Sicarios
528	Asesinato	Luis J. Osorio	Dirigente liberal de la UP	Socorro, Santander	9/17/87	Paramilitares
529	Masacre	Eleuterio Palacio Cabrera	Activista	Apartadó, Antioquia	9/18/87	Paramilitares
530	Masacre	Martha Rubiela Madrid	Activista	Apartadó, Antioquia	9/18/87	Paramilitares
531	Masacre	Alexander Palacio Madrid	Activista	Apartadó, Antioquia	9/18/87	Paramilitares
532	Masacre	Luis Beltrán Palacio	Activista	Apartadó, Antioquia	9/18/87	Paramilitares
533	Asesinato	Ovidio Aranguren Hoyos	Dirigente militante	Bogotá D. C.	9/25/87	Paramilitares
534	Asesinato	Julio Rincón	Dirigente militante	Bogotá D. C.	9/25/87	Paramilitares
535	Desaparición	Juan Bautista Marín Tetena	Campesino activista	Roncesvalles, Tolima	9/27/87	Paramilitares
536	Asesinato	Alberto Angulo	Presidente SINTRABANANO	Apartadó, Antioquia	9/25/87	Paramilitares
537	Asesinato	Pablo Emilio Córdoba	Dirigente sindicato de Cementos Nare, dirigente del PCC	Corregimiento La Sierra, Puerto Nare, Antioquia	9/30/87	Paramilitares
538	Asesinato	Felipe Sánchez Mena	Vicepresidente UP Chigorodó	Chigorodó, Antioquia	9/30/87	Paramilitares
539	Asesinato	Óscar Calle Guzmán	Dirigente UP	Chigorodó, Antioquia	9/30/87	Paramilitares
540	Asesinato	Antonio Betancur	Militante	Vereda Chilí, municipio Roncesvalles, Tolima	10/1/87	Paramilitares
541	Desaparición	Luis Giovanni Mejía López	Simpatizante	Cali, Valle del Cauca	10/9/87	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
542	Asesinato	Jaime Pardo Leal	Presidente de UP, candidato presidencial	Vía La Mesa, Cundinamarca	10/11/87	Paramilitares
543	Asesinato	José Fabio Traslaviña	Activista	Bogotá D. C.	10/11/87	Policía
544	Asesinato	Carlos Rodríguez	Activista	Bogotá D. C.	10/11/87	Policía
545	Asesinato	José Duval Ruiz	Niño de once años	Bogotá D. C.	10/11/87	Policía
546	Asesinato	Julián Cortés Gil	Militante PCC	Bogotá D. C.	10/15/87	Paramilitares
547	Asesinato	Jhon Jaime Ríos	Simpatizante	Necoclí, Antioquia	10/18/87	Unidades Batallón Rifles
548	Asesinato	Lorenzo Becerra	Simpatizante	Necoclí, Antioquia	10/18/87	Unidades Batallón Rifles
549	Asesinato	Gil Antonio Rueda	Activista	Barrancabermeja, Santander	10/19/87	Fuerza Pública
550	Asesinato	Ángel María Solarte	Activista	Nariño, Cauca	10/22/87	Paramilitares
551	Asesinato	Marino Cepeda	Activista	Nariño, Cauca	10/22/87	Paramilitares
552	Asesinato	Gerardo Cuéllar	Diputado Caquetá, coordinador UP	Florencia, Caquetá	10/29/87	Paramilitares
553	Asesinato	Lorenzo Godoy	Militante del PCC	Villarica, Tolima	10/29/87	Paramilitares
554	Asesinato	Alfonso Perdomo Orjuela	Presidente Concejo Municipal de Vista Hermosa, dirigente agrario	Vista Hermosa, Meta	10/30/87	Paramilitares
555	Asesinato	Arnulfo Vargas Cuéllar	Vicepresidente del Concejo Municipal de El Castillo, Meta. Dirigente Agrario	Inspección Medellín del Ariari, Meta	11/2/87	Paramilitares
556	Asesinato	Orlando Arana	Militante	Mapiripán, Inspección municipio de San Martín, Guaviare	11/4/87	Policía
557	Asesinato	Alberto León Muñoz Lopera	Secretario de la UP de Medellín	Medellín, Antioquia	11/6/87	Paramilitares
558	Asesinato	Nelson Aranda	Militante	Mapiripán, Meta	**/11/87	Policía
559	Asesinato	Ebulio Díaz Gómez	Activista	Región de Canaletes, sitio la Ponderosa, Tierralta, Córdoba	**/11/87	Paramilitares
560	Asesinato	Óscar Moreno Díaz	Activista	Región de Canaletes, sitio la Ponderosa, Tierralta, Córdoba	**/11/87	Paramilitares
561	Desaparición	Jesús Aldemar Vélez Ramírez	Concejal de Vista Hermosa	Vista Hermosa, Meta	11/16/87	Ejército

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
562	Asesinato	Carlos Rodríguez Puy	Activista	Tunja, Boyacá	11/16/87	Sin datos
563	Asesinato	César Alfonso Rodríguez	Dirigente UP	Tunja, Boyacá	11/16/87	Paramilitares
564	Asesinato	Juan Carlos Vargas	Dirigente UP	Tunja, Boyacá	11/16/87	Paramilitares
565	Desaparición	Germán Emilio Torres	Escolta, activista	Corregimiento de Doradal, municipio Puerto Triunfo, Antioquia	11/22/87	Paramilitares
566	Desaparición	Wilson Mario Taborda	Chofer, activista	Corregimiento de Doradal, municipio Puerto Triunfo, Antioquia	11/23/87	Paramilitares
567	Masacre	María Concepción Bolívar	Dirigente JUCO	Calle 56 No. 49-70, Medellín, Antioquia	11/24/87	Paramilitares
568	Masacre	Pedro Francisco Sandoval	Dirigente JUCO	Calle 56 No. 49-70, Medellín, Antioquia	11/24/87	Paramilitares
569	Masacre	Irian Suaza	Dirigente JUCO	Calle 56 No. 49-70, Medellín, Antioquia	11/24/87	Paramilitares
570	Masacre	Luz Marina Ramírez	Dirigente JUCO	Calle 56 No. 49-70, Medellín, Antioquia	11/24/87	Paramilitares
571	Masacre	Orfelina Sánchez	Dirigente JUCO	Calle 56 No. 49-70, Medellín, Antioquia	11/24/87	Paramilitares
572	Masacre	Marlene Arango Rodríguez	Dirigente JUCO	Calle 56 No. 49-70, Medellín, Antioquia	11/24/87	Paramilitares
573	Asesinato	Froilán Arango	Concejal de San Rafael	San Rafael, Antioquia	11/28/87	Paramilitares
574	Asesinato	Argemiro Colorado	Candidato UP al Concejo de La Ceja, miembro de FENALTRACONCEM	La Ceja, Antioquia	12/3/87	Paramilitares
575	Asesinato	Francisco Eladio Gaviria Jaramillo	Periodista	Medellín, Antioquia	12/10/87	Paramilitares
576	Asesinato	Francisco Gaviria Trujillo	Dirigente UP	Medellín, Antioquia	12/10/87	Paramilitares
577	Asesinato	Alfa Luz Suárez Suárez	Tesorera Municipal de Maceo	Maceo, Antioquia	12/14/87	Paramilitares
578	Asesinato	Gabriel Jaime Santamaría	Segundo vicepresidente Asamblea de Antioquia, miembro Comité Central Partido Comunista Colombiano, miembro de ADE Antioquia y presidente UP	Antioquia	12/17/87	Paramilitares
579	Masacre	Pedro Julio Herrera Marín	Activista corregimiento de Tie, Urabá, Antioquia	Turbo, Antioquia	12/18/87	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
580	Masacre	Gabriel de Jesús Loaiza	Activista corregimiento de Tie, Urabá, Antioquia	Turbo, Antioquia	12/18/87	Paramilitares
581	Masacre	Roberto Luis Jiménez Murillo	Activista, corregimiento de Tie, Urabá, Antioquia	Turbo, Antioquia	12/18/87	Paramilitares
582	Masacre	Gustavo Ríos	Activista, corregimiento de Tie, Urabá, Antioquia	Turbo, Antioquia	12/18/87	Paramilitares
583	Masacre	Hugo Alberto García	Activista, corregimiento de Tie, Urabá, Antioquia	Turbo, Antioquia	12/18/87	Paramilitares
584	Asesinato	Jorge Emilio González	Activista Vista Hermosa	Vista Hermosa, Meta	12/22/87	Paramilitares
585	Asesinato	Hernando Prieto Martínez	Activista	Bogotá D. C.	12/28/87	Paramilitares
586	Asesinato	Marcelina Blandón Pérez	Activista	Apartadó, Antioquia	1/1/88	Paramilitares
587	Asesinato	Diego de la Hoz	Dirigente	Apartadó, Antioquia	1/7/88	Paramilitares
588	Desaparición	Olga Bernal	Educadora militante	Buenaventura, Valle del Cauca	1/7/88	Paramilitares
589	Asesinato	Arcesio Valencia	Diputado UP y concejal de Puerto Rico, Caquetá	Puerto Rico, Caquetá	1/9/88	Agente de Policía apodado “La Escoba”
590	Desaparición	Rosa Lemos	Dirigente UP	Montería, Córdoba	1/13/88	Paramilitares
591	Desaparición	Luis Lemos	Activista	Montería, Córdoba	1/13/88	Paramilitares
592	Desaparición	Zoraida Montoya	Activista	Montería, Córdoba	1/14/88	Paramilitares
593	Asesinato	Argemiro Correa	Dirigente sindical de SINTAGRO, Urabá, Antioquia	Urabá, Antioquia	1/15/88	Paramilitares
594	Desaparición	Carlos Yarce	Activista	Carretera de Remedios, Puerto Berrío, Antioquia	**/01/88	Paramilitares
595	Desaparición	Francisco Vargas	Activista	Carretera de Remedios, Puerto Berrío, Antioquia	**/01/88	Paramilitares
596	Asesinato	Néstor Rodríguez	Activista JUCO	No registra lugar	1/18/88	Paramilitares
597	Asesinato	Nohemí Laverde de Bernaza	Militante	Calamar, Guaviare	1/21/88	Paramilitares
598	Asesinato	Carlos Morales	Militante	Calamar, Guaviare	1/21/88	Ejército
599	Asesinato	José Onías Morales	Candidato Alcaldía San Martín, Meta	San Martín, Meta	1/23/88	Ejército
600	Asesinato	José Yesid Reyes	Alcalde de San José del Guaviare	Puerto Lleras, Meta	1/24/88	Paramilitares
601	Asesinato	Jesús Emilio Monsalve	Dirigente de Puerto Nare	Puerto Nare, Antioquia	1/25/88	Paramilitares
602	Masacre	Ramón Aníbal Díaz Carvajal	Presidente UP	Cúcuta, Norte de Santander	1/26/88	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
603	Masacre	Elia Cecilia Castro Parada	Personera de Convención, militante PCC	Cúcuta, Norte de Santander	1/26/88	Paramilitares
604	Masacre	Señora de Díaz Carvajal	Esposa de Aníbal Díaz Carvajal	Cúcuta, Norte de Santander	1/26/88	Paramilitares
605	Asesinato	Darío Gómez	Dirigente UP	Puerto Nare, Antioquia	1/27/88	Sicarios
606	Asesinato	Baltazar Dimas	Concejal de Planadas	Planadas, Tolima	1/30/88	Paramilitares
607	Asesinato	Juan de Dios Grisales Orrego	Simpatizante	Puerto Nare, Antioquia	2/1/88	Paramilitares
608	Asesinato	José Eleázar Toro	Candidato UP Concejo Remedios	Corregimiento La Cruzada, jurisdicción Remedios, Antioquia	2/1/88	Paramilitares
609	Asesinato	Jorge Toro	Candidato al Concejo	Segovia, Antioquia	2/1/88	Paramilitares
610	Asesinato	Mariela Guzmán Borja	Activista	Medellín, Antioquia	2/1/88	Paramilitares
611	Asesinato	Norman Vallejo Ramírez	Dirigente UP	Liborina, Antioquia	2/1/88	Paramilitares
612	Asesinato	José Héctor Leal Álvarez	Candidato al Concejo de Remedios	Remedios, Antioquia	2/4/88	Paramilitares
613	Asesinato	Gerardo Castaño	Dirigente UP	Corregimiento Reposo, Pueblo Nuevo, Córdoba	2/4/88	Paramilitares
614	Asesinato	Elkin de Jesús Moreno S.	Militante	Segovia, Antioquia	2/7/88	Paramilitares
615	Asesinato	Héctor Julio Mejía Velásquez	Dirigente de SUTIMAC, Puerto Nare, Antioquia	Puerto Nare, Antioquia	2/8/88	Paramilitares
616	Asesinato	Conrado Nicolás Saldarriaga	Concejal Necoclí	Necoclí, Antioquia	2/12/88	Paramilitares
617	Asesinato	Mercedes Aldana Troya	Candidata Concejo de Necoclí	Necoclí, Antioquia	2/13/88	Paramilitares
618	Asesinato	Alfonso Cujavante	Diputado Asamblea de Córdoba	Montería, Córdoba	2/15/88	Paramilitares
619	Asesinato	Leonidas Cuenca Parra	Candidato al Concejo de Granada,	Granada, Meta	2/16/88	Paramilitares
620	Asesinato	Misael Zambrano	Concejal de Vista Hermosa, transportador y militante	Vista Hermosa, Meta	2/17/88	Paramilitares
621	Asesinato	Hidelbrando Lora Giraldo	Concejal y coordinador en Carepa	Carepa, Urabá, Antioquia	2/17/88	Paramilitares
622	Asesinato	Hernán Serrano	Candidato al Concejo de Lebrija	Linderos municipio de Girón, Santander	2/18/88	Paramilitares
623	Desaparición	Tarcisio Medina	Estudiante activista JUCO	Neiva, Huila	2/18/88	Militares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
624	Asesinato	Rubiela David	Activista	Chigorodó, Urabá, Antioquia	2/20/88	Paramilitares
625	Masacre	Óscar Montoya	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/21/88	Paramilitares
626	Masacre	Orlando Gil	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/21/88	Paramilitares
627	Masacre	Ruth Prada Peña	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/21/88	Paramilitares
628	Masacre	Hoover Hernández	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/21/88	Paramilitares
629	Masacre	Hermes Garzón	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/21/88	Paramilitares
630	Masacre	Héctor Fabio Franco	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/21/88	Paramilitares
631	Masacre	Marco Fidel Ortiz	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/21/88	Paramilitares
632	Masacre	Edilberto Rodríguez	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/21/88	Paramilitares
633	Masacre	Ángel María Hurtado	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/21/88	Paramilitares
634	Masacre	Moisés Forero	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/21/88	Paramilitares
635	Masacre	James Emilio Zúñiga	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/21/88	Paramilitares
636	Masacre	Daniel Galindo	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/21/88	Paramilitares
637	Masacre	Gabriel Galindo	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/21/88	Paramilitares
638	Masacre	David Galeano	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/21/88	Paramilitares
639	Asesinato	Carlos Gónima López	Personero auxiliar de Medellín, militante PCC	Medellín, Antioquia	2/22/88	Paramilitares
640	Asesinato	Arturo Jaramillo	Dirigente UP	Sahagún, Córdoba	2/28/88	Paramilitares
641	Asesinato	Martha Vega Ramos	Activista	Vista Hermosa, Meta	3/1/88	Paramilitares
642	Asesinato	Benjamín Laguna	Activista	San José de Guaviare, Guaviare	3/4/88	Paramilitares
643	Asesinato	Aníbal Sierra Charris	Dirigente UP	Santa Marta, Rodadero, Magdalena	3/7/88	Paramilitares
644	Asesinato	Sergio Urrego	Activista	Barrancabermeja, Santander	3/9/88	Paramilitares
645	Asesinato	Guillermo Valencia	Activista	Barrancabermeja, Santander	3/9/88	Paramilitares
646	Asesinato	Rodrigo Hoyos	Activista	Barrancabermeja, Santander	3/16/88	Paramilitares
647	Asesinato	Francisco Betancur	Cooperativista militante	Yondó, Antioquia	**/03/88	Ejército
648	Asesinato	Gratiniano Moreno	Activista	Vereda La Isla, municipio El Castillo, Meta	**/03/88	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
649	Asesinato	Javier Amézquita	Activista JUCO	Corregimiento El Jardín, municipio Cáceres	3/19/88	Paramilitares
650	Asesinato	Marlene Caraballo	Niña de catorce años, dirigente JUCO de Córdoba	Vereda Laguneta, municipio San Carlos, Córdoba	3/20/88	Paramilitares
651	Asesinato	Argemiro Solarte	Auditor de la Contraloría General de la Nación y militante	Miraflores, Guaviare	3/24/88	Sicarios
652	Asesinato	Alejo Arango del Río	Concejal de San Rafael, Antioquia	San Rafael, Antioquia	3/25/88	Paramilitares
653	Asesinato	Lácides Tafur Bohórquez	Excalde y dirigente del municipio de Valencia	Valencia, Córdoba	3/30/88	Paramilitares
654	Asesinato	José del Carmen González	Concejal de Arauquita	Vereda La Esmeralda, municipio Arauquita, Arauca	4/2/88	Paramilitares
655	Asesinato	Luis Antonio Sierra Caballero	Activista	Barrancabermeja, Santander	4/5/88	Paramilitares
656	Asesinato	Mario Pulido	Militante	Villavicencio, Meta	4/7/88	Paramilitares
657	Asesinato	Rafael Monguí	Militante	Villavicencio, Meta	4/9/88	Paramilitares
658	Asesinato	Alfonso María Domínguez	Militante	Villavicencio, Meta	4/9/88	Paramilitares
659	Desaparición	Hernando Méndez Villarraga	Personero Municipal y Militante	Vía Puerto Gaitán, Puerto López, Meta	4/9/88	Paramilitares
660	Asesinato	Edison Álvarez Peñaranda	Profesor, simpatizante	Vereda Carrizal, N. Santander	4/9/88	Paramilitares
661	Asesinato	Giovani Portillo Moreno	Profesor, simpatizante	Vereda Carrizal, N. Santander	4/9/88	Paramilitares
662	Asesinato	Dagoberto Rubio	Militante	Villavicencio, Meta	4/9/88	Paramilitares
663	Asesinato	Ezequiel Astoiza	Concejal de La Macarena	La Macarena, Meta	4/10/88	Paramilitares
664	Asesinato	Ramiro Vargas Melibes	Militante	La Macarena, Meta	4/10/88	Sicarios
665	Masacre	Manuel Martínez	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
666	Masacre	Herminio Ballesteros	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
667	Masacre	Orlando Ballesteros	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
668	Masacre	Vallexto González	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
669	Masacre	Never López	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
670	Masacre	Edilberto Ávila	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
671	Masacre	Vallexto Herrera	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
672	Masacre	Bernardo Segura	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
673	Masacre	Gilberto Quintero	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
674	Masacre	Pablo Emilio Murillo	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
675	Masacre	Tirso Nel Garavito	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
676	Masacre	Francisco Yáñez	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
677	Masacre	Hermano de Francisco Yáñez	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
678	Masacre	Antonio Durango	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
679	Masacre	Leonardo Palacio	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
680	Masacre	Lucas Madarriaga	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
681	Masacre	Geiser Torres	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
682	Masacre	Milcíades Hurtado	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
683	Masacre	Menor de edad 1	Niño	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
684	Masacre	Menor de edad 2	Niño	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
685	Masacre	Campesino 1	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
686	Masacre	Campesino 2	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
687	Masacre	Campesino 3	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
688	Masacre	Campesino 4	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
689	Masacre	Campesino 5	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
690	Masacre	Campesino 6	Campesino afiliado a SINTAGRO y SINDEJORNALEROS	Corregimiento Nueva Colombia, municipio de Turbo, Antioquia	4/11/88	Paramilitares
691	Asesinato	Sildano Morales	Activista	Vereda Aguas Claras, Medellín del Ariari, Meta	4/12/88	Paramilitares
692	Asesinato	Baldomero Useche	Activista	Vereda Aguas Claras, Medellín del Ariari, Meta	4/12/88	Paramilitares
693	Masacre	Reyes Bautista	Activista	Corregimiento de Versalles, Tibú, Norte de Santander	4/13/88	Paramilitares
694	Masacre	Hermelina Galvis de Bautista	Activista	Corregimiento de Versalles, Tibú, Norte de Santander	4/13/88	Paramilitares
695	Masacre	Francisco Bautista	Activista	Corregimiento de Versalles, Tibú, Norte de Santander	4/13/88	Paramilitares
696	Asesinato	José Aristides Granja	Presidente JAC, vereda La India	Campo Capote, Corregimiento de Carare, Santander	4/14/88	Paramilitares del MAS
697	Asesinato	Jairo Humberto Rey Castell	Personero Puerto Gaitán	Puerto Gaitán, Meta	**/04/88	Paramilitares
698	Asesinato	Hugo Pérez	Simpatizante	Barrancabermeja, Santander	**/04/88	Sicarios

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
699	Asesinato	Nohemí Rua	Dirigente UP	Segovia, Antioquia	4/19/88	Paramilitares
700	Asesinato	Hernando Gutiérrez	Secretario general PCC Medellín	Medellín, Antioquia	4/22/88	Sicarios
701	Asesinato	Augusto Muñoz Castrillón	Simpatizante y presidente de la Subdirectiva del Sindicato de Caña de Azúcar	Cartago, Valle del Cauca	4/22/88	Sicarios
702	Asesinato	Rosa Margarita Daza Duque	Concejal de San Rafael	San Rafael, Antioquia	4/24/88	Paramilitares
703	Asesinato	Geovany Torres	Dirigente UP	San Rafael, Antioquia	4/24/88	Paramilitares
704	Asesinato	Dagoberto Sierra	Simpatizante	Maripí, Boyacá	4/24/88	Sicarios
705	Asesinato	Guillermo Ochoa	Educador simpatizante	Medellín, Antioquia	4/24/88	Sicarios
706	Asesinato	Rafael Duque Pérez	Maestro militante	Montería, Córdoba	4/27/88	Paramilitares
707	Asesinato	Orlando Manuel Colón	Maestro militante	Montería, Córdoba	4/27/88	Paramilitares
708	Asesinato	Luis Ramírez	Activista	Vereda Aguas Claras, Medellín del Ariari, Meta	4/28/88	Paramilitares
709	Asesinato	Nazario Díaz	Activista	Vereda Aguas Claras, Medellín del Ariari, Meta	4/28/88	Paramilitares
710	Desaparición	Carlos José Manchola	Estudiante activista JUCO	Neiva, Huila	4/28/88	Militares
711	Asesinato	Eliécer Hernández	Dirigente UP	Bajo Simacota, Santander	5/1/88	Batallón Luciano Dal'Huyer
712	Asesinato	Gustavo Samanai	Activista	Araucuita, Arauca	5/7/88	Sin datos
713	Asesinato	Elkin de Jesús Martínez Álvarez	Alcalde de Remedios	Remedios, Antioquia	5/16/88	Paramilitares
714	Masacre	Carlos Kovacs Baptiste	Presidente Asamblea del Meta, ex candidato Alcaldía Puerto Gaitán	Villavicencio, Meta	5/27/88	Paramilitares al servicio de Víctor Carranza
715	Masacre	Néstor Henry Rojas	Presidente Unión de Estudiantes	Villavicencio, Meta	5/27/88	Paramilitares al servicio de Víctor Carranza
716	Masacre	María Elena Ramos Sánchez	Personera de Vista Hermosa	Villavicencio, Meta	5/27/88	Paramilitares al servicio de Víctor Carranza
717	Masacre	José Antonio Rivera	Escolta	Villavicencio, Meta	5/27/88	Paramilitares al servicio de Víctor Carranza
718	Masacre	Martha Sánchez	Expersonera de Vista Hermosa, Simpatizante	Villavicencio, Meta	5/27/88	Paramilitares al servicio de Víctor Carranza
719	Asesinato	Fabriciano Vargas	Militante JUCO	Villavicencio, Meta	5/27/88	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
720	Asesinato	María Consuelo Güisao	Activista	Turbo, Urabá, Antioquia	5/30/88	Sin datos
721	Asesinato	Gilberto Vargas Pinto	Activista de Medellín del Ariari	Villavicencio, Meta	5/31/88	Paramilitares
722	Asesinato	Misael Monroy	Dirigente UP	Mutató, Urabá, Antioquia	5/31/88	Paramilitares
723	Asesinato	César Emilio Cuello	Comerciante simpatizante	El Retén, Aracataca, Magdalena,	5/31/88	Paramilitares
724	Desaparición	Enrique Bocanegra	Secretario de la UP	Caño Guaracú, San José del Guaviare	6/1/88	Ejército
725	Asesinato	Gregorio Mora	Educador militante	El Retén, Aracataca, Magdalena	6/1/88	Paramilitares
726	Asesinato	Leonel Malagón	Presidente Junta Patriótica El Caño, Arara	El Caño, Arara	**/06/88	Unidades del Ejército
727	Asesinato	Humberto Higuera Lancheros	Dirigente JUCO	Medellín, Antioquia	6/7/88	Paramilitares
728	Asesinato	Alonso Berrio	Activista	Barrancabermeja, Santander	6/7/88	Paramilitares
729	Asesinato	José Ulpiano Díaz	Militante JUCO, hijo de concejal UP	Vista Hermosa, Meta	6/16/88	Paramilitares
730	Masacre	Alfonso Herreño	Simpatizante	Barrancabermeja, Santander	**/06/88	Paramilitares
731	Masacre	Celina Plata de Herreño	Simpatizante	Barrancabermeja, Santander	**/06/88	Paramilitares
732	Masacre	Aníbal Muñoz Henao	Simpatizante	Barrancabermeja, Santander	**/06/88	Paramilitares
733	Masacre	Luis Espinel	Simpatizante	Barrancabermeja, Santander	**/06/88	Paramilitares
734	Asesinato	Humberto Santana Tovar	Concejal UP de Rivera, presidente Junta Patriótica y miembro del Comité Regional del PCC	Rivera, Huila	6/25/88	Sicarios
735	Asesinato	Fidel Cortés	Concejal UP, Riosucio, Chocó	Riosucio, Chocó	7/1/88	Paramilitares
736	Asesinato	Ángel Ricardo Garzón	Campesino, Miembro Comité Regional PCC Guaviare	Villavicencio, Meta	7/7/88	Paramilitares
737	Asesinato	Carlos Alarcón	Dirigente agrario	Vista Hermosa, Meta	7/10/88	Paramilitares
738	Asesinato	Jorge Salgado	Dirigente UP	Puerto Rico, Caquetá	7/12/88	Paramilitares
739	Asesinato	Ángela Hernández Cifuentes	Dirigente UP	Villavicencio, Meta	7/18/88	Sin datos

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
740	Desaparición	Marco Tulio Úsuga	Militante PCC y UP	Ciénaga, Magdalena	7/19/88	Paramilitares
741	Desaparición	Cayetano Alberto Elías Úsuga	Militante PCC y UP	Ciénaga, Magdalena	7/19/88	Paramilitares
742	Asesinato	Ángel María Hernández Cifuentes	Fiscal departamental de la UP	Villavicencio, Meta	7/20/88	Paramilitares
743	Asesinato	N. de Hernández, esposa de Ángel María Hernández C.	Militante	Villavicencio, Meta	7/20/88	Paramilitares
744	Masacre	Ramón Restrepo Hernández	Dirigente UP	Medellín, Antioquia	7/24/88	Paramilitares
745	Masacre	Guillermo Osorio Gallo	Simpatizante	Medellín, Antioquia	7/24/88	Paramilitares
746	Masacre	Óscar Restrepo Cano	Simpatizante	Medellín, Antioquia	7/24/88	Paramilitares
747	Asesinato	Carlos García	Dirigente agrario militante	Vista Hermosa, Meta	7/24/88	Paramilitares
748	Asesinato	Alirio Zaraza Martínez	Dirigente comunista	Bucaramanga, Santander	7/29/88	Paramilitares
749	Asesinato	Delio Franco	Dirigente agrario, militante	Vista Hermosa, Meta	7/29/88	Paramilitares
750	Asesinato	Luz Marina Arroyave Bonilla	Activista	Vista Hermosa, Meta	7/31/88	Paramilitares
751	Asesinato	Alberto González	Militante	Medellín del Ariari, Meta	8/1/88	Miembros del Ejército
752	Asesinato	Luis Augusto Bonilla	Miembro de Coordinadora Departamental UP, impulsor del Sindicato Trabajadores de UNIPALMA	Cumaral, Meta	8/3/88	Paramilitares
753	Asesinato	Eusebio Toro	Dirigente UP	Vereda Combia, Pereira, Risaralda	8/4/88	Policía
754	Asesinato	Roger Humberto Correa	Dirigente JUCO	Medellín, Antioquia	8/5/88	Paramilitares
755	Desaparición	Javier Castillo Castillo	Diputado Asamblea del Cauca	Municipio de Miranda, Cauca	8/10/88	Paramilitares
756	Masacre	Pedro Antonio Zambrano	Campesino, militante	Vista Hermosa, Meta	8/12/88	Paramilitares
757	Masacre	Carlos Oswaldo Sánchez Zambrano	Campesino militante	Vista Hermosa, Meta	8/12/88	Paramilitares
758	Masacre	Alicia Ospina Martínez	Campesino militante	Vista Hermosa, Meta	8/12/88	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
759	Masacre	Carlos Calixto Flórez	Campesino militante	Vista Hermosa, Meta	8/12/88	Paramilitares
760	Asesinato	Hernán Toro Ceballos	Concejal de Chinchiná	Chinchiná, Caldas	8/16/88	Paramilitares
761	Asesinato	Jorge Edgar Carvajal Jiménez	Concejal UP, presidente Concejo Municipal, Mutatá	Medellín, Antioquia	8/17/88	Paramilitares
762	Asesinato	Juan de Dios López Rueda	Comerciante activista	Medellín, Antioquia	8/17/88	Paramilitares
763	Asesinato	Pascual Porras García	Concejal de Rionegro y dirigente	Rionegro, Santander	2/25/88	Paramilitares
764	Asesinato	Uriel Herrera Hernández	Dirigente UP	Lebrija, Santander	8/25/88	Paramilitares
765	Asesinato	León de Jesús Cardona Isaza	Exconcejal de la UP y presidente de SUTIMAC	Medellín, Antioquia	8/30/88	Paramilitares
766	Asesinato	Wilson Rodríguez Arenas	Activista JUCO	El Castillo, Meta	9/4/88	Paramilitares
767	Asesinato	Wilmer Hernández Mahecha	Activista JUCO	El Castillo, Meta	9/4/88	Paramilitares
768	Asesinato	Julio Cañón López	Alcalde de Vista Hermosa	Vista Hermosa, Meta	9/4/88	DAS
769	Asesinato	Enrique Ramírez Casallas	Campesino finca Potosí acusado de ser guerrillero por Luis Eduardo Guarnizo y Víctor Carranza; fue asesinado y enterrado en fosa común por alias "Gorra Negra" y "Patedanta". El cuerpo se halló el 7/4/89	Finca La Sesenta, Puerto López, Meta	9/12/88	Paramilitares
770	Asesinato	Manuel Ramírez Casallas	Administrador finca Potosí acusado de ser guerrillero por Luis Eduardo Guarnizo a Víctor Carranza; fue asesinado y enterrado en fosa común por alias "Gorra Negra" y "Patedanta". El cuerpo se halló el 7/4/89	Finca La Sesenta, Puerto López, Meta	9/12/88	Paramilitares
771	Asesinato	Salvador Bocanegra	Dirigente	Caño Guaracú, San José del Guaviare	**/09/88	Ejército
772	Asesinato	Hipólito Niño	Activista	Bucaramanga, Santander	9/20/88	Paramilitares
773	Asesinato	Nicolás Roa	Militante	Puerto Alvira, Mapiripán, Meta	9/20/88	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
774	Asesinato	Honorio Rúa Rojas	Concejal vicepresidente del Concejo Municipal de Tarazá	Tarazá, Antioquia	9/21/88	Paramilitares
775	Asesinato	Luciano Velásquez	Suplente del vicepresidente del Concejo Tarazá	Tarazá, Antioquia	9/21/88	Paramilitares
776	Asesinato	Carlos Augusto Lucas	Presidente JAC	Tarazá, Antioquia	9/21/88	Paramilitares
777	Masacre	María Luisa Vásquez	Activista	Vista Hermosa, Meta	10/2/88	Paramilitares
778	Masacre	Marcos Martínez	Activista	Vista Hermosa, Meta	10/2/88	Paramilitares
779	Masacre	Luisa Velasco	Activista	Vista Hermosa, Meta	10/2/88	Paramilitares
780	Asesinato	Diana Patricia Morales Sandoval	Activista	Colosó, Sucre	10/5/88	Sin datos
781	Asesinato	Carlos Evelio Conda	Concejal de Puerto Rico	Puerto Rico, Caquetá	10/15/88	Paramilitares
782	Asesinato	Electo Flórez Banquet	Concejal de Carepa	Carepa, Urabá, Antioquia	10/15/88	Paramilitares
783	Asesinato	Roque Julio Ruiz	Concejal de Arauquita	Arauquita, Arauca	10/15/88	Paramilitares
784	Asesinato	Yenny Adriana Cote Barbosa	Simpatizante	Barrancabermeja, Santander	10/19/88	Sin datos
785	Asesinato	Hermelinda López	Dirigente de la UP, militante del PCC	Campo Capote, Corregimiento de Carare, Santander	10/20/88	Paramilitares
786	Asesinato	Alba Eniz Ariza	Dirigente JUCO en Mesetas	Cubarral, Meta	10/23/88	Paramilitares
787	Asesinato	William Barón Díaz	Dirigente de la UP	Honda, Tolima	10/30/88	Paramilitares
788	Asesinato	Arturo Rivera	Concejal de Paujil	Paujil, Caquetá	10/30/88	Paramilitares
789	Asesinato	Alfonso Meneses	Presidente del Concejo de Medellín del Ariari, director del noticiero Voz de Medellín del Ariari, militante	Medellín del Ariari, Meta	11/1/88	Sicarios
790	Asesinato	Luz León	Concejal de El Castillo, Meta	El Castillo, Meta	11/4/88	Paramilitares
791	Asesinato	Zenón Hernández	Militante	El Castillo, Meta	11/5/88	Paramilitares
792	Asesinato	Parménides Cuenca	Militante	El Castillo, Meta	11/5/88	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
793	Masacre	Pedro Ortegón Pinilla	Declaró ante una comisión de Pax Cristi y Parlamento Europeo sobre crímenes cometidos por la VII Brigada, militante del Partido Comunista y UP	Vía Granada, El Castillo, Meta	11/6/88	Paramilitares
794	Masacre	Rafael García Ricardi	Hijo de concejal UP, militante del Partido Comunista y UP	Vía Granada El Castillo, Meta	11/6/88	Paramilitares
795	Masacre	José Delio Orjuela	Militante del Partido Comunista y UP	Vía Granada El Castillo, Meta	11/6/88	Paramilitares
796	Masacre	Erminson Céspedes Pérez	Militante del Partido Comunista y UP	Vía Granada El Castillo, Meta	11/6/88	Paramilitares
797	Masacre	Ramón Donato	Militante del Partido Comunista y UP	Vía Granada El Castillo, Meta	11/6/88	Paramilitares
798	Asesinato	Álvaro Fernández Pinzón	Dirigente UP	Medellín, Antioquia	11/10/88	Paramilitares
799	Asesinato	Oswaldo Regino Pérez	Periodista, corresponsal del periódico Voz	Vía Montería, Planeta Rica, Córdoba	11/11/88	Paramilitares
800	Masacre	Pablo Emilio Gómez Chaverra	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
801	Masacre	María del Carmen Idárraga de Gómez	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
802	Masacre	Luis Eduardo Sierra	Mecánico conocido como “Saino”, días atrás fue amenazado y señalado como auxiliador de la guerrilla por el Ejército, en allanamiento de su vivienda dirigido por el teniente Edgardo Hernández	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
803	Masacre	Jesús Antonio García	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
804	Masacre	María Dolly Bustamante	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
805	Masacre	Diana María Vélez	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
806	Masacre	Carlos Enrique Restrepo Pérez	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
807	Masacre	Carlos Enrique Restrepo Cadavid	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
808	Masacre	Eduardo Antonio Restrepo Cadavid	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
809	Masacre	Luis Eduardo Hincapié	Minero	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
810	Masacre	Julio de Jesús Sierra Gómez	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
811	Masacre	Luis Adalberto Lozano Ruiz	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
812	Masacre	Jesús Emilio Calle Guerra	Despachador de vehículos de servicio público	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
813	Masacre	Robinson de Jesús Mejía Arenas	Vendedor de rifas	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
814	Masacre	Fabio Jaramillo	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
815	Masacre	Jesús Orlando Vásquez Zapata	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
816	Masacre	Roberto Antonio Marín Osorio	Celador de la empresa Frontino Gold Mines, simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
817	Masacre	Pablo Emilio Idárraga Osorio	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
818	Masacre	Luz Idalia Orozco Saldarriaga	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
819	Masacre	Rosa Angélica Mazo	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
820	Masacre	Apango William B. Escudero	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
821	Masacre	Jorge Luis Puerta Londoño	Secretario del Juzgado de Instrucción Criminal de la población, simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
822	Masacre	Libardo Antonio Cataño Atehortúa	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
823	Masacre	Guillermo de Jesús Ariza Arcila	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
824	Masacre	Jesús Aníbal Gómez García	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
825	Masacre	Julio Martín Flórez Ortiz	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
826	Masacre	Regina del Socorro Muñoz de Mestre	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
827	Masacre	Jairo de Jesús Rodríguez Pardo	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
828	Masacre	Jesús Danilo Amariles Casallas	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
829	Masacre	Henry Albeiro Castrillón	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
830	Masacre	José Abelardo Osorio Betancur	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
831	Masacre	Óscar de Jesús Agudelo López	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
832	Masacre	Shirley Cataño Patiño	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
833	Masacre	Erika Milena Marulanda	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
834	Masacre	Francisco William Gómez Monsalve	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
835	Masacre	Luis Ángel de Jesús Moreno Sanmartín	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
836	Masacre	Jesús Eduardo Hernández Sierra	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
837	Masacre	Guillermo Orozco Escudero	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
838	Masacre	Juan de Dios Palacio	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
839	Masacre	José Abelardo Madrid	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
840	Masacre	Olga Agudelo de Barrientos	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
841	Masacre	Jesús Antonio Benítez	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
842	Masacre	José Antonio Marulanda	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/11/88	Paramilitares
843	Asesinato	Mario Cuartas González	Dirigente regional, exalcalde y exconcejal de Yondó, Antioquia	Itagüí, Antioquia	11/14/88	Paramilitares
844	Asesinato	Félix Antonio Villalba Sanabria	Concejal de El Castillo, Meta	Inspección de Policía Puerto Esperanza, El Castillo, Meta	11/16/88	Paramilitares
845	Asesinato	María Inés Quina de Suns	Activista	La Plata, Huila	11/17/88	Sin datos
846	Asesinato	María Oliva Suns Quina	Activista	La Plata, Huila	11/17/88	Sin datos
847	Asesinato	Eduardo Benítez	Activista	Cimitarra, Santander	11/27/88	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
848	Asesinato	José Vicente Caro Vanegas	Coordinador UP de Barbosa	Barbosa, Santander	11/27/88	Paramilitares
849	Asesinato	Manuel Álvaro Fernández Pinzón	Dirigente UP	Medellín, Antioquia	11/30/88	Paramilitares
850	Asesinato	José Antonio Agudelo	Activista	Puerto Valdivia, Antioquia	12/4/88	Paramilitares
851	Asesinato	Orlando de Jesús Pérez Gallego	Activista	Puerto Valdivia, Antioquia	12/4/88	Paramilitares
852	Asesinato	Enrique Meza Sepúlveda	Coordinador UP de Santander	Barranquilla, Atlántico	12/9/88	Paramilitares
853	Masacre	Ramiro Fierro	Activista	Algeciras, Huila	12/12/88	Paramilitares
854	Masacre	Humberto Santana	Activista	Algeciras, Huila	12/12/88	Paramilitares
855	Masacre	Apolinar Vásquez	Activista	Algeciras, Huila	12/12/88	Paramilitares
856	Asesinato	Wilson Ulcué Valencia	Dirigente PCC	Florida, Valle del Cauca	12/12/88	Paramilitares
857	Asesinato	Lino Andrés González	Dirigente UP	Montería, Córdoba	12/28/88	Paramilitares
858	Masacre	Euclides Guerrero	Militante, asesinado en su casa junto a dos de sus hermanos	Rionegro, Santander	12/30/88	Paramilitares
859	Masacre	Mario Guerrero	Militante, asesinado en su casa junto a dos de sus hermanos	Rionegro, Santander	12/30/88	Paramilitares
860	Masacre	Alfonso Guerrero	Militante, asesinado en su casa junto a dos de sus hermanos	Rionegro, Santander	12/30/88	Paramilitares
861	Asesinato	Floresmiro Peña	Activista	Resguardo indígena de Tumburao, Cauca	12/31/88	Paramilitares
862	Asesinato	Manuel Guesaquillo	Activista	Resguardo indígena de Tumburao, Cauca	12/31/88	Paramilitares
863	Asesinato	Diego Rodríguez	Activista UP, dirigente comunal	Barrancabermeja, Santander	12/31/88	Paramilitares
864	Asesinato	Francisco de Paula Pérez Castrillón	Militante	Medellín, Antioquia	1/1/89	Paramilitares
865	Asesinato	Nohora López Pulgarín	Dirigente JUCO	Granada, Meta	1/1/89	Paramilitares
866	Asesinato	Fermín Meléndez	Dirigente sindical de Sucre	Tolú, Sucre	1/2/89	Paramilitares
867	Asesinato	Jesús Antonio Martínez Moreno	Dirigente UP	Carmen de Viboral, Antioquia	1/2/89	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
868	Asesinato	Isaac Giraldo	Concejal de Lejanías	Zona rural de Lejanías, Meta	1/3/89	Paramilitares
869	Asesinato	Juan de Dios Arias	Activista	Ibagué, Tolima	1/3/89	Paramilitares
870	Desaparición	Baldomero Quintero	Militante JUCO	Vereda San Pedro, Granada, Meta	1/3/89	Unidades del Batallón Albán
871	Desaparición	Hernán Jiménez	Militante JUCO	Vereda San Pedro, Granada, Meta	1/3/89	Unidades del Batallón Albán
872	Asesinato	Honorio Sánchez	Concejal de Lejanías	Zona rural de Lejanías, Meta	1/4/89	Paramilitares
873	Masacre	Darío Agudelo Agudelo	Campesino militante	Puerto López, Meta	1/4/89	Paramilitares
874	Masacre	Gonzalo Atehortúa Vélez	Campesino militante	Puerto López, Meta	1/4/89	Paramilitares
875	Masacre	Arley Saldarriaga	Campesino militante	Puerto López, Meta	1/4/89	Paramilitares
876	Masacre	Luis Aníbal Galeano	Campesino militante	Puerto López, Meta	1/4/89	Paramilitares
877	Asesinato	Rubén Darío Montero	Campesino militante	Atanques, Cesar	1/5/89	Paramilitares
878	Asesinato	Carlos Julio Torres	Militante	Paujil, Caquetá	1/5/89	Paramilitares
879	Asesinato	Gildardo Castaño O.	Concejal de Pereira por la UP	Pereira, Risaralda	1/6/89	Paramilitares
880	Asesinato	Próspero Pinzón	Activista	Quinchía, Risaralda	1/6/89	Paramilitares
881	Asesinato	Alexander Hernández Cadavid	Activista	Dos Quebradas, Risaralda	1/7/89	Paramilitares
882	Asesinato	José Armando Arciniegas Teherán	Militante	Puerto López, Meta	1/10/89	Paramilitares de Carranza
883	Desaparición	Vladimir Cañón Trujillo	Militante	Granada, Meta	1/11/89	Paramilitares
884	Desaparición	Jimmer Arley Neiva	Militante	Granada, Meta	1/11/89	Paramilitares
885	Asesinato	Gerardo Cañón Trujillo	Militante JUCO	Vista Hermosa, Meta	1/11/89	Paramilitares
886	Asesinato	Alfonso García Cano	Simpatizante	Medellín, Antioquia	1/12/89	Paramilitares
887	Asesinato	Nohora López de Sánchez	Militante JUCO	Granada, Región del Ariari, Meta	1/12/89	Paramilitares
888	Asesinato	José María Davis	Militante	Vereda El Pomo, municipio El Cerrito, Valle del Cauca	1/13/89	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
889	Asesinato	Fidel Velásquez	Exconcejal UP de Mutatá, Antioquia	Corregimiento de Pabarandó, Mutatá, Antioquia	1/15/89	Paramilitares
890	Asesinato	Áudicel Guerra	Militante	Mariquita, Tolima	1/15/89	Paramilitares
891	Asesinato	Ricaurte López	Militante	Mariquita, Tolima	1/15/89	Paramilitares
892	Asesinato	Jesús Eduardo Erazo	Militante	Puerto Asís, Putumayo	1/18/89	Paramilitares
893	Asesinato	Ricaurte Ocampo Cardona	Militante	Marsella, Risaralda	1/20/89	Paramilitares
894	Asesinato	Jorge Martínez Acevedo	Dirigente UP	Marsella, Risaralda	1/22/89	Paramilitares
895	Asesinato	Pedro Nel Arroyave	Militante	Choachí, Cundinamarca	1/25/89	Paramilitares
896	Asesinato	Isaías Suescún	Militante	Magdalena Medio	2/1/89	Paramilitares
897	Asesinato	Juvenal Aníbal Cabezas Cortés	Educador y militante Miembro de ADEG	San José del Guaviare, Guaviare	2/1/87	Paramilitares
898	Asesinato	José Joaquín Mercado	Militante	Apartadó, Antioquia	2/2/89	Paramilitares
899	Asesinato	José Guillermo Chivatá	Exconcejal UP, Choachí	Choachí, Cundinamarca	2/6/89	Paramilitares
900	Asesinato	Julio Ortiz	Activista	Puerto Asís, Putumayo, Putumayo	2/10/89	Paramilitares
901	Asesinato	Pablo Casallas Trujillo	Dirigente UP	Corregimiento de San Rafael, municipio Rionegro, Santander	2/11/89	Paramilitares
902	Asesinato	Francisco Dumar Maestra	Fiscal de FETRACOR filial de la CUT, candidato Asamblea por la UP	Montería, Córdoba	2/13/89	Paramilitares
903	Asesinato	Emilio Alfonso Huertas	Campesino	Vista Hermosa, Meta	2/16/89	Paramilitares
904	Asesinato	Rigoberto Torres	Activista	Puerto Asís, Putumayo, Putumayo	2/17/89	Paramilitares
905	Asesinato	Jorge Pacheco	Dirigente UP	Vista Hermosa, Meta	2/20/89	Paramilitares
906	Asesinato	Gladys Naranjo Trujillo	Militante	Remedios, Antioquia	2/21/89	Paramilitares
907	Asesinato	Jorge E. Agudelo Bermúdez	Activista	Palmira, Valle del Cauca	2/23/89	Paramilitares
908	Asesinato	Luis Eduardo Yaya Crisancho	Exconcejal de Villavicencio, exdiputado Asamblea Departamental, dirigente FESTRAM, presidente CUT, Meta	Villavicencio, Meta	2/23/89	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
909	Asesinato	Camilo Alfonso Ballesteros	Activista	Vista Hermosa, Meta	2/26/89	Paramilitares
910	Asesinato	Antonio Peña Fonseca	Activista	Vista Hermosa, Meta	2/26/89	Paramilitares
911	Masacre	Teófilo Forero Castro	Secretario de Organización del PC, Miembro del CC del PC	Bogotá D. C.	2/27/89	Paramilitares
912	Masacre	Leonilde Mora de Forero	Esposa de Teófilo Forero, militante	Bogotá D. C.	2/27/89	Paramilitares
913	Masacre	José Antonio Sotelo	Dirigente UP	Bogotá D. C.	2/27/89	Paramilitares
914	Masacre	José Antonio Toscano	Dirigente UP	Bogotá D. C.	2/27/89	Paramilitares
915	Asesinato	José Antequera Antequera	Dirigente Nacional UP	Bogotá D. C.	3/3/89	Paramilitares
916	Asesinato	Jorge Luis Garcés Castillo	Dirigente sindical magisterio y coordinador UP	Mistrató, Risaralda	3/12/89	Paramilitares
917	Asesinato	Vicente Quinche	Activista	Bogotá D. C.	3/16/89	Paramilitares
918	Asesinato	José María Castro	Campesino, dirigente Sindicato Agrícola de Arjona, vicepresidente seccional sur de Bolívar CUT	Cartagena, Bolívar	3/19/89	Paramilitares
919	Asesinato	Luis Alberto Moreno Santos	Militante del PCC	Vereda Las Ánimas, corregimiento Nazaret, Bogotá D. C.	3/22/89	F2
920	Asesinato	Luis Alberto Nova Meneses	Concejal Simití, Bolívar	Corregimiento San Blas, Simití, Santander,	3/22/89	Paramilitares
921	Asesinato	Gilberto Aguiar Carrillo	Activista	Vereda Los Naranjos, municipio Ortega, Tolima	4/2/89	Paramilitares
922	Asesinato	Norberto Garzón	Concejal de El Castillo, Meta	Bogotá D. C.	4/4/89	Paramilitares
923	Asesinato	Luis Alberto Cardona Mejía	Economista, presidente UP Chinchiná, Caldas	Santa Rosa de Cabal, Caldas	4/4/89	Paramilitares
924	Asesinato	Janneth Oliveros	Economista, presidente UP	Santa Rosa de Cabal, Caldas	4/4/89	Paramilitares
925	Asesinato	Édison Pacheco	Concejal de Cereté, dirigente sindical	Cereté, Córdoba	4/6/89	Paramilitares
926	Asesinato	Gilberto Valencia Loaiza	Dirigente UP	Medellín, Antioquia	4/8/89	Paramilitares
927	Masacre	Euclides Aranguren	Dirigente comunal	Alto Quebradón, San Vicente del Caguán, Caquetá	4/21/89	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
928	Masacre	Melesio Castañeda	Militante	Alto Quebradón, San Vicente del Caguán, Caquetá	4/21/89	Paramilitares
929	Masacre	Miller Vanegas	Militante	Alto Quebradón, San Vicente del Caguán, Caquetá	4/21/89	Paramilitares
930	Asesinato	Jacinto Osorio Guzmán	Activista	Inspección Aguililla, Puerto Rico, Caquetá	4/22/89	Paramilitares
931	Asesinato	Gustavo Peláez	Dirigente	Medellín, Antioquia	4/24/89	Paramilitares
932	Asesinato	Jairo Gómez Gil	Secretario CR-PCC, Meta	Villavicencio, Meta	4/27/89	Paramilitares
933	Asesinato	Jairo Cruz Gil	Estudiante militante del PCC y tesorero de la UP	Villavicencio, Meta	4/27/89	Paramilitares
934	Asesinato	Rafael Antonio Agudelo Moreno	Dirigente UP	Finca el Caracolí, inspección Cacayal, Lejanías, Meta	4/28/89	Policía
935	Asesinato	Luis Antonio Peña	Campesino	Vista Hermosa, Meta	4/29/89	Paramilitares
936	Asesinato	Nelson Pineda Santamaría	Inspector de Policía	Vista Hermosa, Meta	5/2/89	Paramilitares
937	Asesinato	Libardo Antonio Rengifo	Concejal Palestina, Huila,	Palestina, Huila	5/4/89	Paramilitares
938	Asesinato	Humberto Blanco	Dirigente sindical del magisterio y UP	El Plato, Magdalena	5/17/89	Paramilitares
939	Asesinato	Clemente Daza Ramírez	Activista	Nuevo Colón, Cesar	5/21/89	Paramilitares
940	Asesinato	Héctor Bohórquez	Campesino militante	Vista Hermosa, Meta	5/29/89	Paramilitares
941	Asesinato	Orlando Higuita	Miembro del CC del PCC, exconcejal de Barranca	Barrancabermeja, Santander	6/2/89	Paramilitares
942	Asesinato	Israel Villamarín	Activista	Quimbaya, Quindío	6/11/89	Paramilitares
943	Asesinato	Alejandro Cárdenas Villa	Alcalde de Mutatá	Medellín, Antioquia	6/28/89	Paramilitares
944	Asesinato	Evelino José Solano	Militante	San Martín, Meta	6/28/89	Paramilitares
945	Asesinato	Samuel Serrano	Simpatizante	Fundación, Magdalena	**/07/89	Paramilitares
946	Asesinato	Adelmo Carvajal	Concejal de Segovia, Antioquia	Medellín, Antioquia	7/24/89	Paramilitares
947	Asesinato	Carlos Enrique Alcaraz	Militante	Inspección Puerto Caldas, Meta	7/25/89	Sicarios
948	Asesinato	Reynaldo A. González Ruiz	Concejal de Granada, Meta	Granada, Meta	7/27/89	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
949	Asesinato	Samuel Serrano Meneses	Concejal, empleado Empresa Metálicas Modernas	Granada, Meta	7/27/89	Paramilitares
950	Asesinato	Henry Cuenca	Presidente de FENALTRACONCEM y dirigente de la CUT	Bogotá D. C.	7/30/89	Paramilitares
951	Asesinato	Jorge González	Dirigente UP	Villavicencio, Meta	8/1/89	Paramilitares
952	Asesinato	Luis Alberto Gaitán	Fiscal JAC Verdea Puerto Gaitán, Meta y Militante UP	Zona rural de San Juan de Arama, Meta	8/2/89	Paramilitares
953	Asesinato	Abelardo Daza	Abogado y dirigente UP	Bogotá D. C.	8/2/89	Paramilitares
954	Asesinato	Gustavo Guerra Doria	Coordinador UP de Montería	Montería, Córdoba	8/3/89	Paramilitares
955	Asesinato	Armando Calle	Dirigente sindical ACEB	Medellín, Antioquia	8/16/89	Paramilitares
956	Asesinato	Guillermo Callejas	Dirigente UP	Medellín, Antioquia	8/18/89	Paramilitares
957	Asesinato	Orlando Roa	Dirigente sindical	Bucaramanga, Santander	8/20/89	Paramilitares
958	Asesinato	Sebastián Mosquera	Dirigente sindical	Apartadó, Antioquia	9/8/89	Paramilitares
959	Asesinato	Jesús Moreno	Dirigente UP	Calamar, Meta	9/9/89	Ejército
960	Asesinato	José del Carmen Peñaloza	Miembro de la Coordinadora Intendencial de Casanare	Paz de Ariporo, Casanare	9/29/89	Paramilitares
961	Asesinato	Roberto Contreras	Exconcejal de la UP y candidato listas Alcaldía del FP	La Gabarra, municipio de Tibú, Norte de Santander	10/4/89	Sicarios
962	Asesinato	Gloria Vásquez Velásquez	Concejal de Segovia	Segovia, Antioquia	10/6/89	Paramilitares
963	Asesinato	Enoc Campo	Concejal de Apartadó, Antioquia	Apartadó, Antioquia	10/21/89	Paramilitares
964	Asesinato	Alberto López	Dirigente PC	Apartadó, Antioquia	10/21/89	Paramilitares
965	Asesinato	Fabio Roa	Excandidato de coalición de ocho movimientos incluída la UP, a la Alcaldía de Puerto López, Meta	Puerto López, Meta	10/31/89	Paramilitares
966	Asesinato	Adolfo Murcia	Dirigente UP	Villavicencio, Meta	11/1/89	Paramilitares
967	Asesinato	Jacobo Beltrán	Militante	San Juan de Arama, Meta	11/6/89	Paramilitares
968	Asesinato	Rubén Darío Fernández	Concejal de Santander de Quilichao	Santander de Quilichao, Cauca	11/7/89	Paramilitares
969	Asesinato	José Reutilio Moreno	Dirigente del PCC y UP	San Juan de Arama, Meta	11/8/89	Paramilitares
970	Asesinato	Eliécer Cárdenas	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/16/89	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
971	Asesinato	Tomás Valencia, Córdoba	Simpatizante	Segovia, Antioquia	11/17/89	Paramilitares
972	Asesinato	Rafael Díaz Tirado	Candidato Alcaldía Puerto Libertador, Córdoba	Puerto Libertadores, Córdoba	11/17/89	Paramilitares
973	Asesinato	Leoncio Ayala	Concejal UP de Corinto	Corinto, Cauca	11/18/89	Paramilitares
974	Asesinato	Marco Tulio Luján	Dirigente UP	Segovia, Antioquia	11/18/89	Paramilitares
975	Asesinato	María de Jesús Neira	Educadora militante	Guamal, Meta	11/23/89	Paramilitares
976	Asesinato	Alfonso Morales	Concejal de San Bernardo	San Bernardo, Cundinamarca	11/27/89	Paramilitares
977	Asesinato	Boris Zapata Meza	Antropólogo, catedrático universitario, candidato UP Concejo Montería	Montería, Córdoba	11/28/89	Paramilitares
978	Asesinato	Heriberto Orjuela	Dirigente JUCO Vista Hermosa	Mapiripán, Meta	11/28/89	Paramilitares
979	Asesinato	Raúl Andrade Chaparro	Médico militante PCC	El Sarare de Saravena, Arauca	12/7/89	Paramilitares
980	Asesinato	Isaac Gilberto Patiño	Médico militante PCC	El Sarare de Saravena, Arauca	12/7/89	Paramilitares
981	Asesinato	Leoncia Morales	Dirigente UP	Saravena, Arauca	12/7/89	Paramilitares
982	Asesinato	Ernesto Susa Micán	Militante PCC	Pulí, Cundinamarca	**/12/89	Paramilitares
983	Asesinato	Pedro Góngora Chamorro	Dirigente agrario, candidato UP al Concejo, municipio Carmen de Bolívar	Carmen de Bolívar, Cesar	12/22/89	Paramilitares
984	Asesinato	Ramón Emilio Arcila Hurtado	Candidato a la Alcaldía de Marinilla	Marinilla, Antioquia	12/29/89	Paramilitares
985	Asesinato	María Diomedes López de Muñoz	Militante	Sitio de Campo Alegre, Vista Hermosa, Meta	1/6/90	Sin datos
986	Asesinato	Candelario Pérez	Expresidente y secretario por la UP del Concejo Municipal de Turbo, Antioquia	Turbo, Antioquia	1/7/90	Paramilitares
987	Desaparición	Benedicto Burbano	Presidente ANUC	Pitalito, Huila	1/11/90	Paramilitares
988	Asesinato	Eugenio Rodríguez	Candidato coalición FP-UP cabildos Puerto Libertadores y Momil	Puerto Libertadores y Momil, Córdoba	1/13/90	Paramilitares
989	Asesinato	Luis Lyons	Concejal suplente de la UP coalición FP-UP cabildos Puerto Libertadores y Momil	Puerto Libertadores y Momil, Córdoba	1/17/90	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
990	Asesinato	Vladimiro Escobar	Exconcejal de Soacha, líder UP	Bogotá D. C.	1/20/90	Paramilitares
991	Asesinato	Jesús Alfredo Amaya Ancisa	Concejal UP de San Calixto y Acarí	Norte de Santander	2/1/90	Paramilitares
992	Asesinato	Heriberto Enrique López Bula	Activista	Apartadó, Antioquia	2/3/90	Paramilitares
993	Masacre	José Benito Reyes Suárez	Concejal UP de Yondó	Vereda La Jova, municipio Yondó, Antioquia	2/9/90	Paramilitares
994	Masacre	Jaime Guzmán	Militante	Vereda La Jova, municipio Yondó, Antioquia	2/9/90	Paramilitares
995	Masacre	Justo Romaña	Militante	Vereda La Jova, municipio Yondó, Antioquia	2/9/90	Paramilitares
996	Desaparición	Antonio Farías Prado	Concejal de la UP en Sahagún, Córdoba	San Jorge, corregimiento de Ayapel, Córdoba	2/12/90	Paramilitares
997	Asesinato	Amparo Torres Serrano	Dirigente del magisterio	Bucaramanga, Santander	2/14/90	Paramilitares
998	Asesinato	José Joaquín Romero Díaz	Diputado por la UP en el Caquetá	El Doncello, Caquetá	2/18/90	Paramilitares
999	Asesinato	Dámaso Díaz	Concejal por la UP en Mutatá	Mutatá, Urabá, Antioquia	2/22/90	Paramilitares
1000	Masacre	Bernardino Prieto	Campesino de la región del Ariari, activista	Bajo Cumaral Corregimiento Medellín del Ariari, Meta	2/23/90	Paramilitares
1001	Masacre	Eugenio Prieto	Campesino de la región del Ariari, activista	Bajo Cumaral Corregimiento Medellín del Ariari, Meta	2/23/90	Paramilitares
1002	Masacre	Horacio Prieto	Campesino de la región del Ariari, activista	Bajo Cumaral Corregimiento Medellín del Ariari, Meta	2/23/90	Paramilitares
1003	Masacre	Jacinto Zea	Campesino de la región del Ariari, activista	Bajo Cumaral Corregimiento Medellín del Ariari, Meta	2/23/90	Paramilitares
1004	Masacre	José Antonio Zea	Campesino de la región del Ariari, activista	Bajo Cumaral Corregimiento Medellín del Ariari, Meta	2/23/90	Paramilitares
1005	Masacre	Omerly Montoya	Campesino de la región del Ariari, activista	Bajo Cumaral Corregimiento Medellín del Ariari, Meta	2/23/90	Paramilitares
1006	Asesinato	Geovani Lasso	Concejal por la UP en El Bordo	El Bordo, Cauca	2/24/90	Paramilitares
1007	Asesinato	Diana Estela Cardona Saldarriaga	Alcaldesa por la UP en Apartadó	Medellín, Antioquia	2/26/90	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1008	Asesinato	Mauricio Ramírez	Médico presidente municipal de la UP	Unguía, Chocó	3/1/90	Sicarios
1009	Asesinato	Fernando Petecua Aguilar	Militante	Zona rural Guamal, Meta	3/11/90	Paramilitares
1010	Asesinato	Liliana López Lora	Activista	Chigorodó, Región de Urabá, Antioquia	3/12/90	Paramilitares
1011	Asesinato	Bernardo Jaramillo Ossa	Candidato presidencial	Bogotá D. C.	3/22/90	Paramilitares
1012	Asesinato	Ricardo Guzmán	Activista	Apartadó, Antioquia	4/29/90	Paramilitares
1013	Asesinato	Jorge Torres	Activista	Apartadó, Antioquia	4/29/90	Paramilitares
1014	Asesinato	Enenías Muñoz	Activista Apartadó	Apartadó, Antioquia	4/29/90	Paramilitares
1015	Asesinato	Luis Mayuza Prada	Dirigente UP	Villavicencio, Meta	5/1/90	Policía
1016	Asesinato	Ricardo Henry Montenegro Paz	Concejal de la UP Puerto Valdivia, dirigente PCC	Valdivia, Antioquia	5/20/90	Paramilitares
1017	Asesinato	Jorge Eliécer Pérez Herrera	Concejal de Cali	Cali, Valle del Cauca	6/22/90	Paramilitares
1018	Asesinato	Ángel Alberto Lombo	Concejal UP Plandas, presidente Asociación medianos y pequeños caficultores, miembro dirección de APEMECAFÉ	Planadas, Tolima	6/30/90	Paramilitares
1019	Asesinato	Sandra Patricia Vélez Jiménez	Militante JUCO	Vereda Puerto Nuevo Ité, Yondó, Antioquia	7/1/90	Militares adscritos a la XIV Brigada del Ejército
1020	Asesinato	Alfonso Pinzón	Campesino simpatizante	Vereda La Colorada, Barrancabermeja, Santander	7/19/90	Militares
1021	Asesinato	Felipe Castañeda	Activista	San José del Ariari, Meta	7/21/90	Soldados al mando del comandante Cogollos
1022	Asesinato	Orlando Arcila	Educador militante	Albania, Caquetá	7/22/90	Paramilitares
1023	Asesinato	Luis Gonzalo Castañeda Zapata	Concejal UP Manizales, presidente seccional CUT, FEDECALDAS	Manizales, Caldas	7/22/90	Paramilitares
1024	Asesinato	Juan Uribe Meléndez	Coordinador UP de Aracataca	Aracataca, Magdalena	8/1/90	Sicarios
1025	Asesinato	Luis Ernesto García	Activista	Sevilla, Valle del Cauca	8/15/90	Sicarios
1026	Asesinato	Teodomiro Carrillo	Militante	Sevilla, Valle del Cauca	8/15/90	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1027	Asesinato	Luis Enrique Ruiz	Militante	Sevilla, Valle del Cauca	8/15/90	Paramilitares
1028	Asesinato	Ángel Sicarone	Militante	Sevilla, Valle del Cauca	8/15/90	Paramilitares
1029	Asesinato	José Evelio Jaramillo	Dirigente agrario y UP	Sevilla, Valle del Cauca	8/15/90	Paramilitares
1030	Asesinato	Agustín Noscué Meza	Gobernador Cabildo de Corinto	López Adentro, Corinto, Cauca	8/16/90	Paramilitares
1031	Asesinato	Carlos García	Activista	Vereda El Dantón, San Vicente de Chucurí, Santander	8/23/90	Militares de la V Brigada del Ejército
1032	Asesinato	Próspero Enrique Rondón	Activista	Vereda El Dantón, San Vicente de Chucurí, Santander	8/23/90	Militares de la V Brigada del Ejército
1033	Asesinato	Luis Eduardo Calderón	Dirigente agrario FENSUAGRO	Ricaurte, Cundinamarca	9/27/90	Paramilitares
1034	Asesinato	Luz Dary Sánchez Ángel	Secretaria Personería de Mesetas, militante JUCO	Mesetas, Meta	10/14/90	Militares
1035	Asesinato	José Yesid Sogamoso	Concejal por la UP en Coyaima	Coyaima, Tolima	10/18/90	Sicarios
1036	Asesinato	Edilma Moreno Usuga	Activista	Apartadó, Antioquia	10/19/90	Paramilitares
1037	Asesinato	Marcos Beltrán	Concejal UP Silvania	Silvania, Cundinamarca	10/22/90	Paramilitares
1038	Asesinato	Álvaro Pardo Pinto	Concejal de Apulo	Apulo, Cundinamarca	11/1/90	Paramilitares
1039	Asesinato	Elizabeth Gil de Arenas	Activista	Apartadó, Antioquia	11/7/90	Paramilitares
1040	Asesinato	Jesús Santrich	Dirigente JUCO	Barranquilla, Atlántico	11/17/90	Agentes del DAS, Mauricio Solarte Huertas y Emilio Vigolla Palacios
1041	Asesinato	Ricardo Suárez	Inspector de Policía corregimiento de Canoas, dirigente UP	Sevilla, Valle del Cauca	12/3/90	Paramilitares
1042	Desaparición	Dayssi Camachín	Campesina militante	Vereda La Ucrania, municipio de La Uribe	12/11/90	Militares
1043	Desaparición	Esipión Camachín	Campesino militante	Vereda La Ucrania, municipio de La Uribe	12/11/90	Militares
1044	Desaparición	Catalina Vitanco	Campesina militante	Vereda La Ucrania, municipio de La Uribe	12/11/90	Militares
1045	Desaparición	Camilo Casamachín	Campesino militante	Vereda La Ucrania, municipio de La Uribe	12/11/90	Militares
1046	Desaparición	Lyz Mery Casamachín	Campesina militante	Vereda La Ucrania, municipio de La Uribe	12/11/90	Militares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1047	Desaparición	Ernesto Casamachín	Campesino militante	Vereda La Ucrania, municipio de La Uribe	12/11/90	Militares
1048	Desaparición	Estorfio Casamachín	Campesino militante	Vereda La Ucrania, municipio de La Uribe	12/11/90	Militares
1049	Desaparición	Vicente Casamachín	Campesino militante	Vereda La Ucrania, municipio de La Uribe	12/11/90	Militares
1050	Desaparición	Franco Casamachín	Campesino militante	Vereda La Ucrania, municipio de La Uribe	12/11/90	Militares
1051	Desaparición	Hernando Casamachín	Campesino militante	Vereda La Ucrania, municipio de La Uribe	12/11/90	Militares
1052	Desaparición	Álvaro Casamachín	Campesino militante	Vereda La Ucrania, municipio de La Uribe	12/11/90	Militares
1053	Desaparición	Rosalba Casamachín	Campesina militante	Vereda La Ucrania, municipio de La Uribe	12/11/90	Militares
1054	Desaparición	Alfredo Casamachín	Campesino militante	Vereda La Ucrania, municipio de La Uribe	12/11/90	Militares
1055	Desaparición	Argelia Casamachín	Campesina militante	Vereda La Ucrania, municipio de La Uribe	12/11/90	Militares
1056	Asesinato	Ana Ineida Amado	Militante PCC	Vereda Río Blanco, Tolima	12/14/90	Ejército
1057	Asesinato	Guillermo Martínez	Militante PCC	Vereda Río Blanco, Tolima	12/14/90	Ejército
1058	Asesinato	Enrique Siza	Campesino	Vereda Río Blanco, Tolima	12/15/90	Ejército
1059	Desaparición	José Migdonio Núñez	Concejal UP de Coello, dirigente agrícola	Coello, Tolima	12/31/90	Paramilitares
1060	Asesinato	Álvaro Marín Arango	Negociante simpatizante	Florencia, Caquetá	12/31/90	SIJIN
1061	Asesinato	Rubiel Antonio Murillo	Activista	Florencia, Caquetá	12/31/90	Policía
1062	Asesinato	Ramón Villarraga	Simpatizante	Villarrica, Tolima	1/1/91	Paramilitares
1063	Asesinato	Miller Villarraga	Simpatizante	Villarrica, Tolima	1/1/91	Paramilitares
1064	Asesinato	Cecilia Argüello Gómez	Activista	Lejanías, Meta	1/27/91	Paramilitares
1065	Asesinato	Juan Carlos Londoño	Dirigente JUCO	Pereira, Risaralda	2/2/91	Paramilitares
1066	Asesinato	Antonio Valderrama	Militante	Barrancabermeja, Santander	2/3/91	Paramilitares
1067	Asesinato	Miguel Bocanegra	Militante	Inspección Canaguaro, Granada, Meta	2/4/91	Paramilitares
1068	Asesinato	Esteban Coronado	Activista	Barrancabermeja, Santander	2/5/91	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1069	Asesinato	Carlos López	Activista	Barrancabermeja, Santander	2/5/91	Paramilitares
1070	Masacre	Alirio Bermúdez López	Presidente del Concejo de Yondó	Yondó, Antioquia	2/7/91	Paramilitares
1071	Masacre	Héctor Moreno Guevara	Secretario del Concejo	Yondó, Antioquia	2/7/91	Paramilitares
1072	Masacre	Moisés Cortés Tabares	Conductor	Yondó, Antioquia	2/7/91	Paramilitares
1073	Masacre	Rosalba Camacho de Vásquez	Concejala UP, municipio de Prado	Corregimiento de Montoso, Prado, Tolima	2/22/91	Paramilitares
1074	Masacre	Martín Vásquez	Simpatizante	Corregimiento de Montoso, Prado, Tolima	2/22/91	Paramilitares
1075	Masacre	Elizabeth Vásquez Camacho	Simpatizante	Corregimiento de Montoso, Prado, Tolima	2/22/91	Paramilitares
1076	Masacre	Josefina Vásquez Camacho	Simpatizante	Corregimiento de Montoso, Prado, Tolima	2/22/91	Paramilitares
1077	Masacre	Daly Vásquez	Simpatizante	Corregimiento de Montoso, Prado, Tolima	2/22/91	Paramilitares
1078	Masacre	Adriana Vásquez	Exconcejala UP, municipio de Prado	Corregimiento de Montoso, Prado, Tolima	2/22/91	Paramilitares
1079	Asesinato	Manuel Martínez	Activista	Campohermoso, Boyacá	2/22/91	Paramilitares
1080	Asesinato	Zenón Martínez	Activista	Campohermoso, Boyacá	2/22/91	Paramilitares
1081	Desaparición	Gustavo Medina	Campesino militante	Vereda Alta Guayapa, Vista Hermosa, Meta	2/22/91	Tropas Rana del Batallón Guajiros, Brigada Móvil No. 1 y sicario Edilberto Toro Bedoya alias "Mario"
1082	Masacre	Luis Eduardo Rodríguez	Campesino militante	Vereda Alta Guayapa, Vista Hermosa, Meta	2/22/91	Tropas Rana del Batallón Guajiros, Brigada Móvil No. 1 y sicario Edilberto Toro Bedoya alias "Mario"
1083	Masacre	Yineth Velásquez	Campesina simpatizante	Vereda Alta Guayapa, Vista Hermosa, Meta	2/22/91	Tropas Rana del Batallón Guajiros, Brigada Móvil No. 1 y sicario Edilberto Toro Bedoya alias "Mario"
1084	Masacre	Hugo Cañón	Campesino militante	Vereda Alta Guayapa, Vista Hermosa, Meta	2/22/91	Tropas Rana del Batallón Guajiros, Brigada Móvil No. 1 y sicario Edilberto Toro Bedoya alias "Mario"

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1085	Masacre	Luis Monroy	Campesino militante	Vereda Alta Guayapa, Vista Hermosa, Meta	2/22/91	Tropas Rana del Batallón Guajiros, Brigada Móvil No. 1 y sicario Edilberto Toro Bedoya alias "Mario"
1086	Masacre	Javier Gómez	Campesino militante	Vereda Alta Guayapa, Vista Hermosa, Meta	2/22/91	Tropas Rana del Batallón Guajiros, Brigada Móvil No. 1 y sicario Edilberto Toro Bedoya alias "Mario"
1087	Masacre	N.N.	Campesino militante	Vereda Alta Guayapa, Vista Hermosa, Meta	2/22/91	Tropas Rana del Batallón Guajiros, Brigada Móvil No. 1 y sicario Edilberto Toro Bedoya alias "Mario"
1088	Asesinato	Victoriano Torres	Exconcejal UP	Fuente de Oro, Meta	2/23/91	Paramilitares
1089	Masacre	Sergio Ávila Peña	Militante	Campohermoso, Boyacá	2/24/91	Paramilitares
1090	Masacre	Jacinto Pineda	Militante	Campohermoso, Boyacá	2/24/91	Paramilitares
1091	Masacre	José Benigno Rodríguez Medina	Militante	Campohermoso, Boyacá	2/24/91	Paramilitares
1092	Masacre	Marco Aurelio Ruiz Bernal	Militante	Campohermoso, Boyacá	2/24/91	Paramilitares
1093	Masacre	Jairo Pineda Suárez	Militante	Campohermoso, Boyacá	2/24/91	Paramilitares
1094	Masacre	William Medina	Militante	Campohermoso, Boyacá	2/24/91	Paramilitares
1095	Masacre	Dionisio Grijalba	Exconcejal liberal y simpatizante UP	Campohermoso, Boyacá	2/24/91	Paramilitares
1096	Masacre	Jesús Daza	Militante	Campohermoso, Boyacá	2/24/91	Paramilitares
1097	Masacre	Ángel María Silva	Militante	Campohermoso, Boyacá	2/24/91	Paramilitares
1098	Masacre	Florentino Aguirre	Militante	Campohermoso, Boyacá	2/24/91	Paramilitares
1099	Masacre	Elizabeth Jiménez	Militante	Campohermoso, Boyacá	2/24/91	Paramilitares
1100	Asesinato	Alcides Trujillo	Militante	Bogotá D. C.	2/25/91	Paramilitares
1101	Asesinato	Álvaro Bustos Castro	Militante	Barrancabermeja, Santander	2/27/91	Paramilitares
1102	Asesinato	Carlos Alberto Montoya	Militante PCC	Vereda Góngora, Remedios, Antioquia	3/1/91	Paramilitares
1103	Asesinato	Walter Rojas Campos	Activista	Chaparral, Tolima	3/3/91	Paramilitares
1104	Masacre	Alfonso Camacho	Militante	Finca Altamira, vereda Madroño, inspección de Piñalito, Vista Hermosa, Meta	3/18/91	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1105	Masacre	María Dolores Pedroza	Activista	Finca Altamira, vereda Madroño, inspección de Piñalito, Vista Hermosa, Meta	3/18/91	Paramilitares
1106	Masacre	Edelmira Pedroza	Activista	Finca Altamira, vereda Madroño, inspección de Piñalito, Vista Hermosa, Meta	3/18/91	Paramilitares
1107	Masacre	Aquileo Pedroza	Activista	Finca Altamira, vereda Madroño, inspección de Piñalito, Vista Hermosa, Meta	3/18/91	Paramilitares
1108	Masacre	Carlo N.	Activista	Finca Altamira, vereda Madroño, inspección de Piñalito, Vista Hermosa, Meta	3/18/91	Paramilitares
1109	Asesinato	Jairo Alfredo Urbina Lacouture	Sociólogo, dirigente regional UP	Valledupar, Cesar	4/6/91	Sicarios
1110	Asesinato	José Omar Patiño	Exconcejal y dirigente sindical	Rionegro, Caquetá	4/6/91	Sicarios
1111	Asesinato	José Joaquín Conde	Dirigente PCC	San Pedro, municipio de Dolores, Tolima	4/6/91	Paramilitares
1112	Asesinato	Uldarico Yuste	Dirigente local de la UP	San Pedro, municipio de Dolores, Tolima	4/6/91	Paramilitares
1113	Masacre	Marco Antonio Morales	Militante de dieciséis años de edad	Finca Huasano	4/7/91	Paramilitares
1114	Masacre	Julián Tejada	Niño nueve años de edad	Finca Huasano	4/7/91	Paramilitares
1115	Masacre	Gonzalo Arango	Militante	Finca Huasano	4/7/91	Paramilitares
1116	Asesinato	Tito Henao	Dirigente UP	Coyaima, Tolima	4/8/91	Sicarios
1117	Asesinato	Julio Daniel Chaparro	Periodista y poeta simpatizante	Segovia, Antioquia	4/24/91	Paramilitares
1118	Asesinato	Fernando Torres	Activista	Paz de Ariporo, Casanare	5/5/91	Paramilitares
1119	Asesinato	Horacio Galvis Villareal	Dirigente UP	Becerril, Cesar	5/26/91	Paramilitares
1120	Asesinato	Fabiola Ochoa Higueta	Activista	Apartadó, Antioquia	6/12/91	Paramilitares
1121	Desaparición	Florentino Trompeta	Militante	Miranda, Cauca	6/17/91	Paramilitares
1122	Desaparición	Noel Édison Ramírez	Inspector de Policía corregimiento de La Ibería, militante UP	Jamundí, Valle del Cauca	6/17/91	Paramilitares
1123	Desaparición	Ricaurte Castro	Presidente de la Junta UP El Palo	El Palo, Corinto, Cauca	6/18/91	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1124	Asesinato	Antonio Tique Totena	Concejal UP Ortega, Tolima	Ortega, Tolima	6/29/91	Paramilitares
1125	Asesinato	Jacobo Tique Totena	Exconcejal de la UP en Ortega	Ortega, Tolima	6/29/91	Paramilitares
1126	Asesinato	María de los Ángeles Corrales	Esposa de Tique	Ortega, Tolima	6/29/91	Paramilitares
1127	Asesinato	Leonardo Lozano Franco	Tesorero de Alcaldía de Mesetas, militante	Granada, Meta	7/2/91	Paramilitares
1128	Asesinato	Jaime Cifuentes Barrera	Presidente Concejo Municipal Tame y secretario general de la UP Tame	Tame, Arauca (a escasos metros de su casa)	7/15/91	Paramilitares
1129	Asesinato	Vladimiro Escobar Díaz	Militante comunista	Bogotá D. C.	7/20/91	Agentes de Policía
1130	Asesinato	Josué Gustavo Bejarano Aguilera	Presidente Consejo Municipal Vista Hermosa, activista UP	Vista Hermosa, Meta	7/28/91	Grupos autodefensas de Víctor Carranza
1131	Asesinato	Alonso Lora Martínez	Concejal de la UP en Sabana de Torres, militante PCC	Vereda Sabanetas, Sabana de Torres, Santander	7/30/91	Ejército
1132	Asesinato	Marina Villabona	Secretaria de la Inspección de Policía de Sabaneta, militante PCC	Vereda Sabanetas, Sabana de Torres, Santander	7/30/91	Ejército
1133	Asesinato	Luis María Jiménez	Exalcalde Agua Azul, Casanare. Dirigente campesino	Agua Azul, Casanare	8/1/91	Paramilitares del MAS
1134	Asesinato	Luis Fernando Londoño Aguilar	Directivo FEDETEX (Federación Nacional de Trabajadores de Textil y el Vestido), militante	Envigado, Antioquia	8/9/91	Paramilitares
1135	Masacre	Antonio Palacios Urrea	Simpatizante	Vereda en Fusagasugá, Cundinamarca	8/18/91	Tropas de la XIII Brigada del Ejército
1136	Masacre	Blanca Cecilia Gómez	Simpatizante	Vereda en Fusagasugá, Cundinamarca	8/18/91	Tropas de la XIII Brigada del Ejército
1137	Masacre	Jeaneth Palacios	Simpatizante	Vereda en Fusagasugá, Cundinamarca	8/18/91	Tropas de la XIII Brigada del Ejército
1138	Masacre	Rodrigo Barrera	Simpatizante	Vereda en Fusagasugá, Cundinamarca	8/18/91	Tropas de la XIII Brigada del Ejército
1139	Masacre	Camilo Palacios	Simpatizante	Vereda en Fusagasugá, Cundinamarca	8/18/91	Tropas de la XIII Brigada del Ejército
1140	Asesinato	Virgelina Díaz	Activista	Natagaima, Tolima	8/18/91	Paramilitares
1141	Asesinato	Alirio Quintero Cruz	Exconcejal liberal y ganadero, aliado de la UP	Las Hermosas, Tolima	8/18/91	Paramilitares bajo la orden de Carlos Cárdenas

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1142	Masacre	Carlos Julián Vélez	Diputado UP Mesetas	Sitio El Naranjal, Mesetas, Meta	9/14/91	Paramilitares
1143	Masacre	Norma Garzón	Esposa de Carlos Julián Vélez	Sitio El Naranjal, Mesetas, Meta	9/14/91	Paramilitares
1144	Masacre	Luis Carlos Vélez Garzón	Hijo de seis años de Carlos Julián Vélez	Sitio El Naranjal, Mesetas, Meta	9/14/91	Paramilitares
1145	Masacre	Dimas Elkin Vélez	Dirigente UP	Sitio El Naranjal, Mesetas, Meta	9/14/91	Paramilitares
1146	Asesinato	Nora Ruiz	Activista	Unguía, Chocó	9/14/91	Paramilitares
1147	Asesinato	Octaviano Palma	Dirigente PCC y UP	Quibdó, Chocó	**/09/91	Paramilitares
1148	Masacre	Gerardo Barrios Sanabria	Militante	Las Cumbres, corregimiento Estados Unidos, Becerril, Cesar	9/19/91	Paramilitares
1149	Masacre	John Lemus Carrillo	Militante	Las Cumbres, corregimiento Estados Unidos, Becerril, Cesar	9/19/91	Paramilitares
1150	Masacre	Manuel Antonio Torres	Militante	Las Cumbres, corregimiento Estados Unidos, Becerril, Cesar	9/19/91	Paramilitares
1151	Masacre	Ramiro Mejía	Militante	Las Cumbres, corregimiento Estados Unidos, Becerril, Cesar	9/19/91	Paramilitares
1152	Masacre	Eusebio Ortiz Segundo	Militante	Las Cumbres, corregimiento Estados Unidos, Becerril, Cesar	9/19/91	Paramilitares
1153	Masacre	Marciano Galindo	Militante	Las Cumbres, corregimiento Estados Unidos, Becerril, Cesar	9/19/91	Paramilitares
1154	Asesinato	Orlando Medina	Campesino Simpatizante La Uribe	Casco urbano de La Uribe, Meta	10/6/91	Paramilitares
1155	Masacre	José Huberto Hinestroza Rodríguez	Músico del grupo Son Candela, simpatizante	Barrancabermeja, Santander	10/11/91	Paramilitares
1156	Masacre	Óscar de Jesús Gómez Jaramillo	Músico del grupo Son Candela, simpatizante	Barrancabermeja, Santander	10/11/91	Paramilitares
1157	Masacre	Luis Alberto Hernández Esparza	Músico del grupo Son Candela, simpatizante	Barrancabermeja, Santander	10/11/91	Paramilitares
1158	Asesinato	Gildardo Abadía	Expendedor de carne, simpatizante	Mesetas, Meta	10/11/91	Paramilitares
1159	Asesinato	Mesías Duero	Carnicero afiliado a CENAPROV, militante	Zona rural sobre el río Ariari, Meta	10/13/91	Paramilitares
1160	Asesinato	Carmen de Zabala	Dirigente UP	Altos de Cazucá Soacha, Cundinamarca	10/19/91	Sicarios

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1161	Masacre	Cecilia Argüello Gómez	Delegada de la Registraduría	Vereda El Topacio, Lejanías, Meta	10/27/91	Paramilitares
1162	Masacre	Martha Eugenia Gaitán	Jurado de votación	Vereda El Topacio, Lejanías, Meta	10/27/91	Paramilitares
1163	Masacre	Luis Emilio Gallego	Conductor vehículo	Vereda El Topacio, Lejanías, Meta	10/27/91	Paramilitares
1164	Desaparición	Yaneth Durán	Militante	Cocorná, Antioquia	10/27/91	Paramilitares
1165	Desaparición	María Orfit N.	Militante	Cocorná, Antioquia	10/27/91	Paramilitares
1166	Desaparición	José Isaías Herrera	Militante	Cocorná, Antioquia	10/27/91	Paramilitares
1167	Masacre	Rafael Moya Hernández	Secretario Obras Públicas Mesetas	Inspección Puerto Caldas, Meta	10/29/91	Paramilitares en complicidad con la Policía de Granada, Meta
1168	Masacre	Luis Eduardo Lozano	Militante	Inspección Puerto Caldas, Meta	10/29/91	Paramilitares en complicidad con la Policía de Granada, Meta
1169	Masacre	Jorge Freddy Ossa Ramos	Obrero municipio, militante	Inspección Puerto Caldas, Meta	10/29/91	Paramilitares en complicidad con la Policía de Granada, Meta
1170	Asesinato	Gregorio Moya	Militante	Granada, Meta	10/29/91	Paramilitares
1171	Asesinato	Rosendo Jeremías Plazas Matoma	Militante	Granada, Meta	10/29/91	Paramilitares
1172	Asesinato	Vidal Molano	Activista	Medellín del Ariari, Meta	11/2/91	Paramilitares
1173	Desaparición	Albeiro Pulgarín	Militante	Parque Los Centauros Villavicencio, Meta	11/13/91	DAS
1174	Asesinato	Dianelly Valderrama	Activista	Apartadó, Antioquia	11/17/91	Paramilitares
1175	Asesinato	Enrique Perdomo	Dirigente PCC	Puerto Toledo, Meta	11/20/91	Paramilitares
1176	Asesinato	Juan Carlos Álvarez	Dirigente y miembro del Comité Regional de Antioquia	Segovia, Antioquia	11/21/91	Paramilitares
1177	Asesinato	Enrique Parrado	Militante	Puerto Toledo, Meta	11/21/91	Paramilitares
1178	Asesinato	Florián Morales Álvarez	Gerente regional flota La Macarena Militante	Acacias, Meta	12/12/91	Paramilitares
1179	Asesinato	Antonio Espitia	Dirigente UP	Región de Antioquia	1/27/92	Paramilitares
1180	Asesinato	Luz Dary Castaño	Dirigente UP	Medellín, Antioquia	2/1/92	Paramilitares
1181	Asesinato	Hortensia Piñeres	Activista JUCO	Santa Marta, Magdalena	**/02/92	Sicarios

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1182	Asesinato	Luis Hermido Sánchez	Dirigente de acción comunal del Caguán	San Vicente del Caguán, Caquetá	2/16/92	Militares
1183	Asesinato	María Elfia Correa	Activista fundadora UP Caquetá, funcionaria de Caja de Previsión	Bogotá D. C.	2/21/92	Militares del Batallón de Mantenimiento José Hilario López
1184	Asesinato	Luz Dary Castaño de Guerra	Funcionaria de la Contraloría de Medellín, Antioquia, Dirigente de PROVIVIENDA	Medellín, Antioquia	2/21/92	Sicarios
1185	Desaparición	Orlando Enrique Lozano Campos	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/22/92	Paramilitares
1186	Desaparición	Arnulfo Ramírez	Militante	Vista Hermosa, Meta	2/22/92	Paramilitares
1187	Asesinato	Luis Augusto Orjuela Pérez	Personero, militante	Mesetas, Meta	2/23/92	Paramilitares
1188	Asesinato	Emiro de Jesús Rueda	Activista	Colosó, Sucre	3/25/92	Paramilitares
1189	Asesinato	Carmen Cecilia Chávez Villalba	Concejal UP de Quinchía y líder agrario	Pereira, Risaralda	4/2/92	Paramilitares
1190	Masacre	Ana María Ortiz	Trabajadora obras públicas, militante	Mesetas, Meta	4/2/92	Paramilitares y militares
1191	Masacre	Gabriel Alberto Alzate	Trabajador obras públicas, militante	Mesetas, Meta	4/2/92	Paramilitares y militares
1192	Masacre	Jacinto Guevara	Trabajador obras públicas, militante	Mesetas, Meta	4/2/92	Paramilitares y militares
1193	Masacre	Pedro Ignacio Montoya	Trabajador obras públicas, militante	Mesetas, Meta	4/2/92	Paramilitares y militares
1194	Masacre	Santiago Ávila	Trabajador obras públicas, militante	Mesetas, Meta	4/2/92	Paramilitares y militares
1195	Masacre	Pedro Ramírez	Trabajador obras públicas, militante	Mesetas, Meta	4/2/92	Paramilitares y militares
1196	Masacre	Mario de Jesús Pulgarín	Trabajador obras públicas, militante	Mesetas, Meta	4/2/92	Paramilitares y militares
1197	Masacre	Eucardo Rodríguez Porras	Trabajador obras públicas, militante	Mesetas, Meta	4/2/92	Paramilitares y militares
1198	Asesinato	Jacinto Ortiz	Militante	Mesetas, Meta	4/4/92	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1199	Asesinato	Ismael Jaimes Cortés	Exconcejal, periodista defensor de derechos humanos	Barrancabermeja, Santander	4/6/92	Paramilitares
1200	Asesinato	John Freddy Escobar	Militante	Puerto Lleras, Meta	4/15/92	Paramilitares
1201	Asesinato	Carmen Elisa Pereira	Activista	Santiago de Cali, Valle del Cauca	4/16/92	Paramilitares
1202	Desaparición	William Blanco Moncada	Campeño militante	La Uribe, Meta	5/7/92	Coronel Lombana del Ejército
1203	Asesinato	Segundo Epimenio Velasco	Inspector de Policía, militante UP	San Carlos de Guaroa, Meta	5/24/92	Paramilitares
1204	Asesinato	Francisco Javier Sánchez Aguilar	Activista	Medellín, Antioquia	5/31/92	Paramilitares
1205	Desaparición	Uldarico Torres Solano	Militante	Vereda Gualas, Meta	6/1/92	Policía y paramilitares
1206	Desaparición	Benito Torres Solano	Hermano de Uldarico Torres, militante	Vereda Gualas, Meta	6/2/92	Policía y paramilitares
1207	Masacre	William Ocampo Castaño	Alcalde de El Castillo, Meta	Caño Sibao, El Castillo, Meta	6/3/92	Paramilitares y militares
1208	Masacre	María Mercedes Méndez	Exalcadesa de El Castillo, tesorera municipal	Caño Sibao, El Castillo, Meta	6/3/92	Paramilitares y militares
1209	Masacre	Rosa Peña Rodríguez	Zootequista, coordinador municipal UMATA	Caño Sibao, El Castillo, Meta	6/3/92	Paramilitares y militares
1210	Masacre	Ernesto Saralde	Conductor de la Alcaldía	Caño Sibao, El Castillo, Meta	6/3/92	Paramilitares y militares
1211	Masacre	Armando Sabdivak	Militante	Caño Sibao, El Castillo, Meta	6/3/92	Paramilitares y militares
1212	Masacre	Hernando Agudelo	Militante	Caño Sibao, El Castillo, Meta	6/3/92	Paramilitares y militares
1213	Asesinato	Joe Alberto Lambert Mejía	Simpatizante	Barrio Julio Rincón, Bogotá D. C.	6/4/92	Policía
1214	Asesinato	Aníbal Ariel Mejía	Simpatizante	Barrio Julio Rincón, Bogotá D. C.	6/4/92	Policía
1215	Asesinato	Evelio Ramos	Campeño militante	Vereda Explanación, Mesetas, Meta	6/22/92	Brigada Móvil No. 1
1216	Asesinato	Héctor Sánchez	Militante y distribuidor de Voz. El cadáver fue encontrado el 14/7/92)	Los Mangos, vía municipio El Castillo, Meta	7/7/92	Paramilitares
1217	Asesinato	Graciela Rodríguez	Militante, esposa de Héctor Sánchez. El cadáver fue encontrado el 14/7/92)	Los Mangos, vía municipio El Castillo, Meta	7/7/92	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1218	Asesinato	José Ramírez Vergara	Dirigente ANUC	Magangué, Bolívar	7/7/92	Paramilitares
1219	Asesinato	Édison Sánchez Villamil	Campesino militante PCC	Granada, Meta	7/9/92	Paramilitares
1220	Asesinato	Walter Norman Stohr Quintero	Militante	Granada, Meta	7/12/92	Paramilitares
1221	Desaparición	Diógenes Silva	Campesino militante	Vereda El Recreo, inspección La Julia, Meta	7/13/92	Brigada Móvil No. 1
1222	Desaparición	Froilán Carrera Torres	Campesino militante	Vereda El Recreo, inspección La Julia, Meta	7/13/92	Brigada Móvil No. 1
1223	Desaparición	Saúl Torres	Campesino militante	Vereda El Recreo, inspección La Julia, Meta	7/13/92	Brigada Móvil No. 1
1224	Asesinato	Marco Antonio Pinilla	Campesino militante	En su vivienda en la vereda El Rodeo, Meta	7/20/92	Paramilitares
1225	Desaparición	Rubén Darío Cuervo	Militante	Vereda Gualas, Meta	7/24/92	Paramilitares
1226	Asesinato	William Villalba	Militante	Granada, Meta	7/26/92	Paramilitares
1227	Desaparición	Cristina Janeth Avala	Militante	Villavicencio, Meta	8/5/92	Paramilitares
1228	Desaparición	Jorge Jiménez	Militante	Villavicencio, Meta	8/5/92	Paramilitares
1229	Asesinato	Fernei Bernal	Militante PCC y UP	Vereda La Unión, de Paz de Ariporo, Casanare	8/18/92	Sicarios
1230	Asesinato	José Jesús Mogollón	Militante JUCO	Mesetas, Meta	8/30/92	Paramilitares
1231	Asesinato	Aladín García	Militante	Vereda El Diviso, inspección Departamental La Julia	8/30/92	Paramilitares
1232	Desaparición	Pedro Gutiérrez	Simpatizante	Zona entre municipios San Martín y Granada, Meta	9/8/92	Paramilitares
1233	Asesinato	Gladis Marina Benítez Aragón	Activista	Granada, Meta	9/9/92	Paramilitares
1234	Asesinato	Enrique Molina Méndez	Dirigente campesino	Bogotá D. C.	9/11/92	Paramilitares
1235	Asesinato	José Isaac Naranjo	Educador militante	Medellín del Ariari, municipio El Castillo, Meta	9/12/92	Paramilitares
1236	Asesinato	Jesús Martínez Rivera	Militante	Bogotá D. C.	9/14/92	Paramilitares
1237	Asesinato	Ciro Antonio Villalobos	Militante y funcionario público del municipio	Mesetas, Meta	10/3/92	Paramilitares
1238	Asesinato	Daniel Ortiz	Campesino militante	Acacías, Meta	10/4/92	Paramilitares
1239	Asesinato	Ernesto Rojas	Activista	Zona rural de Mesetas, Meta	10/11/92	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1240	Desaparición	Amparo Torres Victoria	Presidenta Sindicato Universidad Santiago de Cali, militante PCC y UP	Cali, Valle del Cauca	10/22/92	Paramilitares
1241	Asesinato	Diego Escribano	Médico activista	Villavicencio, Meta	10/29/92	Paramilitares
1242	Asesinato	Edisson Aguirre Rincón	Militante	Acacias, Meta	11/16/92	Paramilitares
1243	Asesinato	José Rodrigo García Orozco	Vicepresidente de la Asamblea Departamental del Meta y esposo de María Mercedes Méndez, alcaldesa asesinada de El Castillo	Vía a La Uribe, Meta	11/26/92	Paramilitares
1244	Masacre	Juan Manuel González Castaño	Militante y dirigente comunal	Villavicencio, Meta	11/23/92	Paramilitares
1245	Masacre	Epimenio Hernández	Militante y dirigente comunal	Villavicencio, Meta	11/23/92	Paramilitares
1246	Masacre	Luz Milia Torres Lizcano	Esposa de Epimenio Hernández, activista	Villavicencio, Meta	11/23/92	Paramilitares
1247	Asesinato	Justo Rodríguez	Activista	Inspección de San Luis, Neiva, Huila	12/16/92	Paramilitares
1248	Asesinato	Israel Alarcón	Activista	Inspección de San Luis, Neiva	12/16/92	Paramilitares
1249	Masacre	Dumar Castellanos	Militante	Puerto Unión, Meta	12/20/92	Paramilitares
1250	Masacre	Leovigildo Castellanos	Militante	Puerto Unión, Meta	12/20/92	Paramilitares
1251	Masacre	Ignacio Gutiérrez	Militante	Puerto Unión, Meta	12/20/92	Paramilitares
1252	Masacre	Gustavo José Jaramillo	Militante	Puerto Unión, Meta	12/20/92	Paramilitares
1253	Asesinato	Laureano López Acevedo	Militante	San Carlos de Guaroa, Acacias, Meta	12/23/92	Sin datos
1254	Asesinato	María Romero	Militante	Villavicencio, Meta	1/7/93	Paramilitares
1255	Asesinato	Marleny Ballesteros	Activista	El Castillo, Meta	1/11/93	Paramilitares
1256	Desaparición	Luis Guerra	Campesino militante	Sitio La Estaca, Cumaral	2/7/93	Paramilitares
1257	Asesinato	Gabriel Vega	Militante	Acacias, Meta	2/17/93	Paramilitares
1258	Asesinato	Jairo Cárdenas Goyeneche	Militante	Acacias, Meta	2/17/93	Paramilitares
1259	Asesinato	Lisardo Jiménez	Activista	Apartadó, Antioquia	2/19/93	EPL

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1260	Masacre	Jorge Carrascal	Militante PCC	La Cantina, municipio de San Calixto, Norte de Santander	2/21/93	Brigada Móvil No. 2
1261	Masacre	Jesús Rodríguez	Militante PCC	La Cantina, municipio de San Calixto, Norte de Santander	2/21/93	Brigada Móvil No. 2
1262	Masacre	Evelio Carrascal	Militante PCC	La Cantina, municipio de San Calixto, Norte de Santander	2/21/93	Brigada Móvil No. 2
1263	Asesinato	Gabriel Urieta Mercado	Dirigente agrario	Corregimiento La Peña, Magangué, Bolívar	2/22/93	Sicarios
1264	Asesinato	José Manuel León	Dirigente zonal PCC	Corregimiento de Palmarito, Norte de Santander	2/22/93	Brigada Móvil No. 2
1265	Asesinato	José Leonel Segura	Dirigente agrario	Urrao, Antioquia	2/22/93	Sicarios
1266	Desaparición	Inés Jiménez	Militante	Zona rural Villavicencio, Meta	2/23/93	Paramilitares
1267	Desaparición	Jorge Céspedes	Militante	Zona rural Villavicencio, Meta	2/23/93	Paramilitares
1268	Desaparición	Lía García	Militante	Zona rural Villavicencio, Meta	2/23/93	Paramilitares
1269	Asesinato	Oliverio Molina	Miembro del CC del PCC y secretario general de SINTRAINAGRO	Medellín, Antioquia	2/27/93	Paramilitares
1270	Asesinato	Marcos Ortiz González	Campesino y simpatizante	San Juan de Arama, Meta	2/27/93	Batallón 21 Vargas de la VII Brigada
1271	Asesinato	Epiménio Rodríguez Guzmán	Presidente JAC Puerto Gaitán, campesino y militante PCC	Vereda Miraflores, municipio de San Juan, Meta	2/28/93	Operativo militar
1272	Asesinato	Marcos Moreno	Campesino y militante PCC	Vereda Miraflores, municipio de San Juan, Meta	2/28/93	Operativo militar
1273	Asesinato	Ana Rosa Castro Guerrero	Exinspectora de Policía	San Alberto, Cesar	3/2/93	Paramilitares
1274	Masacre	Enrique Bastidas	Militante	Finca La Sucre, Turbo, Antioquia	3/4/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1275	Masacre	Horacio Ferrer	Militante	Finca La Sucre, Turbo, Antioquia	3/4/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1276	Masacre	Heriberto Rodríguez	Militante	Finca La Sucre, Turbo, Antioquia	3/4/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1277	Desaparición	Luis Mauricio Agudelo Rincón	Militante	Vereda Los Alpes, Cumaral, Meta	3/4/93	Paramilitares
1278	Desaparición	Hernando Méndez Villarraga	Administrador de la finca del sacerdote Luis Martínez	Vereda Los Alpes, Cumaral, Meta	3/4/93	Paramilitares
1279	Asesinato	Ana Acosta Ruiz	Activista	Turbo, Antioquia	3/4/93	Paramilitares
1280	Desaparición	José Domingo Sánchez	Militante	Acacias, Meta	3/19/93	Paramilitares
1281	Masacre	Elio Valdonado	Militante	Brisas de Caranal, Arauquita	4/12/93	XVI Brigada del Ejército
1282	Masacre	Herminia Barbosa	Militante	Brisas de Caranal, Arauquita	4/12/93	XVI Brigada del Ejército
1283	Masacre	Octavio Bovilla	Militante	Brisas de Caranal, Arauquita	4/12/93	XVI Brigada del Ejército
1284	Desaparición	Víctor Antonio Vega	Militante	Villavicencio, Meta	4/13/93	Paramilitares
1285	Asesinato	Manuel Castillo	Militante	Finca Santa Lucía, Carepa, Antioquia	11/4/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1286	Asesinato	Wilson Viloria	Militante	Chigorodó, Antioquia	**/04/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1287	Asesinato	Abraham Lemus	Militante	Chigorodó, Antioquia	**/04/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1288	Asesinato	Nicolás Muñoz	Militante	Apartadó, Antioquia	**/04/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1289	Desaparición	Julio Serrano Patiño	Tesorero de la Alcaldía de Mesetas y militante	Sitio Vuelta el Cheque, vía San Martín-Guamal, Meta	4/16/93	Paramilitares
1290	Asesinato	Jaime Marín	Tesorero de la Alcaldía de Mesetas y militante	Vuelta el Cheque Vía San Martín-Guamal, Meta	4/16/93	Paramilitares
1291	Desaparición	Delio Vargas Herrera	Integrante del Comité Regional del Partido Comunista, miembro del Comité Permanente Defensa, DDHH, presidente de ASCODAS	Villavicencio, Meta	4/19/93	Paramilitares
1292	Asesinato	Luis Antonio Guerra	Activista	Casa del Pueblo, Apartadó, Antioquia	4/24/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1293	Asesinato	Libardo Espitia	Activista	Finca Guadalupe Turbo, Antioquia	4/25/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1294	Asesinato	María Dominga Galindo	Activista	Apartadó, Antioquia	5/1/93	Paramilitares
1295	Asesinato	Manuel Hernández	Activista	Finca Potosí, Carepa, Antioquia	5/5/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1296	Asesinato	Gerardo Benítez	Activista	Turbo, Antioquia	5/6/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1297	Asesinato	Miguel Hoyos	Activista	Turbo, Antioquia	5/6/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1298	Asesinato	Iván Darío García	Militante	Finca Pie de Cuesta, Turbo, Antioquia	**/05/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1299	Asesinato	Óscar Sepúlveda	Militante	Finca Florida, Valle del Cauca, Turbo, Antioquia	5/5/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1300	Asesinato	Enrique Sepúlveda	Militante	Apartadó, Antioquia	**/05/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1301	Asesinato	Ofelia Ordóñez Silva	Activista	San Alberto, Cesar	5/29/93	Paramilitares
1302	Asesinato	Bruno Peña	Activista	San Alberto, Cesar	5/30/93	Paramilitares
1303	Asesinato	Sandra María Meza	Activista	San Alberto, Cesar	5/30/93	Paramilitares
1304	Asesinato	Albeiro Ortega	Activista	Currulao, Antioquia	5/30/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1305	Asesinato	Manuel Antonio Benítez Pitalúa	Concejal UP de Carepa, Urabá, Antioquia	Carepa, Urabá, Antioquia	**/06/93	Paramilitares
1306	Desaparición	Pedro Pablo Giraldo Mazo	Concejal UP San Pedro	San Pedro, Cesar	**/06/93	Paramilitares
1307	Asesinato	Carlos Alberto Giraldo	Activista	San Alberto, Cesar	7/4/93	Paramilitares
1308	Asesinato	María Piedad Gómez	Activista	San Alberto, Cesar	7/4/93	Paramilitares
1309	Asesinato	Manuel Francisco Contreras	Exconcejal	San Alberto, Cesar	7/10/93	Paramilitares
1310	Asesinato	Manuel Francisco Gutiérrez	Dirigente UP	San Alberto, Cesar	7/11/93	Paramilitares
1311	Desaparición	Jorge Enrique Hurtado Riveros	Militante	Villavicencio, Meta	8/13/93	Paramilitares
1312	Asesinato	Hernán Aguirre Sánchez	Empleado municipal	San Alberto, Cesar	8/16/93	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1313	Asesinato	Hoover Quintero	Exconcejal, dirigente regional	Turbo, Antioquia	8/24/93	Paramilitares
1314	Desaparición	Pedro Alfonso Lara Prada	Militante	Villavicencio, Meta	8/29/93	Paramilitares
1315	Asesinato	Luis Carlos Herrera	Militante	Villavicencio, Meta	8/30/93	Paramilitares
1316	Asesinato	Francisco Buelvas	Activista	Finca Baranoa, Apartadó, Antioquia	9/1/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1317	Masacre	Abel Ordóñez Pabón	Presidente JAC de Miravalle, Huila	Sitio Vergel (campesino asesinado asistía a seminario agrario), encontrado en fosa común del cementerio de Suaza, Huila	9/3/93	IX Brigada del Ejército
1318	Masacre	Belisario Imbachi	Presidente bienestar escolar de Miravalle, Huila	Sitio Vergel (campesino asesinado asistía a seminario agrario), encontrado en fosa común del cementerio de Suaza, Huila	9/3/93	IX Brigada del Ejército
1319	Masacre	Emilio Vargas Morales	Sindicalista	Sitio Vergel (campesino asesinado asistía a seminario agrario), encontrado en fosa común del cementerio de Suaza, Huila	9/3/93	IX Brigada del Ejército
1320	Masacre	Fernando Rengifo	Funcionario de FENSUAGRO	Sitio Vergel (campesino asesinado asistía a seminario agrario), encontrado en fosa común del cementerio de Suaza, Huila	9/3/93	IX Brigada del Ejército
1321	Asesinato	Udalgo Araújo	Militante	Vereda Lucita, Chigorodó, Antioquia	9/15/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1322	Asesinato	Fermín Banquet	Militante	Coldesa, Turbo, Antioquia	**/09/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1323	Asesinato	Cosmel Blandón	Activista	Finca San Felipe, Apartadó, Antioquia	**/09/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1324	Asesinato	Edisson Blandón	Activista	Apartadó, Antioquia	**/09/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1325	Asesinato	David Ramírez	Militante PCC y UP	Viotá, Cundinamarca	9/21/93	Operativo militar

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1326	Asesinato	Gloria Chavarra Monsalve	Militante	Currulao, Antioquia	9/25/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1327	Asesinato	James Úsuga	Activista	Finca La Petrolera, Carepa, Antioquia	10/11/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1328	Asesinato	Germán Pereira	Activista	Finca Carmen Alicia, Apartadó, Antioquia	10/12/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1329	Asesinato	Jaime de Jesús Valderrama	Activista	Carepa, Antioquia	10/20/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1330	Asesinato	Enrique Valoy	SINTRAINAGRO	Finca Santa María, Apartadó, Antioquia	10/20/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1331	Asesinato	Wilson Tilano	SINTRAINAGRO	Finca Santa Manzana, Apartadó, Antioquia	10/22/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1332	Asesinato	Francisco Fabián Úsuga	SINTRAINAGRO	Corregimiento El Tres, Turbo, Antioquia	10/26/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1333	Asesinato	Luz Mery Castrillón	SINTRAINAGRO	Apartadó, Antioquia	11/18/93	Paramilitares
1334	Asesinato	Alberto Alvarado	SINTRAINAGRO	Finca Los Cedros Carepa, Antioquia	11/4/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1335	Asesinato	Carlos Ríos	SINTRAINAGRO	Finca Los Cedros Carepa, Antioquia	11/11/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1336	Asesinato	Héctor Güisao	SINTRAINAGRO	Finca Los Cedros, Carepa, Antioquia	11/11/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1337	Asesinato	Vicente Herrera	SINTRAINAGRO	Apartadó, Antioquia	11/11/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1338	Asesinato	José Valoy	SINTRAINAGRO, militante	Finca La Toyosa, Turbo, Antioquia	11/15/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1339	Asesinato	Luis Narváez	SINTRAINAGRO, militante	Finca La Toyosa, Turbo, Antioquia	11/15/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1340	Asesinato	Ferney Quejada	SINTRAINAGRO, militante	Finca La Unión Hans, Turbo, Antioquia	11/18/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1341	Asesinato	Andrés Carvajal	SINTRAINAGRO, militante	Finca La Unión Hans, Turbo, Antioquia	11/18/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1342	Asesinato	Manuel Cecilio Moreno	Activista	Finca La Tablaza, Apartadó, Antioquia	11/18/93	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1343	Asesinato	Mario Álvarez	Activista	Finca La Tablaza, Apartadó, Antioquia	11/23/93	Paramilitares
1344	Asesinato	Tarcila Tapias Guevara	Comerciante, militante	Mapiripán, Meta	12/19/93	Sicarios
1345	Asesinato	José Miller Chacón	Secretario de Organización del PCC	Bogotá D. C.	11/25/93	Sicarios
1346	Asesinato	Henry Millán	Exparlamentario de la UP, dirigente movimiento político Causa Popular	Florencia, Caquetá	12/7/93	Paramilitares
1347	Asesinato	Lucas Rincón Torres	Campesino	Medellín del Ariari, Meta	12/24/93	Paramilitares
1348	Asesinato	Vicente Prieto	Activista	Viotá, Cundinamarca	12/31/93	Paramilitares
1349	Asesinato	Luis Arturo Aponte Silva	Activista	Apartadó, Antioquia	1/1/94	Paramilitares
1350	Asesinato	Amparo Fernández	Campesina	Medellín del Ariari, Meta	1/6/94	Paramilitares
1351	Asesinato	Alfonso Bohórquez	Campesino	Medellín del Ariari, Meta	2/6/94	Paramilitares
1352	Asesinato	Belisario Penagos	Concejal de Ciénaga	Ciénaga, Magdalena	2/10/94	Paramilitares
1353	Asesinato	Leocadio Cordero	Concejal de Ciénaga	Ciénaga, Magdalena	2/14/94	Paramilitares
1354	Asesinato	Reinaldo Miguel Gamero	Concejal suplente de Ciénaga	Ciénaga, Magdalena	2/24/94	Paramilitares
1355	Asesinato	Evaristo Amaya	Candidato Alcaldía La Uribe	No registra lugar	2/25/94	Paramilitares
1356	Asesinato	Guillermo Lopera	Dirigente sindical	Medellín, Antioquia	2/28/94	Paramilitares
1357	Asesinato	Alberto Bravo Lara	Dirigente UP	Magangué, Bolívar	4/1/94	Paramilitares
1358	Asesinato	María Norbelly Otagri	Activista	Apartadó, Antioquia	5/20/94	Sicarios
1359	Asesinato	Gabriel Ortega	Dirigente y candidato Alcaldía Chigorodó, Antioquia	Chigorodó, Antioquia	5/26/94	Plan Retorno de las Fuerzas Militares
1360	Asesinato	Agüedo Calle	Dirigente PC Chigorodó, Antioquia	Chigorodó, Antioquia	6/5/94	Paramilitares
1361	Asesinato	Ovidio Gordillo	Activista	Bogotá D. C.	6/30/94	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1362	Asesinato	Joaquín León Tovar	Militante	Carepa, Antioquia	7/17/94	SIJIN
1363	Asesinato	Norma Garzón de Vélez	Activista	Mesetas, Meta	8/7/94	Paramilitares
1364	Asesinato	Carlos Caicedo	Activista	Carepa, Antioquia	8/17/94	Paramilitares
1365	Asesinato	Norma Patricia Galeano	Activista	Tolima	8/7/94	Paramilitares
1366	Asesinato	Manuel Cepeda Vargas	Senador de la UP	Bogotá D. C.	8/9/94	Ejército
1367	Asesinato	Martha Lucía García	Activista	Neiva, Huila	10/18/94	Paramilitares
1368	Asesinato	Héctor Carvajal	Dirigente UP	Natagaima, Tolima	11/17/94	Paramilitares
1369	Asesinato	Óscar Chavarriaga	Dirigente sindical	Sede del PCC Medellín, Antioquia	11/21/94	Paramilitares
1370	Asesinato	Magaly Muñoz	Activista	Apartadó, Antioquia	12/11/94	Paramilitares
1371	Asesinato	Blanca Emilia Palacios Romero	Activista	Turbo, Antioquia	12/23/94	Paramilitares
1372	Asesinato	Martha Cecilia Restrepo	Activista	Turbo, Antioquia	1/10/95	Paramilitares
1373	Asesinato	Arnulfo Bautista	Comerciante simpatizante	San Vicente de Chucurí, Santander	2/9/95	Paramilitares
1374	Asesinato	Héctor Rivas	Dirigente juvenil, monitor de deportes	Chigorodó, Antioquia	2/11/95	Paramilitares bajo el Plan Retorno
1375	Asesinato	Jesús Antonio Urrea	Vendedor de chance, militante	El Castillo, Meta	3/10/95	Paramilitares
1376	Asesinato	Manuel Francisco Giraldo Flórez	Secretario general de SINTRAINAGRO, Apartadó, dirigente comunista	Apartadó, Antioquia	3/22/95	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1377	Asesinato	Sofronio Hernández	Exdiputado Antioquia, zona bananera	Ciudad de Panamá	4/22/95	Comandos Populares, Esperanza Paz y Libertad, EPL
1378	Asesinato	Gildardo Castro Zapata	Exconcejal de San Vicente de Chucurí	Bucaramanga, Santander	4/29/95	Delincuentes comunes
1379	Asesinato	Ana Damaris Higueta de Río	Activista	Turbo, Urabá, Antioquia	5/3/95	Paramilitares
1380	Asesinato	Estella Chiquito C.	Activista	Apartadó, Antioquia	5/14/95	Paramilitares
1381	Asesinato	María Dolores Romero P.	Activista	Apartadó, Antioquia	5/14/95	Paramilitares
1382	Asesinato	Edilberto Cuadrado	Activista	Finca La Apartada, Carepa, Antioquia	5/17/95	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1383	Masacre	Walter de Jesús Borja	Activista, trabajador de la finca Banafinca, Carepa	Finca La Apartada, Carepa, Antioquia	5/23/95	Paramilitares
1384	Masacre	Camilo Lozano	Activista, trabajador de la finca Banafinca, Carepa	Finca La Apartada, Carepa, Antioquia	5/23/95	Paramilitares
1385	Masacre	Melquicedec Rentería Machado	Activista, trabajador de la finca Banafinca, Carepa	Finca La Apartada, Carepa, Antioquia	5/23/95	Paramilitares
1386	Asesinato	Miguel Conde Arteaga	Activista, administrador de finca bananera	Carepa, Urabá, Antioquia	6/1/95	Paramilitares
1387	Asesinato	Roberto Ardila	Concejal San Alberto, dirigente sindical de SINTRAPROACEITES	San Alberto, Cesar	6/2/95	Paramilitares
1388	Asesinato	Miguel Rubiano	Miembro JAC, simpatizante	El Castillo, Meta	6/16/95	Paramilitares
1389	Asesinato	Félix Martínez	Empleado Licorera del Meta y militante	Villavicencio, Meta	6/24/95	Paramilitares
1390	Asesinato	Carolina Serna	Activista	Apartadó, Antioquia	7/15/95	Paramilitares
1391	Asesinato	María Carlina Pérez Echavarría	Activista	Apartadó, Antioquia	8/6/95	Paramilitares
1392	Asesinato	Nérida Jiménez Borja	Activista	Chigorodó, Urabá, Antioquia	8/12/95	Paramilitares
1393	Asesinato	Regina A. Ruiz	Activista	Apartadó, Antioquia	8/18/95	Paramilitares
1394	Masacre	Francisco Morelo	Trabajador bananero, militante	Vereda Pueblo Galleta, del municipio de Turbo, Antioquia	9/14/95	Paramilitares
1395	Masacre	Laureano López Acosta	Trabajador bananero, militante	Vereda Pueblo Galleta, del municipio de Turbo, Antioquia	9/14/95	Paramilitares
1396	Masacre	Luis Yepes	Trabajador bananero, militante	Vereda Pueblo Galleta, municipio de Turbo, Antioquia	9/14/95	Paramilitares
1397	Masacre	Misael Hernández	Trabajador bananero, militante	Vereda Pueblo Galleta, del municipio de Turbo, Antioquia	9/14/95	Paramilitares
1398	Masacre	José Luis Herrera	Trabajador bananero, militante	Vereda Pueblo Galleta, del municipio de Turbo, Antioquia	9/14/95	Paramilitares
1399	Asesinato	Eduardo García	Activista	Turbo, Urabá, Antioquia	9/20/95	Paramilitares
1400	Asesinato	Carmelina Zapata	Activista	Turbo, Urabá, Antioquia	9/20/95	Paramilitares
1401	Asesinato	María Felipa Asprilla	Activista	Chigorodó, Urabá, Antioquia	9/20/95	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1402	Asesinato	Flor María Hernández G.	Activista	Chigorodó, Urabá, Antioquia	10/1/95	Paramilitares
1403	Asesinato	Tulia Rosa Grandet Mora	Activista	Chigorodó, Urabá, Antioquia	10/1/95	Paramilitares
1404	Asesinato	John Jairo López Ostos	Militante JUCO, dirigente Acción Comunal vereda La Paz	Vereda El Palomar, municipio de Mesetas, Meta	10/16/95	Unid. Brigada No. 2 Ejército
1405	Asesinato	Exenover Quintero Celis	Exalcalde de Vista Hermosa y expersonero de El Castillo, Meta	Granada, Meta	11/6/95	Paramilitares
1406	Asesinato	Rodrigo Mafla	Dirigente UP, Urabá	Apartadó, Antioquia	11/9/95	Paramilitares
1407	Asesinato	Digni Marín	Activista	Apartadó, Antioquia	12/4/95	Paramilitares
1408	Asesinato	Adai María Suárez Restrepo	Activista	Apartadó, Antioquia	1/1/96	Paramilitares
1409	Asesinato	Alonso Corrales	Dirigente estudiantil de la Universidad de Cartagena y dirigente JUCO	Cartagena, Bolívar	1/15/96	Paramilitares
1410	Asesinato	Miguel Ángel Velásquez	Dirigente PCC, miembro de su Comité Ejecutivo	Turbo, Antioquia	**/01/96	Paramilitares Plan Retorno
1411	Asesinato	Galio Hoyos	Empleado finca Kativos, activista	Vereda Playona, Turbo, Antioquia	**/01/96	Paramilitares Plan Retorno
1412	Asesinato	Valentín Martínez	Empleado finca Kativos, activista	Vereda Playona, Turbo, Antioquia	**/01/96	Paramilitares Plan Retorno
1413	Desaparición	Arley Caro	Trabajador finca Yerbazal, activista	No registra lugar	**/01/96	Paramilitares Plan Retorno
1414	Desaparición	Francisco Billar	Trabajador finca Yerbazal	No registra lugar	**/01/96	Paramilitares Plan Retorno
1415	Asesinato	Luis Eduardo Cubides	Exconcejal de la UP de Apartadó	Apartadó, Antioquia	1/18/96	Paramilitares Plan Retorno
1416	Asesinato	Marcelino José Castro	Exconcejal Turbo	Turbo, Antioquia	1/19/96	Paramilitares
1417	Asesinato	Alfredo Manuel Flórez	Inspector de Policía militante	Turbo, Antioquia	1/19/96	Paramilitares
1418	Asesinato	Nora Miriam Padilla León	Activista	Carepa, Urabá, Antioquia	2/14/96	Paramilitares
1419	Asesinato	Jesús María Berreneche	Educador, activista	Carretera Panamericana	**/02/96	Paramilitares Plan Retorno
1420	Asesinato	Getulio N.	Vendedor de pescado, activista	Carretera Panamericana	**/02/96	Paramilitares Plan Retorno
1421	Asesinato	Aníbal Guerra	Activista	Turbo, Antioquia	**/02/96	Paramilitares Plan Retorno

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1422	Asesinato	Álvaro López	Trabajador de EXPOBAN, activista	Corregimiento de Peñalosa, Turbo	**/02/96	Paramilitares Plan Retorno
1423	Asesinato	Jorge Rodríguez	Activista	Finca La Marina, Antioquia	**/02/96	Paramilitares Plan Retorno
1424	Asesinato	Feliciano Echeverry	Activista	Urabá, Antioquia	**/02/96	Paramilitares Plan Retorno
1425	Asesinato	John Jairo Palacios	Activista	Turbo, Antioquia	**/02/96	Paramilitares Plan Retorno
1426	Asesinato	Famir Machado	Administrador finca El Évano, Carepa	Carepa, Antioquia	**/02/96	Paramilitares Plan Retorno
1427	Asesinato	Over Calle	Activista	Carepa	**/02/96	Paramilitares Plan Retorno
1428	Asesinato	Éder Martínez	Obrero finca Unión Hands, activista	Urabá	**/02/96	Paramilitares Plan Retorno
1429	Asesinato	Jesús Yarce	Obrero finca Unión Hands, activista	No registra lugar	**/02/96	Paramilitares Plan Retorno
1430	Desaparición	Héctor Uriel Posada Zapata	Administrador de la Subestación de EADE, activista	Guapa, Chigorodó	**/02/96	Paramilitares Plan Retorno
1431	Asesinato	Teófilo Murillo Palacios	Activista	La Comunal El Siete, Carepa, Antioquia	**/02/96	Paramilitares Plan Retorno
1432	Asesinato	Apolinar Liconá	Activista	Corregimiento de Belén de Bajirá, Mutatá, Antioquia	**/02/96	Paramilitares Plan Retorno
1433	Asesinato	María Eugenia Oquendo	Activista	Apartadó, Antioquia	2/20/96	Paramilitares
1434	Asesinato	Ramón Castillo	Exalcalde de Apartadó	Manizales, Caldas	2/22/96	Paramilitares
1435	Asesinato	Orlando Cano García	Edil comuna nororiental de la UP, Medellín	Medellín, Antioquia	2/29/96	Paramilitares
1436	Asesinato	Deisy Moginc	Activista	Corregimiento de Currulao, Turbo, Antioquia	3/5/96	Paramilitares Plan Retorno
1437	Asesinato	Fidelino Córdoba	Activista	Finca Salpicón, corregimiento Currulao, Turbo, Antioquia	**/03/96	Paramilitares Plan Retorno
1438	Asesinato	Jairo González	Integrante del Comité Obrero y administrador finca Planes Uno, activista	Apartadó, Antioquia	**/03/96	Paramilitares Plan Retorno
1439	Asesinato	Leonidas Restrepo	Administrador finca Planes Dos, activista	Urabá	**/03/96	Paramilitares Plan Retorno
1440	Asesinato	Enrique Cabria	Comerciante corregimiento de Blanquiceth, activista	Turbo, Antioquia	**/03/96	Paramilitares Plan Retorno

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1441	Asesinato	José Hernández	Trabajador de la finca Chigüiros, activista	Turbo, Antioquia	**/03/96	Paramilitares Plan Retorno
1442	Asesinato	Pedro Monroy	Activista	Turbo, Antioquia	**/03/96	Paramilitares Plan Retorno
1443	Asesinato	Francisco Mejía	Activista	Urabá	**/03/96	Paramilitares Plan Retorno
1444	Asesinato	Antonio Úzuga	Obrero finca Unión Hands, activista	Carepa, Antioquia	**/03/96	Paramilitares Plan Retorno
1445	Asesinato	Julio Gómez	Trabajador finca comunal El Cuatro, activista	Carepa, Antioquia	**/03/96	Paramilitares Plan Retorno
1446	Asesinato	Oriol Chaverra	Coordinador de la finca Argentina Uno, comunal San Jorge, activista	Urabá	**/03/96	Paramilitares Plan Retorno
1447	Asesinato	Álvaro David	Trabajador finca Planes Dos, activista	Carepa, Antioquia	**/03/96	Paramilitares Plan Retorno
1448	Asesinato	Milton Díaz	Activista	Finca Villanueva, Antioquia	**/03/96	Paramilitares Plan Retorno
1449	Asesinato	Erasmus Rentería	Trabajador del Comité Obrero de la finca Unión Hands, activista	Urabá	**/03/96	Paramilitares Plan Retorno
1450	Asesinato	Gustavo Vargas	Activista	Apartadó, Antioquia	**/03/96	Paramilitares Plan Retorno
1451	Asesinato	Dollys Urrego	Activista	Carepa, Urabá, Antioquia	3/20/96	Paramilitares
1452	Asesinato	Rosmira Güisao	Activista	Apartadó, Antioquia	3/28/96	Paramilitares Plan Retorno
1453	Asesinato	Wilson Ferraro	Dirigente sindical de Turbo Urabá, Dirigente PCC	Nueva Colonia, Turbo, Antioquia	3/28/96	Paramilitares
1454	Asesinato	Manuel Romero	Presidente del Sindicato de pequeños agricultores de Carmen de Bolívar	Carmen de Bolívar, Bolívar	3/28/96	Paramilitares
1455	Asesinato	Marleny Borja	Activista	Apartadó, Antioquia	4/3/96	Paramilitares
1456	Masacre	Gabriel Areiza	Simpatizante	Barrio Policarpa de Apartadó, Antioquia	4/3/96	Paramilitares
1457	Masacre	Abel Antonio Areiza	Simpatizante	Barrio Policarpa de Apartadó, Antioquia	4/3/96	Paramilitares
1458	Masacre	Antonio Zapata Borja	Simpatizante	Barrio Policarpa de Apartadó, Antioquia	4/3/96	Paramilitares
1459	Masacre	Marlene Zapata Borja	Simpatizante	Barrio Policarpa de Apartadó, Antioquia	4/3/96	Paramilitares
1460	Masacre	Lisandro Oviedo	Simpatizante	Barrio Policarpa de Apartadó, Antioquia	4/3/96	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1461	Masacre	Raúl Antonio Úzuga	Simpatizante	Barrio Policarpa de Apartadó, Antioquia	4/3/96	Paramilitares
1462	Masacre	Orlando Ocampo	Simpatizante	Barrio Policarpa de Apartadó, Antioquia	4/3/96	Paramilitares
1463	Masacre	Willington Restrepo Sepúlveda	Simpatizante	Barrio Policarpa de Apartadó, Antioquia	4/3/96	Paramilitares
1464	Masacre	Nayibe Beltrán	Niña de nueve años de edad	Barrio Policarpa de Apartadó, Antioquia	4/3/96	Paramilitares
1465	Masacre	Heiner Luis H.	Menor de quince años de edad	Barrio Policarpa de Apartadó, Antioquia	4/3/96	Paramilitares
1466	Asesinato	Luz Esterly Echavarría	Activista	Carepa, Urabá, Antioquia	4/20/96	Paramilitares
1467	Asesinato	Carmen Vélez	Activista	Turbo, Urabá, Antioquia	4/21/96	Paramilitares
1468	Asesinato	Carmelo Durango	Exconcejal de Chigorodó, presidente regional de CENAPROV, miembro del Comité Regional del Partido Comunista Colombiano de Urabá	Carepa, Urabá, Antioquia	5/3/96	Sicario
1469	Asesinato	Marceliano Medellín Narváez	Miembro del PCC de Urabá y CENAPROV	Carepa, Antioquia	5/3/96	Sicario
1470	Asesinato	Eduardo García	Dirigente cívico y popular, exdiputado Asamblea de Risaralda y expresidente de la Seccional de CENAPROV	Pereira, Risaralda	5/8/96	Sicarios
1471	Asesinato	Oswaldo Olivo Angulo	Concejal, dirigente PCC, miembro Comité Central y Comité Regional del Partido Comunista de Urabá, dirigente SINTRAINAGRO y de PROVIVIENDA	Medellín, Antioquia	5/9/96	Sicario
1472	Asesinato	Marcel Enrique Burgos	Concejal de Colosó	Colosó, Sucre	5/9/96	Paramilitares
1473	Asesinato	Mira Sánchez	Activista	Turbo, Urabá, Antioquia	6/2/96	Paramilitares
1474	Asesinato	Alejandra Camargo Cabrales	Activista	Montería, Córdoba	6/10/96	Paramilitares
1475	Asesinato	Pedro Malagón	Exconcejal del Castillo, Meta y expresidente del Concejo, dirigente	Villavicencio, Meta	6/20/96	Paramilitares
1476	Asesinato	Elda Milena Malagón Hernández	Hija del concejal Pedro Malagón	Villavicencio, Meta	6/20/96	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1477	Asesinato	Ofelia Gil	Activista	Mutató, Urabá, Antioquia	6/21/96	Paramilitares
1478	Asesinato	Arsenio Córdoba	Concejal de Apartadó, dirigente PCC, miembro del Comité Central y dirigente de SINTRAINAGRO	Apartadó, Antioquia	6/22/96	Paramilitares
1479	Asesinato	María Yenny Echeverry	Activista	Chigorodó, Urabá, Antioquia	6/29/96	Paramilitares
1480	Asesinato	Omaira de Jesús Echavarría de Pulgarín	Activista	Chigorodó, Urabá, Antioquia	6/29/96	Paramilitares
1481	Asesinato	Alba Sofía Molina	Activista	Turbo, Urabá, Antioquia	7/2/96	Paramilitares
1482	Asesinato	Ana Isabel Martínez Peralta	Activista	Bogotá D. C.	7/21/96	Paramilitares
1483	Asesinato	José Alberto Restrepo	Exalcalde de Segovia, Antioquia; exdirigente JUCO Nacional	Medellín, Antioquia	7/21/96	Paramilitares del MRNA
1484	Asesinato	Alirio Córdoba Mosquera	Dirigente JUCO, Urabá	Chigorodó, Urabá, Antioquia	8/10/96	Paramilitares
1485	Asesinato	Ramón Alberto Díaz	Presidente sindicato de base de Cementos del Valle	Cali, Valle del Cauca	8/10/96	Sicarios
1486	Asesinato	Iván Antonio Correa	Concejal de Turbo	Turbo, Antioquia	8/10/96	Paramilitares
1487	Asesinato	Bartolomé Cataño	Concejal de Apartadó	Apartadó, Antioquia	8/17/96	Paramilitares
1488	Masacre	Nelson Moreno	Militante	El Castillo, Meta	8/17/96	Paramilitares
1489	Masacre	Helena Castaño	Militante	El Castillo, Meta	8/17/96	Paramilitares
1490	Masacre	Ely Suan	Militante	El Castillo, Meta	8/17/96	Paramilitares
1491	Asesinato	Amparo Palacios	Activista	Carepa, Urabá, Antioquia	8/29/96	Paramilitares
1492	Asesinato	María Eugenia Silva	Activista	Apartadó, Antioquia	9/7/96	Paramilitares
1493	Masacre	Gustavo Loaiza	Concejal de Apartadó	Corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia	9/7/96	Paramilitares
1494	Masacre	Juan González	Dirigente Agrario	Corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia	9/7/96	Paramilitares
1495	Masacre	Samuel Arias	Gerente de la Cooperativa de Cacaoteros	Corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia	9/7/96	Paramilitares
1496	Masacre	María Eugenia Úsuga	Activista	Corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia	9/7/96	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1497	Asesinato	Norman Lora	Activista	Carepa, Urabá, Antioquia	9/24/96	Paramilitares
1498	Asesinato	María del Carmen Tavares Villa	Activista	Chigorodó, Urabá, Antioquia	9/26/96	Paramilitares
1499	Asesinato	Sergio Alirio Ocampo Vargas	Activista	Apartadó, Antioquia	10/1/96	Paramilitares Cardenio Caicedo Mena, alias “el burro” y José Abel Bermúdez Murillo, alias “Guapacho”
1500	Asesinato	Nubia Rosas Ochoa Arias	Activista	Apartadó, Antioquia	10/1/96	Paramilitares Cardenio Caicedo Mena, alias “el Burro” y José Abel Bermúdez Murillo, alias “Guapacho”
1501	Asesinato	Rosa Lázaro	Militante, dirigente comunal	Arauca, Arauca	10/8/96	Paramilitares
1502	Asesinato	Josué Giraldo Cardona	Dirigente del Meta, presidente departamental de derechos humanos	Villavicencio, Meta	10/13/96	Paramilitares
1503	Asesinato	Miriam Jaramillo de Escobar	Activista	Chigorodó, Urabá, Antioquia	10/14/96	Paramilitares
1504	Asesinato	Claudia Patricia Arango	Activista	Apartadó, Antioquia	10/15/96	Paramilitares
1505	Asesinato	Albeiro Bustamante	Concejal de Apartadó, exmiembro del Comité Central del PCC, del Comité Regional del PCC	Apartadó, Antioquia	10/15/96	Paramilitares
1506	Asesinato	Dorance Nieto Triana	Activista	Apartadó, Antioquia	10/22/96	Paramilitares
1507	Asesinato	Nubia Benítez	Activista	Apartadó, Antioquia	11/9/96	Paramilitares
1508	Asesinato	Teresa de J. Ospina	Activista	Apartadó, Antioquia	11/21/96	Paramilitares
1509	Asesinato	Eberto Martínez	Militante	Cartagena, Bolívar	**/12/96	Paramilitares
1510	Asesinato	Ermelina Valencia Arroyave	Activista	Mutatá, Urabá, Antioquia	12/18/96	Paramilitares
1511	Asesinato	Luis Eduardo Bottia	Simpatizante	Bogotá D. C.	3/19/97	F2, Agente Fernando Muñoz Rincón
1512	Asesinato	Everardo Aguirre	Militante	Cubarral, Meta	4/5/97	Paramilitares
1513	Asesinato	Enoc Mendoza	Secretario de Educación de Ciénaga, dirigente comunista	Ciénaga Magdalena	4/7/97	Paramilitares
1514	Desaparición	Ramón Osorio	Dirigente FENSUAGRO, Urabá	Medellín, Antioquia	4/15/97	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1515	Asesinato	Ana Isabel Úsuga	Activista	Apartadó, Antioquia	5/14/97	Paramilitares
1516	Asesinato	Donaldo Tovar	Simpatizante	Algeciras, Huila	6/2/97	Militares
1517	Asesinato	Alfa Delia Higueta Tuberquia	Activista	Apartadó, Antioquia	6/7/97	Paramilitares
1518	Asesinato	Luz Helena Valle Ortiz	Activista	Turbo, Urabá, Antioquia	6/7/97	Paramilitares
1519	Asesinato	Gilma Rosa Duarte	Activista	Apartadó, Antioquia	6/17/97	Paramilitares
1520	Asesinato	Clara Rosa Hernández	Activista	Apartadó, Antioquia	6/17/97	Paramilitares
1521	Asesinato	Luz Amparo Jaramillo	Activista	Apartadó, Antioquia	7/4/97	Paramilitares
1522	Asesinato	Aurora Betancur	Activista	Turbo, Antioquia, Urabá	7/8/97	Paramilitares
1523	Desaparición	Hernán Gallego	Concejal del PCC	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1524	Desaparición	Antonio Barrera Cantumare	Concejal del PCC	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1525	Masacre	Sinai Blanco Santamaría	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1526	Masacre	Nory Giraldo de Jaramillo	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1527	Masacre	Carmen Johana Jaramillo Giraldo	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1528	Masacre	Blanca Lilia Ardila Castañeda	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1529	Masacre	Yudi Sirley Blanco Ardila	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1530	Masacre	Arbey Blanco Ardila	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1531	Masacre	María Isabel Blanco Ortiz	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1532	Masacre	Antonio María Barrera	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1533	Masacre	Viviana Barrera Cruz	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1534	Masacre	Enrique Pinzón López	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1535	Masacre	Jorge Pinzón López	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1536	Masacre	Luis Eduardo Pinzón López	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1537	Masacre	José Alberto Pinzón López	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1538	Masacre	Teresa López de Pinzón	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1539	Masacre	Luz Mery Pinzón López	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1540	Masacre	Esther Pinzón López	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1541	Masacre	Sara Paola Pinzón López	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1542	Masacre	María Teresa Pinzón López	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1543	Masacre	Diego Armando Martínez Contreras	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1544	Masacre	Hugo Fernando Martínez Contreras	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1545	Masacre	Gustavo Caicedo Rodríguez	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1546	Masacre	Mariela Contreras Cruz	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1547	Masacre	Maryuri Caicedo Contreras	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1548	Masacre	Gustavo Caicedo Contreras	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1549	Masacre	Rusbel Asdrúbal Martínez Contreras	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1550	Masacre	José Roland Valencia	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1551	Masacre	Marina San Miguel Duarte	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1552	Masacre	Vinda Valencia Sanmiguel	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1553	Masacre	Johana Valencia Sanmiguel	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1554	Masacre	Roland Valencia Sanmiguel	Simpatizante	Mapiripán, Meta	7/16/97	Paramilitares
1555	Asesinato	Julio César Román	Distribuidor de Voz y militante PCC	Cali, Valle del Cauca	7/26/97	Paramilitares
1556	Masacre	Carlos Enrique Rojo Uribe	Exalcalde UP de Remedios	Remedios, Antioquia	8/2/97	Paramilitares

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1557	Masacre	Alberto Lopera Múnera	Simpatizante	Remedios, Antioquia	8/2/97	Paramilitares
1558	Masacre	Alberto Salazar	Simpatizante	Remedios, Antioquia	8/2/97	Paramilitares
1559	Masacre	Jaime Pérez	Simpatizante	Remedios, Antioquia	8/2/97	Paramilitares
1560	Masacre	Efraín Antonio Pérez	Simpatizante	Remedios, Antioquia	8/2/97	Paramilitares
1561	Masacre	Rosa Mejía	Simpatizante	Remedios, Antioquia	8/2/97	Paramilitares
1562	Masacre	Ofelia Rivero	Simpatizante	Remedios, Antioquia	8/2/97	Paramilitares
1563	Asesinato	María Martha Londoño	Activista	Mutatá, Urabá, Antioquia	8/8/97	Paramilitares
1564	Asesinato	Mónica Pulgarín	Activista	Dabeiba, Urabá, Antioquia	9/1/97	Paramilitares
1565	Asesinato	Luz Helena Cartagena	Activista	Apartadó, Antioquia	9/18/97	Paramilitares
1566	Masacre	José Eduardo Perdomo Burgos	Simpatizante	Tocaima, Cundinamarca	11/23/97	Paramilitares
1567	Masacre	Nelson Perdomo Burgos	Simpatizante	Tocaima, Cundinamarca	11/23/97	Paramilitares
1568	Masacre	Camilo Barrera	Simpatizante	Tocaima, Cundinamarca	11/23/97	Paramilitares
1569	Masacre	Marina Camacho	Simpatizante	Tocaima, Cundinamarca	11/23/97	Paramilitares
1570	Masacre	Andrés Camilo Solano	Simpatizante	Tocaima, Cundinamarca	11/23/97	Paramilitares
1571	Masacre	José Gildardo Parra Díaz	Simpatizante	Tocaima, Cundinamarca	11/23/97	Paramilitares
1572	Masacre	Concepción Camacho	Simpatizante	Tocaima, Cundinamarca	11/23/97	Paramilitares
1573	Masacre	Tito Agudelo	Simpatizante	Tocaima, Cundinamarca	11/23/97	Paramilitares
1574	Masacre	Germán Darío Loaiza Rubio	Simpatizante	Tocaima, Cundinamarca	11/23/97	Paramilitares
1575	Masacre	Juvenal Abril	Simpatizante	Tocaima, Cundinamarca	11/23/97	Paramilitares
1576	Masacre	Germán Vélez	Simpatizante	Tocaima, Cundinamarca	11/23/97	Paramilitares
1577	Masacre	Gustavo Martínez Páez	Simpatizante	Tocaima, Cundinamarca	11/23/97	Paramilitares
1578	Masacre	Omar Martínez	Simpatizante	Tocaima, Cundinamarca	11/23/97	Paramilitares
1579	Asesinato	Juan Esteban Flórez Salazar	Dirigente comunal y comunista	La Horqueta, Urrao, Antioquia	11/23/97	Sin datos
1580	Asesinato	Luz Emilda de Duarte	Activista	Dabeiba, Urabá, Antioquia	11/26/97	Paramilitares
1581	Desaparición	Libardo Duarte	Militante	Arauca	12/15/97	Policía

Número	Tipo de crimen	Nombre	Actividad	Lugar	Fecha	Presuntos responsables materiales según fuente
1582	Desaparición	Rodolfo Osorio Vélez	Militante	Arauca	12/16/97	Policía
1583	Asesinato	Ana Garavito	Militante PCC	Inspección de Policía La Esmeralda, Arauquita, Arauca	12/30/97	Paramilitares
1584	Asesinato	Myriam Luz Mendoza	Dirigente UP	El Bagre, Antioquia	No registra fecha	II Brigada del Ejército
1585	Asesinato	Carmen Murillo Valencia	Activista	Turbo, Urabá, Antioquia,	No registra fecha	Paramilitares
1586	Asesinato	Tiberio Jaramillo	Dirigente	Medellín, Antioquia	No registra fecha	Paramilitares
1587	Asesinato	Roberto Beltrán	Militante	Villarica, Tolima	No registra fecha	Militares
1588	Asesinato	Pabloé Muñoz	Activista	Rioblanco, Antioquia	No registra fecha	Paramilitares
1590	Asesinato	Camilo Rico	Dirigente PCC	Meta	No registra fecha	Paramilitares
1591	Desaparición	Armando Narváez	Aliado	Pitalito, Huila	No registra fecha	IX Brigada del Ejército
1592	Asesinato	Gabriel Duarte Pulido	Simpatizante	Tolima	No registra fecha	Paramilitares
1593	Asesinato	Higinio Cala	Concejal del PCC	Carmen del Chucurí, Santander	No registra fecha	Paramilitares
1594	Asesinato	Rayo, campesino apodado	Campesino simpatizante	Región de Yacopí, Cundinamarca	No registra fecha	Paramilitares
1595	Asesinato	Parmenio Cuenca	Dirigente PCC	Meta	No registra fecha	Paramilitares
1596	Asesinato	Gerardo, Encizo	Activista	Base Militar, Puerto Rico, Caquetá	No registra fecha	Militares
1597	Asesinato	José Parménides Castro	Dirigente PCC	Meta	No registra fecha	Paramilitares
1598	Asesinato	Jesús Figueroa	Dirigente UP	Tolima	No registra fecha	Paramilitares

Fuentes: *Semanario Voz* - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

2

Índice de nombres



Página anterior: Campaña electoral de la Unión Patriótica en el Meta (1986), realizada por la candidata liberal a la Cámara de Representantes Betty Camacho de Rangel, aliada del movimiento. Caería víctima de los paramilitares años más tarde.
(Foto: Lara, *Semanario Voz*)

Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre
A					
1158	Abadía, Gildardo	190	Alias "Éver"	511	Amaya, Elia Rocío
1575	Abril, Juvenal	44	Alias "Franklin"	1355	Amaya, Evaristo
1279	Acosta Ruiz, Ana	127	Alias "Fredy"	478	Amaya, Roberto
309	Afanador Nieto, Adán	73	Alias "Gerardo"	649	Amézquita, Javier
873	Agudelo Agudelo, Darío	52	Alias "Gerardo"	513	Anacona, Gustavo
907	Agudelo Bermúdez, Jorge E.	54	Alias "Gilma"	512	Anacona, Jacobo
831	Agudelo López, Óscar de Jesús	72	Alias "Gilma"	202	Anchique, Gabriel
934	Agudelo Moreno, Rafael Antonio	131	Alias "Heli"	979	Andrade Chaparro, Raúl
1277	Agudelo Rincón, Luis Mauricio	74	Alias "Henry"	536	Angulo, Alberto
1212	Agudelo, Hernando	70	Alias "Mauricio"	1471	Angulo, Oswaldo Olivo
850	Agudelo, José Antonio	128	Alias "Milena"	915	Antequera Antequera, José
1573	Agudelo, Tito	33	Alias "Rubén"	29	Antiry de Carvalo, Marlene
921	Aguiar Carrillo, Gilberto	80	Alias "Samuel"	427	Anzola, Eulalia
47	Aguilar, Mario	24	Alias "Silvio"	1349	Aponte Silva, Luis Arturo
125	Aguilar, Alipio Miguel	68	Alias "Uriel"	556	Arana, Orlando
1242	Aguirre Rincón, Edisson	45	Alias "William"	558	Aranda, Nelson
1312	Aguirre Sánchez, Hernán	38	Alias "Willington"	652	Arango del Río, Alejo
1512	Aguirre, Everardo	189	Alias "Yuri"	572	Arango Rodríguez, Marlene
506	Aguirre, Fabio León	300	Alias "Carlos"	1504	Arango, Claudia Patricia
1098	Aguirre, Florentino	26	Alias "Alfonso"	573	Arango, Froilán
232	Alape, Emilson	64	Alias "Yira"	1115	Arango, Gonzalo
737	Alarcón, Carlos	240	Alquiever, Rosendo	533	Aranguren Hoyos, Ovidio
1248	Alarcón, Israel	1334	Alvarado, Alberto	927	Aranguren, Euclides
947	Alcaraz, Carlos Enrique	118	Álvarez Cuenca, Luis Humberto	1321	Araújo, Udalgo
617	Aldana Troya, Mercedes	660	Álvarez Peñaranda, Edison	984	Arcila Hurtado, Ramón Emilio
515	Aldana, Demetrio	136	Álvarez, Alberto	169	Arcila, Alejandro
18	Alfaro, Rafael Arturo	115	Álvarez, Carlos Alberto	1022	Arcila, Orlando
23	Alias "Alberto"	62	Álvarez, Carlos Julio	882	Arciniegas Teherán, José Armando
31	Alias "Alfonso"	1176	Álvarez, Juan Carlos	113	Ardila, Alberto
32	Alias "Avelino"	242	Álvarez, Leonardo	514	Ardila, Fidel Antonio
124	Alias "Carlos"	1343	Álvarez, Mario	1457	Areiza, Abel Antonio
81	Alias "Carlos"	1191	Alzate, Gabriel Alberto	345	Areiza, Eucaris
63	Alias "Diomedes"	488	Alzate, Reynaldo	1456	Areiza, Gabriel
129	Alias "Eduardo"	1056	Amado, Ana Ineida	1064	Argüello Gómez, Cecilia
69	Alias "Esperanza"	828	Amariles Casallas, Jesús Danilo	1161	Argüello Gómez, Cecilia
		991	Amaya Ancisa, Jesús Alfredo	98	Arias, Cristóbal
		288	Amaya, Manuel	869	Arias, Juan de Dios

Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre
1495	Arias, Samuel	666	Ballesteros, Herminio	1507	Benítez, Nubia
1214	Ariel Mejía, Aníbal	1255	Ballesteros, Marleny	642	Benjamín, Laguna
823	Ariza Arcila, Guillermo de Jesús	667	Ballesteros, Orlando	1070	Bermúdez López, Alirio
786	Ariza, Alba Eniz	1322	Banquet, Fermín	328	Bermúdez, Antonio
491	Ariza, Donato	1282	Barbosa, Herminia	126	Bernal, Carlos
430	Aroca, Milton Manuel	230	Barbosa, José del Carmen	1229	Bernal, Fernei
434	Aroca, Víctor Manuel	1524	Barrera Cantumare, Antonio	588	Bernal, Olga
382	Arrieta, Julio César	1533	Barrera Cruz, Viviana	53	Bernal, Salomón
381	Arrieta, Luis	1532	Barrera, Antonio María	1419	Berreneche, Jesús María
750	Arroyave Bonilla, Luz Marina	1568	Barrera, Camilo	367	Berrío Cardona, Jaime
154	Arroyave Restrepo, Eduardo Ángel	239	Barrera, Eduardo	728	Berrío, Alonso
111	Arroyave, Ángel	1138	Barrera, Rodrigo	522	Berrío Salas, Marciano
895	Arroyave, Pedro Nel	411	Barriga de la Cruz, Germán	540	Betancur, Antonio
1386	Arteaga, Miguel Conde	410	Barriga de la Cruz, José Heberto	527	Betancur, Arturo
282	Asprilla, Ángel	1148	Barrios Sanabria, Gerardo	1522	Betancur, Aurora
322	Asprilla, Aníbal	1274	Bastidas, Enrique	647	Betancur, Francisco
283	Asprilla, Baltazara	1373	Bautista, Arnulfo	516	Betancur, Leonardo
1401	Asprilla, María Felipa	695	Bautista, Francisco	1414	Billar, Francisco
663	Astoiza, Ezequiel	420	Bautista, Juan	1530	Blanco Ardila, Arbey
469	Astudillo, Jaime	693	Bautista, Reyes	1529	Blanco Ardila, Yudi Sirley
874	Atehortúa Vélez, Gonzalo	548	Becerra, Lorenzo	1202	Blanco Moncada, William
1227	Avala, Cristina Janeth	485	Bechara Cuesta, Hamley	1531	Blanco Ortiz, María Isabel
312	Ávila Alfaro, Adriana	1130	Bejarano Aguilera, Josué Gustavo	1525	Blanco Santamaría, Sinai
313	Ávila Alfaro, Sandra	197	Bello, José Dolores	938	Blanco, Humberto
1089	Ávila Peña, Sergio	532	Beltrán Palacio, Luis	586	Blandón Pérez, Marcelina
520	Ávila, Campo Elías	967	Beltrán, Jacobo	1323	Blandón, Cosmel
670	Ávila, Edilberto	11	Beltrán, Juan de Dios	1324	Blandón, Edisson
1194	Ávila, Santiago	1037	Beltrán, Marcos	499	Blandón, Jairo
241	Ávila, Serafín	1464	Beltrán, Nayibe	724	Bocanegra, Enrique
973	Ayala, Leoncio	1587	Beltrán, Roberto	1067	Bocanegra, Miguel
B		1305	Benítez Pitalúa, Manuel Antonio	771	Bocanegra, Salvador
820	B. Escudero, Apango William	1233	Benítez Aragón, Gladys Marina	468	Boada, Alcides
48	Baena, John Jairo	847	Benítez, Eduardo	1351	Bohórquez, Alfonso
497	Bahamón, Fernando	1296	Benítez, Gerardo	940	Bohórquez, Héctor
450	Ballesteros de Benjumea, Blanca Nubia	841	Benítez, Jesús Antonio	176	Bohórquez, Luis Alberto
909	Ballesteros, Camilo Alfonso	360	Benítez, Luis Ángel	567	Bolívar, María Concepción
				752	Bonilla, Luis Augusto

Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre
1455	Borja, Marleny	1427	Calle, Over	273	Carmona, Pedro Nel
1383	Borja, Walter de Jesús	956	Callejas, Guillermo	848	Caro Vanegas, José Vicente
1511	Bottia, Luis Eduardo	192	Calvo, Héctor	1413	Caro, Arley
1283	Bovilla, Octavio	1042	Camachín, Dayssi	1262	Carrascal, Evelio
1357	Bravo Lara, Alberto	1043	Camachín, Esipión	1260	Carrascal, Jorge
445	Briceño, Gabriel Alfredo	1073	Camacho de Vásquez, Rosalba	216	Carreño, Tomás
195	Bronstein Bonilla, Jaime	1104	Camacho, Alfonso	1222	Carrera Torres, Froilán
1316	Buelvas, Francisco	42	Camacho, Álvaro	503	Carrillo, Freddy
987	Burbano, Benedicto	1572	Camacho, Concepción	1026	Carrillo, Teodomiro
1472	Burgos, Marcel Enrique	354	Camacho, Félix Antonio	1565	Cartagena, Luz Helena
1505	Bustamante, Albeiro	1569	Camacho, Marina	761	Carvajal Jiménez, Jorge Edgar
361	Bustamante, Isidro	1474	Camargo Cabrales, Alejandra	946	Carvajal, Adelmo
804	Bustamante, María Dolly	260	Campo Chacón, Gabriela	1341	Carvajal, Andrés
1101	Bustos Castro, Álvaro	3	Campo de Vasco, Adelfa Tulia	1368	Carvajal, Héctor
C		963	Campo, Enoc	405	Casadiegos, Beatriz
897	Cabezas Cortés, Juvenal Anibal	235	Campuzano Álvarez, Carlos	901	Casallas Trujillo, Pablo
1440	Cabria, Enrique	1435	Cano García, Orlando	1054	Casamachín, Alfredo
341	Cadena, Mesías	433	Cano, Ovidio	1052	Casamachín, Álvaro
504	Cadena, William Alfonso	768	Cañón López, Julio	1055	Casamachín, Argelia
1548	Caicedo Contreras, Gustavo	883	Cañón Trujillo, Vladimir	1045	Casamachín, Camilo
1547	Caicedo Contreras, Maryuri	885	Cañón Trujillo, Gerardo	1047	Casamachín, Ernesto
1545	Caicedo Rodríguez, Gustavo	1084	Cañón, Hugo	1048	Casamachín, Estorfio
1364	Caicedo, Carlos	524	Cañón Trujillo, Nelson	1050	Casamachín, Franco
167	Caicedo, Pablo	650	Caraballo, Marlene	1051	Casamachín, Hernando
408	Caicedo, Plutarco	1258	Cárdenas Goyeneche, Jairo	1046	Casamachín, Lyz Mery
132	Caicedo Siachoque, Pablo	526	Cárdenas Sánchez, José Vicente	1053	Casamachín, Rosalba
1593	Cala, Higinio	943	Cárdenas Villa, Alejandro	1049	Casamachín, Vicente
263	Caldera, Eugenio	970	Cárdenas, Eliécer	1528	Castañeda Ardila, Blanca Lilia
100	Calderón Molina, Jesús	336	Cárdenas, Juan	130	Castañeda Granda, María Eugenia
142	Calderón, Dionisio Hernán	315	Cárdenas, Soledad del Carmen	1023	Castañeda Zapata, Luis Gonzalo
465	Calderón, Francisco Javier	275	Cardona Hoyos, José	1021	Castañeda, Felipe
1033	Calderón, Luis Eduardo	765	Cardona Isaza, León	928	Castañeda, Melesio
215	Calderón, Marco Aurelio	923	Cardona Mejía, Luis Alberto	1184	Castaño de Guerra, Luz Dary
812	Calle Guerra, Jesús Emilio	1007	Cardona Saldarriaga, Diana Estela	172	Castaño Jurado, Rubén Darío
539	Calle Guzmán, Óscar	1149	Carrillo, John Lemus	879	Castaño O., Gildardo
1360	Calle, Agüedo	112	Carlosama, Guastumal	422	Castaño Trujillo, Gerardo
955	Calle, Armando				

Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre
386	Castaño y/o Castañeda, Omar	91	Céspedes, Juan	1183	Correa, María Elfia
613	Castaño, Gerardo	406	Chacón, Heriberto	754	Correa, Roger Humberto
1489	Castaño, Helena	1345	Chacón, José Miller	293	Cortés Cortés, José Avilio
1180	Castaño, Luz Dary	466	Chacón, Paulino	546	Cortés Gil, Julián
1249	Castellanos, Dumar	89	Chala, Elcira	735	Cortés, Fidel
1250	Castellanos, Leovigildo	1117	Chaparro, Julio Daniel	784	Cote Barbosa, Yenny Adriana
755	Castillo Castillo, Javier	1326	Chavarra Monsalve, Gloria	149	Coy, Martín Humberto
1285	Castillo, Manuel	1369	Chavarriaga, Óscar	21	Cruz Cruz, Guillermo
1434	Castillo, Ramón	1446	Chaverra, Oriol	933	Cruz Gil, Jairo
829	Castrillón, Henry Albeiro	1189	Chávez Villalba, Carmen Cecilia	426	Cruz, Carlos Darío
1333	Castrillón, Luz Mery	482	Chiquillo Herrera, Marco Tulio	476	Cruz, Darío
1273	Castro Guerrero, Ana Rosa	1380	Chiquito C, Estella	66	Cruz, Marcos
603	Castro Parada, Elia Cecilia	899	Chivatá, José Guillermo	421	Cruz, Salvador
1378	Castro Zapata, Gildardo	1128	Cifuentes Barrera, Jaime	1382	Cuadrado, Edilberto
1416	Castro, Marcelino José	28	Cifuentes, José Fernando	843	Cuarta González, Mario
211	Castro, Dagoberto	376	Collazos, Diego	1415	Cubides, Luis Eduardo
14	Castro, Ernesto	707	Colón, Orlando Manuel	552	Cuéllar, Gerardo
210	Castro, Flor	574	Colorado, Argemiro	723	Cuello, César Emilio
918	Castro, José María	781	Conda, Carlos Evelio	619	Cuenca Parra, Leonidas
1597	Castro, José Parménides	448	Conde, Freddy	950	Cuenca, Henry
327	Castro, Marco Antonio	1111	Conde, José Joaquín	792	Cuenca, Parménides
133	Castro, Marco Fidel	1	Contento, Milcíades	1595	Cuenca, Parmenio
1123	Castro, Ricaurte	1546	Contreras Cruz, Mariela	1225	Cuerco, Rubén Darío
822	Cataño Atehortúa, Libardo Antonio	1309	Contreras, Manuel Francisco	618	Cujavante, Alfonso
832	Cataño Patiño, Shirley	194	Contreras, Pedro	106	Cunda, Ramiro
1487	Cataño, Bartolomé	961	Contreras, Roberto	486	Cutiva, Jairo
88	Ceballos Rondón, Ricardo Antonio	1353	Cordero, Leocadio	D	
391	Ceballos Sierra, Manuel Salvador	1484	Córdoba Mosquera, Alirio	1447	David, Álvaro
276	Cedeño, José Diomedes	414	Córdoba, Antonio	624	David, Rubiela
1366	Cepeda Vargas, Manuel	1478	Córdoba, Arsenio	13	David, Teresa
551	Cepeda, Marino	1437	Córdoba, Fidelino	888	Davis, José María
1267	Céspedes, Jorge	537	Córdoba, Pablo Emilio	702	Daza Duque, Rosa Margarita
796	Céspedes Pérez, Erminson	1068	Coronado, Esteban	939	Daza Ramírez, Clemente
103	Cerón Caicedo, Carlos Alberto	1409	Corrales, Alonso	953	Daza, Abelardo
384	Cervellón Mirillo, José Manuel	1126	Corrales, María de los Ángeles	1096	Daza, Jesús
135	César N.	593	Correa, Argemiro	604	De Anibal Díaz
		1486	Correa, Iván Antonio	840	De Barrientos, Olga Agudelo

Código	Nombre
15	De Castro, Ana Francisca
1580	De Duarte, Luz Emilda
743	De Hernández, N.
587	De la Hoz, Diego
271	De Ortiz, N.
304	De Rodríguez, Ana Belén
1160	De Zabala, Carmen
1436	Deisy Moginc
403	Delgado Díaz, Alberto
249	Delgado Ortiz, Gloria
94	Delgado, Jorge
93	Delgado, Ramiro
602	Díaz Carvajal, Ramón Aníbal
234	Díaz Garavito, José
559	Díaz Gómez, Ebulio
343	Díaz Naranjo, Tiberio
972	Díaz Tirado, Rafael
999	Díaz, Dámaso
484	Díaz, Fernán
35	Díaz, José Bernardo
7	Díaz, Miguel Ángel
1448	Díaz, Milton
709	Díaz, Nazario
1485	Díaz, Ramón Alberto
1140	Díaz, Virgelina
606	Dimas, Baltazar
162	Domingo N.
658	Domínguez, Alfonso María
797	Donato, Ramón
1592	Duarte Pulido, Gabriel
1519	Duarte, Gilma Rosa
1581	Duarte, Libardo
1551	Duarte, Marina San Miguel
505	Duarte, Rafael Antonio
1159	Duero, Mesías
350	Duque Mora, Enrique
706	Duque Pérez, Rafael

Código	Nombre
319	Durán Barreto, Jairo
310	Durán Martínez, Luis Alberto
1164	Durán, Yaneth
678	Durango, Antonio
1468	Durango, Carmelo

E

1480	Echavarría de Pulgarín, Omaira de Jesús
1466	Echavarría, Luz Esterly
1424	Echeverry, Feliciano
1479	Echeverry, María Yenny
299	Enciso, Roosevelt
1596	Encizo, Gerardo
892	Erazo, Jesús Eduardo
1129	Escobar Díaz, Vladimiro
1200	Escobar, John Freddy
424	Escobar, Sotero
990	Escobar, Vladimiro
1241	Escribano, Diego
114	España, Luis Hernán
733	Espinell, Luis
1179	Espitia, Antonio
1293	Espitia, Libardo

F

338	Fajardo, Arquímedes
340	Falla, Álvaro
996	Farías Prado, Antonio
798	Fernández Pinzón, Álvaro
849	Fernández Pinzón, Manuel Álvaro
1350	Fernández, Amparo
462	Fernández, Diego
968	Fernández, Rubén Darío
1453	Ferraro, Wilson
1275	Ferrer, Horacio
853	Fierro, Ramiro
1598	Figueroa, Jesús
446	Figueroa, Julio

Código	Nombre
489	Flor, Arcesio
302	Flórez Uribe, Edgar
321	Flórez, Edgar
782	Flórez Banquet, Electo
825	Flórez Ortiz, Julio Martín
1579	Flórez Salazar, Juan Esteban
301	Flórez Uribe, Nelly
1417	Flórez, Alfredo Manuel
759	Flórez, Carlos Calixto
12	Flórez, Idalba
10	Flórez, Rodrigo
30	Forero Castro, Israel
233	Forero Castro, Lisandro
911	Forero Castro, Teófilo
483	Forero Pineda, Tito Julio
436	Forero, Leonel
634	Forero, Moisés
749	Franco, Delio
630	Franco, Héctor Fabio
358	Fuenamayor Muñoz, José Eduardo
217	Fuentes Bayona, Crisóstomo

G

183	Gaitán, Héctor
40	Gaitán, Humberto
952	Gaitán, Luis Alberto
1162	Gaitán, Martha Eugenia
5	Galeano Zea, Robertino
638	Galeano, David
876	Galeano, Luis Anibal
1365	Galeano, Norma Patricia
398	Galindo Pedraza, Manuel
370	Galindo Zárate, Hernán
636	Galindo, Daniel
637	Galindo, Gabriel
150	Galindo, Jesús Antonio
385	Galindo, José
1153	Galindo, Marciano

Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre
1294	Galindo, María Dominga	394	Garzón, Gustavo	983	Góngora Chamorro, Pedro
157	Galindo, Orlando	629	Garzón, Hermes	639	Gónima López, Carlos
1523	Gallego, Hernán	922	Garzón, Norberto	1438	González, Jairo
1163	Gallego, Luis Emilio	1143	Garzón, Norma	951	González A., Jorge
694	Galvis de Bautista, Hermelina	736	Garzón, Ricardo	1244	González Castaño, Juan Manuel
1119	Galvis Villareal, Horacio	575	Gaviria Jaramillo, Francisco Eladio	948	González Ruiz, Reynaldo A.
510	Gamboa, Carlos	576	Gaviria Trujillo, Francisco	751	González, Alberto
1354	Gamero, Reinaldo Miguel	1420	Getulio N.	584	González, Jorge Emilio
1583	Garavito, Ana	1039	Gil de Arenas, Elizabeth	654	González, José del Carmen
675	Garavito, Tirso Nel	291	Gil, José ("Chepe")	1494	González, Juan
916	Garcés Castillo, Jorge Luis	1477	Gil, Ofelia	857	González, Lino Andrés
509	Garcés Parra, Álvaro	626	Gil, Orlando	428	González, Marcial Alonso
886	García Cano, Alfonso	1502	Giraldo Cardona, Josué	228	González, Raúl
1243	García Orozco, José Rodrigo	1526	Giraldo de Jaramillo, Nory	668	González, Vallexto
794	García Ricardi, Rafael	1376	Giraldo Flórez, Manuel Francisco	1361	Gordillo, Ovidio
76	García Velandia, Carlos	477	Giraldo Hernández, Víctor Hugo	419	Granda, Francisco
1231	García, Aladín	1306	Giraldo Mazo, Pedro Pablo	1403	Grandet Mora, Tulia Rosa
498	García, Bernardino	99	Giraldo, Argemiro	696	Granja, José Aristides
747	García, Carlos	1307	Giraldo, Carlos Alberto	1095	Grijalba, Dionisio
1031	García, Carlos,	868	Giraldo, Isaac	373	Grijalba, Federico
205	García, Carmen Rosa	553	Godoy, Lorenzo	375	Grijalba, Jesús Álvaro
101	García, Demetrio	227	Gómez Aggen, Catalina	374	Grijalba, José Luis
1470	García, Eduardo	800	Gómez Chaverra, Pablo Emilio	134	Grijales, Luis Alberto
49	García, Heriberto	824	Gómez García, Jesús Aníbal	607	Grisales Orrego, Juan de Dios
256	García, Hernando	932	Gómez Gil, Jairo	387	Guachetá, Juan Alberto
583	García, Hugo Alberto	441	Gómez Henao, Luis Antonio	388	Guachetá, Mónica
1298	García, Iván Darío	1156	Gómez Jaramillo, Óscar de Jesús	431	Guaracas, Didier
180	García, Jesús Alberto	834	Gómez Monsalve, Francisco William	164	Guauña, Corpus
803	García, Jesús Antonio	306	Gómez Restrepo, Hernando de Jesús	954	Guerra Doria, Gustavo
1268	García, Lía	518	Gómez, Alejandro José	1421	Guerra, Aníbal
137	García, Luis Alfonso	1137	Gómez, Blanca Cecilia	890	Guerra, Áudicel
1025	García, Luis Ernesto	605	Gómez, Darío	399	Guerra, Jorge Antonio
1367	García, Martha Lucía	1086	Gómez, Javier	1256	Guerra, Luis
95	Garro, Germán Arturo	1445	Gómez, Julio	1292	Guerra, Luis Antonio
1363	Garzón de Vélez, Norma	1308	Gómez, María Piedad	213	Guerrero, Aguirre
138	Garzón, Alfonso			860	Guerrero, Alfonso
464	Garzón, Domingo			858	Guerrero, Euclides

Código	Nombre
859	Guerrero, Mario
862	Guesaquillo, Manuel
1071	Guevara, Héctor Moreno
1192	Guevara, Jacinto
429	Guevara, Luis
412	Guevara, Luis Ander
1336	Güisao, Héctor
720	Güisao, María Consuelo
1452	Güisao, Rosmira
1399	Gutiérrez V, Argelia
372	Gutiérrez, Azael
700	Gutiérrez, Hernando
1251	Gutiérrez, Ignacio
1310	Gutiérrez, Manuel Francisco
1232	Gutiérrez, Pedro
610	Guzmán Borja, Mariela
994	Guzmán, Jaime
500	Guzmán, Luis Francisco
1012	Guzmán, Ricardo

H

1465	H., Heiner Luis
362	Henao Torres, Darío
1116	Henao, Tito
225	Henríquez, Luis Carlos
881	Hernández Cadavid, Alexander
742	Hernández Cifuentes, Ángel María
739	Hernández Cifuentes, Ángela
1157	Hernández Esparza, Luis Alberto
1402	Hernández G., Flor María
767	Hernández Mahecha, Wilmer
836	Hernández Sierra, Jesús Eduardo
1520	Hernández, Clara Rosa
711	Hernández, Eliécer
1245	Hernández, Epiménio
324	Hernández, Eurípides
628	Hernández, Hoover

Código	Nombre
1441	Hernández, José
325	Hernández, Leonel
1295	Hernández, Manuel
1397	Hernández, Misael
326	Hernández, N., Hijo de Leonel Hernández
1377	Hernández, Sofronio
791	Hernández, Zenón
730	Herreño, Alfonso
443	Herrera Alzate, Jaime Alonso
764	Herrera Hernández, Uriel
579	Herrera Marín, Pedro Julio
1166	Herrera, José Isaías
1398	Herrera, José Luis
1315	Herrera, Luis Carlos
671	Herrera, Vallexto
1337	Herrera, Vicente
727	Higuera Lancheros, Humberto
1379	Higueta de Río, Ana Damaris
1517	Higueta Tuberquia, Alfa Delia
941	Higueta, Orlando
198	Hijo 1 de José Dolores Bello
199	Hijo 2 de José Dolores Bello
809	Hincapié, Luis Eduardo
1155	Hinestroza Rodríguez, José Huberto
329	Hoyos, Jorge Enrique
250	Hoyos Ruiz, Hernán
1411	Hoyos, Galio
1297	Hoyos, Miguel
646	Hoyos, Rodrigo
397	Huertas Solórzano, Mario
903	Huertas, Emilio Alfonso
1311	Hurtado Riveros, Jorge Enrique
472	Hurtado Villamarín, Elizabeth María
633	Hurtado, Ángel María
682	Hurtado, Milcíades

Código	Nombre
I	
801	Idárraga de Gómez, María del Carmen
817	Idárraga Osorio, Pablo Emilio
262	Imbachi, Alejandro
1318	Imbachi, Belisario
346	Ipuz Tovar, Eliécer

J

1199	Jaimes Cortés, Ismael
1503	Jaramillo de Escobar, Miriam
1527	Jaramillo Giraldo, Carmen Johana
368	Jaramillo Marín, Óscar
1011	Jaramillo Ossa, Bernardo
640	Jaramillo, Arturo
814	Jaramillo, Fabio
1252	Jaramillo, Gustavo José
1029	Jaramillo, José Evelio
437	Jaramillo, José Nelson
1521	Jaramillo, Luz Amparo
1586	Jaramillo, Tiberio
493	Jeréz Guisa, Nicasio
494	Jeréz Guisa, Roque
1429	Jesús Yarce
1259	Jiménez, Lisardo
1392	Jiménez Borja, Nériida
333	Jiménez Mora, Héctor Ramiro
297	Jiménez Mora, Víctor
581	Jiménez Murillo, Roberto Luis
353	Jiménez Obando, Pedro Nel
243	Jiménez, Antonio
1099	Jiménez, Elizabeth
871	Jiménez, Hernán
1266	Jiménez, Inés
1228	Jiménez, Jorge
1133	Jiménez, Luis María
K	
714	Kovacs Baptiste, Carlos

Código	Nombre
L	
1213	Lambert Mejía, Joe Alberto
166	Lara Parada, Ricardo
1314	Lara Prada, Pedro Alfonso
390	Lara, Hernán
178	Lascarro, José del Carmen
475	Lasso Mazuera, Rubén
1006	Lasso, Geovani
597	Laverde de Bernaza, Nohemí
1501	Lázaro, Rosa
612	Leal Álvarez, José Héctor
82	Leal Guerrero, Jesús
177	Leal, José Demetrio
591	Lemos, Luis
590	Lemos, Rosa
1287	Lemus, Abraham
9	León Arango, Antonio
186	León, Alcibiades
1264	León, José Manuel
790	León, Luz
259	Ley Campo, Hernando
258	Ley Campo, Manuel
1432	Licon, Apolinar
285	Linares, Antonio
286	Linares, Arnulfo
1574	Loaiza Rubio, Germán Darío
580	Loaiza, Gabriel de Jesús
1493	Loaiza, Gustavo
149	Loaiza, Jaime
1018	Lombo, Ángel Alberto
1134	Londoño Aguilar, Luis Fernando
218	Londoño, Esteban
449	Londoño, Jaime
1065	Londoño, Juan Carlos
1563	Londoño, María Martha
378	Londoño, Ramón
1356	Lopera, Guillermo

Código	Nombre
1557	Lopera Múnera, Alberto
1253	López Acevedo, Laureano
1395	López Acosta, Laureano
992	López Bula, Heriberto Enrique
985	López de Muñoz, María Diomedes
1538	López de Pinzón, Teresa
887	López de Sánchez, Nohora
65	López Londoño, Nicolás
1010	López Lora, Liliana
163	López Ospina, Manuel
1404	López Ostos, John Jairo
865	López Pulgarín, Nohora
762	López Rueda, Juan de Dios
964	López, Alberto
1422	López, Álvaro
1069	López, Carlos
165	López, Darío
145	López, Fabio
8	López, Faustino
785	López, Hermelinda
356	López, Jahir
144	López, Jairo
105	López, Jesús
174	López, José
521	López, José Paulino
519	López, José Remigio
669	López, Never
891	López, Ricaurte
621	Lora Giraldo, Hidelbrando
1131	Lora Martínez, Alonso
1497	Lora, Norman
25	Lozada, José Ricardo
1185	Lozano Campos, Orlando Enrique
1127	Lozano Franco, Leonardo
811	Lozano Ruiz, Luis Adalberto
17	Lozano, Ricaurte

Código	Nombre
452	Lozano, Alfonso Miguel
1384	Lozano, Camilo
1168	Lozano, Luis Eduardo
776	Lucas, Carlos Augusto
974	Luján, Marco Tulio
171	Luna, Andrés
989	Lyons, Luis
M	
1426	Machado, Famir
407	Macías Borja, Alonso
680	Madariaga, Lucas
839	Madrid, José Abelardo
530	Madrid, Martha Rubiela
902	Maestra, Francisco Dumar
1406	Mafla, Rodrigo
50	Mahecha, Eufasio
295	Mahecha, José Manuel
1476	Malagón Hernández, Elda Milena
726	Malagón, Leonel
1475	Malagón, Pedro
710	Manchola, Carlos José
1060	Marín Arango, Álvaro
816	Marín Osorio, Roberto Antonio
535	Marín Tetena, Juan Bautista
1407	Marín, Digni
344	Marín, Esteban
1290	Marín, Jaime
357	Márquez, Humberto
495	Márquez, Jesús
265	Martínez, Daniel
894	Martínez Acevedo, Jorge
713	Martínez Álvarez, Elkin de Jesús
1543	Martínez Contreras, Diego Armando
1544	Martínez Contreras, Hugo Fernando
1549	Martínez Contreras, Rusbel Asdrúbal

Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre
867	Martínez Moreno, Jesús Antonio	615	Mejía Velásquez, Héctor Julio	1016	Montenegro Paz, Ricardo Henry
1577	Martínez Páez, Gustavo	1443	Mejía, Francisco	877	Montero, Rubén Darío
1482	Martínez Peralta, Ana Isabel	342	Mejía, José Ignacio	1102	Montoya, Carlos Alberto
1236	Martínez Rivera, Jesús	1151	Mejía, Ramiro	400	Montoya, Miguel Ángel
200	Martínez, Carlos Enrique	1561	Mejía, Rosa	4	Montoya, Nemesio
1509	Martínez, Eberto	866	Meléndez, Fermín	1005	Montoya, Omerly
1428	Martínez, Éder	179	Melo, Francisco	625	Montoya, Óscar
417	Martínez, Everto	334	Melo, José Agustín	1193	Montoya, Pedro Ignacio
1389	Martínez, Félix	659	Méndez Villarraga, Hernando	592	Montoya, Zoraida
1057	Martínez, Guillermo	1278	Méndez Villarraga, Hernando	268	Mora Calderón, Dagoberto
278	Martínez, José Leonardo	1208	Méndez, María Mercedes	913	Mora de Forero, Leonilde
1079	Martínez, Manuel	1513	Mendoza, Enoc	725	Mora, Gregorio
665	Martínez, Manuel	1584	Mendoza, Myriam Luz	1178	Morales Álvarez, Florián
778	Martínez, Marcos	789	Meneses, Alfonso	780	Morales Sandoval, Diana Patricia
264	Martínez, Miguel	898	Mercado, José Joaquín	976	Morales, Alfonso
236	Martínez, Miguel Ángel	363	Merchán, Eudoro	598	Morales, Carlos
508	Martínez, Noel Salazar	852	Meza Sepúlveda, Enrique	418	Morales, Ciro
1578	Martínez, Omar	1030	Meza, Agustín Noscué	1589	Morales, Humberto
1412	Martínez, Valentín	1303	Meza, Sandra María	599	Morales, José Onías
1080	Martínez, Zenón	1346	Millán, Henry	981	Morales, Leoncia
359	Marulanda Zapata, Albeiro Antonio	146	Miller, Roberto	1113	Morales, Marco Antonio
833	Marulanda, Erika Milena	474	Miranda Fuentes, Álvaro	691	Morales, Sildano
842	Marulanda, José Antonio	1230	Mogollón, José Jesús	1394	Morelo, Francisco
1015	Mayuza Prada, Luis	480	Molano, Víctor	159	Morena, Gilberto
819	Mazo, Rosa Angélica	1172	Molano, Vidal	560	Moreno Díaz, Óscar
1469	Medellín Narváez, Marceliano	1234	Molina Méndez, Enrique	614	Moreno S., Elkin de Jesús
347	Medina o Puerta, Diego	1481	Molina, Alba Sofía	835	Moreno Sanmartín, Luis Ángel de Jesús
254	Medina, Ancízar	444	Molina, Jesús Antonio	919	Moreno Santos, Luis Alberto
1081	Medina, Gustavo	1269	Molina, Oliverio	1036	Moreno Úsuga, Edilma
467	Medina, José Víctor	245	Monguí, Misael	648	Moreno, Gratiniano
60	Medina, Manuel J.	657	Monguí, Rafael	959	Moreno, Jesús
1154	Medina, Orlando	1085	Monroy, Luis	969	Moreno, José Reutilio
623	Medina, Tarcisio	722	Monroy, Misael	1342	Moreno, Manuel Cecilio
1094	Medina, William	1442	Monroy, Pedro	1272	Moreno, Marcos
813	Mejía Arenas, Robinson de Jesús	601	Monsalve, Jesús Emilio	1488	Moreno, Nelson
541	Mejía López, Luis Giovanni	184	Monsalve, Jorge	958	Mosquera, Sebastián
		221	Montaño, Abraham		

Código	Nombre
201	Motta, José Ángel
1167	Moya Hernández, Rafael
1170	Moya, Gregorio
701	Muñoz Castrillón, Augusto
826	Muñoz de Mestre, Regina Del Socorro
732	Muñoz Henao, Aníbal
557	Muñoz Lopera, Alberto León
284	Muñoz Taborda, Diego
355	Muñoz, Crispulo Hilario
1014	Muñoz, Enenías
1370	Muñoz, Magaly
1288	Muñoz, Nicolás
1588	Muñoz, Pabloé
364	Muñoz, Pedro
966	Murcia, Adolfo
1431	Murillo Palacios, Teófilo
1585	Murillo Valencia, Carmen
674	Murillo, Pablo Emilio
1061	Murillo, Rubiel Antonio

N

187	N., Braulio Ismael
1108	N., Carlos
188	N., Enrique
71	N., Esperanza
332	N., Jaime
331	N., Jorge
143	N., Marco Tulio
1165	N., María Orfit
396	N., Mercedes
108	N., Teresa
1087	N.N. Campesino
289	N.N. Campesino 1
290	N.N. Campesino 2
685	N.N., Campesino 1
686	N.N., Campesino 2
687	N.N., Campesino 3
688	N.N., Campesino 4

Código	Nombre
689	N.N., Campesino 5
690	N.N., Campesino 6
683	N.N., Menor de Edad 1
684	N.N., Menor de Edad 2
906	Naranjo Trujillo, Gladys
1235	Naranjo, Jorge Isaac
16	Naranjo, José
1591	Narváez, Armando
1339	Narváez, Luis
365	Navia, José
110	Neftalí Calle o Cala
975	Neira, María de Jesús
884	Neiva, Jimmer Arley
487	Nevado, Mercedes
160	Nicolás N.
1506	Nieto Triana, Dorance
307	Niño de Gómez, Gladys
772	Niño, Hipólito
371	Noreña Gallego, Santiago
920	Nova Meneses, Luis Alberto
1059	Núñez, José Migdonio

O

893	Ocampo Cardona, Ricaurte
1207	Ocampo Castaño, William
1499	Ocampo Vargas, Sergio Alirio
1462	Ocampo, Orlando
56	Occa, Domingo
57	Occa, Julio
1500	Ochoa Arias, Nubia Rosas
1120	Ochoa Higueta, Fabiola
705	Ochoa, Guillermo
924	Oliveros, Janneth
1433	Oquendo, María Eugenia
1317	Ordóñez Pabón, Abel
1301	Ordóñez Silva, Ofelia
83	Ordóñez, José Arsenio
67	Ordóñez, José Cornello

Código	Nombre
1187	Orjuela Pérez, Luis Augusto
978	Orjuela Rodríguez, Heriberto
92	Orjuela, Carmelo Helves
795	Orjuela, José Delio
837	Orozco Escudero, Guillermo
818	Orozco Saldarriaga, Luz Idalia
1304	Ortega, Albeiro
79	Ortega, Fabiola
1359	Ortega, Gabriel
208	Ortega, Jorge Emiro
793	Ortegón Pinilla, Pedro
61	Ortegón, Alcides
1190	Ortiz, Ana María
305	Ortiz Cervera, Leonor
1270	Ortiz González, Marcos
470	Ortiz Sierra, Gerardo
270	Ortiz, Carlos Alirio
1238	Ortiz, Daniel
1198	Ortiz, Jacinto
214	Ortiz, José Libardo
900	Ortiz, Julio
631	Ortiz, Marco Fidel
1152	Ortiz, Segundo Eusebio
830	Osorio Betancur, José Abelardo
745	Osorio Gallo, Guillermo
930	Osorio Guzmán, Jacinto
1582	Osorio Vélez, Rodolfo
528	Osorio, Luis J.
1514	Osorio, Ramón
758	Ospina Martínez, Alicia
1508	Ospina, Teresa de J.
1169	Ossa Ramos, Jorge Freddy
1358	Otagri, María Norbelly
1460	Oviedo, Lisandro

P

97	Pabón, Armando
925	Pacheco, Édison

Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre
905	Pacheco, Jorge	935	Peña, Luis Antonio	1540	Pinzón López, Esther
1418	Padilla León, Nora Miriam	960	Peñaloza, José del Carmen	1535	Pinzón López, Jorge
529	Palacio Cabrera, Eleuterio	237	Peralazo, Carlos Enrique	1536	Pinzón López, Luis Eduardo
531	Palacio Madrid, Alexander	442	Peralta, Daniel	1542	Pinzón López, María Teresa
838	Palacio, Juan de Dios	438	Peralta, Dumar	1541	Pinzón López, Sara Paola
679	Palacio, Leonardo	439	Peralta, José	1020	Pinzón, Alfonso
1371	Palacios Romero, Blanca Emilia	1566	Perdomo Burgos, José Eduardo	880	Pinzón, Próspero
1135	Palacios Urrea, Antonio	1567	Perdomo Burgos, Nelson	151	Pinzón, Víctor Manuel
1491	Palacios, Amparo	554	Perdomo Orjuela, Alfonso	1181	Piñeres, Hortensia
1139	Palacios, Camilo	277	Perdomo Soto, Héctor	460	Piñeros, N.
1136	Palacios, Jeaneth	1175	Perdomo, Enrique	731	Plata de Herreño, Celina
1425	Palacios, John Jairo	43	Perdomo, Humberto	1171	Plazas Matoma, Rosendo Jeremías
86	Palacios, Medardo	1201	Pereira, Carmen Elisa	763	Porras García, Pascual
1147	Palma, Octaviano	1328	Pereira, Germán	413	Portela, Esteban
542	Pardo Leal, Jaime	1560	Pérez, Efraín Antonio	661	Portillo Moreno, Giovani
1038	Pardo Pinto, Álvaro	864	Pérez Castrillón, Francisco de Paula	349	Posada Pedraza, Leonardo
1571	Parra Díaz, José Gildardo	1391	Pérez Echavarría, María Carolina	1430	Posada Zapata, Héctor Uriel
22	Parra Pinzón, Giovani	851	Pérez Gallego, Orlando de Jesús	627	Prada Peña, Ruth
34	Parra, Arsenio	1017	Pérez Herrera, Jorge Eliécer	204	Prado, José Luis
39	Parra, Carlos	140	Pérez Sánchez, Luis Antonio	585	Prieto Martínez, Hernando
191	Parra, Jorge	986	Pérez, Candelario	1000	Prieto, Bernardino
107	Parra, William	698	Pérez, Hugo	1001	Prieto, Eugenio
1177	Parrado, Enrique	1559	Pérez, Jaime	1002	Prieto, Horacio
308	Patiño Arias, Gilmer de Jesús	799	Pérez, Oswaldo Regino	1348	Prieto, Vicente
222	Patiño, Ángel Gabriel	220	Pérez, Simón	821	Puerta Londoño, Jorge Luis
980	Patiño, Isaac Gilberto	1009	Petecua Aguilar, Fernando	119	Puerta, Miguel
1110	Patiño, José Omar	1093	Pineda Suárez, Jairo	1196	Pulgarín, Mario de Jesús
1107	Pedroza, Aquileo	252	Pineda Vanegas, Alberto	1173	Pulgarín, Albeiro
1106	Pedroza, Edelmira	492	Pineda, Diomedes	1564	Pulgarín, Mónica
1105	Pedroza, María Dolores	1090	Pineda, Jacinto	246	Pulido, José Antonio
931	Peláez, Gustavo	292	Pinilla Ángel, Jorge Eugenio	656	Pulido, Mario
1352	Penagos, Belisario	1224	Pinilla, Marco Antonio	Q	
910	Peña Fonseca, Antonio	185	Pinto, Wensceslao	46	Quiguana, Benjamín
1209	Peña Rodríguez, Rosa	1537	Pinzón López, José Alberto	1340	Quijada, Ferney
212	Peña Vida, Javier	1539	Pinzón López, Luz Mery	366	Quijano Calero, Víctor Hugo
1302	Peña, Bruno	1534	Pinzón López, Enrique	314	Quimbaya Malagón, Neftaly
861	Peña, Floresmiro			316	Quimbaya Solórzano, Wilson E.

Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre
845	Quina de Suns, María Inés	1320	Rengifo, Fernando	773	Roa, Nicolás
917	Quinche, Vicente	937	Rengifo, Libardo Antonio	957	Roa, Orlando
1405	Quintero Celis, Exenover	1385	Rentería Machado, Melquicedec	1387	Roberto, Ardila
1141	Quintero Cruz, Alirio	1449	Rentería, Erasmo	123	Rocha, Alberto
181	Quintero Cruz, Jaime	807	Restrepo Cadavid, Carlos Enrique	156	Rodas Rúa, Juan Alberto
870	Quintero, Baldomero	808	Restrepo Cadavid, Eduardo Antonio	1197	Rodríguez Parra, Eduardo
673	Quintero, Gilberto	746	Restrepo Cano, Óscar	287	Rodríguez, Moises
231	Quintero, Hernando	744	Restrepo Hernández, Ramón	766	Rodríguez Arenas, Wilson
1313	Quintero, Hooper	806	Restrepo Pérez, Carlos Enrique	6	Rodríguez Casas, Manuel
120	Quintero, Jesús Antonio	1463	Restrepo Sepúlveda, Willington	1217	Rodríguez, Graciela
87	Quintero, Juan Elber	1483	Restrepo, José Alberto	1271	Rodríguez Guzmán, Epimenio
447	Quiñones, Marco	1439	Restrepo, Leonidas	303	Rodríguez Hurtado, José Arcesio
207	Quiroga, Benilda	1372	Restrepo, Martha Cecilia	1091	Rodríguez Medina, José Benigno
461	Quiroz Rivero, José Antonio	697	Rey Castell, Jairo Humberto	827	Rodríguez Pardo, Jairo de Jesús
R		335	Reyes Malagón, José Rafael	193	Rodríguez Pinzón, Gustavo
267	Ramírez Bastidas, Simeón	993	Reyes Suárez, José Benito	563	Rodríguez Puy, Carlos
769	Ramírez Casallas, Enrique	600	Reyes, José Yesid	318	Rodríguez Rodríguez, Yorley
770	Ramírez Casallas, Manuel	274	Reyes, Luis	456	Rodríguez Vásquez, José Darío
1218	Ramírez Vergara, José	1590	Rico, Camilo	20	Rodríguez, Álvaro
1186	Ramírez, Arnulfo	1347	Rincón Torres, Lucas	401	Rodríguez, Ángel María
1325	Ramírez, David	425	Rincón, Cesáreo	544	Rodríguez, Carlos
77	Ramírez, Ezequiel	534	Rincón, Julio	490	Rodríguez, Carlos Julio
248	Ramírez, Gabriel	1335	Ríos, Carlos	562	Rodríguez, César Alfonso
219	Ramírez, Israel	348	Ríos, Dimas	863	Rodríguez, Diego
708	Ramírez, Luis	582	Ríos, Gustavo	632	Rodríguez, Edilberto
570	Ramírez, Luz Marina	547	Ríos, Jhon Jaime	988	Rodríguez, Eugenio
1008	Ramírez, Mauricio	323	Rivas Rojas, Benjamín	1276	Rodríguez, Heriberto
1122	Ramírez, Noel Édison	1374	Rivas, Héctor	1261	Rodríguez, Jesús
1195	Ramírez, Pedro	152	Rivas, Miller	1423	Rodríguez, Jorge
402	Ramírez, Vidal	257	Rivera Medina, Domingo	1247	Rodríguez, Justo
161	Ramón N.	788	Rivera, Arturo	1082	Rodríguez, Luis Eduardo
716	Ramos Sánchez, María Elena	717	Rivera, José Antonio	90	Rodríguez, Luis Enrique
1215	Ramos, Evelio	272	Rivera, Pedro Julio	317	Rodríguez, Luz Dary
55	Ramos, Omar	383	Rivero Rey, Miguel	596	Rodríguez, Néstor
1594	Rayo, campesino apodado	1562	Rivero, Ofelia	1103	Rojas Campos, Walter
84	Real, Hidalgo	965	Roa, Fabio	209	Rojas de Castro, Fabiola
122	Real, Ignacio				

Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre
481	Rojas Parrado, José Miguel	783	Ruiz, Roque Julio	196	Santana, Faeriel
296	Rojas, Alicia	S		854	Santana, Humberto
104	Rojas, Celso	1211	Sabdivak, Armando	141	Santos Pérez, Luis
1239	Rojas, Ernesto	455	Sáenz Bedoya, Felipe Rafael	19	Santos, Gustavo Adolfo
392	Rojas, Juan José	454	Sáenz Bedoya, Félix Natanael	1040	Santrich, Jesús
247	Rojas, Luis Eduardo	1558	Salazar, Alberto	1210	Saralde, Ernesto
85	Rojas, Misael	253	Salazar, Eliel	226	Sasson Sawil, Víctor
715	Rojas, Néstor Henry	59	Saldaña Pérez, Héctor	672	Segura, Bernardo
1556	Rojo Uribe, Carlos Enrique	875	Saldarriaga, Arley	1265	Segura, José Leonel
155	Roldán Betancur, Carlos Arturo	616	Saldarriaga, Conrado Nicolás	1300	Sepúlveda, Enrique
1555	Román, Julio César	738	Salgado, Jorge	525	Sepúlveda, Henry
995	Romaña, Justo	712	Samanai, Gustavo	1299	Sepúlveda, Óscar
998	Romero Díaz, José Joaquín	182	Sanabria Murcia, Javier	1390	Serna, Carolina
1381	Romero P, María Dolores	251	Sanabria, Orlando	379	Serna, Francisco
432	Romero, Albertino	330	Sánchez Acosta, Jorge Eliécer	158	Serna, José
153	Romero, Carlos Julio	1204	Sánchez Aguilar, Francisco Javier	453	Serrano Luna, Lucio
1454	Romero, Manuel	1034	Sánchez Ángel, Luz Dary	949	Serrano Meneses, Manuel
1254	Romero, María	502	Sánchez Castrillón, Marco	1289	Serrano Patiño, Julio
51	Roncancio, Ignacio	538	Sánchez Mena, Felipe	622	Serrano, Hernán
1032	Rondón, Próspero Enrique	1219	Sánchez Villamil, Édison	945	Serrano, Samuel
479	Rondón, Sandra	757	Sánchez Zambrano, Carlos Oswaldo	1028	Sicarone, Ángel
369	Rosero Morales, José Roselino	261	Sánchez, Aldemar	655	Sierra Caballero, Luis Antonio
774	Rúa Rojas, Honorio	1216	Sánchez, Héctor	643	Sierra Charris, Aníbal
699	Rua, Nohemí	872	Sánchez, Honorio	810	Sierra Gómez, Julio de Jesús
1388	Rubiano, Miguel	1280	Sánchez, José Domingo	704	Sierra, Dagoberto
244	Rubio, Dagoberto	1182	Sánchez, Luis Hermido	802	Sierra, Luis Eduardo
393	Rubio, Ulises	718	Sánchez, Martha	435	Silva Díaz, Luis Miguel
549	Rueda Gil, Antonio	1473	Sánchez, Mira	1097	Silva, Ángel María
1188	Rueda, Emiro de Jesús	571	Sánchez, Orfelina	1221	Silva, Diógenes
662	Ruibo, Dagoberto	175	Sánchez, Rogelio	1492	Silva, María Eugenia
457	Ruiz, Fabiola	109	Sandino, Ramiro	395	Silva, Ramiro
1092	Ruiz Bernal, Marco Aurelio	568	Sandoval, Pedro Francisco	1058	Siza, Enrique
459	Ruiz Mendoza, Myriam Luz	501	Sanguino, Hernando	1035	Sogamoso, José Yesid
545	Ruiz, José Duval	578	Santamaría, Gabriel Jaime	1570	Solano, Andrés Camilo
1027	Ruiz, Luis Enrique	936	Santamaría, Nelson Pineda	944	Solano, Evelino José
1146	Ruiz, Nora	734	Santana Tovar, Humberto	550	Solarte, Ángel María
1393	Ruiz, Regina A.			651	Solarte, Argemiro

Código	Nombre
912	Sotelo, José Antonio
96	Soto Gallo, Jorge Enrique
409	Soto, Olga
1220	Stoher Quintero, Walter Norman
1490	Suan, Ely
1408	Suárez Restrepo, Adai María
577	Suárez Suárez, Alfa Luz
1041	Suárez, Ricardo
569	Suaza, Irian
380	Sucerquía, Javier
896	Suescún, Isaías
846	Suns Quina, María Oliva
982	Susa Micán, Ernesto

T

1072	Tabares, Moisés Cortés
116	Taborda, José
566	Taborda, Wilson
653	Tafur Bohórquez, Lácides
255	Tamayo, William
224	Tapasco, Samuel
1344	Tapias Guevara, Tarcila
339	Tapias Pinilla, Jairo
294	Taquinás, Julián
1498	Tavares Villa, María del Carmen
1114	Tejada, Julián
41	Téllez, Gregorio
281	Terapues, José Domingo
1331	Tilano, Wilson
352	Tintimaya Montejo, Cristian
1124	Tique Totena, Antonio
1125	Tique Totena, Jacobo
377	Tique, Luis Antonio
238	Tolosa, Gustavo
760	Toro Ceballos, Hernán
102	Toro Posada, Joaquín Ernesto
753	Toro, Eusebio

Código	Nombre
609	Toro, Jorge
608	Toro, José Eleazar
1246	Torres Lizcano, Luz Milia (esposa de Epiménio Hernández)
997	Torres Serrano, Amparo
1206	Torres Solano, Benito
1205	Torres Solano, Uldarico
1240	Torres Victoria, Amparo
878	Torres, Carlos Julio
1118	Torres, Fernando
681	Torres, Geiser
703	Torres, Geovany
565	Torres, Germán Emilio
1013	Torres, Jorge
389	Torres, Juvenal
1150	Torres, Manuel Antonio
904	Torres, Rigoberto
1223	Torres, Saúl
1088	Torres, Victoriano
914	Toscano, José Antonio
1516	Tovar, Donald
298	Tovar, Ignacio
1362	Tovar, Joaquín León
543	Traslaviña, José Fabio
337	Triviño, Carlos
223	Troches, Jorge
1121	Trompeta, Florentino
1100	Trujillo, Alcides
168	Trujillo, Ángela
404	Tuiran, Samuel
150	Tunjo, Yesid

U

856	Ulcué Valencia, Wilson
729	Ulpiano Díaz, José
1109	Urbina Lacouture, Jairo Alfredo
1024	Uribe Meléndez, Juan
415	Uribe Rúa, Julio César

Código	Nombre
1263	Urieta Mercado, Gabriel
1375	Urrea, Jesús Antonio
1451	Urrego, Dollys
644	Urrego, Sergio
692	Useche, Baldomero
741	Úsuga Cayetano, Alberto Elías
1515	Úsuga, Ana Isabel
1332	Úsuga, Francisco Fabián
1327	Úsuga, James
740	Úsuga, Marco Tulio
1496	Úsuga, María Eugenia
1444	Úzuga, Antonio
1461	Úzuga, Raúl Antonio

V

1066	Valderrama, Antonio
1174	Valderrama, Dianelly
1329	Valderrama, Jaime de Jesús
451	Valdéz, Samuel
1281	Valdonado, Elio
1550	Valencia, José Roland
1510	Valencia Arroyave, Ermelina
203	Valencia Bustos, Alberto
311	Valencia Gómez, Lily
926	Valencia Loaiza, Gilberto
1553	Valencia Sanmiguel, Johana
1554	Valencia Sanmiguel, Roland
1552	Valencia Sanmiguel, Vinda
280	Valencia, Hilario
589	Valencia, Arcesio
206	Valencia, Celio
971	Valencia Córdoba, Tomás
473	Valencia, Fernando
645	Valencia, Guillermo
507	Valencia, Pedro Luis
1518	Valle Ortiz, Luz Helena
458	Vallejo Agudelo, Gustavo Alberto
37	Vallejo Domínguez, Rolando

Código	Nombre
611	Vallejo Ramírez, Norman
1330	Valoy, Enrique
1338	Valoy, José
463	Vanegas, Amado
27	Vanegas, Humberto
929	Vanegas, Miller
555	Vargas Cuéllar, Arnulfo
416	Vargas Cuéllar, Octavio
1291	Vargas Herrera, Delio
664	Vargas Melibes, Ramiro
269	Vargas Ospina, Maximiliano
721	Vargas Pinto, Gilberto
1319	Vargas Morales, Emilio
719	Vargas, Fabriciano
595	Vargas, Francisco
1450	Vargas, Gustavo
564	Vargas, Juan Carlos
787	Varón, William
2	Vasco, Jesús Eduardo
1075	Vásquez Camacho, Elizabeth
1076	Vásquez Camacho, Josefina
962	Vásquez Velásquez, Gloria
815	Vásquez Zapata, Jesús Orlando
1078	Vásquez, Adriana
855	Vásquez, Apolinar
1077	Vásquez, Daly
496	Vásquez, Javier
777	Vásquez, María Luisa
1074	Vásquez, Martín
641	Vega Ramos, Martha
1257	Vega, Gabriel

Código	Nombre
1284	Vega, Víctor Antonio
75	Velandia, Joaquín
351	Velasco Escue, Cornelio
266	Velasco Suárez, César Antonio
779	Velasco, Luisa
1203	Velasco, Segundo Epimenio
139	Velásquez Mejía, Jesús
517	Velásquez, Delfín
889	Velásquez, Fidel
775	Velásquez, Luciano
1410	Velásquez, Miguel Ángel
523	Velásquez, Norberto
78	Velásquez, Octavio
1083	Velásquez, Yineth
1145	Vélez, Dimas Elkin
1144	Vélez Garzón, Luis Carlos
1019	Vélez Jiménez, Sandra Patricia
561	Vélez Ramírez, Jesús Aldemar
1142	Vélez, Carlos Julián
1467	Vélez, Carmen
805	Vélez, Diana María
1576	Vélez, Germán
423	Verda, Enrique
440	Villa Arce, Walter
1132	Villabona, Marina
117	Villada, Rubén Antonio
844	Villalba Sanabria, Félix Antonio
1226	Villalba, William
1237	Villalobos, Ciro Antonio
942	Villamarín, Israel
121	Villareal, N.

Código	Nombre
1063	Villarraga, Miller
1062	Villarraga, Ramón
1286	Viloria, Wilson
1044	Vitanco, Catalina

Y

471	Yandé Guachetá, Marcos Dimas
676	Yañez, Francisco
677	Yañez, Francisco (hermano de)
594	Yarce, Carlos
173	Yate Bonilla, Hernando
170	Yate Roca, Roque Jacinto
908	Yaya Cristancho, Luis Eduardo
1396	Yepes, Luis
229	Yomamusa Ojeda, Eluvín
1112	Yuste, Uldarico

Z

620	Zambrano, Misael
756	Zambrano, Pedro Antonio
1458	Zapata Borja, Antonio
1459	Zapata Borja, Marlene
977	Zapata Meza, Boris
36	Zapata Muriel, Ramón
1400	Zapata, Carmelina
748	Zaraza, Alirio
1003	Zea, Jacinto
1004	Zea, José Antonio
58	Zuleta Martínez, Álex
279	Zuluaga, Danilo
635	Zúniga, James Emilio
320	Zúniga, Rodrigo

3

Las cifras del horror



Página anterior: Marcha fúnebre con los seis féretros de los campesinos de la Unión Patriótica masacrados el 23 de febrero de 1990, en el Bajo Cumaral, Medellín del Ariari, departamento del Meta.

(Foto: Manuel Cepeda Vargas, publicada en el *Semanario Voz* con una crónica suya, el 8 de marzo del mismo año)

Los cuadros electorales del estudio aquí presentado indican cómo la Unión Patriótica, al poco tiempo de nacer crecía rápidamente. Si el Frente Democrático, la opción de izquierda liderada por el Partido Comunista Colombiano, alcanzaba con la candidatura presidencial de Gerardo Molina en 1982, 82.858 votos (el 1,2%), Jaime Pardo Leal, en menos de tres meses de campaña y sin los grandes recursos de sus contrincantes de los partidos tradicionales, se alzaba con 328.752 votos, casi el 5% del total de las elecciones de 1986. Multiplicaba por cuatro al Frente Democrático (ver Tabla 1).

Tabla 1. Resultados electorales FD-UP Presidente y ANC (1982-1994)

Departamento	Presidente 1982	Presidente 1986	Asamblea Nacional Constituyente 1990	Presidente 1994
	1982 Gerardo Molina	1986 Jaime Pardo Leal	1990 Lista Única por el Derecho a la Vida	1994 Alberto Mendoza
Amazonas		122	100	25
Antioquia	9.328	33.900	14.296	4.748
Arauca	81	8.270	3.676	4.784
Atlántico	2.220	9.272	2.247	743
Bolívar	923	6.284	3.875	252
Boyacá	1.279	4.814	1.506	311
Caldas	1.119	5.801	1.030	377
Caquetá	4.925	12.813	3.506	1.694
Casanare	28	1.435	386	32
Cauca	2.738	8.838	2.503	818
Cesar	237	6.870	3.859	348
Chocó	691	1.407	1.807	573
Córdoba	265	4.319	1.262	194
Cundinamarca	22.928	66.439	16.874	6.498
Guainía	29	1.273	102	14
Guajira	48	1.093	242	71

Continúa

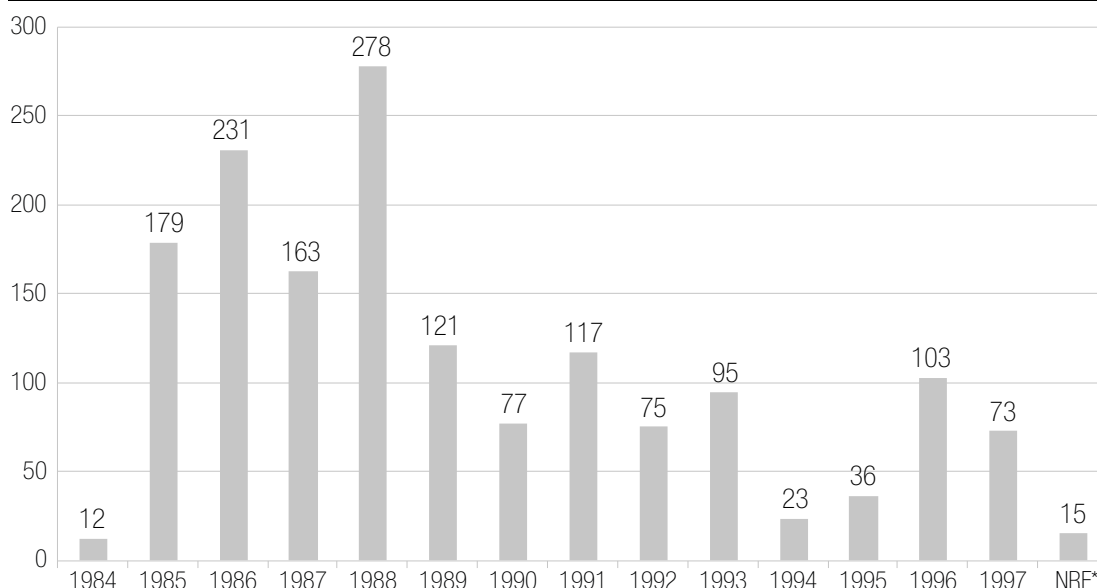
Departamento	Presidente 1982	Presidente 1986	Asamblea Nacional Constituyente 1990	Presidente 1994
	1982 Gerardo Molina	1986 Jaime Pardo Leal	1990 Lista Única por el Derecho a la Vida	1994 Alberto Mendoza
Guaviare	479	7.807	381	381
Huila	3.043	17.209	2.949	878
Magdalena	347	4.317	2.318	181
Meta	5.173	27.218	4.580	2.140
Nariño	1.554	6.377	1.549	618
Norte de Santander	708	6.187	4.961	508
Putumayo	202	1.228	761	240
Quindío	1.629	6.685	825	532
Risaralda	1.762	6.152	2.097	622
Santander	4.921	29.682	5.229	1.552
Sucre	152	1.454	2.594	206
Tolima	7.544	16.862	4.597	3.137
Valle	7.943	22.049	4.821	1.839
Vaupés	8	385	20	4
Vichada	3	1.402	132	27
San Andrés Islas	11	82	13	6
Exterior	630	706		84
Total votos	82.858	328.752	94.998	34.437
Porcentaje Total Nacional	1,20%	4,54%	2,56%	0,59%

Pero también en esos meses previos e inmediatamente posteriores a la victoria de Pardo, arreció la matanza. Los tres primeros años de la UP fueron los más duros. Entre 1985 y 1988, el genocidio, que se extendía como una inmensa mancha de oprobio sobre Colombia, daba cuenta ya de 573 muertos, siendo 1988 el peor con 278, casi uno por día (ver Gráfico 1).

Las cifras en algunos departamentos dan cuenta del crecimiento sin parangón que experimentaba la UP. En Antioquia, por ejemplo, se pasó de 11.555 votos en 1982, con el Frente Democrático (FD) y

la candidatura de Molina, a 30.515 con Pardo Leal, para bajar dramáticamente a 12.747 votos en 1994 y desaparecer prácticamente en 1997, perdiéndose las seis más grandes alcaldías del Urabá, además de las de Segovia, Remedios y Yondó, en el rico noroeste antioqueño (ver Tabla 1).

Y Meta de nuevo con su timbre democrático: pasó de 7.829 votos por la izquierda en 1982, a 24.111 en 1986 y descendió, por la afrenta del plomo, a 4.584 sufragios en 1994 y sólo 189 en 1997, junto a la desaparición casi completa del Partido Comunista en la región.

Gráfico 1. Total nacional parcial víctimas UP 1984-1997 por años

* No Registra Fecha.

Fuentes: *Semanario Voz* - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

Y qué decir de Guaviare, donde se creció en un mil por ciento: 617 votos por el profesor Molina y 6.305 por Jaime Pardo Leal, para después quedar reducidos de nuevo a casi los mismos votos de 1982 en las elecciones de 1994 y terminar con apenas treinta y cinco votos en 1997 (ver Tabla 1).

De los 1.058 municipios que había en esos años de guerra sucia, 228 sufrieron el rigor del exterminio, es decir el 22% de todas las urbes. Prácticamente una de cada cinco poblaciones tuvo una víctima de la UP. El luto arrojaba a Colombia en un duelo que aún no termina.

Y vastas regiones martirizadas. Como el Meta, Llano adentro y Llano afuera. De sus veintinueve municipios, veintitrés tuvieron que llorar por lo menos un hijo de su tierra afecto a la UP. Este departamento dejó la más alta cuota

de sacrificio: 385 homicidios y desapariciones. Allí la UP se había convertido en la primera fuerza en prácticamente todas las comarcas, e iba segura a darle un vuelco total a la política en esa rica región. De qué otra manera se puede explicar el genocidio si no era porque los viejos cacicazgos se resistían, aupados desde el Estado, a darle paso a lo nuevo.

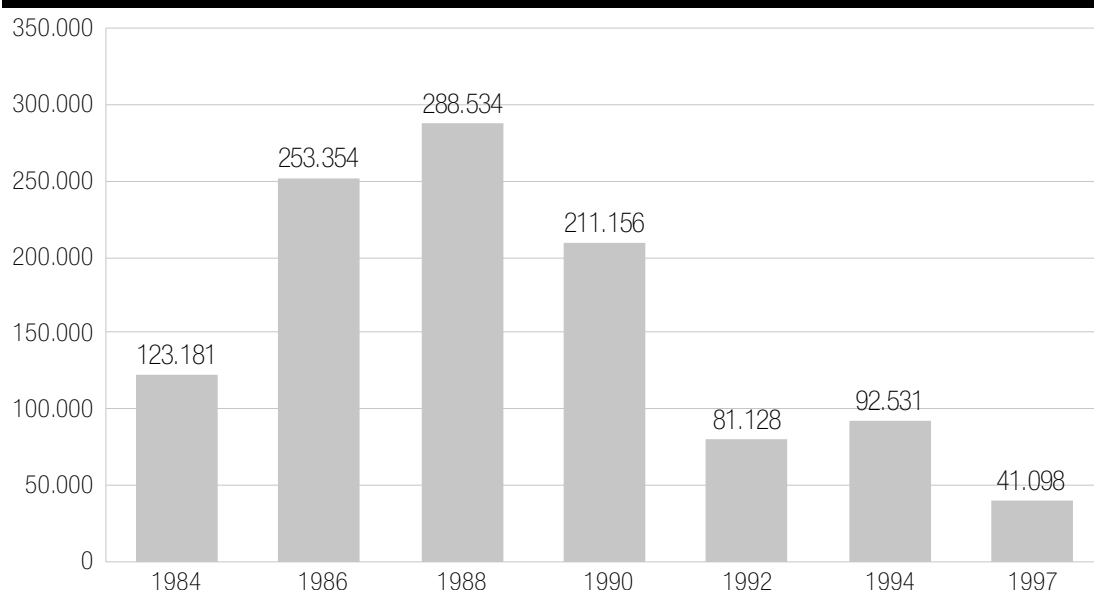
Antioquia fue otra tierra ensangrentada. Los muertos de la UP en el periodo aquí indicado, suman 457, especialmente en el Urabá, ese tapete verde enseñado en el golfo de su nombre, rica región bananera con una clase obrera pujante y politizada. El movimiento, que se nutría de las raíces del Partido Comunista y que perseveró en medio de la violencia para ser primera fuerza, logró ganar todas las principales alcaldías acudiendo a la lid de las urnas y no de las armas (ver Gráfico 2).

Tabla 2. Resultados electorales consolidados UP Asambleas Departamentales

“Votos UP Jurisdicción”	1984*	1986	1988	1990	1992	1994	1997
Amazonas		99			152		181
Antioquia	11.555	30.518	36.459	19.045	13.122	12.747	2544
Arauca	2.692	8.200	8.486	6305	7.830	9.147	10187
Atlántico	3.800	4.760	22.894	21.781	3.138	12.578	
Bogotá			35.829				
Bolívar	3.323		13.383	13.463			
Boyacá	1.266		2.821	6.572	1.926		
Caldas	1.522	12.991	17.287	12.365	1.859		
Caquetá	5.848	17.357	7.627	6.638	3.454	3.988	102
Casanare			695	695		1.936	
Cauca	4.347	8.586	6.516	4.772	2.706		840
Cesar	490		5.159		2.208		
Córdoba	678		11.703	11.458	1.692		
Cundinamarca	34.172	47.207	20.934	19.972	8.598	7.115	2872
Chocó	779	1.705	4.028	3.958	2.635	3.048	
Guainía		1.028		80			
Guajira		6.305		1.149	527	4.120	
Guaviare	617		1.635	831	661	809	35
Huila	6.087	12.679	8.117	5.643	3.198	5.897	2521
Magdalena	752		2.064	5.668	2.809		
Meta	7.829	24.111	14.356	7.121	4.688	4.584	189
Nariño	1.937		12.426	10.281	2.099		902
Norte de Santander	1.979	4.842	4.750	6.366	4.726	2.459	1957
Quindío	1.059	3.542					670
Putumayo	195		2.353	5.013	1.658	1.444	
Risaralda	2.907	4.872		5.702		2.440	
San Andrés y Providencia				9.788			
Santander	6.841	29.471	17.919	8.526	5.182	8.835	10912
Sucre	342	585	1.394	7.777	1.631		
Tolima	10.648	17.306	12.748	9.917	4.500	7.877	3479
Valle del Cauca	11.516	15.128	16.076	270		3.507	3707
Vaupés		417	162		35		
Vichada		1.645	713		94		
Totales UP + Coaliciones	123.181	253.354	288.534	211.156	81.128	92.531	
Totales UP	49.313	166.461	63.162	36.173	43.694	59.580	40.917

*1984 corresponde al Frente Democrático

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.

Gráfico 2. Votación Asambleas Frente Democrático-UP 1984-1997

Nota: la UP aparece electoralmente en 1986.

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.

A pesar de la razia el movimiento pervivía en el alma de centenares de miles de colombianos. No de otra manera se explica que después del magnicidio de Jaime Pardo Leal el 11 de octubre de 1987, la UP en las elecciones siguientes de 1988, para asambleas departamentales, obtenía 288.534 votos, 35.180 papeletas más para la misma corporación en las justas de 1986 cuando se lograron 253.354 sufragios. Se necesitaba mucho valor civil para el empeño de sostener el proyecto en las difíciles condiciones represivas de entonces (ver Tabla 2 y Gráfico 2).

La guerra sucia pasó la cuenta de cobro contra el movimiento popular. Miles de simpatizantes de la UP debieron abandonar sus tierras en un desplazamiento enorme para salvar sus vidas. El terror daba sus frutos en aquellas regiones donde la UP era primera fuerza (ver Gráfico 3) y que se victimizó masivamente con sesenta y cinco masacres contra el movimiento en menos de diez años (ver Gráfico

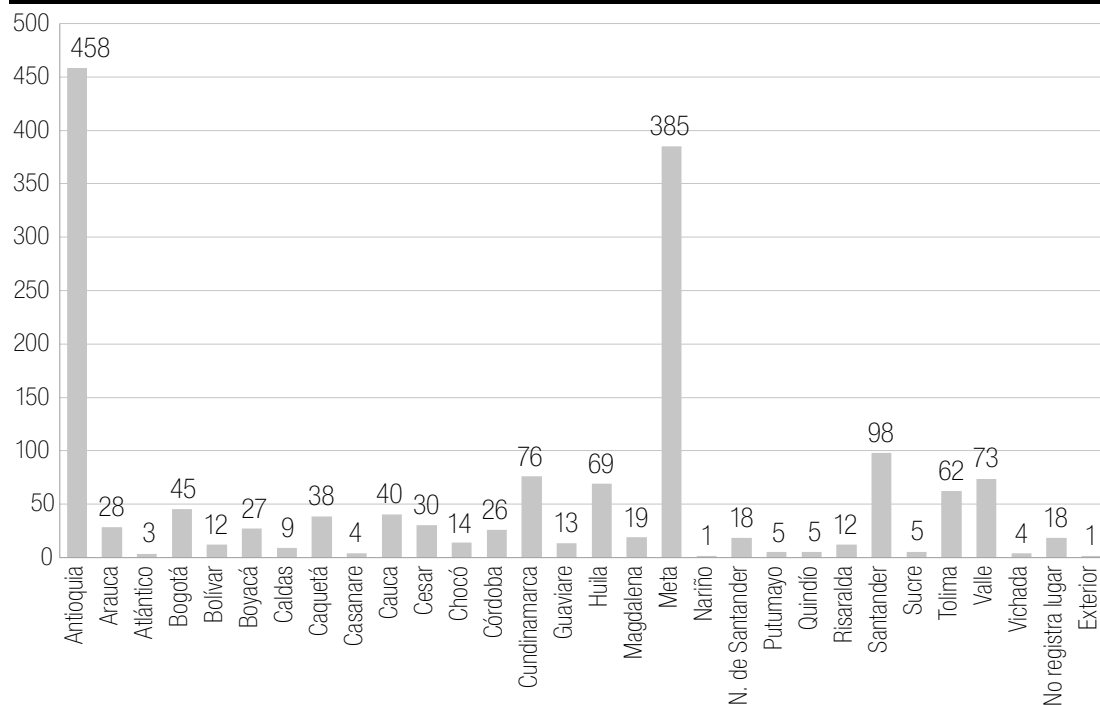
4). Entonces las cifras electorales comenzaron a caer hasta llegar a los 34.457 votos obtenidos por Alberto Mendoza Morales, el último candidato presidencial apoyado por la UP en 1994. Apenas el 10% de los votos alcanzados por Jaime Pardo Leal ocho años atrás (ver Tabla 1).

Ernesto Samper, a la sazón director del Partido Liberal, anotó en forma dramática el 29 de abril de 1987, que los concejales de la Unión Patriótica asesinados correspondían al triple de los concejales liberales caídos en el periodo que se conoce como La Violencia, que dejó trescientos mil muertos de 1946 a 1953.

Según los cuadros que se publican aquí, la UP perdió en una década 145 concejales, todos asesinados en la campaña de exterminio, lo que significan catorce por año, más de un líder cada mes.

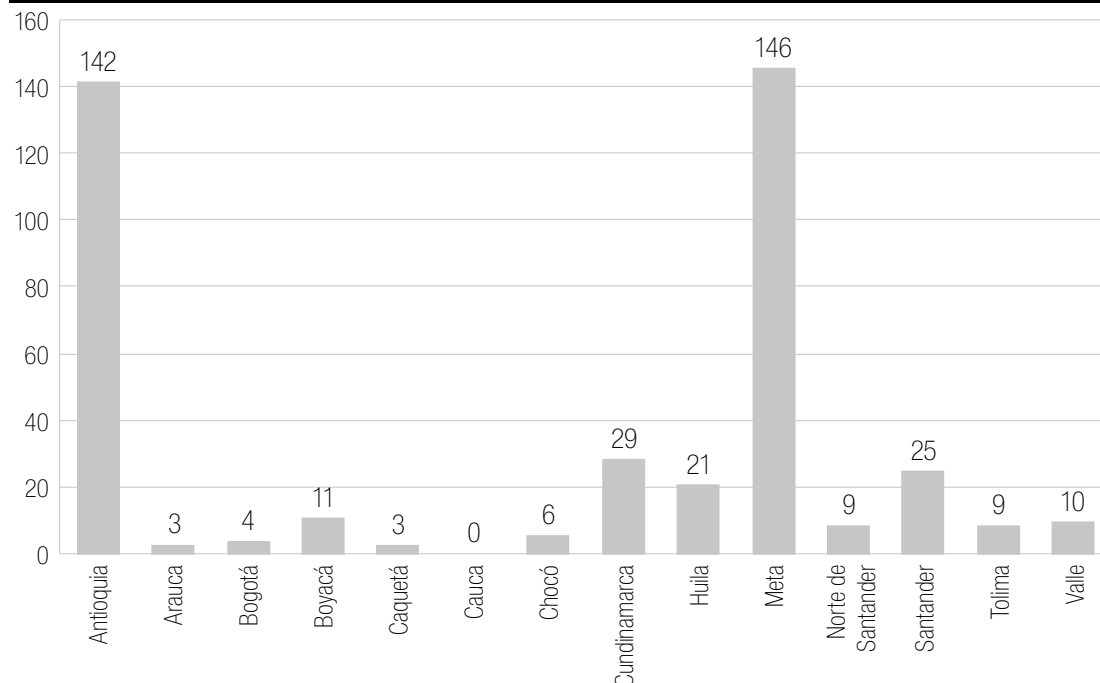
Se quería impedir a toda costa que la UP tuviera representación en las instituciones del Estado o en los cuerpos colegiados: quince alcaldes en ejercicio, nueve

**Gráfico 3. Total nacional parcial víctimas
UP 1984-1997 por departamentos**

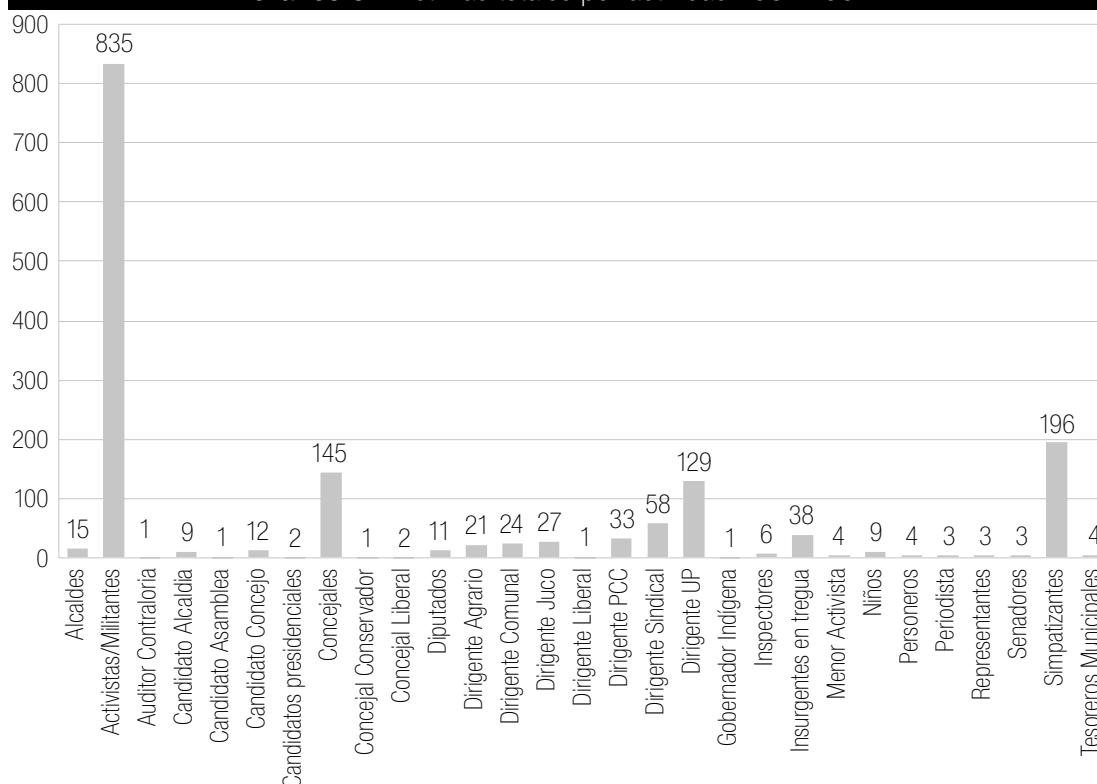


Fuentes: *Semanario Voz* - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

Gráfico 4. Masacres nacional parcial 1984-1997



Fuentes: *Semanario Voz* - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

Gráfico 5. Víctimas totales por actividad 1984-1997

Fuentes: *Semanario Voz* - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

candidatos a alcaldías, once diputados, doce candidatos a asambleas, tres representantes a la Cámara y tres senadores de la República cobró la racha de homicidios.

Entre muertos y desaparecidos las estadísticas, según las fuentes citadas, hablan de 505 dirigentes políticos, sindicales, comunales, agrarios y estudiantiles a quienes se les segó la vida por pertenecer a la Unión Patriótica. Es decir, decenas de cuadros calificados y cuya formación se decantó a lo largo de años fueron eliminados de un tajo, golpeando todo ese tejido social que contribuyeron a construir (ver Gráfico 5).

Citemos sólo el caso de Urabá, donde la UP fue primera fuerza. En 1997 no quedó un solo miembro del movimiento en la región. Los últimos concejales que con valor se mantenían representando a

la agrupación en el Concejo de Apartadó se vieron obligados, por la presión paramilitar y de agentes del Estado, a abandonar la región el 18 de octubre de 1996.

“A la UP en Urabá no la pudieron derrotar políticamente y acudieron a la barbarie para eliminarla”. Así lo dejaron claro varios concejales que el 17 de febrero de 1997 ofrecieron una rueda de prensa en la sede nacional de la UP en Bogotá, según lo relata el *Semanario Voz*. “Somos veinticinco o treinta concejales que no podemos estar al frente de nuestros proyectos a causa del paramilitarismo”, dijo José Germán, el vocero de los ediles desplazados. Recordaron el Plan Retorno, auspiciado por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, que consistía en preparar las condiciones para que volvieran los antiguos caciques

del bipartidismo a través de la ofensiva paramilitar con la complicidad de las Fuerzas Armadas.

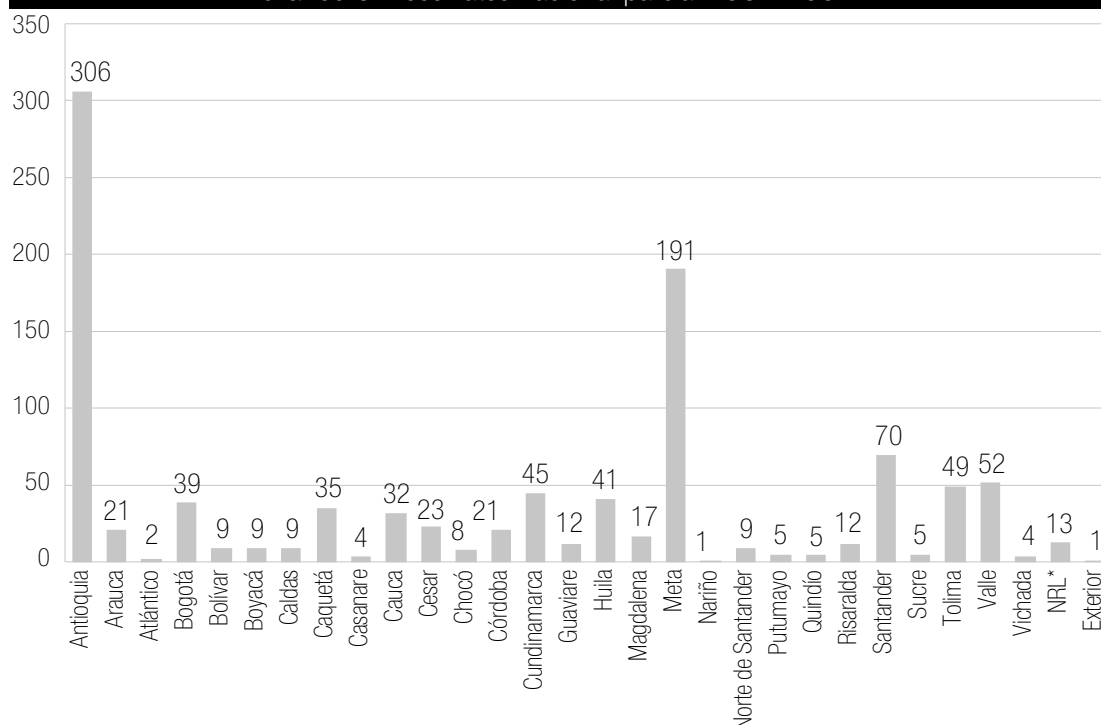
“Mientras se produce el desplazamiento (mil trescientos upecistas están hacinados en Medellín), de otro lado el territorio es copado por personas que manifiestan públicamente estar de acuerdo con el paramilitarismo que en Urabá comanda Carlos Castaño”, denunció José Germán en aquella dramática rueda de prensa. La llegada de esas personas se produjo tras una gestión de compra venta de tierras, que cada día que pasaba iba dejando en manos de los partidarios de la vieja política la región de Urabá. Y recordaban estos concejales hace ya catorce años, que “es el cobro que nos están pasando por haber realizado una gestión administrativa que

se palpa en obras de desarrollo rural y urbano, en empleo y mejoras salariales obtenidas a través de la lucha sindical; no podrían haberlo hecho de otra manera que no fuera el uso indiscriminado de la violencia envuelta en una política de tierra arrasada”.

Con toda razón declararon, entonces, que las elecciones de octubre de 1997 para la Asamblea de Antioquia y concejos municipales de Urabá estaban viciadas de ilegalidad, al no participar la que fuera la más importante fuerza política de la región: la Unión Patriótica.

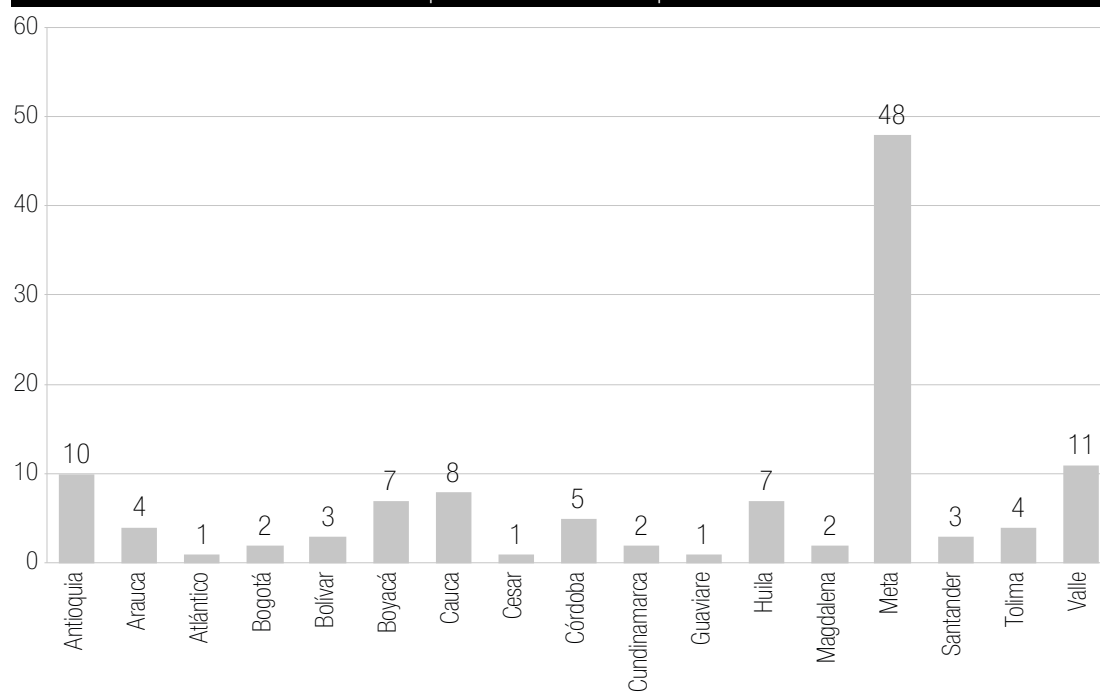
Del total de víctimas registradas en este estudio, 121 corresponden a la modalidad de desapariciones forzadas, lo que indica que el mayor número corresponde a asesinatos, entre ellos los colectivos como las masacres, que equivalen

Gráfico 6. Asesinatos nacional parcial 1984-1997

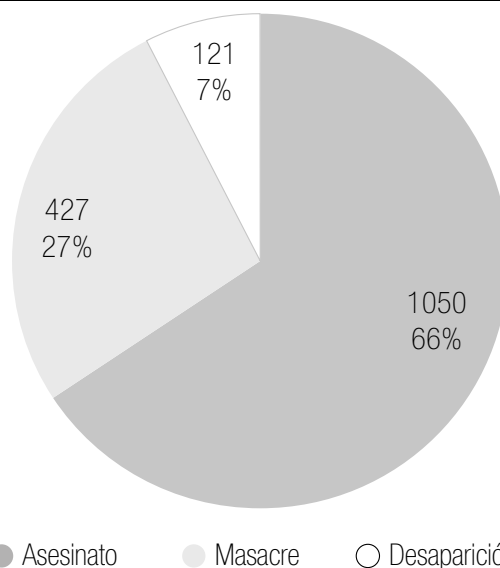


* No Registra Lugar.

Fuentes: *Semanario Voz* - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

Gráfico 7. Desapariciones nacional parcial 1984-1997

Fuentes: *Semanario Voz* - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

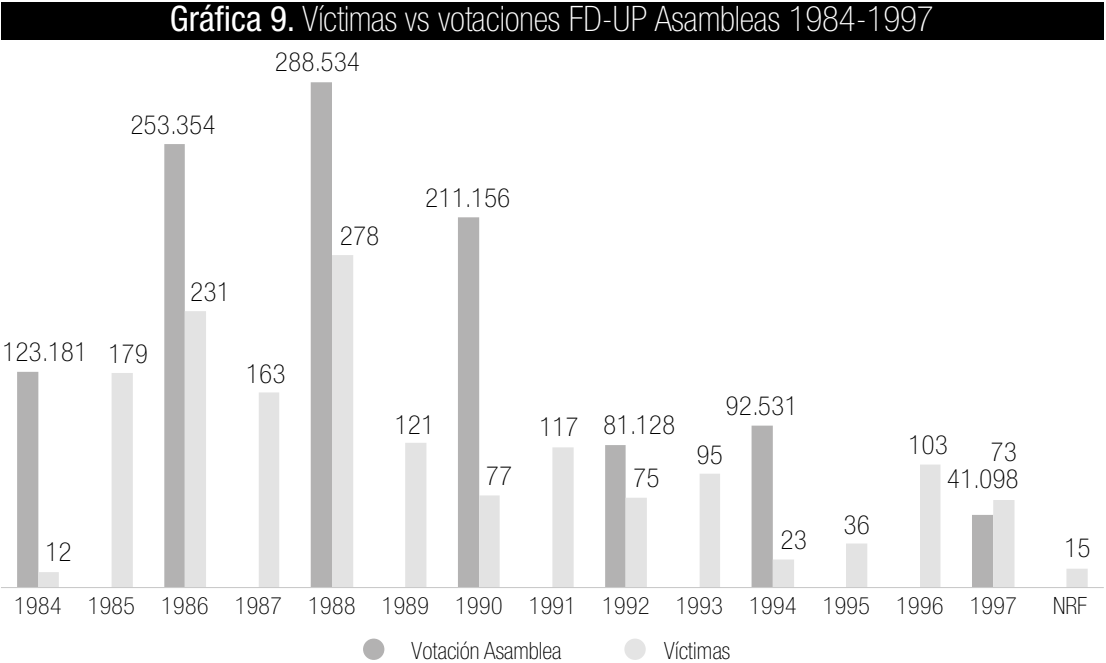
Gráfico 8. Total de víctimas UP por tipo de crimen 1984-1997

Fuentes: *Semanario Voz* - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

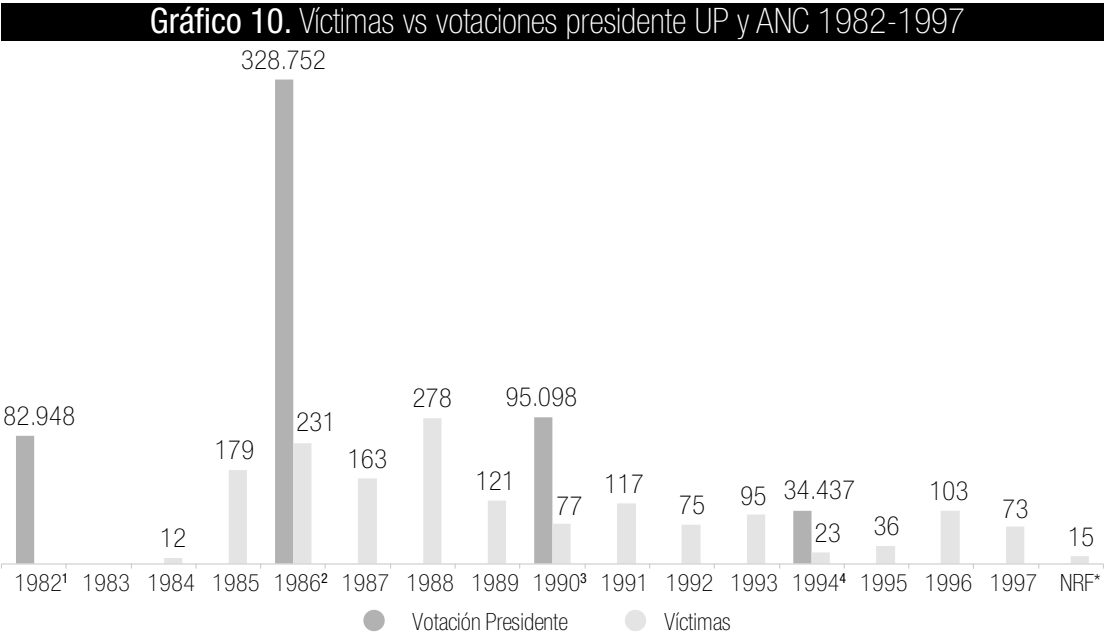
al 27% y los homicidios al 66% (ver gráficos 6, 7 y 8).

Los gráficos 9 y 10 revelan la relación víctimas y votaciones para Presidencia,

Asamblea Nacional Constituyente, y elección de diputados. Todos muestran una correlación semejante: mientras subía la votación de la UP, crecía el número



Fuentes: *Semanario Voz* - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).



1 Gerardo Molina, 2 Jaime Pardo Leal, 3 Asamblea Nacional Constituyente, 4 Alberto Mendoza

* No Registra Fecha.

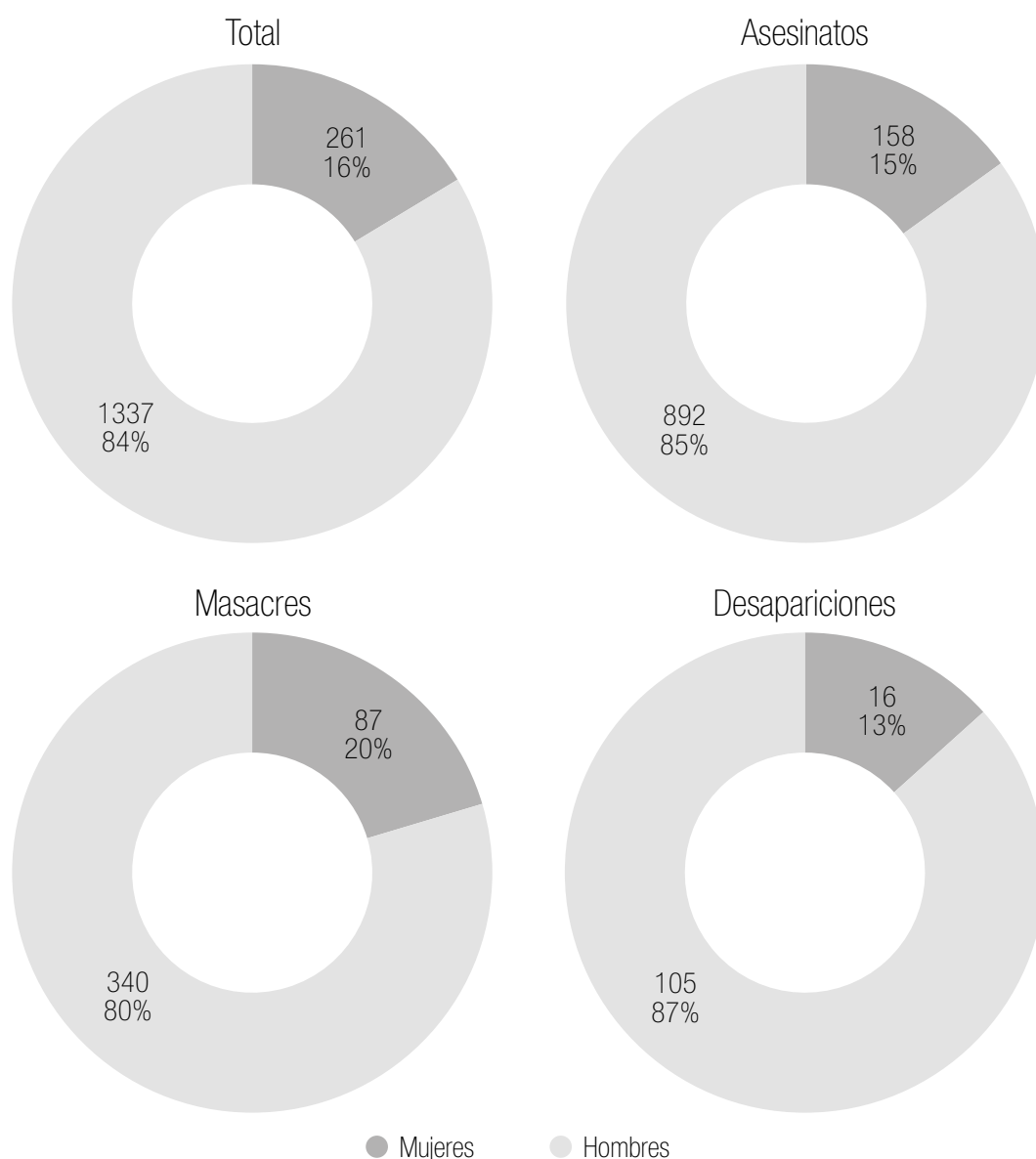
Fuentes: *Semanario Voz* - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

de homicidios y desapariciones. Y mientras bajaba la cifra de los sufragios así mismo descendían los crímenes, en una macabra ofensiva hasta hacer descender la participación electoral del movimiento a sangre y fuego. Llama la atención la votación por Pardo Leal en 1986 que salta, de los 82.948 votos obtenidos por Gerardo Molina, a 328.752 sufragios, con

una cifra de 231 asesinatos y desapariciones perpetrados en ese año. Dicha cifra descendió a veintitrés muertos cuando el candidato de la UP a la presidencia, Alberto Mendoza Morales, obtuvo apenas 34.437 votos, en una relación casi matemática del 10%.

El Gráfico 11 muestra cómo el mayor porcentaje de víctimas en el periodo analizado corresponde a hombres. Las

Gráfico 11. Víctimas total parcial por género 1984-1997

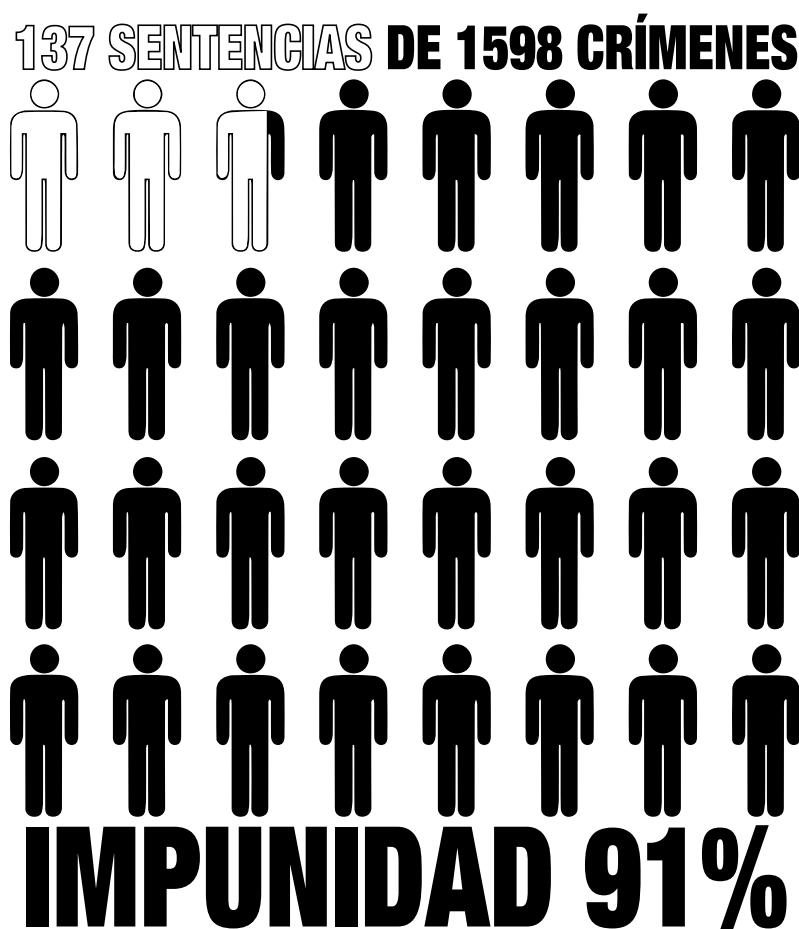


Fuentes: *Semanario Voz* - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

mujeres fueron afectadas en un 16% del total de víctimas, número que se eleva a 20% en la modalidad de masacres, puesto que en los crímenes colectivos los homicidas atacaban por lo general en forma indiscriminada.

La situación de impunidad es tan desastrosa, que si tenemos en cuenta que desde 2007, cuando entró a operar en la Fiscalía General de la Nación el mecanismo de urgencia para atender el caso de la UP, a abril de 2011 sólo se habían dictado 137 sentencias, es decir veintisiete por año; de modo que resolver los 1.598

homicidios y desapariciones que registra este libro demandaría sesenta años. Cuatro generaciones de jueces y por lo menos quince fiscales generales. Ni pensar en las tres mil víctimas de la UP que señalan algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Una situación semejante mantendría ocupados a los organismos del Estado, que velan por estos asuntos, por lo menos un siglo. Cien años de espera para las familias en su legítima búsqueda de justicia, verdad y reparación integral. El horror de la impunidad.



Fuentes: *Semanario Voz* - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

4

Esperanza y tragedia de un pueblo



Página anterior: Las primeras demostraciones de apoyo popular. Concentración el 5 de junio de 1985 en la vereda Peroles, corregimiento de El Centro, Barrancabermeja, en pleno Magdalena Medio.
(Foto: *Semanario Voz*)

“**P**or favor, es urgente, me van a matar, hagan algo”. La voz angustiada de la concejal de Bogotá, Aída Abella, la escuchaban en ese momentos miles de radioyentes cuando llamó desesperada al programa de noticias “Caracol 6 a.m. 9 a.m.”.

—Doctora Abella, díganos que está pasando, reclamaba al otro lado de la línea el director del noticiero, Darío Arizmendi.

El 7 de mayo 1996, a las siete y treinta y cinco minutos de la mañana, Abella, presidenta nacional de la Unión Patriótica, se vio cara a cara con la muerte. Cuando se dirigía a su oficina con los escoltas, a la altura de la calle 137 con Autopista Norte de la capital del país, un sicario desde otro vehículo, blandiendo una descomunal bazuca, apuntó al cuerpo de la líder opositora.

Los dos intentos por accionar el arma fallaron, lo que permitió al equipo de seguridad de Abella escabullirse en medio del pesado tráfico.

Aída Abella, pocos días después del fallido atentado y como centenares de miembros de la Unión Patriótica, no tuvo más remedio que buscar el camino del exilio junto con su pequeña hija, para salvar su vida.

Desgraciadamente miles de ciudadanos inermes que habían decidido hacer parte de las filas del movimiento

que naciera en 1985, tras los llamados Acuerdos de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, en búsqueda de la paz, siempre esquivada en medio siglo, fueron ultimados en lo que es considerado como un verdadero genocidio.

Aída Abella denunciaba el 1° de marzo de 1994 ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el asesinato de 2.339 militantes de la Unión Patriótica.

Y a la extensa lista de atentados contra la vida habría que sumar las desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y desplazamientos, que se cuentan por miles.

Los crímenes contra el joven movimiento, que brotaba como el más audaz experimento para cambiar las costumbres políticas y construir una sociedad más tolerante, tuvieron una de sus más dramáticas expresiones con el asesinato de centenares de líderes populares, quizá en el peor de los magnicidios que haya padecido el continente en el último siglo. En esta investigación se da cuenta de cerca de seiscientos cuadros asesinados en menos de un lustro, una verdadera catástrofe histórica. Entre ellos dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, acribillados respectivamente el 11 de octubre de 1987 y el 22

de marzo de 1990; seis congresistas, el último de ellos el senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994; decenas de alcaldes, diputados, concejales y dirigentes sociales de todo nivel.

“Con el magnicidio no se busca la aniquilación de una persona, sino de un proyecto, de un símbolo. El asesinato de un líder es, primero que todo, un mensaje. Su impacto va mucho más allá del ámbito familiar de dolor y las lagrimas, es una acción de carácter político-social que tiene como objetivo central la fractura de la identidad nacional”, señala el investigador social Óscar Garrido.

Se considera magnicidio al asesinato u homicidio de una persona importante, usualmente una figura política. El magnicida suele tener una motivación ideológica o política, y la intención de provocar una crisis o eliminar un adversario que se considera un obstáculo para llevar a cabo sus planes.

No se busca cosa diferente que golpear a toda una comunidad, de causarle extremo dolor, y lo que es más, aterrorizarla para que se aleje del entorno político de la víctima, destruyendo sus sueños de un país mejor, de tener una representación superior en su partido político, su gremio, su comunidad.

En Colombia, por ejemplo, la barbarie contra el tejido social tiene una de sus peores muestras en el asesinato de sindicalistas. La cifra de líderes obreros asesinados, en las dos últimas décadas, pasa de 2.500, la más alta del mundo. Sólo en 2010 perdieron la vida, a manos de paramilitares o agentes del Estado, cuarenta y ocho dirigentes sindicales.

La sociedad bien sabe lo que cuesta producir un cuadro político o social,

aquel ciudadano que por su inteligencia y pujanza sobresale en el medio, no para separarse del mismo, sino para convertirse en vocero de sus aspiraciones y dispuesto a los más altos sacrificios para hacer avanzar los procesos sociales. De ahí que su eliminación violenta supone el más grave ataque a todo el conjunto de una comunidad.

Los delitos de magnicidio no pueden prescribir. Se consideran como de lesa humanidad, es decir, ataques al conjunto universal de los seres humanos y merecen castigo y acciones del Estado hacia la verdad, justicia y reparación integral, así como garantías de no repetición.

Democracia y genocidio no van de la mano

¿Qué se buscaba con el exterminio de la Unión Patriótica? Iván Cepeda, hijo del senador Manuel Cepeda, actual representante a la Cámara por Bogotá y director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), lo resume así:

“El genocidio practicado contra la Unión Patriótica se inscribe en el proceso de exterminio de fuerzas políticas de oposición en el mundo. Se trata de un caso paradigmático de aniquilación de los miembros y líderes de un grupo en razón de sus convicciones ideológicas, así como de la persecución de sus simpatizantes y la destrucción de su entorno social”.

Y tipifica tres rasgos esenciales de estos asesinatos masivos. En primer lugar, la intencionalidad de los autores de la cadena de acciones criminales ha sido acabar con el grupo político, o al menos, expulsar de la vida pública a sus

sobrevivientes y a las bases sociales que han resistido la ola de violencia. Por esta circunstancia, los familiares de las víctimas directas y los sobrevivientes del movimiento han reclamado que el caso sea tipificado como un genocidio por razones políticas.

En segunda instancia, es notorio que se trata de un proceso de exterminio de una fuerza política legal en condiciones de un Estado considerado democrático y en el que se supone la existencia de una institucionalidad ajustada a las normas del derecho.

Y en tercer lugar, culmina Iván Cepeda, cabe destacar que los graves hechos de persecución se han llevado a cabo durante un prolongado periodo que abarca cinco lustros y seis gobiernos de diferente filiación política, lo que demuestra que la intencionalidad persecutoria ha perdurado en el tiempo y ha tenido unas consecuencias determinadas para el grupo político y para la convivencia social en Colombia.

En 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó los principios del Derecho Internacional y proclamó la Resolución 96 (I) sobre el crimen de genocidio, que define como “una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros”, entre ellos los “raciales, religiosos o políticos”, instando a tomar las medidas necesarias para la prevención y sanción de este crimen.

La definición de genocidio plasmada luego en la Convención de 1948 ha sido acogida en el Artículo 4° del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (1993), el Artículo 2° del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1994), y el

Artículo 6° del Estatuto de Roma (1998), por el que se creó la Corte Penal Internacional, de la cual es signataria Colombia.

Estos crímenes siempre serán objeto de examen por la justicia internacional hasta hallar, juzgar y condenar a los culpables.

Los estudiosos del tema señalan que el genocidio o asesinato en masa también se diferencia del asesinato en serie, que consiste en el asesinato sucesivo y periódico de personas aisladas, mientras que el genocidio es “una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros”, de acuerdo con la Asamblea General de Naciones Unidas.

El genocidio tiene un carácter masivo, por lo que con frecuencia necesita de la colaboración efectiva de una estructura social. En este sentido vale la pena mencionar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 23 de junio de 2010, en el caso del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas.

La Corte dio por probados hechos que el Estado se negaba a aceptar, entre ellos la existencia de una “estructura organizada que determinó, planificó y llevó a cabo la ejecución del senador Cepeda Vargas (párrafo 101)”, en la que habrían participado agentes estatales como autores intelectuales, así como jefes y miembros de uno o varios grupos paramilitares (párrafo 114), quienes habrían actuado en coordinación para perpetrar el crimen.

Frente a esta estructura compleja de participación criminal, la Corte determinó que el Estado colombiano está obligado a “desentrañar las estructuras que permitieron las violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias (párrafo 118)”, al tiempo que determinar “los patrones de

actuación conjunta y todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades (párrafo 119)".

Iván Cepeda cita el Plan Esmeralda (1988), que tuvo por objeto barrer con la influencia de la UP y el Partido Comunista en los departamentos del Meta y Caquetá; dos de las regiones en las que se obtuvieron los mejores resultados en los comicios, superando incluso a los partidos liberal y conservador.

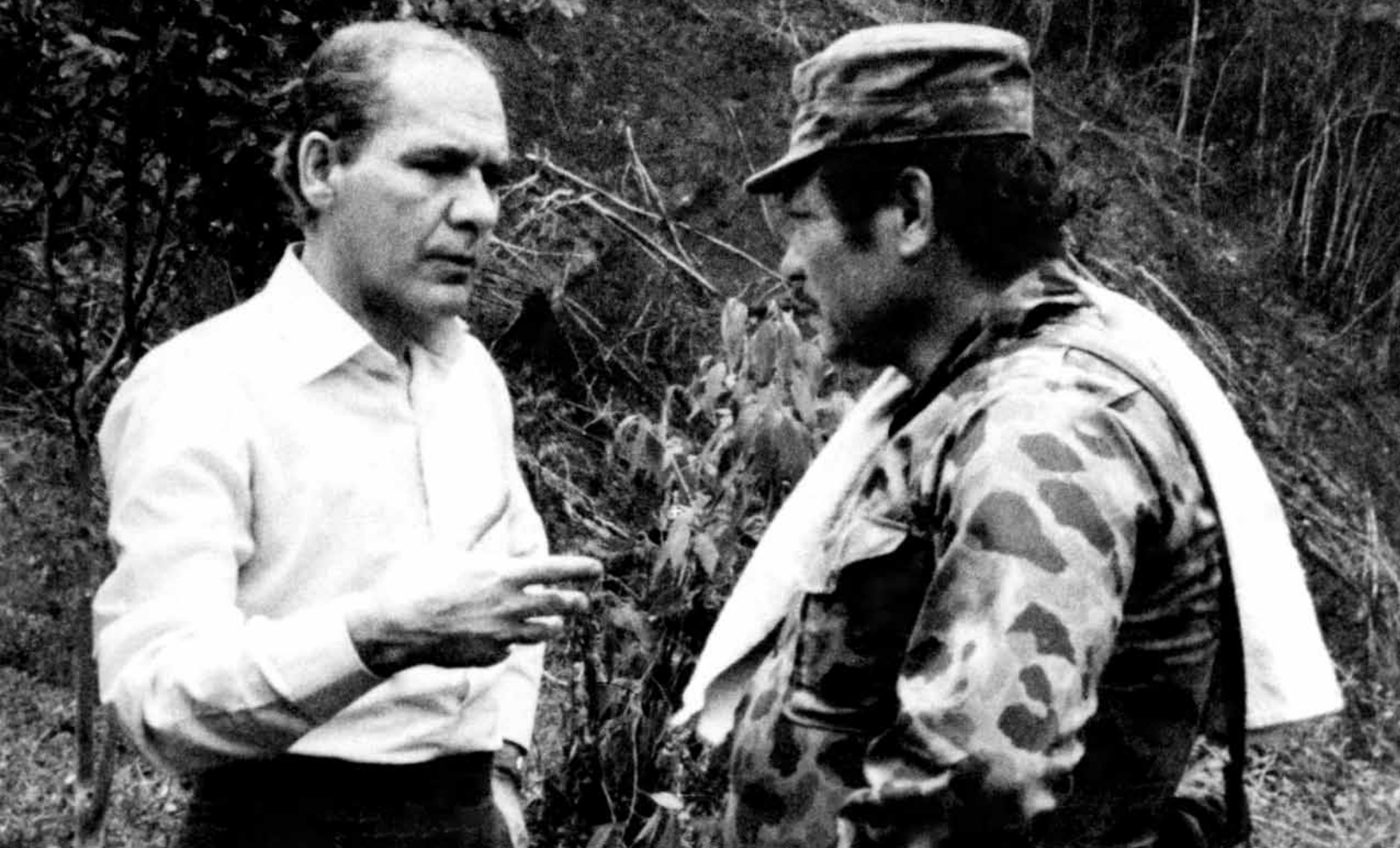
Citemos dos casos emblemáticos observados en esta investigación y basados en los datos electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que prueban el aserto de Iván Cepeda y sobre los cuales volveremos más adelante en referencia a consolidados departamentales y que también se pueden observar en detalle en el capítulo tercero, *Las cifras del horror*. Cabe anotar que, además de los dos casos que se describirán a continuación, lo mismo se puede ver en todos los municipios donde la UP gozaba de gran prestigio.

En Apartadó, la capital del Urabá antioqueño, la UP fue la primera fuerza electoral desde 1986 hasta 1994. En 1986, cuando apareció el movimiento, obtuvo 5.968 votos y la mayoría en el Concejo Municipal. En 1994 la votación bajó dramáticamente a 1.495 sufragios y en las elecciones para la Asamblea de Antioquia de 1997 sólo consiguió 58 votos. Los muertos de la UP a manos de paramilitares y agentes del Estado, en los años abarcados en esta búsqueda, suman 210 en Urabá, incluidas las once víctimas de la masacre del barrio Policarpa de Apartadó, ocurrida el 3 de abril de 1996. Es decir, una verdadera cacería hasta hacer desaparecer el grupo en esa zona.

En Segovia, Antioquia, la UP se había convertido en la primera fuerza en 1988, desbancando al Partido Liberal en las primeras elecciones para alcalde. El municipio eligió como primera autoridad civil a la líder de ese movimiento, Rita Ivonne Tobón, con 2.250 votos, el 54,36% del total. Ese mismo año, el 11 de noviembre, paramilitares y agentes armados del Estado masacraron a 43 miembros y simpatizantes del nuevo movimiento, en una de las peores masacres en la historia reciente del país. Los asesinos, antes de marcharse del pueblo, dejaron una consigna: "No vuelvan a votar por la Unión Patriótica, pues eso les causa la muerte". En las elecciones de 1991, las primeras estrenando Constitución, sólo 193 segovianos votaron por las listas de la UP para Senado y Cámara. Sobra cualquier comentario.

Jahel Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar que lleva, junto con la Comisión Colombiana de Juristas, una querrela contra el Estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el genocidio de la UP, indica en representación de las víctimas que los dirigentes de izquierda denunciaron que mandos militares habían trazado otros dos planes -la Operación Cóndor (1985) y el Plan Baile Rojo (1986)-, concebidos para socavar las estructuras de la Dirección Nacional del movimiento y asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas.

Estos planes tuvieron diferentes pautas de persecución que siguen siendo utilizadas hasta hoy. En algunas de las regiones de amplia adhesión al grupo, la estrategia de aniquilación tomó la forma de un proceso ascendente. Primero se intentó eliminar a las bases sociales y a



John Agudelo Ríos, presidente de la Comisión Nacional de Paz y "Manuel Marulanda Vélez", jefe máximo de las FARC, conversando en algún lugar de La Uribe, tras la firma de los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz, el 28 de marzo de 1984. (Foto: Margarita Vidal, exclusiva para Voz)

las estructuras locales, para luego arrinconar y liquidar a los líderes regionales. Para lograr estos fines se aplicó la estrategia de la conformación y crecimiento de grupos paramilitares que actuaban bajo el amparo oficial. Las masacres como espectáculos de terror tuvieron como resultado el aislamiento social de los sobrevivientes, o el desplazamiento de quienes se negaban a abandonar las regiones.

En determinados sitios fue la Fuerza Pública la que actuó directamente, en otros lo hicieron los grupos paramilitares o el Ejército usando prendas distintivas de los paramilitares.

Los homicidios llevados a cabo en los municipios perseguían, no sólo erradicar la competencia electoral que

representaba la militancia de izquierda, sino además saldar los conflictos sociales relacionados con los problemas laborales, de tenencia y acumulación de tierras, o de cobertura y costo de servicios públicos en el ámbito local.

Entre las víctimas, recuerda Iván Cepeda, se han contado personas que junto a su filiación política estaban vinculadas a sindicatos, eran miembros de movimientos cívicos y organizaciones comunitarias, educadores o personas que, en su mayoría, tenían simplemente una relación de simpatía con la organización. Como puede verse, la interpretación de que el genocidio de la UP ha sido una "cuenta de cobro" a la guerrilla encubre la desarticulación y destrucción de procesos de oposición social.

Para Cepeda, finalmente, mientras continúe impune un hecho de la magnitud y el significado del genocidio prolongado de todo un grupo político, la sociedad colombiana no podrá ser considerada una sociedad auténticamente democrática. En este sentido, las políticas de reparación integral deben considerar el plano del resarcimiento individual de los miembros del grupo perseguido y sus familias, así como trascender a transformaciones del sistema político.

En Colombia es impensable el fin negociado de la violencia sin que el caso del exterminio de la Unión Patriótica sea reparado de una manera satisfactoria, y sin que quede inscrito en la memoria colectiva como algo que no puede volver a ocurrir nunca más.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió el caso colectivo No. 11.227 que presentaron la Dirección Nacional de la UP, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas. Se aportó una lista inicial de 1.163 miembros de la UP ejecutados extrajudicialmente entre 1985 y 1993. Igualmente, listas de 123 personas desaparecidas, 43 que sobrevivieron a atentados y 225 que recibieron amenazas durante el mismo periodo. En su informe de admisión (No. 5 del 12 de marzo de 1997), la CIDH señaló: “Los hechos alegados por los peticionarios exponen una situación que comparte muchas características con el fenómeno de genocidio y se podría entender que sí lo constituye, interpretando este término de conformidad con su uso corriente”.

Y agregó que los peticionarios han presentado argumentos que procuran establecer una práctica de asesinatos políticos en masa y la persecución extrema

de los miembros de la Unión Patriótica con la intención de eliminar físicamente al partido y de diluir su fuerza política.

En 2006, el proceso hacia una solución amistosa entre el Estado colombiano y las víctimas, de verdad, justicia y reparación integral, que hacía curso en la CIDH, quedó roto por la actitud poco amistosa del gobierno de Uribe. Su campaña electoral, en la primera reelección, estigmatizó a la UP con una cuña que la señalaba de nuevo como brazo armado de la guerrilla. Ahora las víctimas esperan el fallo de la Corte Interamericana, ya con el precedente del dictamen favorable del caso del senador Cepeda.

El nacimiento de un proyecto civilista

El genocidio de la UP no se puede entender si no se ahonda en los orígenes del movimiento y los precedentes en la búsqueda de una paz duradera tras cerca de cincuenta años de guerra civil larvada.

Con la asunción del conservador Belisario Betancur al mando del Estado en 1982, el país comenzó a avizorar que sí era posible encontrar caminos hacia la reconciliación y el cese del conflicto armado, cuya última etapa se había reiniciado en 1964 tras el ataque de las fuerzas gubernamentales a las zonas campesinas de Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, llamadas de auto-defensa por sus pobladores y “repúblicas independientes” por el presidente Guillermo León Valencia, lideradas por un exguerrillero liberal que se hacía nombrar “Manuel Marulanda Vélez”.

De esas acciones nacerían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Posteriormente se crearían el

Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Ejército Popular de Liberación (EPL).

Tras dieciocho años de duros enfrentamientos sin que ninguno de los dos bandos venciera al otro, el presidente Betancur, apuntándole a una iniciativa en solitario, sin el aval de su propio partido y lo que es peor, del Establecimiento, decidió invitar al país a que lo acompañara en el propósito del entendimiento con los insurgentes, otorgándoles algo insólito en todos esos años de guerra: el reconocimiento político. En su discurso de posesión el 7 de agosto de 1982, Betancur anunció que en su Gobierno “no habrá una gota más de sangre y que se alce la bandera blanca de la paz”.

Tres días después, en el reconocimiento de las Fuerzas Armadas al mandatario, este reiteró su propósito de encontrar caminos de paz y reafirmó su voluntad de que no se derramara más sangre ni de soldados, ni de campesinos “ni de los guerrilleros que también son hermanos nuestros”.

Previamente, el 28 de julio las FARC habían dado a conocer un documento en que se dirigían al presidente electo Betancur: “en lo que respecta a nosotros diga cuándo comenzamos a conversar”, y recordaban que habían dialogado con la Comisión de Paz presidida por Lleras Restrepo. Finalmente, le decían al Presidente que como elementos para una solución pacífica al conflicto, se debía tener en cuenta una amnistía general para los alzados en armas y los presos políticos, la desmilitarización de las zonas agrarias y medidas sociales y económicas de fondo.

De esta manera comenzaba a abrirse paso la iniciativa de los alzados en armas en lo que llamarían el proceso

hacia la “apertura democrática” como base para allanar el camino de la paz y que recoge como su bandera el Partido Comunista. Este afirma que la Ley de Amnistía, que impulsó Betancur y fue finalmente aprobada por el Congreso en noviembre de 1982, era el primer peldaño hacia la apertura política. La amnistía permitió la libertad de la mayoría de los presos políticos condenados en sumarios Consejos Verbales de Guerra bajo la Administración de Turbay Ayala, que gobernó bajo el Estado de sitio y el Estatuto de Seguridad.

Turbay, dos meses antes de marcharse, decidió levantar el Estado de sitio, lo que traía el fin del Estatuto de Seguridad, periodo en el cual se conocieron las mayores arbitrariedades contra la ciudadanía y las libertades públicas.

La apertura política significaba también la desmilitarización de zonas campesinas y el desmonte de los grupos paramilitares, en especial de Muerte a Secuestradores (MAS) que perpetraba los peores crímenes en vastas zonas agrarias con la anuencia de los militares, como lo reconoció el Procurador Carlos Jiménez Gómez el 5 de febrero de 1983, en su informe sobre el citado grupo. El funcionario anotaba que su investigación “encontró en los distintos lugares que personas vinculadas directa o indirectamente a las Fuerzas Armadas se han dejado arrastrar por esta corriente”.

El XIII Congreso del Partido Comunista Colombiano, reunido en diciembre de 1980 y de cuyo Comité Central electo hacían parte los más destacados hombres de las FARC como “Manuel Marulanda Vélez” y “Jacobo Arenas”, entre otros (todos ellos se retiran del

partido en 1990), define que “el dilema es apertura democrática o lucha armada preponderante”.

“La opción del XIII Congreso fue por la apertura democrática y por ello venimos trabajando los comunistas consecuentemente”, señalaba Gilberto Vieira, secretario general del Partido Comunista en un editorial de *Voz* (febrero 10 de 1983).

Temas cruciales de la apertura democrática se relacionaban también con la elección popular de alcaldes y gobernadores, la eliminación de las talanqueras que quedaban del sistema bipartidista, la devolución de sus facultades a la rama legislativa arrebatadas por el Ejecutivo a través de decretos presidenciales, el acceso amplio de los sectores de oposición a la televisión, la modernización del sistema electoral, la plenitud de las libertades públicas y el respeto por la organización de los trabajadores, profundas reformas sociales y garantías de no volver a legislar a través del Estado de sitio. Este lo restableció de nuevo el presidente Betancur en abril de 1984 y sólo caería con la entrada en vigencia de la Constitución del 91.

Seis años después del reclamo de estas elementales pero decisivas fórmulas de cambio –indispensables para la vida democrática de cualquier Nación–, Bernardo Jaramillo, el inmolado candidato presidencial de la UP en una entrevista otorgada al autor de estas líneas y publicada en *Voz* el 14 de septiembre de 1990, todavía subrayaba que el Congreso del movimiento, reunido ese mes, había trazado como su línea central “seguir hasta lograr la apertura democrática”.

Las FARC eran de la misma idea. “Jacobo Arenas” en su libro *Cese al fuego*, indicaba lo siguiente: “Las conclusiones

de la Séptima Conferencia de las FARC (esta tuvo lugar del 4 al 14 de mayo de 1982, nota del autor) analizan la situación política nacional de la siguiente manera: ‘Es por eso que en las tesis decimos que nosotros estamos obligados a contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, al desarrollo de la política de convergencia, hoy de apertura democrática, en la lucha por una reforma de las costumbres políticas en Colombia, en dirección a la búsqueda de una salida inteligente de la crisis que vive la Nación...’”.

De manera que la izquierda, armada o no, no estaba exigiendo a cambio de cesar su lucha, el socialismo o un nuevo régimen radicalmente opuesto al imperante. Sólo medidas para hacer avanzar la democracia y crear posibilidades que condujeran a un cambio de las costumbres políticas, que permitieran, incluso a través de la lucha electoral, el acceso al poder de sectores diferentes a los partidos tradicionales.

Todo apuntaba, pues, si no a un pronto acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado, sí a un tratado mínimo que abriera caminos inexplorados hasta entonces que condujeran a una salida negociada al conflicto armado interno que desangraba a la Nación.

Como lo recuerda la politóloga Diana M. Moreno, del Grupo de Investigación de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional, en el artículo “Fase de la lucha social y política” –publicado en el libro *FARC-EP, 1958-2008–*, “en la Séptima Conferencia de la agrupación guerrillera, se toman dos decisiones aparentemente contradictorias: asumirse como Ejército del Pueblo (EP) y establecer como criterio político para el conjunto de

la organización, la búsqueda de una salida política al conflicto social y armado. Esta decisión la definen en el marco de una particular lectura que hacen sobre el contexto económico, social y político por el que atraviesa el país, la que les brinda las herramientas para proponer el proceso de apertura democrática”.

El 30 de enero de 1983 tiene lugar un acontecimiento de proporciones sísmicas en la vida política del país: ese día se reúne por primera vez la Comisión Nacional de Paz, nombrada por el propio presidente Betancur y el Secretariado de las FARC en algún lugar del municipio de Colombia, Huila, y tras vencer varios intentos del Ejército por malograr la cita.

Allí están presentes Otto Morales Benítez, el presidente de la Comisión, John Agudelo Ríos, Rafael Rivas Posada y el comunista autorizado por el PCC, Alberto Rojas Puyo. Por las FARC, “Manuel Marulanda Vélez”, “Jacobo Arenas” y Jaime Guaracas. En el comunicado conjunto, elogiado por Betancur, se plantean nuevas entrevistas y se solicitan reuniones con mandos militares, lo que nunca se dio.

“Debemos celebrar la propuesta para que, con la participación de todos los partidos y de las fuerzas progresistas del país, se establezca el marco de la nueva convivencia y de la paz política nacionales, atendiendo a los nuevos desarrollos democráticos que todos los sectores políticos vienen reclamando y predicando, desde hace varios años”, decía la declaración conjunta.

Morales Benítez dijo en un reportaje a *El Tiempo* que “los dirigentes de las FARC no son aventureros sino seres con

convicciones” y añadió que estaba “convencido que las FARC quieren la paz”.

El primer gran paso se había dado. Por primera vez, tras los bombardeos a Marquetalia que buscaban desalojar al “puñado de bandoleros”, como los medios conservadores calificaban a los campesinos, un Gobierno en la práctica le otorgaba estatus político al grupo alzado en armas y que contaba con un programa de reformas profundas de las estructuras del país.

Unos días antes y como previendo lo que se venía, ocurrió una extraña conducta. El 24 de enero había aparecido en la revista del Ejército un artículo del general Fernando Landazábal, ministro de Defensa, que era ácido sulfúrico puro al proceso de conversaciones con las FARC que apenas se iniciaba. “Las Fuerzas Armadas deben disponer su ánimo para una contienda de proporciones incalculables e imprevisibles que llevaría al país a una nueva fase de la violencia”. El país, que iba a saludar el encuentro de Colombia, Huila, entre la guerrilla y el Gobierno, condenó el llamamiento de guerra del ministro y rodeó al presidente Betancur.

Cinco meses después del histórico encuentro en Colombia, renuncia el presidente de la Comisión de Paz Otto Morales Benítez en carta al presidente Betancur. En ella afirma que “los enemigos de la paz están agazapados por dentro y por fuera del Gobierno” y sostiene que “esas fuerzas reaccionarias en otras épocas lucharon como hoy contra la paz”. Morales Benítez sindicaba al militarismo de impedir el diálogo con la guerrilla y confirmaba que existía un complot contra el proceso de apertura democrática.

La presión militar contra el diálogo tiene su aliado en la arremetida del MAS en diferentes regiones del país, con decenas de labriegos asesinados. Ochenta víctimas cobraron este y otros grupos de sicarios en diferentes zonas del país, en especial en el Magdalena Medio, después de la visita de Betancur a las regiones de Puerto Berrío y Cimitarra. Una advertencia clara de lo que vendría si el Presidente osaba continuar el proceso de conversaciones con la guerrilla.

La arremetida paramilitar parecía no tener límites, quedando bien atrás la promesa que un año antes hiciera el Presidente en la toma de posesión de que en su gobierno no se iba a derramar una gota más de sangre. Comparando el último año de Turbay con el primero de Betancur, en aquel hubo 368 víctimas de los paramilitares contra 683 del nuevo Gobierno, señala el *Semanario Voz* el 1° de septiembre de 1983, basado en datos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH). “Arrebatarse las tierras campesinas y aplastar toda la oposición es el objetivo del genocidio planificado por ganaderos y paramilitares”, denunció entonces Gilberto Vieira en la Cámara de Representantes en un debate realizado el 31 de agosto, que apenas si registró la prensa.

Las FARC, por su lado, insistían en proseguir el camino del diálogo abierto en Colombia. En un mensaje firmado por “Marulanda” a Betancur, le planteaban conversar directamente sobre la paz de manera urgente y de la necesidad de una tregua, así como actualizar la amnistía, castigo para el MAS, indemnización al campesinado víctima de la violencia, reformas sociales y una comisión que

vigilara los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla.

Betancur, a su vez, señalaba la necesidad de insistir en las conversaciones de paz con la guerrilla y reconocía el diálogo que se venía adelantando con los alzados en armas hacia la tregua, lo que provocó otra airada reacción del ministro de Defensa Landazábal, quien llegó a afirmar en la Cámara de Representantes, en otra demostración del poder autónomo de los militares y que presagiaba un estancamiento en el proceso que buscaba alcanzar un acuerdo con las FARC: “No podremos pactar con quienes nos exigen un alto al fuego..., no nos retiraremos de los campos..., no dialogaremos con la guerrilla..., no irá un hombre de las Fuerzas Armadas a la guarida de los facinerosos”.

En un arranque de fortaleza y asegurando que su propósito de paz se mantenía firme, Betancur le exigió la renuncia al general Landazábal por oponerse sistemáticamente a los Acuerdos de Paz con la guerrilla; fue nombrado como nuevo ministro de Defensa el general Matamoros y como comandante de las Fuerzas Armadas, Vega Uribe, quien inauguró el imperio de la tortura en 1978 y dirigió la Brigada de Institutos Militares (BIM), bajo el Estatuto de Seguridad. Tanto Matamoros como Vega eran de la misma línea de Landazábal y se oponían a la desmilitarización de las zonas de guerra, al desmonte del MAS y de las bandas paramilitares.

Mientras tanto, los gremios económicos del país y diarios como *El Tiempo*, se oponían abiertamente a la Comisión de Paz y atacaban la presencia de los comunistas en ella.

En medio de semejante panorama de provocaciones contra Betancur y su asediada Comisión de Paz, se produjo otro sismo que despejó el camino hacia un acuerdo con las FARC. Los medios anunciaron que había comenzado una nueva etapa de conversaciones y el centro del diálogo giraba en torno a un alto al fuego y la tregua, que venía proponiendo desde hacía un año el Estado Mayor de las FARC-EP, temas que podían conducir finalmente a un arreglo de paz. En efecto, el 28 de marzo de 1984, John Agudelo Ríos, presidente de la Comisión de Paz y como representante del Gobierno, firmó con “Manuel Marulanda”, por las FARC, el Acuerdo de Cese al Fuego, Tregua y Paz en algún lugar del municipio de La Uribe, Meta.

“El Gobierno considera que los acuerdos son una contribución real al sosiego de vastas comarcas colombianas. Y por estimar que es una hermosa y esperada noticia, así lo comunico a la Nación”, dijo en su alocución televisada el presidente Betancur.

Los comunistas, que iban a convertirse en la columna vertebral del movimiento político que naciera del tratado de La Uribe, la Unión Patriótica, señalaron, en un editorial firmada por Manuel Cepeda en *Voz*, que con “la aprobación oficial del acuerdo con las FARC, nos asomamos al inicio de una nueva situación política. El Gobierno está en un cruce de caminos. Puede abrir un nuevo capítulo histórico si se decide a marchar hacia la democratización del país. O puede desembocar en una nueva frustración, si no imprime los grandes cambios sociales, económicos y políticos que le reclama Colombia”. Lamentablemente ocurrió lo segundo.

A veces llegan cartas

Entonces el país entero comenzó a vivir el aire festivo de la paz. Todos los partidos políticos firmaron un llamamiento para respaldar la fecha histórica del 28 de mayo de 1984, día en que comenzaría la tregua acordada entre el Gobierno y los grupos guerrilleros, con la celebración de la Jornada por la Paz a través de acciones ciudadanas como marchas, foros, reuniones y cabildos populares. Pero antes, el 14 de mayo, las FARC-EP en un comunicado público, ordenaban un alto al fuego a sus veintisiete Frentes en un comunicado público.

Y de nuevo la cúpula militar pasó a la ofensiva contra su propio comandante en jefe, emitiendo circulares secretas a sus mandos para ponerle zancadilla al proceso considerado como “un retroceso en la lucha contra la subversión, una inmoralidad política y un duro golpe contra la moral de las tropas siempre dispuestas al combate”, señala Diana M. Moreno en la obra citada, *FARC-EP 1958-2008*.

Se habló de una orden secreta del general Vega Uribe, que buscaba que la tropa desarmara a los guerrilleros, lo que significaba un golpe a la tregua pues no se había acordado la entrega de armas. La circular era un verdadero atentado contra los esfuerzos de paz y así debió operar como lo indicamos más adelante, basados en un balance oficial de los operativos militares de 1986.

“[...] las siguientes órdenes e instrucciones en materia de operaciones, acción psicológica y entrenamiento, deberán ser puestas en práctica por los diferentes comandos y miembros de las Fuerzas Militares. OPERACIONES: 1. Las Fuerzas



"Manuel Marulanda", Jaime Pardo Leal y "Jacobo Arenas", el 2 de marzo en La Uribe. (Foto: "Braulio Herrera", Voz)

Militares continuarán tal como se ha dispuesto, intensificando hasta el momento en que las organizaciones subversivas FARC tomen su determinación de cese al fuego, operaciones de inteligencia, de combate y de control militar, buscando a toda costa debilitar al máximo su accionar subversivo...", rezaba uno de los pasajes del instructivo.

La circular publicada por la prensa en vísperas del 28 de mayo de 1984, día fijado para que entrara en vigor el cese al fuego según los Acuerdos de La Uribe, señalaba también que los operativos

debían continuar so pretexto de que unos grupos entraban en tregua y otros no. Pero en esencia Vega Uribe, autor del documento, se apoyaba en el decretado Estado de sitio para señalar el objetivo político de los operativos: perseguir a los guerrilleros por porte ilegal de armas y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Mientras el Gobierno firmaba los acuerdos con la guerrilla sin exigir la entrega de las armas, los mandos militares defendían la legalidad represiva contra el proceso de paz. Por su parte, el general Landazábal decía que "en la

guerra contra la insurgencia no hay sustituto para la victoria militar”, pese a los cambios en la situación política del país; por eso proseguían los operativos cívico-militares, la propaganda en los medios con loas a las Fuerzas Armadas y exigiendo el rearme militar. Y empezaba a hacer carrera la tesis del exembajador norteamericano, Lewis Tambs, de que guerrilla y narcotráfico son una sola cosa.

¿Cómo no preguntarse, ante esta evidencia, si los hechos que siguieron al cartabón operativo ordenado desde tan altas esferas no empezaban a configurar el cuadro de una política criminal de Estado, castigando con el asesinato a los activistas desmovilizados de las FARC que se daban a la tarea de hacer política sin armas, cumpliendo el pacto firmado en las estribaciones de La Uribe? Obviamente, aquí no se trataba de los famosos hechos aislados de algunas ovejas descarriadas cuyas acciones no podían comprometer a la institucionalidad.

El memorando cristalizaba la mentalidad castrense de no permitir ningún acuerdo con los alzados en armas, para quienes sólo era aconsejable responder con el fuego. Mentalidad que se reveló sin ningún ropaje el 28 de junio de 1984, cuando *El Tiempo* publicó otra circular secreta en la que los generales Matamoros y Vega se apresuraban a declarar fallida la tregua, cuatro semanas después de entrar en vigencia y exhibían el más profundo odio a los jefes guerrilleros, en especial a “Manuel Marulanda Vélez”. El mismo general Matamoros declararía a los medios, unos días después de aparecer esa otra circular interna, que “inicialmente la violencia fue un problema de los partidos tradicionales y después

ha sido un problema del Partido Comunista”. Si esto lo hubiera dicho un sargento raso ni siquiera hubiera merecido una línea de un rotativo, pero la declaración del ministro de Defensa ocupó las primeras planas y se hacía precisamente con esa intencionalidad: que el mensaje llegara a todos los mandos, atizando así el anticomunismo y prevenir a la tropa contra los acuerdos.

Ese mismo 28 de junio, ya en curso el cese al fuego que era de obligatorio cumplimiento por las partes, es decir el Estado y la guerrilla, caen los primeros rebeldes pertenecientes a los Frentes 24 y 25, emboscados en parajes de Cundinamarca, Tolima y Caquetá, como lo denunciaron las FARC ante la Comisión de Verificación de los Acuerdos.

Este sería el panorama hasta llegar al rompimiento definitivo de la tregua en 1990: enfrentamientos con saldo de muertos y heridos de ambos bandos. La fiereza de los golpes de las FARC al Ejército eran tan contundentes, que difícilmente cabía el argumento de la guerrilla de que sólo se estaban defendiendo de los ataques.

Es que a todas estas, las viejas prácticas de la extorsión, boleteo, el secuestro y las presiones a la población civil de parte del movimiento guerrillero no favorecían la consolidación de un ambiente de tregua con acciones como las que relata aquí el excomisionado de Paz, Alberto Rojas Puyo. Incluso, Gilberto Vieira anotaba en un editorial de *Voz* el 28 de junio de 1984 que “si la tregua en las luchas armadas se consolida hasta llegar a un acuerdo de paz democrática, derrotando las provocaciones de ciertos sectores militaristas y latifundistas, el movimiento

guerrillero podría adelantar un destacado trabajo de organización y educación política de grandes masas campesinas y urbanas, *y deslindándose tajantemente de los actos aventureros y terroristas, que jamás pueden sustituir la acción de masas*, (el resaltado en *italica* es nuestro) pero que siempre sirven de sustento a las maquinaciones provocadoras y represivas de círculos y estamentos ligados íntimamente al imperialismo norteamericano”.

Sobre la violación de la tregua por parte de las FARC no deja de llamar la atención la publicación que hizo la prensa en enero de 1987 de las estadísticas oficiales de 1986, según las cuales habrían muerto 534 campesinos, 560 guerrilleros y 569 militares, así como habrían salido heridas 1.227 personas en las confrontaciones de dicho año. Según estos datos, las víctimas de la UP fueron 342. Ahora, de los 560 guerrilleros muertos, 151 eran de las FARC en tregua y de las 230 acciones de las guerrillas, sólo tres correspondían a las FARC, el resto se atribuyen al ELN, M-19 y EPL, lo que indica que el grupo de “Marulanda” sí estaba cumpliendo con el alto al fuego. ¿Cómo se explica que habiendo 151 caídos de las FARC, haya ese número de muertos tan alto de la UP cuando sólo aparecen tres emboscadas de este grupo? El *Semanario Voz* señala que esto indica que no son las FARC las que emboscan al Ejército sino al revés. Los enfrentamientos con las FARC, según tales fuentes, fueron cincuenta y seis y por eso mismo aparecen con un mayor número de bajas del Ejército. Las Fuerzas Armadas están rompiendo la tregua, concluye el periódico. Las FARC dirían más tarde que en los años de tregua perdieron más hombres

desmovilizados para hacer política con las banderas de la UP, que en los cinco lustros que llevaban de combates armados con el Ejército.

En ese clima enrarecido, ocurrió el 10 de agosto un magnicidio que turbó a toda la opinión por tratarse de un popular exdirigente de la Alianza Nacional Popular (ANAPO). En una calle de Bucaramanga fue asesinado el médico y líder nacional del M-19, Carlos Toledo Plata. “Al proceso de paz le dieron once balazos. Pero al contrario de lo ocurrido al doctor Toledo Plata, la paz no morirá en este atentado. Lo grave es que este crimen puede ser también una advertencia para tratar de acobardar a los dirigentes de los movimientos subversivos. Eso permite entender por qué estos últimos no han aceptado desarmarse: porque temen por sus vidas”, escribió Gabriel García Márquez en el diario *El Mundo* de Medellín el 12 de agosto, en un lúcido resumen de lo que se venía para todos.

“El asesinato de Carlos Toledo Plata confirma la existencia de una definida conspiración contra la estrategia de pacificación que con tantos tropiezos adelanta el Gobierno. Los ‘enemigos agazapados’, que en su momento denunciara el primer presidente de la Comisión de Paz, Otto Morales Benítez, están más activos que nunca”, escribió por su parte Enrique Santos Calderón, en la columna “Contraescape” del periódico *El Tiempo*.

La ofensiva contra todo intento de crearse un clima de acuerdos con la guerrilla no tenía pausa. El director de la Policía, el comandante de la Tercera División y el comandante de la III Brigada, notificaron al propio Gobierno Nacional que el M-19 debía retirarse de Corinto, Cauca y

El Hobo, Huila, donde se desarrollarían conversaciones de paz o procederían a tomarse dichos lugares. Todo esto en medio del creciente antibelicismo en las Fuerzas Armadas. Y en la llamada Tercera División, que cubría el occidente y sur del país, se hablaba de “un golpe rápido” que sacara al Presidente, pero que se retornara el poder a los civiles. El propio Betancur reconoció esta grave situación en un discurso en Arauca mientras los integrantes de la Comisión de Paz eran amenazados de muerte.

Sólo la rápida intervención de un grupo de comisionados de paz logró poner fin a los intensos combates entre el Frente Sur del M-19 y el Ejército en Corinto, casi simultáneamente con el nombramiento del general Vega Uribe, ligado a casos de tortura, como nuevo ministro de Defensa. Vega era un caracterizado enemigo de los acuerdos de tregua, lo que demostraría la debilidad de Betancur frente a los altos mandos, que seguían como rueda suelta en un proceso en el cual eran pieza fundamental.

Mientras tanto, las fuerzas civiles se movilizaban buscando que el proceso de acuerdos con la guerrilla tuviera un rápido segundo aire. De ahí la iniciativa del Gran Diálogo Nacional, con la presencia de altos dirigentes de todos los partidos y las organizaciones sociales, en el que se llegó al consenso de preservar la tregua para lograr los cambios. Jaime Castro, como ministro de Gobierno, clausuró el evento leyendo un mensaje del presidente Betancur donde recalaba que seguiría el proceso de paz a pesar de las dificultades y que estaba empeñado en “eliminar los factores objetivos de la subversión”.

El general Vega Uribe, en duras declaraciones públicas, volvió con la tesis de que el “Ejército puede derrotar a la guerrilla”, criticó a Betancur por su búsqueda de soluciones políticas cuando “la guerrilla ya estaba derrotada” y se ufano por su paso por la BIM. Las declaraciones de Vega Uribe hacían parte de toda una escalada psicológica y política contra la tregua. Por su parte *El Tiempo* se preguntaba si se podrían hacer las elecciones “con tanta gente beligerante, armada y ansiosa de poder”.

En semejante clima nace, el 21 de marzo, la Unión Patriótica en un multitudinario acto en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá, aprovechando el lanzamiento del libro del comandante “Jacobo Arenas”, *Cese al fuego*. En el número 90 de *Resistencia*, órgano de las FARC-EP, correspondiente a febrero de 1985, se anunciaba la formación de un movimiento político del que venían hablando desde que se firmaron los Acuerdos de La Uribe. “Pronto habrá una cumbre nacional para conformar la UP y su Dirección Nacional”, reseñaba la publicación. Proponían una plataforma para la renovación y lanzaban un programa de lucha de veinte puntos que recogía en su totalidad el Primer Congreso de la UP, realizado en Bogotá el 16 de noviembre de 1985.

Previamente se habían dado otros pasos que anunciaban la formación del nuevo movimiento como resultado de los Acuerdos de La Uribe, que preveían que las FARC, en su paulatino proceso de desmovilización, hicieran política a través de algún mecanismo partidario. El 21 de febrero de 1985 apareció en el *Semanario Voz*, por primera vez, el rostro

de la UP con el logo que serviría para identificarla, así como se anunciaba que las FARC llamaban a la formación de la agrupación cuyo nombre lo escogió el propio “Jacobo Arenas”.

El 24 de febrero se realizó en Tambo, Cauca, la primera gran manifestación de la UP en el país y sería el comienzo de una movilización en campos y ciudades que, como una catapulta sin pausa, posicionaría a la nueva alternativa en el escenario nacional, después de tantas frustraciones políticas para los sectores populares con el ascenso y caída del Movimiento Revolucionario Liberal, el Frente Unido, del padre Camilo Torres, la Alianza Nacional Popular, la Unión Nacional de Oposición y el Frente Democrático.

En menos de seis meses la UP ya registraba 2.229 Juntas Patrióticas y en 572 actos políticos había reunido a más de un millón de personas. El anhelo de paz de los colombianos se tomó calles y plazas. El 14 de noviembre se reunió el Primer Congreso de la UP, clausurado el 16 de este mismo mes por el primer presidente del movimiento, el comandante de las FARC, “Braulio Herrera”, en un multitudinario acto en la Avenida Jiménez con carrera séptima en pleno centro de Bogotá, una semana después de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la retoma a sangre y fuego por las tropas oficiales. Después del formidable bautismo del pueblo y ante la renuncia de “Jacobo Arenas” como candidato presidencial de la UP, quien tenía previsto llegar a la Plaza de Bolívar en helicóptero, el 31 de enero de 1986 la Junta Nacional de la UP proclamó a Jaime Pardo Leal como su aspirante a primer mandatario de la Nación.

El 2 de marzo de 1986 las FARC y el Gobierno firmaron el acuerdo que prolongó la tregua y Betancur recibió en Palacio la delegación, encabezada por Jaime Pardo Leal, que estuvo en La Uribe con ese motivo, lo que garantizaba unas elecciones en paz.

Los avances electorales de la UP y la guerra sucia

La UP surgió como una importante fuerza política, eligiendo en los comicios legislativos del 11 marzo de 1986 cinco senadores y nueve representantes, después de que en 1982 los comunistas ganaran sólo un senador y un representante. Realmente una audaz operación de alianzas, para obtener nueve senadores y quince representantes, entre principales y suplentes. También se obtuvieron dieciocho diputados y cerca de trescientos concejales. La UP logró 120.442 votos con listas propias y 198.875 en alianzas, en un gran salto de la izquierda. El presidente de la Comisión de Paz, John Agudelo, felicitó a las FARC por los resultados: “El éxito de la UP nos regocija, porque en cierta forma es una construcción de todos nosotros. Resultó de los propios Acuerdos de Paz. Somos cómplices necesarios de su existencia. Celebrar sus triunfos nos parece elemental. No se pudo (en ocasiones por falta de dinero y en otras por falta de tiempo para adecuar la organización) crear mecanismos a través de los cuales el votante podría hacer uso de sus derechos a votar. De manera que todos están de acuerdo que la UP tenía muchos más votos que los que puso”.

Pero la guerra sucia elevó el tono de su voz ante los esperanzadores resultados de la UP. Ya pasaban de trescientos

los militantes del movimiento asesinados en campos y ciudades por el paramilitarismo y agentes del Estado, mezclando perversamente las cosas. “No se puede confundir a las FARC con la UP, ni a esta con las FARC. Otra cosa es que las FARC apoyen con todas sus fuerzas y toda su decisión a la UP. Son categorías distintas que no es dable confundir”, le escribió “Jacobo Arenas” el 15 de junio de 1986 a Enrique Santos Calderón, quien en su columna de *El Tiempo* afirmara que la guerrilla estaba exigiendo alcaldías para la UP. Y añadió: “Las FARC hace un año lanzaron el proyecto de la Unión Patriótica con la idea de convertirlo en un nuevo movimiento político de masas de millones de colombianos donde cabe todo el mundo. Con la idea de amplitud antes no conocida en la historia política del país. Tal proyecto, que lleva el nombre de Unión Patriótica, es independiente de cualquier tatuaje, aunque aquel haya tenido, como proyecto, origen en las FARC”.

Más tarde dejaron aún más en claro las cosas afirmando que “la UP es un movimiento político y civil con personería jurídica y con representación en los cuerpos deliberantes y es ella como ella y no como FARC. Que las FARC tengan simpatía con la UP, que le ayudemos en lo que podamos y que, incluso, estén en ella algunos cuadros que antes fueron comandantes farianos, es otra cosa. Si la UP tiene simpatía por las FARC es apenas lógico, ya que estas son las autoras del proyecto. Aquí tenemos simpatía por el Nuevo Liberalismo y eso no quiere decir que este tenga cuerpo armado en las FARC. Lo mismo ocurre con la UP”. Pero de nada esto valía para

los enemigos del proceso abierto por los Acuerdos de La Uribe.

A propósito, el *Semanario Voz* reveló una información el 11 de agosto de 1988, recogiendo un informe de Gilberto Vieira a un Pleno del Comité Central del Partido Comunista y que dio luces sobre cómo empezó el ovillo de la guerra sucia que envolvió a todo el país. “Entre las elecciones parlamentarias y presidenciales de 1986, la Dirección Nacional del PCC recibió la información confidencial de que, ante el hecho de que Barco sería elegido presidente derrotando a Gómez Hurtado, altos mandos inspirados por el general Landazábal, resolvieron poner en marcha un plan criminal que denominaron Operación Exterminio, para “enfrentar al Gobierno en hechos de guerra”. Dicha Operación consistiría en provocaciones contra los Frentes en tregua de las FARC para obligarlos a romperla, y en atentados contra dirigentes del PCC y de la UP, para lo cual alistaron comandos paramilitares en todo el país. Denunciamos dicho plan en diversas formas, pero carecimos de pruebas ante los gobernantes. Los hechos demostraron trágicamente que la información era cierta. Ése fue el comienzo de la guerra sucia del militarismo contra el movimiento revolucionario y democrático”.

El ministro de Gobierno del presidente Virgilio Barco, Cepeda Ulloa, parecía concordar con Vieira cuando en una entrevista a Caracol el 12 de octubre de 1986, decía que “es muy difícil decirles a las FARC que se reincorporen a una sociedad donde no tienen protección. Hay en el país un ambiente de inseguridad para todos, para ellos, para nosotros. Eso hay que resolverlo de alguna manera antes

de que ese proceso de desmovilización se pueda cumplir, ellos tienen la razón”.

El exterminio no daba tregua y tuvo su cota más alta con el asesinato de los parlamentarios Leonardo Posada y Pedro Nel Jiménez, el 30 de agosto y el 1° de septiembre de 1986, cuando el movimiento tocaba todas las puertas para impedirlo. A dónde no acudió la UP. Se reunió con las directivas de todos los partidos, visitó al Nuncio Apostólico, al Cardenal, a los ministros de Defensa y de Gobierno, se reunió varias veces con el Presidente de la República, con los altos mandos militares, se tomó las dependencias del Ministerio de la política y la embajada de Canadá y hasta realizó un paro, el 11 de noviembre de 1986, único en la historia del país, retirándose del Congreso por espacio de quince días.

La decisión de la Unión Patriótica de no acudir al parlamento tuvo gran resonancia nacional y todos los medios coincidieron que actuó certeramente. ¿Qué otra cosa podían hacer sus congresistas si el Gobierno no le ponía freno a los grupos paramilitares?, preguntaron varios analistas.

El régimen esperaba que la situación de terror paralizara a las masas. “La pasividad de Barco prueba que el Establecimiento concilia y se reacomoda con el militarismo”, decía un nuevo Pleno del PCC. Aunque el presidente Barco había condenado “esas manifestaciones de criminalidad que afectan el sentimiento democrático y que el Gobierno está tomando medidas cada vez más eficaces, lo cierto es que está todo esto por verse”. El Pleno repitió que contra el plan terrorista y militarista de asesinatos, tenían que “plantear la legítima defensa

popular y desarrollar la autodefensa de masas, como una amplísima acción de vigilancia y beligerancia colectivas, basadas en la amplia unidad popular contra el militarismo. Por eso también persiste todavía el Estado de sitio con decretos y leyes como las detenciones arbitrarias y que además estimula el militarismo”. Pero la realidad es que esos llamados, que se repetían constantemente, jamás tuvieron respaldo de masas.

El 26 de febrero de 1987, Jaime Parado Leal, ante la persistencia de algunos sectores de hacer creer que la UP hace parte de las FARC, tiene que declarar ante los medios y después de culminar el Pleno Nacional de la UP, que esta “no es apéndice de nadie y que no se inmiscuye en las decisiones de las FARC, pues la UP las toma soberanamente a través de la Coordinadora Nacional”, y añade que “la tregua es un problema entre el Gobierno y las FARC porque no se firmó con la UP. Las FARC son un movimiento político militar y la UP es una organización de carácter político reconocida por el Consejo Nacional Electoral y es legal. Si quieren ilegalizarnos tendrán que dar un golpe de estado”.

Todo apuntaba a eliminar a la UP del escenario político. El presidente Barco, en unas declaraciones a la revista inglesa *South*, llegó a sostener que la UP era “el partido de las guerrillas”. El movimiento rechazó esta declaración, con la cual se justificaban implícitamente las acciones del Ejército y de los grupos paramilitares e iba en contravía de su discurso de posesión cuando había saludado la presencia en el Congreso de una nueva fuerza política como la UP, llamada a fortalecer la competencia

democrática. Barco contradecía también a su ministro de Gobierno y al comisariado de paz Carlos Ossa Escobar, quien reconocía a la UP como un partido político sin nexos orgánicos con la guerrilla. “Nosotros separamos claramente lo que son las FARC y lo que es la UP. Las FARC son un movimiento armado en tregua y la UP es un movimiento político legalmente reconocido”, señaló Ossa Escobar.

La UP, entonces, realiza una rueda de prensa donde acusa directamente a miembros de las Fuerzas Armadas en la operación exterminio de la UP, Jaime Pardo sindicado a un general en servicio activo, tres coroneles, uno de ellos en retiro, un capitán y dos mayores del Ejército de vinculación directa en los crímenes contra la UP. “Tenemos una lista de mandos medios y personal civil en un extenso pronuario que será entregado al presidente Barco”, afirma Pardo. Y denuncia que hay planes para liquidar físicamente al parlamentario Vieira y a él mismo, donde están implicados el coronel Álvaro Hernán Velandia y el general César Barrios.

El 3 de septiembre de 1987, el PCC señala que está “en un viraje hacia el fascismo por la muerte de los dirigentes del partido y de la UP sin que el Estado haga nada; es un intento de un viraje político preventivo, de un ajuste de cuentas con el movimiento popular que actúa en un proceso legal cuando se deteriora seriamente la tregua, pero sobre todo cuando el movimiento popular está adquiriendo una nueva calificación, en una activación y acumulación de fuerzas. El objetivo es impedir la apertura democrática y las reformas y el punto crucial es el intento de negar a los comunistas y a la UP, el legítimo derecho de actuar en las elecciones

de alcaldes que por primera vez tendrán lugar en 1988”.

Esa nueva fase está determinada por el exterminio de la dirigencia revolucionaria que actúa en la legalidad, la liquidación y eliminación de las personalidades liberales y conservadoras que se oponen al terror fascista, defienden los derechos humanos y enfrentan el militarismo. Se busca a todo trance liquidar y golpear a los dirigentes de masas como concejales, diputados, parlamentarios, líderes sindicales, estudiantiles, a fin de aplastar las luchas por sus intereses y cerrar el paso a las reformas y a la elección popular de alcaldes.

El 21 de abril de 1988, seis meses después del magnicidio de Jaime Pardo Leal, que golpeó arteralmente a la izquierda, Bernardo Jaramillo señala en un editorial de *Voz* que “desde el momento en que se cometieron los primeros crímenes contra dirigentes y activistas de la UP, manifestamos que la guerra sucia no va dirigida solamente contra los comunistas y sus aliados de la UP, sino que estábamos frente a un plan de exterminio destinado a liquidar el movimiento popular y democrático. Los hechos desafortunadamente, nos han dado la razón. Se ha pasado del crimen individualizado al genocidio: hombres, mujeres, niños inocentes, han sido víctimas de la guerra sucia en todo el país”.

Añade que “frente a estas acciones criminales de la ultraderecha, Barco ha pasado de la indiferencia al auto golpe de Estado parcial como lo demuestra su indolencia inicial ante los últimos hechos de Urabá y su celeridad para conferir toda clase de facultades violatorias de la Constitución al general Fernando

Gómez Barros, con una investidura al ‘pacificador Morillo’; queda una vez más comprobado que para las oligarquías sólo existe en la Colombia de hoy un medio de gobernar: el Estado de sitio y un modo de aplicarlo: con mano militar”.

Jaramillo además dice que se sienta otro peligroso precedente: “Ahí donde la extrema derecha consume una masacre se nombra un pacificador, o sea que aparte de poner los muertos, el pueblo colombiano recibe como premio de consolación la militarización aún mayor de la vida cotidiana”.

La masacre de Segovia: un crimen de Estado y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia

La UP sufrió en estos años de análisis sesenta y cinco masacres, para nosotros, a diferencia de algunos analistas, cada masacre representa el asesinato colectivo de por lo menos tres personas y no de cinco. A excepción de dos o tres, permanecen en la más completa impunidad. Imposible reseñarlas todas.

Una en particular, por su alevosía y ser declarada como delito de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia, merece nuestra atención. El 14 de marzo de 2011, la Sala de Casación Penal de la institución resolvió por unanimidad acusar a César Pérez García como presunto determinante de la masacre de Segovia, ocurrida el 11 de noviembre de 1988 y en la que perdieron la vida 43 personas y quedaron decenas de heridos. “Con fundamento en los hechos, el procesado deberá continuar privado de la libertad”, decidió la Corte en una trascendental sentencia.

Pérez García, un conocido político liberal de Antioquia, expresidente de la Cámara de Representantes en 1986, fue llevado a prisión acusado por varios exjefes paramilitares de ser el autor intelectual de la masacre de Segovia, tras haber perdido en 1988 las elecciones en dicho municipio a manos de la UP, cuando tuvo lugar la primera elección popular de alcaldes. Segovia había sido por años el feudo electoral de Pérez y en retaliación por la derrota, al ser elegida por amplia mayoría como alcaldesa la dirigente de la UP Rita Ivonne Tobón, y no su representante, resolvió aliarse con Fidel Castaño y organizar la parada de exterminio aquella noche de puente con el apoyo del Ejército y la Policía. El proceso 33.118 al que tuvo acceso completo esta investigación, revela pormenores de la sangrienta incursión.

En la página 127 de la sentencia, bajo el título “El contexto político de Colombia 1986-1990”, la Corte, sustentándose en decenas de escritos y documentos, llega a la conclusión de que “lamentablemente las autodefensas civiles que iniciaron su formación al final del gobierno del expresidente Turbay Ayala, apoyadas por la cúpula militar, continuaron librando la guerra que el presidente Betancur impidió afrontar a las Fuerzas Armadas, al acuartelarlas para honrar la tregua firmada en 1983 con las FARC, el EPL, y el M-19 y por esa razón continuaron la guerra por interpuesta persona en tres grandes regiones dominadas por las FARC, al entrenar, apoyar y ayudar a armar a las autodefensas de Puerto Boyacá, el nororiente antioqueño y la región del Ariari en el Meta”.

Y más adelante la Sala señala que “mientras el Gobierno impulsaba las negociaciones y diálogos con la



El 2 de marzo de 1986, tras reunirse con el Secretariado de las FARC en La Uribe, una comisión de la Unión Patriótica se reúne en Palacio con el presidente Betancur, quien aparece junto al comandante de las FARC, "Braulio Herrera", Jaime Pardo y Carlos Efrén Agudelo del movimiento Autodefensa Obrera (ADO), aliado de la Unión Patriótica. (Foto: Presidencia de la República)

insurgencia, en un sitio del país se proclamó el desacuerdo con la política de paz con la presentación de una alternativa denominada 'lucha contrainsurgente', cuyo centro de operaciones estaba ubicado en el municipio de Puerto Boyacá y las zonas aledañas, en las cuales se hallaba para esos años de 1982 y 1989, la XIV Brigada del Ejército ubicada inicialmente en Cimitarra y luego en Puerto Berrío, la asignación a dicha brigada del Batallón Bárbula, con sede en Puerto Boyacá y el Batallón Bomboná en Segovia".

"La historia y los resultados de posteriores investigaciones penales y disciplinarias, añade la Corte, permiten hoy aseverar que gran parte de sus miembros se identificaban con las doctrinas de la

Seguridad Nacional y que esta visión de Estado y el liderazgo de los alcaldes gestores del proyecto en la zona del Magdalena Medio, el apoyo de ganaderos y de otras gentes adineradas, el respaldo de los líderes políticos y los abusos y extorsiones del Frente 9° de las FARC, que operaba en la región, fueron el cúmulo de situaciones que propiciaron la creación y expansión del fenómeno del paramilitarismo en Colombia".

La Corte considera acertado y hace suyo el alegato de la parte civil de una de las víctimas de la masacre de Segovia, por la cual hay cinco militares condenados, tres de ellos de alta graduación, y afirma "que desde el inicio del mandato del expresidente Betancur, los militares

no vieron con buenos ojos la propuesta de un Acuerdo de Paz paz, porque como es de conocimiento público, el Gobierno anterior había expedido el Estatuto de Seguridad con el cual se buscaba reprimir cualquier vestigio subversivo, o ánimo de colaboración con las guerrillas, otorgándole enormes poderes procesales a las Fuerzas Militares”.

“César Pérez García, *a causa de su descalabro político, creó el movimiento armado paramilitar que se denominó ‘Muerte a Revolucionarios del Nordeste’*” (destacado en *itálica* en el original). Alfredo Valdivieso Barrera, fundador de la UP en Segovia, declaró ante los jueces que el genocidio de este movimiento político se halla íntimamente ligado a la necesidad del mantenimiento del poder, móvil inmerso en el mensaje que ese 11 de noviembre de 1988 recibieron los habitantes de Segovia tras la masacre: No vuelvan a votar por la Unión Patriótica, pues eso se les causa la muerte”.

Toda esta conducta que reseña la providencia de la Corte Suprema de Justicia para determinar que Pérez García debe continuar privado de la libertad, conduce inevitablemente a que se tipifiquen los hechos como un crimen de Estado. Lo que se reafirma con la conducta del cuerpo militar, reseñada en la sentencia, cuando sostienen que el ataque no había sido dirigido contra los miembros de la UP. “Ésa fue la intención inicial del Ejército y la Policía, poder respaldar la hipótesis que pretendía hacer carrera: que la masacre había sido perpetrada por miembros de las FARC o el ELN, porque ni los militantes de la Unión Patriótica, ni la sede política, ni la Alcaldía Municipal, con la burgomaestre representante del

partido político, habían sido atacados, con la convicción que ese argumento sería contundente para que otros actores no fueran señalados”, indica la Corte.

Y continúa la Sala Penal: “No de otro modo se entiende lo aseverado por la entonces personera Flor Yohani Montoya Rúa, sobre el extraño comportamiento de un soldado del Batallón:

‘Me sorprendí, porque cuando sacaban cada uno de los cadáveres, un soldado del Batallón Bomboná, preguntaba a los familiares de los fallecidos a qué partido político pertenecían. Cuando yo me aproximé a uno de ellos y le pregunté por qué hacían esto, porque después de muerto qué importaba el partido político, me contestó que él sólo cumplía órdenes de su mayor Báez”.

El mayor Báez fue uno de los condenados por la masacre en sentencia anterior de la Corte Suprema de Justicia.

Y la tragedia de la división

Pero también vendría otra tragedia para las ilusiones que tenía el pueblo en la UP: la tragedia de la división. En plena guerra sucia y mientras el movimiento hacía lo imposible por mantener viva la llama de la resistencia civil, comienza a destaparse lenta pero inexorablemente el tema de la unidad en las filas. Uno de los pasajes más dolorosos de la historia de la UP, que debe llamar a la reflexión pues de siempre los revolucionarios de todo el mundo no se han cansado de repetir que lo más preciado que tienen los movimientos progresistas es la unidad, a la que hay que cuidar como “la niña de los ojos”. Y no se trata de fijar responsabilidades en uno u otro dirigente, solo que

una esperanza llamada UP no se podía dar el lujo de la escisión, de la ruptura.

Los grandes medios comenzaron a resaltar el disenso matizado por el nuevo panorama mundial del socialismo, que apuntaba hacia un proceso de cambios profundos en el sistema, inaugurado por el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, conocido como la perestroika o reestructuración, a la que se le unía la *glasnost* o apertura en la información a todos los niveles. El Partido Comunista Colombiano desde un comienzo mostró su enorme simpatía con estos cambios que anunciaban un nuevo aire para el sistema socialista en la dura confrontación ideológica con el capitalismo. Vieira, en un célebre reportaje a *El Tiempo*, se declaró como fervoroso partidario de las nuevas propuestas de Gorbachov. Y las páginas de *Voz*, por supuesto, ensalzaban los nuevos pero inciertos horizontes.

Todo esto condujo a que Bernardo Jaramillo y su grupo más afín resolvieran subirse al tren de la perestroika, que no tenía la más mínima simpatía en las filas de las FARC, como lo manifestaba sin tapujos “Jacobo Arenas”. Jaramillo, en una entrevista con la revista *Semana* el 1° de noviembre de 1988, lo declara así ante la pregunta de qué se puede hacer para que las concepciones de pluralismo y democracia tengan presencia en la izquierda. El presidente de la UP, anotando que la izquierda pasa por una profunda crisis debido “al dogmatismo y el esquematismo que durante décadas” la han afectado, responde, anunciando todo un programa de cambios para el movimiento que preside, que está convencido que “la perestroika, que es una verdadera revolución,

no sólo en el campo socialista, sino para el movimiento revolucionario en su conjunto, va influir o de hecho está influyendo en los conceptos y en la práctica de las fuerzas de izquierda en Colombia. Es la única alternativa que nos queda”.

De manera que Jaramillo, un año antes del Segundo Congreso de la UP, comienza a separar cobijas con el partido en un tema que él considera crucial: la democracia interna, dando por descontado que esta no existía en el seno de la organización que él integraba desde su vinculación a la Juventud Comunista. Resuelve, entre otras cosas, no volver a asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo Central y a manifestarle a sus compañeros más afines, la necesidad de presentar un nuevo proyecto organizativo que le dé más perspectivas de amplitud a la UP, comenzando por la necesidad de romper con la línea de la combinación de todas las formas de lucha, que defiende en forma vehemente en el primer aniversario del asesinato de Jaime Pardo Leal, coreando la famosa consigna, como se solía hacer en los eventos partidarios. El Foro por la Paz de Ibagué, reunido el 17 y 18 de febrero de 1989, conoce su inmediata mutación. Allí critica duramente al movimiento armado por mantener las prácticas del secuestro, la extorsión, el boleteo y las acciones de sabotaje a sectores clave de la economía del país, como las torres de energía o los oleoductos. Claro que también condena el comportamiento del gobierno de Barco, acusándolo de no buscar caminos de paz con la guerrilla y tener una posición pasiva frente a los grupos paramilitares que desangran las filas de la UP. Para terminar, insiste en

la salida política a la confrontación como único camino del pueblo colombiano hacia la reconciliación.

Jaramillo no hacía otra cosa que recoger la tesis que se abriera paso en el XV Congreso del Partido, de diciembre de 1988, que lo eligió a su Comité Central, de que “ni la guerrilla puede derrotar al Ejército ni este a la guerrilla”, lo que imponía la inaplazable solución por la vía del diálogo del largo conflicto armado interno. Pero el joven dirigente iba más allá, como lo reconoce quien fuera uno de sus más cercanos amigos, Napoleón Vanegas, jefe de propaganda y comunicaciones de la UP, en su libro *Es un soplo la vida*. Allí anota Vanegas que “en la correspondencia sostenida por Bernardo, principalmente con Jaime Corena y Álvaro Salazar en Europa, y además, en las reuniones con los sectores de la Unión Patriótica de los cuales era líder, Bernardo es claro en la formulación de los lineamientos de un nuevo proyecto político que necesariamente pasará por el deslinde con las concepciones que sustenta el partido en su ala mayoritaria”.

Con estas concepciones llega el presidente de la UP al Segundo Congreso del movimiento, reunido el 10 de septiembre de 1989 y, dueño de un enorme carisma, él y su grupo logran nuclear la mayoría a su alrededor, lo que se traduce en ser escogido por unanimidad como el candidato presidencial.

La campaña orquestada por los medios para romper la unidad de la UP tampoco da tregua. Es otra forma de la guerra sucia con crónicas, comentarios y toda suerte de difamaciones contra el Partido Comunista y sus dirigentes después de anunciar que la UP estaba

ya liquidada con los resultados para las elecciones legislativas de marzo 11 de 1990. Al respecto, llegaron hasta a afirmar que el candidato presidencial del PCC sería Alberto Santofimio Botero, para no citar otras infamias.

Desgraciadamente la dirección del partido y la UP no atendieron con mayor fuerza semejante campaña, al tiempo que las páginas de *Voz* y de los órganos de expresión del movimiento no levantaron las banderas de la unidad en el momento más crucial. Cualquier lector habitual del semanario no vislumbraba en sus páginas que en las filas de la UP se estaban agitando las aguas de la diseción que contribuirían a golpear aún más al movimiento. Una movilización de toda la militancia, levantando las banderas de cohesión y alejando los conatos de fraccionamiento era más necesaria que nunca. Lamentablemente nunca se hizo.

El 27 de diciembre de 1989, se publica una declaración conjunta de la UP y el PCC donde las dos organizaciones rechazan “la impostura de que la candidatura de Jaramillo tiene adversarios en el PCC o en la UP..., tiene toda nuestra adhesión”. Apoyan la propuesta de realizar en marzo de 1990 “una amplia reunión de convergencia de las fuerzas de izquierda, con los sectores democráticos de los partidos tradicionales, al que se llevará el nombre de Bernardo Jaramillo como propuesta de unidad, con el ánimo de buscar un entendimiento en la construcción de un gran movimiento que pueda convertirse en opción de poder político”.

Llegaría entonces el destape de la famosa carta privada de Jaramillo a sus compañeros de grupo, que era el mayoritario en las filas de la UP y que un Pleno

del Comité Central, pocos días después del asesinato del joven líder conociera. Vanegas, en el libro citado, recuerda que el 18 de marzo de 1990, cuatro días antes del crimen de Bernardo, este le escribió así a Jaime Corena: “[...] La UP va a lanzar mañana un importante llamamiento a la generación de un nuevo movimiento político; eso nos va a agudizar la contradicción con el PCC. Quiero decirte que hoy más que nunca estoy dispuesto a avanzar en un proyecto de socialismo democrático. Ésa es la decisión tomada. Lo que he querido es jalonar a este proyecto a otros compañeros del PCC como Angelino Garzón y Félix Banguero, que han dado la vuelta definitivamente hacia nosotros, Buenaventura, Arizala, Mondragón, Silva y otros interesados en el proyecto, así como los dirigentes del Regional de Bogotá, sindicalistas, cívicos y comunales. Vengo trabajando activamente: no podemos dejarle la UP a los ortodoxos aun cuando algunos de ellos ya hablan de sacar al Partido Comunista de allí, porque dicen que la UP es otro partido”.

Y más adelante Jaramillo señala en su carta a Corena, en una demostración de que las cosas no pueden ser de otra manera ya, que “si el Pleno (del Comité Central del Partido Comunista) no acepta la realización de un Congreso Extraordinario o si sólo lo acepta para el programa, yo voy a proponer a nuestros compañeros que nos salgamos del PCC públicamente, permaneciendo en la UP, y a través de ella propongamos un Congreso de Constitución del Socialismo Democrático, como nuevo partido”.

Tendrían que ser muy fuertes las tensiones internas en el partido para

que Jaramillo llegara a tomar esos atajos, pero por más que se levantaran obstáculos de esta índole, una voluntad política férrea hubiera preservado la unidad de la UP y, con ella, la posibilidad de avanzar hacia la unidad de todo el pueblo.

Después vendría el gran desastre, el magnicidio de Bernardo en el Puente Aéreo de Bogotá el 22 de marzo de 1990. Y con su desaparición, otra desdicha para las ilusiones de un pueblo, la renuncia de la UP a lanzar de inmediato un candidato en reemplazo del líder inmolado, que hubiera resuelto o intentado por lo menos, dos tareas históricas que reclamaba en forma urgente la UP: la unidad y su relanzamiento nacional. Todas las encuestas del momento mostraban el gran favoritismo por Bernardo como candidato presidencial, y luego del alevoso crimen, las mismas presentaban un repunte para cualquier candidato que lanzara la UP. Los entrevistados en este libro, interrogados sobre el tema, no dudan en señalar que la renuncia a una candidatura presidencial fue el más grave error histórico de la UP. Este paso es sólo comparable con el apoyo del Partido Comunista a la candidatura de Turbay contra la opción de Gaitán en las cruciales elecciones de 1946.

El Partido Comunista, en una reunión de balance electoral de su Comité Central realizada el 15 de junio, reconoce que “ciertamente hemos debido hacer más esfuerzos para evitar el aislamiento y para obtener una candidatura de convergencia”, pero finalmente le dan la razón al Pleno de la UP, que el 3 de abril, once días después del crimen de Jaramillo, decidió no presentar una alternativa presidencial. “Nos acogimos a esa decisión

de la UP”, diría el partido sabiendo que a excepción de dos dirigentes de la nueva dirección, el sector mayoritario pertenecía a esa organización. Días antes, el 29 de marzo, seis de los ocho dirigentes de la Dirección Nacional habían resuelto presentar su renuncia a la UP, encabezados por Diego Montaña Cuéllar, su presidente y Angelino Garzón, su vicepresidente, y quienes pasarían a engrosar las filas del M-19 integrándose como Alianza Democrática, que nacería el 21 de abril y a la que se le unirían diferentes fuerzas. En la UP continuaron valiosos cuadros como Luis E. Garzón, y Óscar Dueñas, su nuevo presidente, de extracción cristiana e independiente. El nuevo movimiento excluyó de entrada toda posibilidad de ingreso de la UP y el PCC –pues debían condenar la lucha armada, entre otras peticiones– y, después del magnicidio de su candidato presidencial Carlos Pizarro, decidió apoyar la candidatura de Antonio Navarro Wolff, que el 27 de mayo logró cerca de 750 mil votos.

El Partido Comunista diría después que “en otras circunstancias esos votos hubieran sido para la UP. En el voto del M-19 fue factor determinante el ansia de paz de las grandes masas, así sea por un cambio tan discutible como el que apersona ese movimiento. El país está hastiado de violencia”. Las consecuencias de la abstención tuvieron serias repercusiones para el movimiento y contribuyó a su desaparición, que se notó claramente en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, cuando la UP resolvió no aparecer abiertamente sino que apoyó la lista Por los Derechos Humanos y la Vida, encabezada por Alfredo Vásquez Carrizosa y en segundo renglón, la dirigente

sindical y comunista, Aída Abella, obteniendo un poco más de noventa y tres mil votos y dos escaños. Mientras tanto, el M-19 logró la más alta votación de todas las listas, pasando del millón de votos y la cuarta parte de la Constituyente. Otra vez, como decía el PCC, las ansias de paz del pueblo colombiano, en primer lugar.

El horror de la impunidad y la gestión de la Fiscalía

Al horror del genocidio habrá que sumarle el horror de la impunidad. ¿Cómo puede una sociedad entera coexistir con semejantes cotas de protección a los criminales, pues qué otra cosa significa que anden libres después de la matanza? Los 1.598 asesinatos y desapariciones reseñados aquí significan, bajo una óptica elemental, que fueron perpetrados mínimamente por 1.598 criminales. El menos avezado de los analistas forenses hablaría de complicidades y coordinación de aparatos, lo que en el menor de los casos multiplicaría por cinco los actores de tanta atrocidad. Estamos hablando, entonces, de más de ocho mil homicidas sueltos. Todo un ejército del terror.

Lo mejor es acudir al organismo estatal responsable de las investigaciones penales para dilucidar en qué van las pesquisas, cuántos detenidos hay y cuántas condenas se han proferido en estos años de olvido.

Según el Coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Hernando Castañeda –quien recibió a representantes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación el 5 de junio de 2011–, al 15 de abril de este año había apenas 741 casos activos en estudio. La

sub-unidad para el caso de la Unión Patriótica fue creada en 2008. Gracias a la presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las víctimas, en primer lugar, los anaqueles abandonados con los pocos expedientes del genocidio fueron de nuevo visitados.

“Teníamos para esa fecha contabilizadas 1.316 víctimas y 137 sentencias condenatorias que involucran a 191 personas; noventa sentencias con aceptación de cargos para 106 personas y once absolutorias para un total de 238 fallos y 297 personas comprometidas”.

Le acotamos, entonces, que el nivel de impunidad ronda el 95% según las cifras expuestas en este libro de 1.598 víctimas y en más del 90% si nos atenemos a los datos hasta ahora procesados por la Fiscalía.

“Es posible que otras unidades de la Fiscalía también investiguen casos de la UP, pero no los conocemos aún”, señala en su despacho del bunker de la Fiscalía, reconociendo la absoluta falta de unidad procesal de un asunto atravesado por todos los costados por el mismo móvil: ataques generalizados y sistemáticos para aniquilar a todo un grupo político. Es decir, un genocidio.

Respecto de la sistematicidad del crimen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia emitida en el caso del senador Manuel Cepeda, destacó: “La violencia contra la UP ha sido caracterizada como sistemática, tanto por organismos nacionales como internacionales, dada la intención de atacar y eliminar a sus representantes, miembros e incluso simpatizantes”.

Entonces si organismos como la ONU, la Defensoría del Pueblo, la Corte

Constitucional, la Procuraduría General, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, se refieren a las ejecuciones de los militantes de la UP como “sistemáticas”, “exterminio sistematizado”, “eliminación progresiva”, “asesinato masivo y sistemático” y “exterminio”, ¿por qué la Fiscalía General de la Nación no agrupa todos los casos en una sola carpeta y bajo un solo proceso? Como señala Iván Cepeda en estas mismas páginas, la medida podría ayudar enormemente a resolver la grave situación de impunidad.

Pero volvamos a nuestro funcionario. Anota que el dispositivo de la Fiscalía que busca el esclarecimiento de los crímenes, está repartido en las sedes de la UP donde hay procesos a cargo de la Unidad de Derechos Humanos. “Tenemos oficinas especializadas en Bogotá, Bucaramanga, Valledupar, Medellín, Cali y Popayán que trabajan con grupos de fiscales destinados de manera exclusiva. El grupo lo integran siete fiscales regionales y dos en Bogotá, apoyados por veintisiete investigadores con el objetivo de investigar los casos de homicidios y desaparición forzada de los miembros de la UP”.

Está convencido que “el problema grande de estos procesos es la antigüedad de los mismos: entre más tiempo haya pasado más difícil resolver la situación. Cuando la Unidad de Derechos Humanos se comprometió en 2007 a llevar a cabo con exclusividad estos procesos dispersos, se encontró con el fenómeno de que son pocas las personas que quieren colaborar y servir de testigos, que les conste qué pasó con esa o

aquella víctima y así determinar la causa del homicidio. Para la investigación es importante el móvil porque se trata de involucrar a un gran número de personas, hablamos de más de mil trescientos que fueron objeto de atentados presuntamente por su condición de ser miembros de la UP”.

Y acá entra en un terreno que hace ver de otra manera el genocidio y que ha facilitado que en estos años el Estado evada su responsabilidad. “No todas esas personas, aún siendo miembros de la UP, fueron muertas o desaparecidas por razón de su militancia, muchas lo fueron por otras causas ajenas a su militancia política, pero por el hecho de haber sido integrantes del movimiento, fueron incluidas en ese grupo del genocidio; por ejemplo, por cuentas de cobro, por atracos, pero como eran de la UP se incluyeron en ese listado. Quienes hicieron esa memoria no tuvieron en cuenta las circunstancias de las víctimas y las familias las incluyeron como parte del genocidio de la UP”.

La verdad es que el inmenso listado que recogió esta investigación en los archivos de *Voz* da cuenta exacta de los móviles de los crímenes y no se trata en ningún caso de muertos en riñas o por un ajuste de cuentas, como señala el funcionario, y así se lo hacemos ver en la entrevista, ante lo que muestra su interés por conocer los nombres que acopió con sumo cuidado la investigación del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Añade que “el caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997 y desde entonces se solicitó a los demandantes que establezcan algo referente al móvil. A la Corporación

Reiniciar le hemos solicitado mayor información, pero es a la Fiscalía a quien le corresponde investigar. A las víctimas se les cita pero no acuden por temor. Las llevamos a los Centros de Atención de Víctimas (CAV), para brindarles apoyo psicológico como parte del plan de ayudas de la Fiscalía en estos casos”.

Sobre los actores de los crímenes, el coordinador se limita a decir que “hasta el momento la mayoría de los juzgados han declarado ser miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Todavía falta identificar el tipo de autor más alto de los crímenes”.

Es decir, aún estamos lejos de conocer a los determinadores intelectuales de estos crímenes, que se tipifican como de lesa humanidad. Precisamente indagamos por la prescripción o cómo se van a resolver los casos con el paso del tiempo.

“Ya prescribieron muchos casos pues son crímenes de hace más de veinticinco años. Algunos estaban ya archivados cuando la Unidad tomó el asunto en sus manos, pero todos los que están en la Unidad de Derechos Humanos son procesos activos. Hemos resuelto el de Manuel Cepeda Vargas como crimen de lesa humanidad, pudimos documentar que obedecía a un patrón determinado y por lo tanto imprescriptible. También se ha tipificado como de lesa humanidad el de Bernardo Jaramillo”.

Subraya que “de los 825 casos que nos asignaron en 2007, por Resolución del Fiscal General de la Nación para investigación, hoy tenemos 741 por razones de competencia ya que 84 casos terminaron archivados durante este periodo o han terminado con sentencia condenatoria”.

Reconoce que los listados de las víctimas surgieron a partir de la información proporcionada por la Corporación Reiniciar y se cruzaron desde esa época. “Las únicas que reconocemos en la investigación son las 1.316 víctimas del listado de Reiniciar, que hemos verificado e identificado para ir reconstruyendo los procesos. Para declarar un caso como de lesa humanidad, se necesita que exista algo sistemático, algo repetido que tenga el mismo móvil y la misma finalidad; por eso no hemos declarado muchos de lesa humanidad y han prescrito porque no tenemos la información suficiente para dictar las sentencias”.



Cuando en 1986 Carlos Ossa Escobar, Consejero Presidencial para la Rehabilitación, Normalización y Reparación, y quien hacía las veces de puente para los diálogos con las FARC, le mostrara su preocupación al ministro de Defensa general Rafael Samudio Molina, como lo declaró el 2 de junio de 2011 en la Notaría Tercera, porque estaban matando un miembro de la UP cada día, y este le contestara que “a este ritmo no van a acabar nunca”, en cierta forma, a pesar del tenebroso comentario, le asistía toda la razón. A ese ritmo, general, ni a ningún otro, se acabará con la Unión Patriótica. Ella pervivirá por siempre en el alma del pueblo colombiano y se levantará de nuevo con la reparación de toda una sociedad que toleró un genocidio que llena de vergüenza a los colombianos.

5

Presencias ausentes



Página anterior: El 3 de junio de 1993 fue asesinada, en la masacre de Caño Sibao, Meta, la exalcaldesa de El Castillo, María Mercedes Méndez de García, junto con el recién electo alcalde de la misma población, William Ocampo Castaño; la tesorera municipal, Rosa Peña; el coordinador de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Ernesto Sarralde y el conductor de la Alcaldía, Armando Sandoval, todos militantes de la Unión Patriótica.

(Foto: *Semanario Voz*)

El centro cultural en su nombre

Apenas despuntaban los Acuerdos de Paz, entre las FARC y el gobierno de Betancur, que dieron nacimiento a la Unión Patriótica; los esposos Vasco, dirigentes comunistas de Santander, eran asesinados en Sabana de Torres el 26 de mayo de 1984. ————

— Aló, aló...

— ¿Con la Casa de la Cultura Jesús Eduardo Vasco, en Sabana de Torres?

— Sí, a la orden.

A sí comenzó el breve diálogo entre el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y Guillermo Fonnegra, director de la entidad cultural del municipio de Sabana de Torres, en pleno Magdalena Medio, noroeste del departamento de Santander.

Llamaba la atención que precisamente el centro emblemático de la cultura del municipio tenga el nombre de uno de los líderes más importantes de la región y asesinado, junto con su esposa, Adelfa Campos, el 26 de mayo de 1984. El líder popular contaba con cincuenta y cuatro años, y su compañera con cuarenta y tres, cuando cayeron asesinados. “Jesús Eduardo Vasco, siendo concejal de la ciudad, siempre mantuvo una preocupación por dotar a Sabana de Torres de un espacio propicio para las manifestaciones culturales”, anota Fonnegra, un



Luis E. Vasco. (Foto: Lara, Voz)

maestro de cuarenta y siete años y al frente del Centro Cultural desde 2006.

Añade que “el Concejo Municipal resolvió, poco después del crimen, levantar dicho escenario cultural, por el cual se bautizó con el nombre de Jesús Eduardo Vasco”.

“El concejal trabajó de la mano con el Comité Cultural, encabezado por don Blas Fonnegra, y se pudo obtener un lote para la construcción de esta sede, que cuenta con salones para ensayos artísticos de teatro, danzas y música, un auditorio para doscientas personas y sesenta y cuatro computadores conectados a Internet, sin costo alguno para los usuarios”, comenta.

Hace cinco años el municipio invirtió unos dineros para hacerle adecuaciones y mejoras al centro cultural, puesto al servicio en 1996 y orgullo de este municipio de veinte mil habitantes, enclavado en plena zona petrolera.

Guillermo señala que el municipio preserva la memoria de quien fuera uno de sus adalides. “Se mantiene un óleo de Jesús Eduardo Vasco en el Concejo y siempre, cuando se cumple un aniversario de su muerte, tienen lugar actos especiales de recordación”. El crimen de Vasco y su compañera conmovió a todo el Magdalena Medio en una época en que el paramilitarismo llenaba de miedo a la región.

A las ocho y media de la noche de ese 26 de mayo de 1984, a media cuadra del cuartel de Policía, Vasco y su esposa fueron acribillados por dos sicarios. Al ver caer a su compañero, Adelfa buscó refugio en una cafetería de enfrente, pero el segundo asesino la alcanzó y le disparó hasta darle muerte. Entretanto, el primer asesino remataba en el suelo a Jesús.

Guarnecidos por la noche y ante la pasmosa actitud de las autoridades

en pleno centro de la población, los asesinos se retiraron caminando, pero al verse perseguidos por el chofer de la Alcaldía lanzaron una granada, deteniendo la marcha del carro oficial. Unas cuerdas adelante abordaron un campero que los estaba esperando.

Vasco era miembro del Comité Central del Partido Comunista y Adelfa era directiva de la Unión de Mujeres Demócratas de Santander.

Jesús, nacido en Zarzal, Valle del Cauca, desde muy joven se integró a las luchas sindicales. Y ya en Santander, por su activa vida política, llegó a ser presidente de la Asamblea Departamental y concejal de Sabana de Torres en 1982 y 1984, en una lista del entonces Frente Democrático.

Precisamente lo mataron cuando llegaba ese día de Bucaramanga, la capital del departamento, a una reunión del Concejo prevista para las nueve de la noche, media hora antes de su muerte. Eran los tiempos en que despuntaba el proceso de paz entre la insurgencia y el gobierno del presidente Betancur, abriéndose camino la Unión Patriótica, que seguramente integrarían los esposos Vasco.

Han pasado ya veintisiete años desde este crimen que marcó para siempre a Sabana de Torres. Hoy, los miles de chicos que han pasado y los que suelen acudir al Centro Cultural que lleva su nombre, saben quién fue Jesús Eduardo, mientras sus verdugos, pretendiendo eliminar una semilla de paz, cosecharon todo lo contrario.

La muerte golpea la escuelita de San Andrés

Héctor y Diomedes, dos maestros del pueblo y dirigentes de la naciente Unión Patriótica, caían asesinados el 15 de mayo de 1986. ————

La Unión Patriótica apenas cumplía un año, pero ya la ola de violencia contra el joven movimiento, que se presentaba como una alternativa en la política colombiana, recibía los golpes de la intolerancia.

Las regiones más apartadas no iban a ser la excepción. Dos maestros y dirigentes de la UP de San Andrés y Tello, en el Huila, Héctor Perdomo, de treinta y cinco años, y Diomedes Sedeño, de treinta y ocho, murieron el 15 de mayo de 1986.

Cuando los educadores llegaban a Tello, en las primeras horas de la noche transportándose en una moto que habían conseguido para ir a dictar clases en la escolita de San Andrés, fueron acibillados por dos sicarios que se movilizaban en otra moto, esta de color rojo, de alto cilindraje y sin placas.

Los asesinos nunca fueron encontrados y el crimen sigue en la impunidad. Diomedes había comenzado a recibir amenazas de muerte apenas se integró a la naciente Unión Patriótica, lo que había motivado al sindicato del magisterio huilense a pedir un pronto traslado a las autoridades educativas del departamento para salvar su vida.

Tello enterró dos días después del crimen a estos maestros dedicados.

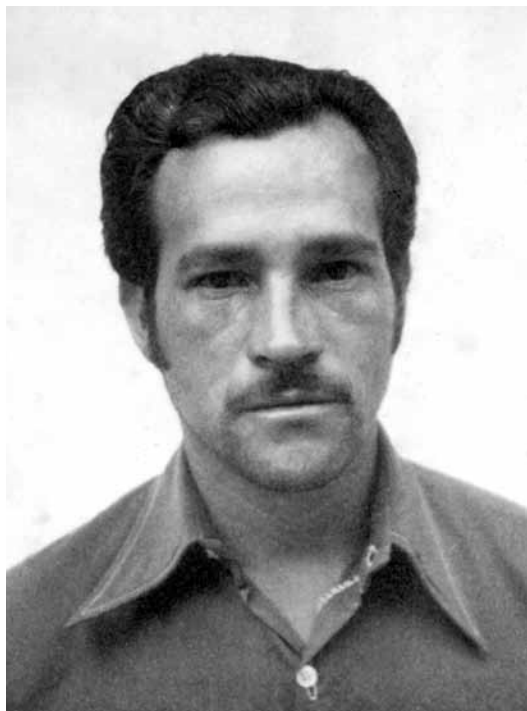


Héctor Perdomo. (Foto: Lara, Voz)

Veinticinco años después, todos sus alumnos de la primaria aún deben recordar este atentado, que ocurrió siendo ellos muy niños y cuando seguramente no comprendían por qué se les cegaba la vida a dos de sus más entrañables amigos, Héctor y Diomedes, los humildes maestros de la escolita de San Andrés.

Una mochila llena de votos

La fiesta por la votación de Jaime Pardo no fue completa: el día de las elecciones, sicarios eliminaron a José Leonardo Martínez, un sencillo campesino del Tolima, capitán de la jornada electoral. ■■■■



José Leonardo Martínez. (Foto: Lara, Voz)

José Leonardo Martínez desde muy joven se dedicó a las labores del campo en su terruño tolimense. En las veredas montañosas que rodean a Ibagué, tapizadas de neblina, se dio a la tarea de organizar a los campesinos, convirtiéndose en un promisorio líder agrario.

Cuando nació la Unión Patriótica en 1985, José Leonardo, de cuarenta y tres años, se integró a sus filas y se convirtió en el vicepresidente de la Junta Patriótica de Laureles, vecina de Cocorá.

Las primeras grandes elecciones presidenciales para la UP fueron el 25 de mayo de 1986. El entusiasmo de la

miliciancia del joven partido cundió por todo el país. El movimiento alcanzó en esos comicios, con la candidatura de Jaime Pardo Leal, 328.752 votos, los más grandes resultados hasta entonces para un partido de izquierda.

Aunque sólo era el 4,5% del total, representaba un alentador resultado, como lo observaron todos los analistas. El triunfador fue Virgilio Barco, quien asistiría en su cuatrienio al declive de la UP por físico exterminio. La organización alcanzó diecinueve curules en los comicios parlamentarios.

“Con los votos obtenidos en Bogotá llenamos de sobra El Campín”, anotó entusiasmado Pardo Leal, refiriéndose a los cincuenta mil sufragios que sumó su nombre en Bogotá. El presidente de la UP sería asesinado dieciséis meses y diecisiete días después de su gesta comicial.

Apenas se estaba abriendo paso esta nueva alternativa en el país, creada un año antes tras los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz que firmara el gobierno de Belisario Betancur y las FARC en La Uribe.

Sin embargo, se movían en las sombras las fuerzas que buscaban dar al traste con el ensayo de la UP. Las amenazas y, lo que es peor, los atentados contra la vida, arreciaron contra dirigentes y activistas en todo el país.

Los sueños de José Leonardo de ver la paz en su región se truncaron precisamente ese día de fiesta electoral.

A las seis de la mañana, después de tomar el café que le preparó su mujer, Ana Rosa Bejarano, dos sicarios lo acribillaron a escasas cuerdas de su casa en la vereda Los Pastos, muy cerca de Cocorá, a donde se dirigía como capitán electoral.

Quedó tendido con su mochila llena de votos por Jaime Pardo Leal. De sus asesinos nunca se supo nada.

Leonardo Posada, el primer magnicidio de la UP

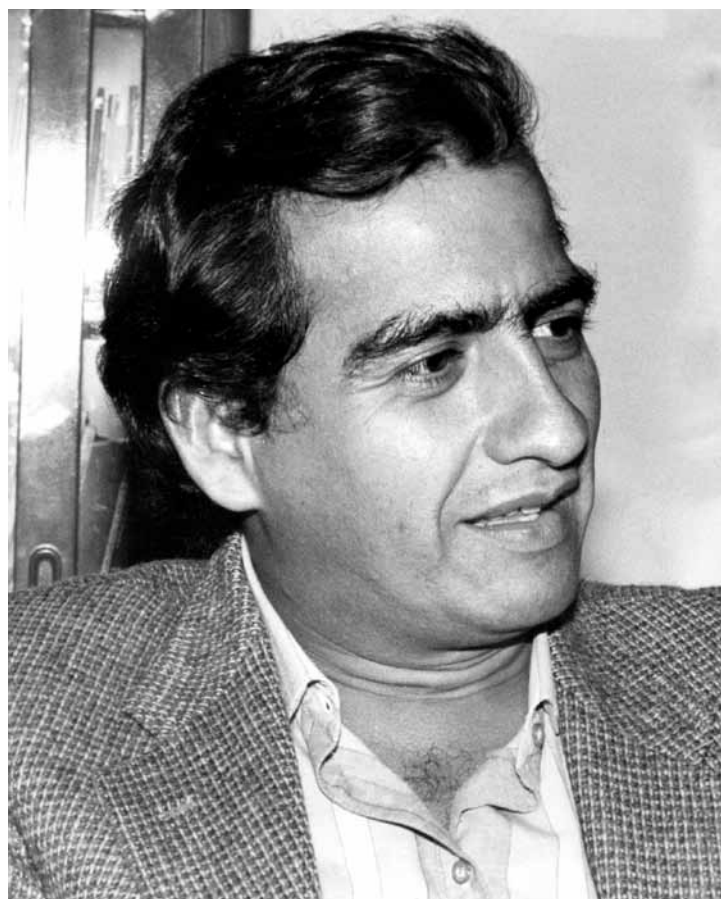
El 30 de agosto de 1986, cae abaleado el joven líder que acababa de ser electo representante a la Cámara por la Unión Patriótica de Barrancabermeja. ■■■■

Cuando aterrizó la avioneta esa noche del 31 de agosto en el aeropuerto El Dorado, con los restos mortales de Leonardo acompañados por su madre, Reina de Posada, un puñado de militantes de la Unión Patriótica entonaron consignas salvadoras que erizaron la piel de todos.

Entre ellos se encontraba Bernardo Jaramillo, un año más tarde presidente del joven movimiento tras el asesinato del líder Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987 y quien también caería acribillado el 22 de marzo de 1990.

Y aunque arreciaba la ola de atrocidades sin cuento contra la UP, creada el 28 de mayo de 1985, nadie en la pista imaginaba el horror que le esperaba al país con el peor genocidio político de su historia más cercana.

Bernardo, como Leonardo, exdirigente de la Juventud Comunista, repasaba sus momentos recientes en Apartadó, donde trabajaba como abogado defensor de sindicalistas. “Con semejante andanada yo regreso a la casa siempre con la



Leonardo Posada. (Foto: Lara, Voz)

mano puesta en un revólver que cargo, pues uno nunca sabe”, confesaba.

Los boleros de siempre

A Leonardo lo mataron el 30 de agosto, a eso de las siete de la noche en una calle de Barrancabermeja cuando caminaba con su novia. Los sicarios, dudando de su accionar criminal, acudieron minutos más tarde al centro asistencial donde llegó con vida, rematándolo sin contemplación alguna.

El joven dirigente alcanzó a despedirse con un ruego final: que en su sepelio no se entonaran himnos y cánticos revolucionarios, sólo deseaba que se pusieran los boleros que siempre lo deleitaron.

Así se hizo en el sepelio masivo en el Cementerio Central de Bogotá, donde un trío del teatro La Candelaria entonó *Sin ti* y *La gloria eres tú*, entre otras. Allí hablaron Horacio Serpa Uribe y Jaime Pardo Leal.

Leonardo se convertía en el primer mártir de gran notoriedad de la UP y abría el desgraciado camino de una decena de congresistas del partido sacrificados por la barbarie de la intolerancia.

Leonardo, hijo del veterano dirigente comunista Julio Posada, había nacido en Bogotá el 19 de octubre de 1947 y siendo estudiante de la secundaria, se unió a las filas de la Juventud Comunista, llegando a la Dirección Nacional cuando tenía veinte años.

Ya como estudiante de la Universidad Nacional, donde cursaba estudios en Ciencias de la Educación, le correspondió liderar a su organización en el histórico movimiento estudiantil de 1971, en una desigual batalla que libró al lado de sus compañeros de la izquierda.

El gran movimiento universitario de 1971, por la autonomía y el cogobierno que paralizó por meses todas las actividades académicas, tuvo en Leonardo a uno de los

conductores más comprometidos. Hacía parte por la Juventud Comunista (JUCO) de la Coordinadora Nacional Universitaria, que contaba con dirigentes destacados como Marcelo Torres, Moris Ackerman, Héctor Moncayo, Amilkar Acosta, Uriel Ramírez y Camilo González, entre otros.

Concejal de Barranca

Ésa fue la gran escuela de formación política y cívica de Leonardo. Pasado el movimiento, Posada termina sus estudios de Educación pero no se dedica al magisterio, sino que prefiere continuar como funcionario de la JUCO, donde permanece hasta 1983.

El partido y, una vez nace, la UP, lo destinan a Barrancabermeja, donde rápidamente asciende en el escenario social siendo electo concejal e integra la Coordinadora Popular, real vocera de los intereses ciudadanos.

En las elecciones parlamentarias de 1986 obtiene con una copiosa votación una curul en la Cámara de Representantes, que no logró casi ocupar.

A Leonardo, por su arraigo popular y su desbordante simpatía (eran memorables sus duelos de chistes y gracejos con Jaime Pardo Leal), algunos medios lo señalaron como uno de los más representativos exponentes de lo que llamaron la “social bacanería”, distante del supuesto acartonamiento que se le endilga a la izquierda colombiana.

Hoy contaría con sesenta y cuatro años y seguramente estaría dando brega por nuevos horizontes de paz y justicia social para el país, como siempre lo hizo en vida.

Su crimen continúa en la más completa impunidad y hace parte del caso

11.227 que hace curso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en busca de justicia y reparación.

Para honrar su memoria, en 2004 el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, su amigo cuando este era dirigente

del sindicato de la Unión Sindical Obrera en Barranca, le otorgó la “Orden Civil al Mérito, Ciudad de Bogotá” en el Grado de Cruz de Caballero.

Así mismo, un megacolegio distrital construido en la localidad de Bosa, fue bautizado con su nombre.

Pedro Nel Jiménez, el primer senador de la UP asesinado

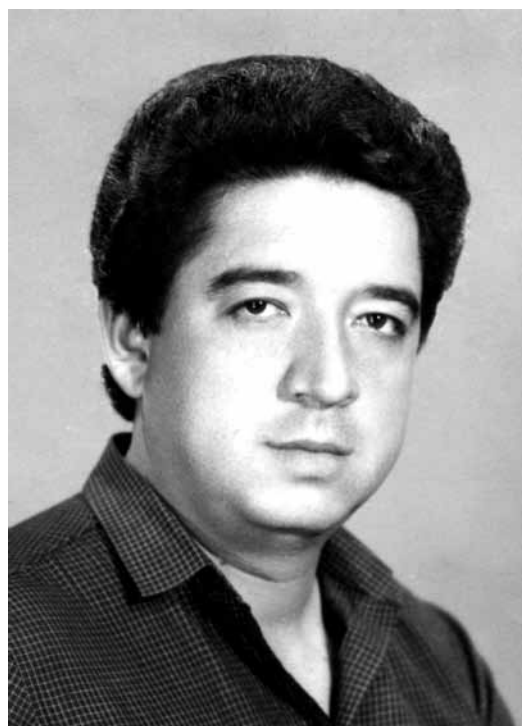
El 1° de septiembre de 1986 paramilitares ultimaron al líder regional delante de su pequeña hija, a quien había recogido minutos antes en la puerta del colegio en Villavicencio. — — —

No había terminado de enterrar la Unión Patriótica a uno de sus más queridos dirigentes, el recién electo Representante a la Cámara Leonardo Posada, asesinado en Barrancabermeja el 30 de agosto, cuando dos días después, el 1° de septiembre, varios sicarios daban muerte al senador por la misma agrupación, Pedro Nel Jiménez.

La conmoción nacional fue total pues con una diferencia de horas caían los dos primeros parlamentarios de la UP, de manera que la comisión del Ejecutivo Nacional, presidida por Jaime Pardo Leal, que había solicitado una audiencia con el presidente Virgilio Barco para denunciar el caso de Posada, fue llamada de urgencia a Palacio.

Barco, quien se había posesionado veintitrés días antes, inauguraba su mandato con la más cruda ola de persecuciones y atentados criminales contra la nueva alternativa nacida de los Acuerdos de Paz de La Uribe.

Pedro Nel, así como Leonardo, antes de terminar sus carreras, el primero



Pedro Nel Jiménez Obando. (Foto: Lara, Voz)

como educador en la Universidad Nacional y el segundo como abogado del Externado, eran activos militantes de la Juventud Comunista y se destacaron en las lides estudiantiles.

En la puerta del colegio

A Pedro Nel lo acribilló un sicario que iba en una moto conducida por un miembro del Ejército cuando se disponía a recoger, al mediodía de ese 1° de septiembre, a su hija del Colegio Normal Nacional, ubicado sobre la vía a Puerto López, en Villavicencio.

Los asesinos salieron en dirección a la VII Brigada, donde algunos testigos los vieron ingresar.

Varias declaraciones sindicaron al teniente del Ejército, Miller Tarsicio Koy, jefe de Inteligencia de la VII Brigada, como el militar que dio la orden de asesinar a Pedro Nel.

Según los archivos policiales, la medida fue ejecutada por los suboficiales del B-2 de ese cuerpo militar, sargentos Serbio Tulio Luna y Ovidio Tabuco Betancur.

Quien disparó fue Arnulfo Castillo Agudelo, exmilitar conocido como “Rasguño”, quien hacía parte de la estructura paramilitar de Víctor Carranza, como lo denunció el Proyecto Colombia Nunca Más.

Desde 1985 y durante la presidencia de Virgilio Barco Vargas, que comenzó en 1986, los crímenes contra los miembros de la Unión Patriótica eran realizados en el marco del denominado “Plan Baile Rojo”, uno de los cinco operativos desarrollados por las estructuras militares para exterminar a la UP.

Los sicarios no descansan ni en las honras fúnebres de las víctimas

El 3 de septiembre de 1986 durante el sepelio de Pedro Nel, masivo y de protesta que conmovió a todo Villavicencio, se realizaron permanentes seguimientos militares y, al llegar al cementerio, un grupo de seis hombres armados detuvieron y desaparecieron forzosamente a Jaír López y Crispulo Hilario, dos militantes de la Unión Patriótica del departamento de Guaviare.

Estos dos destacados militantes fueron asesinados y sus cadáveres encontrados con señales de tortura en la vía que comunica a Villavicencio con el municipio de Acacías, el 5 de septiembre de 1986.

Los sicarios no tenían descanso ni siquiera en las honras fúnebres de las víctimas.

Pedro Nel tuvo una vida plena al servicio de la causa popular. Nacido en 1948 en Villavicencio, se hizo abogado en el Externado de Bogotá. Por sus capacidades fue nombrado personero municipal de la capital del Meta.

Presidió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de ese departamento y defendió presos políticos. Durante varios años fue integrante del Comité Regional del Partido Comunista en esa zona del país. Antes de llegar al Senado por la Unión Patriótica, fue concejal de Villavicencio.

El crimen de Pedro Nel, muerto cuando apenas contaba con treinta y ocho años, sigue en la impunidad.



Jaime Pardo Leal encabeza la marcha de la Unión Patriótica en el desfile del Primero de Mayo de 1986 en Bogotá. (Foto: *Semanario Voz*)

Jaime Pardo Leal, el alma de la Unión Patriótica

El 11 de octubre de 1987 es asesinado el presidente de la joven organización y su primer candidato presidencial, quien obtuvo la más alta votación de toda la izquierda en ese entonces. — — —

Ubaque se encuentra perdido detrás de los cerros de Guadalupe. Y también en plena cordillera a un paso de Choachí, Cundinamarca.

Algunos estudiosos del comportamiento humano insisten que el carácter también se forma si se nace mirando las montañas o el horizonte del océano. Unos son más amplios, otros más cerrados, dicen.

Con Jaime Pardo Leal poco o nada funcionó esta teoría. Oriundo de Ubaque, donde había nacido el 28 de marzo

de 1941 en el seno de un hogar de raíces campesinas, siempre se le conoció como el más sociable, jovial y risueño de los políticos colombianos. Un sello que llevaba desde siempre.

Sus anécdotas se cuentan por centenares haciendo reír a quienes lo rodeaban. Ya fueran sus alumnos de Derecho de la Universidad Nacional o uno que otro estirado juez de la República, y por supuesto, todos sus compañeros de andanzas.

Un tribuno popular

Siempre afluía el chascarrillo o el chiste para matizar cualquier momento. Incluso los más difíciles que afrontaba como presidente de la Unión Patriótica. Si no fuera por su acento capitalino, todos habrían jurado que el Caribe corría por sus venas.

Esa forma de ser, desabrochada e irreverente, le dio también otro matiz a la izquierda, de apertura y tolerancia, sin perder nunca la firmeza en los principios, porque si había un líder más serio en las propuestas para allanar el camino de la paz, ése era Jaime Pardo, un verdadero tribuno popular que ya asomaba como un nuevo Gaitán.

Nunca se imaginó de candidato presidencial, pues soñaba con la magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Siendo miembro del Tribunal Superior de Cundinamarca, fue arrojado a la calle por el poder de algunos jueces que no soportaban que se unieran la justicia y las reivindicaciones laborales de los empleados de la rama, como luchaba a diario Pardo. Por eso fundó la Asociación Nacional de Servidores de la Justicia (Asonal Judicial), que hoy agrupa a todos los empleados de este sector público.

Su injusto despido coincidió con el nacimiento de la Unión Patriótica. Militante comunista desde que era estudiante de Derecho en la Universidad Nacional en 1957, año en que enfrentó con sus compañeros la dictadura de Rojas Pinilla, no dudó un instante en aceptar ser el presidente del joven movimiento que nacía de los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz de La Uribe.

Los anhelos de paz del pueblo colombiano y la tenacidad de la UP,

lograron convertir a esta agrupación en una verdadera alternativa política. En las elecciones parlamentarias de 1986, la UP conquistó un significativo avance: veinticuatro asientos en Cámara y Senado.

“Hermanito, con la votación que sacamos en Bogotá, llenamos El Campín”

Pero vendrían los comicios presidenciales de mayo de 1986 donde por primera vez la izquierda, en cabeza de Jaime Pardo, obtenía la más alta votación de su historia, obteniendo 328.752, el 4,5% de las papeletas.

“Hermanito, con la votación que sacamos en Bogotá, llenamos de sobra El Campín”, me decía en una entrevista que le hice para *Voz* un día después de las elecciones. En la capital, su nombre para la Presidencia alcanzó cincuenta y cinco mil votos.

Dos años después de ser fundada la Unión Patriótica, y tras sufrir una cadena de atentados contra sus cuadros y activistas que diezmó sus filas, caía Pardo asesinado en un operativo sicarial. Era el festivo 11 de octubre de 1987 y el jefe de la verdadera oposición, como lo llamaba el expresidente López Michelsen, regresaba a Bogotá de su pequeña finca de La Mesa para asistir a la boda de un dirigente del movimiento.

Colombia jamás se repondrá de esta pérdida. Su crimen sigue en la más completa impunidad.

En el barrio Policarpa un colegio del Distrito lleva su nombre y en su memoria fue levantado un monumento en la Avenida de las Américas con carrera 47. En el edificio de los juzgados de Paloquemao, en el *hall* principal, se

encuentra un busto con una placa conmemorativa. El 11 de octubre ha sido declarado como el Día de los Derechos

Humanos en la capital y de las Víctimas de la Unión Patriótica.

Jaime Pardo Leal

La Unión Patriótica lanza el candidato de la opción popular

La candidatura es una tremenda responsabilidad con mi pueblo y la interpreto como una tarea de honor que me impone el movimiento revolucionario colombiano. — — —

Ubaque se encuentra justo detrás del cerro de Monserrate. En línea recta hacia el sur, por la misma cordillera Oriental y a una hora en helicóptero está La Uribe, piedra bautismal de los Acuerdos de Paz firmados

entre los guerrilleros más antiguos del mundo y el Gobierno.

Cumpleaños comunes

De allí surgió, cumpliendo lo sagrado de los pactos, la Unión Patriótica. Y Ubaque también fue la pila bautismal de quien,

En las puertas del teatro Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal de brazo con su esposa Gloria, se saluda con el comandante de las FARC, "Braulio Herrera", de sombrero, en el acto de la Unión Patriótica el 28 de octubre de 1985. A la izquierda, los dirigentes de la UP, José Antequera y Jesús Aníbal Suárez. (Foto: Lara, Voz)



a los cuarenta y cinco años de edad, se acaba de convertir en su candidato presidencial.

Jaime Pardo Leal, una de las conciencias jurídicas más lúcidas del país, como que fuera por veintitrés años juez de la República, se sorprende por la paradoja, que se extiende al anotar el día de su nacimiento: 28 de marzo. La misma fecha en que se suscribieron los documentos de cese al fuego, tregua y paz en 1984 y la fundación de la Unión Patriótica un año más tarde.

En Ubaque, rodeado de su esposa Gloria, la novia de toda su vida, y también de sus tres hijos, Iván, de dieciocho años, estudiante de Ingeniería de Sistemas; Édison, de dieciséis años, quien culmina su bachillerato; Fernando, de diez, en quinto de primaria y Yarima, la hija mayor con veintidós años, alumna de Odontología, casada y quien le ha dado su primer nieto a la familia, vinculados todos a la Universidad Nacional; Jaime Pardo Leal nos recibe con esa simpatía que siempre lo salpica de chistes y gracejos.

Surge el candidato

“Era preciso un candidato de la más amplia convergencia que expresara fielmente los lineamientos tácticos y programáticos de la Unión Patriótica, que estuviera por la paz, contra el militarismo y las profundas reformas sociales”, repasa con modestia en su sencillo apartamento de Colseguros, una zona residencial de clase media a pocas cuadras del centro de Bogotá.

Y añade: “La Coordinadora Nacional de la UP nombró una comisión para hacer todo tipo de contactos destinados

a formar coaliciones electorales que han tenido buen resultado en varios departamentos; pero en relación al candidato presidencial, una vez se conoció la renuncia de “Jacobo Arenas” por los peligros que sobre su vida hacía pesar el militarismo, las gestiones no fueron fructíferas por circunstancias que soy el primero en lamentar”.

Un recuerdo de “Jacobo Arenas”

A “Jacobo Arenas”, el segundo comandante de las FARC, lo conoció el 9 de abril de 1960 cuando en el sitio en el que fuera asesinado Gaitán, pronunció un discurso en un acto de masas que lo impactó.

“Era un fogoso orador que entusiasmó a los presentes con sus denuncias sobre el futuro de violencia que ya se cernía sobre el país. Nunca más lo volví a ver”, dice. “Tenía todos los merecimientos para ser el candidato de la UP”.

“La candidatura es una tremenda responsabilidad con mi pueblo, y la interpreto como una tarea de honor que me impone el movimiento revolucionario colombiano”, afirma mientras extiende sus brazos copando el canapé donde está sentado.

La infancia humilde

Con una piel cobriza que lo identifica con el poblado de acentos indígenas que lo vio nacer, mediano de estatura y un cuello grueso que lucha por salir de la camisa de corbata, Jaime Pardo Leal comienza a contarnos con su voz grave de tantos alegatos forenses de brillo, algunos pasajes de su vida. Una vida de luchas y fidelidades sin tregua a la causa popular.



Jaime Pardo Leal en plena agitación electoral el día de los comicios presidenciales de 1986, en el barrio Policarpa de Bogotá. (Foto: Voz)

Hijo único, su infancia conoció las dificultades económicas. “Mi padre fue un modesto empleado público y mi madre una mujer sencilla de nuestro pueblo. Hice la primaria en la escuela pública y más tarde obtuve una beca para continuar estudios en el Colegio Municipal de Choachí, en las mismas sierras de Ubaque”.

Se graduó de bachiller en el Colegio Santiago Pérez de Bogotá, fundado en los años cincuenta por la Dirección Nacional Liberal, porque en las instituciones oficiales no se permitía el acceso de las gentes liberales. “Era la época de

la violencia sectaria y en el Santiago Pérez tenían cabida los humildes que venían de la provincia”, anota.

Las jornadas contra Rojas Pinilla

Recuerda cuando estaba en sexto bachillerato: “Intervine muy activamente en la lucha estudiantil contra la dictadura del general Rojas Pinilla y en las jornadas de mayo de 1957 caí preso por unos días”. Apenas tenía diecisiete años.

“Unos años antes había conocido a los primeros revolucionarios, entre ellos a Helmo Gómez Lucich, un joven comunista peruano, fogoso conductor abatido el 9 de junio de 1954 en la matanza estudiantil ordenada por Rojas”, señala.

Líder estudiantil

Después vendría la Universidad Nacional de Colombia, donde siempre ocupó puestos de comando en el movimiento estudiantil siendo alumno de la Facultad de Derecho. Sus coetáneos de estudio lo recuerdan como un líder nato. Hoy lleva doce años vinculado a la misma Facultad regentando la cátedra de Derecho Penal como profesor titular.

“Cuando sólo me faltaban dos meses para culminar mi carrera, fui expulsado por participar en una huelga que exigía mejoras en el Bienestar Estudiantil y contra la intromisión de los gremios en la Universidad. Salí junto con María Arango Fonnegra de Marroquín, Guido Lastra, Julio César Cortés, y Hermías Ruiz, estos dos últimos luego combatientes del Ejército de Liberación Nacional”.

Una insobornable carrera judicial

Jaime Pardo Leal, que ya tenía a cuestas buena parte de la responsabilidad en la

caída del rector Mario Laserna, quien proclamaba que la universidad no era para los pobres, logró graduarse acogiéndose a una amnistía especial.

“Aquí comenzaría mi larga carrera judicial al vincularme hace veinticinco años, primero como simple escribano de un juzgado para financiar mis estudios y ya graduado, convertirme en juez en un olvidado pueblo de Cundinamarca, Bituima, donde permanecí dos años”.

Pero no para quedarse detrás de la baranda del despacho, empezó su interminable oficio de organizador popular y asesoró a los campesinos de la región contra los latifundistas. Por supuesto exigieron su cabeza al Ministerio de Justicia. Y es que en estos veinticinco años de lides, Jaime Pardo Leal ha fundado una veintena de sindicatos y dirigido una cuenta sin fin de paros y huelgas al frente de los trabajadores de la Rama Judicial.

La primera huelga judicial

“Hace veinte años organizamos, con otros amigos, el comienzo de lo que sería más tarde la poderosa Asociación Nacional de Trabajadores de la Justicia en Colombia y la primera huelga de que se tenga noticia en los estrados judiciales de cualquier país del mundo. Eso fue por allá en 1962 y duró dos meses”. Y anota con orgullo: “Yo la encabecé y logramos notorias reivindicaciones como un aumento salarial de un cincuenta por ciento”.

En la pensión de la 18

Eran los tiempos en que Jaime Pardo Leal compartía penas y esperanzas con un puñado de muchachos en la pensión estudiantil de la calle dieciocho con

carrera quinta en Bogotá. “Al lado de la residencia vivía el expresidente López Pumarejo y me acuerdo que lo veía muchas mañanas en la cafetería vecina departiendo un tinto con Filiberto Barrero, a la sazón secretario de organización del Partido Comunista. Escuchaba con interés sus charlas sobre el momento político. De Barrero, quien vivía unas cuadras más arriba, me hice buen amigo”.

Asonal Judicial –de la que es fundador–, nace legalmente en 1968, siendo presidida por él mismo durante doce años y hasta su salida de la magistratura por las persecuciones de algunos miembros de la Corte Suprema, que lo retiraron como Juez del Tribunal Superior de Bogotá en agosto pasado.

Jaime “Paro Ilegal”

Persecuciones de las que siempre ha sido víctima Pardo Leal, a quien algún periodista llamó Jaime “Paro Ilegal” por su consecuente defensa de los intereses de los trabajadores. “Es que yo no pregunto nunca si un paro es legal o ilegal sino si es justo o no”, aclara.

Repasa cómo, cuando regresó del único viaje al exterior, un foro de paz en Moscú en 1962 siendo vicepresidente de la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos (UNEC), el periódico lopista *La Calle* le hizo una entrevista con fotos del encuentro en la capital soviética.

“El cura de mi pueblo compró varios ejemplares de la publicación para repartirlos en Ubaque con el fin de que no se me permitiese volver. Hasta se me hizo procesión. Tenía que llegar a las ocho de la noche y salir en la madrugada. Gloria, mi mujer y novia en ese entonces, una vez me defendió garrote en

mano contra un energúmeno campesino que peinilla al aire tomó muy a pecho las advertencias del párroco”.

“Uno de los nuestros”

Hoy ya esos tiempos han pasado, por lo menos en lo que hace a Ubaque, donde a pesar de ser un pueblo conservador, existe tal entusiasmo por la candidatura de uno de sus hijos que es posible un vuelco sorprendente. Algo que nunca soñaron los censores del pasado.

Con semejante insobornable hoja de vida, no era para menos que cada dos años su nombre fuera objeto de acalorados debates en la Corte Suprema cuando se elegían los jueces para los tribunales. “¿Un empleado oficial y dirigente sindical al mismo tiempo podía administrar? Ése era el debate. Triunfaron las tesis, por la misma existencia de la presión democrática, de quienes consideramos que nuestro derecho a impartir justicia y defender los intereses de los trabajadores no son funciones incompatibles. Con esto se respiraba un ambiente de mayor tolerancia política y que tanto requiere el país”, declara.

El candidato de la Unión Patriótica, mientras permaneció en la administración de justicia, fue un denunciante severo del Estado de sitio, de las arbitrariedades del militarismo con su absurdo ordenamiento penal. “Condenamos sin ambages las torturas y suplicios, la arrogancia castrense, rechazamos el Estatuto de Seguridad y pusimos a los gobiernos responsables de estos desmanes antidemocráticos en picota”, afirma.

“Nos ganamos el odio de los sectarios y recalcitrantes y por eso no me

han bajado de la docena de amenazas de muerte, para citar una cifra, y de los boleteos sin cuento a lo largo de estos años difíciles”, añade tranquilo.

El holocausto del Palacio de Justicia en 1985 llevó a Pardo Leal, al frente de Asonal Judicial, a impulsar el paro de los empleados judiciales que, en protesta por el crimen oficial, se mantuvo por una quincena en combativas jornadas de movilización. Acababa de ser retirado del tribunal por una minoría de la Corte Suprema inmolada.

Renunció a la presidencia de Asonal para convertirse en un político profesional al servicio de los desprotegidos. “Mi único patrimonio es el de la moral como abogado que nunca se comprometió en defender a las grandes empresas, casos de personas ligadas al narcotráfico o querellas que perjudicaran los intereses de la Nación. Y mi patrimonio económico se reduce a este sencillo apartamento, un *jeep* y una pequeña finca”, donde le jala al balompié los fines de semana con sus hijos y algunos amigos, pretexto “para echarse unas polas”.

Pero quizá la mejor definición de Jaime Pardo Leal como candidato popular presidencial, y sin duda el más brillante orador de la campaña, enfrentado a los mimados del sistema, lo dio una sencilla aseo de Paloquemao donde funcionan los Juzgados de Bogotá: “Él es uno de los nuestros”.

ROBERTO ROMERO OSPINA,
Voz, febrero 4 de 1986

La masacre de la Casa de la JUCO

El 24 de noviembre de 1987 tres sicarios asaltaron, en Medellín, la sede política de esta organización, puntal juvenil de la UP, asesinando a los militantes Orfelina Sánchez, veintiocho años; su cuñada María Concepción Bolívar, diecinueve años, recién graduada de bachiller; el obrero Iriam Zuaga, treinta años; la tesorera de la Juventud Comunista, Luz Marina Rodríguez, veintiún años y estudiante de Química y Farmacia de la Nacional; Pedro Sandoval, dieciocho años, y Marlene Arango Rodríguez, de veinte, en una de las peores masacres que recuerde la ciudad. ■■■■

Noviembre de 1987 fue quizá el mes más duro para la Unión Patriótica en ese año. Habiendo nacido en mayo de 1985, ya sumaban más de medio millar los muertos en sus

filas, víctimas del sicariato. Noviembre sobrepasó todos los límites: más de sesenta cuadros y militantes asesinados, dos cada día.

Mes y medio antes, el 11 de octubre, había sido acribillado el presidente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, en las cercanías de Bogotá. Y en ese cuadro de zozobra para el país, vendría la masacre de la Casa de la Juventud Comunista en Medellín.

El 24 de noviembre, a las cuatro y cuarto de la tarde, tres hombres armados, aprovechando que los policías de guardia extrañamente salieron “a tomar tinto”, como relatarían en la investigación, asaltaron las oficinas de la Juventud Comunista.

Con revólveres y ametralladoras, una vez accedieron al edificio esquinero de tres niveles que ocupaba la organización política, condujeron a ocho militantes que charlaban animadamente sobre algunas tareas, a la pequeña cocina del segundo piso para acribillarlos sin contemplación alguna.

Sede de la Juventud Comunista en Medellín asaltada por los paramilitares el 24 de noviembre de 1987.
(Foto: Voz)





Luz Marina Rodríguez, una de las víctimas. (Foto: Voz)

Allí murieron en el acto Orfelina Sánchez, de veintiocho años de edad; su cuñada María Concepción Bolívar, de diecinueve años y recién graduada de bachiller; el joven obrero Iriam Zuaga, de treinta años; la tesorera de la JUCO Luz Marina Rodríguez, de veintiún años y estudiante de Química y Farmacia de la Nacional, y Pedro Sandoval, de dieciocho años; pocas horas después falleció Marlene Arango Rodríguez, de veinte años, quien alcanzó a llegar con vida a una clínica cercana.

Lía Hernández, otra militante de la Juventud Comunista, se salvó pues se encontraba en el tercer piso. La misma suerte corrió Rafael Bolívar pues las seis víctimas cayeron encima de su cuerpo,

protegiéndole así la vida. Rafael era el esposo de Orfelina y hermano de María Concepción.

El crimen desató la repulsa nacional y todos los noticieros abrieron con esta información. El presidente Virgilio Barco se pronunció por la televisión esa misma noche, condenando los hechos. Pero de ahí no pasaba, ignorando la exigencia de todo un país indignado.

“No prevalecerán quienes pretenden, por la amenaza y la barbarie, ahogar las opiniones y frustrar la armonía social”, declaró. La Unión Patriótica, por su parte, culpó al Gobierno de la masacre en un duro comunicado que tituló “En Colombia sí existe la pena de muerte”. “Estamos cansados de escuchar a los funcionarios del Gobierno deplorar la muerte de nuestros hombres y mujeres, pero sin tomar ninguna actitud seria”, enfatizaba la Unión Patriótica.

En Bogotá, a pocas cuadras de la sede nacional de la JUCO, manifestantes quemaron un trolebús en la Avenida Caracas con calle 24. Y decenas de militantes de la organización se tomaron las instalaciones de la cadena Caracol, por esos tiempos situada en la Avenida 19 con carrera octava. Los lideraba José Antequera, secretario general de la JUCO, asesinado dieciséis meses después en Bogotá y siendo un destacado dirigente de la Unión Patriótica.

La masacre de la Casa de la JUCO sigue en la impunidad. La vía que colinda la sede fue bautizada como Calle de los Mártires de la Juventud.

El Volkswagen amarillo

El 15 de marzo de 1988 sicarios asesinaban en Montería a Alfonso Cujavante, el día siguiente de salir electo como concejal con una altísima votación. — — —

La Unión Patriótica, que aún no cumplía tres años, era objeto de una feroz persecución que buscaba liquidarla a sangre y fuego. Varios líderes del partido habían caído asesinados en diferentes sitios del país.

El departamento de Córdoba no era la excepción. El 4 de febrero un sicario ultimó en Montería, la capital, a Zenón Conrado, abogado defensor de presos políticos. El 26 caía en la misma ciudad el activista Marco Tulio Pérez. Y un día después, en Cereté, el candidato a la Asamblea Departamental por la UP, Geminiano Pérez, veía el rostro de la muerte en su propia casa.

Entrevistado por el Centro de Memoria para rememorar la muerte del líder de ese movimiento, Guillermo Alfonso Cujavante, asesinado por paramilitares el 15 de marzo de 1988 en Montería, el día siguiente de salir electo como concejal, Pérez nos sorprende con el relato de su propio atentado.

“Un poco después de las siete de la mañana del 27 de febrero, un sujeto que requería mis servicios como abogado, ya en la sala de mi casa, desenfundó una pistola 9 mm y comenzó a dispararme. Yo sólo atiné a ponerle la mano en el cañón y forcejear con el asesino”, recuerda.

“En su loca carrera por eliminarme, hirió gravemente a mi mujer, Ilma Vargas, y a mi cuñado, Tomás Zúni-ga. Este, sin pensarlo dos veces y con

aventurada puntería, pues yo estaba aún en un cuerpo a cuerpo con el sicario, lo eliminó de un certero disparo en la frente”, relata.

Pérez, con la mano destrozada, consiguió llevar a su esposa y su pariente a la clínica de urgencias, en donde pudieron todos salvar sus vidas.

Sospechosamente el policía que le habían puesto para su protección, minutos antes de llegar el sicario, se había esfumado.

Geminiano Pérez, una vez sus familiares se recuperaron, no tuvo más remedio que dejar su tierra, a pesar incluso, de haber salido electo como diputado por la UP quince días después de la tentativa de homicidio.

“Jamás hubo una investigación por este hecho y menos detenidos. La impunidad total”, afirma.

Entonces habla de la muerte de su entrañable amigo y compañero de li-des, Guillermo Alfonso Cujavante.

“‘El Cuja’, como le decíamos cariñosamente, fue acribillado con una sevicia sin nombre, más de veinte disparos recibió aquel 15 de marzo de 1988, apenas un día después de sacar una altísima votación por las listas de la UP para el Concejo de Montería”, anota.

Los sicarios, añade, llegaron instantes después de que este abogado defensor de derechos humanos entrara al taller de mecánica donde iba a retirar su Volkswagen amarillo recién reparado.

Su paso en el escarabajo dorado ya era muy popular en toda la región.

Con un socarrón, “felicitaciones señor concejal”, tres sicarios descargaron sus armas en el cuerpo de Cujavante.

“Pensaba marcharse casi de inmediato en su Volkswagen amarillo para Bogotá, como ya lo había hecho varias veces, para escapar del asedio paramilitar. Esta vez no alcanzó”, recuerda.

“Con el asesinato de Cujavante se golpeó al corazón mismo de la Unión Patriótica en Montería. ‘El Cuja’ era un verdadero líder popular, gran tribuno y querido por todos”, enfatiza.

Nacido en Monguí, Boyacá, Cujavante, siendo un joven comunista, optó por evadirse de las filas del servicio militar. Se refugió en Montería y sin ser bachiller, su audacia juvenil y capacidad de autodidacta lo llevaron a ser profesor en 1963 del Colegio Nacional José María Córdoba en la capital cordobesa. Incluso dictó clases de inglés y francés.

“Como no podía andar sin papeles, terminó en un santiamén su bachillerato y más tarde, con la ayuda de los amigos, se marchó a Bogotá donde culminó, con las mejores notas, su carrera de abogado en la Universidad Autónoma”, repasa Pérez, alumno suyo en el colegio.

“‘El Cuja’ regresa en 1982 a Montería y comienza una exitosa carrera profesional y política en las filas del recién nacido Partido de la UP”, añade.

Cujavante dejó tres hijos de seis, doce y quince años el día de su muerte y cuando aún no cumplía cuarenta y cinco.

Su crimen, como todos los de la UP, sigue en la impunidad. Su entierro en



Guillermo Alfonso Cujavante. (Foto: Voz)

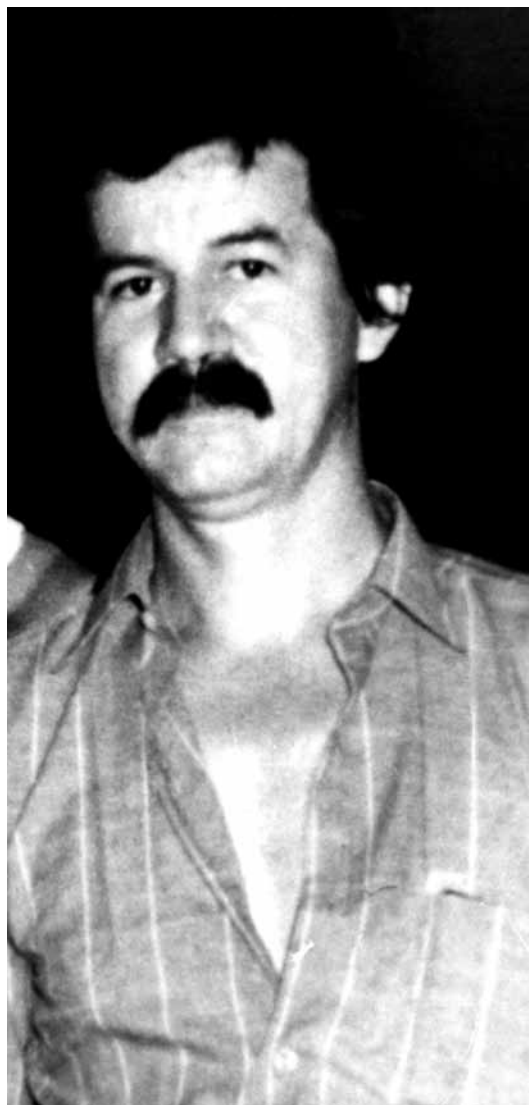
Montería lo recuerdan todos. “Jamás se había visto tanta gente en unas honras fúnebres en la ciudad, era el sentido homenaje a un hombre que le dedicó toda su vida a las causas populares”, concluye Pérez.

Su Volkswagen amarillo jamás se volvió a ver por las polvorientas calles de Montería.

Rodrigo, el sastre que tejía los hilos de *Voz*

El 16 de marzo de 1988, sicarios asesinan en su propio casa a Rodrigo de Jesús Hoyos Sánchez, activista de la UP y distribuidor del semanario de los comunistas, mientras laboraba en su máquina de coser. ■■■

Rodrigo no alcanzó a levantarse de su mesa de trabajo cuando recibió una andanada de disparos. Cayó acribillado frente a la máquina de



Rodrigo Hoyos. (Foto: *Voz*)

coser en su casa de habitación en un barrio popular de Barranca, donde tenía un pequeño taller de costura.

Eran las cinco de la tarde del miércoles 16 de marzo de 1988.

Rodrigo de Jesús Hoyos Sánchez, de treinta y ocho años, era el secretario general de la seccional de Provivienda, el movimiento de los destechados en el puerto petrolero y propagandista del Partido Comunista.

Todos los jueves eran sagrados para Rodrigo. Ese día, tan pronto llegaba de Bogotá el periódico *Voz*, se dedicaba a conservar los hilos que mantenía el semanario con la comunidades, garantizando que llegara a estas y al último puesto de venta de Barranca.

El asesinato de Rodrigo, quien dejaba una viuda, Ángela Peña, y cuatro pequeños, Yenn, Shirley, Carlos y Rodrigo, culminaba la racha de crímenes que en esa semana electoral se había ensañado contra la UP en el puerto, al ser abatidos otros seis militantes de la UP.

Su muerte produjo de inmediato un formidable movimiento de protesta en toda la ciudad que se convirtió, horas después, en paro cívico.

El *Semanario Voz* relató así la protesta: “El paro fue obra de la espontánea indignación popular. Simplemente nadie fue a trabajar. El comercio cerró

sus puertas y el transporte de pasajeros por vía aérea y terrestre quedó interrumpido hasta el sábado siguiente, 16 de marzo, sin que nadie arrojara una sola tachuela”.

El padre Nel Beltrán, hoy obispo de la Iglesia Católica, ofició el acto fúnebre por la vida inmolada de Rodrigo

ante miles de personas que ondeaban las banderas de la Unión Patriótica y al que asistieron todas las personalidades de Barrancabermeja, entre ellas, el alcalde de la ciudad, Rafael Fernández y Horacio Serpa Uribe, hoy gobernador de Santander.

El crimen de Rodrigo, el sastre que tejía *Voz*, sigue en la impunidad.

La masacre de Ringo Rango

El 27 de mayo de 1988 fueron asesinados en Villavicencio tres líderes y una dirigente de la Unión Patriótica del Meta. ■■■



Carlos Kovacs. (Foto: Voz)

Carlos Kovacs tenía ancestros húngaros. Se reflejaban en su rostro de intelectual con unas gruesas gafas que denotaban su miopía. Pero en política no padecía de ella. Desde muy joven incursionó en la lucha estudiantil de la enseñanza media en Villavicencio

e hizo parte de la pujante Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria, uno de cuyos destacados dirigentes fue Bernardo Jaramillo Ossa.

Carlos también ingresó a la Juventud Comunista a finales de los setenta. Se mantuvo un tiempo en Granada, Meta, al frente de un comité de zona y luego trabajaría desde la capital del departamento en el regional del Partido Comunista.

Cuando nació la Unión Patriótica en 1985, tras los Acuerdos de La Uribe, Carlos muy pronto ascendió a sus cuadros directivos y alcanzó la presidencia de la Asamblea Departamental del Meta tras el asesinato del líder de ese movimiento, Rafael Reyes Malagón, en abril de 1986. Carlos era su suplente en la duma.

Sin embargo, el futuro político que se avizoraba promisorio para Carlos fue truncado, como sucedió con miles de cuadros de la izquierda, en las aciagas épocas de los ochenta y noventa, tras el exterminio de la UP: el 27 de mayo de 1988 fue asesinado contando apenas con treinta años, junto con otro novel

conductor de juventudes, una dirigente regional y el escolta.

Ese día, hace veintitrés años y a las siete y cuarenta y cinco minutos de la noche cuando Carlos Kovacs; Néstor Henry Rojas, de veinticinco años y excandidato a la Alcaldía de Puerto Gaitán por la UP; Martha Sánchez, de treinta años y expersonera de Vistahermosa por la UP; y José Antonio Riveros, de veintiséis años y escolta dispuesto por el joven movimiento, accedían al segundo piso del restaurante Ringo Rango, a pocos pasos de la Gobernación, fueron asesinados por cuatro sujetos que abrieron fuego con sus metralletas.

Los sicarios huyeron tranquilamente del lugar en un campero blanco, frente a varios policías apostados en una entidad financiera contigua. A pesar del tiroteo, no hicieron nada por detener la fuga.

Ese mismo día fue desaparecido el vigilante de la casa de la UP de Villavicencio, Fabriciano Vargas.

Según los datos de la UP, para la fecha de esa masacre, ya habían sido asesinados 260 militantes, entre ellos el senador Pedro Nel Jiménez, un representante a la Cámara, dos diputados, ocho concejales, cinco candidatos a alcaldías, dos presidentes de seccionales de Provienda, y habían tenido lugar seis masacres con cuarenta y ocho líderes muertos. Jamás se ha sabido de investigaciones y menos de detenidos.

Carlos Kovacs y sus acompañantes se sumaban trágicamente a la ya larga lista de sacrificados de este genocidio, en una de las regiones más azotadas por la violencia.

Orlando, el líder petrolero

El 2 de junio de 1989 fue asesinado Orlando Higueta, líder de los trabajadores del petróleo de Barrancabermeja, concejal y fundador de la Unión Patriótica en Santander. ■■■■

Barrancabermeja sufrió un devastador golpe el 2 de junio de 1989: un sicario asesinó con varios disparos a Orlando Higueta, quien fuera uno de los más prestigiosos dirigentes obreros de Ecopetrol, encabezara la huelga en esa empresa en 1977 por la defensa del patrimonio y ejerciera como concejal y fundador de la Unión Patriótica.

Orlando cayó, ese día de junio, en la calle 10 No. 16-73 de Barrancabermeja, en el establecimiento de comidas rápidas Hamburguesas de la Décima, de su propiedad.

A las diez de la noche, mientras Orlando atendía a unos clientes, un hombre se le acercó para propinarle catorce impactos de bala con su arma automática. El asesino emprendió la huida en un campero blanco sin placas y escoltado por una moto.

De inmediato Orlando fue trasladado al Hospital San Rafael, donde murió una hora después. En el hecho resultaron heridos Luis Fernando Ospina (médico de Ecopetrol) y el estudiante Julián Orlando Campero.

Versiones de la comunidad indican que, minutos después del atentado, el mencionado vehículo ingresó a las instalaciones del Batallón Nueva Granada de Barrancabermeja. Otras señalan que el campero había sido donado por Ecopetrol al Ejército Nacional.

A las once de la mañana del día siguiente, un grupo autodenominado “Toxicol 90” se atribuyó el crimen mediante una llamada a la Emisora *La Voz del Petróleo*.

Días antes, el 30 de mayo, Orlando y su esposa habían viajado a Bucaramanga y desde su salida de Barrancabermeja fueron seguidos por dos hombres; al parecer los mismos que lo asesinaron.

Reiteradas amenazas contra Orlando y otros integrantes de la Unión Patriótica se recibían a diario, tanto en Barrancabermeja como en otras ciudades del país.

El 19 de mayo de 1987, la Dirección Departamental de Santander de la Unión Patriótica solicitó al Director Seccional del DAS, Carlos Alberto Becerra, protección especial para el concejal Higuita, así como para otros dirigentes de la UP en la región. Ante la petición y en desarrollo del Plan Nacional de Escoltas para la Unión Patriótica, a cargo del DAS, a Orlando le asignaban eventualmente un escolta de la Policía o del DAS, pero sin vehículo ni armamento adecuado.

Al momento de su muerte, tenía la asignación de un escolta del DAS, pero este no se encontraba con él.



Orlando Higuita Rojas. (Foto: Voz)

En julio de 2007 el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, inauguró el Colegio Distrital Orlando Higuita Rojas, en un acto simbólico de reparación y en homenaje al destacado luchador social.

Teófilo, el campesino que se convirtió en líder obrero

El 27 de febrero de 1989 fueron asesinados el dirigente de la Unión Patriótica, Teófilo Forero, y su esposa Leonilde junto con Antonio Sotelo y Antonio Toscano, líderes del movimiento, en un restaurante al sur de Bogotá. ■■■■



Teófilo Forero. (Foto: Voz)

La niebla que cubría la ciudad de potreros, que en ese entonces era Bogotá, tuvo que inquietarlo. En 1947, con los pantalones cortos de sus diez años y de la mano de sus padres campesinos, subía a una flota para remontar la cordillera huyendo de La

Violencia. Atrás quedaba su tórrida Ntagaima, bien al sur del Tolima grande.

Siendo un mozalbete, en plena ilegalización del Partido Comunista, ingresa a sus filas. Corría 1956. Pocos años después, Teófilo Forero logra, en la gran ciudad, engancharse como obrero metalúrgico de Talleres Centrales que comenzaba en masa la producción de electrodomésticos. Entusiasmado con las ideas socialistas, muy pronto se convierte en dirigente del sindicato.

En 1964, con apenas veintisiete años, es uno de los fundadores de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), que fuera el núcleo vital de la CUT. Su labor lo conduce también a crear la Federación Sindical de Trabajadores de Cundinamarca (FESTRAC), siendo su primer presidente.

Pero Teófilo va más allá. El camino de la política lo lleva a ser diputado de la Asamblea Departamental de Cundinamarca en dos periodos y otros tantos como concejal de Bogotá.

Ya por entonces era un destacado dirigente nacional del Partido Comunista, y como tal contribuye a la fundación de la Unión Patriótica. En las filas comunistas alcanza la más alta posición después del secretario general: la Secretaría de organización.

Sobre Teófilo escribió Manuel Cepeda, el también inmolado dirigente de la UP: “Forero, el infatigable, tenía una dura e íntegra bondad. Era recio. Y decía las cosas sin rodeos. A los cincuenta y dos años de edad, despuntaba como uno de los mayores paladines que ha tenido nuestra clase obrera. Proveniente de las entrañas del Tolima, sus raciocinios estaban siempre salpicados de bromas. Y las cosas, bajo la sobria y poderosa luz de su pensamiento de obrero, transmitían siempre un mensaje de esperanza”.

Teófilo fue asesinado el 27 de febrero de 1989 en compañía de su esposa Leonilde, del dirigente de la UP de Córdoba, Antonio Sotelo, de treinta y cinco años y también miembro del Comité Central del Partido Comunista y de su leal conductor, José Antonio Toscano, de cuarenta y un años, nacido en Boyacá y luchador por la vivienda. Fueron masacrados cuando se disponían a entrar al restaurante La Brasa Roja, en la carrera 30 con calle primera en Bogotá.

José Antequera, el luminoso Caribe

El 3 de marzo de 1989 un niño sicario, a órdenes del paramilitarismo, acribilló en pleno aeropuerto El Dorado a una de las figuras más promisorias de la izquierda colombiana. ■■■

El país entero se conmovió ese 3 de marzo de 1989 cuando fue acribillado, en pleno aeropuerto El Dorado, José Antequera Antequera, en uno de los crímenes más alevosos que haya conocido Colombia.

En la acción fue herido el dirigente liberal Ernesto Samper Pizano, quien se encontraba accidentalmente en el lugar y se convirtiera, cinco años después, en Presidente de la República.

Secretario general de la Juventud Comunista y destacado dirigente de la Unión Patriótica, José Antequera ya era una prominente figura nacional. Contaba con treinta y cuatro años y había nacido en Barranquilla, cuyo Caribe corría por todas sus venas.



José Antequera el día de su grado de abogado de la Universidad del Atlántico, en 1979, junto con su esposa, María Eugenia Guzmán, y su abuela, Eva Antequera. (Foto: archivo particular)



José Antequera. (Foto: Voz)

Una ecuación imposible

Antequera resolvía una ecuación casi imposible: buen danzarín, bohemio, mamiador de gallo, cordialidad a flor de piel y de contera bien plantado, lo que unía con su entusiasmo por las tareas políticas, amén de ser magnífico expositor y mejor orador.

Antequera y el autor de estas notas, fuimos cooptados a la Dirección Nacional de la Juventud Comunista en octubre de 1978.

De “Pepe” guardo los mejores recuerdos, incluidos aquellos que me remontan al sopor de alguna interminable reunión del “Ejecutivo” cuando se deleitaba, trazando en una hoja cualquiera, los rostros de todos con un resultado sorprendente. Siempre creí que en Antequera se había extraviado un dibujante de extraordinarias cualidades.

Representantes del Centro de Memoria conversaron sobre su legado con la esposa de Antequera, María Eugenia, con Álvaro Vásquez, miembro, como José, del Comité Ejecutivo del Partido Comunista y con Carlos Lozano, director de *Voz*.

Un legado para las nuevas generaciones

“El daño es irreversible y permanente, pero por ser él como era, lleno de alegría y optimismo, con ese amor por la vida; sus hijos Erika Patricia y José Darío, y yo, salimos adelante, aunque nunca fue fácil pues el dolor de su desaparición siempre estará presente”, señala su viuda.

Erika y José contaban con trece y cinco años el día de la tragedia.

Para María Eugenia “esa fe que nos legó a todos se convierte en plena confianza en que las nuevas generaciones, como él en su tiempo, están destinadas a cambiar el país”.

“En estos veintidós años se reafirma con mayor claridad que su asesinato se encaminaba a eliminar, no sólo a la izquierda, sino todo signo democrático de la Nación, como hemos seguido padeciendo estos años mientras la estigmatización contra lo progresista se mantiene”, añade.

Y ratifica lo que ha dicho todos estos años: “El crimen continúa en la más completa impunidad. La Fiscalía no ha resuelto nada, prácticamente no hay ninguna investigación, menos detenidos o procesos en curso sobre autores materiales o intelectuales. La Corporación Reiniciar mantiene una querrela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

“Con el paso de los años crece el recuerdo y su memoria se dimensiona. El

legado es su alegría, su optimismo en la vida, en los cambios, y eso jamás lo pueden destruir ni las balas asesinas ni la distorsión de los hechos”, enfatiza.

Un prometedor cuadro de la intelectualidad barranquillera

Álvaro Vásquez, exsecretario general del Partido Comunista entre 1990 y 1996, compartió siete años con Antequera en el Comité Ejecutivo Nacional de esta organización.

“José era uno de los cuadros más prometedores que había dado la lucha y la intelectualidad joven de Barranquilla”, anota.

“Para nosotros su muerte fue uno de los más duros golpes por toda la proyección que tenía, ya no sólo como líder juvenil sino popular, y muestras de lo cual brindó como destacado dirigente de la Unión Patriótica hasta el fin de sus días”, relata.

Agrega que “sustituir a José en la dirección del partido, donde resolvía con enorme entusiasmo las tareas de la organización, era impensable, para entender el gran vacío que dejaba”.

Por esos años, el genocidio contra la UP prácticamente cercenó de tajo media dirección del partido, y desapareció una generación completa de cuadros jóvenes.

“Ésa era la misión principal de los autores de estos atentados, borrar del país una generación de relevo en la dirección de la izquierda y con visión en los asuntos capitales del país”, subraya.

Vásquez rememora que José era un permanente estudioso de los problemas del país. “Siempre tenía una opinión seria y profunda que matizaba con gran facilidad de expresión sobre los temas más palpitantes, ya sea en la política, la economía o la cultura”.

Mantenía una columna semanal en el diario conservador de la familia Pastana, *La Prensa*, que ganaba cada vez más audiencia.

“El domingo anterior a su muerte, recuerdo que me visitó a mi casa para mirar la tesis que terminaba de una maestría en Ciencias Políticas sobre un campo de su especial preocupación, el de los problemas de la juventud, y allí volví a observar toda la profundidad de sus elaboraciones teóricas”.

Por su parte Carlos Lozano, quien hizo parte de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista cuando José era su secretario general, lo recuerda como un hombre muy dinámico y actualizado, de una gran capacidad de trabajo, lector vivaz y de notables inquietudes intelectuales.

No sólo de marxismo vive el hombre

“Cuando José era el máximo líder de la organización juvenil y yo era el secretario de propaganda y medios, entre 1984 y 1989, recuerdo que mantenía una viva amistad con él y con otro grupo de camaradas y solíamos reunirnos, no sólo para mantener animadas discusiones sobre textos marxistas hasta el amanecer, sino para analizar joyas de la literatura como el *Cuarteto de Alejandría*, que leímos con entusiasmo, o textos de García Márquez. Ése era “Pepe”, como le decíamos con cariño, lleno de calor humano y una alegría desbordante”, señala.

Como líder juvenil, indica Lozano, contribuyó mucho en la tarea de crear conciencia sobre la misión de las nuevas generaciones en la transformación del país; de ahí su responsabilidad como Coordinador Nacional de Juventudes, que agrupaba a todos los sectores y que

tenía como norte la conquista de nuevos derechos para los jóvenes.

“Él ya había sido un destacado dirigente estudiantil de la Universidad del Atlántico en Barranquilla y de la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios, en una escuela de debate y lucha por las reivindicaciones del alumnado”.

Para Lozano no se trató de un crimen político más sino de un verdadero magnicidio, por todo lo que significaba su figura y su incuestionable proyección en la vida del país.

“Antequera, como otros líderes de la izquierda: Bernardo Jaramillo, Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez, entre muchos otros, también asesinados por el Establecimiento, eran revolucionarios que creyeron en el fervor de la lucha

juvenil, pero comprendieron que el triunfo popular era una tarea de largo aliento y sin desesperación, labraban el camino de la organización hacia los cambios profundos. El cercenar sus vidas promisorias ha sido uno de los peores crímenes que se hayan perpetrado contra el país”.

Al Cementerio Central de Bogotá asistieron miles de personas a despedir a José Antequera, tras un largo desfile desde el Concejo de Bogotá donde había sido velado. En varias ciudades del país tuvieron lugar actos simbólicos con nutrida asistencia.

El domingo siguiente el cantante argentino Piero, en un concierto en la Media Torta a reventar, se refirió a “Pepe” como esos hombres que los pueblos jamás pueden olvidar.

Los criminales estrechan el círculo

El crimen de la alcaldesa de Apartadó, Diana Estela Cardona, cometido tras su secuestro en Medellín el 26 de febrero de 1990, llenó de malos presagios a toda la militancia de la Unión Patriótica, que fue declarada en estado de alerta por su presidente, asesinado veinticuatro días después.

A Bernardo Jaramillo pocas veces se le había visto tan preocupado. Ese 26 de febrero interrumpió decenas de veces todos los encuentros, citas y reuniones que tenía en la sede nacional de la Unión Patriótica de la calle 23.

Llamaba una y otra vez a Medellín o estaba tan pendiente del teléfono que no se podía concentrar. Esa mañana le habían avisado los compañeros de la UP de la capital antioqueña, que Diana Estela Cardona, la bella alcaldesa de Apartadó, militante de toda la vida, había sido secuestrada por cinco sujetos.

El paso de las horas sin noticias de Diana hacía temer lo peor. A eso de las cinco de la tarde repicaron los teléfonos de la sede central con la aciaga noticia: el cuerpo de la destacada dirigente política, con varios disparos, había sido abandonado en los extramuros de la ciudad.

El dolor de los dirigentes del movimiento se expresó en la rápida convocatoria de una rueda prensa para el día siguiente. Todos estaban allí, presididos por Bernardo, amigo entrañable de Diana y a quien había recomendado para que reemplazara al alcalde electo de

Apartadó, Ramón Elías Castillo, quien no tuvo más opción que marcharse al exilio tras la andanada de amenazas sin fin.

Diana, abogada de la Universidad de Antioquia y expersonera de Turbo por la UP, asumió el cargo como conductora de la administración de Apartadó, de casi total influencia del movimiento, el 5 de septiembre de 1989.

Su bautizo de fuego lo tuvo a los pocos días de posesionarse, al sortear uno de los paros bananeros del Urabá más duros que se hayan vivido en la región y que duró treinta y tres días. Con su carisma e inteligencia logró que los empresarios cedieran, y retornaran a sus labores más de veinte mil obreros de centenares de fincas.

Diana había caído en una celada de los organismos del Estado que debían protegerla. No de otra manera se explica su secuestro y posterior asesinato. Un grupo de hombres, haciéndose pasar por integrantes del DAS, llegaron a su residencia en Medellín, donde había permanecido varios días en actividades oficiales.

Los falsos agentes acudieron a las cinco y quince minutos de la mañana con la misión de escoltarla hasta el aeropuerto José María Córdoba, como estaba previsto, donde tomaría el primer vuelo hacia Apartadó.

Por motivos de seguridad, el DAS era el único organismo enterado acerca de la rutina de la alcaldesa. Nadie más sabía de sus movimientos. No obstante y de manera sincronizada, como en anteriores oportunidades, llegaron los paramilitares y cumplieron sin riesgo su macabra misión.

Bernardo Jaramillo, sin poder esconder su dolor, expresó en la rueda de prensa que en el crimen de Diana Estela



Diana Estela Cardona. (Foto: Voz)

estaban comprometidas las Fuerzas Armadas, como en todos los asesinatos de la militancia de la UP.

El candidato presidencial, que ganaba cada vez más audiencia con su audaz campaña de “Venga esa mano, país”, anunció que la UP desistía de la participación en la firma de los Acuerdos de Paz con el M-19: “No nos digamos mentiras, aquí no hay paz”, subrayó Bernardo.

Otra medida de protesta contra el asesinato de Diana Estela, fue el inmediato retiro de la UP del Tribunal Nacional de Garantías con vistas a las elecciones de mayo de ese año.

“A nosotros sólo nos sirven las garantías de vida”, señaló la UP.

“Declaramos en estado de alerta a toda nuestra militancia ante el infame crimen de la alcaldesa de Apartadó, no nos podemos dejar eliminar más de esta manera”, señaló.

Veinticuatro días más tarde sería el propio Bernardo quien caería acribillado por los sicarios.

“Venga esa mano, país”

Bernardo Jaramillo Ossa, el presidente de la Unión Patriótica, fue asesinado el 22 de marzo de 1990 en el Puente Aéreo de Bogotá, cuando con su candidatura presidencial llenaba todas las plazas del país. — — —

Pocas noticias han herido tanto a la Nación entera. Bernardo Jaramillo, por su juventud y carisma, se había ganado el cariño de todo el pueblo. Sin duda, hubiera ocupado un destacado lugar en las elecciones presidenciales de mayo de 1990. O quizá hubiera sido el Presidente.

Con apenas treinta y un años alcanzó la presidencia de la Unión Patriótica. Acababan de asesinar a Jaime Pardo Leal y el día siguiente, 12 de octubre de 1987, el joven movimiento con apenas dos años de vida, no dudó un instante en elegir por unanimidad a Bernardo como su nuevo líder.

Bernardo, desde muy joven, casi un niño, se entregó por entero a la causa popular. Fue dirigente estudiantil de secundaria en su natal Manizales, y como integrante de la Juventud Comunista (JUCO), llegó a su Comité Central en 1976 con apenas veinte años.

Urabá, el rostro crudo del paramilitarismo

Más tarde vino la universidad, donde se graduó como abogado. Pasó al Partido Comunista y lo vimos en Apartadó, donde la Unión Patriótica era la primera fuerza. Allí, presenció el rostro crudo del paramilitarismo, que se ensañaba en veredas y pequeños poblados.

Su primera esposa, Ana Lucía Zapata y sus dos pequeños hijos, Paola



Bernardo Jaramillo Ossa. (Foto: Voz)

Tatiana y Bernardo, por quienes profesaba un inmenso cariño, se quedaron en Manizales. Él procuraba verlos cada semana, hurtándole tiempo a sus ajetreos políticos.

Lo volvimos a ver en la capital del Urabá antioqueño en casa de la alcaldesa, militante de la UP, en una de esas visitas periodísticas a la región.

“Cuando salgo en la noche por estos lares de Apartadó, tengo la mano en mi pistola, presto a cualquier acción del sicariato, pero sólo en defensa propia”,

nos dijo en la pista del aeropuerto El Dorado cuando la noche del 30 de agosto de 1986 fuimos a recibir los restos de su entrañable amigo Leonardo Posada, con una docena de militantes de la UP, la familia y algunos periodistas.

Posada fue asesinado por el paramilitarismo en Barrancabermeja y Bernardo, cuando refería su apego a un arma para su estricta protección, daba así cuenta del enrarecido clima de intolerancia que agobiaba a Colombia.

Pero siempre fue enemigo de una salida militar al conflicto, pues creía firmemente en los caminos de paz a través del diálogo y no con las armas.

No hay salida militar a la crisis

“En Colombia no hay cabida para una salida militar a la crisis, ni de parte de la guerrilla ni de parte de las fuerzas oficiales. La única posibilidad que hay es la solución política a través del diálogo y la negociación para allanar el camino hacia la paz”, señalaba en una entrevista de prensa al periodista que escribe estas notas seis meses antes de su muerte (“Lograr la apertura democrática”, entrevista con Bernardo Jaramillo, *Semana-rio Voz*, septiembre 14 de 1989).

Para ese entonces los muertos de la UP pasaban del millar, sin que el país hiciera nada por acallar a los asesinos.

En 1986 Bernardo sale electo a la Cámara por Antioquia y allí muestra su perfil de combativo parlamentario, poniendo en la picota al sistema en memorables debates.

El 9 de septiembre de 1989, en un inmenso Congreso de la UP, que selló la unidad del movimiento, Bernardo es escogido como candidato presidencial por

unanimidad y comienza una fulgurante campaña bajo el lema “Venga esa mano, país”.

Muy pronto el eslogan se hizo popular en vallas y miles de carteles, donde aparecía su retrato alegre saludando con el brazo en alto. El mejor afiche de campaña alguna, jugando con los colores verde y amarillo de la UP. Bernardo Jaramillo comenzó a convertirse en el objetivo máspreciado del paramilitarismo.

Mariella Barragán, con quien vivió los últimos años y quien además presencié el asesinato de Bernardo ese 22 de marzo de 1990 en el Puente Aéreo de Bogotá, minutos antes de abordar un avión que los llevaría a Santa Marta, describe a Bernardo para estas páginas del Centro de Memoria.

“Con su muerte perdimos todos”

“Bernardo era un hombre moderno, de una profunda sensibilidad. Hoy a sus cincuenta y ocho años estaría trabajando con todo ahínco por un nuevo país, sin exclusiones, democrático y más justo. Le hace una enorme falta a Colombia”.

Para Mariella, Bernardo resumía lo que podría ser un verdadero bacán. “Le encantaba el tango, el *rock* y la salsa, que bailaba inmejorablemente. Hinchaba del Nacional, lo sufría en sus derrotas. Se dedicaba con furor a la lectura cultivándose cada día. Vivía la vida con toda intensidad, con una inmensa alegría, pero Colombia estaba siempre en el centro de sus preocupaciones”.

“Con su muerte perdimos todos, hoy lo vemos ante la orfandad de liderazgos. El crimen buscaba hacerle un daño inmenso al país”, anota Mariella.

En su escritorio de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, alcanzamos a ver la resolución de la Fiscalía que en marzo de 2010 declaró el crimen de Bernardo Jaramillo como de lesa humanidad, precisamente para que el delito no prescriba.

“Hay que saludar este pronunciamiento, con ello se hace un poco de justicia, no sólo con Bernardo sino con todo el país. Y a pesar de que las investigaciones establecieron a los hermanos Castaño como los autores materiales, aún hay mucho terreno pendiente en la búsqueda de los autores intelectuales: la verdad deberá ser conocida para que este crimen, así como todos los crímenes contra la UP, que son una vergüenza nacional, no queden en la impunidad”, afirma.

El orgullo de un hijo

Por su parte su hijo, quien lleva su mismo nombre y tenía ocho años el día del magnicidio, señala para el Centro de Memoria las dos maneras como ve a Bernardo Jaramillo: como ser humano y como político.

“Como padre siempre lo recordaré como un ser cariñoso, entregado a su familia. Le encantaba el deporte y solíamos jugar fútbol mientras se mantenía atento a mis estudios. De igual forma era

con mi hermana Paola Tatiana, que me llevaba tres años”, recuerda.

“A pesar de mi corta edad, e intuendo los peligros que lo acechaban, me sentía orgulloso de verlo en la televisión en sus debates con toda esa fortaleza y oratoria. Era muy gratificante”.

Bernardo, que como su padre optó por la carrera de Derecho, pero que también es ingeniero electrónico, señala que “siempre tendré ese vacío de su ausencia como hijo, pero me duele también que las cosas por las que luchó, la apertura democrática, la justicia social, la no exclusión, en todos estos años no se hayan podido cristalizar y hoy estemos aún más alejados del nuevo país que él anhelaba para todos los colombianos”, concluye.

Tanto Mariella como Bernardo son claros en torno a la memoria. “No debemos permitir el olvido de los colombianos de sus mártires de todas las vertientes y que han ofrendado sus vidas por los cambios, como Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, de tantos líderes sindicales y agrarios, y todos los que han sido asesinados en este ola de violencia sin nombre”, subraya Bernardo.

“El país debe preservar la memoria, recordar las cosas inmensamente buenas que nos han legado las anteriores generaciones, pero también las peores para no volverlas a repetir”, señala Mariella.

Lograr la apertura democrática

Nosotros planteamos la unidad y un Gobierno pluralista, pero para que haya más democracia, para acabar con el Estado de sitio, para que defendamos la soberanía nacional y no para que se la entreguemos al presidente Bush. No ir a las elecciones sería un grave error. —

Perdido en un barrio de eucaliptos al norte de Bogotá, nos recibe en ropa deportiva, feliz otra vez por volver a la informalidad. Una hora antes el Congreso de la Unión Patriótica lo ha proclamado por unanimidad como su candidato presidencial. El primero, por cierto, que de manera oficial lanza un partido en el país.

No está sino su esposa y su colección de gatos “Garfield”, uno tan grande como un galápagos recostado en el escritorio. Detrás, un cuadro con dedicatoria del maestro Pedro Alcántara: el rostro luminoso de una muchacha valluna.

Este abogado manizalita, con treinta y cuatro años, se convierte también en el más joven de los pretendientes a la Presidencia, simbolizando, como él mismo lo dice, las aspiraciones del cambio real de las nuevas generaciones del país que han vivido en Estado de sitio permanente. Pero su programa es para toda la Nación, incluso recogiendo propuestas de sectores industriales como la Federación Colombiana de Industria Metalúrgicas (FEDEMETAL), o gremios como la Asociación de Pequeños y Medianos Cafeteros (APEMECAFÉ), sin hablar ya de los trabajadores organizados que son el corazón de la Unión Patriótica.

Una formidable muestra de la resistencia popular

Lo primero que hay que anotar es que este Congreso de la UP haya podido tener lugar y con tanto éxito. ¿Cómo explica usted que después de cuatro años de guerra sucia con mil víctimas de la Unión Patriótica, el movimiento tenga tanto vigor?

—La violencia en Colombia ha llegado al máximo grado. Ningún país de América Latina ha soportado algo semejante.



El presidente de la Unión Patriótica leyendo el *Semanario Voz*, junto con su esposa Mariella Barragán. (Foto: Lara, Voz)

Pero pareciera que esa misma violencia diera fuerzas al movimiento, no sólo para mantenerse, sino desarrollarse en una formidable muestra de la resistencia popular.

Pero para algunos es todo lo contrario, la Unión Patriótica se ha debilitado...

—El Congreso liquidó esa discusión. Yo miraba en el evento la lista de las delegaciones existentes y hace dos años nosotros, en regiones como la Guajira, el Cesar, el Amazonas, para citar algunos ejemplos, no aspirábamos a tener delegados. No nos han desaparecido de ninguna región donde la guerra sucia ha sido más dura, mientras hemos surgido y fortalecido en otras zonas del país.

Cada vez que ocurre un crimen contra un dirigente de la UP la gente se pregunta hasta donde se va a seguir

—El Congreso ratificó que vamos a seguir hasta lograr la apertura democrática. Si la guerra sucia en cuatro años, a los más altos costos, no ha podido doblegar a la Unión Patriótica, ahora menos puede cerrarse a continuar ampliando su espacio político. No hemos tenido otra alternativa. Teníamos que seguir y la vida nos ha dado la razón.

Necesidad de una veeduría internacional a las elecciones

¿Pero acaso ha cambiado la situación? Hace menos de un año ustedes habían planteado la posibilidad de no ir a las elecciones por la falta de garantías del Gobierno, o acudir a las urnas sobre la base de una veeduría internacional, con observadores de la ONU, por ejemplo.



Bernardo Jaramillo, en compañía del presidente de la Unión Patriótica, Diego Montaña Cuéllar y Mariella Barragán en el día de las elecciones parlamentarias en marzo 11 de 1990 en Bogotá. (Foto: Lara, Voz)

—Pienso que en este momento no ir a las elecciones sería un error. El desafío de la guerra sucia es tan grande que uno de sus objetivos es llevar al país al totalitarismo a través de un golpe de Estado. Por eso los comicios adquieren ahora una nueva calidad y tienen mayor vigencia.

Lo que no ha desaparecido es la necesidad de que la opinión pública internacional supervise el proceso electoral. La situación pues, no ha cambiado; por el contrario, se ha tornado más grave, involucrando a más gente. Las acciones de la guerra sucia se han extendido golpeando a los partidos tradicionales. Con mucha más razón se requiere una veeduría internacional.

El Gobierno de unidad que planteamos

¿Qué opinión le merece la propuesta lanzada por *El Espectador* de un Gobierno multipartidista, incluso contando con la UP para la salvación nacional, y cómo conciliaría con la iniciativa del Congreso de su organización que llama hacia la conformación de un Gobierno de amplia convergencia?

—Sí, hay coincidencias en la forma. Pero lo que nosotros queremos definir es para qué tal Gobierno. Porque hay mucha gente que habla de unidad y de multipartidismo, y no me refiero a *El Espectador*, con la mira puesta en el apoyo a las medidas de excepción adoptadas por el Gobierno, que restringen aún más la recortada democracia que tenemos y la entrega de la soberanía nacional. Nosotros planteamos esa unidad y ese Gobierno pluralista, pero para que haya más democracia, para acabar con el Estado de sitio, para que defendamos la soberanía nacional y no para que se la entreguemos al presidente Bush. Ninguna persona sensata puede pretender que un partido solo puede sacar al país de la crisis.

¿Cómo garantizar el éxito del Congreso de Convergencia al que ustedes llaman a trabajar?

—Para que el Congreso de Convergencia tenga éxito debe contar con la presencia de fuerzas políticas más allá de la izquierda. La convergencia de las fuerzas de izquierda, por supuesto que es importante, porque es un excelente comienzo de unidad, pero la crisis que vive Colombia obliga a que esa convergencia sea mucho más amplia. Ese Congreso debe ser convocado lo más pronto posible. Ya se han dado pasos como los desayunos de trabajo de la CUT o el encuentro de Colombia

Unida. Seguramente vamos a encontrar interlocutores en todos los partidos.

Coalición sobre la base de ampliar la democracia

¿Hasta qué punto la Unión Patriótica sostendrá su nombre en la justa electoral, o en otras palabras, sobre qué base se puede negociar el retiro de su candidatura?

—La Unión Patriótica es una fuerza con influencia creciente en la vida política del país. Eso nadie lo puede desconocer. Sobre esa realidad vamos a buscar un acuerdo político con otras fuerzas, eso en primer lugar. Ahora, un acuerdo de esa naturaleza será sobre la base de que el candidato que apoyemos se comprometa con ampliar la democracia, el fin de la guerra sucia y con un programa de profundas transformaciones de la vida nacional. Lo que aprobó el Congreso de la UP fue una candidatura que va a trabajar por una coalición mucho más amplia y que está dispuesta a renunciar a la escogencia de su nombre si se da esa amplia convergencia.

¿Qué repercusiones tendría para la campaña electoral de la UP que las fuerzas del Gobierno impulsaran de nuevo las hostilidades contra la guerrilla?

—Una situación como la que usted señala no sólo afectaría a la actividad de la UP sino al proceso electoral en general. En Colombia en este momento no hay cabida para una salida militar a la crisis, ni de parte de la guerrilla ni de parte de las fuerzas oficiales. La única posibilidad que hay es la solución política a través del diálogo y la negociación para allanar el camino hacia la paz.

ROBERTO ROMERO OSPINA,
Semanario Voz, septiembre 14 de 1989.

Bladimiro, el zapatero de los destechados

El 20 de enero de 1990, sicarios dieron muerte a este destacado líder popular de los viviendistas de Colombia y permanente activista de la Unión Patriótica. — — —

“Bladimiro era un recio dirigente de los destechados que se hizo a pulso ganándose la confianza de todos por su compromiso social”, revela Mario Upegui, actual presidente de la UP y quien fuera su compañero por años en Provivienda. Añade que Bladimiro “tenía un temperamento fuerte, pero eso no era obstáculo para ganarse el cariño de los destechados, y además era un gran agitador y orador de plaza”.

El atentado contra Bladimiro se produjo a las once de la noche del 20 de enero de 1990, a una cuadra de su vivienda en el popular barrio Policarpa de Bogotá.

Hombres desconocidos lo interceptaron y, sin mediar palabra, le propinaron varios disparos en la cabeza. Los

esfuerzos de los galenos de La Hortúa por salvarle la vida no dieron resultado y el dirigente popular murió finalmente el 22 de enero.

“Siempre fue un hombre estudioso, sobre todo de los temas de historia; autodidacta, se preocupaba por la formación de los destechados”, señala Upegui.

Escobar había sido objeto de varios atentados. En noviembre de 1987, siendo concejal de Soacha por la Unión Patriótica por cuarto periodo consecutivo, se salvó milagrosamente tras una andanada de disparos hechos por un sicario.

Bladimiro era oriundo de Natagaima, Tolima, donde nació en 1940, y se hizo militante de las juventudes comunistas en Cali. De allí se trasladó con su familia a Bogotá, donde comenzó una vida de trabajo dedicado a la zapatería.

Formó parte del grupo de familias que inició una de las recuperaciones de tierras más famosas por su combatividad en Colombia en los años sesenta: la del “Pola”.

“Fuimos compañeros de directiva en Provivienda, donde se destacó por su perseverancia en la lucha por el techo para miles de colombianos y por ellos se desplazaba a Medellín, Arauca, Cali y Popayán, entre otras ciudades. Por supuesto que había dejado su oficio de talabartero para darse de lleno al movimiento de los sin techo”, subraya Upegui.



Bladimiro Escobar. (Foto: Voz)

El silencio de los asesinos

La masacre de la familia Vásquez Camacho, cometida el 22 de febrero de 1991, en el sur del Tolima, conmovió a todo el país por su crueldad y sevicia. El revelador informe de Amnistía Internacional. 

A eso de las diez de la noche comenzó el calvario. Los Vásquez Camacho, como todos los habitantes del corregimiento de Montoso, municipio de Prado, Tolima, se habían reunido temprano alrededor del televisor para presenciar el partido entre América y Nacional por la Copa Libertadores.

De repente y sin que ninguno de los vecinos se percatara de ello, un grupo de hombres allanó la vivienda y redujo a la impotencia a los moradores, como en otras oportunidades lo habían hecho uniformados del Ejército. Dos años atrás, en 1989, los Vásquez Camacho habían recibido una de estas visitas.

La sorpresa fue al día siguiente. Eran las cinco de la madrugada y los vecinos de los Vásquez Camacho se dieron cuenta de que la cocina de su casa no había sido encendida. No salía humo de la chimenea. El alba terminó por dibujar el pequeño caserío y los inquilinos del rancho no daban señales de vida.

Entonces fue cuando la vecina más próxima, temerosa por las amenazas de que eran objeto, pues toda la familia era de la UP, se atrevió a tocar la puerta de la casa. Golpeó una y otra vez pero nada. Entonces ingresó por la parte posterior y se encontró con la peor escena dantesca que jamás habría imaginado.

Se repetían las imágenes de La Violencia de los años cincuenta. Seis de los integrantes de la familia Vásquez Camacho yacían desordenadamente en el

suelo, todos degollados para evitar así los disparos que pusieran en evidencia a los asesinos.

Allí estaban los cuerpos sin vida de Rosalba Camacho, de sesenta años; su marido, Martín Vásquez, de sesenta y dos; y sus hijos, Elizabeth, de veintiocho; Josefina, de veinticuatro; Idaly, de dieciséis, y la nietecita Adriana, de diez años.

Bañado en sangre, lloraba un bebé de seis meses, confundido en las cobijas que compartía con su madre, sin imaginar que no volvería a ver a los suyos. También escapó de la masacre Jairo, de dieciocho años, quien había pasado la noche en una finca cercana donde trabajaba a destajo y había ido a ver el partido de fútbol con sus compañeros de faena.

Los informes obtenidos por Amnistía Internacional indicaban que los soldados de la Base Militar de Montoso habían abandonado las instalaciones una semana antes de los homicidios, pero tanto los vecinos que asistieron al funeral de Rosalba Camacho y su familia, como los portavoces de la Policía, afirmaron haber visto un camión militar en Prado ese día.

Según los relatos, la Base Militar de Montoso se situó allí para controlar a los grupos de oposición armada que actuaban en el área. Los militares registraban e interrogaban con frecuencia a los miembros de la Unión Patriótica de esa región.

Rosalba Camacho hace años pertenecía al Partido Comunista Colombiano y cuando nació la UP, se entregó a esta causa sin miramientos, organizaciones reconocidas legalmente en Colombia, recuerda Amnistía Internacional en un informe que dio al mundo sobre la masacre.

Rosalba había sido concejal en representación del Partido Comunista en el Concejo Municipal de Prado y presidenta de la Cooperativa de Campesinos de Montoso, cuya sede central –la Cooperativa de Trabajadores Agrícolas, COAGROTAL LTDA.– se encuentra situada a tan sólo unos metros de la base militar.

De acuerdo con Amnistía Internacional, Rosalba Camacho y su familia habían recibido repetidas amenazas por parte de un teniente del Ejército, comandante de la Base Militar de Montoso, al parecer a causa de su papel como prominente activista de la oposición. En junio de 1989, el comandante de la base militar hizo llamar a Rosalba y parece ser que le advirtió que si no dejaba la región, moriría.

Los informes de la prensa indican que algunos oficiales del Ejército habían afirmado que la Cooperativa de Campesinos era “una empresa de guerrilleros”. Tras las advertencias del comandante, Rosalba tenía que presentarse en la base cada cuatro días, y más adelante a diario.

En junio de 1990 dos de los hijos de Rosalba, Roger y Sebastián, también



Rosalba Camacho. (Foto: Voz)

miembros del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica, murieron a manos de grupos paramilitares en incidentes separados.

En 1989 otro de los hijos de Rosalba, Rubén, fue detenido y torturado por soldados antes de ser liberado, señaló Amnistía. Los malos tratos que recibió se denunciaron ante el Procurador regional.

Montoso, en las estribaciones que colindan la inmensa represa de El Prado, quedó marcado para siempre con uno de los peores crímenes que se cometieron en su comarca. Como en los peores tiempos de La Violencia.

El dolor de Caño Sibao

El 3 de junio de 1992 un grupo paramilitar se ensañaba contra el movimiento, masacrando a cinco destacados militantes. El Meta era uno de los departamentos que más había sufrido la tormenta de la intolerancia. ■■■■

En el sitio conocido como Caño Sibao, donde el río Ariari hace un esguince buscando a Granada, el 3 de junio de 1992, pasadas las cinco y media de la tarde, se perpetró una de las masacres que más han dolido en la región.

Ese día, cuando la exalcaldesa de El Castillo, María Mercedes Méndez de García; el recién electo alcalde de la misma población, William Ocampo Castañón; la tesorera municipal, Rosa Peña; el coordinador de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Ernesto Sarralde y el conductor de la Alcaldía, Armando Sandoval, regresaban de Villavicencio, recibieron una andanada de disparos de ametralladora y granadas, muriendo de inmediato.

Wilson Pardo García, el otro acompañante, sobrevivió al atentado, quedando gravemente herido.

En el año 2010 el Consejo de Estado condenó a la Nación –en este caso a la Policía Nacional– por su responsabilidad en la masacre. El fallo ordena indemnizar a la familia Ocampo, que instauró la demanda por la muerte de William Ocampo, y demuestra la culpabilidad oficial por el exterminio del movimiento político de izquierda.

Los magistrados encontraron que el alcalde electo se hallaba en riesgo y que la reacción de las autoridades fue precaria, pese a haber conocido de las amenazas de muerte y la solicitud de

dos escoltas presentadas con suficiente anterioridad.

Pese al importante fallo, el Estado colombiano enfrenta un proceso judicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estos hechos.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Villavicencio confirmó también en 2009, la condena a treinta años de prisión que un juzgado le había impuesto a Manuel de Jesús Pirabán, alias “Pirata”, con base en los testimonios de dos paramilitares, uno de los cuales participó en el ataque a los funcionarios.

Como “Pirata” se desmovilizó del bloque paramilitar Héroes del Llano, por esa sentencia y las que se profieran por los otros delitos que confiese, sólo le podrán dar una pena máxima de ocho años, gracias al programa gubernamental Justicia y Paz.

Pero la tragedia para la familia de la exalcaldesa de El Castillo, no había terminado aún. Cinco meses después de la muerte de María Mercedes Méndez, el 26 de noviembre de 1992, asesinaron en Villavicencio a su esposo José Rodrigo García, en ese momento diputado de la Unión Patriótica.

De esa unión quedaron cuatro hijas, Linda, que tenía doce años de edad; Hada, de diez; Paola, de nueve y Tania de siete años.

En los siguientes años una amiga de María Mercedes asumió el reto de criarlas.

Hoy las tres primeras son profesionales y la última cursa estudios universitarios.

Ellas, generosas con la vida y el honor de su familia, en 2010 en el vigesimoséptimo aniversario del asesinato de sus padres, sembraron un “bosque de la memoria”, que fue destruido en otro arranque de intolerancia.

Hoy en El Castillo, pese a la presencia de los reductos del paramilitarismo, nadie olvida el legado de María Mercedes Méndez de García, William Ocampo, Rosa Peña, Ernesto Sarralde y Pedro Antonio Agudelo.

El “viejo Peter”

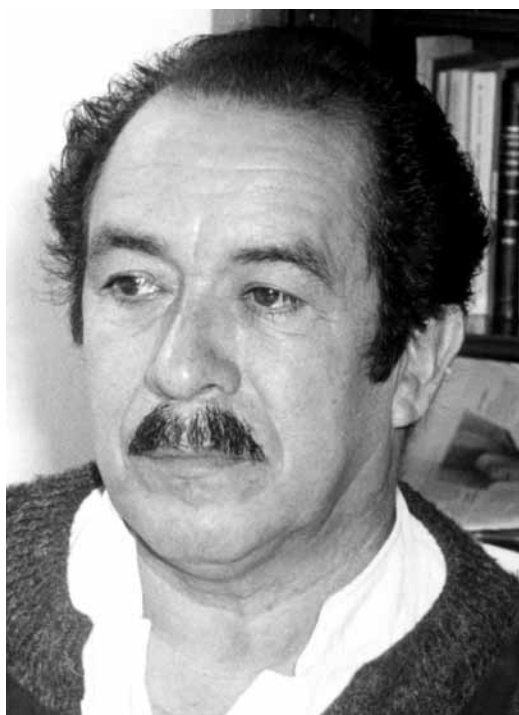
El 20 de junio de 1996 el diputado de la Unión Patriótica a la Asamblea del Meta, Pedro Malagón, y su hija, Elda Milena, fueron asesinados por sicarios en su propia casa. ■■■■

A los Malagón siempre los persiguió la violencia. Toda su familia tuvo que huir de los caseríos de Viotá, en Cundinamarca, para adentrarse en el Ariari, buscando otros horizontes menos amargos. Allí Pedro, siendo muy niño, se dedica al campo como sus padres.

Crece en el Meta oyendo de nuevo las mil y una anécdotas de los avatares organizativos de los movimientos agrarios. Por eso desde joven se une a las luchas por la tierra. Pedro logra ganarse el afecto de todos y ya como militante comunista viaja de un lado a otro del inmenso Llano. En las filas de su partido llega al Comité Central.

Granada, El Castillo, Lejanías, Mesetas, conocen su trajín. Poco después de nacer la Unión Patriótica, es electo diputado a la Asamblea del Meta, luego de ser concejal de El Castillo.

Su tenacidad en medio del genocidio de la UP, que comenzara en sus propios albores en 1985, hace que llegue de nuevo a la Asamblea de la región en 1996.



Pedro Malagón. (Foto: Voz)

Doce años de matanza y al “viejo Peter”, como todos le decían con cariño, no lo amilanan, asumiendo nuevos riesgos.

Para entonces en el Meta pasaban de quinientos los muertos de la UP,

incluido el diputado Rafael Reyes Malagón, hermano de Pedro; el senador Pedro Nel Jiménez, varios alcaldes, decenas de concejales y cientos de activistas.

Ir a su oficina de diputado en Villavicencio era todo un viacrucis para Pedro. No había día que no recibiera amenazas. La víspera de su muerte, una acción militar presagió la tragedia: el Ejército allanó la Casa del Partido Comunista incautando dos revólveres y dos chalecos antibalas. Pertenecían, con los papeles en regla, al servicio de seguridad de Pedro. Elementos que le hicieron buena falta el día que lo asesinaron.

El 20 de junio de 1996, creyendo que iba a estar más seguro en casa, no fue a su despacho. Además lo aquejaba un dolor en los ojos. A eso de las seis y media de la tarde, resolvió salir a la terraza para examinar unas reparaciones que adelantaba.

En un santiamén, dos sicarios que lo acechaban día tras día y que habían rentado un cuarto en una casa de enfrente,

asaltaron el patio disparando casi a quemarropa en la cabeza del líder campesino. Elda Milena, su hija de dieciséis años, quien en un instintivo arranque de protección filial se había arrojado sobre su padre, recibió dos disparos mortales.

Al sepelio, a pesar del clima de terror contra lo que aún quedaba de la UP en el Meta, acudieron miles de labriegos pobres en un sentido adiós a quien nunca los abandonó en su lucha por la tierra. El gobernador de entonces recordó el cariño que todos le profesaban al “viejo Peter”, muerto a sus cincuenta y seis años y quien cerraba el ciclo de magnicidios de la UP en el Meta. Dejó siete hijos y una viuda.

La justicia internacional halló responsable al Estado colombiano por negligencia en la protección de Pedro Malagón, condenándolo en una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el crimen sigue en la impunidad.

El exterminio sistemático

El 21 y el 22 de junio de 1996, asesinaron a dos líderes nacionales agrarios y de la Unión Patriótica, con diferencia de horas. ■■■■

El exterminio de la Unión Patriótica y de los dirigentes nacionales agrarios registró un hecho sin precedentes: con apenas una diferencia de horas fueron asesinados Víctor Julio Garzón, secretario general de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO); y Arsenio Córdoba Blandón, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) y

miembro de la Junta Nacional de la CUT. El primero fue aniquilado el 21 de junio de 1996 y el segundo el 22.

Garzón, de treinta y cuatro años, participó en la organización de las protestas por la erradicación de cultivos ilícitos en el Guaviare durante julio y agosto de 1995, y desde entonces se incrementaron las amenazas de muerte en su contra.

El 21 de junio, a las ocho y quince minutos de la mañana, dos hombres



Víctor Julio Garzón. (Foto: Voz)

llegaron a la calle 17 No. 10-16, sede de FENSUAGRO en Bogotá. Dejaron una motocicleta parqueada en la puerta, subieron al segundo piso y llamaron por el citófono a las oficinas.

Según versiones de quienes estaban en el lugar, una de las secretarias salió a abrir la puerta de inmediato porque creyó que el que timbraba era el conductor de la federación, que siempre llegaba a esa hora para dejar el carro estacionado al frente del edificio.

Cuando los dos hombres entraron a la sede, en un piso donde también hay locales de electrodomésticos y consultorios jurídicos, hicieron a un lado a la secretaria y dispararon contra Garzón, que estaba parado en la mitad del corredor. Los sujetos bajaron rápidamente por las escaleras y huyeron en la moto.

Garzón pertenecía al Partido Comunista y se había desempeñado inicialmente como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Meta, y luego había entrado a trabajar en FENSUAGRO, donde llevaba tres años. Era casado y tenía una hija de siete años.

El líder asesinado trabajaba en la instalación de las mesas regionales para la

evaluación del cumplimiento de los acuerdos que se establecieron en 1995 con el Gobierno, respecto a los campesinos cocaleros. El crimen continúa en la impunidad.

De otro lado, el 22 de junio 1996 y cuando aún no había tenido lugar el sepelio de Garzón, el concejal Arsenio Córdoba Blandón, miembro de la Unión Patriótica y que había hecho parte del Concejo de Apartadó en varios periodos, fue asesinado por hombres que se movilizaban en motocicletas en una calle de esa población de Urabá.

Córdoba, de treinta y siete años, como secretario general de SINTRAINAGRO, logró un escaño en la junta directiva nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Como tal, jugó un destacado papel en la protección de miles de campesinos que huían de la violencia en Urabá.

Se oponía rotundamente a las pretensiones del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, de declarar como Zona Especial el Urabá, pues la medida buscaba desplazar a los alcaldes y dejar la toma de decisiones en manos de los militares.

Con estos dos crímenes empezaba a cerrarse el círculo de exterminio de la UP, que comenzara apenas nació el movimiento en 1985. Para aquellos dos días de junio de 1996, que conocieron la muerte violenta a manos de paramilitares de estos dos destacados líderes campesinos, pasaban de mil quinientos los integrantes asesinados de la joven organización, según los archivos del *Semanario Voz* y la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos consultados por el Centro de Memoria y que se presentan en este libro. Un verdadero genocidio.

Manuel Cepeda, “La Flecha en el Blanco”

El 9 de agosto de 1994, tuvo lugar en Bogotá el magnicidio del último senador de la Unión Patriótica. Esbozo biográfico del líder comunista.

Pocos periodistas colombianos han logrado mantener una columna de opinión durante tantos años. “La Flecha en el Blanco”, firmada por Manuel Cepeda, nació en 1960 en las páginas del semanario comunista *Voz*, cuando este político de la izquierda contaba apenas con treinta años.

Sólo desapareció de la escena editorial del país con su muerte, el 9 de agosto de 1994 y tras treinta y cuatro años de terca presencia semanal. Escribió más de mil seiscientas columnas caracterizadas por la condena más radical a las injusticias sociales y siempre insistiendo por una salida política al largo conflicto armado colombiano.

El golpe de gracia

Quienes acallaron su voz con un pistoletazo que retumbó en todo el país aquella mañana del 9 de agosto, cerca a Bandejas, a unas cuadras de su casa en el popular barrio Kennedy de Bogotá, integraban un escuadrón de agentes del Estado que cumplía al pie de la letra la Operación Golpe de Gracia que pretendía acabar de una vez por todas con la Unión Patriótica.

Habiéndose posesionado como senador el 20 de julio de 1994, sólo pudo ejercer dieciocho días. Sin embargo, ya tramitaba un proyecto de ley sobre la búsqueda de la paz poniendo en acción todos los mecanismos del Estado.

Cepeda era el último senador de esta organización, que llegó a contar con veinticuatro parlamentarios desde su fundación, tras los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz entre el gobierno de Betancur y las FARC en 1984.

El joven movimiento, que se presentaba como una real alternativa política en el país y que mostraba un sólido crecimiento electoral, sufrió el embate de la intolerancia: en menos de una década ya habían sido asesinados cerca de mil quinientos de sus cuadros y militantes. Entre ellos dos candidatos presidenciales, seis congresistas y decenas de diputados, concejales y alcaldes.

La única salida en medio de las frustraciones

¿Pero, quién era Cepeda? Manuel Cepeda nació en Armenia el 13 de abril de 1930 y tras hacer su secundaria en aquella ciudad cafetera, se trasladó a Popayán a cursar estudios de abogacía en la Universidad del Cauca.

En 1952, a sus veinte años y en plena dictadura de Laureano Gómez, decide ingresar a las filas del ilegalizado Partido Comunista Colombiano. “Era la única salida en medio de tantas frustraciones”, confesaría después. En ese año, bandas criminales de la ultraderecha habían asesinado en Cali al popular dirigente de los destechados Julio Rincón,

en medio de la indiferencia nacional y bajo el clima de terror predominante.

En 1958 llega a Bogotá, en plena época del Frente Nacional. El VIII Congreso del Partido Comunista lo elige al Comité Central y lo destina a reorganizar la Juventud Comunista, desmantelada por tantos años de represión. Era un estupendo orador, haciendo vibrar los auditorios con un tono de voz bien atemperado.

A sus veintiséis años se convierte en el secretario general de la JUCO, cargo que deja en 1964 tras una destacada labor y con presencia de la organización juvenil en todo el país. Acompañó al padre Camilo Torres en varias de sus giras por el país. En 1960 forma su hogar con Yira Castro, ella de dieciocho años y dos de militancia en la organización juvenil del partido.

En 1963 nace su hijo Iván, elegido en las elecciones de marzo de 2010 como representante a la Cámara. Dos años después nace María. Su esposa Yira Castro, trabaja en la redacción de *Voz* de 1960 a 1966.

Vencerás, Marquetalia

En febrero de 1964 Cepeda realiza un reportaje a varios dirigentes campesinos de Marquetalia, región que era objeto de una ofensiva mediática calificada como una “república independiente” que había que eliminar. Por estos reportajes Cepeda es puesto preso y permanece en la cárcel cerca de seis meses. En prisión, escribe un libro de poemas dedicado a Yira: *Vencerás, Marquetalia*.

Sale para La Habana en 1966, con Yira, a representar al PCC en la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), hoy desaparecida. En el Museo

de la Revolución Cubana, Manuel es uno de los pocos dirigentes que aparece en una foto de la época de las jornadas de solidaridad con Cuba, hablando en un mitin en Bogotá.

A finales de 1967, parte de Cuba con su compañera Yira Castro y sus dos pequeños hijos a Praga a trabajar en la revista *Problemas de la Paz y el Socialismo*. Yira entra a colaborar en las tareas del Secretariado de la Unión Internacional de Estudiantes (UIE).

Regresa a Colombia a comienzos de 1970 y es nombrado director del *Semanario Voz Proletaria*, después *Voz*, en reemplazo de Álvaro Mosquera, quien precisamente lo había reclutado en la época de Popayán. Mosquera, de ochenta y dos años, aún vive y continúa en las filas comunistas.

Yira, a su regreso con Manuel en 1970, pasa al partido y en 1980 es elegida como concejal de Bogotá. Yira muere prematuramente a sus treinta y nueve años el 9 de julio de 1981.

La Ley 100 bajo su mira

Cepeda se retira de la dirección de *Voz* en 1989, tras diecinueve años continuos al frente del semanario; en 1991 es electo a la Cámara de Representantes por Bogotá. Uno de sus más memorables debates lo da contra la Ley 100, enfrentándose con el ponente de la misma, el también representante Álvaro Uribe Vélez.

En la Cámara de Representantes Cepeda logra sacar adelante su proyecto de Ley de la Cultura, hoy una de las piezas clave en este campo. En 1994 sale elegido al Senado con una de las más altas votaciones, siendo el último congresista de la UP.



Manuel Cepeda Vargas en la jornada electoral para el Concejo de Bogotá, invitando a votar por Aída Abella, marzo 8 de 1992. (Foto: Voz)



Manuel Cepeda, Representante a la Cámara por la Unión Patriótica, con Eduardo Umaña Mendoza, abogado defensor de derechos humanos (asesinado por paramilitares en febrero de 1998) y María Belarmina Romero, única sobreviviente de la masacre contra seis de sus familiares, todos de la Unión Patriótica, por tropas de la XII Brigada del Ejército, ejecutada el 18 de agosto de 1991. (Foto: Lara, Voz)

El 8 de agosto, un día antes de su muerte, es anfitrión del presidente Fidel Castro en un acto que contribuye a organizar con numerosos sectores populares, en uno de los salones del Hotel Tequendama. Castro había asistido el 7 de agosto a la trasmisión del mando al presidente Ernesto Samper.

Como periodista denunció el crimen del padre Ulcué y destinó para ello varias separatas del periódico *Voz*.

Recortaba un sinnúmero de artículos de la prensa, disponía de un inmenso tarro de colbón con una espátula y pegaba los recortes en hojas y hojas; almacenaba tantos recortes y los periódicos de otros partidos comunistas que sumaban

tomos enteros y eran materia de su consulta para abordar uno que otro tema. Su escritorio era una verdadera montaña de papeles y documentos y no permitía que nadie le tocara uno solo.

La dirección de *Voz* y las tareas del Partido

Cepeda alternaba perfectamente la dirección de *Voz*, la redacción, el periodismo y la dirección política del partido, pues desde 1960 era miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Hacía entrevistas, reportajes, crónicas, tomaba las fotos y, cuando le correspondía por el Ejecutivo, redactaba el editorial. Algunas veces se quedaba a dormir en su despacho de *Voz*, pues

allí tenía un *sleeping bag* por si lo cogía la noche.

Dirigía el Festival de *Voz*, que creó en 1979, y era el alma de los mismos. De disciplina férrea, exigía a todos cumplir con las tareas con mucha vehemencia, pero pasado el mal rato, volvía a su espíritu jovial con una amplia sonrisa y una que otra broma, congraciándose de nuevo con sus colegas de la redacción.

Fue artífice del montaje de las dos grandes rotativas de *Voz* provenientes de la República Democrática Alemana; la última, una gigante de dos pisos, cuando imprimió su primer número en 1985, llena de luces, asemejándose a una nave y con el ruido de sus máquinas, hizo que Cepeda se refiriera a ella diciendo, “zarpa este nuevo barco de la verdad del pueblo”.

Voz era el vocero de la UP y llegó en esos años de agitación, bajo la dirección de Cepeda, a tirar sesenta mil ejemplares a la semana.

Cepeda creó, entre otras, la muy leída sección “El pueblo uniformado también es explotado” y le abrió las puertas del semanario al coronel Hugo Ferreira, quien fue injustamente destituido por sus posiciones críticas en la Policía.

Le tocó como director hacerle frente al grave atentado a la Editorial Colombia Nueva, sede de la redacción del semanario en la que además este se imprimía, en el occidente de Bogotá. Además, tuvo que hacerle frente a un aparatoso allanamiento del DAS a *Voz*, que duró toda una mañana de 1988.

Venciendo la censura

Siendo director tuvo que enfrentar la censura de *Voz* bajo el gobierno de Misael Pastrana, en dos periodos: marzo de

1971 y octubre de ese mismo año, pero se las ingeniaba para sutilmente dejar su posición duramente crítica al régimen. Por ejemplo, como había que divulgar en primera página y bien destacado el paro cívico nacional del 20 de marzo de 1971, y como la fecha coincidía con la definición del título mundial de boxeo de los pesos pesados, entre Cassius Clay y Sony Liston, Cepeda acogió la propuesta de este redactor de poner un par de guantes de boxeo, uno rojo y otro negro con un gran titular: “20 de marzo Gran Choque” y un texto sutil que engañó a la censura.

Contrario a lo que algunos sectores señalan, Cepeda siempre fue partidario de darle tribuna a otras corrientes políticas en el semanario, como Vásquez Carrizosa, y aceptó, por ejemplo, una entrevista muy destacada con Misael Pastrana y otras figuras no comunistas como Gerardo Molina, el general Matallana y propició el máximo despliegue posible a la UP con todas sus vertientes.

Cepeda, y lo demuestran sus escritos –radiografía de su pensamiento político–, mantuvo siempre una línea afín a la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado interno y saludaba todas las iniciativas en este sentido.

En junio de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el crimen de Manuel Cepeda y ordenó una serie de medidas, como una declaración de perdón del Presidente por el magnicidio.

En frente del sitio donde fue asesinado Manuel Cepeda, se levanta un pequeño monumento con una obra donada para tal fin por el destacado maestro de la escultura, Edgar Negret.

Julio Poveda, el líder agrario curtido en el Sumapaz

El 17 de febrero de 1999 era asesinado, en una avenida de Bogotá, uno de los más aguerridos y veteranos dirigentes del campo. ■■■■

En Bogotá a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la mañana del 17 de febrero de 1999, fue acribillado en la Avenida Primero de Mayo con carrera 22 el destacado dirigente campesino y uno de los fundadores de la Unión Patriótica, Julio Alfonso Poveda, muriendo en el acto. El Centro de Memoria conversó con su esposa, Tulia Sofía Vargas, y su hijo, Ramiro Alfonso Poveda.

“Acabábamos de salir de la casa para dirigirnos a una cita médica que tenía Julio, cuando tres sicarios comenzaron a disparar contra el carro donde íbamos. Julio recibió cinco disparos en la cabeza”, narra Tulia Sofía.

“Es la hora, pasados estos once años, que aún no tenemos respuesta del Estado sobre este crimen contra una persona cuyo único delito fue servir siempre a la causa de los campesinos más pobres”, añade la viuda.

Ramiro Alfonso, que tenía veintinueve años cuando ocurrió el atentado, señala que “el crimen afectó gravemente a toda la familia. Yo tuve que suspender mis estudios de medicina y regresar al país para apoyar a mi madre y a mis otros cuatro hermanos”, relata recordando el daño psicológico que “sufrimos todos, en especial Tulia Sofía. Ha dejado heridas que no sanan”.

Sobre el proceso, Tulia Sofía señala que según el abogado de la parte civil,



Julio Poveda. (Foto: Voz)

Reinaldo Villalba del Colectivo José Alvear Restrepo, aparecen tres personas involucradas, dos hombres y una mujer. “Todo indica que venían especialmente de Córdoba para cometer el crimen”, afirma.

La esposa repasa algunos momentos de la vida de Julio Poveda. Anota que nació en Nazareth, en el Sumapaz, y que ya a los diecisiete años hacía parte de las juventudes agrarias que luchaban en esa región por el derecho a la tierra.

“Julio participó en todas las movilizaciones que encabezaban los líderes históricos del Sumapaz, como Erasmo

Valencia y Juan de la Cruz Varela, en plena época de La Violencia, en los años cincuenta”.

Entonces cita lo que fue uno de los peores momentos de la vida del destacado dirigente agrario: “Su madre y un hermano de doce años fueron asesinados por las bandas sicariales de entonces, pero eso, en lugar de amilanarlo, logró afincarle aún más su compromiso de lucha social”.

“Muchas veces estuvo en la cárcel y en los duros momentos del Estatuto de Seguridad, bajo el gobierno de Turbay, fue detenido y torturado, lo que le dejó serias secuelas en la columna”, señala.

Julio Poveda conoció la muerte siendo gerente de FENACOA, una cooperativa agraria que servía a los trabajadores del campo. A sus exequias asistieron millares de campesinos que recordaban su legado.

La tragedia de los Mayuza, o cómo el genocidio de la UP no termina

El 31 de diciembre de 2010, faltando poco para las campanadas del nuevo año, fue asesinado en Tuluá, departamento del Valle, José Lenin, el último dirigente de una estirpe de militantes de la Unión Patriótica. — — —

Pocas familias colombianas como la de los Mayuza, entregada a la política desde la izquierda, ha sufrido una peor tragedia: los cuatro varones han sido asesinados y las tres hermanas padecido injustamente la cárcel.

José Lenin, de cincuenta y un años, el último de ellos, fue acribillado por sicarios a las cinco y cincuenta minutos de la tarde del 31 de diciembre de 2010, en Tuluá, Valle, donde trabajaba como dependiente de un comercio. En 1986 había sido electo, con una altísima votación, como concejal de la Unión Patriótica en Vistahermosa, Meta.

Los Mayuza se habían asentado desde los años sesenta en el Meta, huyendo de la violencia. Todos, Salomón, Alexander, Luis, José, Carmen, Blanca Nieves y Janeth, se vincularon a las luchas populares en la región de Vistahermosa.

Cuando nace la Unión Patriótica en 1985, siendo muy jóvenes, no dudan un instante en vincularse al movimiento, convencidos de que es una alternativa política real en el camino de la renovación del país. Carmen Mayuza, dirigente de ANTHOC, el sindicato de trabajadores de clínicas y hospitales, seccional Cundinamarca, lo expresa así: “Con este nuevo crimen, el de José Lenin, se reafirma la persecución a toda mi familia buscando su total exterminio por el delito de habernos comprometido en la defensa de los intereses de nuestro pueblo”.

“Cuando los grupos paramilitares, con la complacencia del Estado, se tomaron el departamento del Meta, donde la UP se había convertido en una gran fuerza, nos tocó en 1988 desplazarnos como decenas de miles de familias”, recuerda Carmen con la voz entrecortada y los ojos aguados.



Luis Mayuza se dirige a los asistentes al funeral del diputado de la Unión Patriótica por el Meta, Carlos Kovacs, asesinado en la masacre del 27 de mayo de 1988 en Villavicencio. Luis sería asesinado en 2008 en Saravena, Arauca. (Foto: Voz)

Anota que “primero desaparecieron a Salomón en 1998, siguieron con Alexander, también desaparecido en Bogotá en 2003, a quien torturaron y finalmente arrojaron descuartizado en una bolsa. Luego mataron en 2008 a Luis en Saravena, Arauca, donde se había marchado en busca de nuevos horizontes y tras de regresar del exilio”.

“A mí como a mis dos hermanas, Blanca Nieves y Janeth, nos han perseguido y sometido a la cárcel por el delito de rebelión. El 16 de diciembre de 2010, un juzgado falló a nuestro favor dejando sin piso las falsas acusaciones del Estado, quedando libres dos semanas

después del crimen de nuestro hermano José Lenin”, subraya.

Señala que “mi padre murió hace pocos años de pura pena moral, sobreviviendo su esposa, de setenta y ocho años, que ya ha enterrado a sus cuatro hijos varones, en un castigo de los enemigos de nuestro pueblo que nunca nos van a perdonar nuestra vocación de lucha y la firmeza en nuestros principios”.

“A nosotros el Estado nunca nos ha dado seguridad, a pesar de las reiteradas denuncias de persecución y amenazas que hemos recibido en estos duros años de violencia contra la UP y toda la izquierda”, concluye.

6

Entre la apertura y el terror (1982-1997)



Página anterior: Sepelio del diputado de la Unión Patriótica por el Meta, Carlos Julián Vélez, asesinado junto a tres de sus familiares el 14 de septiembre de 1991, en la vereda Las Brisas, Mesetas, departamento del Meta.
(Foto: Pabloé, *Semanario Voz*)

Cronología

1982

11 y 12 de julio - Se reúne el Comité Central del Partido Comunista Colombiano (PCC), y señala que “existe una gran distancia entre las ilusiones que se forjaron las gentes que votaron por Betancur y la posibilidad real de que las promesas que prodigó puedan ser satisfechas realmente durante su Gobierno”. El PCC exige la amnistía general y sin condiciones y desmilitarizar las zonas agrarias.

El Partido Comunista reconoce que tuvo un descenso electoral con respecto a 1978 en las zonas agrarias. La organización ha sido prácticamente diezmada en regiones como Cimitarra, Yacopí y Urabá.

13 de julio - Turbay Ayala, faltando pocos días para la transmisión del mando, levanta el Estado de sitio, derogando automáticamente el Estatuto de Seguridad.

15 de julio - “Conmigo Colombia logró la edad de oro de la democracia”, dijo Turbay en un discurso de despedida en Bucaramanga.

22 de julio - Es asesinado Jaime Nevado, de treinta y tres años, miembro del PCC y concejal de Puerto Berrío, Antioquia, por el Frente Democrático. El asesino se refugió en el Batallón Bomboná.

28 de julio - Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se dirigen al presidente electo Betancur: “en lo que respecta a nosotros, diga cuando comenzamos a conversar” y recuerdan que sostuvieron reuniones con la Comisión de Paz presidida por Lleras Restrepo. Plantean como elementos para una solución pacífica al conflicto, amnistía general para los alzados en armas y los presos políticos, desmilitarización de las zonas agrarias y medidas sociales y económicas de fondo.

30 de julio - A pesar del levantamiento del Estado de sitio, se contabilizan treinta y un asesinatos en julio contra dirigentes políticos, sociales y sindicales, la mayoría en el Magdalena Medio: veinte en Puerto Boyacá, cinco en San Vicente de Chucurí y uno en Puerto Berrío.

2 de agosto - Es asesinado en Puerto Boyacá Jesús Hernández, dirigente popular del municipio.

7 de agosto - En su posesión, Belisario Betancur afirma que en su gobierno “no habrá una gota más de sangre” y que “se alce la bandera blanca de la paz”.

10 de agosto - En el reconocimiento de las Fuerzas Armadas a Betancur, este reitera su propósito de encontrar caminos de paz y reafirma su voluntad

de que “no se derrame más sangre, ni de soldados, ni de campesinos, ni de los guerrilleros, que también son hermanos nuestros”.

31 de agosto - El Partido Comunista envía una carta a Betancur denunciando la persecución oficial en el campo y las ciudades y pide la paz para el pueblo colombiano. Exige desactivar el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS) y abrir el diálogo con los alzados en armas. Solicita también la elección popular de alcaldes y gobernadores.

6 de septiembre - Una comisión del Partido Comunista, encabezada por su secretario general, Gilberto Vieira, se reúne con el presidente Betancur en presencia del ministro de Defensa, general Landazábal, para plantear los puntos de vista del partido sobre la paz, los diálogos, la tregua, la desarticulación de los grupos armados y la necesidad de una apertura democrática.

En la cita con la dirección comunista Betancur dice, sobre el tema de la paz, que ha encontrado “receptividad en las Fuerzas Armadas aunque existen zonas duras entre ellas”. Reconoce que en las regiones donde se combate, existe una mentalidad belicista entre las tropas que él quiere desmontar para que surja un ambiente de paz. Dice estar dispuesto al diálogo con los alzados en armas y que reintegrará la Comisión de Paz. En el encuentro, se dice que las FARC están bajo los órdenes de la dirección del Partido Comunista. Vieira responde que los comunistas no han negado jamás la simpatía por los guerrilleros, pero que

no dirigen la lucha armada, que tiene raíces de vieja data en nuestro país.

15 de septiembre - Se reúne la cumbre política de los partidos. Asisten el Partido Comunista, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el M-19 y el Nuevo Liberalismo. La apertura democrática implica plenos derechos ciudadanos, manifiestan los asistentes.

19 de septiembre - Caracol entrevista a “Jacobo Arenas”, segundo al mando de las FARC, quien manifiesta que estas están dispuestos a acuerdos de paz con el Gobierno.

20 de septiembre - El Gobierno conforma la nueva Comisión de Paz, que asesorará al Presidente “en su responsabilidad de fortalecer la paz pública y social en el país”. La integran cuarenta miembros encabezados por el expresidente Carlos Lleras Restrepo y de ella hacen parte, entre otros, Gerardo Molina, Alfredo Vásquez Carrizosa, Pastor Pérez, dos generales retirados, y Alberto Rojas Puyo, representante del Partido Comunista. Ningún funcionario oficial hace parte de la Comisión que se instala formalmente el 23 de septiembre.

30 Septiembre - Son asesinados en Puerto Berrío Otilia Serna, concejal de la Unión Nacional de Oposición (UNO) y militante del PCC, junto a los militantes José Herrera y otro de apellido Agudelo. Vieira, en un debate en la Cámara de Representantes, se enfrenta con el ministro de Defensa, general Landazábal, por denuncias de la vinculación de brigadas militares con el MAS.

5 de octubre - Cae asesinado en Mariquita, Tolima, Honorio Moreno, dirigente

del sindicato de Telecom y militante comunista.

16 de octubre - Es asesinado en Cimitarra, Santander, el exconcejal de la UNO y miembro del PCC, Octavio Ramírez.

21 de octubre - Tienen lugar en todo el país grandes marchas por la paz. En Bogotá se colma la Plaza de Bolívar.

28 de noviembre - “Manuel Marulanda Vélez”, jefe de las FARC, en entrevista con Caracol Radio propone un encuentro con Betancur y el grupo armado y explica que su organización mantiene una tregua a la espera de que llegue el diálogo. Desmiente que las FARC sean el brazo armado del Partido Comunista Colombiano.

1983

13 de enero - El Frente 6° de las FARC, que opera en áreas del Tolima, Cauca, Valle y Huila, propone conversaciones con el Gobierno y señala que están dispuestos a lanzarse como grupo político.

15 de enero - Informaciones de prensa dan cuenta de una ofensiva paramilitar en Puerto Berrío, Antioquia, con un saldo de varios desaparecidos a manos del MAS.

27 de enero - El comandante del Ejército, general Lema Henao, reconoce que sí existen grupos paramilitares en Colombia. Reconoce que tres campesinos en Santander confiesan ser del MAS y que los entrenó el Ejército.

1° de febrero - El Partido Comunista llama a desenmascarar al MAS e impedir de nuevo el Estado de sitio. Exige la apertura democrática, amnistía y conversaciones con los alzados en armas.

3 de febrero - El balance de la actividad sindical en 1982 arroja 119 huelgas con 769.330 parados. En 1981 hubo noventa y cuatro huelgas y 786.580 parados.

5 de febrero - El Procurador General, Carlos Jiménez Gómez, dice en su informe sobre el MAS: “nuestra investigación encontró que personas vinculadas directa o indirectamente con las Fuerzas Armadas se han dejado arrastrar por esta corriente”.

7 de febrero - Se reúne en el municipio de Colombia, Huila, la Comisión de Paz y el Estado Mayor de las FARC. En el comunicado conjunto, elogiado por Betancur, se plantean nuevas entrevistas. Morales Benítez dice en un reportaje que “los dirigentes de las FARC no son aventureros sino seres con convicciones” y afirma que está convencido de que las FARC quieren la paz.

7 de febrero - El MAS, a través de “Los Tiznados”, asalta el corregimiento Plan de Álvarez, municipio de Santa Elena del Opón, Santander, masacrando a diecisiete campesinos.

11, 12 y 13 de febrero - Se reúne el Comité Central del Partido Comunista y llama a abrir las puertas del diálogo entre la guerrilla y el Gobierno. El Pleno señala “que aunque el presidente Betancur ha estimulado la aprobación de la Ley de Amnistía, en su vocación por el diálogo, se mantiene intacto todo el aparato represivo”. El MAS prosigue su marcha criminal en el Magdalena Medio con atentados y secuestros.

16 de febrero - Es asesinado el concejal comunista Higinio Cala en San Vicente de Chucurí, Santander. Días antes había sido muerto Ismael Tavera,

exconcejal de Girón, Santander, de Firmes.

19 de febrero - La Procuraduría General confirma la conexión del MAS con sectores militares, indicando que de 163 nombres concretos de ese grupo, cincuenta y nueve pertenecen a las Fuerzas Armadas, y que los comandantes de los batallones Patriota, de Honda, Bomboná, de Puerto Berrío y del Casanare, están vinculados al MAS.

3 de marzo - Vieira dice que Betancur comienza a dar señales de vacilación e inestabilidad ante la agresiva actitud del poder militar paralelo, que intimida al Procurador y a los jueces que llevan a cabo las investigaciones contra el MAS.

4 y 6 de marzo - Se reúne el III Foro Nacional por los Derechos Humanos. Este apoya el informe del Procurador General sobre el MAS y llama a la apertura democrática y al diálogo con la guerrilla.

13 de marzo - En un discurso a la Nación, Betancur declara “que no habrá golpe de Estado”, ante los crecientes rumores en ese sentido. No obstante, anuncia al mismo tiempo que ampliará los gastos militares y una llamada ley antiterrorista.

Seis Frentes de las FARC del Magdalena Medio se dirigen a la Comisión de Paz pidiendo la disolución del MAS, la rehabilitación de las regiones agrarias militarizadas y el diálogo.

19 de marzo - Las FARC envían una carta al presidente Betancur insistiendo en la tregua y solicitando conversaciones en La Uribe, Meta, previo despeje de la zona. “Queremos dialogar con usted, directamente”, dicen.

23 de marzo - El comandante del Ejército, Lema Henao, asumiendo funciones que le corresponden al Presidente, responde ante los medios la carta de las FARC a Betancur, aduciendo que estas son el brazo armado del PCC y rechaza el pedido de tregua.

13 de abril - El país conoce una oleada de paros cívicos en varias poblaciones, en especial en Barrancabermeja e Itagüí, por agua, pavimentación y mejora de las condiciones de vida de los habitantes.

5 de mayo - El ministro de Defensa, Llandzábal, en un homenaje que le brinda el industrial Carlos Ardila Lülle a las Fuerzas Armadas, reclama del Gobierno todo el peso de la ley contra la subversión y critica la amnistía. Betancur no asiste al evento.

14 y 15 de mayo - Se reúne el Pleno del Comité Central del Partido Comunista. Analiza la propuesta de la Ley Antiterrorista de Betancur y señala que “existen vigorosas fuerzas en nuestro país para derrotar ese proyecto de ley profundamente reaccionario”.

El MAS y “Los Tiznados” continúan asesinando en zonas del Magdalena Medio como Puerto Berrío y en el Valle del Cauca.

31 de mayo - Renuncia el presidente de la Comisión de Paz, Otto Morales Benítez, en carta al presidente Betancur. En ella afirma que “los enemigos de la paz están agazapados por dentro y por fuera del Gobierno” y sostiene que “esas fuerzas reaccionarias en otras épocas lucharon como hoy contra la paz”. Morales Benítez sindicó al militarismo de impedir el diálogo con la guerrilla y confirma que existe un complot contra el proceso de apertura.

1° de junio - El nuevo presidente de la Comisión de Paz y destacado dirigente conservador, John Agudelo Ríos, se refiere al último documento de las FARC como muy positivo “pues reitera su deseo de paz y su ánimo de entrar en contacto con la Comisión de Paz y con el Gobierno”.

6 de junio - Las FARC ratifican, en un documento entregado a la prensa, su ánimo por la tregua y suscriben con el M-19 un comunicado en el que reafirman su voluntad de diálogo.

18 de junio - Las FARC, que actúan en el Magdalena Medio, se reúnen con el gobernador de Santander, Rafael Moreno, y plantean las bases para una tregua. Igualmente tienen lugar encuentros de los Frentes de las FARC del Cauca, Huila y Putumayo con los gobernadores.

19 de junio - Es asesinado en Mutatá, Urabá antioqueño, el concejal comunista Aníbal Zapata.

24 de junio - Se realiza en el país una jornada de protesta sindical de solidaridad con organizaciones en conflicto, como los trabajadores del petróleo, maestros y empleados públicos.

13 de julio - En Puerto Berrío, Antioquia, son masacrados veintiún campesinos. En Urabá pierden la vida cuatro labriegos por parte del MAS. También se informa de varios muertos en Cimitarra, San Vicente de Chucurí y La Rochela, Santander.

18 de julio - El paro de los trabajadores del puerto de Buenaventura es violentamente reprimido por las tropas, dejando un saldo de tres muertos y veintitrés heridos.

23 de julio - Más de ochenta víctimas cobra el MAS y otros grupos paramilitares

en diferentes partes del país, en especial en el Magdalena Medio, después de la visita de Betancur a las regiones de esta zona como Puerto Berrío y Cimitarra.

24 de julio - Culmina en Bogotá el IV Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), de influencia comunista y segunda en el país, con un llamamiento a construir una central unitaria.

28 de julio - En Caquetá se informa de la muerte de diecisiete personas, en los últimos dos meses, por parte de grupos paramilitares.

31 de agosto - “Arrebatarse las tierras campesinas y aplastar a toda la oposición, es el objetivo del genocidio planificado por ganaderos y paramilitares”, denuncia Gilberto Vieira en un debate sobre la violencia en la Cámara de Representantes.

1° de septiembre - Como un verdadero genocidio son calificados, por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), los asesinatos contra campesinos del Magdalena Medio y Urabá.

Según el estudio del CPDH, comparando el último año del presidente Turbay Ayala (agosto de 1981-agosto de 1982) con el primer año de gobierno de Betancur, el primero tiene a su haber 368 muertes violentas a manos de los paramilitares, y el segundo, por los mismos grupos, 683.

7 de septiembre - El ministro de Defensa, Landazábal, afirma en la Cámara de Representantes: “No podremos pactar con quienes nos exigen un alto al fuego..., no nos retiraremos de los campos..., no dialogaremos con la

guerrilla..., no irá un hombre de las Fuerzas Armadas a la guarida de los facinerosos”.

8 de septiembre - “Marulanda Vélez” le pide a Betancur conversar directamente y de manera urgente sobre la paz y la necesidad de una tregua.

19 de septiembre - Al cumplirse un año de la Comisión de Paz, Betancur insiste en las conversaciones con la guerrilla y reconoce el diálogo que se viene adelantando con las FARC.

6 de octubre - Se presentan paros cívicos en Barranquilla y Cartago, Valle, por mejoras en los servicios públicos, con dos muertos en la segunda ciudad. Nuevos paros en Ibagué, el occidente antioqueño y Nariño.

10 de octubre - Betancur se reúne en Madrid con los dirigentes del M-19 Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad y ratifica la búsqueda del diálogo con las FARC.

28 de octubre - Es asesinado en Segovia, Antioquia, el concejal y dirigente comunista Gilberto Gallego. Se revela la matanza de veintidós campesinos y mineros en el nordeste antioqueño entre el 4 y 6 de agosto. Señalan al Batallón Colombia como autor de la matanza.

20 de noviembre - Se cumple un año de la amnistía y las fuerzas de izquierda levantan las banderas de la tregua y el alto al fuego.

23 de noviembre - El ELN secuestra a Jaime Betancur, hermano del Presidente de la República.

26 de noviembre - Betancur anuncia que no utilizará “ni la represión ni la mano dura para lograr la paz”.

1° de diciembre - Las FARC nuevamente piden el diálogo y condenan el secuestro de Jaime Betancur.

7 de diciembre - Tienen lugar, en todo el país, manifestaciones por la paz que coinciden con la liberación de Jaime Betancur.

8 de diciembre - Más de cinco mil campesinos del Caquetá inician un éxodo, aduciendo la persecución oficial.

1984

18 de enero - Renuncia el ministro de Defensa, general Landazábal, por solicitud del Presidente, quien manifiesta que el funcionario se opone a los Acuerdos de Paz con la guerrilla. En su reemplazo es nombrado el general Matamoros y, como comandante de las Fuerzas Militares, Vega Uribe. Los defensores de derechos humanos lo sindicaron de entronizar las torturas en 1978 y 1979, cuando dirigió la Brigada de Institutos Militares (BIM).

11 de marzo - Tienen lugar las elecciones para renovar concejos y asambleas. El Frente Democrático (FD), liderado por el PCC, obtiene a nivel nacional 119.621 votos de un total de 4.700.000 sufragios, el 2,6%. En 1982 registró 116 mil votos. El FD elige ocho diputados y más de noventa concejales en todo el país, y retoma posiciones que se habían perdido en las anteriores elecciones, regresando a las asambleas de Antioquia, Huila, Tolima y Valle, y a los concejos de capitales en Neiva, Ibagué y Barrancabermeja. Se mantiene la presencia en el Concejo de Bogotá y en las asambleas de Cundinamarca, Cauca, Meta y Caquetá. El PCC señala

que la ofensiva militar y paramilitar impidió a regiones agrarias de tradición de izquierda como Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Yacopí y Cimitarra depositar su voto.

14 de marzo - En vísperas de los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz entre el Gobierno y las FARC, el M-19 hace una toma sangrienta de Florencia, la capital del Caquetá, con un saldo de veinte muertos. Esto lleva a Betancur a decretar el Estado de sitio en Caquetá, Huila, Cauca y Meta.

18 de marzo - John Agudelo Ríos, presidente de la Comisión de Paz, dice de las FARC que “es una organización vieja, veterana, seria, muy bien organizada, con cuyos dirigentes se puede dialogar fácilmente. Lo que pueda acordarse con ellos tendrá un carácter definitivo”.

25 de marzo - El columnista Fernando Cepeda Ulloa en *El Tiempo*, reconoce “que la izquierda se ha constituido en una de las fuerzas más importantes de Colombia pues su avance en otros aspectos de la vida social y política es notorio”.

26 de marzo - Para López Michelsen las huelgas, paros cívicos y marchas son el peligro más grave para la estabilidad del poder; por eso, según *El Espectador*: “hay que meter en cintura a los sindicatos todopoderosos dominados por la extrema izquierda”.

28 de marzo - El Gobierno, a través de la Comisión de Paz, firma en algún lugar de La Uribe un acuerdo con las FARC, con la presencia del presidente de dicha Comisión, John Agudelo Ríos, y el jefe del grupo guerrillero, “Manuel Marulanda”. El documento establece

un compromiso de cese al fuego, tregua y paz entre las partes y con una duración inicial de un año, así como el comienzo de un proceso de diálogo sobre las reformas que necesita el país y el establecimiento de una Comisión de Verificación de la Tregua. Se fija el 28 de mayo, dos meses después de la firma del acuerdo, como fecha de inicio del cese al fuego entre las Fuerzas Armadas y las FARC.

1° de abril - Betancur se dirige a todo el país para dar la noticia: “El Gobierno considera que los acuerdos son una contribución real al sosiego de vastas comarcas colombianas. Y por estimar que es una hermosa y esperada noticia, así lo comunico a la Nación”. Toda la prensa saluda los acuerdos.

5 de abril - Manuel Cepeda señala que “con la aprobación oficial del acuerdo con las FARC-EP, nos asomamos al inicio de una nueva situación política. El Gobierno está en un cruce de caminos. Puede abrir un nuevo capítulo histórico si se decide a marchar hacia la democratización del país. O puede desembocar en una nueva frustración, si no imprime los grandes cambios sociales, económicos y políticos que le reclama Colombia”.

4 de abril - Es asesinado en la vereda Altos del Palmar, de Yacopí, Cundinamarca, un campesino acusado de apoyar a la guerrilla. Los comunistas declaran que defienden la paz y consideran que el crimen busca sabotear el clima de convivencia que se acaba de inaugurar.

13 y 15 de abril - El Pleno del Comité Central del Partido Comunista Colombiano saluda los Acuerdos de Paz.

30 de abril - Sicarios al servicio de la mafia asesinan en Bogotá al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

14 de mayo - Las FARC ordenan el alto al fuego a sus veintisiete Frentes.

19 de mayo - Todos los partidos políticos firman un llamamiento para respaldar la fecha histórica del 28 de mayo, día en que comenzará la tregua entre el Gobierno y las FARC y convocan a la celebración de este día como el de la paz.

26 de mayo - Sicarios asesinan a José Eduardo Vasco, concejal de Sabana de Torres, Santander, diputado a la Asamblea y destacado miembro del Comité Central del PCC. Dan muerte también a su esposa, Adelfa Campos, dirigente de la Unión de Mujeres Demócratas y militante comunista en dicha población. Vasco había denunciado los abusos de las tropas de la V Brigada en ese departamento. Se considera como el primer magnicidio tras la firma de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el Gobierno.

29 de mayo - El Gobierno nombra la Comisión de Verificación de la Tregua, en cumplimiento de los Acuerdos de La Uribe. La integran cuarenta y tres personas, entre ellas John Agudelo Ríos, Gilberto Viera, Alberto Rojas Puyo. Se instala el 1° de junio.

14 de junio - El ministro de Gobierno manifiesta que el Ejecutivo vería con buenos ojos que el Congreso autorizara al Presidente la declaratoria del indulto para los jefes guerrilleros a quienes no cobijó la amnistía. Se habla de una orden secreta del general Vega Uribe que busca que la tropa desarme a los guerrilleros, lo que sería un golpe a la

tregua, pues no se acordó la entrega de las armas. El ministro de Defensa, general Matamoros, dice a los medios que “inicialmente la violencia fue un problema de los partidos tradicionales y después ha sido un problema del Partido Comunista”. El PCC contesta en *Voz* que “al contrario, ha sido víctima de la violencia gubernamental y militarista y no ha hecho otra cosa que denunciar la violencia reaccionaria y defenderse de ella”.

24 de junio - *El Tiempo* da a conocer una circular secreta en la que los generales Matamoros y Vega Uribe se apresuran a declarar muerta la tregua y exhiben el profundo rechazo que sienten hacia los jefes guerrilleros, en especial hacia “Manuel Marulanda”.

27 de junio - Se dan a conocer las primeras violaciones a la tregua en Cundinamarca, Tolima y Caquetá, según denuncias a la prensa de los Frentes 24 y 25 de las FARC.

28 de junio - Gilberto Vieira resume el llamamiento al XIV Congreso del Partido Comunista, señalando que “si la tregua en las luchas armadas se consolida hasta llegar a un acuerdo de paz democrática, derrotando las provocaciones de ciertos sectores militaristas y latifundistas, el movimiento guerrillero podría adelantar un destacado trabajo de organización y educación política de grandes masas campesinas y urbanas, y deslindándose tajantemente de los actos aventureros y terroristas, que jamás pueden sustituir la acción de masas, pero que siempre sirven de sustento a las maquinaciones provocadoras y represivas de círculos y estamentos

ligados íntimamente al imperialismo norteamericano”.

10 de agosto - Sicarios asesinan en Bucaramanga al médico y dirigente nacional del M-19, Carlos Toledo Plata.

12 de agosto - “Al proceso de paz le dieron once balazos. Pero al contrario de lo ocurrido al doctor Toledo Plata, la paz no morirá en este atentado. Lo grave es que este crimen puede ser también una advertencia para tratar de acobardar a los dirigentes de los movimientos subversivos. Eso permite entender por qué estos últimos no han aceptado desarmarse: porque temen por sus vidas”, escribe García Márquez en *El Mundo*, diario de Medellín.

16 de agosto - Gilberto Vieira escribe en *Voz* que “es insostenible una situación en la que el Presidente de la República preconiza una política de paz y a la vez, concilia con sectores militaristas que hacen todo lo contrario”, en relación con la muerte de Toledo Plata y las provocaciones contra los Acuerdos de Cese al Fuego.

1° de septiembre - Se conoce que el director de la Policía y los comandantes de la Tercera División y de la III Brigada, notificaron al Gobierno que el M-19 debía retirarse de Corinto y El Hobo, Huila, donde tendrían lugar conversaciones de paz; de lo contrario, los militares procederían a tomar dichos sitios. Se rumora en los medios de prensa sobre un posible golpe de Estado y presiones contra el Presidente, mientras los miembros de la Comisión de Paz reciben amenazas de muerte y son objeto de seguimientos.

22 de septiembre - Operativos militares impiden la instalación de la Comisión

Nacional de Verificación de la Tregua en Dolores, Tolima, y después de intensos preparativos civiles.

24 de septiembre - El PCC denuncia nuevos intentos de golpe de Estado, que ya había señalado en declaraciones exclusivas para la prensa, como lo tuvo que reconocer *El Tiempo* el 19 de septiembre, y divulgadas por el propio Betancur en un discurso en Arauca.

6 de octubre - Se instala en Casa Verde, sede del Secretariado de las FARC, en La Uribe, la Comisión Verificadora de la Tregua.

6 de noviembre - Se reúne en Bogotá el XIV Congreso del PCC, que ratifica su política de una solución negociada al conflicto y el apoyo a los Acuerdos de Paz.

4 de diciembre - La izquierda firma un documento por la apertura democrática y el diálogo nacional, conjuntamente con las FARC, el M-19, el Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).

14 de diciembre - Gigantesco operativo militar contra el M-19 en la región de Corinto, Huila, porque según el comandante de las Fuerzas Armadas, Vega Uribe, no se pueden aceptar repúblicas independientes.

1985

1° de enero - Según el periódico *Vanguardia Liberal* de Bucaramanga, unos ochenta hombres de las FARC recorren desde el 30 de diciembre fincas y veredas del municipio de Rionegro, Santander, sin disparar sus armas, ni amenazar con ellas. Se dedican a presentar sus ideas realizando proselitismo político.

4 de enero - De acuerdo con medios de prensa, el Batallón Ricaurte actúa como si no estuviera vigente la tregua y realiza un operativo el 3 de enero, eliminando a cuatro guerrilleros. Tras la identificación de los muertos, se establece que se trataba de dos personas mayores, los campesinos Ernesto Castro Chaparro de cincuenta años y Ana Francisca Rodríguez de Castro de cincuenta y uno; la tercera persona era el obrero de su finca, José Antonio Naranjo.

8 de enero - El Ejército ordena una ofensiva contra los guerrilleros del M-19 en Corinto, Cauca. En diciembre ya se habían tomado varias medidas en ese sentido. Hay éxodo campesino. La Sociedad de Agricultores de Colombia afirma que “hasta hoy sólo se ha logrado una paz de palabra”.

10 de enero - El PCC llama a rechazar lo que llama provocaciones militaristas a la tregua y la apertura democrática firmada en los Acuerdos de La Uribe. Señala que “el gobierno de Betancur, que viene conciliando con el militarismo, se ha visto obligado por la opinión pública a buscar una salida a esta grave situación de violencia en el Cauca”, en referencia a la ofensiva contra el M-19. “Esta ofensiva sangrienta se realiza desconociendo el espíritu de los acuerdos de tregua, exigiendo la entrega de armas, la disolución de las organizaciones revolucionarias armadas y agrarias”. Llama a participar en la jornada democrática unitaria por la paz del 17 de enero, convocada en el Valle.

Con la intervención de un grupo de comisionados de paz, se pone fin a los intensos combates entre el Frente Sur

del M-19 y el Ejército en Corinto, Cauca. La tregua fue firmada con el Gobierno y la guerrilla en agosto de 1984.

17 de enero - Decenas de miles de trabajadores del Estado realizan un paro, buscando mejoras salariales.

El general Vega Uribe declara de nuevo ante la prensa que “el Ejército puede derrotar a la guerrilla”, y critica a Betancur por su búsqueda de soluciones políticas cuando, según él, “la guerrilla estaba derrotada”.

20 de enero - *El Tiempo* se pregunta, a través de su gerente Guillermo Santos –quien firma su columna como “Kerensky”–, si se podrán hacer las elecciones “con tanta gente beligerante, armada y ansiosa de poder”.

22 de enero - El general Vega Uribe, que públicamente ha rechazado la tregua, es nombrado ministro de Defensa, ante la grave enfermedad del general Matamoros. Se recoge totalmente la edición de la revista *Acore*, órgano de los militares en retiro, por publicar un nota que critica a Betancur y profetiza que Colombia se precipitará al abismo.

23 de enero - Tiene lugar en Bogotá el gran Diálogo Nacional, con la presencia de los más altos dirigentes de todos los partidos y organizaciones sociales. Hay consenso en el apoyo a la tregua. En el evento se lee un mensaje del presidente Betancur, donde recalca que seguirá el proceso de paz a pesar de las dificultades y que está empeñado en “eliminar los factores objetivos de la subversión”.

Los Frentes 12 y 22 de las FARC denuncian ante la Comisión de Verificación de los Acuerdos de Cese al Fuego, emboscadas del Ejército a sus



Más de veinte mil personas se congregaron en el acto de clausura del Primer Congreso de la Unión Patriótica, el 16 de noviembre de 1985, en la Avenida Jiménez con carrera Séptima, en Bogotá. (Foto: Lara, Voz)

unidades en Yacopí y La Palma, en Cundinamarca, en el Huila y en San Vicente de Chucurí, Santander.

Los Frentes 12, 20 y 24 de las FARC se entrevistan con la Comisión de Verificación y plantean que están cumpliendo con la tregua. Denuncian varios hostigamientos con muertos de la guerrilla y detenidos desde el 27 de abril de 1984 al 3 de enero de 1985, en Santander, Bolívar y Magdalena Medio.

24 de enero - El mayor general Jaime Hernández López, al retirarse como director de la Escuela Militar de Cadetes, le dice a estos en su despedida: “Colombia está viviendo bajo el imperio del chantaje, la farsa, el engaño, el secuestro, la emboscada aleva, la intimidación y el miedo, cuyo objetivo es la disolución del sistema democrático”.

28 de enero - Informes de prensa indican que cada día es más evidente el

antibelisarismo en las Fuerzas Armadas. En la Tercera División, que cubre el occidente y sur del país, se habla de “un golpe rápido” que saque al Presidente, pero que retorne el poder a los civiles.

Los Frentes 5° de las FARC de Urabá, 9° de Antioquia y el 24 del Magdalena Medio, denuncian en un comunicado de prensa y ante la propia Comisión de Verificación, la violación de la tregua por parte del Ejército con la militarización de fincas. Denuncian también el hostigamiento a las comisiones políticas que, sin armas, realizan proselitismo político, según el acuerdo de tregua.

El presidente de la Federación de Ganaderos (FEDEGAN) Hernán Vallejo Mejía, en declaraciones al diario *El Mundo*, dice que “no hay que hacerse ilusiones con la paz total. Las fuerzas de seguridad deben prepararse a combatir con mucha eficacia”.

11 de febrero - El Gobierno prohíbe el Congreso del M-19 en el campamento de Los Robles, Miranda, departamento del Cauca. El Partido Comunista condena esta actitud oficial afirmando que revela el grado de sumisión de Betancur a los militares.

20 de febrero - El PCC envía una carta abierta al presidente Betancur, denunciando que la cúpula militar no respeta los acuerdos de tregua y señala que se vienen cometiendo asesinatos, detenciones, desapariciones y secuestros de ciudadanos que, confiados en los acuerdos, actúan abiertamente.

21 de febrero - En la portada del *Semanaario Voz*, se presenta por primera vez el llamado de las FARC a la formación de la Unión Patriótica. Es el primer anuncio público del nuevo movimiento.

Finalmente el M-19 realiza su Conferencia Guerrillera en el Cauca y elige a Álvaro Fayad como su jefe máximo.

Las FARC proponen una plataforma para la renovación del país y anuncian el nacimiento de la Unión Patriótica. Declaran que no habrá entrega de armas y lanzan una plataforma de lucha de veinte puntos.

23 de febrero - *El Tiempo* y los gremios agrarios arrecian contra la tregua. Paro de trabajadores estatales en todo el país contra la carestía y la crisis. Se llena la Plaza de Bolívar de Bogotá y otras plazas en diferentes ciudades. El Ejército Popular de Liberación anuncia en su órgano *Revolución*, que se prepara para participar en las elecciones.

24 de febrero - En el Tambo, Cauca, se realiza la primera gran manifestación de la Unión Patriótica en el país. Las FARC envían un mensaje. Hay toma

de tierras por los campesinos en todo el país. Campesinos de El Bagre, Antioquia, son masacrados por la Policía durante una protesta; hay cuatro muertos. Seis mil campesinos se habían movilizado en lucha por la tierra.

4 de marzo - *El Tiempo* arrecia contra el proceso de paz y el creciente fortalecimiento de la insurgencia; culpa de ello a Betancur por ser débil. Se refuerzan los grupos paramilitares como el MAS.

16 de marzo - El sector social convoca un paro cívico y elige el comando nacional unitario, con las centrales obreras. El Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) no participa.

21 de marzo - Más de dos mil personas colman el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá, para el lanzamiento del libro de "Jacobo Arenas", segundo comandante de las FARC, *Cese al fuego*, en lo que se constituye como el primer gran acto público de la UP en el país y que da su nacimiento.

30 de marzo - A un año de los acuerdos, se reúne en La Uribe el Secretariado de las FARC con la Comisión de Verificación de los Acuerdos de Paz. Participan la ministra de Comunicaciones Noemí Sanín, el Alto Comisionado de Paz, Antonio Duque Álvarez, y Gilberto Vieira, entre otros. Las FARC anuncian la presentación del programa de la UP.

31 de marzo - Se reúne el Pleno del Comité Central del PCC para coordinar la proyección de la UP, así como la organización del paro cívico nacional. La reunión saluda el nacimiento de la Unión Patriótica "como un paso nuevo en la dirección al frente común

y la unidad popular". Para entonces, este partido es la columna vertebral del Frente Democrático y declara que no hay contradicción con el nuevo movimiento.

18 de abril - Los Frentes 3°, 14 y 15 de las FARC, lanzan públicamente la UP en San Vicente del Caguán, Santander, en un acto de masas. En Garzón, Huila, se realiza un acto con la asistencia de mil quinientas personas y la presencia de las FARC, que exhiben sus pancartas.

1° de mayo - La UP hace presencia con sus banderas y pancartas en todas las manifestaciones públicas en el día internacional de los trabajadores

14 de mayo - La Cámara de Representantes aprueba los indultos para los alzados en armas por ochenta y siete votos a favor y catorce en contra. El proyecto pasa al Senado.

18 de mayo - La UP realiza grandes movilizaciones, con miles de asistentes, en Guaviare y en El Caguán, Caquetá, con presencia de comandantes guerrilleros como "Iván Márquez". En Florencia tiene lugar una manifestación de más de diez mil personas.

23 de mayo - Antonio Navarro Wolff, dirigente nacional del M-19, es víctima de un atentado terrorista cuando depar-te en una cafetería de Cali, quedando gravemente herido. Estallan bombas en la Central Nacional de Provivienda y en el Comité Central del Partido Comunista en Bogotá, ocasionado graves daños a estas sedes.

20 de junio - Se realiza el Paro Cívico Nacional convocado por las centrales obreras en defensa de los salarios y el derecho a la vida. La UP convoca su

convención nacional para los días 29, 30 y 31 de agosto en Bogotá.

18 de julio - La UP se reúne con gobernadores del Tolima, Huila y Caquetá y con los del Magdalena Medio. También lo hace con los Frentes de las FARC 2°, 6°, 9°, 13, 14, y, 15, 17 y 21 en todo el país.

3 de julio - Sicarios abalean el vehículo en que se moviliza el diputado comunista de Antioquia, y dirigente de la UP, Gabriel Santamaría, quedando herido aunque no de gravedad.

8 de julio - Las FARC dicen en un comunicado que se han creado trescientas Juntas Patrióticas de la UP y han movilizado cincuenta mil personas en el Magdalena Medio.

15 de julio - En un fallo del Consejo de Estado el general Miguel Vega Uribe, ministro de Defensa, es hallado culpable por las torturas a la médica Olga López de Roldán. Betancur no le pide la renuncia. La Autodefensa Obrera (ADO) se adhiere a la UP.

20 de julio - En el discurso ante el Congreso de la República, Betancur niega la validez del cese al fuego suscrito en La Uribe, con las FARC, cuando afirma que "se acordó un periodo de tregua, cuyo significado es básicamente las suspensión de hostigamientos, hostilidades y agresiones contra las Fuerzas Armadas por parte de los insurrectos. Esto es así porque en la defensa de la democracia y de las instituciones ni el Gobierno ni las Fuerzas Armadas pueden permitirse tregua alguna".

25 de julio - En Cali se reúne la cumbre de gobernadores del Valle, Cauca y Nariño, con los Frentes de las FARC 2°, 6°, 8°, 13, 15 y 16 y se pide

la desmilitarización y desmonte de los grupos paramilitares.

29 de julio - Paramilitares masacran a siete personas en San Vicente de Chucurí, Santander, zona de influencia de la UP. A las 10 de la noche una bomba destruye parte de la sede del PCC de Medellín.

25 de agosto - Las FARC proponen prolongar la tregua hasta septiembre de 1986 y reconocen que aún no hay condiciones para un tratado permanente de paz.

28 de agosto - Jaime Caycedo, dirigente nacional del PCC, es víctima de un atentado a bala, quedando gravemente herido. Es asesinado en Cali el dirigente nacional del M-19, Iván Marino Ospina.

7 y 8 de septiembre - El PCC apoya la propuesta de las FARC de ampliar la tregua y llama a consolidar la UP. Saluda la candidatura de “Jacobo Arenas” a la Presidencia de la República.

17 de octubre - En el Senado tiene lugar un debate sobre un supuesto proselitismo armado de la Unión Patriótica. Varios dirigentes de los partidos tradicionales defienden el proceso de paz y reconocen que las FARC están cumpliendo los pactos.

18 y 19 de octubre - Sesiona en Bogotá la Asamblea Nacional de Activistas de la UP, con centenares de delegados. A la fecha se registran 2.229 Juntas Patrióticas y en 572 actos políticos se han reunido más de un millón de personas.

24 de octubre - La UP organiza su Primer Congreso para los días 15, 16 y 17 de noviembre, en Bogotá. Se instala la nueva Comisión de Paz y Verificación

de los Acuerdos con las FARC y Betancur dice que no se ha cerrado el proceso. El Partido Liberal se retira, lo mismo que el general (r) Rubiano y el presidente de la Cámara. *El Tiempo* dice que la Comisión quedó en manos de la izquierda.

25 de octubre - Los militares allanan el periódico *Voz*, vocero de la UP, en una aparatosa operación que dura dos horas.

30 de octubre - Álvaro Vásquez, dirigente nacional del PCC, resulta ileso de un atentado a bala, a la salida de su casa en Bogotá.

6 y 7 de noviembre - Un comando del M-19 se toma en forma cruenta el Palacio de Justicia. Al final de la acción, perecen más de cien personas, entre guerrilleros, magistrados, empleados y efectivos de las Fuerzas Armadas, que retoman la sede a sangre y fuego. Hay una veintena de desaparecidos. El PCC, la UP y las FARC condenan la acción del M-19.

16 de noviembre - Se reúne en Bogotá, con la asistencia de un millar de delegados de todo el país, el Primer Congreso de la UP. En la madrugada estalla una bomba en la sede del PCC causando enormes daños.

El Congreso de la UP aclama la precandidatura de “Jacobo Arenas” y se elige la Junta Nacional. El evento se clausura con un acto multitudinario en la Avenida Jiménez con carrera Séptima, en pleno centro de Bogotá. Interviene por las FARC el comandante “Francisco Galán”, quien reafirma el compromiso de la insurgencia de continuar con el proceso de paz.

20 de noviembre - Es asesinado en Bogotá Óscar William Calvo, máximo dirigente nacional del Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista (PCC-ML) y autor de la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente, junto con dos acompañantes. Se activa el Plan Cóndor contra la izquierda, señalan defensores de derechos humanos.

8 de diciembre - En un atentado con bomba en la sede nacional de la Juventud Comunista, en Bogotá y a plena luz del día, pierde la vida el dirigente juvenil Jesús García.

7 de diciembre - Se reúne la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, encabezada por John Agudelo Ríos, con el Secretariado de las FARC. Las partes ratifican su voluntad de paz. La guerrilla reitera su disposición de prolongar la tregua, pero critica al Gobierno por no levantar el Estado de sitio y denuncia el asesinato de veintidós guerrilleros del 5° Frente, en el Urabá. Sostienen que los fallecidos fueron víctimas de una emboscada del Ejército. Afirman que no se dejarán matar.

1986

11 de enero - Se reúne el Pleno del Comité Central del PCC. Denuncia el incremento de la guerra sucia para hacer abortar la tregua y el proceso de paz, pero considera que “es posible derrotar esta escalada en la medida en que se logre unir y poner en actividad la opinión democrática del país”. Se informa de un importante incremento de la militancia comunista,

sobrepasando casi tres veces la meta propuesta.

20 de enero - La UP logra importantes acuerdos electorales con diversas fuerzas políticas, como liberales y conservadores, en dieciocho departamentos, en especial Tolima, Huila y Caquetá. Los acuerdos incluyen a Firmes y el Nuevo Liberalismo. *El Tiempo* estigmatiza este proceso de alianzas, calificándolo como “una curiosa coalición con extremistas”.

15 y 16 de enero - Se reúne la Comisión de Diálogo y Verificación con el Secretariado de las FARC en Casa Verde. “Jacobo Arenas” informa que más de doscientos militantes de las FARC han sido asesinados y “Marulanda” reclama garantías para la UP. “Las Fuerzas Militares han venido creando mecanismos disidentes para torpedear al movimiento armado que se halla en tregua. Ciertamente, en veinte años no hemos podido tomar el poder, pero en ese mismo lapso tampoco han podido derrotarnos y pese a todos las dificultades, no podemos ceder ni un milímetro en el camino hacia la paz”, señala “Arenas”. El Gobierno facilita que se instale un moderno sistema de comunicaciones entre la Comisión de Paz y la guerrilla, en una oficina del Palacio de Nariño.

1° y 2 de febrero - Se reúne la Comisión de Paz y de Verificación con las FARC en La Uribe, que John Agudelo Ríos califica como un encuentro histórico. El presidente de la Comisión de Paz comenta que la tregua ha sido buena, pero hay que avanzar y completar el ciclo y en ese sentido saluda la iniciativa de constituir la UP, lo que señala como “un hecho importantísimo

que ya pertenece a la historia de la República”.

31 de enero - La Junta Nacional de la UP proclama a Jaime Pardo Leal como su candidato presidencial. Unas semanas atrás, “Jacobo Arenas” había anunciado su renuncia a la candidatura después de descubrir un plan para atentar contra su vida en plena campaña electoral.

2 de marzo - El Gobierno firma el acuerdo con las FARC para prolongar la tregua. El candidato presidencial de la UP, Pardo Leal, saluda el acuerdo y Belisario Betancur lo recibe en Palacio tras acompañar la delegación que estuvo en La Uribe. El Presidente saluda el acuerdo y afirma que esto debe garantizar unas elecciones en paz.

5 de marzo - Tiene lugar una masacre en Campo Capote, Santander, con la muerte de tres miembros de la UP.

9 de marzo - Se realizan las elecciones parlamentarias con el triunfo del Partido Liberal con 3.186.977 votos, seguido por el Partido Conservador con 2.438.551 y el Nuevo Liberalismo con 441.463 votos. Se registra el surgimiento de la UP como importante fuerza electoral, eligiendo nueve senadores y quince representantes a la Cámara. En 1982, para el Congreso, los comunistas ganaron un senador y un representante. La UP obtiene ahora 120.442 votos con listas propias y 198.875, en alianzas, en un gran salto de la izquierda. Los nueve senadores electos son entre principales y suplentes: Hernando Hurtado, Jaime Montoya, Pedro Nel Jiménez, Gustavo Osorio, Pedro Luis Valencia, Humberto Oviedo, Alberto

Rojas Puyo, Pedro Alcántara y Félix Tovar.

Los quince representantes: Gilberto Vieira, Ovidio Marulanda, Betty Camacho de Rangel, Hernán Motta Motta, Elsa Rojas, Henry Millán, Carlos E. Cardona (alias “Braulio Herrera”, comandante de las FARC), Bernardo Jaramillo, Jorge González, Leonardo Posada, Octavio Vargas, Luciano Marín (alias “Iván Márquez”, comandante de las FARC), Rafael Cely, Manuel Agámez y Hernán Rojas.

13 de marzo - Es asesinado en Bogotá, en un operativo militar, el jefe del M-19 Álvaro Fayad.

14 de marzo - Las FARC saludan el avance electoral de la Unión Patriótica.

19 de marzo - Jaime Pardo Leal se reúne con Betancur y luego dialoga con los candidatos presidenciales Virgilio Barco, del Partido Liberal y Álvaro Gómez Hurtado, del Partido Conservador. Pardo le solicita a Betancur el levantamiento inmediato del Estado de sitio y denuncia los crímenes contra la UP en varias regiones del país.

16 de abril - Las FARC denuncian que hay combates con seis de sus Frentes en una clara ruptura de la tregua.

8 de mayo - Es asesinado en Cali el exdirigente nacional y exsenador del PCC, José Cardona Hoyos.

25 de mayo - En las elecciones presidenciales triunfa el liberal Virgilio Barco, quien derrota ampliamente al conservador Gómez Hurtado. El hecho de la jornada es el gran ascenso de Jaime Pardo Leal, candidato de la UP con 328 mil votos, un 4,5% del electorado, una votación jamás alcanzada por la

izquierda. En Bogotá, Pardo obtiene más de cincuenta mil votos.

31 de mayo y 1° de junio - Se reúne el presidente de la Comisión de Paz, John Agudelo Ríos, con el Secretariado de las FARC en La Uribe, con presencia de “Manuel Marulanda”, “Jacobo Arenas” y “Alfonso Cano”. El presidente de la Comisión felicita a las FARC por los resultados de la UP: “El éxito de la UP nos regocija, porque en cierta forma es una construcción de todos nosotros. Resultó de los propios Acuerdos de Paz. Somos cómplices necesarios de su existencia. Celebrar sus triunfos nos parece elemental. No se pudo –en ocasiones por falta de dinero y en otras por falta de tiempo para adecuar la organización– crear mecanismos a través de los cuales el votante podría hacer uso de sus derechos a votar. De manera que todos están de acuerdo que la UP tenía muchos más votos que los que puso”.

17 de junio - El ministro de Gobierno, Jaime Castro, es objeto de un atentado a tiros por parte del M-19. La UP condena el hecho señalando que “acciones de este tipo sólo le sirven en la práctica a los sectores más reaccionarios”.

20, 21 y 22 de junio - Se reúne el IV Pleno Nacional de la UP. Señala que este movimiento “es el embrión de un nuevo poder” y pide que se respeten los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz, y se mantenga el compromiso del Gobierno y sus Fuerzas Armadas con el proceso. Es ratificado Jaime Pardo Leal como presidente del movimiento.

1° de julio - Jaime Pardo Leal envía al Papa Juan Pablo II, en su visita a Bogotá, un mensaje exhortándolo a

interceder por la no violencia en Colombia, y denuncia los crímenes contra el movimiento que han dejado más de doscientas víctimas en menos de un año.

3 de julio - El PCC destapa nuevos elementos del Plan Cóndor dirigido por la cúpula militar, destinados a desquiciar al gobierno de Barco para que reprima al movimiento popular. Según algunos analistas políticos, los militares miran con preocupación la anunciada conversación entre Barco y Jaime Pardo Leal antes de asumir su cargo de Presidente electo.

4 de julio - El concejal de la UP de El Bagre, Antioquia, es herido gravemente por sicarios.

6 de julio - Hay enorme expectativa por la actividad de la UP en el Congreso con su amplia bancada de nueve senadores y quince representantes a la Cámara.

8 de julio - Las FARC se dirigen a *El Tiempo* y señalan que “no se puede confundir a las FARC con la UP, ni a esta con las FARC. Otra cosa es que las FARC apoyen con todas sus fuerzas y toda su decisión a la UP. Son categorías distintas que no es dable confundir”.

20 de julio - Betancur, en su discurso de instalación del Congreso y en su último año de Gobierno señala que “hoy parece natural el proceso de paz con las FARC. Se considera habitual la presencia de la UP”. Y se acepta como un postulado “su tránsito gradual hacia un movimiento de oposición política, con posibilidades de acción parlamentaria y con calado local”.

César Pérez García, quien preside la sesión inaugural de la Cámara de

Representantes, reconoce que ha llegado una nueva fuerza, la UP y que su presencia “contribuirá al fortalecimiento de la democracia”.

El presidente de la Cámara, Román Gómez Ovalle, sostiene que la UP “es un factor importante en la vida nacional”. Sin embargo, estas palabras no tienen ningún reflejo en las presidencias de Cámara y Senado, ni en las directivas de las Comisiones, quedando totalmente marginada la UP.

21 de julio - La UP propone la reglamentación de la elección popular de alcaldes con la firma de los senadores de la UP Hernando Hurtado, Alberto Rojas Puyo, Jaime Montoya y Pedro Nel Jiménez.

24 de julio - La Policía ultima a balazos a Gustavo Arias Londoño, alias “Boris”, líder del M-19, al sur de Medellín, después de haberlo capturado.

30 de julio - Es asesinado en Granada, Meta, Rafael Reyes Malagón, fundador del PCC en la región y diputado de la UP.

31 de julio - Sicarios asesinan en Bogotá al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Baquero Borda.

5 de agosto - En el Centenario de la Constitución del 86 la UP anuncia un texto de reforma integral que presentará al Congreso y que tiene entre otros elementos, las reformas agrarias, urbana, laboral, educativa y de comunicación y medios.

7 de agosto - Se posesiona el presidente Virgilio Barco. Anuncia modificaciones al Estado de sitio y continuación del proceso de paz. Nombra como ministro de Defensa al General Rafael Samudio Molina, quien siendo

comandante del Ejército dirigió la retoma sangrienta del Palacio de Justicia.

8 de agosto - Las FARC dirigen una carta abierta al presidente Barco, manifestando su interés por seguir en el terreno del entendimiento hacia la paz y denuncian la existencia de la guerra sucia. En la misiva dicen que “la guerra de veinte años se logró parar con los Acuerdos de La Uribe, son tres años y ocho meses sin guerra. Sólo escaramuzas, provocaciones, asesinatos, desapariciones por cuenta del militarismo y de la guerra sucia, pero en general, no hay guerra”. Proponen una nueva Comisión de Paz, Diálogo y Verificación.

13 de agosto - Una bomba de alto poder destruye la sede PCC de Bucaramanga, recién reconstruida tras otro atentado.

14 de agosto - En un diálogo sin precedentes, la Unión Patriótica se reúne con el ministro de Defensa, el general Samudio Molina, reunión a la que asiste también el ministro de Gobierno, Fernando Cepeda Ulloa. Por la UP asiste Jaime Pardo Leal, quien presenta un listado de víctimas y denuncia con nombres propios la participación de subalternos de las Fuerzas Armadas en la guerra sucia. Reitera el pedido de que la cúpula militar se vincule al proceso de paz.

15 de agosto - El Comité Pro Central Unitaria de Trabajadores convoca al Congreso Unitario para el 15 de noviembre. La CSTC, de influencia comunista, anuncia su disposición a disolverse. El general en retiro, y exministro de Defensa, Landazábal Reyes, descalifica a la UP y la denomina

“máscara tras la cual actúa el PCC”, además llama a conformar un frente anticomunista.

16 de agosto - El Partido Conservador anuncia su oposición al gobierno de Barco.

17 de agosto - Más de cien mil personas se reúnen en el 8º Festival de *Voz*, órgano del PCC y la UP. En el acto central interviene Jaime Pardo Leal, quien saluda los grandes avances de la UP. Un atentado terrorista con bomba destruye completamente la sede del PCC de Ibagué. Días antes había sido colocado un petardo en la sede de la Federación Sindical del Tolima.

21 de agosto - La UP es reconocida como partido político, gozando de las prerrogativas de ley y obtiene un escaño en el Consejo Nacional Electoral, por orden del Consejo de Estado. Barco reafirma la decisión de que la UP tenga alcaldes allí donde fue primera fuerza.

30 de agosto - Sicarios asesinan en Barrancabermeja al representante a la Cámara por la UP y dirigente comunista, Leonardo Posada.

1º de septiembre - Cae asesinado por sicarios el senador de la UP Pedro Nel Jiménez, en Villavicencio, cuando recogía a su pequeña hija del colegio. Ante los graves hechos, que causan conmoción nacional con el homicidio de dos congresistas de la UP, con intervalo de un día, Barco se reúne en Palacio con la Dirección Nacional del movimiento, encabezada por Jaime Pardo Leal, y se compromete a garantizar sus derechos. “El Gobierno tiene la inquebrantable voluntad y la decisión de otorgar a los dirigentes y activistas de la UP todas las garantías

posibles, que les permita desarrollar toda su acción política y su plena incorporación a la vida civil, en un ambiente de seguridad y democracia”, dice el Ejecutivo y asegura que se aclararán los crímenes.

2 de septiembre - El representante “Francisco Galán” denuncia ante el Congreso la existencia de la Operación Baile Rojo, que busca el exterminio de la Unión Patriótica. Gilberto Vieira, en su discurso ante la tumba de Leonardo Posada, llama a “organizar la auto-defensa para enfrentar el fascismo que está en marcha”.

En el sepelio de Posada interviene Luis Carlos Galán, director del Nuevo Liberalismo, quien pide justicia. “Todo indica que estos crímenes los han cometido las fuerzas extremistas que quieren acabar el proceso de paz emprendido por la UP, que desean destruir a la UP y que quieren frustrar los cambios políticos y económicos que proclamó el nuevo Gobierno”, señala. Ernesto Samper, por el Partido Liberal, interviene insistiendo en una salida política al conflicto.

3 de septiembre - El Directorio Nacional Conservador exige castigo para los asesinos de Posada y Jiménez y llama a un frente común contra la violencia.

4 de septiembre - En un editorial de *Voz*, Jaime Caycedo, dirigente nacional del PCC, recuerda un informe de la revista *News Week*, que reseñaba el plan del militarismo encaminado a generarle una situación de hecho al gobierno de Barco, contraria al acuerdo de tregua y diálogo con la guerrilla, con el respaldo de sectores ultrareaccionarios del Partido Liberal.

5 de septiembre - El PCC, ante la oleada de crímenes contra la UP, señala que “si bien es cierto que el partido ha mostrado su gran madurez ante los hechos, no practicamos la recomendación cristiana de ofrecer la otra mejilla; el movimiento obrero y popular, si quiere avanzar y conquistar los cambios, tiene que dar una demostración ejemplar a los asesinos y a los provocadores fascistas”.

18 de septiembre - El Secretariado de las FARC se reúne en La Uribe con el nuevo comisionado de paz, Carlos Ossa Escobar, en el primer encuentro del Gobierno para reanudar el diálogo. Las FARC denuncian decenas de operativos del Ejército contra dieciocho de sus veintisiete Frentes, muriendo decenas de guerrilleros que estaban en tregua.

24 de septiembre - La bancada de la UP en la Cámara desarrolla un debate sobre la violencia contra el movimiento. “Iván Márquez” denuncia que “mi fotografía, señor ministro de la Defensa, está en todos los batallones del Caquetá, el cartel dice: ‘estos son sus enemigos’ ¿Por qué se dispone así a la tropa, si estamos buscando una salida política?”.

25 de septiembre - Un balance de las huelgas de 1985 establece que se presentaron 856 mil huelguistas y más huelgas que en los últimos veinticuatro años y tantos huelguistas como todo el decenio 1961-1970. Hubo 161 huelgas en 1985.

26 de septiembre - Con lleno total de la Plaza de Bolívar de Bogotá, nace la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La central CSTC de influencia comunista queda disuelta,

integrándose a la nueva confederación que reúne sindicatos de la UTC, también disuelta e independiente. La CUT se convierte en la central más grande del país con cerca de un millón de afiliados. De los treinta miembros del Comité Ejecutivo de la nueva Junta Nacional, once pertenecen al PCC y a la UP, entre ellos Gustavo Osorio, Angelino Garzón y Aída Abella.

28 de septiembre - Sicarios asesinan al concejal de la UP de Fredonia, Antioquia, Darío Henao Torres.

2 de octubre - Las FARC envían una carta al expresidente Carlos Lleras Restrepo, rechazando su propuesta de crear una milicia veterana contra la guerrilla. “Los fascistas le dicen al gobierno de Barco que le plantee a las FARC que no puede existir un movimiento político con un cuerpo armado, refiriéndose a la UP. Desde hace tiempo habíamos dicho que las FARC no es la UP ni esta son las FARC”.

7 de octubre - Se posesionan varios alcaldes de la UP nombrados por los gobernadores en los municipios de El Carmen, en el departamento de Santander; San Pablo, en Bolívar; Valencia, en Córdoba; Policarpa, en Nariño; Palestina y Villavieja, en el Huila; Apartadó, Yondó, Segovia, Remedios y Mutatá, en Antioquia; Vistahermosa, San Juan de Arama, Puerto Rico, Lejanías, Mesetas, La Macarena y El Castillo, en el Meta; Arauquita, Saravena y Tame, en Arauca. En estas poblaciones la UP fue la primera fuerza en las últimas elecciones y en este sentido Barco cumplió su palabra.

12 de octubre - El Consejero para la Paz, Carlos Ossa Escobar, exige de

inmediato un “itinerario de reincorporación de las FARC a la vida civil sin más”, mientras el ministro de Gobierno, Cepeda Ulloa, está de acuerdo con las FARC en el sentido de que “la seguridad es un fenómeno vital”.

En Caracol Radio el ministro dice que “es muy difícil decirles a las FARC que se reincorporen a una sociedad donde no tienen protección. Hay en el país un ambiente de inseguridad para todos, para ellos, para nosotros. Eso hay que resolverlo de alguna manera antes de que ese proceso de desmovilización se pueda cumplir, ellos tienen la razón”.

2 de noviembre - Al cumplirse los primeros cien días del gobierno de Barco, sigue la oleada de asesinatos contra la UP y atentados en Meta, Valle y Cauca, entre ellos contra el diputado del Meta y miembro del Comité Central del PCC, Eusebio Prada, que salió mal herido.

11 de noviembre - En protesta por los atentados, la UP se retira del Congreso y pide una entrevista con Barco hasta que el Gobierno dé verdaderas garantías para el trabajo político del movimiento.

18 de noviembre - Una semana después de su retiro del Congreso, la bancada parlamentaria de la UP se entrevista con el presidente Barco con el fin de solicitar la disolución de los grupos paramilitares. “Iván Márquez” señala a la prensa que la respuesta de Barco ha sido débil, sin concretar ninguna medida.

La UP, en carta al Presidente, denuncia que los mandos castrenses dirigen a los asesinos, señalando a varios generales. Solicitan depurar las

Fuerzas Armadas así como el levantamiento del Estado de sitio.

22 de noviembre - El Ejército perpetra una masacre en la Vereda Alto Cubarral, Medellín del Ariari, Meta, asesinando a seis campesinos, según *Voz*. Los campesinos realizan una gigantesca movilización hacia Medellín del Ariari. El general Rafael Samudio, ministro de Defensa, declara a la prensa que “nadie de las Fuerzas Armadas integra grupos paramilitares”.

25 de noviembre - La UP se reintegra a sus labores del Congreso y lee un documento denunciando la guerra sucia.

28 de noviembre - Tiene lugar en Bogotá el Banquete Nacional por la Paz, con participación de todas las fuerzas políticas y sociales y en solidaridad con la UP.

4 de diciembre - *Voz* denuncia la Operación Cóndor contra la UP, con crímenes a dirigentes y atentados dinamiteros a las sedes del movimiento.

8 de diciembre - Atentan contra la vida del vicepresidente nacional de la UP, Carlos Efrén Agudelo, saliendo él ileso pero no su escolta, que resulta herido tras los disparos.

11 de diciembre - Es sepultado en Medellín el líder obrero de Puerto Nare, y dirigente comunista, Julio César Uribe. Las fábricas de cementos Nare, El Cairo de Santa Bárbara, Yumbo y COLCARBUROS realizan un paro de cuarenta y ocho horas como protesta.

14 de diciembre - Es asesinado en San José del Guaviare el representante a la Cámara por la UP y miembro del Comité Central del PCC, Octavio Vargas, puntal comunista en los Llanos Orientales. Dos días antes en la instalación

del Comité Regional de Rehabilitación con la presencia del comisionado nacional de paz, Carlos Ossa, Vargas había dicho: “Detengan la mano de los asesinos porque aquí se ha convertido en un delito hablar de paz”.

17 de diciembre - Es asesinado en Bogotá el director de *El Espectador*, Guillermo Cano. La UP condena el crimen y Jaime Pardo Leal presenta personalmente sus condolencias a la familia del periodista. Al día siguiente todos los medios, como protesta, realizan un paro de silencio por doce horas.

28 de diciembre - Más de veinticinco mil campesinos llegan a San José del Guaviare exigiendo soluciones para garantizar el derecho a la vida y a los bienes. La marcha, que dura diez días, es liderada por la UP. En el camino treinta y cinco mujeres dan a luz.

1987

2 de enero - Se conocen las estadísticas oficiales de 1986 según las cuales habrían muerto 534 campesinos, 560 guerrilleros y 569 militares, así como habría un saldo de 1.227 heridos en la lucha anti-guerrillera. Según esa información, las víctimas de la UP en 1986 ascienden a 342. De los 560 guerrilleros muertos 151 son de las FARC en tregua. Llama la atención de esos datos oficiales que acciones de las guerrillas del ELN, M-19 y EPL suman 230 y solamente se registra una de las FARC, lo que indica que estas sí estaban cumpliendo con la tregua. ¿Cómo se explica que habiendo 151 caídos de las FARC, haya ese número de muertos tan alto de la UP cuando sólo aparecen tres emboscadas

de las FARC? Esto demuestra que no son las FARC las que emboscan al Ejército sino al revés, afirma *Voz*. Y revelan las estadísticas que son cincuenta y seis los enfrentamientos del Ejército con las FARC y por eso mismo aparecen con un mayor número de bajas. El Ejército pues, está rompiendo la tregua.

7 de enero - Es asesinado el consejero intendencial de Arauca, Enrique Vera, dirigente de la UP.

9 a 11 de enero - El Pleno del Comité Central del PCC señala que “contra el plan terrorista y militarista de asesinatos tenemos que plantear la legítima defensa popular y desarrollar la autodefensa de masas como una amplísima acción de vigilancia y beligerancia colectivas basadas en la amplia unidad popular contra el militarismo”.

31 de enero - Se reúne el Secretariado de las FARC con el comisionado Carlos Ossa. Las FARC señalan que “si la opinión no se alza en defensa de la paz de pronto los enemigos jurados de la reconciliación logran recomenzar la guerra que paramos y que en forma de tregua ya lleva cuatro años de existencia. Si hay acciones es porque actuamos en defensa propia”.

31 de enero - Más de mil campesinos del Magdalena Medio se refugian en Barrancabermeja ante las acciones militares en la región contra las FARC y la UP.

12 de febrero - Centenares de miles de trabajadores se movilizan en la jornada nacional de la CUT por el derecho a la vida y contra la carestía. En Bogotá se llena la Plaza de Bolívar.

Más de treinta mil campesinos, en varias regiones del país, se toman localidades de Arauca, Urabá, Meta,

Córdoba, Cundinamarca y Bolívar exigiendo entrega de tierras.

15 de febrero - En una celada del F2 de la Policía, es asesinado Ernesto Rojas, (Jairo de Jesús Calvo) Comandante del EPL y dirigente del PCC-ML, hermano de Óscar William Calvo, quien se había reunido recientemente con el comisionado de paz Carlos Ossa. El EPL estaba dando señales para llegar a un acuerdo con la izquierda con miras a frenar la ofensiva antipopular.

18 de febrero - El expresidente Lleras Restrepo afirma "que la ambigua tregua no puede prolongarse indefinidamente y hay que fijar plazo para la desmovilización de las FARC". El expresidente López Michelsen, por su parte, pide duplicar los efectivos militares y los equipos de guerra. En contraste, el PCC y UP llaman a mantener la tregua como eje vital de la paz.

20 de febrero - Las FARC piden a Barco un Gobierno de alta coalición, nacionalista y patriótico, donde estén todos los partidos, incluida la UP.

20, 21, 22 de febrero - Se reúne el V Pleno Nacional de la UP. Pardo Leal dice que la UP no es apéndice de nadie y que no se inmiscuye en las decisiones de las FARC, y las suyas, las toma soberanamente a través de la Coordinadora Nacional. "La tregua es un problema entre el Gobierno y las FARC porque no se firmó con la UP. Las FARC son un movimiento político militar y la UP es una organización de carácter político reconocida por el Consejo Nacional Electoral y es legal, si quieren ilegalizarnos tendrán que dar un golpe de Estado", señala el Pleno.

20 de febrero - Siguen las marchas campesinas en todo el país por la tierra y la vida. Grandes concentraciones de labriegos se dan en Cundinamarca, Córdoba, Sucre, Arauca, Bolívar, Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

1° de marzo - La UP se reúne con Betancur y Pastrana y reafirma su propósito de paz.

3 de marzo - Sigue oleada de violencia contra la UP. Son asesinados siete dirigentes, entre ellos dos concejales, un consejero intendencial y varios líderes en Meta, Antioquia y Magdalena Medio. La situación es tan grave que el propio presidente de la Dirección Liberal Nacional dice que "la alternativa ya no es paz o guerra, sino guerra civil o negociación política". Estalla una bomba en el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Chaparral, Tolima.

5 de marzo - La Corte Suprema de Justicia, en un histórico fallo, declara inconstitucional el juzgamiento de civiles por militares en todo tiempo. Los militares responden que se les ha tendido la mano a los narcotraficantes.

5 de marzo - La UP se reúne con la Dirección Liberal Nacional (DLN), y de allí sale una declaración conjunta donde condenan el proselitismo armado venga de donde venga y las intimidaciones que afecten el libre ejercicio del derecho a elegir y llaman a constituir un Comité de Garantías Electorales para que se recobre el derecho a la vida como máxima garantía de supervivencia social.

17 de marzo - Todos los concejales de la UP de los municipios del Meta, así como los tesoreros municipales, los diputados y un representante a la

Cámara, ocupan la Gobernación del Meta, en una acción audaz para reclamar del Gobierno medidas urgentes ante el baño de sangre.

18 de marzo - La UP se reúne con el presidente Barco para denunciarle un nuevo capítulo del Plan Cóndor, dirigido contra la UP, y le exige garantías. Le entregan un memorial de cinco páginas donde piden fin del Estado de sitio, depuración de las Fuerzas Armadas, el retiro del comandante de la VII Brigada en el Meta, un plebiscito para definir las reformas que consoliden la paz, una nueva amnistía y reapertura del diálogo con todos los grupos guerrilleros.

30 de marzo - Jaime Pardo Leal, presidente de la UP, se reúne con el expresidente Carlos Lleras Restrepo. El presidente de la UP le dice a la prensa que se dialogó en torno a la grave situación del país y Lleras se mostró adverso a la represión.

31 de marzo - Jaime Pardo Leal se reúne con López Michelsen.

1° de abril - Barco, en unas declaraciones a la revista inglesa *South*, afirma que “la UP es el partido de las guerrillas”. La UP rechaza esta afirmación que “justifica implícitamente las acciones del Ejército y los grupos paramilitares contra el movimiento y va en contravía del comisionado de paz Carlos Ossa Escobar, quien reconoció a la UP como un partido político sin nexos orgánicos con el movimiento armado”.

2 de abril - Se conocen dos atentados, uno en El Bagre y otro en Puerto Nare, Antioquia, con la muerte de tres dirigentes de la UP. En Suaza, Huila,

militares atacan una manifestación pacífica de la UP.

La Asamblea de Juntas Directivas Sindicales de FEDETA, Antioquia, aprueba irse a un paro que involucraría a veinte mil afiliados en protesta por el asesinato de dirigentes sindicales y de la UP.

5 de abril - Victoria sindical de los bananeros de Urabá, zona de influencia de la UP, con los sindicatos SINTAGRO y Sintrabanano, integrados por más de doce mil obreros en medio de la oleada de violencia.

13 de abril - En un acto en la Casa de Nariño, el presidente Barco entrega la personería jurídica a la CUT que agrupa a novecientos mil trabajadores.

16 de abril - Después de regresar de unos diálogos con los Frentes 14 y 15 de las FARC, en el Caquetá, el Consejero Presidencial Carlos Ossa Escobar afirma que la UP es totalmente legal. “Nosotros separamos claramente lo que son las FARC y lo que es la UP. Las FARC son un movimiento armado en tregua y la UP es un movimiento político legalmente reconocido”.

Aparecen doce militantes de la UP asesinados en Magdalena, Cundinamarca, Cesar y Cauca.

22 de abril - Lanzas una granada contra dos dirigentes de la UP en Barrancabermeja, hiriendo gravemente al concejal César Martínez y a Miguel Castañeda. Hay decenas de heridos, entre ellos varios niños. En protesta, la ciudad participa masivamente en un paro cívico.

24 de abril - Se instala el V Foro de Derechos Humanos por el Derecho a la Vida y a la Democracia con amplia participación de todos los sectores del

país. El Foro llama a mantener el proceso de tregua y cese al fuego.

8 de mayo - La UP, encabezada por Pardo Leal, realiza una rueda de prensa donde acusa directamente a miembros de las Fuerzas Armadas como responsables del exterminio de la UP. Son sindicados un general en servicio activo, tres coroneles, uno de ellos en retiro, un capitán y dos mayores del Ejército. Pardo denuncia que hay planes para asesinarlo a él y al parlamentario Vieira, donde están implicados el coronel Álvaro Hernán Velandia y el general César Barrios.

El ministro de Defensa, general Samudio Molina reconoce la vinculación de varios miembros de las Fuerzas Armadas en asesinatos de dirigentes de izquierda, pero dice que son hechos aislados que no comprometen a la institución.

5 de mayo - Es asesinado el alcalde de San José del Guaviare, José Miguel Rojas, dirigente de la UP.

19 de mayo - Más de quince mil campesinos en Remedios, Antioquia, reclaman que sea desmilitarizada la región.

21 de mayo - La Procuraduría General acepta la recusación de la UP contra el delegado para las Fuerzas Militares, general Antonio José González Prado, quien renuncia inmediatamente por las acusaciones de estar implicado en los crímenes.

25 de mayo - Ola de paros cívicos sacuden a Chocó, Nariño y Nororiente, por el derecho a la vida.

7 de Junio - El paro cívico del Nororiente, de cuatro días, organizado por la Coordinadora Obrera Campesina Popular, con el apoyo de la UP, A Luchar,

Frente Popular y Democracia Popular, cobija a Santander, Norte de Santander, oriente Antioqueño, sur de Bolívar, norte de Boyacá, centro y sur del Cesar y Arauca e involucra a más de cincuenta mil campesinos.

22 de junio - Estallan bombas en las sedes del PCC en Kennedy y nuevamente en las oficinas del Comité Central en Bogotá.

26 de junio - Las FARC le envían una carta al presidente Barco, donde le dicen que los Acuerdos de La Uribe son compromisos entre partes en conflicto para parar la guerra. "La figura presidencial de ruptura de la tregua, que se extiende en donde quiera que la Fuerza Pública sea atacada, no es más que el comienzo de la ruptura de la tregua en todo el país, pues los militares incrementarán los operativos ofensivos contra los Frentes de las FARC". Llamam a conversar cuanto antes.

27 de junio - Paramilitares atacan la sede del Comité Regional del PCC de Bogotá y sacan a tiros a los funcionarios.

16 de junio - Los Frentes 14 y 15 de las FARC golpean a los militares con varias bajas y el presidente Barco señala que "en cualquier parte donde el Ejército sea atacado, queda rota la tregua". Las FARC responden que sólo se defienden de los ataques y plantean que quieren el diálogo. Barco a su vez responde con un sí al diálogo, pero si se desmovilizan y desarmen.

4 de julio - El PCC señala que las declaraciones de Barco implican un cambio en las condiciones del proceso de paz y de los Acuerdos de La Uribe y puede conducir de hecho a un desenlace

negativo de la etapa de los pactos de paz.

16 de julio - Eduardo Mestre, presidente de la Dirección Liberal Nacional, en una entrevista para *Voz* afirma que las FARC son una cosa y la UP otra y que como partido político debe seguir actuando como tal.

Cerca a Bucaramanga agentes de la Policía asesinan a tres sindicalistas de Sindigas y miembros de la UP, dice *Voz*, entre ellos el coordinador del movimiento, Bernardino García.

18 de julio - El IX Festival de *Voz* reúne a más de cien mil personas en Bogotá en su fiesta de dos días y Pardo Leal, en su saludo al semanario, llama a apoyar masivamente a la UP.

20 de julio - En Bogotá una poderosa bomba detonada por agentes policiales destruye la sede nacional de la Juventud Comunista. Hay una persona herida.

23 de julio - Los medios informan la existencia de grupos paramilitares con imágenes televisivas. El ministro de Defensa, Samudio Molina, los justifica en medio de alabanzas y aceptando que se les provee de armas, ante lo cual la UP le exige su renuncia.

5 de agosto - En un histórico encuentro, la Iglesia Católica se reúne con la dirección de la UP. Asisten el cardenal Alfonso López Trujillo y Jaime Pardo Leal. La UP dice que la Iglesia puede acelerar el diálogo y contribuir a detener la guerra sucia.

6 de agosto - Entre julio y agosto han sido asesinados por sicarios, tres profesores y diez estudiantes de la Universidad de Antioquia.

14 de agosto - Una comisión de la UP y el PCC se reúne con el presidente Barco

para protestar por el asesinato, en su propia casa en Medellín, del senador de estas dos organizaciones, Pedro Luis Valencia. También protesta por el homicidio de Rafael Antonio Duarte, presidente comisarial del Guaviare y líder de la UP. Las respuestas de Barco son insignificantes y vagas, dice la UP. A este crimen se suma el del alcalde de Sabana de Torres, Álvaro Garcés Parra y de su escolta, Carlos Gamboa.

19 de agosto - La CUT realiza una jornada nacional por el derecho a la vida, con movilizaciones en todo el país y un paro de actividades de una hora. Denuncia que en los nueve meses que lleva la central de vida, han caído cuarenta y dos sindicalistas.

22 al 25 de agosto - Son asesinados varios dirigentes del Partido Comunista y la UP, como Fidel Antonio Ardila, en San Martín, Meta; Demetrio Aldana, concejal de la UP en Planadas, Tolima; el dirigente sindical Luis Felipe Vélez, presidente de la CUT Antioquia, en Medellín y el presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) de Antioquia, Héctor Abad Gómez.

26 de agosto - La Dirección Nacional de la UP se reúne con el expresidente Pastrana y coinciden en favorecer los Acuerdos de Paz. "Hay que hacer cualquier cosa para revivir los acuerdos con las FARC", anota Pastrana.

2 de septiembre - En rueda de prensa, Jaime Pardo Leal revela que se ha creado un grupo de sicarios adiestrado por los mandos militares y sostiene que está en marcha un operativo para asesinarlo.

3 de septiembre - El PCC señala que está “en un viraje hacia el fascismo por la muerte de los dirigentes del PCC y de la UP sin que el Estado haga nada; es un viraje político preventivo, de un ajuste de cuentas con el movimiento popular que actúa en un proceso legal cuando se deteriora seriamente la tregua, pero sobre todo cuando el movimiento popular está adquiriendo una nueva calificación, en una activación y acumulación de fuerzas”.

5 de septiembre - Paro general de los bananeros de Urabá por el asesinato de tres dirigentes de SINTAGRO y SINTRABANANO.

13 de septiembre - En Popayán una bomba estalla en la sede del PCC.

17 de septiembre - Por amenazas contra su vida tienen que dejar el país Vicky Hernández y otros actores del Teatro La Candelaria.

25 de septiembre - En Bucaramanga es asesinado Manuel José Motta Motta, exalcalde de esa ciudad y hermano del representante a la Cámara por la UP, Hernán Motta Motta.

1° de octubre - Una comisión del PCC integrada por Vieira, Vásquez y Cepeda, se reúne con el cardenal Alfonso López Trujillo para analizar la propuesta de la Iglesia de servir de intermediaria con la guerrilla para salvar el proceso de paz, iniciativa que aprueban las FARC.

El Gobierno reconoce la existencia de 148 grupos de paramilitares, dice el ministro de Gobierno, César Gaviria, en un debate en el Congreso.

5 de octubre - El PCC llama al diálogo sin condiciones a raíz de la declaración conjunta de los grupos insurgentes y

que da nacimiento a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).

11 de octubre - Jaime Pardo Leal, presidente de la UP y candidato presidencial, es asesinado por sicarios cuando regresa de su finca de La Mesa, cerca de Bogotá. Las centrales convocan un paro cívico nacional y cunde la protesta general. Las exequias, realizadas el 13 de octubre en Bogotá, paralizan a toda la ciudad y más de trescientas mil personas acuden a la cámara ardiente en plena Plaza de Bolívar durante los días que permanecieron los restos del líder popular. Días previos a su asesinato, varias encuestas daban cuenta de que Pardo gozaba de un 30% de favorabilidad en el país, después de haber obtenido el 4,5% de la votación para Presidente, un año antes.

13 de octubre - Bernardo Jaramillo, a sus treinta y tres años, es nombrado por unanimidad como nuevo presidente de la UP.

15 de octubre - En Bogotá, una poderosa bomba incrustada en las cañerías de la sede del ministerio de Defensa causa graves destrozos. El atentado se le atribuye a las FARC.

La UP se dirige al presidente Barco y lo hace responsable político por la grave situación del país y le exige la disolución inmediata de los grupos paramilitares, el establecimiento del diálogo con la CGSN y el levantamiento del Estado de sitio.

22 de octubre - La UP llama al diálogo a las Fuerzas Armadas para buscar caminos de paz.

23 al 24 de octubre - Se reúne el Comité Central del PCC con asistencia de Bernardo Jaramillo. La declaración

política señala que el asesinato de Jaime Pardo Leal es un duro golpe a las fuerzas democráticas y que ha recobrado nuevo aliento el plan exterminio, que “no es otra cosa que una contrarrevolución preventiva”.

25 de octubre - El VI Pleno de la UP se reúne en Bogotá y ratifica a Bernardo Jaramillo como presidente. Ingresa el Frente Amplio del Magdalena Medio. La UP saluda al Movimiento de Unidad Conservadora de Antioquia por convertirse en nuevo aliado.

26 de octubre - El VI Pleno de la UP decide enviarle una carta abierta a las Fuerzas Armadas donde dice: “Ante todo la UP no es enemiga de las Fuerzas Armadas ni como institución ni como un grupo de personas, y distingue entre el militarismo y aquellos a que representan los militares que no están comprometidas con la ola de violencia”.

El ministro de Justicia, Low Murtra, reconoce que sólo hay diez detenidos sindicados por crímenes contra UP en los casos de Pedro Nel Jiménez y José Miguel Rojas Parrado, alcalde de San José del Guaviare. Nadie responde por los 498 miembros de la UP asesinados desde su fundación en marzo de 1985.

28 de octubre - En el documento de Carlos Ossa entregado a las FARC sobre el proceso de paz, se sostiene que “el Gobierno entiende las dificultades para mantener un cese al fuego y que los asesinatos a la UP son el principal obstáculo para conseguir la reincorporación de los alzados en armas a la vida civil”, y añade que “el Gobierno no ha puesto la desmovilización como prerequisite del diálogo”.



En el piso es dejado el féretro de una de las cuarenta y tres personas asesinadas en la masacre de Segovia, el 11 de noviembre de 1988, tras una alarma de que habían retornado los paramilitares al pueblo. (Foto: Manuel Cepeda, Voz)

Las FARC anotan que no podrá haber avances reales hacia la paz mientras el Gobierno mantenga intacto el grupo sicarial y su protección por mandos militares. Contrasta esta nueva atmósfera con el asesinato del

diputado de la UP por el Cáqueta, Gerardo Cuéllar Cuéllar y los concejales del movimiento en el Meta, Alfonso Perdomo Orjuela y Arnulfo Vargas.

2 de noviembre - En Medellín del Ariari, Meta, sicarios provenientes de Cubarral, zona de gran influencia de la UP, armados de pistolas, ametralladoras y granadas, disparan contra un grupo de dirigentes de la UP que había viajado al sepelio de Alfonso Perdomo Orjuela. Allí matan a Arnulfo Vargas, presidente del Concejo de El Castillo, Meta, hermano del senador de la República por la UP, Óscar Vargas Cuéllar. El atentado deja cinco heridos graves.

En Cubarral aparecen muertos seis campesinos que presentan signos de torturas. Todos estaban amordazados. En las mismas circunstancias fueron hallados otros cuatro campesinos en Castilla La Nueva, Meta.

9 de noviembre - La UP, encabezada por Bernardo Jaramillo, se reúne durante cuatro horas con el presidente Barco. Este lee un documento y plantea que continuará el Estado de sitio. Respaldado a Samudio Molina como ministro de Defensa. “Con esta posición obstinada, el Gobierno cierra la posibilidad de alcanzar la paz en un plazo más breve”, afirma Bernardo Jaramillo.

24 de noviembre - Son asesinados ocho jóvenes comunistas en la sede de la JUCO de Medellín, tras un asalto de un escuadrón paramilitar.

29 de noviembre - La UP y otros sectores proclaman a Clara López como candidata a la Alcaldía de Bogotá, en una nutrida manifestación en la Plaza de Bolívar.

16 de diciembre - En Medellín asesinan al profesor Luis Fernando Vélez, destacado miembro del movimiento de los derechos humanos.

17 de diciembre - En Medellín es herido gravemente el dirigente de la UP Gabriel Jaime Santamaría y diputado a la Asamblea Departamental de Antioquia, así como su chofer.

18 de diciembre - Masacre de campesinos en Tierra Alta, Córdoba, con un saldo de una docena de muertos. En Turbo, Antioquia, zona de influencia de la UP, asesinan a cinco personas.

27 de diciembre - Éxodo de siete mil campesinos que huyen de la región de La Macarena, Meta, tras el despliegue militar en los municipios de La Macarena, Puerto Rico, Puerto Concordia y San José del Guaviare, ordenado por el coronel Cuéllar de la VII Brigada, quien anuncia que los operativos van a durar hasta después de marzo. Ello con el fin de impedir el triunfo de la UP en la región, afirma *Voz*.

29 de diciembre - Dejan en libertad al capo del cartel de Medellín, Luis Ochoa, lo que causa gran revuelo en el país.

1988

4 de enero - “Jacobo Arenas” anuncia que las FARC decretarán una tregua unilateral veinticinco días antes del 13 de marzo de 1988, día de elecciones, y condenan la voladura de la fábrica de cementos Rioclaro, en Antioquia. La guerrilla niega el asesinato del parlamentario Pablo Guarín, jefe liberal de Puerto Boyacá caracterizado por sus convicciones anticomunistas. Unos

días antes el comandante de las FARC, “Raúl Reyes”, en una entrevista para un noticiero de televisión, había reconocido la autoría del crimen por parte de esa guerrilla.

5 de enero - La UP del Caquetá denuncia que el gobernador solicitó suspender las elecciones en los municipios donde esa agrupación es mayoría.

9 de enero - Es asesinado en Puerto Rico, Caquetá, el diputado de la UP Arcesio Varela.

15 de enero - Es asesinado en Barranquermeja el dirigente de la USO, Manuel Gustavo Chacón, lo que desata un paro cívico en la ciudad. En Apartadó asesinan a Argemiro Correa, líder sindical de SINTAGRO y dirigente del PCC y la UP, lo que también desata un paro bananero.

19 de enero - El paro nacional estatal se cumple en un 80%. Hay grandes movilizaciones en Urabá, Barranquermeja y Saravena, lo que muestra un ascenso en la lucha reivindicativa hacia la jornada del 27 de enero convocada por la CUT en defensa de los salarios y por la vida.

El cartel de Medellín secuestra a Andrés Pastrana, candidato conservador a la Alcaldía de Bogotá. La UP condena la acción de la mafia.

Enrique Gómez Hurtado, en carta al presidente Barco, lo insta a un golpe de Estado civil contra el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, ante la crisis que vive el país.

Mil trabajadores cementeros de Nare y COLCARBUROS, en el Magdalena Medio, realizan un paro de veinticuatro horas en protesta por el secuestro de dos sindicalistas.

24 de enero - El alcalde de San José del Guaviare, José Yesid Reyes, dirigente conservador pero aliado de la UP, es acribillado por sicarios. Había reemplazado a José Miguel Rojas Parrado, de la UP y también asesinado por los paramilitares.

25 de enero - Es asesinado el Procurador Carlos Mauro Hoyos, caracterizado defensor de derechos humanos, quien a petición de Jaime Pardo Leal había nombrado, semanas antes, a un jurista independiente para la Procuraduría de las Fuerzas Armadas. La UP y el PCC condenan el asesinato.

El presidente Barco, en su rechazo al crimen del Procurador, hace un paralelo (declarado inaceptable por la UP) entre narcotráfico y subversión. El Gobierno prohíbe las marchas de la CUT para el día 27, mientras el tema de la Constituyente vuelve a agitarse.

El M-19 declara una tregua de seis meses y reclama cambios inmediatos para que cese la confrontación. La UP sostiene conversaciones con diversas fuerzas políticas y con Rafael Pardo, comisionado para la rehabilitación.

26 de enero - Asesinan en Convención, a Alirio Alfonso Vera, presidente de la UP del Norte de Santander, junto con su esposa.

28 de enero - Una declaración del PCC señala que “la experiencia de los tres últimos años, a partir de los Acuerdos de La Uribe, ha comprobado que la oligarquía, hasta ahora, da muestras de una visceral incapacidad para comprender la realidad y ponerse a tono con los cambios que esta exige”.

Aparecen los cuerpos de los dos trabajadores cementeros de Nare que

habían desaparecido el 19 de enero, flotando en las aguas del Magdalena.

8 de febrero - Virgilio Barco recibe al presidente de la UP, Bernardo Jaramillo. Le sugiere que aproveche la actual coyuntura política para “tomar definiciones audaces y profundas” y entrega un memorando donde la UP respalda la convocatoria de un plebiscito, lanzada por el presidente, para reformar la Constitución.

19 de febrero - La UP protesta por el acuerdo entre Barco y Pastrana de suspender el plebiscito pro Asamblea Nacional Constituyente, aunque queda incluida en el llamado Comité de Reformas Institucionales.

Paramilitares atacan a tiros la sede de la UP en Necoclí, Antioquia. En Medellín asesinan a Carlos Gónima López, personero auxiliar de la ciudad y dirigente de la UP, así como al concejal de la UP del Meta, Conrado Nicolás Saldarriaga. Sicarios disparan contra la sede de la UP de Vistahermosa, Meta, y contra el despacho del alcalde, militante de la UP.

21 de febrero - Un grupo de sicarios compuesto por veintiocho hombres masacran a catorce personas, todas simpatizantes de la UP, en el Caserío de Piñalito, Vistahermosa, al sur del Meta. Entre las víctimas hay una mujer con siete meses de embarazo y un niño de seis años.

23 de febrero - La UP se retira del Tribunal de Garantías Electorales tras la masacre de Piñalito y en protesta porque en los cincuenta y tres días que van de este año han sido asesinados cincuenta militantes de la UP entre ellos doce

candidatos a alcaldías y otros doce a corporaciones públicas.

1° al 12 de marzo - La UP realiza grandes manifestaciones en todo el país en su campaña electoral.

4 de marzo - Paramilitares atacan a simpatizantes en dos fincas y un barrio de Apartadó. Diecisiete trabajadores bananeros pierden la vida en la finca Honduras, y trece en la finca La Negra, corregimiento de Currulao, municipio de Chigorodó, por un grupo de ochenta paramilitares. Todos eran simpatizantes de la UP y pertenecían a SINTAGRO. El saldo es de treinta y seis víctimas con los seis muertos del barrio Alfonso López, de Apartadó.

13 de marzo - La presencia de la UP y sus aliados en las elecciones demuestra su pujanza a pesar de la guerra sucia, obteniendo 364 concejales de coalición en 336 municipios, treinta y ocho propios, en los 1.050, y elige dieciocho alcaldes propios y noventa y siete de coalición en ciento quince municipios, así como dieciocho diputados propios en diecisiete departamentos. En 1986 había obtenido diez diputados propios.

Es asesinado en Montería el dirigente de la UP Alfonso Cujavante, recién electo como concejal.

La prensa habla de un bajonazo de la Unión Patriótica en las elecciones, sin tener en cuenta que resolvió no presentar candidatos propios en varias alcaldías ante el plan de exterminio. *El Tiempo* dice que los votos de la UP son desilusionantes, sin tocar la arremetida violenta contra el movimiento. Sólo le atribuyen a la UP 46.455 votos, sin embargo, únicamente en Bogotá y

Cundinamarca se obtuvieron más de sesenta mil votos. Carlos Romero es electo concejal en Bogotá con cuarenta mil votos.

30 de marzo - Tiene lugar la II Cumbre Guerrillera con presencia de las FARC, el EPL, M-19, Quintín Lame, ELN y PRT.

2 al 3 de abril - Se reúne el Pleno del Comité Central del PCC, que hace un balance electoral de los resultados de la UP con 364 concejales, dieciocho diputados, once concejeros intendentales y comisariales y la contribución a la elección de ciento veintinueve alcaldías democráticas de coalición y dieciocho propias de la UP, con lo que se demuestra que la guerra sucia no logró reducir la alternativa de lucha por la apertura democrática. Convoca al XV Congreso del PCC para el 9 de diciembre de 1988.

3 de abril - Paramilitares masacran a veintiocho campesinos en La Mejor Esquina, corregimiento de Buenavista, Córdoba, durante una fiesta de fandango.

7 de abril - Los días 8, 9 y 10 se reúne el Congreso Nacional de Convergencia Democrática. Proponen un paro nacional por el derecho a la vida.

10 de abril - Horacio Serpa Uribe es nombrado nuevo Procurador de la Nación.

11 de abril - Paramilitares detienen a veinticinco campesinos, entre ellos dos niños, en el corregimiento de Nueva Colombia, municipio de Turbo, a quienes amarran con alambres en la playa. Así permanecen por más de diez horas sin que las autoridades locales se den por enteradas. Luego son fusilados y arrojados al mar, pero

poco a poco este los devuelve a las orillas. Los muertos pertenecían a SINTAGRO y a SINDEJORNALEROS, sindicatos de influencia del Frente Popular, aliado de la UP.

13 de abril - En Bogotá se realiza el Tercer Pleno Distrital ampliado de la UP, con asistencia de alcaldes, concejales, diputados y voceros elegidos en coalición.

16 de abril - Sesiona el Pleno Nacional ampliado de la UP.

20 de abril - Amnistía Internacional, en su informe sobre Colombia año 1987, calcula en más de mil los crímenes políticos, así como centenares de casos de desapariciones, torturas y hostilidades a los dirigentes demócratas y sindicales. Señala a los militares como directos responsables de esta ola de crímenes. Es suprimida la ley que autoriza la creación de grupos de autodefensa, medidas que aprueba la Corte Suprema de Justicia.

21 de abril - Bernardo Jaramillo señala en un editorial de *Voz* que “desde el momento en que se cometieron los primeros crímenes contra dirigentes y activistas de la UP, manifestamos que la guerra sucia no va dirigida solamente contra los comunistas y sus aliados de la UP, sino que estábamos frente a un plan de exterminio destinado a liquidar el movimiento popular y democrático. Los hechos desafortunadamente, nos han dado la razón”.

22 de abril - A altas horas de la noche es asesinado, en su propia casa de habitación en Medellín, Hernando Gutiérrez, secretario general del Comité Regional del PCC de Antioquia y miembro del Comité Central, por

sicarios, uno de ellos muerto por la propia víctima. El PCC, ante el crimen, llama a organizar la resistencia popular y a responder a sicarios, paramilitares e instigadores, en la forma que sea necesaria.

2 de mayo - La revista *Semana*, con datos del DAS, publica un revelador informe que compromete al Batallón Voltígeros y a Manuel San Miguel, comandante de la X Brigada, en la masacre de Honduras y La Negra, que dejó más de treinta muertos.

Un enorme operativo militar de la VII Brigada se desarrolla contra los campesinos y colonos del Guayabero y La Macarena que apunta hacia La Uribe, con el fin de erradicar a los campesinos y simpatizantes de la UP. “Lo primero que hicieron los del Ejército cuando entraron a todos los caseríos sobre el río Guayabero, fue borrar los murales que habíamos pintado referentes a la UP”, anota un labriego. Éxodo de campesinos. Tropas del XI Vargas y el Batallón Serviez llegan con listas en mano y fotografías de los líderes comunales y políticos, de la región dándoles un plazo de setenta y dos horas para que abandonen el lugar.

16 de mayo - Asesinan al alcalde electo de Remedios, Antioquia, Elkin de Jesús Martínez, militante de la UP. El ministro de Gobierno, César Gaviria, dice que es un hecho aislado. Para esa fecha ya suman quinientos asesinatos de militantes de la UP desde su fundación en marzo de 1985.

17 de mayo - Paros cívicos en las ciudades de Remedios y Segovia por el asesinato del alcalde de la primera, Elkin Martínez.

19 de mayo - Revuelo nacional causan las revelaciones del *Semanario Voz*, que presenta un informe con pruebas de las conexiones de Rodríguez Gacha, “El Mexicano”, con varias dependencias militares a través de números telefónicos que se presentan y que corresponden a militares de alta graduación de la XVIII Brigada. Rodríguez Gacha aparece implicado en el asesinato de Jaime Pardo Leal. El general Samudio Molina rechaza el informe, aunque tiene que reconocer que muchos de esos teléfonos corresponden a mandos medios y bajos del Ejército.

23 de mayo - Multitudinarias marchas campesinas por la tierra y la vida recorren la Costa Atlántica, Magdalena Medio y el Nororiente.

24 de mayo - Es herido gravemente de cinco tiros, el secretario del Comité Regional del PCC de Antioquia.

27 de mayo - Son asesinados cuatro dirigentes de la UP del Meta mientras cenaban en un restaurante en Villavicencio, entre ellos, el diputado a la Asamblea del Meta Carlos Kovacs y la expersonera de Vistahermosa.

29 de mayo - El M-19 secuestra a Álvaro Gómez Hurtado. La marcha campesina que iba a San Vicente de Chucurí, Santander, choca con unidades del Batallón D’lhuyer, quedando muertos un teniente coronel, un capitán y varios soldados. Las tropas reaccionan matando a nueve campesinos y veintitrés quedan gravemente heridos. En Urabá hay choques entre el Ejército, las FARC y el EPL, con numerosos muertos de ambas partes.

30 de mayo - El PCC y la UP condenan el secuestro de Gómez Hurtado y dicen

que “sólo contribuye al fortalecimiento de los círculos enemigos de la democracia”. Condenan la masacre de Villaviciencio y llaman a concertar un amplio acuerdo de todas las fuerzas democráticas para poner fin a la guerra sucia.

7 de junio - *Voz* denuncia que la VII Brigada organizó el MAS en Saravena y Arauca.

28 de junio - La UP se reúne con la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Las partes afirman su rechazo a todo tipo de violencia y condenan la guerra sucia. La SAC, como una muestra de confianza y voluntad para conversaciones futuras, plantea la necesidad de “relegitimar el Ejército”.

29 de junio - Se reúnen los partidos con asiento en el Congreso, incluida la UP y las cuatro centrales sindicales. Plantean la necesidad del diálogo con los alzados en armas, como requisito para lograr la paz. Bernardo Jaramillo afirma que para que haya credibilidad en el diálogo debe haber un cese al fuego unilateral de la guerrilla y un alto a la guerra sucia que se desarrolla desde algunos organismos del Estado. Luis Carlos Galán declara que no descarta el diálogo con los alzados en armas. “Son mejores las fórmulas políticas que las otras para lograr la paz”.

5 de julio - El Procurador Serpa, en una carta a los ministros de Justicia, Gobierno y Defensa, denuncia que “por la libertad con que operan los grupos paramilitares tiene que contar con la protección y/o aquiescencia de influyentes sectores ciudadanos y aún de algunas instancias de la autoridad”.

6 de julio - La UP dirige una carta a los partidos liberal y conservador y al Nuevo

Liberalismo, planteando un diálogo con la guerrilla sin condiciones, lo que es respondido afirmativamente.

12 de julio - Se reúnen los partidos políticos, con asiento en el Congreso, con los cardenales Mario Rebollo y Alfonso Trujillo. Por la UP asisten Bernardo Jaramillo y José Antequera. Se acuerda organizar un prediálogo nacional que logre una cumbre que sirva para iniciar un operativo de liberación de Gómez Hurtado.

20 de julio - Álvaro Gómez Hurtado es liberado por el M-19 y declara en rueda de prensa: “pienso en el diálogo con los alzados en armas, representen o no a la sociedad: hay un ambiente de guerra y por eso se justifica el diálogo”. Unos días atrás, el ministro de Defensa Samudio Molina, había dicho que no había ambiente de diálogo sino de guerra.

22 de julio - Las FARC declaran que es necesario frenar el golpe militar que está en curso.

27 de julio - Tienen lugar en todo el país grandes manifestaciones y marchas de la CUT y la CGT por el derecho a la vida y contra la carestía. En Bogotá se colma la Plaza de Bolívar. Se convoca una huelga general.

28 de julio - “El Gobierno clandestinizó el diálogo nacional”, afirma Bernardo Jaramillo al rechazar la negativa oficial de asistir a la cumbre nacional del 29 de julio e impedir asistencia de los jefes guerrilleros que reclamaban un salvoconducto especial.

El secretario general del PCC, Gilberto Viera, en el diálogo nacional con los partidos le responde al presidente del Partido Conservador,

Marín Bernal, que los comunistas no se inventaron la táctica de las diversas formas de lucha. “El partido no había hecho otra cosa que aprender del pueblo colombiano y sintetizar su experiencia cuando este se levantó en la lucha armada durante las dictaduras conservadoras”, anota tras la petición del dirigente conservador para que los comunistas abandonen dicha táctica.

29 de julio - Se reúne en Bogotá la cumbre nacional de los partidos, entre ellos la UP, la Iglesia y la CUT, sin la asistencia del Gobierno y las Fuerzas Armadas y gremios como la SAC. Tampoco asiste la guerrilla, pero envían mensaje las FARC, Quintín Lame, M-19, EPL, PRT y el ELN. La cumbre concluye con la aprobación unánime de dos puntos, primero, se autoriza una comisión preparatoria que continúe la labor para buscar salidas políticas a la crisis y segundo, se fijen los marcos para la Comisión de Convivencia Democrática, a instalarse el 22 de agosto.

31 de julio - En Puerto Boyacá operan al menos diez campamentos de grupos paramilitares financiados por las mafias de las drogas, dice *El Tiempo*.

1º de agosto - Alfonso López Michelsen se pregunta si no ha sido un error histórico no reconocerle a la guerrilla su carácter de fuerza insurgente. “¿Habría sido más sano renunciar al claro oscuro de calificarlos como delincuentes y otras de beligerantes, optando de una vez por la segunda de estas alternativas?”.

4 de agosto - El presidente Barco, en un discurso en la Escuela Militar de Cadetes, dice que la confrontación armada no es la solución a la situación del país. “Hay que persistir en una

solución política, pero cuando las condiciones estén dadas”.

13 de agosto - El liberalismo no participará en el diálogo nacional ni en la cumbre política del 22 de agosto, dice la Dirección Nacional.

22 de agosto - Se reúnen la UP y el Partido Social Conservador y manifiestan que con o sin la participación del Gobierno instalarán la Comisión de Convivencia el 22 de agosto, además, rechazan el criterio oficial de sustituir el diálogo para la alcanzar la paz, a través de una complicada y lejana reforma de la Constitución, a pesar de que la UP reconoce la urgente necesidad de una auténtica reforma de la carta.

Monseñor Darío Castrillón instala la Comisión de Convivencia Democrática con la ausencia del Partido Liberal y los grandes gremios.

23 de agosto - Duros combates en Saiza, Córdoba, entre las FARC y el EPL con el Ejército, que deja un saldo de cuarenta y un bajas de los militares. Estos enfrentamientos ocurren cuando hay intentos de un proceso de diálogo y paz desaprobados por el liberalismo, que los descalifica como “circunloquios más o menos demagógicos”.

25 de agosto - *Voz* revela documentos que comprometen a un capitán y a un mayor como cerebros del asesinato del alcalde de la UP de Sabana Torres, Álvaro Garcés Parra.

Las centrales obreras CUT, CGT y CTC, en el Palacio de Nariño, presentan un pliego único de peticiones al presidente Barco.

1º de septiembre - Paramilitares asesinan a quince personas en El Tomate, Córdoba. En un discurso televisado el

presidente Barco afirma que “la abrumadora mayoría de los colombianos quiere que se silencien las armas y reine la paz” y presenta una iniciativa para la paz donde muestra un aspecto positivo: el Gobierno está dispuesto a iniciar encuentros con la guerrilla y diálogos regionales con dirigentes políticos. Sin embargo, el plan no se refiere a cómo poner fin a la guerra sucia.

2 y 6 de septiembre - La UP se reúne con los expresidentes Misael Pastrana, Alfonso López y Belisario Betancur para examinar las propuestas de paz de Barco. Todos coinciden en que el plan oficial parte del presupuesto falso de que la guerrilla ha sido derrotada y por lo tanto quiere su incorporación a la vida civil, y consideran que los diálogos regionales, con la presencia de los militares, son positivos.

9 de septiembre - “Si el Gobierno no quiere o no puede dar solución a la cuestión fundamental de la guerra sucia, como es acabar con los grupos paramilitares, será muy complicado el proceso de reintegración a la vida civil de los combatientes guerrilleros que no tengan vocación de mártires”, dice Vieira en una editorial de *Voz*.

10 de septiembre - Los obreros bananeros de Urabá denuncian al comandante Arias Cabrales, jefe militar de la región que pretende carnetizarlos. Continúan los bombardeos en la región, lo que produce un éxodo de millares de campesinos. Arias Cabrales califica de paraguerrilleros a los trabajadores.

15 de septiembre - La UP, el Frente Popular y A Luchar emiten una declaración conjunta donde abogan por una

nueva Constitución y se comprometen con el diálogo y la paz. Apoyan la huelga general convocada por las centrales obreras para el 27 de octubre.

22 de septiembre - Las FARC emiten una declaración sobre la propuesta de paz de Barco, donde señalan que tienen la voluntad de regresar a la normalidad e insisten en un gran acuerdo nacional que “diseñe un plan realista de paz donde estén todos los sectores, incluidos la guerrilla y el Gobierno”. Proponen un cese general al fuego de dos meses para garantizar el desarrollo del gran acuerdo nacional por la paz.

23 de septiembre - La huelga general de veinticinco mil obreros bananeros del Urabá contra la carnetización impuesta por los militares, cumple quince días con el cierre de más de doscientas fincas.

27 de septiembre - La UP se reúne con el presidente del Partido Liberal, Turbay Ayala, en la sede de este partido. Durante el encuentro la UP asegura que los diálogos por la paz propuestos por Barco, con persistencia de la guerra sucia y los grupos paramilitares, no tiene ninguna perspectiva.

Se levanta el paro bananero al suspenderse temporalmente la carnetización de Arias Cabrales.

3 de octubre - En una operación guerrillera en el Caquetá, caen trece soldados y trece más quedan heridos, creándose un clima de tensión política en el país. La respuesta del general Samudio y el ministro Gaviria es de guerra total.

16 de octubre - La CGSB propone a Barco un encuentro con el Gobierno al más alto nivel para buscar una salida política al conflicto.

19 de octubre - Los representantes Gilberto Viera y Hernán Motta, en un debate en la Cámara, denuncian la guerra sucia y el paramilitarismo.

1° de noviembre - El plan de paz de Barco no despegó. Después de un periodo de dos meses de distensión entre las fuerzas en pugna, siguen los escuadrones de la muerte atacando al movimiento popular, no se ha desmantelado ni un solo grupo paramilitar y han sido asesinados en el lapso quince militantes de la UP y otros veinticinco de diferentes grupos políticos.

4 de noviembre - El ministro de Defensa, general Rafael Samudio, marca un nuevo punto en la escalada bélica al pedir guerra total contra el movimiento armado y manda al diablo “la mano tendida” del presidente Barco a la guerrilla para buscar la paz. En el sepelio de once soldados muertos por la guerrilla en el Meta, Barco rechaza esta política de tierra arrasada, por simplista; reafirma su política de paz y destituye al general Samudio.

11 de noviembre - En Segovia, población de influencia de la UP, paramilitares con el apoyo del Ejército y la Policía asesinan a cuarenta y tres personas y dejan decenas de heridos. El PCC llama a no dejar impune esta matanza.

22 de noviembre - Atentan contra el ministro de Defensa, general Guerrero Paz, saliendo ileso.

4 de diciembre - Las FARC ordenan a sus Frentes cesar el fuego como tregua de Navidad; lo mismo ordena el M-19. Las FARC, en un mensaje a los expresidentes Carlos Lleras Restrepo, Alberto Lleras Camargo, Misael Pastrana, Alfonso López, Julio César

Turbay y Belisario Betancur, manifiestan su apoyo a la iniciativa de paz de Álvaro Leyva Durán.

Sicarios realizan una matanza en la población de Valdivia, Antioquia, de influencia de la UP, donde asesinan a siete personas, entre ellos a tres activistas de la UP.

12 al 15 de diciembre - Se reúne el XV Congreso del PCC, que muestra un alto salto cualitativo en crecimiento e influencia y ratifica su salida de paz al conflicto. Elige una nueva Dirección Nacional encabezada por Gilberto Vieira como secretario general y ratifica su apoyo a la UP. Bernardo Jaramillo es elegido como miembro del Comité Ejecutivo Central con otros dirigentes de ese movimiento, como Angelino Garzón, Carlos Romero y Jaime Caycedo. El nuevo comité lo integran sesenta y nueve miembros. (Nota: de estos, diez caerían por la guerra sucia, cerca del 15% de ese aparato).

1989

5 de enero - Trasciende que el Consejero Presidencial de Paz, Rafael Pardo Rueda y el Jefe del M-19, Carlos Pizarro, se entrevistan en procura de un acuerdo de paz.

6 de enero - Prominentes figuras del Partido Conservador como Pastrana Borrero, Leyva Durán, más el cardenal Carlos Alfonso Trujillo, formulan propuestas de paz a las que el Gobierno presta oídos sordos.

10 de enero - Continúa oleada de crímenes contra la UP con el asesinato de dieciocho militantes y dirigentes, entre ellos Gildardo Castaño, destacado

líder popular de Risaralda y concejal de Pereira. El M-19 y el gobierno de Barco acuerdan llevar a cabo un proceso de paz que es saludado por la UP.

13 de enero - Gómez Hurtado critica la política de diálogo de Barco como exclusivista y plantea “que el diálogo debe ser con todos los partidos y las organizaciones alzadas en armas”.

16 de enero - La UP envía una carta a los expresidentes Julio César Turbay Ayala y Pastrana Borrero, calificando como “una nueva esperanza, en la búsqueda de la paz, el acuerdo entre el M-19 y el Gobierno” y propone a los exmandatarios una reunión conjunta para afianzar este proceso.

18 de enero - Matanza de La Rochela, Santander, con el asesinato de doce funcionarios judiciales que investigaban crímenes en la región del Magdalena Medio.

27 de enero - El PCC denuncia enormes operativos militares en amplias zonas campesinas del Meta, como los municipios de Mesetas, Vistahermosa, Lejanías, El Castillo, San Juan de Arama y La Macarena, lo que presagia un ataque a La Uribe y al Estado Mayor de las FARC.

30 de enero - En carta de Barco a los partidos conservador, liberal y la UP, renueva su voluntad de paz y el interés por llegar a acuerdos hacia la conciliación, por encima de circunstancias coyunturales de la política, sin embargo la UP señala que esa voluntad de paz no guarda proporción con los operativos militares de arrasamiento que se mantienen en el Meta, Santander y en Urabá.

4 de febrero - “La paz se pudo haber hecho hace cinco mil muertos”, declara

el jefe conservador Álvaro Gómez Hurtado en una entrevista en la que defiende las negociaciones con todas las guerrillas para alcanzar la paz.

7 de febrero - La UP dirige una carta al presidente Barco señalando que “en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas ordene al Ejército una investigación sobre las implicaciones de los altos jefes militares en casos de guerra sucia, como la masacre de Segovia, escuelas de sicarios y la vinculación de los militares con asesinatos”.

17 y 18 de febrero - Encuentro Nacional de Paz de Ibagué con la asistencia de mil quinientos delegados y personalidades de la vida pública del país. Todas las guerrillas envían mensajes y saludos. “Tanto la guerrilla como las Fuerzas Armadas deben cesar las hostilidades para crear un ambiente de diálogo”, dice Bernardo Jaramillo. Su intervención marca un punto importante porque se separa de las FARC, condenando por primera vez sus actos armados así como los del Ejército.

24 de febrero - Es asesinado en Villavicencio el presidente de la CUT Meta y dirigente de la UP, Luis Eduardo Yaya.

27 de febrero - Las FARC ordenan un cese unilateral del fuego y proponen una Comisión de Diálogo de alto nivel integrada por los expresidentes López, Pastrana, el cardenal Revollo, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fabio Echeverry, y Hernando Santos, director de *El Tiempo*. Todos ellos se reúnen en la casa de Santos para tratar el tema.

En un restaurante de Bogotá, al mediodía, es asesinado Teófilo Forero,



Mesa directiva del Segundo Congreso de la Unión Patriótica, el 10 de septiembre de 1989. De izquierda a derecha, Bernardo Jaramillo, Diego Montaña Cuéllar, Luis Emiro Valencia, Manuel Cepeda y Angelino Garzón. (Foto: Lara, Voz)

secretario nacional de organización del PCC y líder obrero, junto con su esposa y dos dirigentes de la UP. Barco recibe una delegación del PCC integrada por Gilberto Vieira, Manuel Cepeda, Jaime Caycedo y Angelino Garzón, que exige garantías para el trabajo político tras la ola de asesinatos.

3 de marzo - Es asesinado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el dirigente del PCC y de la UP, José Antequera, y herido casualmente Ernesto Samper. “Estos crímenes buscan impedir las gestiones de paz y reconciliación que hace el movimiento armado y la suspensión unilateral del fuego decretada por las FARC. Cómo puede haber

paz si el presidente Barco tolera la violencia”, dice una declaración de la UP.

4 de marzo - La UP decide retirarse de la mesa de trabajo sobre la paz, y considera que la falta de garantías y medidas para desmontar a los grupos paramilitares son los principales escollos hacia la reconciliación.

6 de marzo - Se reúne la dirección de la UP con el expresidente Turbay Ayala y declaran que “hay que salvar a Colombia de una guerra civil” a la vez que denuncian la existencia de un plan de sicarios contra la democracia. Navarro Wolff condena el asesinato de José Antequera y dice que las conversaciones con el Gobierno están empañadas por este hecho. En el sepelio

de Antequera todos los oradores señalan que sólo la movilización detendrá la mano de los asesinos.

7 de marzo - El Gobierno Distrital de Andrés Pastrana pone obstáculos al sepelio masivo de José Antequera y militariza Bogotá. Prohíben el acceso a la Plaza de Bolívar. La Conferencia Episcopal condena el crimen de José Antequera y pide el cese de la campaña de exterminio de la UP.

9 de marzo - En la sede de la DNL presentes figuras de los partidos liberal y conservador señalan que se requiere un sacudón grande de las instituciones por la paz y la concordia. Participan Gustavo Melo Guevara, Hernando Agudelo Villa, Alberto Santofimio Botero, López Michelsen y Álvaro Gómez Hurtado, así como todos los directivos de los partidos: Julio César Turbay Ayala, Diego Montaña Cuéllar, Gilberto Vieira, Horacio Serpa, entre otros, en un as de voluntades políticas por la reconciliación y la paz. Por la CUT interviene Angelino Garzón.

17 de marzo - En Santo Domingo, Cauca, Carlos Pizarro por el M-19 y el ministro de Gobierno, Raúl Orejuela, firman un acuerdo político en el que este grupo guerrillero acoge una propuesta de Barco de integrarse a la vida civil, reconociendo las dos partes la institucionalidad.

27 de marzo - La CGSB se manifiesta a favor de un vasto movimiento para detener la guerra sucia y estudiar un cese al fuego en términos definidos en el tiempo; además, reafirma la propuesta de un diálogo directo con el Gobierno. La UP acoge la iniciativa y solicita a los notables lo mismo.

7, 8 y 9 de abril - Se reúne el VIII Pleno Nacional de la UP, en el cual Gilberto Vieira señala que “ante el genocidio recomendamos que no haya resignación y desesperación. No podemos resignarnos y aceptar ser barridos del escenario político a sangre y fuego. No puede desaparecer por la violencia organizada de un sistema decrepito un factor político de avanzada tan importante como la UP”. La UP le envía una carta al M-19 donde señala que si no encuentran caminos de coincidencia, mañana podrá ser demasiado tarde y que en cualquier caso es necesario colocar por delante y de manera prioritaria la exigencia al Gobierno para que tome medidas de erradicación de la guerra sucia y termine con la impunidad. Se convoca el Segundo Congreso de la UP para septiembre.

13 de abril - La UP y el M-19 dialogan en Santo Domingo, Cauca. “La guerra sucia y la impunidad perturban la concertación de las fuerzas nacionales”, señala la declaración, reafirman el propósito de trabajar conjuntamente por una solución a la crisis y señalan la intención de volverse a reunir.

17 de abril - La UP se reúne con los altos mandos de las Fuerzas Armadas para aliviar las tensiones y buscar soluciones prácticas a los problemas de violencia. Se identifican los grupos de autodefensas y se anuncian nuevas reuniones para este trabajo. Por la UP asisten Carlos Romero, Diego Montaña Cuéllar y Álvaro Salazar.

20 de abril - Informaciones de prensa dan cuenta que en más de un año cinco jueces han demostrado tener pruebas para dictar autos de detención a

cuarenta y un militares por crímenes contra la UP.

24 de abril - La UP dirige una carta abierta a la CGSB y al M-19 invitándoles al diálogo para evitar la confrontación y la guerra civil. “La decisión de la UP es derrotar la guerra sucia que no creemos invencible”. Estiman que los procesos de paz se deben centralizar en un mecanismo único, ya que el planteamiento de la paz parcelada es débil y frágil.

17 de mayo - Carlos Pizarro dirige una carta a Gilberto Vieira en que reconoce que “la lucha de los comunistas ha sido extremadamente difícil” y le expresa la disposición de ese movimiento de mantener un diálogo abierto con el partido e invita a Vieira al campamento de Santo Domingo.

23 de mayo - Una delegación de la UP y del PCC integrada por Gilberto Vieira y Manuel Cepeda, se reúne con el ministro de Gobierno, Orejuela Bueno a quien entregan un documento confidencial con nombres de paramilitares involucrados en la guerra sucia. En la entrevista se denuncia al general Bedoya como uno de los cerebros de la guerra sucia.

30 de mayo - Vieira le responde a Pizarro, señalándole que la división en el movimiento guerrillero reunido, la CGSB, “significaría un golpe a ese frente común de las corrientes revolucionarias”.

2 de junio - En Barrancabermeja sicarios asesinan a Orlando Higueta, destacado líder popular del puerto y concejal de la UP.

4 de junio - La CGSB envía una carta a la Comisión de Notables, adjuntando la declaración política de la IV Cumbre a

la que asistió Álvaro Leyva Durán con presencia de las FARC, el EPL, el M-19, el Quintín Lame y el PRT; el ELN no asistió. En la declaración se dice que están buscando salidas políticas a la crisis a través del diálogo directo con el Gobierno y resaltan el papel de los notables. Manifiestan su respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente a través del plebiscito.

La UP critica al ELN por la voladura de oleoductos y pide una tregua en las acciones militares como gesto de buena voluntad.

10 y 11 de junio - Una delegación de la UP se reúne con las FARC. Estas condenan una vez más el secuestro e insisten en que la fórmula para la paz es el diálogo directo.

28 de junio - Tiene lugar en el Centro de Convenciones Jiménez de Quesada, en Bogotá, un homenaje a Diego Montaña Cuéllar presidente de la UP, que se convierte en un acto de solidaridad con este movimiento. Asisten todas las altas personalidades de los partidos políticos como Pastrana Borrero, Julio César Turbay Ayala, Jaime Castro, Alberto Santofimio, Angelino Garzón, Jaime Caycedo, Álvaro Leyva, Rafael Pardo, Andrés Pastrana, Alfredo Vásquez, Gerardo Molina, el cuerpo diplomático y dirigentes sindicales. Todas las fuerzas manifiestan el derecho que tiene la UP a desarrollar su proyecto político.

4 de julio - En Medellín es asesinado el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, con un coche bomba. La UP y el PCC condenan el acto terrorista. El 29 de junio el gobernador había hablado en el sepelio del

dirigente de la UP, Alejandro Cárdenas, donde había prometido encabezar un movimiento civil contra la guerra sucia.

8 y 9 de julio - Se reúne el Pleno del Comité Central del Partido Comunista, que señala que “para nosotros está claro que la Unión Patriótica no dirige al PCC ni este a la UP. No pretendemos que la UP refleje una copia mecánica de los criterios y objetivos (incluyendo la táctica de combinación de todas las formas de lucha) en su pronunciamiento y actividad práctica cotidiana” y se compromete el partido a contribuir en el Segundo Congreso de la Unión Patriótica y la búsqueda de un candidato presidencial de unidad.

12 de julio - Barco condiciona el proceso de paz con el M-19 a la entrega total de las armas y sin lo cual no habría indulto.

22 de julio - Se reúne la convención del Partido Liberal y se afianza la candidatura de Hernando Durán Dussán, quien representa la ultraderecha del partido y es enemigo de los acuerdos de paz con la guerrilla.

29 de julio - Se reúne VI Foro de Derechos Humanos en Bogotá y declara que la justicia social es la base de la paz. Denuncia que Betancur no quiso disolver los grupos paramilitares.

2 de agosto - La Dirección de la UP con Carlos Romero, Montaña Cuéllar, Hernán Motta, Bernardo Jaramillo y Óscar Dueñas, entre otros, se toma el despacho del ministro de Gobierno en Bogotá por cuarenta y ocho horas en protesta por la oleada de crímenes contra la UP y el movimiento social, que en una semana deja una docena

de muertos, entre ellos el jurista Abelardo Daza y el coordinador de la UP, de Montería, Gustavo Guerra.

5 de agosto - La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar le responde al Gobierno su propuesta de diálogo, reiterando la voluntad para una salida política e insiste en que el diálogo debe ser conjunto y de agenda abierta. Condena la guerra sucia y saluda el camino abierto hacia una Asamblea Constituyente.

Crece éxodo campesino en Yondó, Antioquia, tras los bombardeos del Ejército.

16 de agosto - Es asesinado el magistrado Carlos Ernesto Valencia y, en un hecho sin precedentes, el Tribunal de Justicia de Bogotá renuncia en pleno como protesta.

18 de agosto - Sicarios asesinan al dirigente liberal Luis Carlos Galán, quien se perfilaba como el más seguro Presidente de Colombia. Días antes habían sido asesinados los dirigentes sindicales Armando Calle, parapléjico, líder de la UP y Guillermo Callejas, de la UP de Ibagué, y en Medellín, Orlando Roa, dirigente de Electrificadora de Cundinamarca.

19 de agosto - En el Festival de Voz, Gilberto Vieira plantea una convergencia nacional hacia un gran bloque histórico. En una declaración del PCC con motivo del asesinato de Luis Carlos Galán, se responsabiliza a Barco por su tolerancia cómplice con los paramilitares.

2 de septiembre - Se reúne el Pleno del Comité Central del PCC y señala que la violencia tiende a generalizarse contra todos aquellos que defienden

la salida política para el país y dice que el Congreso de la UP definirá la candidatura presidencial. La sede de *El Espectador* es objeto de un ataque dinamitero que destruye las instalaciones. La UP se solidariza con el diario liberal.

5 de septiembre - La bancada parlamentaria de la UP presenta su propio proyecto de reforma constitucional.

7 de septiembre - *Voz* revela que agentes israelíes hicieron contactos con los paramilitares del Magdalena Medio a través de sus conexiones con las Fuerzas Armadas, entre ellos Jair Klein. Bernardo Jaramillo escribe un editorial en *Voz* donde afirma que “sin la movilización decidida de las masas no será posible que tengan éxito las acciones emprendidas contra la guerra sucia; para ello los comunistas convocamos a la conformación del más amplio frente antifascista”.

10 de septiembre - Se reúne el Segundo Congreso Nacional de la UP en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada con la asistencia 1.192 delegados bajo la consigna “País de todos Gobierno de todos”. Jaramillo es elegido como candidato presidencial por unanimidad. Se acuerda una presidencia rotativa siendo el primer presidente Diego Montaña Cuéllar y lo sucederán los subsiguientes vicepresidentes a saber: Bernardo Jaramillo, Luis Emiro Valencia, Carlos Romero y Angelino Garzón. A pesar de la guerra sucia, la UP muestra su pujanza y elige una Junta Nacional de 198 miembros y en la nueva Junta Nacional quedan Diego Montaña, presidente, Bernardo Jaramillo, primer

vicepresidente y siete vicepresidentes más: Luis Emiro Valencia, Carlos Romero, Angelino Garzón, Óscar Dueñas, Alberto Rojas Puyo, Guillermo Banguero y Julio Santana.

19 de septiembre - En sonado debate en la Cámara de Representantes se denuncia la guerra sucia y su vinculación de miembros de las Fuerzas Armadas con los paramilitares.

20 de septiembre - Arrecian las bombas del narcotráfico contra sedes políticas y centros comerciales, con pérdidas millonarias, muertos y heridos.

27 de septiembre - En un atentado terrorista con bomba cae un avión de Avianca en las inmediaciones de Soacha, dejando ciento veinte víctimas fatales, entre ellas Yaneth Oliveros, destacada activista de la UP del Valle del Cauca.

17 de octubre - Un atentado terrorista destruye las instalaciones del periódico *Vanguardia Liberal* de Bucaramanga; la UP protesta.

23 de octubre - Ante el asesinato de dos dirigentes de SINTRAINAGRO en Urabá, se declara una huelga de veinticuatro horas con la participación de más de treinta mil trabajadores bananeros.

25 de octubre - Henry Millán, representante a la Cámara por la UP, lleva a cabo un debate contra el ministro de Defensa, Óscar Botero, e implica a los militares en la guerra sucia.

27 de octubre - En Medellín es asesinado, por uno de sus escoltas y en su oficina de la Gobernación, el diputado de Antioquia, dirigente de la UP y miembro del Comité Central del PCC, Gabriel Jaime Santamaría. *Voz*

da cuenta de novecientos activistas de la UP asesinados desde el nacimiento del movimiento.

29 de octubre - En Bogotá es asesinado por sicarios el destacado periodista de Todelar, Jorge Enrique Pulido.

Octubre y noviembre - Intensa gira de Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la UP, convoca a millares de manifestantes.

6 de diciembre - Estalla bus bomba en las instalaciones del DAS de Bogotá, destruyendo el edificio y dejando decenas de muertos y heridos. La UP condena el acto.

15 de diciembre - Es ultimado por la Policía, en un operativo cerca de Tolú, Sucre, el jefe narcotraficante y paramilitar, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias "El Mexicano", responsable de decenas de muertes de miembros de la UP y del crimen de Jaime Pardo Leal.

1990

6 de enero - Campesinos denuncian intensos bombardeos de la fuerza aérea contra extensas zonas del Magdalena Medio y sur de Bolívar. El alcalde de Yondó, Braulio Mancipe, de la UP, denuncia los indiscriminados ataques que han dejado varios heridos, entre ellos niños.

14 de enero - Se reúne el Pleno Nacional de la UP con la asistencia de 135 delegados. Reafirma su apoyo a la candidatura presidencial de Bernardo Jaramillo para las elecciones de mayo de 1990. Hace un llamamiento por la paz e insiste en la necesidad de conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla. Denuncia como una patraña

las informaciones de *El Tiempo* sobre una supuesta división interna en la UP. El Frente Popular, de orientación maoísta y bajo la influencia del PCC-ML, anuncia su apoyo a la candidatura de Jaramillo.

En el corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, Antioquia, paramilitares secuestran a cuarenta y dos campesinos. Ese lugar es de influencia de la UP y de su aliado, el Frente Popular.

22 de enero - Es asesinado en el barrio Policarpa, por sicarios que le dispararon en la cabeza, el líder de los destechados y dirigente de la UP de Bogotá, Bladimiro Escobar. Había sido varias veces concejal por el PCC en Soacha.

23 de enero - El comandante de las FARC, "Jacobo Arenas", en declaraciones a Caracol, reafirma que están dispuestos a sentarse a dialogar con el Gobierno y dice que a ellos una amnistía como la ofrecida al M-19 no les basta.

25 de enero - Carlos Pizarro y Antonio Navarro se presentan en Bogotá ante una rueda de prensa tras el indulto del gobierno de Barco, anuncian su participación en las elecciones y declaran que se separaron de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) por evidentes contradicciones. Revelan que pronto harán entrega de las armas al Estado.

15 de febrero - *Voz* da a conocer el balance de huelgas en el país en 1989. Se presentaron 167 huelgas con la participación de 1.028,262 trabajadores, de ellos 707.227 del magisterio. En la manufactura, sector clave, sólo pararon 11.980 obreros.

24 de febrero - Seis campesinos, entre ellos tres menores, todos simpatizantes de

la UP, fueron masacrados por paramilitares en Bajo Cumaral, región del Ariari, Meta.

26 de febrero - Sicarios secuestran en Medellín a la alcaldesa de Apartadó, Diana Estela Cardona, quien horas después aparece asesinada en un paraje de la ciudad. La UP declara el estado de alerta a toda su militancia y se retira del Tribunal Nacional de Garantías.

Es asesinada Silvia Dussán, destacada periodista, y tres dirigentes campesinos en Cimitarra, Santander, a pocas cuadras del Batallón del Ejército.

11 de marzo - Amplio triunfo del Partido Liberal con la corriente de César Gaviria, candidato presidencial, y derrota de Durán Dussán. Retroceso de la UP, que ha sufrido los embates de la guerra sucia. Triunfo del M-19 en Bogotá.

La UP es primera fuerza en Arauca y obtiene diez parlamentarios, dos senadores, uno por Antioquia con Bernardo Jaramillo y con la suplencia de Álvaro Vásquez; así como otro por Cundinamarca y cuatro representantes principales: Arauca, Caquetá, Antioquia y Cundinamarca y cuatro suplentes en Chocó, Norte de Santander, Cauca y Bolívar elegidos por coaliciones.

La UP logra elegir trece alcaldes propios: Yondó, 2.806 votos, Apartadó, 10.890 votos, Mutatá, estos tres de Antioquia; en el Meta, El Castillo, Mesetas; en Arauca, las alcaldías de Arauquita y Tame; en Chocó, Acandí, Bojayá y Riosucio; en Nariño, Leiva; Norte de Santander, Tibú, Cundinamarca, Cabrera.

Se obtienen nueve diputados, cinco principales y cuatro suplentes en

Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Quindío, Tolima, Nariño, Putumayo, Chocó, Cesar, Meta, Antioquia, Cauca y Cundinamarca.

15 de marzo - Gilberto Vieira, secretario general del PCC, declara a *Voz* que la militancia de la UP ha dado muestras de su heroísmo civil tras sufrir el genocidio y reconoce cierto retroceso electoral en las elecciones para cuerpos colegiados del domingo 11 de marzo.

19 de marzo - Apartadó es testigo de una masacre que deja seis personas muertas, tras la incursión de un numeroso grupo de paramilitares en la heladería Sonorama del barrio Alfonso López, cuando decenas de personas bailaban en la madrugada. El sitio fue escenario de una fiesta por la victoria de la UP en las elecciones del domingo anterior.

22 de marzo - A sus treinta y cuatro años y a las 8:05 de la mañana, Bernardo Jaramillo es asesinado por un niño sicario en el Puente Aéreo de Bogotá, en presencia de su compañera Mariella Barragán. El crimen concita el rechazo nacional.

Decenas de miles de personas visitan durante dos días el Capitolio, donde reposan sus restos en cámara ardiente. A las exequias en su ciudad de Manizales acuden más de cincuenta mil personas. *Voz* saca una edición extraordinaria especial dedicada al dirigente, con una tirada de cincuenta mil ejemplares que se agota rápidamente. La CUT da la orden de paro nacional que se cumple el 23 en todo el país. Bernardo había sido asesor laboral de varios sindicatos de la CUT. La UP y el PCC exigen la inmediata renuncia del

ministro de Gobierno, Carlos Lemos, quien días antes del crimen afirmara que la UP era el brazo político de las FARC. Jaramillo había respondido que se le había puesto la lápida al cuello con esa afirmación. Gilberto Vieira afirma que a los autores intelectuales del crimen de Jaramillo hay que buscarlos dentro del Gobierno.

25 de marzo - El ministro Lemos renuncia por la presión nacional y Barco nombra en su reemplazo a Horacio Serpa Uribe, quien afirma que va “a luchar por el desmantelamiento de fuerzas oscuras como el paramilitarismo”.

26 y 27 de marzo - Sesiona el Pleno del Comité Central del PCC y hace un balance electoral, señalando que hay un evidente retroceso electoral en congresistas, alcaldes, diputados y concejales debido a la incesante guerra sucia. Rinde un homenaje a Bernardo Jaramillo, quien era miembro del Comité Central. Acuerda persistir en un candidato presidencial de convergencia.

En la reunión es leída una carta de Jaramillo, dirigida a un dirigente del PCC, que había sido dejada en una oficina. El documento, dice Vieira, se lee porque se considera importante, a pesar de ser una correspondencia privada. Trasciende que el candidato planteaba algunos puntos para revisar la línea política de la UP y la formación de una convergencia más amplia con otros sectores, en especial el M-19. Los planteamientos los hacía Jaramillo sin consultar a su partido, del que hacía parte como miembro de su Comité Ejecutivo Nacional. Obviamente todo esto daña profundamente la unidad de la UP, cuando ello resulta

crucial por estar sometida a la peor barbarie.

28 de marzo - Paramilitares masacran a cinco obreros de dos fincas bananeras de Chigorodó, en Urabá. Todos eran simpatizantes de la UP-Frente Popular.

28 y 29 de marzo - Se reúne el Pleno Nacional de la UP en el Concejo de Bogotá. Las sesiones están marcadas por intensos debates y conatos de división. Un sector del movimiento aprueba un pedido para que las elecciones sean aplazadas. El grupo mayoritario de la dirección, cinco de ocho, (con Jaramillo eran nueve) se retiran de la UP, a saber: Diego Montaña, el presidente; Luis Emiro Valencia, Angelino Garzón, Napoleón Vanegas y Guillermo Banguero. Sólo quedan Carlos Romero y Mario Upegui, del PCC, y Óscar Dueñas, independiente. Los renunciantes engrosan las filas del M-19, que a partir del hecho se llama Alianza Democrática M-19.

El Pleno fija una posición de ocho puntos para que se inicie un nuevo proceso de paz que incluye el cese inmediato bilateral del fuego, un periodo con término fijo de tregua, la apertura del diálogo y una comisión para investigar los crímenes de los paramilitares; así mismo se llama a la guerrilla a suspender el secuestro, el boleteo y los sabotajes.

2 de abril - Gilberto Vieira, secretario general del PCC, deja una constancia en la reunión conjunta de ese partido y la UP, advirtiendo que ante la inminencia de la creación de un movimiento amplio con el M-19, este no puede excluir a ningún sector de la izquierda

y menos hacer anticomunismo. La declaración pone en el ambiente la profunda división en la dirección de la UP que ya viene de mucho antes.

Se lanza el nuevo movimiento político apoyado fundamentalmente en el M-19, con la disidencia de la UP. Se suma un aliado de la UP, el Frente Popular, de origen maoísta y con fuerte arraigo en Urabá.

3 de abril - La UP declara en el Undécimo Pleno Nacional que no se disuelve tras el retiro de un numeroso grupo de la dirección y nombra nueva directiva presidida por Óscar Dueñas, anterior vicepresidente y no militante del PCC. La nueva dirección la integran además Carlos Romero, Mario Upegui, Óscar González, Urias Oyaga, Gonzalo Álvarez, María Osorio, Sebastián González y Antonio Puentes. Como fiscal queda Roberto Sáenz.

La UP, por unanimidad, resuelve no participar en las elecciones presidenciales del 27 de mayo por falta de garantías, pero resuelve hacer campaña por el sí a la Constituyente. Vieira señala en *Voz* que “nadie es imprescindible en la UP” al criticar el retiro de la mayoría del Ejecutivo Nacional para engrosar las filas del M-19.

23 de abril - Una comisión de la UP encabezada por Óscar Dueñas se reúne con el Nuncio Apostólico para solicitar una entrevista con el Papa sobre la situación del movimiento. En una declaración conjunta de la UP, el PCC y A luchar, rechazan las pretensiones del nuevo grupo, formado por un sector que se retiró de las filas de la UP y el M-19, de no tener en cuenta a esas organizaciones en sus filas con

el argumento que sostienen la política de la combinación de las forma de lucha, según señaló Adalberto Carvajal en una visita de Manuel Cepeda, Hernán Motta y Hernando Hurtado a la oficina del citado dirigente.

25 de abril - Se conoce una carta del Gobierno a la Coordinadora Guerrillera para que se llegue a un acuerdo de paz bajo las mismas características del que se negoció con el M-19, con entrega de armas y concentración en varios lugares para su sometimiento. Las FARC señalan que están dispuestas a participar en la Asamblea Constituyente con sus propias propuestas.

26 de abril - En pleno vuelo, pocos minutos después de salir de Bogotá en un avión de Avianca, es asesinado Carlos Pizarro, candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19. El movimiento de inmediato lo reemplaza para los comicios del 27 de mayo nombrando a Antonio Navarro Wolff. El crimen causa el repudio nacional y es condenado por la UP. Una gigantesca multitud acompaña los restos del dirigente al cementerio.

2 y 3 de mayo - Tiene lugar el Segundo Congreso de la CUT, con la asistencia de 1.800 delegados de todo el país, en la que ratifica su línea de oposición al régimen. Las elecciones para la nueva dirección las gana la lista del Partido Comunista, con 446 votos para nueve directivos de los treinta, mientras su aliado A luchar, obtiene la cuarta posición con 179 papeletas para cuatro puestos. El llamado nuevo movimiento que encabeza Angelino Garzón, quien había renunciado al PCC y la UP, logra 291 votos, cinco sillas y el

tercer lugar; su aliado el Frente Popular, consigue 161, con tres asientos. La segunda lista es la de los socialconservadores encabezados por Jorge Carriello, con 351 votos y seis directivos. El MOIR logra sólo un escaño con cuarenta y ocho votos.

3 de mayo - La dirección de la UP se reúne con el cardenal Alfonso López Trujillo para exponer la propuesta para que la Iglesia interceda en el diálogo con la guerrilla. El prelado ratifica el compromiso de perseverar en una salida política a la guerra. La UP también conversa con César Gaviria, el candidato presidencial del liberalismo.

10 de mayo - Sigue la guerra sucia contra la UP. Se conocen asesinatos de campesinos en Puerto Valdivia y Apartadó, Antioquia, Colosó, en Sucre y en El Castillo, Meta.

12 de mayo - Un coche bomba explota en el sector comercial del barrio popular Quirigua de Bogotá, el sábado de compras, dejando diecisiete muertos, entre ellos varios niños. En los días previos otros estallidos dejan veintisiete muertos. Los crímenes se le atribuyen al cartel de Medellín y por órdenes de Pablo Escobar.

14 de mayo - El candidato presidencial conservador, Álvaro Gómez Hurtado, propone conversar con la guerrilla antes de las elecciones y hasta el 7 de agosto para encontrar caminos de paz, lo que es bien visto por las FARC.

20 de mayo - Ricardo Henry Montenegro, concejal de la UP y el PCC de Puerto Valdivia, Antioquia, es asesinado. Recientemente había denunciado el crimen de cinco campesinos a manos del Ejército en esa región.

21 de mayo - Sicarios asesinan al destacado político liberal de Antioquia, Federico Estrada Vélez, quien era un recio oponente a la extradición y amigo del diálogo.

27 de mayo - César Gaviria es electo como presidente con un 47% de la votación, ganándole a Gómez Hurtado, quien obtiene el 23% de los sufragios. Navarro Wolff obtiene 740 mil, el 12%, se convierte en tercera fuerza y gana en Barranquilla y Santa Marta. La UP no participa pero vota por el sí para la Asamblea Constituyente, que saca un poco más de cinco millones de votos, el 89%.

7 de junio - En la vereda Ilarguita de Macaravita, García Rovira, Santander, el Ejército masacra a once campesinos, a quienes les ponen prendas militares para justificar que fue un enfrentamiento con guerrilleros del ELN.

Junio 15 y 16 - Se reúne el Pleno del Comité Central del PCC y llama a la militancia a luchar por una amplia Asamblea Constituyente, por la salida negociada al conflicto armado, por un amplio movimiento de convergencia de todos los revolucionarios y demócratas y por la unidad del partido. En el informe llama la atención una nota sobre la carta de Jaramillo leída en el anterior Pleno cuatro días después de su muerte, que dice que “se conoció una carta del camarada Bernardo Jaramillo en que se revelaban pasos para constituir un nuevo partido o movimiento, a espaldas de los marcos del PCC”. Y se denuncia a Angelino Garzón como uno de los orquestadores del grupo fraccional y quien se retiró de las filas.

26 de junio - Intensos bombardeos en la Sierra del Perijá deja varios muertos y un éxodo de más de dos mil personas que huyen a Becerril y la Jagua de Ibérico, en el Cesar.

4 de julio - Desaparece el destacado defensor de derechos humanos, Alirio de Jesús Pedraza, en la calle 53 con Avenida Boyacá, en Bogotá.

14 de julio - Es instalado el Congreso Preconstituyente con cerca de tres mil delegados de todo el país. Asisten todos los partidos de izquierda, como el PCC y movimientos como la UP y la Alianza Democrática M-19, organizaciones como la CUT y federaciones agrarias y religiosas. Aprueba una Constituyente de trescientos miembros con participación popular, de las minorías y la guerrilla.

10 de agosto - Muere de un ataque al corazón el segundo comandante de las FARC, "Jacobo Arenas", inspirador de los Acuerdos de Paz de La Uribe tras la propuesta de Betancur en 1984 y fundador de la Unión Patriótica y su primer candidato presidencial.

14 de agosto - El Tribunal de lo Contencioso Administrativo nombra en el Consejo Nacional Electoral al miembro del PCC y en representación de la UP, Carlos J. Duica. Es un fallo de enorme justicia, dice la UP, al ser reconocida como tercera fuerza.

16 de agosto - Se conocen nuevos asesinatos de miembros de la UP en Meta, Atlántico, Norte de Santander y Magdalena.

23 de agosto - El Comité Nacional Preconstituyente, del que hace parte la UP, envía una carta al presidente Gaviria y a los signatarios del acuerdo del 2 de

agosto, el M-19, los liberales y conservadores, sobre los mecanismos de convocatoria, rechazando la reducción a setenta miembros de la Constituyente, entre otras medidas. La UP había sido excluida de esos preacuerdos con el Gobierno.

8 de septiembre - Se reúne el Doceavo pleno de la UP, que aprueba presentar una lista única en las elecciones para la Constituyente del 9 de diciembre.

18 de septiembre - Tiene lugar un homenaje póstumo a "Jacobo Arenas" en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá, con la asistencia de dos mil personas. La UP envía un mensaje. Gilberto Vieira es el orador central.

26 de septiembre - El PCC saluda la nueva propuesta de Gaviria de estar dispuesto a ampliar los términos de negociación con la guerrilla, admitiendo una veeduría internacional, la participación de una comisión de notables y los Protocolos I y II de Ginebra. En ese mismo sentido se pronuncia la UP en carta al Presidente y convoca a las partes a flexibilizar sus posiciones.

28 de septiembre - El pleno del Comité Central del PCC llama a impulsar la campaña hacia la Constituyente y escoge una lista de cinco candidatos encabezada por Aída Abella. No figura el presidente de la UP, Óscar Dueñas, quien había sido escogido por el movimiento para encabezar la lista.

19 de octubre - Es asesinada en Apartadó la dirigente del PCC y concejal de la UP, Edilma Moreno.

25 de octubre - La UP elige como nuevo presidente al concejal comunista Carlos Romero, en el mecanismo de

rotación en ese cargo en reemplazo de Óscar Dueñas.

27 de octubre - En el teatro Gaitán se proclama la Lista Única por la Vida y los Derechos Humanos de una diversa gama de movimientos sociales y que encabeza el canciller Alfredo Vásquez y le sigue la dirigente sindical Aída Abella. También hacen parte de ella el general (r) Joaquín Matalla, Óscar Dueñas, expresidente de la UP y Jaime Caycedo, dirigente del PCC.

14 de noviembre - Se realiza en todo el país, convocada por la CUT, una jornada nacional de protesta contra la carestía y la apertura económica de Gaviria.

9 de diciembre - Tienen lugar las elecciones para escoger la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) integrada por setenta miembros. A las urnas acuden 3.207.039 colombianos y la abstención pasa del 74%, la más alta en la historia del país. La Lista Única por el Derecho a la Vida, encabezada por Alfredo Vázquez Carrizosa y Aída Abella, con el apoyo de la UP, que no sacó lista propia, obtiene 95.088 votos y dos curules.

El mismo día de las elecciones, la Fuerza Aérea ataca los campamentos del Secretariado de las FARC en La Uribe y se presentan combates por varios días, con gran cantidad de bajas de ambos bandos, en el peor rompimiento de la tregua firmada en marzo de 1984. A partir de esa fecha, se desencadena la peor ofensiva guerrillera con daños a la infraestructura del país, en especial, el sistema de conexión eléctrica.

17 de diciembre - El Ejército bombardea extensas zonas de Sumapaz y ocupa

militarmente la región. Hay numerosos detenidos y desplazados.

31 de diciembre - Cerco militar al barrio Policarpa en Bogotá y allanamiento a la sede de Festrac, filial de la CUT.

1991

10 de enero - Una comisión de la UP y el PCC visita al ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, y denuncia detención de 350 simpatizantes en Ciénaga, Magdalena.

15 de enero - Se instala la Comisión Accidental de Paz de la Cámara de Representantes que cuenta con al aval del ministro de Gobierno y de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar FARC-ELN. De ella hacen parte Henry Millán y Diego Montaña Cuéllar, este último nombrado presidente de la misma.

20 de enero - El Comité Central del PCC convoca el Congreso Extraordinario del 4 al 7 de agosto y llama a las partes, tanto Ejército como guerrilla, a buscar caminos de paz.

24 de enero - El Ejército lanza una nueva ofensiva contra las FARC en La Uribe e impide que la Comisión de Paz viaje a entrevistarse con la insurgencia.

8 y 9 de febrero - Tiene lugar el XIII Pleno Nacional de la UP. Acuerda desarrollar el perfil socialista y dirigirse hacia un nuevo movimiento o frente amplio. Exige el reinicio del diálogo directo entre el Gobierno y la guerrilla.

10 de febrero - El gobierno de Gaviria propone un diálogo directo y expedito con la insurgencia y nombra una comisión para el efecto.

17 de febrero - La Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar acepta

iniciar conversaciones de paz con el gobierno de Gaviria.

5 de marzo - La UP se reúne con el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, quien se compromete a nombrar una comisión de alto nivel para investigar crímenes contra dirigentes y activistas de la UP. Del 1° de enero al 28 de febrero de 1991 son asesinados cincuenta miembros de la UP.

15 de marzo - La Coordinadora Guerrillera mantiene su interés en participar en la Asamblea Nacional Constituyente y dice tener una lista de veinte candidatos. Vence el plazo para que los grupos insurgentes participen en la Constituyente.

14 de mayo - Se reúne Comisión de Diálogo entre la Coordinadora Guerrillera y una delegación del Alto Gobierno en Cravo Norte, Arauca, que abre el diálogo de Caracas.

3 de junio - Se instala la mesa de conversaciones en Caracas, encabezada por el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, y los guerrilleros de las FARC "Alfonso Cano", "Iván Márquez" y "Pablo Catatumbo"; por el ELN "Francisco Galán" y por el EPL, Asdrúbal Jiménez.

5 de junio - La ANC, con sólo tres votos en contra, los de Alberto Zala-mea, Álvaro Gómez Hurtado y Juan Gómez Martínez, invita a "Manuel Marulanda" a que intervenga en la Constituyente.

8 de junio - En un comunicado el PCC, la UP, A luchar y PCC-ML, rechazan, por excluyente, el pacto electoral de las tres fuerzas políticas principales de la ANC -Partido Liberal, Salvación Nacional y M-19-, por el cual se revoca

el mandato del actual Congreso y se convocan elecciones para octubre.

15 de junio - Oleada de terror contra la UP en el Norte del Cauca y sur del Valle, con detenciones de militantes y desapariciones de varios activistas de la Unión Patriótica.

4 de julio - La ANC promulga la nueva Constitución, donde se destacan los derechos fundamentales y la participación ciudadana, pero con lunares en justicia, Fuerzas Armadas, economía y paz, que no llega.

10 de julio - El pleno del Comité Central del PCC urge un cese al fuego bilateral y generalizado para que prosigan las negociaciones entre el Gobierno y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

20 de julio - Se reúne el Pleno Nacional de la UP para abordar el tema electoral y condena los atentados al sistema eléctrico nacional que causan grandes apagones. Convoca el Tercer Congreso para el 29 de noviembre.

4 al 7 de agosto - Sesiona el XVI Congreso del Partido Comunista, que exige la salida negociada al conflicto armado interno. Gilberto Vieira deja la Secretaría General y la asume Álvaro Vásquez del Real.

15 agosto - El ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, recibe una delegación del PCC integrada por Manuel Cepeda, Gilberto Vieira, Jaime Caycedo y Álvaro Vásquez, que ratifica que la organización está por la salida negociada al conflicto. "El partido es un partido legítimamente organizado", reconoce el ministro y "tiene derecho, como cualquier otra agrupación, a acudir a las oficinas gubernamentales".



Una brigada de jóvenes de la Unión Patriótica en la jornada electoral del 11 de marzo de 1990 en el Coliseo de Ferias de Bogotá. (Foto: Lara, Voz)

21 de julio - La UP de El Castillo, Meta, denuncia graves atropellos de la Policía contra el movimiento.

26 de agosto - La UP abre su campaña electoral con sus aliados del PCC, A luchar y PCC-ML con la consigna "Venga esa mano, país", que enarbolará Bernardo Jaramillo. La lista la encabeza el dirigente comunista Hernán Motta Motta.

La UP denuncia persecución de grupos paramilitares en el Tolima.

6 de septiembre - Aparecen dos listas del Senado por la UP, una encabezada por Motta Motta y otra por una disidencia de Carlos Romero y Roberto Sáenz,

que no cuenta con el apoyo del PCC. A raíz de esta división, Romero, quien era presidente de la UP, es retirado de las filas del Partido Comunista.

8 de septiembre - El Ejército impide un acto electoral del Movimiento de Integración Regional del Caquetá, del cual hace parte la UP.

17 de septiembre - Una delegación del PCC se reúne con el ministro de Defensa, Rafael Pardo, para exigir garantías en la campaña electoral de la UP y contra la persecución en regiones como el Ariari, Puerto Rico, Puerto Lleras, Vistahermosa, en el Meta, donde hay ocupación militar; en Fundación,

Magdalena, continúan las amenazas contra dirigentes de la UP; en Yondó, Antioquia, hay atropellos contra dirigentes y se denuncian allanamientos, torturas y detenciones arbitrarias.

El PCC denuncia ante el ministerio de Defensa ola de persecuciones en Barrancabermeja y Magdalena Medio contra la UP y sectores campesinos.

18 de septiembre - El Procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, entrega un informe sobre derechos humanos que pone al descubierto la responsabilidad de las Fuerzas Militares y la Policía en los atropellos contra la población civil. El informe reconoce la alarmante impunidad y afirma que los sectores más golpeados son la UP, los campesinos y el PCC.

1° de octubre - Atentado contra el dirigente liberal del Cauca, Aurelio Iragorri, por parte de un grupo guerrillero, resultando ileso, lo que ocasiona la ruptura de las conversaciones de Caracas entre la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y el Gobierno. ASFADDES denuncia que en dieciséis meses hubo 465 casos de desaparición forzada.

3 de octubre - Continúa la guerra sucia en el Magdalena Medio. Reaparece el MAS. A tres años de la masacre de cuarenta y tres personas en Segovia, Antioquia, han seguido los crímenes contra esa población.

4 de octubre - Dos sicarios atacan contra la vida del alcalde de Mesetas, Miguel Antonio Rubio, dirigente de la UP, saliendo ileso. Los sicarios huyen hacia la base militar de la población.

7 de octubre - El alcalde de Yondó, Antioquia, Jesús Correa Osorio, dirigente

de la UP y candidato nuevamente, renuncia por amenazas.

Éxodo campesino en San Pablo, al sur de Bolívar, tras operativos de tierra arrasada del Ejército que deja catorce campesinos muertos. Más de diez mil campesinos ocupan el casco urbano de la localidad, región de influencia de la UP.

31 de octubre - Se reanuda diálogo de Caracas entre el Gobierno y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Plan Democracia del Gobierno amenaza a simpatizantes e integrantes del Partido Comunista.

27 de octubre - Tienen lugar las elecciones nacionales para cuerpos colegiados. La abstención es de casi el 70%. Hay predominio del clientelismo liberal-conservador y retorna más del 40% de los revocados por la Constituyente. Triunfa la hegemonía gavirista. El M-19 pierde más de medio millón de votos con respecto a los 946 mil que sacó un año atrás, demostrando el desencanto popular por este movimiento que había concertado con el gobierno de Gaviria. La UP obtiene un senador, Hernán Motta Motta, con cincuenta y seis mil votos, igual votación a la obtenida por el PCC en 1970, en elecciones para presidente, veintiún años atrás, cuando llamó a votar en blanco. El PCC señala que la guerra sucia demuestra sus efectos criminales sobre los comunistas. Como representantes a la Cámara por la UP, salen Manuel Cepeda, por Bogotá, Octavio Sarmiento, por Arauca y Jairo Bedoya, por Antioquia. La UP había obtenido en 1986, nueve senadores y quince representantes en

alianzas con diferentes fuerzas del Partido Liberal.

6 de noviembre - El PCC del Norte de Santander denuncia el terror en la región por parte de las Fuerzas Armadas. En Paz de Ariporo, Casanare, son asesinados cuatro jóvenes en una semana.

8 de noviembre - Una delegación de la UP se reúne con los ministros de Gobierno y Defensa para exponer la grave situación de derechos humanos en el Meta, donde prosigue la ola de exterminio. La región de La Uribe sigue siendo objeto de ametrallamientos y los militares portan listas con nombres de activistas y miembros de la UP.

19 de noviembre - Se reúne el Consejo de Seguridad en Villavicencio, con participación de los ministros de Gobierno y Defensa, los comandantes de la IV división y de la VII Brigada, el senador Hernán Motta y el representante Manuel Cepeda, así como los alcaldes de Mesetas, El Castillo, Vista Hermosa, para estudiar el caso de garantías a la UP en la región. La UP entrega un informe de dieciséis páginas sobre la grave situación de derechos humanos en el Llano.

14 y 15 de diciembre - Se reúne el Tercer Congreso Nacional de la UP. Participan trescientos delegados de todo el país que eligen a Aída Abella como presidente y quince miembros a la Dirección Nacional.

1992

2 de enero - Es asesinado en Puerto Boyacá el jefe paramilitar Ariel Otero, quien había anunciado la entrega de grabaciones con pruebas sobre los

crímenes de Jaramillo y Pizarro. Operativo militar de más de mil hombres impide campaña electoral de la UP en Puerto Rico, Meta.

4 de enero - La UP entrega una carta al ministro de Justicia, Hernando Carrillo, exigiendo explicaciones por el asesinato de Andrés Gutiérrez, autor material del crimen contra Bernardo Jaramillo, quien había salido en libertad y se hallaba en Medellín, muerto el 2 de enero, eliminándose así uno de los protagonistas claves del magnicidio. El padre del sicario, Fabio de Jesús Gutiérrez, también había sido eliminado el mismo día y estaba ligado al servicio de inteligencia militar.

8 de enero - El PCC inicia la campaña para recolectar cincuenta mil firmas en defensa del derecho a mantener la personería jurídica de acuerdo a las nuevas normas electorales y la Constitución.

12 de enero - Horacio Serpa Uribe es nombrado nuevo Consejero de Paz, en reemplazo de Antonio Bejarano.

20 de enero - La UP desarrolla su campaña electoral para concejos y asambleas y lanza candidatos. Aída Abella, al Concejo de Bogotá y Jaime Caycedo a la Alcaldía de la capital.

28 de enero - La Dirección Nacional de la UP se entrevista con el ministro de Gobierno, exigiendo garantías para la campaña y denuncia la guerra sucia. El ministro propone convocar un Consejo de Seguridad en Urabá con asistencia de la UP.

30 de enero - Ola de paros en todo el país por motivos sociales y protesta por crímenes cometidos por paramilitares, como el asesinato, el 29 de enero, de la

secretaria de derechos humanos de Barrancabermeja, Blanca Cecilia Valero.

5 de febrero - El representante Manuel Cepeda lleva a cabo un sonado debate con el ministro de Defensa, Rafael Pardo, sobre los crímenes contra la UP.

15 de febrero - Se incrementan los operativos militares en el Meta, Magdalena Medio, Cauca, Arauca, Caquetá, Putumayo, Santander, Norte de Santander y Cundinamarca contra la insurgencia, lo que provoca éxodos campesinos.

20 de febrero - La UP denuncia nueva racha de crímenes contra la organización. En menos de una semana han sido asesinados el personero de Mesetas, Luis Augusto Orjuela Pérez; la funcionaria de la Contraloría de Medellín y dirigente de la UP Luz Dary Castaño de Guerra y la empleada de la Caja de Previsión Social de Bogotá, María Elfia Correa Bermúdez.

24 de febrero - Se reanuda el diálogo entre la guerrilla y el Gobierno, ahora en Tlaxcala, México.

27 de febrero - La CUT convoca una jornada nacional de protesta contra los despidos masivos, ilegalización de huelgas, militarización de conflictos laborales, asesinatos y amenazas a dirigentes populares.

28 de febrero - La UP es despojada del cargo que ocupaba con un magistrado en el Consejo Nacional Electoral.

1° de marzo - La justicia logra vincular a varias personas al proceso por el asesinato de Teófilo Forero y tres de sus acompañantes. Los sicarios actuaron por indicación del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha.

8 de marzo - La UP gana veintitrés alcaldías (trece en 1990), diez diputados,

doscientos veinticinco concejales en ciento siete municipios y contribuye a elegir cerca de cien alcaldías de convergencia. También logra mantenerse en consejos de ciudades capitales y de provincia, pese a la guerra sucia. La abstención llega al 65% y el M-19 retrocede obteniendo una bajísima votación, menos de sesenta mil votos, después de sacar casi un millón para la Constituyente. Desaparece Daniel García, enlace entre el Gobierno, empresarios y guerrilla para las conversaciones de paz.

21 de marzo - Se rompen conversaciones de Tlaxcala tras el secuestro y la muerte del exministro conservador Argelino Durán Quintero, en Norte de Santander, a manos del EPL. La UP condena el crimen.

26 de marzo - EL PCC supera la recolección de cincuenta mil firmas para no perder su personería jurídica.

4 de abril - Pleno del CC del PCC llama a salvar el diálogo entre la guerrilla y el Gobierno.

12 abril - Ofensiva militar y de las auto-defensas paramilitares del Ariari, en Mesetas, Meta contra la UP.

14 de abril - El ministro de Gobierno recibe una delegación del PCC y la UP que denuncia provocaciones y amenazas contra activistas en todo el país, en especial en el Meta y Cesar.

15 de abril - Unidades de la Brigada Móvil No. 2 siembran el terror en Segovia, Antioquia con la detención de setenta y dos personas, que vendados y amarrados son paseados por el pueblo, sindicados de ser agentes de la guerrilla.

16 de abril - Aparecen los despojos de cinco reconocidos dirigentes cívicos

y populares a la orilla del río Cauca, entre Jamundí y Puerto Tejada, Valle, pertenecientes a la Corriente de Renovación Socialista y A luchar. En las mismas circunstancias son hallados otros diez activistas.

20 de abril - Se reanudan las conversaciones en Tlaxcala entre el Gobierno y la Coordinadora Guerrillera.

4 de mayo - El Gobierno rompe unilateralmente el diálogo en Tlaxcala, empecinado en modificar los acuerdos del 13 de marzo que señalaban una agenda compuesta por los temas de apertura económica y efectos sociales, corrupción administrativa, derechos humanos, paramilitarismo, Estado, democracia, nueva constitución y sistema político. Se resuelve reanudar el diálogo el 31 de octubre.

15 de mayo - La guerrilla realiza una operación en el occidente antioqueño, con un saldo de trece soldados muertos y cinco desaparecidos. En otros siete departamentos hay cruentos combates entre el Ejército y las FARC.

3 de junio - Son asesinados el alcalde entrante y la alcaldesa saliente del El Castillo, Meta, dirigentes de la UP, junto con cuatro funcionarios de la Alcaldía, también del movimiento. El PCC acusa como responsable del crimen a la VII Brigada, luego de reunirse con el ministro de Gobierno.

7 de julio - Prosigue la guerra sucia contra sindicalistas. Son asesinados un dirigente cementero de Nare y dos trabajadores de Ecopetrol, en Barranca.

28 de agosto - El Consejo Nacional Electoral despoja de la personería jurídica al Partido Comunista a pesar de haber entregado más de setenta mil firmas.

Otras once organizaciones políticas corren igual suerte.

28 de septiembre - Una delegación del PCC se reúne con el ministro de Gobierno para protestar por la pérdida de la personería jurídica y rechaza el plan militarista contra sus miembros y los de la UP. El ministro dice que fue un exabrupto quitarle la personería jurídica al Partido Comunista.

13 de octubre - El defensor del pueblo, Jaime Córdoba Triviño, entrega un informe sobre homicidios contra la UP y Esperanza, Paz y Libertad, ordenado por la Sentencia T439 de julio 2 de 1992 de la Corte Constitucional. De 1985 a la fecha, de 830 homicidios contra miembros de la UP, sólo diez han sido esclarecidos, seis con sentencias absolutorias y cuatro condenas; los restantes se encuentran impunes.

18 de octubre - El Pleno del Comité Central del PCC denuncia actos de provocación contra este partido y la UP. “La guerra sucia registra una nueva ola de asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias y hostigamientos contra militantes del partido y la UP”. El Pleno dice que el movimiento social atraviesa dificultades. “Sólo se han visto movilizaciones de indígenas y campesinos, el proceso unitario de la izquierda no se desarrolla suficientemente.

31 de octubre - No se cumple por parte del Gobierno el reinicio del diálogo en Tlaxcala entre la guerrilla y el Gobierno. Se está ante la guerra total, como dijo el ministro de Gobierno ante el Congreso.

10 de noviembre - En una declaración del Partido Comunista se rechaza el

decreto del Estado de Conmoción Interior declarado por el gobierno de Gaviria, que cercena libertades y persigue a quienes disienten y se pronuncian por una salida política al conflicto.

19 de noviembre - El ministro de Gobierno recibe una delegación de la UP y declara que el PCC y la UP son legales y tienen derecho a su actividad política.

24 de noviembre - Gigantescas marchas en todo el país por el cese de la guerra, por la paz y contra el manejo económico y social del gobierno de Gaviria. El M-19 se retira del Gobierno y manifiesta que quiere contribuir al proceso de una solución negociada al conflicto armado interno y nombra a Antonio Navarro como su vocero.

26 de noviembre - Es asesinado el diputado de la UP por el Meta, José Rodrigo García Orozco. Su esposa, la exalcaldesa de El Castillo María Mercedes Méndez, también de la UP, había sido muerta por sicarios en junio anterior, dejando a seis niños huérfanos.

1993

18 de enero - El Pleno del Comité Central del PCC denuncia la política de confrontación integral de Gaviria en todos los frentes, militar, político, jurídico y económico, con el argumento de la falta de voluntad de paz de la guerrilla, pero tras esto se esconde la justificación de los tremendos fracasos políticos y administrativos del Gobierno. Gaviria se enrumba por la salida militar, afirmando que es viable en un plazo corto o mediano la derrota

de la guerrilla. Una posición realista, dice el PCC, implica al mismo tiempo la crítica seria a las prácticas de grupos guerrilleros como el secuestro y las acciones que lesionan los intereses sociales de la población.

1° de febrero - Las FARC dirigen una carta al Congreso afirmando que mantienen su disposición de paz y de diálogo para encontrar una salida política al conflicto.

4 de febrero - Después de noventa días de declarada la Conmoción Interior, plazo máximo que concede la Constitución, que Gaviria impuso para pacificar el país, la violencia no cesa y se agudiza la confrontación armada.

11 de febrero - Se reúne el Pleno Nacional de la UP para analizar la situación nacional, estudio de candidatos presidenciales y búsqueda de una salida política al conflicto. Asisten más de cincuenta delegados de todo el país.

15 de febrero - Atentados terroristas de Pablo Escobar dejan cuatro muertos, ciento cuarenta heridos y miles de millones en pérdidas con dos carros bombas, preludio de nuevos atentados en todo el país con decenas de muertos y heridos.

16 de febrero - La CUT, CTC y CGT convocan paro nacional estatal contra la política de privatizaciones y despidos, previamente, el 10 de febrero, había tenido lugar una gran movilización nacional.

20 de febrero - Se reúne el VII Foro Nacional por la Paz y los Derechos Humanos con más de dos mil delegados de todo el país. El foro pide que guerrilla y Gobierno respeten las reglas del Derecho Internacional Humanitario.

2 de marzo - La UP denuncia la persecución de sus militantes por la XII Brigada del Ejército en Caquetá, con la detención de once concejales de la región acusados de ser parte de las milicias bolivarianas.

Una comisión del PCC y la UP, integrada por Aída Abella y Manuel Cepeda, se reúne con el expresidente Misael Pastrana, con quien coinciden en que no es necesario esperar dieciocho meses para el diálogo entre el Gobierno y la CGSB. El ministro de Defensa, Rafael Pardo, en un editorial de la *Revista Fuerzas Armadas*, fija un plazo de dieciocho meses para acabar con la guerrilla.

26 de abril - Esperanza Paz y Libertad, el PCC y la UP firman un acuerdo para poner fin a la violencia en Urabá, que ha traído la muerte de activistas y dirigentes de esas organizaciones durante varios meses.

Mayo - La Octava Conferencia Nacional de las FARC insiste en la solución política y propone un programa para un nuevo Gobierno y se convoque una nueva Constituyente.

25 de junio - Sicarios en Fontibón matan a Luis Carlos Pérez, líder de la CUT y A luchar, y exdirigente del PCC. En lo corrido del año han sido asesinados otros dos dirigentes nacionales de la CUT, Oliverio Molina y Jesús Alirio Guevara.

29 de julio - Una delegación de la UP y PCC denuncian ante el ministro de Defensa que está en camino la Operación Golpe de Gracia contra el partido y la UP. La reacción del ministro es de absoluta displicencia y de oídos sordos, argumentando a priori que no cree ni

una sola palabra y reta a Cepeda Vargas a un debate en la Cámara. Los dirigentes comunistas declaran al salir de la audiencia que Pardo Rueda de hecho se convierte en cómplice de los atentados contra el movimiento popular.

15 de agosto - Un fallo del Consejo de Estado revoca la decisión del Consejo Nacional Electoral que le había despojado la personería jurídica al PCC.

30 de agosto - UP y PCC exploran candidatura de convergencia para las elecciones presidenciales, así como listas para Senado y Cámara, alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas.

31 de agosto - En una declaración, el PCC lamenta el asalto por parte de un grupo armado a un camión de la Policía en Usme, dando muerte a trece policías, lo que ha producido el rechazo de la opinión pública colombiana y se suma a la inacabable historia de violencia del país.

5 de octubre - El Ejército masacra en Riofrío, Altos de la Loma, Valle del Cauca, a trece campesinos acusados de pertenecer a la guerrilla del ELN, comandados por el coronel Luis Felipe Becerra Bohórquez, comandante del Batallón Palacé, quien había sido exonerado hacía seis meses de su participación en las masacres de Honduras y La Negra en el Urabá, el 4 de marzo de 1988.

26 de octubre - Campaña electoral de la UP y PCC en medio de hostilidades del Ejército, con la detención de los alcaldes de la UP de Tibú, Saravena y Arauquita.

30 de octubre - Se reúne el XVII Pleno Nacional de la UP, propone a Aída Abella como candidata presidencial y lanza campaña electoral. Respalda la

lista única nacional al Senado encabezada por Manuel Cepeda. Cepeda se inscribe por el PCC y no por la UP.

31 de octubre - Carta de las FARC al Congreso de la República. Ratifican salida negociada al conflicto.

5 de noviembre - Es asesinado el senador liberal Darío Londoño Cardona en los predios de la Universidad de Antioquia, de Medellín, amigo del diálogo y la solución política al conflicto armado, crimen repudiado por el PCC y la UP.

23 de noviembre - Desmovilizados de Esperanza Paz y Libertad (antiguo Ejército Popular de Liberación, EPL) imponen el terror en Urabá contra la UP y el PCC a través de sus comandos populares, denuncia *Voz*. En el último semestre han sido asesinadas sesenta personas, entre ellas treinta y ocho militantes de la UP en la región de Urabá e incumplen el acuerdo firmado meses atrás. Los comandos populares andan con unidades del Batallón Voltígeros.

24 de noviembre - Asesinan a Miller Chacón, secretario nacional de organización del PCC, quien hacía parte de la lista entregada al ministerio de Defensa conocida como Operación Golpe de Gracia.

5 de diciembre - Se reúne el Pleno del PCC para analizar el asesinato de Miller Chacón y fijar las tareas de la campaña electoral. Dice que “es un nuevo elemento de la guerra sucia y que es un toque de alerta para la dirigencia revolucionaria”.

7 de diciembre - Es asesinado en Florencia, Caquetá, el exparlamentario de la UP Henry Millán y exmiembro del Comité Central del PCC. Era presidente del movimiento Causa Popular

y hacía dos meses se había retirado de las filas del partido y de la UP. Estaba amenazado por paramilitares.

8 de diciembre - Diversos sectores de izquierda se reúnen para estudiar la escogencia de un candidato de convergencia para las elecciones presidenciales.

13 de diciembre - Atentado criminal contra Felipe Santos, miembro del Comité Central del PCC y secretario del Comité Regional de Antioquia; y contra Beatriz Gómez, diputada de la UP de ese departamento. Ambos salen ilesos del atentado, mientras tanto, siguen amenazas contra el concejal de la UP en Medellín, Gonzalo Álvarez.

El general Rodolfo Torrado Quintero, comandante de la 1ª División del Ejército de Antioquia, señala en *El Heraldo* de Barranquilla que “los comunistas y la UP son los culpables de la matanzas en el Urabá” y reconoce que “el Ejército puso en marcha un plan llamado ‘retorno’ para que los partidos tradicionales vuelvan a copar la vida política de Urabá”. Estas declaraciones se enfrentan a la opinión de Gaviria, quien reconoció que la UP y el PCC nada tienen que ver con la violencia de Urabá.

Las declaraciones del general coinciden con otra matanza en la finca Los Catíos, en Turbo, con la muerte de diecisiete personas, todas ellas militantes y simpatizantes del PCC y la UP. Todo esto hace parte del plan Golpe de Gracia, dice el PCC.

14 de diciembre - Es asesinado en Cali Carlos Antonio Montoya, defensor de derechos humanos y presos políticos.

16 de diciembre - Hombres armados atacan la sede central del Partido Comunista en la Avenida 19 con Caracas

en Bogotá, hiriendo de gravedad al vigilante.

21 de diciembre - La Comisión de Derechos Humanos de la OEA se dirige al Gobierno colombiano para pedir protección a los dirigentes comunistas Aída Abella, Manuel Cepeda, Álvaro Vásquez, Hernán Motta Motta y Carlos Lozano.

Matan en Turbo, Antioquia, a José Miguel Cantillo, precandidato a la Alcaldía por la UP.

1994

5 de enero - Allanan la sede del PCC de Medellín.

28 de enero - El arquitecto e investigador social Alberto Mendoza Morales es elegido unánimemente por la Convergencia Nacional, de la cual hacen parte el PCC y la UP, como candidato presidencial.

12 de febrero - Inscritas listas electorales del PCC y la UP. Cepeda encabeza la del Senado.

14 de febrero - Detienen al alcalde de la UP de Apartadó, Nelson Campo Núñez, candidato a la Cámara por Antioquia, a José Antonio López, exalcalde por la UP y a otros dirigentes cívicos populares para vincularlos a la investigación de la masacre del barrio La Chinita en Apartadó. (Nota: Campos dura catorce años preso y sale, declarado inocente, en 2006). Después de las detenciones hay allanamientos y redadas para acabar con la influencia del PCC en la región donde es primera fuerza.

22 de febrero - Dejan en libertad a la alcaldesa de Arauquita, Elsa Rojas de

Fernández, de la UP, después de cuarenta y ocho días de cárcel por el presunto delito de rebelión.

1° de marzo - Aída Abella, presidenta de la UP, denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el asesinato de 2.339 militantes de la UP desde 1985.

13 de marzo - Las elecciones para Congreso, asambleas y concejos, están marcadas por el abstencionismo con un 70% y un retroceso de la izquierda, que no tuvo garantías. Manuel Cepeda es elegido como único senador de la UP. Salen el M-19 del Senado y la UP de la Cámara. El MOIR saca una curul al Senado con Jorge Santos, ex-dirigente de la USO.

19 de marzo - La Convergencia Nacional, de la que hace parte la UP, inscribe la candidatura de Alberto Mendoza Morales para la Presidencia.

26 de marzo - El Pleno del PCC hace un balance electoral. El PCC y la UP sacan en todo el país 50.044 votos, lo que es calificado como un importante logro en medio de la ofensiva paramilitar.

8 de mayo - En Dabeiba, la puerta de entrada al Urabá, centenares de campesinos realizan una marcha en defensa de la vida y corean consignas como “se vive, se siente, la UP de Dabeiba está presente”.

29 de mayo - Gana las elecciones presidenciales Samper en apretada diferencia con Pastrana y una abstención del 66%. La izquierda debe reflexionar sobre su papel pues su candidato Mendoza obtiene apenas veinte mil votos. En la segunda vuelta el PCC y la UP llaman a votar en blanco por ausencia de opciones populares.

11 de julio - Muertos tres sindicalistas de la USO en Barranca, elevando así a ochenta y uno los asesinados de este sindicato desde 1989. El 13 de julio, como protesta por el crimen, tiene lugar un paro en la refinería.

19 de julio - Es apresado el alcalde de Chigorodó, Urabá, Carlos Andrés Pérez, completándose así tres alcaldes detenidos de los cuatro de la región elegidos por la UP en el eje bananero. Previamente a su captura habían sido allanadas las sedes de la UP y PCC y la casa de la cultura.

Las FARC inician una ofensiva nacional llamada Operación Despedida en alusión a César Gaviria, con ataques a cuarteles y toma de poblaciones como La Calera, en la capital. Algunos empresarios anotan que la guerrilla casi desfila el 20 de julio en Bogotá.

20 de julio - Las FARC se dirigen al nuevo Congreso con motivo de su instalación, llaman a un “acuerdo de paz donde quepamos todos”, y señalan que la guerra total de Gaviria fue un fracaso al terminar el periodo presidencial.

28 de julio - Aparece en Medellín el grupo sicarial contra sindicalistas, Colombia Sin Guerrillas (COLSINGUE), y ese mismo día asesinan al destacado dirigente obrero, integrante de la Junta Nacional de la CUT, Guillermo Marín, miembro del PCC-ML. El 23 de julio había sido muerto el dirigente sindical Luis Efrén Correa, en Itagüí, y el 26 Jairo León Agudelo, en Salgar.

9 de agosto - Manuel Cepeda Vargas, el único senador del PCC y la UP, es asesinado por sicarios del Ejército dentro

de la Operación Golpe de Gracia, a pocas cuadras de su casa y cuando se dirigía al Congreso.

10 de agosto - Una delegación de la UP y el PCC, integrada por Álvaro Vásquez, Aída Abella, presidenta de la UP y Jairo Ramírez, se reúne con el ministro de Defensa, Fernando Botero, y el de Gobierno, Horacio Serpa. Exigen una investigación por el crimen de Cepeda y el abandono de la guerra integral para avanzar hacia la paz. Hernán Motta Motta entra a reemplazar a Cepeda en el Senado.

11 de agosto - En el sepelio de Cepeda el PCC plantea que “si el nuevo gobierno de Samper realmente tiene interés en superar el ciclo infernal de la violencia debe desmontar toda esa estructura de guerra y confrontación”.

19 de agosto - Las FARC responden al gobierno de Samper, afirmando que las posibles conversaciones deben culminar en un tratado de paz y se oponen a un diálogo secreto. Dicen que el primer encuentro es definitivo y piden garantías para realizarlo. El general Gil Bermúdez le resta importancia al documento y llama a ignorarlo debido a las acciones de guerra que las FARC realizan simultáneamente. La CUT convoca, el 9 de septiembre, una jornada nacional por la paz.

24 de agosto - La UP inscribe sus candidatos a corporaciones públicas locales y regionales y a alcaldías para las elecciones de octubre 30. Llama a superar los 236 concejales.

4 de septiembre - El Comité de Búsqueda de la Paz, creado a raíz del asesinato de Cepeda e integrado por organizaciones sociales y personalidades,

llama al presidente Samper a buscar caminos de paz a través de diálogos regionales y un diálogo multilateral con la guerrilla y la sociedad civil que incluya a las Fuerzas Armadas.

7 de septiembre - Es asesinada por militares de la VI Brigada, en Ibagué, tras reprimir una manifestación, Norma Patricia Galeano, secretaria general de la JUCO del Tolima y estudiante de octavo semestre de Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima.

15 de septiembre - Nueve ONG dedicadas a la investigación social y los derechos humanos, en un estudio publicado por *El Tiempo* sobre el asesinato de treinta y cinco personas en el barrio La Chinita de Apartadó, el 23 de enero de 1994, llegan a la conclusión que ni la UP ni el PCC son responsables del crimen. Sin embargo, son detenidas ochenta personas, entre dirigentes y militantes de la UP.

6 de octubre - El Concejo de Estado excluye al PCC de su membresía en el Consejo Nacional Electoral. *Voz* señala que “así las elecciones han quedado sometidas por otros cuatro años al dominio incontrolado del bipartidismo, verdadero cartel de la peor politiquería”.

11 de octubre - Un informe de la Conferencia Episcopal sobre derechos humanos y desplazamiento forzado en Colombia, que abarca un periodo de diez años (1985-1994, desde la fundación de la UP hasta la Operación Golpe de Gracia), señala que en dicho periodo fueron obligadas a desplazarse 586.261 personas, correspondientes a 108.301 familias, es decir, el 2% de la población del país.

27 de octubre - La presidenta de la UP, Aída Abella, señala en una declaración sobre las elecciones para alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas, que “culmina una campaña electoral difícil y compleja. Sobre nosotros estuvo siempre presente el peligro de los planes de exterminio del militarismo, así como el cerco informativo de los grandes medios que reflejan, con ventajismo bipartidista, la realidad política y electoral”.

30 de octubre - En las elecciones regionales y locales la UP obtiene trece alcaldes y diez diputados. Además, obtiene tres en alianzas, dos de ellos en acuerdos de convergencia, así como 165 concejales. En Bogotá la presidenta de la organización, Aída Abella, obtiene 20.853 sufragios, la cuarta votación más alta. La UP obtiene concejales en Barranquilla, Popayán, Pasto y Barrancabermeja. La abstención llega al 68%. La UP pierde las alcaldías de Turbo, Chigorodó, Coyaima, Tibú, San Alberto. Y saca alcaldes en Fortul, Arauquita, Montañita, Cartagena del Chairá, Cabrera, Viotá, Calamar, Uribe y El Castillo.

La UP mantiene, en relación a las elecciones locales de 1992, su presencia en los concejos. Aumenta su fuerza en las asambleas pero disminuye en las alcaldías, como las del eje bananero de Urabá. En Urabá no se podían esperar grandes éxitos con cuatro alcaldes detenidos y decenas de activistas presos. La elección de una alcaldesa de convergencia en Apartadó, con Gloria Cuartas, es un hecho significativo de las alianzas.

11 de noviembre - La DIJIN filtra un informe a la prensa, indicando que cincuenta y nueve alcaldes electos tienen

vínculos con la guerrilla, lo que rechaza el foro de alcaldes de Paipa. Todo apunta a una ofensiva contra diálogos de paz regionales, dice la UP.

17 de noviembre - Sicarios atacan con ametralladoras, pasadas las cinco de la tarde, la sede del PCC en Medellín, matando al activista de la UP Rodrigo Flórez y dejando gravemente heridos a dos militantes más. Uno de ellos, Óscar Chavarriaga, dirigente sindical, muere varios días después.

18 de noviembre - El Pleno del PCC valora resultados electorales, indicando que “las elecciones se realizaron en el marco de la guerra integral que heredó Samper del anterior Gobierno. La militarización de las zonas agrarias, la intimidación y hostilidad militaristas, principalmente en las regiones de influencia del PCC y la UP, impidieron la normalidad en la campaña y aseguraron el ventajismo bipartidista”.

Recuerda el Plan Retorno en Urabá, a través de los “comandos populares” del EPL y el Ejército, para arrebatarse a la izquierda las posiciones ganadas en tres alcaldías.

La UP de Cundinamarca, que eligió como su diputado a Luis Eduardo Calderón, ratifica su rechazo a la disidencia en la región, encabezada por el maestro Tarcisio Mora.

19 de noviembre - El presidente Samper presenta un plan de apertura al diálogo con la CGSB y otorga un reconocimiento, a diferencia del último periodo de Gaviria, como interlocutor político de la insurgencia para buscar una salida al conflicto armado interno. La propuesta reconoce que no es realista imponer condiciones previas

al diálogo, que hay que conversar “en medio de la guerra”.

22 de noviembre - El Consejo Nacional Electoral despoja a la UP de su personería jurídica. La UP llena los requisitos constitucionales porque obtuvo el 30 de octubre más de 103 mil votos, sin incluir los de coalición y alianzas, según el Artículo 4° de la Ley 30 de 1994, que señala que los partidos deben contar con un mínimo de cincuenta mil votos y tener representación parlamentaria. “Lo que pretenden las fuerzas reaccionarias es darle la muerte legal a la UP, lo que no lograron los sicarios a través de la violencia y los operativos de exterminio militaristas”, dice el PCC.

2 de diciembre - La UP denuncia el plan paramilitar llamado “La serpiente negra” para desterrar a la UP de la región del Ariari; los paramilitares adscritos a este plan ocupan, el 13 de noviembre y a sus anchas, el casco urbano de la Inspección de Policía de Medellín del Ariari, municipio de El Castillo, lo que provoca éxodo campesino en la región, donde la influencia de la UP y PCC es notoria.

1995

17 de enero - Dos documentos firmados por las fuerzas vivas de Urabá, dirigidos al ministro del Interior, Serpa, y al presidente Samper, señalan que es necesario buscar la paz y que se aplique la propuesta de Apartadó como Distrito Especial de Paz. Entre los firmantes se encuentran el Partido Liberal, Partido Conservador, PCC, UP, Movimiento de Negritudes, Asociación de

Juntas Comunales y Esperanza, Paz y Libertad.

9 de febrero - Julio César Pachón, asesor de la UP, afirma en el *Semanario Voz* que hay 2.456 procesos, de igual número de militantes de la UP asesinados, que se encuentran en la etapa preliminar y ni siquiera se ha abierto sumario. “Existe interés en que las investigaciones no prosperen”.

10 de febrero - El PCC y la UP envían una carta a la CIDH para que se investiguen los crímenes contra la UP y solicitan una comisión especial como la que estudió el caso de la masacre de Trujillo.

11 de febrero - Continúa el Plan Retorno, auspiciado por el general Rodolfo Torrado Quintero, quien lo implementó en diciembre de 1993 y que consiste en sacar a los comunistas de las administraciones municipales de Urabá “para que haya paz”.

16 de febrero - Se anuncia que hubo un cruce de cartas entre las FARC y el Alto Comisionado de Paz, Carlos Holmes, con el fin de concretar un encuentro entre el Gobierno y la guerrilla que se puede dar en La Uribe, por lo cual, las FARC piden su despeje.

Arrecian las protestas campesinas en Guaviare, Putumayo y Meta contra las fumigaciones y la violencia paramilitar.

17 de febrero - Culminan en Washington las sesiones de la CIDH para estudiar varios casos, entre ellos el de la UP. Reiniciar había interpuesto una denuncia y la había transmitido al gobierno de Samper, que la rechazó cuestionando que no se tipifica el genocidio y solicitó a la CIDH no admitirla.

23 de abril - Se instala en Medellín la Comisión para la Verificación de la Existencia de los Comandos Populares, Milicias Bolivarianas, paramilitares y demás factores de violencia en Urabá, con la presencia del ministro Serpa; el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe; el Fiscal General; el Procurador General; el defensor del pueblo; monseñor Isaías Duarte Cancino; el comandante del Ejército y el director general de la Policía. El gobernador Uribe respalda el llamamiento de la Comisión Facilitadora, instalada el 25 de abril, sobre el mismo tema y planteando una tregua de tres meses. El PCC anota que esta comisión será viable si se vuelve vigente la vía civilizada y pacífica para la solución del ingrediente regional del conflicto, en la que el eje fundamental no haría tanto énfasis en la judicialización sino en el desmonte de los actores armados.

4 de mayo - El ministro de Gobierno recibe una delegación del PCC y la UP. Aída Abella dice a la prensa al salir de la reunión: “Aquí no pasa nada”, en alusión a que el Gobierno no atendió las peticiones de la UP sobre el genocidio, pues esta pidió una comisión similar a la masacre de Trujillo. No hay respuestas. Abella señala que “ojalá que la próxima vez que nos encontremos con el Gobierno Nacional estemos vivos todos los dirigentes que estuvimos hoy en esta reunión”.

6 de mayo - El gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, propone que en los municipios donde sean asesinados los alcaldes o estos tengan que desplazarse por amenazas, sean nombrados en su reemplazo alcaldes militares. El PCC de Antioquia rechaza esta

posición. La posición de Uribe desconoce, dice el PCC, el deber del Estado de proteger la vida y el desempeño de las funciones de los alcaldes populares y sólo puede contribuir a abrirle espacio a la política militarista.

24 de mayo - En los diez años de la UP, el senador Motta Motta declara que “la supervivencia de la UP significa la más grande demostración de fortaleza moral y política en la lucha por la paz, los cambios democráticos y el progreso social en Colombia. Llama la atención que a diez años, siga persistiendo la intolerancia, el autoritarismo y el estilo excluyente”.

8 al 10 de junio - Se reúne el Seminario Nacional por la Paz con asistencia de más de mil quinientos delegados de todo el país y llama a las conversaciones de paz. Las FARC en su mensaje reiteran su disposición a conversar pero piden el despeje de La Uribe.

14 de junio - *Voz* publica una denuncia sobre los crímenes de los paramilitares en Urabá y cita que la ley le permite a la Fuerza Pública actuar contra ellos: se trata del Decreto 814 del 19 de abril de 1989 que dice: “Establécese la creación del Cuerpo Especial Armado contra los Escuadrones de la Muerte, bandas de sicarios, grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente llamados paramilitares, integrados hasta con mil efectivos tomados del personal de Policía, escogidos por el director de la Policía, quien fija las funciones de este cuerpo especial, su dotación, la asistencia y colaboración de las Fuerzas Armadas, el DAS” y le señala recursos presupuestales.

21 de junio - Las FARC dan a conocer sus propuestas contenidas en una “Plataforma para el diálogo”, de diez puntos para un “Gobierno de reconciliación, patriótico, pluralista y democrático”.

22 de junio - El gobierno de Samper le señala un ultimátum a las FARC, fijándoles como máximo la fecha del 7 de agosto de 1995 para conversar y con un despeje de tropas por sesenta días en Uribe, Meta; la guerrilla responde exigiendo el despeje total de La Uribe y no sólo el área urbana. No se pueden condicionar los diálogos y fijar plazos, “eso es inconveniente”, anota Aída Abella.

19 de julio - Según las estadísticas en menos de un mes, de junio 6 a julio 19, han sido asesinadas treinta y ocho personas en Urabá. El PCC declara que “la ultraderecha pretende repetir en el eje bananero, que ha sido un bastión de las luchas populares de influencia de los comunistas y de la UP, la experiencia del exterminio físico de dirigentes y militantes como ocurrió en Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Cimitarra, Yacopí y otros municipios de influencia comunista, en donde a bala fuimos desterrados. Es lo que en Urabá se llama el Plan Retorno”.

26 de julio - Estalla el escándalo de corrupción de Santiago Medina, tesorero de la campaña presidencial de Ernesto Samper y que da lugar al Proceso 8000, que revela el financiamiento del cartel de Cali al Partido Liberal. Renuncia el Alto Comisionado de paz, Carlos Holmes Trujillo, y días más tarde el ministro de Defensa, Fernando Botero Zea.

2 de agosto - El director nacional de quejas de la Defensoría Nacional del

Pueblo, Alejandro Valencia Villa, denuncia que quince mil personas han abandonado Urabá por la violencia paramilitar, y admite que hay impunidad e intolerancia con grupos como las autodefensas (AUC).

13 de agosto - El comandante del Ejército, Jaime Bedoya, rechaza la desmilitarización de La Uribe para las conversaciones de paz con las FARC. El presidente Samper decide no despejar dicha región.

14 de agosto - Fernando Lombana Martínez, líder agrario del Tolima, es asesinado en Bogotá. Lombana es acribillado cuando participaba en una manifestación de los empleados de las empresas públicas de Bogotá. Él había inculcado al comandante de la VI Brigada del Tolima por la campaña macartista contra los pequeños caficultores.

18 de agosto - Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, se aprueba una resolución sobre la grave situación de derechos humanos en Colombia, que expresa su “profunda perturbación” por la persistencia de la violencia.

23 de agosto - El senador conservador Fabio Valencia Cossio denuncia en la plenaria del Senado que, desde que Álvaro Uribe Vélez se posesionó como gobernador de Antioquia, la violencia se ha incrementado en el departamento a causa de la proliferación de las acciones de los grupos de autodefensas o paramilitares. Uribe respaldó públicamente la creación y legalización de las cooperativas rurales de vigilancia. Valencia Cossio revela que entre enero y julio de 1995, sin contar las masacres recientes de Urabá, se han presentado 558 muertes violentas en la región

bananera, cifra que supera el número de víctimas de 1994 que fueron 468.

28 de agosto - Es asesinado a tiros el presidente nacional de la Asociación de Usuarios Campesinos, William Gustavo Jaimes Torres, en la propia sede de ANUC en Bogotá. Organizaciones de Derechos Humanos rechazan la declaración del Estado de Conmoción Interior al ministro del Interior, Horacio Serpa. Masacre de dieciocho obreros agrícolas en Carepa desata un paro en trescientas plantaciones de banano en Urabá, Antioquia.

7 de septiembre - El Fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento, en oficio dirigido al representante a la Cámara por la UP, Nelson Viloria, reconoce que la Unión Patriótica ha sido víctima de un genocidio.

14 de septiembre - Cinco trabajadores bananeros de la Vereda Pueblo Galleta, Turbo, Urabá, son sacados de sus viviendas a las cinco de la mañana y decapitados. Todos eran de la UP, que pide una veeduría internacional para Urabá.

18 de septiembre - Veintiséis trabajadores de una finca bananera de Apartadó, de influencia de Esperanza Paz y Libertad, son masacrados, presuntamente por el Frente 5° de las FARC, hecho desmentido por este.

2 de noviembre - Es asesinado en Bogotá el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. La UP y el PCC condenan el asesinato y llaman a trabajar por una alternativa de concordia y justicia social.

9 de noviembre - Los parlamentarios Nelson Viloria de la UP y Janet Suárez del M-19 denuncian en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, con la

asistencia del Fiscal de la Nación, la guerra sucia en el Meta contra la UP, con un saldo a la fecha de treinta y siete masacres, 613 asesinatos, 147 desapariciones y setenta y nueve casos de torturas.

20 de noviembre - Jaime Caycedo, dirigente del PCC, se dirige al presidente Ernesto Samper denunciando la violencia en Urabá, y otras regiones del país, contra la UP y los comunistas. Exige el cese de las amenazas y atentados.

1° y 2 de diciembre - Sesiona el XVIII Pleno Nacional de la UP, ratifica su vigencia política y rechaza la derechización del gobierno de Samper. Denuncia el plan paramilitar de Carranza en el Meta y se suma al movimiento ciudadano que preside el sacerdote Bernardo Hoyos. Aída Abella, presidenta de la UP, señala que doscientos cincuenta activistas se encuentran amenazados de muerte. La votación de la UP en el año 1994 fue de 123 mil votos. En 1996 la UP contaba con trece diputados en las asambleas de Arauca, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Huila, Caquetá y Guaviare.

1996

11 de marzo - Renuncia el comandante general de las Fuerzas Armadas, general Camilo Zúñiga, por presiones de sus colegas por haber aceptado sin protestar la sanción de la Procuraduría al general Álvaro Velandia, caracterizado enemigo de los derechos humanos durante décadas.

15 de marzo - Sigue la campaña de todos los sectores contra el presidente Samper, para que renuncie por el Proceso 8000. Preparan paro empresarial para tumbarlo.

27 de marzo - El PCC denuncia que conoció un informe de fuentes militares para una Operación Golpe de Gracia 2, con el fin de eliminar la dirección del partido.

30 de marzo - “Raúl Reyes” se reúne en Costa Rica con delegados del Gobierno de Estados Unidos y con el excanciller Ramírez Ocampo, para buscar caminos de paz y diálogo.

3 de abril - Paramilitares incursionan en el Barrio Policarpa de Apartadó y masacran a diez militantes de la UP.

7 de mayo - La concejal de la UP por Bogotá, Aída Abella, sale ilesa de un atentado con bazuca en la calle 137 con Autopista Norte.

8 de mayo - El general Bedoya, comandante de las Fuerzas Militares, justifica en San Rafael, Santander, la presencia de grupos paramilitares.

9 de mayo - Es asesinado en Medellín Oswaldo Olivo, concejal de Apartadó, miembro del Comité Central del Partido Comunista, dirigente de SINTRA-INAGRO y de Provivienda, quien había denunciado en la Asamblea de Antioquia la confabulación del Ejército y paramilitares en Urabá.

16 de mayo - El PCC denuncia la campaña de propaganda negra, que trata de confundir a la militancia, sobre una supuesta división interna.

20 de mayo - La Corte Constitucional avalla el Estado de Excepción por noventa días, para conjurar los efectos del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado ocurrido el 2 de noviembre de 1995.

7 de junio - El comandante del Ejército, Bedoya Pizarro, increpa a la Fiscalía porque “ha puesto en libertad a 5.500 subversivos”. El ministro de Defensa

Juan Carlos Esguerra, apoya al fiscal, que desmiente las aseveraciones del comandante, pero después se retracta diciendo que está de acuerdo con Bedoya.

8 y 9 de junio - Se reúne el Pleno del Comité Central del PCC, nombra a Jaime Caycedo como secretario general y llama a preparar el XVII Congreso. Convoca a la salida política de la crisis y al diálogo.

20 junio - Es asesinado en Villavicencio Pedro Malagón, exconcejal de El Castillo, Meta, dirigente de la UP y miembro del Comité Central del PCC, junto a su pequeña hija.

7 de julio - Detona una bomba en la sede del PCC y la UP en Medellín.

11 de julio - “Manuel Marulanda” le responde una carta a Augusto Ramírez Ocampo, donde propone abrir caminos de diálogo.

15 de julio - Más de diez mil campesinos marchan en San José del Guaviare, en protesta por las fumigaciones y la represión militar. Guaviare es declarada zona especial de orden público.

18 de julio - Antonio Puentes, dirigente de la UP del Huila, asume la presidencia del movimiento tras la marcha al exilio de Aída Abella.

20 de julio - El Ejército arremete contra los campesinos, dejando numerosos heridos y cuatro desaparecidos en El Retorno, cuando marchaban hacia la capital de Guaviare.

18 de septiembre - El Congreso designa como vicepresidente de la República, en reemplazo de Humberto de la Calle, a Carlos Lemos Simmonds, quien en la Administración Barco, como ministro de Gobierno, acusó a la UP de ser el brazo político de las FARC y, dos

días después, cayó asesinado Bernardo Jaramillo.

30 de septiembre - Ante la ofensiva guerrillera, Samper anuncia que llamará a filas a los reservistas.

15 de octubre - En la Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), los candidatos presidenciales Juan Manuel Santos, (quien propuso un fujimorazo para detener el avance de la subversión y la corrupción), Sanín, De la Calle y el ministro Serpa defienden la salida militar al conflicto armado interno.

Es asesinado en Apartadó Albeiro Bustamante, dirigente de la UP de Urabá, y exmiembro del Comité Central del PCC.

16 de octubre - Importante grupo de empresarios se pronuncia por la paz después del evento de ANIF y pide una solución al conflicto y diálogo. Entre los firmantes se encuentran, entre otros, la directora de *El Colombiano*, Ana Mercedes Gómez; César González, de Asobancaria; Juan Manuel Ospina, de la SAC; José Fernando Isaza, de la CCA; Augusto Ramírez Ocampo y Rodrigo Escobar Navia.

Noviembre - En una finca de Fidel Castañón, en Córdoba y en la cara de las autoridades, se reúne la tercera cumbre de las Autodefensas, que confirman la ayuda que reciben del Ejército, según informaciones de la prensa.

7 de noviembre - El ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, afirma que no hay ningún auge del paramilitarismo.

12 de noviembre - El Senado aprueba la extradición con el voto en contra de la UP, a través de Hernán Motta Motta,

quien la condena y rechaza porque vulnera la soberanía nacional.

24 y 25 de noviembre - El Pleno del Comité Central del PCC plantea que Samper va hacia un Gobierno de guerra como elemento prioritario.

22 de diciembre 1996 - Una bomba de alto poder explosivo estalla en las puertas de la sede del *Semanario Voz*, en el centro de Bogotá, destruyendo gran parte del edificio.

1997

5 de enero - Del 31 de diciembre de 1996 al 22 de enero de 1997, la prensa da cuenta de masacres en Dabeiba, Pore y Paz de Ariporo, con dieciocho personas asesinadas por paramilitares. En Yondó, campesinos afirman que entre el 8 de noviembre y 25 de diciembre de 1996, fueron muertas once personas y seis se encuentran desaparecidas.

8 de enero - Yondó es azolada por las autodefensas como represalia por la marcha campesina por el río Cimitarra. Se habla de varios muertos y centenares de desplazados.

11 de febrero - Tiene lugar en todo el país un paro nacional estatal y hay marchas y manifestaciones en todas las plazas. Se llena la Plaza de Bolívar.

15 de febrero - Un numeroso grupo de concejales desplazados de Urabá y Sucre, en representación de más de treinta ediles, denuncian el terror militarista y el fraude electoral para las próximas elecciones.

27 de febrero - Un atentado dinamitero en Apartadó deja diez muertos y cincuenta y tres heridos, en hechos condenados por la UP y el PCC.

7 de marzo - Es asesinado en Bogotá Víctor Julio Garzón, secretario general de Fensuagro.

20 de marzo - Se reúne una delegación del PCC con el ministro de Gobierno, Horacio Serpa, para exigir garantías a su trabajo político y señala que hay más de 3.500 dirigentes asesinados en los últimos años.

26 de marzo - El nuevo ministro de Defensa, Gilberto Echeverry Mejía, declara que la paz debe asumirse como una política de Estado y no como un tema coyuntural, lo que es saludado por las FARC.

1° de abril - En el 95 Periodo Binario de Sesiones, la CIDH admite la demanda presentada por Reiniciar para que se declare al Estado colombiano responsable del genocidio de la UP.

5 y 6 de abril - El Comité Central del PCC aprueba la participación en las elecciones de octubre y exige el retiro del general Harold Bedoya como comandante del Ejército.

8 abril - La Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Representantes, solicita al Gobierno desmontar las cooperativas de seguridad, CONVIVIR.

11 de abril - Se reúne la Cumbre Política Nacional de Reflexión por la Paz, con la participación del presidente Samper, los ministros de Defensa, Gobierno y Justicia, representantes de ONGs de Derechos Humanos, los gremios, partidos políticos, el Senado, la Cámara y la Iglesia y acuerdan que la Comisión Nacional de Paz se encargue de manejar las conversaciones entre el Gobierno y la insurgencia. El gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, desprecia la cumbre porque declara a la guerrilla como un actor político.

2 de mayo - El ministro de Defensa, Gilberto Echeverry Mejía, en un debate en la Cámara afirma: "Creo en el diálogo, lo apoyo y me la juego", y lee una propuesta de paz del nuevo comandante del Ejército, Manuel José Bonnet, que coincide con el ministro, mientras el comandante de las Fuerzas Armadas, Harold Bedoya, sostiene la tesis de la guerra integral.

11 de julio - La dirección de la UP se reúne con el ministro de Gobierno, Carlos Holmes Trujillo, en la sede del movimiento y acepta la iniciativa de una cumbre nacional de todos los partidos políticos para discutir las garantías electorales.

25 de julio - El presidente Samper destituye al comandante de las Fuerzas Armadas, Harold Bedoya, y en su reemplazo es nombrado Manuel José Bonnet Locarno.

Falla un atentado contra la sede de la UP en Bogotá; un agente de la Policía impide la colocación de una bomba con más de cincuenta kilos de dinamita. El dragoneante Roque Espinosa Valencia, que se enfrentó a los terroristas, fue acribillado, muriendo momentos después.

26 de julio - Tiene lugar la masacre en Mapiripán, por parte de paramilitares, con el asesinato de más de veinte personas y una veintena de desaparecidos, zona de influencia de la UP.

28 de julio - El PCC declara que la oposición de izquierda no tiene garantías en el proceso electoral.

21 de octubre - El PCC informa a la opinión pública que el senador de la UP y del PCC, Hernán Motta Motta, de

acuerdo a la dirección, deberá abandonar el país por las amenazas de que es víctima. De esta manera la Unión Patriótica se queda sin representación parlamentaria. Motta había reemplazado al asesinado senador Cepeda el 9 de agosto de 1994.

26 de octubre - Tienen lugar las elecciones regionales. El hecho político más importante de la jornada es el Mandato por la Paz, que votan más de cuatro millones de colombianos.

28 de octubre - El PCC y la UP, en un balance electoral, denuncian que por la falta de garantías las listas de estas dos organizaciones para los comicios de alcaldías, concejos, asambleas y gobernadores, se vieron menguadas por la guerra sucia. La UP obtiene veintitrés mil votos en todo el país con listas propias, y cuarenta y dos mil en alianzas. La UP logra cuatro diputados, todos en Arauca.

El Consejo de Estado condena a la Nación como responsable del asesinato de Jaime Pardo Leal, al no haberle asegurado la protección a pesar de las continuas amenazas.

23 de noviembre - Paramilitares perpetran una masacre en Tocaima. Dejan catorce campesinos asesinados, entre ellos varios simpatizantes de la UP, en una zona de influencia de este movimiento.

Paramilitares perpetran una masacre en la vereda La Magdalena, en el Carmen de Atrato, Chocó, asesinando a cinco labriegos. Además, en el Aro, entre Puerto Valdivia y Tuango, Antioquia, son masacrados seis campesinos.

7

Haciendo memoria



Página anterior: Brigada de propaganda fijando carteles alusivos al Primer Congreso Nacional de la Unión Patriótica, reunido del 14 al 16 de noviembre de 1985, en Bogotá, bajo la consigna Paso a la Paz.
(Foto: Lara, *Semanario Voz*)



Aída Abella el 8 de marzo de 1992, en plena campaña de agitación el día de elecciones, donde resultó electa para el Concejo de Bogotá por las listas de la Unión Patriótica. (Foto: Lara, Voz)

——— Aída Abella

Los altos mandos militares hacían listas de los condenados a muerte de la UP y se jactaban de ello

Aída Abella ha sido una de las más aguerridas dirigentes sindicales del país. Desde muy joven, en el Ministerio de Educación, se destacó en la defensa de los intereses de los trabajadores. Salió electa como concejal de Bogotá en 1992, con una de las votaciones más altas de la izquierda en la capital. Fue elegida en 1990 a la Asamblea Nacional Constituyente y en 1991, un Congreso de la Unión Patriótica, en plena guerra sucia, la escogió como presidenta de la organización. Se marchó al exilio pocos días después de sufrir un grave atentado el 7 de mayo de 1996, cuando sicarios intentaron lanzar un *rocket* contra el carro en que se movilizaba. Desde Europa continúa su actividad política, fundamentalmente en defensa de los derechos humanos. En junio de 2011 se le vio en varios mítines en Francia contra la presencia del expresidente Uribe en la Escuela de Ingenieros de Metz, que lograron su renuncia a una cátedra que regentaba

allí. Estas son las primeras declaraciones, después de muchos años, de la reconocida dirigente de la UP, quien también envió un video de saludo al acto de perdón del Estado por el crimen del senador Manuel Cepeda, que tuvo lugar en el Salón Elíptico, con el Congreso de la República en pleno, el 9 de agosto de 2011.

No tenemos Estado de sitio permanente, pero las amenazas y asesinatos continúan

Hablemos de sus inicios en la vida política. ¿Cuál era el panorama político cuando nace el movimiento y cómo llega a la presidencia de la Unión Patriótica?

—Siempre que me preguntan sobre algo relacionado con la Unión Patriótica, no puedo dejar de rendirle homenaje a todos nuestros compañeros que cayeron en el gran patíbulo que se llama Colombia. Son las presencias ausentes que llenan nuestros recuerdos y nuestra vida.

Cuando nació la UP en 1985, mi actividad política principal estaba dirigida al movimiento sindical. Ocupaba la Presidencia de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (FENALTRASE) y la Presidencia del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Nacional (SINTRENAL), al cual me había vinculado desde 1971. También hacía parte del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC).

En esa incansable lucha por la paz, con reformas sociales que hicieran de Colombia una verdadera democracia, donde se superara ese concepto mezquino de asimilar democracia con el depósito de votos un día cualquiera, y como resultado de los Acuerdos firmados en La

Uribe entre la insurgencia y el Gobierno, se crea en 1985 la Unión Patriótica. Muchos sectores populares se vincularon de forma entusiasta para apoyar este novedoso proyecto de paz. Se veía como la esperanza, como algo diferente, con personas que no habían estado en la política tradicional, con luchadores por cambiar esa política asfixiante que se respiraba por todas partes y que se traducía en una alta abstención.

El manejo bipartidista que se le daba a la política desde los tiempos de la supuesta “independencia” y que se acentuó en el periodo del Frente Nacional, había borrado del mapa político colombiano cualquier partido o movimiento político diferente al liberal y conservador, que en el fondo eran lo mismo. La única diferencia era el color de su bandera, roja o azul. La inconformidad no se podía manifestar pues el Estado de sitio permanente o Estado de Excepción, la alta militarización, o las formas despóticas como se ejercía el poder, impedían demostrar la inconformidad.

Las manifestaciones eran reprimidas, las huelgas prohibidas y declaradas ilegales, mientras campeaban los despidos injustificados, las detenciones arbitrarias, los seguimientos a la dirigencia sindical y a los políticos y militantes de oposición. Las amenazas, que eran frecuentes, las interceptaciones telefónicas, los allanamientos de casas y oficinas también hacían parte de las prácticas del poder. Con el Estatuto de Seguridad, en el gobierno de Turbay Ayala, entre 1978 y 1982, se recrudeció la ola de allanamientos. Los gendarmes llegaban a las casas muy temprano, entre las cuatro y cinco de la mañana, bloqueaban las vías

de acceso a las viviendas con camiones del Ejército sin placas, vestidos de civil, con ruanas y, debajo de ellas, las metralletas. Requisaban todo, hasta las ollas. Se llevaban lo que querían, libros, cartas personales, las cuitas de los enamorados, retratos de familia, pasaportes, dinero y hasta las joyas. A las personas en Bogotá las conducían a las caballerizas militares de Usaquén, en la carrera Séptima con calle 107. Los cuarteles se convirtieron en centros ilegales y clandestinos de reclusión donde no eran extrañas las torturas. Muchos murieron víctimas de estos procedimientos prohibidos por la ley.

Me acuerdo de Darío Arango, de Puerto Berrío, Antioquia. El 7 octubre de 1979, este dirigente popular, vicepresidente del Concejo, donde había llegado por las listas de la Unión Nacional de Oposición, líder del sindicato del río Magdalena, un hombre muy alto y corpulento, militante comunista, fue asesinado de esa manera.

En 2011 las cosas no han cambiado. No tenemos Estado de sitio permanente, pues la Constitución de 1991 lo abolió. Ahora se amenaza y luego se asesina sin fórmula de juicio. En muchos de estos crímenes están vinculados por omisión, colaboración o ejecución directa, miembros de las Fuerzas Armadas, que están instituidas para proteger a los ciudadanos, convirtiéndose todas estas prácticas en evidentes crímenes de Estado.

Desde siempre la política y los cargos de dirección de la administración pública se emplearon para el enriquecimiento personal. Se llenaron sus bolsillos y los de sus familiares, y por eso defienden esta pantomima de “democracia”, donde el Estado está al servicio, no sólo de las clases

dominantes, sino también de los nuevos ricos y sus sirvientes. La corrupción se desborda en todos los sectores de la empresa privada y la administración pública.

Había una fatiga en la población que esperaba ver gente nueva en la política, con opiniones diferentes. Los que ayudamos de cerca en la primera campaña electoral de la Unión Patriótica, bajo la conducción de Jaime Pardo Leal, en 1986, sentimos esa gran oleada fresca del pueblo en los sindicatos, barrios, sitios de trabajo, en las calles y plazas. El día de las elecciones muchas personas, especialmente jóvenes, pedían las papeletas de las listas que encabezaban los comandantes guerrilleros que hacían política con las banderas de la UP tras los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz, firmados entre el gobierno de Betancur y las FARC. Generalmente sus nombres eran diferentes en la vida real y costaba trabajo convencer a los electores que se trataba de los mismos compañeros, sólo que para los comicios tenían que figurar como aparecían en sus cédulas.

El 9 de diciembre de 1990 tienen lugar las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Ese día salimos elegidos con Alfredo Vásquez Carrizosa, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en la lista Por la Vida y los Derechos Humanos, la número 8. Una vez culminó sus labores la ANC el 4 de julio de 1991, promulgando una nueva Carta, se eligió la Asamblea Nacional Legislativa, popularmente llamada “el Congreso”, del cual hice parte. El 14 y 15 de diciembre de 1991 se realizó el Congreso Extraordinario de la UP. Allí me escogieron como presidenta del movimiento.

En plenas deliberaciones de la Constituyente, llamada a ser un nuevo pacto de paz, a diario asesinaban militantes de la UP

Usted salió electa para la Asamblea Nacional Constituyente en 1990, cinco años después del nacimiento de la Unión Patriótica, sin embargo mientras se desarrollaban las deliberaciones en esa institución, que debería llevar al país a un tratado de paz, continuaba la matanza.

—Las actas de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y las de la Asamblea Nacional Legislativa, el Congreso, que funcionó unos meses después de firmada la Constitución en julio de 1991, están regadas con la sangre de nuestros compañeros. Los cientos de asesinatos fueron denunciados, generalmente al comienzo de las sesiones. Durante este periodo se continúa con el genocidio. Un día después de instalada la ANC, el 5 de febrero de 1991, encuentran la muerte a manos de unidades del Batallón Granada los humildes trabajadores Esteban Coronado y su hijo Carlos López, en Barrancabermeja. Detenidos y vendados, fueron conducidos a un carro del Ejército. Posteriormente sus cuerpos aparecieron abaleados y la versión de los diarios locales fue la de siempre: se trató de guerrilleros muertos en combate. Y la última denuncia, el asesinato de Juan Carlos Álvarez, en Segovia, Antioquia, el 19 de noviembre de 1991, minero y dirigente de la UP en esa región, capturado al salir de su turno de trabajo a las cinco de la mañana y horas más tarde encontrado su cadáver con signos de tortura e impactos de bala en la cabeza. Hay que anotar que varios generales asistían diariamente a las deliberaciones de la ANC, lo que para

mí era un hecho completamente irregular que denunciaba permanentemente en las sesiones, porque se percibía como una coacción, pero siguieron campantes. Se situaban en el ala derecha de la presidencia de la corporación. Conocían de primera mano las denuncias públicas que hacíamos, pero no se les daba nada. En plenas deliberaciones de la Constituyente, llamada a ser un nuevo pacto de paz entre los colombianos, asesinaban a nuestros militantes de la UP día a día.

En esos cinco años transcurridos desde la fundación de la UP a la instalación de la ANC, el movimiento había sido víctima de matanzas selectivas, masacres de la peor barbarie como la de Segovia, en Antioquia, el 11 noviembre de 1988, que dejó cuarenta y tres muertos y decenas de heridos; la de Piñalito, en el Meta, en junio de 1988; desapariciones y amenazas en todas las regiones del país. En 1986 comienza la aplicación del operativo militar conocido como El Baile Rojo, dirigido contra los congresistas de la Unión Patriótica recién elegidos. El 30 de agosto de 1986 asesinan a Leonardo Posada, electo representante a la Cámara por el pueblo de Barrancabermeja y dos días después, el 1° de septiembre, cae víctima de los sicarios el senador Pedro Nel Jiménez en la puerta del colegio de su hija en Villavicencio, quien presenció la muerte de su padre. Eran los primeros congresistas de la UP sacrificados. Esto concitó la protesta nacional y me acuerdo que comenzó a corearse una consigna creada espontáneamente por el pueblo y que prendió en todo el país: ¡Sí señor, cómo no, el Gobierno lo mató!, y que sintetizaba lo que cada uno de nosotros sentía ante el exterminio. El mensaje era claro: los elegidos deberán morir por

el solo hecho de pertenecer a la UP. En esos momentos cundía la preocupación en el común de las gentes, preocupación que fue diluyéndose ante los crímenes que no daban tregua. La sociedad, y eso es lo que querían los enemigos de las libertades democráticas, comenzaba peligrosamente a acostumbrarse a la muerte como en las peores épocas de La Violencia.

El terrorismo de Estado explica el genocidio contra la UP

¿Cómo explicar semejante situación de violencia sistemática contra una nueva alternativa política que naciera de unos Acuerdos de Paz?

— El terrorismo de Estado que se le aplicó a la Unión Patriótica, apenas esta nació, fruto de un acuerdo de paz entre el gobierno de Betancur y las FARC en 1984, se denunció desde el primer momento. Basta con mirar los comunicados de la UP. Por ejemplo, uno de enero de 1986 anotaba: “El debate electoral para renovar las corporaciones públicas y elegir Presidente de la República, se realiza en medio de grandes restricciones que limitan los derechos y garantías de las fuerzas democráticas y particularmente de la Unión Patriótica. Al amparo del Estado de sitio, el militarismo hostiga y monta provocaciones en las regiones de influencia de nuestra organización, creando un clima de tensiones dirigido a imponer la suspensión de los comicios allí donde la UP y otros movimientos no tradicionales pueden obtener resultados favorables”.

Entonces, la práctica sistemática del terrorismo de Estado explica el genocidio contra la UP. La oligarquía dominante puso en práctica estrictamente las

concepciones de la Doctrina de la Seguridad Nacional y del “enemigo interno”, diseñadas en la Escuela de las Américas y en el Comando Sur de EE.UU. Las mismas que aplicaron todas las dictaduras del Cono Sur. En Colombia no era necesaria una dictadura. Han adaptado la “democracia” de tal manera que cometen crímenes peores que en los regímenes despóticos, a nombre de ella. No tengo ninguna información que dé cuenta que en la época de Pinochet se hubiera utilizado la motosierra para el descuartizamiento de personas, hornos crematorios o el lanzamiento de personas vivas o muertas a ríos infestados de caimanes, para citar algunos casos tenebrosos de lo que ha pasado y sigue sucediendo en Colombia. En todo este análisis de lo que pasó con la Unión Patriótica no se puede dejar de lado el estudio de documentos como los de Santa Fe 1°, 2° y 3°, que fueron manuales perfectos para consolidar el proyecto contrainsurgente en Colombia y que llenó de sangre, terror y lágrimas todos los rincones del país.

Desde un principio todos sabíamos que el terrorismo de Estado estaba operando, que detrás de las masacres, desapariciones, asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados, estaban, como aún lo están, las Fuerzas Militares, los terratenientes, la burguesía, los políticos liberales y conservadores, pero en las dimensiones que se han conocido por las revelaciones de los jefes paramilitares, jamás.

Sin embargo, el país no logró impedir este baño de sangre con su movilización y protesta.

— Creíamos que había reservas democráticas capaces de detener este baño de

sangre. Creíamos que las gigantescas movilizaciones que se daban frente a los asesinatos tendrían alguna repercusión. Nos equivocamos. Eso sucede en las democracias de verdad, donde las manifestaciones de los ciudadanos tienen efectos casi inmediatos en la conducción de las políticas de los gobernantes. Estamos frente a la burguesía más asesina de América Latina, capaz de desaparecer físicamente al adversario político para conservar sus privilegios. Convirtieron a Colombia en un patíbulo, donde se ejecuta la pena de muerte en cualquier parte, en una oficina de una Asamblea Departamental, en la casa, en un bus interurbano, en un restaurante, en la iglesia, en el camino veredal, en la carretera, en la sede sindical o política, a la entrada de un colegio, en la escuela donde se dicta clase, en la universidad, en la finquita, en la calle, a plena luz del día o en la sombras de la noche. No hay sitio vedado.

Se nos olvidó que la violencia que ha sacudido a Latinoamérica tiene sus raíces profundas desde la Conquista, donde la política y la religión se impusieron a sangre y fuego, cuando las chozas de los indios fueron saqueadas con una cruz en la mano. Comprobamos que la cúpula de la Iglesia Católica colombiana, una de las más retrógradas del continente, siempre ha estado al lado del poder. Al igual que en Argentina, guardó un sepulcral silencio ante el genocidio de la izquierda. Ningún pronunciamiento. Sus iglesias no abrieron las puertas a los perseguidos como en Chile, en la época de Pinochet; por el contrario, se negaron a celebrar entierros como lo pedían algunas familias. Todos recordamos el comportamiento de Monseñor Pimiento, en

Manizales, cuando la familia de Bernardo Jaramillo rogó una misa en su entierro. Se negaron. Podemos hablar de una cierta complacencia que contradice los principios cristianos.

La izquierda deja sola a la Unión Patriótica

¿Y qué pasó con el resto de la izquierda frente al genocidio de la UP?

—Dolorosamente tuvimos que presenciar la entrega del M-19 y su asimilación al Establecimiento. Para sobrevivir doblaron las rodillas, se entregaron al poder como si aquí no hubiera pasado nada y frente al peor genocidio político en la historia del continente.

Ever Bustamente, otrora destacado jefe de ese movimiento, me lo dijo en una reunión del Consejo Nacional Electoral en 1991: “No queremos transitar el camino de la Unión Patriótica, por eso no somos oposición”. Y Navarro Wolff lo confirmó en un encuentro que tuve con él, como lo hicimos con todos los partidos que contaban con miembros elegidos a la Asamblea Nacional Constituyente. Estábamos haciéndole campaña al cambio del capítulo de la Fuerza Pública para la nueva Constitución, sobre todo en la definición de los delitos militares. Su respuesta fue contundente: “Todavía nos ven con el morral en la espalda; el capítulo de la Fuerza Pública no se toca”. Tenían acuerdos con el Ejército, en las votaciones se vio perfectamente. Sin embargo les mataron gente. Sus militantes me buscaban para que yo hiciera las denuncias, pues los encumbrados no abrían su boca al respecto. No sólo habían perdido las charreteras, sino también la dignidad.

Como lo afirmó el columnista Camilo González Posso, en *El Tiempo*, el 18 de septiembre de 2007, “el uso ilegal y arbitrario de las armas ha sido parte de la historia de Colombia desde siempre, y desde el siglo XIX ha servido para el ejercicio del poder. La mitad del siglo XX transcurrió en medio de un régimen de Estado de sitio y la defensa del orden se hizo ‘combinando todas las formas de lucha’, a veces con chulavitas, otras con pájaros o mercenarios de varios uniformes. La guerra fría educó en tortura y desaparición y en alianzas con toda suerte de mafias, narcos, paras y la llamada ley de fuga. Y ese entrenamiento en la combinación de formas de lucha para la defensa de poderes regionales, locales y nacionales, tuvo su expresión mayor, en el cruce de siglos, con la expansión del paramilitarismo, que sigue vivo aunque en crisis irreversible”. Lo anterior, añadiría, financiado con los impuestos de los colombianos o a través del *boleteo*, como se lo impusieron a los grandes y pequeños propietarios, a los grandes y pequeños comerciantes. Hasta las tiendas de los pueblos, en muchas regiones, fueron obligadas a cotizar mensualmente a los escuadrones de la muerte, so pena del destierro o el asesinato.

El genocidio se hubiera podido evitar si hubiésemos tenido verdaderos demócratas en la conducción del Estado. Tuvimos presidentes, algunos asustadizos, otros con sentimientos de culpa, dando pésames telefónicamente ante los asesinatos o los atentados, y otros como parte integrante del fascismo ordinario, con cara de demócratas. Por eso continúa el genocidio. Esta semana, cuando se me hace esta entrevista, el 7 de junio del 2011

fue asesinada Ana Fabricia Córdoba en Medellín, sobreviviente de la UP que lideraba una organización que luchaba por la tierra de los desplazados. Había denunciado a sus enemigos, a quienes la iban a matar. No recibió ninguna protección y si la hubiese recibido de parte del Estado, tampoco le hubiera salvado su vida: los escoltas del DAS son la pantalla para matar más rápido. Se volvió importante el día de su muerte. Antes había perdido a su marido y a dos hijos, también asesinados; los que quedan, están amenazados. Es el exterminio de toda una familia.

Pero el Estado siempre aducía que estaba tomando las medidas necesarias para proteger a los dirigentes de la UP.

— Varios de los sobrevivientes nos salvamos porque no llevábamos en las escoltas agentes del DAS o de la Policía. Nos acompañaban hombres y mujeres de la UP que arriesgaban la vida con nosotros. Cuando decidí salir del país, el 9 de mayo de 1996, una de las poderosas razones para dejar la patria fue la escolta impuesta por la Policía. Después del atentado que sufrí cuando me dirigía a la sede de la UP, sentí que moriría por culpa de ellos.

Estas supuestas protecciones por parte del Estado se convirtieron en las escoltas-seguimientos. Tenían los datos exactos de los desplazamientos, de las rutinas de trabajo, de las casas de los familiares, de los colegios de los hijos, del sitio de mercado, del taller donde se arreglaba el carro, de la peluquería, del amigo, que eran transmitidos a los jefes de la “inteligencia militar”.

Se hacían listas en el Ministerio de Defensa de los condenados a muerte y se enviaban a todas las brigadas militares.

Los mandos castrenses se jactaban de ello y hasta las mostraban en los actos sociales, donde se codeaban con la alta sociedad. El general Iván Ramírez Quintero, comandante de la Primera División, en la Costa Atlántica, la cargaba en su bolsillo. Entre los asesinados figuraba Luis Meza Almanza, profesor de la Universidad del Atlántico. Eso explica por qué militantes amenazados que se desplazaban a sitios distantes fueron ultimados a los pocos días.

¿Cómo era el comportamiento de los medios, de la prensa, frente al genocidio contra la UP?

—Los genocidios no son espontáneos, no aparecen porque sí. Se planifican estrictamente y siempre está detrás la mano del Estado. Preparaban a la población para que se resignara ante los crímenes y para ello utilizaban los medios de comunicación y a los columnistas, que juegan un papel especial. No hay sino que leer algunos de los artículos de Carlos Lemmos Simmonds, de Panesso Robledo, de Arturo Abella, de Enrique Santos, entre otros, señalando, descalificando y hasta justificando los asesinatos. Editoriales de *Nueva Frontera*, *El Tiempo*, publicaciones de las Fuerzas Armadas, *El Colombiano*, así como otros periódicos y revistas nacionales y locales, dan testimonio de ello. Ni qué decir de la radio, especialmente RCN y CARACOL, al servicio del Establecimiento.

Algunos periodistas tuvieron que dejar forzadamente sus puestos porque no se plegaron a cambiar las informaciones que tenían sobre los autores de las matanzas. Otros no publicaban las noticias porque les parecerían demasiado

peligrosas en esa autocensura del miedo. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando la situación de violencia se profundizó en Urabá. En la diagonal San Jorge, de Apartadó, varios dirigentes sindicales y miembros de la UP fueron bajados de un bus, decapitados a machete y sus cabezas fueron puestas en estacas en la carretera por donde pasaba el resto de autos que transportaban a los obreros de las fincas bananeras. El más bárbaro escarmiento, acompañado de la advertencia de que correrían igual suerte quienes permanecieran en los sindicatos o en las filas de la UP. También se le escondían a la opinión hechos como el asesinato de sindicalistas en alguna finca bananera y cuyas cabezas eran enviadas al casino mientras los trabajadores almorzaban. O cuando en San Pedro de Urabá fueron asesinados varios militantes de la Unión Patriótica en la plaza del pueblo y jugaron fútbol con sus cráneos. Solamente se pudo sacar a la luz pública algo similar un domingo sin noticias cuando algún periodista llamó para saber si teníamos novedades. Le manifesté que sí, pero que lo haría en directo sobre esas macabras prácticas del paramilitarismo. Al otro día nos atiborraron de amenazas, pero sirvió para detener, en parte, esas rutinas de la muerte.

La impunidad y el sobresalto del general Bedoya

La cadena de crímenes también encontraba aliento en la impunidad pues rara vez había detenidos y menos condenados...

—Para el genocidio de la UP se estableció todo un esquema de impunidad. La justicia penal militar era uno de ellos, aún con los cambios presentados. Todavía

existen tribunales castrenses montados para garantizar que los crímenes oficiales no tengan castigo. Pero si se llegan a adelantar los procesos, los fiscales que se atreven a tocar las estructuras militares, sus servicios secretos o sus mecanismos encubiertos, es decir, los paramilitares, son sometidos al escarnio público como enemigos de la sociedad, asesinados o desterrados.

Viene a mi mente, no recuerdo la fecha exacta pero sí los personajes, un caso ocurrido en 1995. Fuimos a manifestarle al ministro del Interior, Horacio Serpa, que a muchos militantes y dirigentes de la UP los seguían asesinando las Fuerzas Armadas. Nos propuso, entonces, tener un encuentro con los comandantes. Nosotros aceptamos sin vacilar un instante. Ese día nos encontramos, en una sala bellísima del Palacio Liévano, en el segundo piso del edificio donde despachaba Serpa, con el general Harold Bedoya, comandante del Ejército, el almirante Holdan Delgado, de la Armada, el general Montenegro, de la Policía Nacional, y otro militar que al parecer era integrante de la Procuraduría ante las Fuerzas Militares. El único que faltó fue el de la Fuerza Aérea.

El ministro presidía la reunión. A su derecha brillaban los uniformes y a su izquierda, estábamos los dirigentes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, Álvaro Vásquez, el senador Hernán Motta y yo. Allí se les reafirmó que teníamos muchos testimonios de compañeros y amigos que llevaban a pensar de la complicidad de las Fuerzas Militares en los crímenes contra la UP. Nos referimos a las amenazas contra nuestros militantes y del Partido Comunista,

provenientes de elementos del Ejército, Policía, y cuerpos de seguridad, y que el refugio de los asesinos eran varios cuarteles en diferentes lugares del país. Denunciamos que después del registro, en operativos castrenses a viviendas y lugares de trabajo de nuestros partidarios, llegaban los sicarios a consumar los asesinatos. También narramos cómo las brigadas militares eran visitadas por reconocidos jefes paramilitares, que citamos con nombres propios, en las regiones martirizadas por la violencia.

El primero en responder fue el general Harold Bedoya. Sobresaltado, con sus grandes ojos claros desorbitados, comenzó a gritar –hasta los periodistas que se ubicaban en el primer piso del edificio escucharon su elevado tono– que venía a una reunión y no a que se le irrespetara, y que por consiguiente se retiraba. Salió enfurecido tirando la puerta del despacho. Serpa tomó la palabra para decir que había convocado la reunión buscando limar asperezas, pero veía que no era posible y la reunión se acabó. La jerarquía militar no resistía el más mínimo debate. Era consciente que sus operativos, diseñados desde la cúpula, se conocían.

“Nos van a matar a todos”, me dijo Miller cuando le revelé la Operación Golpe de Gracia

Sabemos que usted fue la primera persona que conoció los detalles de la llamada Operación Golpe de Gracia, dirigida contra la UP, ¿cómo fue esa historia?

— En efecto, nosotros poseíamos, por diferentes fuentes, una información veraz muy grande e irrefutable. Personalmente recibí, a mediados de 1993, el anónimo

que llegó a la UP sobre la Operación Golpe de Gracia. En términos generales, en una hoja escrita a máquina, alguien nos hacía conocer que la cúpula militar de la época se había reunido (estaban los nombres y apellidos), para discutir dos opciones: si se abrían procesos judiciales amañados para llevar a la dirigencia de la UP a la cárcel o si seguían con el plan de exterminio contra la Dirección Nacional y los comandos departamentales. Primó la segunda.

De inmediato preparamos una carta a las organizaciones de derechos humanos del mundo como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, FIDH, entre otras, transcribiendo la grave amenaza que pesaba sobre todos nosotros. Salí a la sede del Partido Comunista y allí encontré a Miller Chacón, el secretario nacional de organización del PCC, que había reemplazado a Teófilo Forero, asesinado junto con su esposa y dos dirigentes más el 27 de febrero de 1989 en Bogotá. Le entregué el anónimo, que leyó con cuidado. Era un hombre muy tranquilo, pero observé que su preocupación lo perturbó. “Nos van a matar a todos”, expresó sin rodeos. Ese fin de semana se reunió la dirección del partido para tomar las medidas de protección.

Miller, un estudioso de la política, funcionario de toda la vida, el organizador, que deseaba poner a todo el mundo a salvo, fue el primero en caer víctima de este plan, el 25 de noviembre de 1993, en una calle al sur de Bogotá. Luego vendría el asesinato de Manuel Cepeda, casi nueve meses después, el 9 de agosto de 1994.

Habíamos visitado varias veces al flamante ministro de Defensa del presidente César Gaviria, Rafael Pardo Rueda, para denunciar estos planes. En su

despacho estuvimos con Álvaro Vásquez, Manuel Cepeda y Hernán Motta, entre otros. Jamás se inmutaba ante las gravísimas denuncias y parecía que los muros del despacho eran más susceptibles frente a lo que decíamos. Su frase preferida, al menos en nuestras reuniones, era, “no les creo, pruebas, pruebas”. Siempre me impresionó que ni siquiera nos mirara. Sus ojos permanecían clavados en la mesa y con un bolígrafo en la mano. Esa frialdad y deshumanización ante hechos tan serios, me llevaron a reconfirmar que todo estaba calculado.

¿Pero toda esta ola de atentados obedecía realmente a una política de Estado?

—El Establecimiento estaba advertido, desde los primeros asesinatos, que las Fuerzas Militares se encontraban seriamente implicadas. Desde hace muchos años pienso que los graves hechos violatorios de los derechos humanos, como las desapariciones forzadas, los asesinatos calificados en términos disimuladores como “ejecuciones sumarias” y últimamente los mal llamados “falsos positivos”, son crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. Nadie supervisa las enseñanzas que se le imparten a los militares y los métodos que utilizan. A los jóvenes reclutas se les dan tratos inhumanos y degradantes, incluso muchas veces se les tortura o se les maltrata por medio de palizas, se les obliga a levantarse súbitamente a altas horas de la noche, a bañarse con agua helada en la madrugada, se les hace limpiar el suelo del cuartel con su cuerpo y ropa mojada, se les parten maderos en su cuerpo o se les quema, se les obliga a volverse informante de su propia familia, se les enseña

y conmina a robar, asesinar, empezando por los mendigos, las prostitutas, y el que se oponga a estas conductas dentro de la tropa, es llevado a la muerte. Hay testimonios dolorosísimos de mujeres que recibieron a sus hijos en cajas funerarias y, si intentaban abrirlas, recibían las peores amenazas. Siempre quedaron con la incertidumbre de no poder darle una última mirada al hijo amado. Algunas veces les decían que eran suicidios.

De esto no se escapa ni el Batallón Guardia Presidencial. Recibí a varias mujeres que me contaron horrores cuando tenía un asiento en el Concejo de Bogotá por la UP. Les obligaban a los jóvenes bachilleres a extorsionar los bares cercanos al Batallón Guardia Presidencial. Jóvenes que querían desertar, desaparecer, se negaban a ser atracadores oficiales y repartirse entre ellos los dineros recogidos. Jóvenes que retaban a sus padres a escoger entre tener un hijo atracador o desertor.

Las prácticas crueles prohibidas por la Constitución de 1991 continúan en los cuarteles. Los suboficiales y oficiales se ensañan contra los reclutas porque con ellos hicieron lo mismo y deben seguir aplicándolo para formar a quienes van a integrar posteriormente las filas de sicarios, de delincuentes, de paramilitares. Es la licencia institucional para matar. Es la formación distorsionada que se hace con los dineros de todos los colombianos. Están listos cuando salgan de los cuarteles para instruir en técnicas salvajes, inhumanas. Están entrenados para desaparecer sin dejar rastros. Es lo más parecido a una fábrica de criminales en serie. Lo irónico es que se dictan a menudo clases por el respeto de los derechos humanos por parte de personas muy profesionales, cursos que

de nada sirven en la práctica. Sólo les representa a ellos la disculpa de que han hecho talleres que muestran en los estrados internacionales y para conseguir recursos a nombre de los derechos que pisotean a cada instante. Estas son las consecuencias de la oficialidad graduada en la fatídica Escuela de las Américas y las otras que la han reemplazado en los Estados Unidos.

Estando en plena Asamblea Nacional Constituyente, en abril de 1991, el general Luis Eduardo Roca Maichel, comandante general de las Fuerzas Armadas sancionó la Directiva No. 200-05/91 mediante la cual se establecían y organizaban redes de inteligencia. En su numeral 1º, se reconoce que en ello se siguen “recomendaciones que hizo la Comisión de Asesores de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos”. Dichas redes y particularmente la Red 07 de Inteligencia de la Armada Nacional, se constituyeron prácticamente como una poderosa estructura paramilitar que perpetró numerosos crímenes de lesa humanidad, cuyos autores fueron además protegidos por las estructuras institucionales de impunidad, como señala el libro *Deuda con la humanidad, paramilitarismo de Estado en Colombia, 1988-2003*, publicado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). El lenguaje de la guerra se ha impuesto y en ese lenguaje los civiles nos convertimos en objetivos militares, como nos lo hacían saber en numerosas amenazas los paramilitares.

El genocidio de la Unión Patriótica, a juicio de Jaime Caycedo, actual secretario general del PCC, se ha convertido en uno de los obstáculos más poderosos en la

búsqueda de una salida política a la confrontación entre los colombianos.

—Sí, como afirma Jaime Caycedo, sobreviviente de atentados y que perteneció en alguna ocasión a la dirección de la UP, el genocidio contra este movimiento se ha convertido en uno de los obstáculos más poderosos en la búsqueda de una salida política al conflicto armado en Colombia. Mientras se continúe con el genocidio prolongado de todo un grupo político, extendido a otras organizaciones, la sociedad colombiana no podrá ser considerada como una sociedad democrática.

Necesitamos la paz. Para ello lo fundamental es la disponibilidad de las

partes. El Gobierno por un lado y la insurgencia por el otro. Se requiere con urgencia parar los asesinatos, la desaparición forzada, los secuestros, el desplazamiento interno, las detenciones arbitrarias, que son problemas que crecen todos los días. Mientras más tiempo pase, más obstáculos se encontrarán. Tenemos que llegar a una convivencia con justicia social, con derechos para todos. No me acuerdo de un conflicto vivido, ni siquiera las guerras mundiales, que no haya terminado en el diálogo. Y esa fue la vocación que siempre alentó la Unión Patriótica, de buscar caminos de paz. Por eso su legado permanecerá siempre vivo.



Manifestación de la Unión Patriótica en El Castillo, departamento del Meta, abril de 1986. (Foto: Voz)

——— Iván Cepeda

Se han generado premisas que van a forjar la comprensión correcta del genocidio y el renacimiento político de la UP

Iván Cepeda estudió Filosofía en la Universidad Estatal de Sofía, Bulgaria. A su regreso a Colombia, dictó clases en varias universidades, entre ellas la Javeriana. Junto con otros defensores de derechos humanos, fundó en 2002 el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), que ganó rápidamente notoria influencia nacional. Interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el crimen de su padre, el senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, fallada por la Corte Interamericana que condena a la Nación por tratarse de un crimen de Estado. El 9 de agosto de 2011, en una sesión histórica de las dos cámaras del Congreso, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pidió a nombre

del Estado, perdón por el asesinato del dirigente de la UP, como lo exigía uno de los puntos de la sentencia incumplido por el expresidente Uribe. Iván Cepeda, dirigente del Polo Democrático Alternativo, salió elegido a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2010.

El fracaso de Justicia y Paz y la extradición de paramilitares, enturbia el esclarecimiento del genocidio

¿Qué pasó con el proceso de Justicia y Paz, realmente sí estaba encaminado a favorecer a las víctimas de la UP y contribuía a esclarecer el genocidio?

—En primer lugar, el problema de Justicia y Paz es que ha sido un proceso muy accidentado y sometido a muchas reformas. La cuestión esencial aquí es la dificultad general de la investigación penal en Colombia, pues no existe una metodología que se aplique para investigar crímenes del sistema. El crimen contra la UP es un genocidio y por lo tanto debería corresponder a una investigación que metodológicamente pudiera aclarar, no solamente hechos particulares, sino el contexto, la responsabilidad, el modus operandi, la intencionalidad y los patrones que se han utilizado para cometer el genocidio. Esa situación, sobre la cual insistimos en forma permanente y en la que la Fiscalía ha hecho algunos avances, supremamente tímidos por cierto, es un primer obstáculo fundamental, porque efectivamente sí hay unas declaraciones de los jefes paramilitares, no sé cuántos, sobre los crímenes contra la UP, pero sin mayores alcances.

En Justicia y Paz hay hasta ahora tres o cuatro condenas. La traba es que

aquí los hechos denunciados por paramilitares regularmente implican a terceros, digamos militares, empresarios y políticos. El asunto es que no hay un sistema claro en Justicia y Paz para hacer que esos terceros sean debidamente vinculados porque entre la Unidad de Justicia y Paz y la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, no existe una coordinación, no hay un vínculo fuerte entre los dos entes como debiera ser. Hay datos que indican que son cientos de civiles y militares denunciados por paramilitares en Justicia y Paz, pero eso no se traduce en una acción concreta. Por ejemplo, está el caso del señor José Miguel Narváez, exvicedirector del DAS hoy detenido e implicado en los crímenes de Manuel Cepeda y Jaime Garzón. Muchos de los hechos que han sido denunciados contra Narváez están hoy en Justicia y Paz. *El Espectador*, en el mes de julio de 2011, dice que entre los documentos que cuenta la Fiscalía está una USB con una serie de correos electrónicos, uno de los cuales trata sobre el proceso de negociación de los paramilitares con el gobierno de Uribe bajo la intermediación de Narváez. Ése es un documento probatorio, que aunque no testifique que Narváez y Castaño mataron a Cepeda o a Jaime Garzón, si demuestra que el jefe paramilitar cumplía, como lo afirmaron “don Berna”, Mancuso, “H.H” y toda esta otra gente, con los consejos de Narváez, quien hacía de intermediario con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Él era como el eslabón entre los mandos paramilitares y la cúpula del régimen. ¿Qué pasa aquí? Ese documento, que ha sido denunciado en Justicia y Paz, no está a disposición de la Unidad

de Derechos Humanos de la Fiscalía, lo digo porque ese es el caso Cepeda, que está en dicha Unidad. Este es un gravísimo problema. Las diferentes versiones y testimonios no se convierten en acciones judiciales.

En segundo lugar, está el problema, de no menor gravedad, que representa la extradición de los paramilitares. Fue un golpe mortal, no sólo al proceso de Justicia y Paz sino a todos los procesos de esclarecimiento del genocidio de la UP. Muchos de esos comandantes paramilitares fueron fundamentales en el proceso de exterminio de la UP como “don Berna”, por ejemplo. “H.H” venía colaborando muy seriamente en los casos de la UP y lo extraditaron.

Y en tercer lugar, ese sistema de Justicia y Paz está colapsado porque no hay recursos ni físicos ni humanos para que avancen los procesos. Hay más de cuatro mil implicados y de ellos apenas unas pocas decenas están en versión libre y a pesar de ser tan pocos, en relación con la enorme cifra anterior, no hay capacidad para juzgarlos a todos. Esto significa, como lo denunciábamos hace poco, que van a quedar en libertad muchos de ellos. Todo esto atenta contra el proceso en el caso de la UP, porque los paramilitares fueron claramente un instrumento para el genocidio, una de las herramientas más importantes destinada a cometer los miles de asesinatos. Esa máquina criminal está ligada al Estado y por lo tanto ése es el tema que hay que aclarar en aras de la justicia, la verdad histórica y la reparación integral de las víctimas.

¿Con la Ley de Víctimas y Justicia y Paz culmina todo el proceso de resarcimiento a la Unión Patriótica?

—De ninguna manera. Se trata de procesos diferentes. La Ley de Justicia y Paz tiene que ver con el universo de personas que se desmovilizaron, paramilitares y guerrilleros que resolvieron acogerse a ese mandato, que los obliga a confesar sus crímenes y con ellos pagar penas de hasta ocho años de cárcel. Eso tiene unos términos y la cuestión es que ese universo de personas está siendo juzgada a cuentagotas y digamos teóricamente, que la Ley de Víctimas es una ley esencialmente de reparación, no es una ley de justicia. Tiene aspectos de verdad por la vía administrativa con ciertas reparaciones ¿Pero en qué sentido se pone un punto final a la justicia en el caso de Justicia y Paz con relación a la reparación? En el proceso de Justicia y Paz hay un momento que se llama el incidente de reparación, es en ese momento en que se define el resarcimiento de las víctimas. Hasta ahora sólo ha habido un incidente de reparación, el caso de la masacre de Mapiripán cometida el 15 de julio de 1997. Con ese incidente se produjo una sentencia, determinando la justicia una indemnización considerable, proporcional al daño.

La Ley de Víctimas desestimula la justicia y es un simulacro de reparación

¿En el caso de la UP se ha dado algún incidente de ese tipo?

—No, ha habido un solo incidente de reparación, el que le mencioné, pero ningún otro en relación con la UP. ¿Entonces qué es lo que temía el Gobierno? Que se

produjeran precisamente otros incidentes de reparación como el de Mapiripán en la Ley de Justicia y Paz, abriéndosele un boquete enorme, sobre todo para sus finanzas, de suerte que hizo acelerar la Ley de Víctimas.

Santos ha creado con esta Ley de Víctimas una reparación administrativa que tiene entre sus componentes una indemnización, también administrativa, con un monto que se especula no pasará para cada familia de veinte millones de pesos. A esto le agregaron un artículo, que es un contrato de transacción, es decir, que si la víctima acepta puede exigir un poco más. ¿Cuánto? No se sabe, digamos treinta, cuarenta, sesenta millones. Pero luego de firmar un documento la víctima debe renunciar a la reparación por vía judicial.

¿Y renuncia también a la verdad?

—No, sólo a la reparación por vía judicial. Entonces esto va a significar que muchas de las víctimas de la UP pueden terminar acogiendo a esa transacción y hacer una especie de acuerdo con el Estado; es por eso que en cierto sentido se limita y se desestimula la justicia. Ahora, eso tiene una repercusión mayor: mucha gente acude a la justicia sin muchas esperanzas de encontrar a los criminales, pero ahora sí lo hará por una reparación económica, de manera que se van a instaurar menos acciones judiciales o a dejar de concurrir a la justicia.

Usted ha señalado que la Ley de Víctimas no favorece a la Unión Patriótica en nada, ¿en qué sentido?

—Creo que esta ley, tal como quedó redactada, plantea un problema grave

para las víctimas de la UP. El Artículo 3° —y me refiero a tal como ha sido sancionada la ley, pues aún están pendientes las demandas en la Corte Constitucional— señala que serán consideradas víctimas aquellas personas que hayan sufrido menoscabo de sus derechos, por tantas violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidos con ocasión del conflicto interno.

¿Cuál es el problema de esta definición para las víctimas de la Unión Patriótica? Que ellas, para acogerse a dicha Ley, tendrían que reconocer que los hechos contra la UP tuvieron lugar con ocasión del conflicto armado. Digamos que algunos de esos hechos podrían ser tipificados así, pero hay otros que no corresponden a esa situación, por ejemplo, muchos alcaldes fueron asesinados por sus programas de gobierno, personas que tenían la posibilidad de acceder a una curul o los candidatos a la Presidencia, en fin, son tantos los casos en el exterminio de la UP que no pueden ser atribuibles exclusivamente al conflicto armado. Aceptar las cosas así, conduce a justificar que los crímenes se cometieron porque la UP era una prolongación de la guerrilla, lo cual va en detrimento de la verdad histórica y pone a las víctimas en una situación muy difícil.

Las víctimas de la UP quedarían como parte beligerante del conflicto

—Sí, es absurdo. Los miembros, amigos y simpatizantes de la UP no eran combatientes, fueron interpretados por sus victimarios como partes contendientes y la verdad es que la lógica del genocidio de la UP no se explica por esta razón: los

asesinos de la UP no pretendían simplemente acabar con la guerrilla sino que buscaban liquidar una fuerza de oposición legal, respetuosa del marco jurídico que estaba ganando terreno políticamente. Estamos frente a una distorsión de la verdad que puede parecer artificialmente una cuestión compleja, pero no, se trata de un problema serio que tiene que ver con la criminalidad del Estado y con todas las estrategias de eliminación de la oposición y del movimiento popular orquestadas desde el Estado.

El tema estructural de la violencia que se plantea ahora en el debate.

—Y también el de la represión y persecución política; por ejemplo, en el caso de las chuzadas del DAS, cualquiera podría decir que aquí se cometieron por la sospecha que tenía el gobierno del presidente Uribe de que los miembros de la oposición política, defensores de derechos humanos, periodistas y magistrados, eran agentes de la subversión, del terrorismo y del narcotráfico. Ésa es la explicación que da el propio gobierno de Uribe. Pero cuando uno revisa los archivos del DAS y examina cuáles eran las operaciones que se estaban haciendo, el objetivo no era realmente saber si X o Y personas estaban ligadas a las FARC, ése no era el propósito, se trataba de mancharlos públicamente, tener toda la información para saber en qué momento se les podía neutralizar, acabar con su vida privada y pública; ésa fue la estrategia que se utilizó con muchas personas y todavía hay un hecho más significativo: ninguno de los archivos del DAS ha servido hasta ahora para utilizarlo en un proceso judicial contra alguien. Se han

utilizado los computadores del “Mono Jojoy” y de “Raúl Reyes”, pero nadie aparece en la Corte denunciando algo a través de un archivo del DAS.

No sólo hay que reconocer el conflicto sino otras violencias

¿Cuál fue la posición del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para que la ley sí pudiera haber logrado la justicia histórica?

—La ley ha debido quedar, como propusimos nosotros, señalando que víctimas son aquellas personas que sufren menoscabo por violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto armado y por la violencia sociopolítica. Ese planteamiento no se quiso acoger porque todo quedó subsumido en la polémica de si había o no conflicto armado interno. Cuando nosotros criticábamos la tesis podría parecer que estábamos negando o aunándonos a las voces de quienes exigían que no se aceptara el conflicto armado; no, a nosotros nos parece muy bien que la ley reconozca la existencia del conflicto armado, pero además de ello que se reconozcan otras violencias que generen violación de derechos humanos.

¿Han pensado interponer alguna demanda contra la ley?

—Nosotros no vamos a demandar la ley en su totalidad, sólo algunos aspectos que consideramos lesionan los derechos de las víctimas. Por ejemplo, vamos a demandar el Artículo 3º, el que define quién es víctima; nos asisten como siete razones para interponer ese recurso.

¿Podemos citar algunos de los puntos más importantes de la demanda?

—El tema de restitución de tierras desde 1991 o el de reconocer a las víctimas desde 1985, el punto de la fragilidad fiscal y sobre el mismo Artículo 3º, vamos a demandar la definición de las víctimas con ocasión del conflicto armado. Reclamamos el hecho de que a los miembros de grupos armados ilegales no se les considere víctimas en ciertos contextos en los cuales son no combatientes, porque el Derecho Internacional Humanitario es muy claro en señalar que es víctima aquella persona que no es combatiente, es decir, no es solamente víctima de una infracción del Derecho Humanitario en la guerra quien es civil, sino toda aquella persona que está en condición de no combatiente, digamos una persona que es miembro de un grupo armado ilegal puede estar en una circunstancia de no combatiente cuando está fuera de las hostilidades, es prisionero o herido o se encuentra imposibilitado de accionar. Tales personas pueden ser consideradas víctimas; se trata de un hecho que tiene que ver con el principio de igualdad. La situación de los desplazados es un campo fundamental, porque la Ley de Víctimas genera una situación discriminatoria con relación al resto de las víctimas, se les da menos indemnización, se les otorga menos derechos que al resto de las víctimas; en el asunto de los menores, la Ley señala que solo podrá ser considerada víctima quien haya sido reclutado a la fuerza siempre y cuando sea desvinculado del grupo armado ilegal. Vamos a demandar la definición de víctimas en general y la de víctimas de la UP en particular. Hay catorce aspectos

neurálgicos de la Ley que han quedado simplemente en manos del Gobierno Nacional.

¿No es absurdo que el Estado, acusado por los dolientes de cometer crímenes, sea el que defina quién es víctima?

—Las víctimas de los agentes del Estado han sido reconocidas en la Ley, pero el Gobierno va a crear un comité con la función de avalar quién es víctima y quién no; ya es muy grave que gente designada por el Gobierno defina semejante situación. Pero además hay un asunto que genera un riesgo adicional para las víctimas de los agentes del Estado y es que el ministerio de Defensa tiene la potestad de recusar o de apelar una decisión con relación a las víctimas; puede decir, fulanito, por estas o aquellas razones, no es víctima. Esta situación tenemos que considerarla con mucho cuidado. En general, aquí hay un problema que tiene que ver con el hecho de que el Estado aún no ha reconocido el caso de la UP como un caso colectivo y en eso son extremadamente débiles los mecanismos que contempla la Ley de Víctimas.

El DAS actuó de igual forma en los crímenes de Jaramillo, Pardo y Forero

Que el Estado reconozca a las víctimas, ¿cómo sería ese proceso?

—La Fiscalía debe generar una metodología acorde a los hechos. Ya ha creado un grupo de fiscales, eso es importante, pero no se puede seguir trabajando en los asesinatos de Manuel Cepeda, Jaime Pardo o el alcalde de Vistahermosa en forma separada, para citar tres casos de los miles que hay de víctimas de la

UP; aquí todo esto tiene que verse como un proceso de genocidio, eso significa, en términos de verdad histórica y en términos penales, como un conjunto de situaciones y no como casos aislados. La realidad es que los hechos aparecen articulados, concatenados; y las responsabilidades comienzan a aparecer también, no como que fulano es responsable del asesinato de mengano, sino que un alto mando militar estaba en un tipo de aparato que permitía generar esa actividad criminal. Esto es fundamental, por ejemplo, en los procesos de Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Teófilo Forero, para solo mencionar tres magnicidios. Le señalo este panorama: los agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), tuvieron el mismo comportamiento en los sucesos mencionados; no es posible entender lo que pasó con Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo y Teófilo Forero si no se entiende el papel que estaba jugando el DAS en ese momento; el *modus operandi* es el mismo, los agentes del DAS presuntamente actuaron como parte de los crímenes, bien sea dándole información a los asesinos o bien ellos mismos preparando el delito o retirándose en el momento aciago y hay casos en que los tipos no se presentaron a trabajar el día de los homicidios. Todo esto tiene que ver con el señor Maza Márquez, quien era el director del DAS en ese entonces. Hoy está acusado por el asesinato de Luis Carlos Galán porque sus hombres estuvieron comprometidos en el crimen del jefe liberal. Si esto no se ve, digamos, si los cuatro fiscales que llevan los casos no se sientan a hablar y a identificar quiénes eran los agentes del DAS, cómo actuaban, a quién le rendían

cuentas, no se podrá encontrar qué es lo que une estos cuatro casos, sin hablar de cosas mucho más estructurales como la situación de la UP, donde el paramilitarismo actuó con las Fuerzas Militares y se dio todo un esquema para montar ese cronograma del genocidio.

Con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado por el crimen de Manuel Cepeda, ¿no se creó un hecho favorable a todas las víctimas, teniendo en cuenta el llamado “bloque de constitucionalidad” que le corresponde al Estado asumir?

—Las sentencias de la Corte Interamericana son órdenes, no son recomendaciones ni sugerencias, implican que el Estado tenga que acatar lo que está señalado allí. En el fallo hay unos mandatos que tienen que ver con la justicia, y uno de ellos dice cómo deben ser realizadas las pesquisas en el caso de Cepeda, y cómo el Estado debe asumir la investigación del Plan Golpe de Gracia. Este Plan de crímenes contra la UP, dice la Corte, debe ser analizado por los investigadores y por los jueces, no como un simple hecho en el que murió el senador Cepeda, sino como una estrategia de exterminio. La CIDH subraya que hay que poner en claro si se trataba de un patrón que permitió el asesinato de muchos otros miembros de la Unión Patriótica. La tesis que defendió el Gobierno en la CIDH, es que el caso de Cepeda es algo aislado, atribuible a unos individuos, dos suboficiales y que la responsabilidad del Estado es sólo por omisión, es decir, por no haber garantizado la protección. No se reconoce, entonces, que todo obedecía a una política de Estado.

Ya es hora de que la Fiscalía tipifique el caso de la UP como un genocidio

¿Cómo probar que el genocidio de la UP fue un crimen de Estado, cuando este sostiene que se trata sólo de casos individuales que no correspondían a una política institucional?

—Lo que han hecho las víctimas de la UP y las organizaciones de derechos humanos con respecto a los crímenes es interpretarlos, darles una explicación fundamentada en la realidad. En todos estos años, más de veinticinco, las organizaciones han proseguido una lucha para que el caso de la UP se reconozca como un genocidio partiendo del marco normativo. Lo primero que se hizo fue lograr que las leyes en Colombia reconocieran, por medio de una norma, que el genocidio puede tener causas políticas y va dirigido contra grupos políticos. Después de un intenso trabajo se introdujo esa tipificación en la legislación colombiana. Hoy estamos en una etapa en la que se intenta, a través de los mecanismos de justicia nacional e internacional, que esa verdad histórica del genocidio contra la UP adquiera, además, un carácter de tipo judicial. El fallo de la CIDH en el caso de Cepeda, ayuda en esa dirección, crea unos elementos de jurisprudencia en el cuadro internacional que son muy importantes de cara al genocidio. Y por supuesto, despeja un poco el camino en el caso general o colectivo, pero además de lo que diga la CIDH es necesario que en Colombia se generen muchos procesos en el marco de la justicia nacional. Creo que es muy importante insistirle a la fiscal Viviane Morales que ya es hora de que tipifique el caso de

la UP como genocidio y que, de acuerdo con esa medida, se disponga una metodología adecuada para el mismo.

¿Ya existe una petición como víctimas?

—Sí, y por eso reiteramos la petición porque yo ya se la hice al fiscal Mendoza Diago en 2010. Hay que insistir en ese requerimiento y que no sea solamente una declaración o una sentencia de la justicia, sino que acorde con esta tipificación se lleven a cabo las investigaciones, ya que es el camino para poder llegar a los verdaderos autores, a las estructuras, a las instituciones, a los aparatos que provocaron el genocidio. Además es necesario poder establecer los criterios de reparación colectiva, para que la sociedad colombiana entienda lo que pasó con la UP de una manera distinta.

La historia de la UP no se ha terminado y lo que ha ocurrido va a tener desenlaces políticos en un futuro proceso de paz

Podrían decir, señores de la UP, si ya hay una Ley de Víctimas, ¿por qué no se acogen a ella?

—La Ley de Víctimas no es el alfa y omega, sólo es un aspecto de la vida de la sociedad, como pasa con todas las leyes, es más, es posible que la Ley fracase, cosa que no quisiera; no espero que le pase a esta norma lo que le sucedió a la Ley de Justicia y Paz, que se diseñó de tal forma que estaba destinada a malograrse y vemos que está pasando por un momento muy grave.

Las víctimas de la UP pueden dar luchas en esos marcos legales, como el de Justicia y Paz y Ley de Víctimas, pero hay muchas esferas de carácter

legal, cultural, político, que tienen que ver con el cómo se van esclareciendo estos hechos y creo que estamos ganando un espacio mayor, estamos sentando unas bases. Parte de esto consiste en que un proceso criminal tan vasto, que involucra a tantas personas, a veces es necesario construir a la manera de un rompecabezas: ir poniendo las piezas para poder llegar a tener el panorama y la visión de conjunto. En estos años las organizaciones han generado unas premisas, unos casos tipo, unos avances que el día de mañana van a forjar la comprensión correcta del asunto y el resurgimiento de la UP, su renacimiento político. No se trata sólo de reparación, de resarcir a la UP. La historia de la UP no se ha terminado, es una situación que está de alguna manera en desarrollo, un desarrollo que no es tan evidente, que no es tan público, pero lo que ha ocurrido con la UP va a tener desenlaces políticos en un futuro proceso de paz. La UP es imprescindible en cualquier proceso político de cara a la reconciliación. Digamos que los de la UP son ese tipo de crímenes en los cuales no puede la sociedad colombiana encontrar la paz hasta su esclarecimiento. Esa cuenta histórica de la sociedad debe ser saldada, es una pieza nodal, maestra de todo este asunto, ¿cómo se puede pasar por encima de esa historia sin resolverla? Quienes han concebido la Ley de Víctimas quisieran

que eso sirva para hacerla pasar por una reparación, una especie de simulacro de reparación para que se olviden temas como estos, que son fundamentales para toda la sociedad.

¿Cómo va el caso de la UP en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y qué debe resolver la Corte ante el fracaso de la solución amistosa entre las víctimas y el Estado?

—Es un proceso muy lento. Tengo que decir que la Corte Interamericana solamente examina casos con un alto nivel probatorio, es decir, cuando aboca un hecho lo hace con una cierta convicción de que ya tiene una solidez tal, que se va a pronunciar de una manera clara; por eso es que la Comisión Interamericana actúa como un filtro.

Son 1.157 casos que interpuso Reiniciar a finales de 1993, con la asesoría de la Comisión Colombiana de Juristas

—Correcto, ¿pero aquí qué va a pasar? No creo que todos los casos que están siendo presentados sean considerados, pero sí va a haber un grupo muy significativo que permitirá que la Corte se exprese sobre lo que ha sido el exterminio de la UP. Esa sentencia tendrá un carácter realmente histórico, va partir en dos la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.



Vereda San Antonio, Jamundí, Valle, una concentración de vecinos saluda el 23 de septiembre de 1985, el nacimiento de la Unión Patriótica. Interviene el comandante de las FARC, desmovilizado, Jaime Fonseca. (Foto: Voz)

Álvaro Vásquez

Con la UP se vislumbraba una nueva situación política que no iba a permitir el régimen

Álvaro Vásquez del Real es hoy el más veterano dirigente del Partido Comunista. Se vinculó a él en el Tolima en 1948. Pasó por la dura etapa de la clandestinidad en la época de La Violencia y ya en 1950 integra la Dirección Nacional. Abogado de la Universidad Libre de Bogotá, prácticamente jamás ha ejercido la profesión a excepción de algunas clases de Derecho en la Universidad Autónoma de Bogotá. Con Gilberto Vieira y Manuel Cepeda, los dirigentes emblemáticos del partido, Vásquez integró por décadas el Secretariado. Siempre ha defendido su organización ante todos los embates y ha brillado como uno de los ideólogos más lúcidos de las filas, autor de los más importantes documentos esbozados en plenos del Comité Central y una decena de congresos del Partido Comunista. Fue senador de la República, reemplazando

a Bernardo Jaramillo, en el periodo 1990-1994. En varias ocasiones estuvo preso, y en una de esas, con capucha para que no viera a sus carceleros, fue interrogado por el propio director de la Brigada de Institutos Militares (BIM), general Vega Uribe, luego ministro de Defensa bajo el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. Vásquez cumplió noventa años en agosto de 2011, y aunque ya no hace parte de ningún órgano de dirección por voluntad propia, se le ve activo en la redacción del *Semanario Voz*, órgano del partido, y en las reuniones donde lo invitan.

Advertí en el Partido que los Acuerdos de La Uribe iban a traer toda suerte de líos y era mejor dar pasos previos para aclimatar la paz

Remontándonos un poco a la historia del nacimiento de la Unión Patriótica, cuando triunfa en 1982 la candidatura de Belisario Betancur a la presidencia, en el país persistía un cuadro de violencia al tiempo que la guerrilla realizaba acciones armadas, ¿cómo se dio en el Ejecutivo Nacional del Partido Comunista la discusión sobre la propuesta del Presidente de llegar a un acuerdo de paz con la insurgencia, conociendo que las FARC respetaban mucho las opiniones del partido?

—En la dirección, una vez se comenzaron a conocer los primeros pasos de Betancur, a mediados de 1983, de llegar a un Acuerdo de Paz con el movimiento armado, tiene lugar una discusión muy amplia. Surgieron tres tendencias bien marcadas: una proclamaba aceptar la propuesta oficial en forma incondicional, es decir sin más ni más; otra apuntaba a aceptarlo, pero con condiciones, y

otra era rechazarlo de plano, negarlo. Yo estuve en el sector que lo negaba.

¿Cuál era la razón para rechazar la propuesta en medio de un país esperanzado en la paz?

—Mi opinión era que dicha propuesta iba a traer toda suerte de líos; más bien yo estuve a favor de algunos pasos que apuntaran hacia unas condiciones previas para aclimatar la paz, como el cese de las acciones de parte y parte, sin necesidad de firmar nada. Claro que finalmente eran las FARC las que decidían, como lo hicieron a través de “Manuel Marulanda” y sobre todo de “Jacobo Arenas”, quien insistió mucho en estos Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz firmados con el Gobierno. “Arenas” creía que ahora sí podía actuar libremente, ser candidato presidencial y hacer campaña política abiertamente sin la persecución de tantos años, dos décadas, pues se integró a las FARC en 1964, precisamente cuando la agresión a Marquetalia.

¿Y desmovilizarse...?

—Y desmovilizarse, claro, para crear un gran movimiento nacional con las banderas de las FARC. Prácticamente él (“Arenas”) fue el autor intelectual del acuerdo, quien lo llevó adelante y quien lo reguló en los años que siguieron a su firma con Betancur.

¿Pero hubo un proceso previo de conversaciones por más de un año, del que hacía parte Alberto Rojas Puyo, militante del Partido Comunista junto con los comisionados de paz presididos por un conservador insigne, John Agudelo Ríos y Margarita

Vidal, entre otros, quienes viajaron varias veces a los campamentos del Secretariado de las FARC en La Uribe, Meta?

—Sí, claro, se entablaron muchas conversaciones, sobre todo con “Jacobo Arenas”, a quien convencieron de las bondades del acuerdo de cese al fuego, tregua y paz que diera nacimiento a la Unión Patriótica. Y el acuerdo firmado el 28 de marzo de 1984 salió bien, casi año y medio después de la toma de posesión de Betancur.

¿Y hubo un Pleno del Comité Central del Partido Comunista para avalar todo este proceso?

—Sí, hubo un Pleno del Comité Central que avaló ese proceso y dio luz verde a la actividad para apoyar los acuerdos.

Y comienza después la discusión en el partido de crear un movimiento político.

—El movimiento político que se creó fue la Unión Patriótica bajo la jefatura de “Jacobo Arenas”. Inicialmente la gente de las FARC, bajo los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz —esto es importante resaltarlo— y la militancia del partido, que apoyó con entusiasmo el proceso, trabajaron conjuntamente para dar nacimiento a la UP. Así sucedieron las cosas. Pero también se vincularon gentes de otros sectores de la izquierda, del Partido Liberal, conservadores progresistas, personas sin partido y hasta curas. Se vislumbraba de esta manera una nueva situación política en el país, inédita por cierto, bajo las banderas de la paz, el anhelo supremo del pueblo colombiano.

La candidatura presidencial de “Jacobo Arenas”

Poco después de nacer formalmente la UP, en marzo de 1985, se lanza la candidatura presidencial de “Jacobo Arenas”. ¿Cómo vio esto el partido?

—El partido estaba sintonizado con el movimiento que nacía y que ganaba inmensa simpatía en la población. Por supuesto que apoyamos esta candidatura presentada en el Primer Congreso de la UP en noviembre de 1985, instalado en un Teatro Jorge Eliécer Gaitán totalmente abarrotado.

¿Qué pasó con la candidatura de “Jacobo Arenas”?

—La candidatura de “Jacobo Arenas” se malogró pocos días después de haberse presentado, pues no cesaban los asesinatos de activistas de las FARC desmovilizados que hacían trabajo político en la UP sin armas, en consonancia con los acuerdos firmados, y de decenas de militantes del partido que no tenían ninguna ligazón con la guerrilla. Había comenzado el genocidio casi de inmediato con el nacimiento del nuevo movimiento político. Ante este hecho, las FARC comenzaron a abstenerse de ir a las poblaciones para evitar ser víctimas de atentados. Sólo quedaron varios cuadros de gran prestigio nacional en Bogotá, que incluso salieron electos al Congreso en las elecciones de 1986, como “Braulio Herrera” e “Iván Márquez”, que no vieron más opción que regresar a la vida insurgente tras la racha sin fin de asesinatos de dirigentes, militantes de base y simpatizantes de la UP, y después de sufrir todo tipo de amenazas.

¿Las FARC respetaron la tregua o de cierta forma la violaban como argumentaban sectores castrenses?

— Las FARC respetaron la tregua ya que los acuerdos apuntaban a que se fortalecieran en su trabajo de organización en el campo. Los acuerdos establecían que se quedarían en los diferentes sectores donde estaban sin realizar acciones militares, lo que era válido para el Ejército de Liberación Nacional, que aunque no había firmado los acuerdos tampoco los condenaba. Lo mismo con el Ejército Popular de Liberación. El partido se volcó de lleno a la UP y se convirtió en su parte fundamental.

¿Pero arreció la matanza contra el partido?

— El partido no cesaba en llamar a la movilización y la solidaridad, al tiempo que mantenía entrevistas con los presidentes Belisario Betancur y Virgilio Barco, así como con los ministros de Gobierno, exigiendo garantías que nunca llegaron, entre ellas la de disolver los grupos paramilitares y meter en cintura a los mandos castrenses cómplices en la matanza. Pero Betancur estaba arrinconado pues los acuerdos con las FARC nunca llegaron a contar con el respaldo decidido de los partidos de Gobierno, de los mandos militares, de los sectores dominantes, del poder económico. Los conservadores dijeron que no aceptaban un tratado semejante porque eso era entregar el país a la subversión y los liberales dijeron más o menos lo mismo. Entonces Belisario se encontró solo, sin respaldo a su política. Recuerdo que la Cámara de Comercio se pronunció en contra, así como todas las organizaciones gremiales, los ganaderos e industriales.

Sin embargo, el exterminio comienza en 1984, aunque ya había antecedentes durante todo el gobierno anterior de Turbay con el Estatuto de Seguridad y el asesinato de decenas de miembros del partido. ¿El partido, columna vertebral de la UP, no quedó entonces desguarnecido al tiempo que no se veían las resoluciones firmes frente a la matanza? ¿Era acaso inevitable? — Sí, hay que confesar que no hubo una decisión firme para hacer respetar los acuerdos. La matanza no era inevitable como un sino trágico. Lo que pasó es que la gente salió a dar la cara por la UP esperanzada en los acuerdos, lo propio hicieron los guerrilleros que estaban en la clandestinidad, salieron a hacer lo que correspondía hacer, es decir, política como una actividad pública legal y ahí fue donde conocieron la muerte.

¿Qué lección le deja al Partido Comunista toda esta situación?

— La lección más clara que deja este proceso es que no se puede confiar solamente en los dirigentes del Estado, porque Betancur y otra gente del Gobierno estaban a favor de los acuerdos y trataban de hacer las cosas de la mejor manera, pero no bastaba. El Presidente hizo un esfuerzo por cumplir, pero el llamado Establecimiento jamás se comprometió con la paz.

El genocidio de la UP es una de las situaciones más vergonzosas de la historia de Colombia

Pero el fracaso de los acuerdos fue un desastre histórico para el país con esa experiencia lamentable del genocidio de la UP.

— Esta ha sido una de las situaciones más vergonzosas de la historia de Colombia.

Todo un movimiento político que realizaba acciones en paz fue liquidado a sangre y fuego con la complicidad de sectores del Gobierno, en especial del estamento militar, todo un partido de oposición condenado a la muerte de centenares de sus militantes. Nuestro partido perdió sus mejores cuadros y los que se salvaron de ser asesinados o se fueron al exilio o volvieron al monte.

¿Por qué el partido no reivindicó otra vez la presencia de la Unión Patriótica, pues en 1996 cuando se marcha al exilio su última presidenta y concejal por Bogotá, Aída Abella, empezó a tocarse muy tangencialmente el tema hasta quedar prácticamente borrado?

—Yo creo que la Unión Patriótica no logró superar semejante prueba del régimen, que fue fatal y negativa puesto que se sacrificaron sus mejores dirigentes y los que estaban surgiendo en todo el país. El Partido Comunista, que fue el más golpeado, pudo mantenerse en pie y hoy conserva su presencia, pero no ha logrado reconstruirse plenamente.

La burguesía se llenó de pánico con el avance de la UP

Algunos sectores de opinión sostienen que lo que contribuyó al exterminio de la UP fue su no renuncia a la tesis de la combinación de todas las formas de lucha.

—La combinación de todas las formas de lucha no es una doctrina, como piensan algunos, establecida por el Partido Comunista. No. El Partido sólo reconocía lo que había en el panorama de la realidad colombiana y que nadie había impuesto como teoría: que unos sectores de la población se alzaron en armas, de varias

vertientes ideológicas, y que a la vez persistían otras formas de acción de masas, pacíficas, como las huelgas, las movilizaciones populares, la participación electoral. No era que por decreto desde un escritorio alguien estableciera que las cosas fueran así. Además quien siempre combinó las distintas formas de lucha, pacíficas y no pacíficas, fue la burguesía, ordenando, con sus brazos armados oficiales o no, como los paramilitares, el asesinato de los opositores, como ha visto la historia del país desde antes de 1948 hasta hoy, al tiempo que acuden a elecciones y buscan el voto a través de todo tipo de acciones, legales y no tanto. De manera que culpar a la UP como causante de su propia desaparición violenta es rehuir a los verdaderos responsables del genocidio, los mismos que han causado tanta muerte y la siguen causando contra decenas de organizaciones y sectores de la población que no han tenido ni tienen ninguna ligazón orgánica con los comunistas y menos con la guerrilla. ¿Acaso, para citar uno de los ejemplos más dramáticos, los más de dos mil quinientos asesinados del movimiento sindical en los últimos veinte años han caído porque las agremiaciones obreras tienen en su doctrina la tesis de la combinación de todas las formas de lucha y por eso se les castiga? No hay que olvidar que la UP, a pesar de haber nacido de los acuerdos entre el gobierno de Betancur y las FARC, en búsqueda de una paz duradera deslindó campos con el movimiento armado y la misma guerrilla, y en varias declaraciones señaló que ante la ruptura de la tregua y el no cumplimiento de los Acuerdos de La Uribe, no guardaba relación alguna con dicho movimiento

distinta a tener simpatía con el nuevo proyecto político que ganaba cada vez más audiencia. Lo demás no deja de ser una infamia histórica. Lo que pasa es que ante el enorme auge de la UP, que nos estábamos convirtiendo en alternativa real de cambio, la reacción nos decretó la muerte. La burguesía se había llenado de pánico.

¿Pero por qué esa insistencia del Partido Comunista, si básicamente la UP era el partido, de seguir con los acuerdos cuando las Fuerzas Armadas y los grandes sectores económicos y partidos tradicionales nunca mostraron una seria disposición de respetar los acuerdos? ¿No estamos frente a un grave error del partido?

— Eso fue un error que los historiadores y el mismo partido deberán analizar; es decir, los Acuerdos de La Uribe se convirtieron en un desastre. Nosotros discutimos mucho la situación desde un comienzo, pero siempre se confiaba en que los acuerdos con Betancur eran reales y se iban a respetar, no obstante, como vimos, no se cumplieron.

¿Hubo cierta ingenuidad o algo parecido frente a las propuestas oficiales?

— Yo no creo que fuera ingenuidad, sino esperanza en un proceso del que estaba pendiente todo el pueblo colombiano, de hallar la paz y que se terminara la lucha armada. Había de todas maneras que ensayar ese camino, aunque pagamos el costo más alto.

El genocidio contra la Unión Patriótica, como dice Jaime Caycedo, secretario general del Partido Comunista, se convirtió en uno de los factores que clausuraron

una salida política al conflicto armado interno, ¿qué tan cierto es esto?

— En cierta forma es así, es decir, la experiencia de la Unión Patriótica es negativa en ese sentido para el pueblo colombiano. Sin embargo, no se pueden negar los aspectos positivos como el hecho de que las partes contendientes se hayan podido sentar a conversar y obtener un acuerdo, demostrándose que cuando hay voluntad política es posible allanar el camino del entendimiento.

¿Y cómo explica el partido esa decisión de Belisario Betancur de llegar a un Acuerdo de Paz?

— Betancur, a pesar de todas sus inconsecuencias, era un hombre que quería la paz, él no era amigo de la guerra, quería una paz negociada haciendo algunas concesiones, entre ellas la elección popular de alcaldes, pero cuando el proceso empezaba a andar ya era muy tarde porque había comenzado el genocidio contra la UP y la izquierda, incluso el primer gran mártir de estos procesos de negociación había sido Óscar William Calvo, el jefe del EPL, asesinado en Bogotá en diciembre de 1985, y quien había lanzado la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, que rápidamente había prendido en el país.

Los Acuerdos de Paz con M-19, sin reformas de fondo

El M-19 y el EPL sí firman la paz en 1989 con Virgilio Barco, y ya prácticamente exterminada la UP, se integran a la vida civil y ganan las elecciones de la Constituyente en diciembre de 1990, en pleno bombardeo a la Casa Verde, sede del Secretariado de las FARC, en guerra abierta con el

gobierno de Gaviria, ¿no repite en cierta forma la experiencia de la UP?

—Sí, en cierta forma, pero no los aniquilan como a la UP. Ellos se integran al Gobierno y tienen hasta un ministro, el de Salud, y otros puestos, así como facilidades para llegar al Congreso. Han sido cooptados. Yo hablaría de una entrega sin reformas de verdadero fondo en las estructuras del país. Algo similar le hubiera pasado a la UP si hubiera sido cooptada por el régimen y renunciado a ciertos cambios del sistema como era su ideario. Aunque su programa de Gobierno no apuntaba ciertamente al socialismo, sino a algunas reformas no tan radicales. Y fíjese que el M-19, después de tener tanta audiencia desapareció totalmente del escenario político y los cambios fundamentales en el país no se dieron.

Pero antes de la UP, y en la actualidad, la violencia contra el Partido Comunista y sus sectores de influencia en el campo y en el movimiento sindical, nunca ha cesado.

—La violencia contra el Partido Comunista nunca ha cesado prácticamente desde los años previos a 1948, esta ha sido

una constante histórica. Yo hago residir esto fundamentalmente en el 9 de abril, cuando la burguesía, a pesar de que éramos muy pocos, podíamos ponernos al frente de la lucha de masas, además de tener una incidencia muy grande en el movimiento armado, entonces se propuso no dar chance jamás a que se levantara el pueblo en armas, en una resistencia que era totalmente legítima en plena violencia contra el pueblo y que dejaba miles de muertos.

Así se fue creando una mentalidad puchista de la burguesía, de golpear sistemáticamente al partido y lo que este representaba, cada vez que se diera la oportunidad. Hoy persiste esta mentalidad de la persecución al partido, de no darle ningún espacio y menos en los medios de comunicación, cerrarle todas las puertas, invisibilizarlo por completo, totalmente. Y dejarlo huérfano de toda posibilidad de conducir al pueblo. La experiencia de la UP así lo demostró.



Encuentro en Casa Verde, sede del Secretariado de las FARC, con un grupo de personalidades de la vida nacional en septiembre de 1985. De derecha a izquierda, el padre Rafael García-Herreros, Pedro Gómez Valderrama, la ministra de Comunicaciones del gobierno de Betancur, Noemí Sanín, Jaime Castro, "Jacobo Arenas", el expresidente Alfonso López Michelsen, "Manuel Marulanda Vélez", César Gaviria. (Foto: "Braulio Herrera", Voz)

Jaime Caycedo

La Unión Patriótica sentó las bases programáticas de la paz que está por hacerse en Colombia

Jaime Caycedo, secretario general del Partido Comunista Colombiano, se vinculó a la organización a comienzos de la década de los sesenta. Es antropólogo de la Universidad Nacional, donde ha dictado clases durante varios años. Fue secretario general de la Juventud Comunista entre 1972 y 1980. Perteneció a la Dirección Nacional de la Unión Patriótica. Sobrevivió en 1985 a un atentado tras sufrir varios tiros cuando salía de su casa en Bogotá. Ocupa desde 2007 un escaño en el Concejo de la capital.

¿Cómo vieron ustedes en la dirección del Partido Comunista el nacimiento de la Unión Patriótica avalado por el proceso de paz con las FARC?

—Ése fue un momento excepcionalmente importante. El gobierno del entonces presidente Betancur, abría un espacio de aproximación con el Acuerdo de Cese al Fuego, Tregua y Paz establecido entre las FARC y el Estado en marzo de 1984, creándose así las condiciones para el desarrollo de un proceso de negociaciones hacia una solución política al conflicto armado interno. Esa solución se concebía, por parte del Gobierno y de las FARC, vinculada a un conjunto de reformas políticas y que habíamos formulado como de apertura democrática en el XIII Congreso del Partido Comunista. Yo creo que lo que empieza a cuajar en ese contexto es precisamente el desarrollo de una línea orientada a encontrar, digamos, esa apertura democrática. Quiero llamar la atención sobre este punto: las FARC ya habían planteado, en 1982 y 1983, varias propuestas de tregua unilateral, justamente para generar un clima de acercamiento al diálogo y que el gobierno Betancur posteriormente aceptaría como un reto en la búsqueda de una solución negociada a la contienda, ligada a un conjunto de reformas, por lo menos en el campo político y en el institucional, que tuvieron repercusión significativa hacia adelante, como la elección popular de alcaldes, las consultas populares, el ambiente de reivindicación de lo regional, de la provincia y, desde luego, la necesidad de atender la rehabilitación de las regiones afectadas por tantos años de violencia. Este es el contexto en que surge la Unión Patriótica, fenómeno muy singular de la vida política colombiana, que yo caracterizaría como el nacimiento de una fuerza política comprometida con la necesidad de la paz por la vía de la solución negociada a través del diálogo, es decir, de una

de salida pacífica al larguísimo proceso anterior de enfrentamientos armados y de lucha guerrillera.

La creación de esa fuerza, de ese movimiento político de la paz que fue la Unión Patriótica, es lo que impacta con mayor fuerza en la vida social del país y de ahí el enorme espacio que comienza a ocupar.

La ultraderecha no podía aceptar los cambios que, con la UP, se presentaban en las regiones

¿Cómo se explica que con el inicio mismo de la UP se inserte el proceso de su genocidio si se trataba de una propuesta de paz?

—Naturalmente es la respuesta que los sectores más negativos de la ultraderecha, particularmente el de los grandes latifundistas y agroexportadores, sumados a las esferas militaristas, daban a la iniciativa de paz de Betancur y las FARC. Es que no podían admitir los cambios que se estaban presentando en las regiones que comenzaron a cobijarse con el llamado de la Unión Patriótica como movimiento de la paz y las reformas. Esto conllevó a cambios sustanciales en la vida de las provincias olvidadas, como el afianzamiento, para citar un notable ejemplo, de la sindicalización de los trabajadores bananeros en Urabá, que hasta entonces no habían podido lograr el derecho que estaba establecido en la Constitución. En la práctica, tampoco estaban permitidas las movilizaciones populares en las comarcas y estas comenzaron a darse masivamente, levantando las banderas de la reivindicación regional, en especial la reforma agraria. Todo esto repercutió en la Unión Patriótica como efecto de la movilización social y del avance de la

conciencia política en muchas regiones marginadas del país, sometidas a los operativos militares y a la violación de los derechos humanos. La UP, así sintonizada con las regiones, era un motor que generaba una audiencia muy fuerte y un crecimiento casi espontáneo; y desde luego, vino la reacción de una derecha instrumentada desde el poder, bien entroncada con el aparato del militarismo de ese momento. Este comenzó, entonces, a golpear desde lo más alto la opción de esta vía hacia la paz y a este partido de la paz, que empezó a constituirse por primera vez en el país desde la época de la Guerra de los Mil Días. Recordemos que en aquel entonces no había tal partido de la paz y el movimiento guerrillero revolucionario de ese momento fue derrotado con lamentables consecuencias, como la entrega de Panamá tras la intervención del imperialismo norteamericano. Se habían cerrado todas las puertas, digamos, de un cambio democrático que sólo empezó a vislumbrarse treinta años después. En el caso nuestro, la reacción está orientada a reprimir anticipadamente lo que hemos llamado en algún momento la contrarrevolución preventiva, que se ejerce desde los más altos círculos del poder, calculando minuciosamente cómo aniquilar el nuevo liderazgo, en especial el de los jóvenes trabajadores, sindicalistas de la nueva generación, periodistas noveles, gente con ideas frescas, de líderes obreros muy comprometidos, personas inclusive del sector religioso, que miran con optimismo esta apertura democrática.

Yo creo que el concepto de la denominada guerra sucia es exactamente ese: la decapitación de un movimiento tan sólido que tiene la característica de

ser una fuerza política por la paz, con capacidad de realizar movilizaciones masivas a lo largo y ancho del país para confrontar la represión y la violencia del Establecimiento; por supuesto que todo esto conduce a la ferocidad de la respuesta de la ultraderecha, destinada literalmente a degollar el movimiento, región por región, para tratar de generar un fenómeno que no se conocía hasta entonces de una manera tan masiva y marginal, que hoy se califica tan eufemísticamente como el desplazamiento forzado; es decir, el refugio interno de regiones enteras en donde la violencia y el cercenamiento del movimiento popular, como parte de una política de Estado, se traduce en el éxodo masivo de centenares de miles de personas ligadas, de una u otra forma, a organizaciones de base, a un tejido social completamente aniquilado y que se ven obligadas a refugiarse en las capitales colombianas, huyendo de la persecución, de la violencia y de los crímenes masivos que están claramente marcados con las huellas del terrorismo de Estado.

Los partidos tradicionales hicieron concesiones muy fuertes al militarismo

Algunos entrevistados para este libro nos han dicho que en cierta forma no se logró asentar este proceso de paz porque fuerzas determinantes del Establecimiento, como los militares y los gremios económicos, jamás se comprometieron con el proceso. ¿Por qué se prosiguió si faltaba esa voluntad política de los verdaderos detentadores del poder?

—Sí. La burguesía, los partidos tradicionales mayoritarios, el liberal y

conservador, hicieron concesiones demasiado fuertes al militarismo y a la ultraderecha y desde luego al imperialismo que, por debajo de cuerda, actuaba contra esa esperanza de paz que era la UP. Se trataba de repetir la historia de 1902, es decir, el imperialismo calculaba que un cambio democrático en Colombia, que permitiera la incorporación del fenómeno guerrillero a una nueva situación en términos de paz y de solución política, de apertura democrática, que conllevara a un cambio del régimen político en Colombia, representaba para los Estados Unidos, que estaba en vísperas de revertir mediante el acuerdo Torrijos-Carter, la zona del Canal de Panamá, franja de control estratégico de toda la región, fundamental en su concepción de continente. El Canal de Panamá para los Estados Unidos es la vía de conexión de sus dos costas y particularmente de sus submarinos atómicos y de gran parte de su flota de guerra. Por lo tanto, nuestro espacio territorial, para bien o para mal, corresponde a un área estratégica de la geopolítica mundial del imperialismo norteamericano. En ese sentido, es indudable que la guerra sucia y todo el concepto posterior de tratamiento al reinicio constante de la represión contrainsurgente, basado en la lógica del conflicto de baja intensidad por parte del Ejército colombiano, bajo la orientación, el auspicio y la metodología de experiencias norteamericanas, aplicadas en varias partes del mundo, como Centroamérica y anteriormente Vietnam, pues naturalmente agregaron algo nuevo, a mi modo de ver, en este panorama truncado de la UP. Es que la guerra sucia, de alguna manera, es la declaratoria de una guerra

civil real en el país; es decir, lo que hasta entonces habían sido simplemente movimientos sociales y una insurgencia, digamos relativamente manejados desde una óptica de orden público, ahora todo eso se convierte en un gran proceso político de represión y de violencia que debe culminar con la desaparición de ese partido político de la paz, algo nunca visto en la historia reciente de América Latina en relación a la existencia de una fuerza política.

Colombia había conocido ya fenómenos críticos como El Bogotazo, el intento de destruir el gaitanismo por la vía de la violencia y de aniquilar a la izquierda y a los comunistas a partir del 9 de abril de 1948, pero ahora, en el marco de los procesos sociales y políticos de finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, la caída del muro de Berlín, la derrota del socialismo temprano y del socialismo existente en una parte del mundo y los cambios en la correlación de fuerzas en la arena mundial, naturalmente fueron aprovechados a fondo para desangrar sistemáticamente el desarrollo que había tomado la búsqueda de la paz y su partido más representativo, la UP.

Todos nos vimos envueltos en este ovillo de violencia contra la UP que parecía no tener fin, ¿pero cómo se explica la parálisis de las fuerzas sociales ante el genocidio, por qué el país no logró impedirlo creándose una mácula imborrable en su historia?

—Es que no existían las condiciones ni subjetivas ni del punto de vista logístico para una resistencia popular democrática generalizada en el país o, incluso, de una resistencia armada o insurreccional.

Hay que tener en cuenta que, hacia finales de la década de los ochenta y comienzos de los años noventa, la tendencia de varios movimientos revolucionarios en Colombia era la de hacer procesos de negociación que se desenvolvían en medio de la guerra sucia contra la Unión Patriótica. Son clarísimos los casos del M-19, el Ejército Popular de Liberación, un sector del Ejército de Liberación Nacional, el de la Corriente de Renovación Socialista, incluso de los movimientos del Cauca proindigenistas como el Quintín Lame y otros. Todos ocurrieron, repito, simultáneamente con el exterminio de la Unión Patriótica. Uno no se explica cómo es posible que movimientos guerrilleros revolucionarios, cuando estaban asesinando a otros sectores de la izquierda, entregaran sus armas.

Las inconsecuencias de la izquierda lograron, en cierta forma, neutralizar la resistencia a la guerra sucia

Álvaro Vásquez plantea en estos textos una cosa muy interesante para el debate. Él dice que desde sus albores en 1930, el Partido Comunista siempre ha sufrido los ataques de las clases dominantes para evitar que se fortalezca y la izquierda sea una opción, es como una fatalidad histórica en Colombia. Y usted, en una intervención hace poco en un evento de víctimas, señaló que la noche larga del genocidio de la UP no terminará hasta cuando realmente las fuerzas democráticas puedan imponer un cambio en la sociedad.

— Claro, yo llamo aquí la atención sobre la mezquindad de quienes no comprendieron tampoco el significado de lo que estaba ocurriendo o quienes pensaron

que los cambios en el panorama mundial y en el marco de la correlación de fuerzas global, sellaban definitivamente cualquier opción de resistencia, aún de la resistencia armada legítima en las condiciones de una guerra contrainsurgente que asumía las características, en mi concepto, de una guerra civil. Se trataba del exterminio más feroz, no sólo de unas organizaciones pacíficas, civiles y constituidas legalmente, incluso con presencia legislativa a todos los niveles como la Unión Patriótica y el Partido Comunista, sino del sindicalismo, los sectores juveniles y estudiantiles, los destechados, las agrupaciones agrarias, etc., en todo el país. La generalización de la guerra sucia afectó en la peor forma a estos movimientos populares. Las negociaciones y acuerdos que firmaron los grupos guerrilleros mencionados formaron parte de un proceso que logró, de cierta manera, neutralizar las resistencias a la guerra sucia. Por ejemplo, un fenómeno como la Constituyente de 1991 es igualmente un punto de salida que se complementa, por parte del Estado, con el bombardeo lanzado varios días por el gobierno de Gaviria contra Casa Verde, la sede del Secretariado de las FARC. Aquí se complementa y materializa ese viraje de regresar nuevamente al escenario de la confrontación militar y, por lo tanto, de cierre de ciertas posibilidades y vías que en un momento determinado pudieron estar abiertas para persistir en un Acuerdo de Paz. Quizás la insurgencia y las propias FARC no vieron con suficiente claridad la posibilidad de ese momento y en, un giro político, podrían haber creado las condiciones para una última opción antes de dicha acción

militar a Casa Verde. Son hechos pasados por los cuales no se puede culpar, como han hecho algunos, a la dirección del Partido Comunista y a la Unión Patriótica. Era una situación sumamente difícil en medio de los bombardeos a la región de La Uribe y con los comisionados que llegaron, tratar de defender esto cuando la decisión del Gobierno y de los Estados Unidos era el reinicio a toda costa de los operativos militares y la supresión del proceso de acuerdos con las FARC, tal como se venía desarrollando desde la tregua de 1984.

No hay un hecho más escandaloso en la historia del país que el haber dejado sola a la Unión Patriótica a merced de la devastación militarista

¿No fue un error histórico de la UP dejar de participar con un candidato propio en reemplazo de Bernardo Jaramillo y recoger todo ese movimiento popular que estaba huérfano y que resolvió votar por Antonio Navarro, del M-19, quien sustituyó al también inmolado aspirante de ese movimiento, Carlos Pizarro? Se decía que por falta de garantías no se presentaba un contendiente, pero mientras tanto la UP llamaba a votar ese mismo día por el sí a la Constituyente.

—Sí, es probable sobre todo cuando la situación se inserta en una seguidilla de magnicidios y donde prácticamente la ultraderecha intenta decapitar los candidatos presidenciales. Claro que no era tan fácil prever la opción de una alternativa en ese momento. Una cosa eran las palmaditas en la espalda que daba el señor Turbay Ayala como jefe del Partido Liberal cuando se presentaban los asesinatos de los compañeros, y otra

cosa era la complicidad que el Establecimiento mayoritario liberal y conservador cumplió durante todo ese periodo de la guerra sucia. Yo creo que no hay un hecho más escandaloso en la historia del país que el haber dejado sola a la Unión Patriótica a merced de la devastación del militarismo, sin ningún sentido de una idea mínima de la democracia, ni siquiera al estilo de López Pumarejo o de López Michelsen, que reivindicaron el derecho de la izquierda y de los comunistas a tener un lugar bajo el sol. Aquí el lugar fue bajo tierra. Esto tenía un significado práctico que lo vivimos con mucho dolor y que naturalmente le arrebató a la Unión Patriótica la capacidad de poder proponer alternativas en los momentos más dramáticos para el país. Es que yo recuerdo que teníamos hasta tres o cuatro entierros de compañeros por semana en distintas partes del país. Eso fue algo sencillamente atroz que dejaba por fuera el examen de cualquier tipo de soluciones a la problemática nacional, pues el tema de la muerte lo desbordaba todo. Era el logro de la ultraderecha de llevar el país a la guerra civil, pero al mismo tiempo sin que se cristalizaran soluciones de fondo a los problemas más acuciantes de Colombia y que hoy, veinticinco años después, reclaman una salida.

Finalmente, y lo digo en presente, ¿qué significa la Unión Patriótica para la historia del país?, porque realmente toda esa deuda política que tiene la Nación aún no se ha saldado.

—La Unión Patriótica sentó los elementos básicos de un programa hacia la paz que está por hacerse en Colombia.

No señalo con esto que se deba repetir esa experiencia tal cual, pero sí tener en cuenta los valores que ella aportó para futuras formulaciones. Ese legado hace parte de la memoria histórica y conserva mucha validez. En este sentido vale la pena preguntarse, ¿cuál es el compromiso de las fuerzas de la izquierda hoy con el tema de la paz, el más crucial del país, y frente a la solución política del conflicto? Hoy esto no está completamente claro y me parece que estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde el Polo Democrático Alternativo, que no es ni el sustituto ni una copia o la continuación de la Unión Patriótica pero, en primer lugar, sí se tiene que esbozar con precisión cuál es el programa de paz que estos procesos de unidad de la izquierda contemporáneos le deben presentar al pueblo colombiano como salida y, en segundo término, cuál es la posición que se debe tomar frente a la ultraderecha y su política de guerra guiada de la mano del imperialismo norteamericano y ahora sí peor que en la época anterior de Uribe, de una guerra civil manejada y controlada desde Washington a través del Comando Sur. Al respecto, creo que debemos abrir bien los ojos porque ahora más que en cualquier otro momento, es necesario tener presente los pasos que dio Uribe al suscribir en 2010 un acuerdo para ceder siete bases a Estados Unidos por diez años. Era el prospecto de la continuación de la guerra por otra década más, como si no fuera suficiente el medio siglo que llevamos en ella. Que no haya duda al respecto: la ultraderecha y el imperialismo necesitan la continuidad de la guerra en el marco de su política de aplastamiento de la protesta social, por

un lado, y de intervencionismo militar y de condicionamiento de América Latina, por el otro, en un cuadro de conveniencias mutuas contra los pueblos.

De ahí que pongan de nuevo en movimiento la IV Flota Naval en aguas de Suramérica, para controlar el continente cuando no existe ninguna amenaza de agresión contra ellos o insurrección en la región. ¿Y por qué razón se mantiene el Plan Colombia por encima de todas las circunstancias, con ese viraje contrainsurgente que ha tomado y dirigido fundamentalmente a potenciar las acciones del Estado colombiano contra sus vecinos que están desarrollando procesos de cambios democráticos? Entonces me parece que hay necesidad de reflexionar seriamente en función de que estamos en un nuevo momento, que nos llama a insertar el tema de la solución política y de la paz como un gran eje de la vida nacional y del cambio democrático en Colombia. No podrá haber mejoramiento de las condiciones de vida, ni manera de frenar el modelo neoliberal y antidemocrático, así como toda la entrega al imperialismo, mientras el tema de la paz no lo vinculemos hoy con el campo de la soberanía y la autodeterminación, no sólo del pueblo colombiano sino de todos los pueblos de la región.

El tema de la paz en Colombia, que hemos llamado una paz democrática, es decir una paz que permita abrir las puertas a los cambios democráticos, que conduzca a la desmilitarización de las regiones, es una consigna de América Latina, no solamente de Colombia. El fin del Plan Colombia y el retiro de los asesores y tropas militares del territorio colombiano y de las bases militares

que Estados Unidos mantiene en el continente, es un punto sumamente crucial para nuestros destinos comunes como pueblos. Y tiene que ver, sobre todo, con los cambios que están aconteciendo en América Latina y con el hecho de que el imperialismo afronta una crisis de hegemonía y por lo tanto ya no es todopoderoso como pudo serlo muchos años atrás. En consecuencia, tenemos que abrir ese espacio y aprovechar este momento para avanzar hacia una solución política al conflicto armado interno con la solidaridad de todos los pueblos y Gobiernos progresistas de la región.

Solucionar el tema de la guerra en Colombia, por la vía de la paz negociada

y no a través de las armas, tiene que ver con la autodeterminación y con la paz en todo el continente. No es un problema de narcotráfico como se le ha querido imponer a la opinión. La cuestión esencial es cómo lograr esa solución política por la vía del diálogo, de los cauces civilizados, de las formas pacíficas del entendimiento, de la recuperación de un ambiente de democracia, de reformas, de profundas transformaciones que hagan inviable la continuación de la guerra. Como se lo propusieron, a costa de su propia vida, miles de cuadros y activistas de esa esperanza de paz que se llama Unión Patriótica.



Los féretros de seis campesinos de la región de El castillo, Meta, pertenecientes a la Unión Patriótica, masacrados en septiembre de 1988, esperan su traslado al cementerio en una improvisada carreta que sirve de coche fúnebre. (Foto: Pabloé, Voz)

— — — Medófilo Medina

La UP resultó atacada desde diversos flancos y distintos fuegos, los más notables provenían de las Fuerzas Armadas

Medófilo Medina es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en esta disciplina de la Universidad de Lomonosov, de Moscú. Se retiró de las filas del Partido Comunista en 1990 por divergencias políticas, pero mantiene una posición de izquierda comprometida con los cambios. Ha colaborado con el Movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz que preside Piedad Córdoba. En agosto de 2011 adquirió notoriedad por una carta abierta que le envió al jefe de las FARC, “Alfonso Cano”, quien fue su compañero de lides en la Juventud Comunista de la Universidad Nacional, donde le expresaba que era ya hora de sentarse

con el Gobierno para comenzar de nuevo conversaciones de paz y sobre la base de renunciar a la lucha armada en forma definitiva. Es autor de numerosos libros de temas históricos.

Antes de la Unión Patriótica, las FARC pensaron en constituirse como partido

Cuando nació la UP usted era uno de esos militantes estimados por el Partido Comunista, como quiera que participó en la propia elaboración de los textos de la historia de la organización ¿cómo observó la formación del movimiento, esta iniciativa política en la que no fue para nada ajeno el PCC?

—Con la conformación de la Unión Patriótica, “Jacobo Arenas”, el segundo hombre del Secretariado de las FARC, estaba pensando en una organización que fuera un partido político y, conversando con Alberto Rojas Puyo, miembro de la Comisión Nacional de Paz, yo le preguntaba: “¿Si se convoca un partido político, cuál va a ser entonces la relación con el Partido Comunista? Quizás sea más conveniente una configuración amplia, donde el Partido Comunista haga parte como una de las fuerzas constituyentes”. No sé qué peso tuvo mi apreciación, lo cierto fue que antes de la Unión Patriótica se pensó en la creación de un partido, así lo definió “Arenas”. Surge la UP en esas circunstancias del proceso de paz que había abierto la Ley de Amnistía en 1982; entonces, a las alturas de la firma de los Acuerdos de La Uribe, todo este proyecto de una fuerza política nueva, de confluencia de sectores populares, de agrupaciones políticas de signo democrático, lucía muy

auspiciosa y diversas esferas del Establecimiento y de la reacción pronto registraron la novedad. Ahora, y no creo que de manera centralmente planificada, en un tiempo breve fueron dando, primero, respuestas hostiles y, después, respuestas francamente criminales contra la UP. No excluyo que en ese proceso, en algún momento, haya habido cosas más centralmente dirigidas, seguramente que en la búsqueda que tú y otros colegas investigadores adelanten es posible esclarecer esta relación entre lo espontáneo, lo que viene de diversos orígenes, y algo más planificado, desde el Estado mismo. Es repetir lo ya sabido: la UP resultó atacada desde diversos flancos y distintos fuegos, los más notables provenientes de una fracción de las Fuerzas Armadas, a través de varias brigadas, coaligadas o no, con la mafia, las fuerzas paramilitares y, un elemento muy importante en esa terrible alianza, los gamonales y el bipartidismo, que se sentían desplazados, que veían que esta fuerza tenía particular arraigo en esas regiones que no habían sido incorporadas a la política, que a su vez estaban siendo incorporadas a la economía por corrientes de colonización y simultáneamente estaban entrando a la escena nacional. La UP surge en ese momento y políticamente ofrece posibilidades, no sólo en su formalización, sino en su constitución como una corriente nueva.

Betancur se precipitó con el proceso de paz

¿Qué pasó para que no se cimentaran los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz firmados entre el Gobierno y las FARC en 1984, que tienen sus altibajos en 1985 y ya

en 1986, 1987 y 1988, viven sus peores momentos con hostilidades mutuas para romperse definitivamente en 1990?

—Hay muchas razones. Me parece que el presidente Betancur se precipitó mucho con el tema de la paz y no midió ni pesó el momento político que vivían las FARC. Ellas venían e iban hacia un proceso de radicalización militar, hacia lo que “Jacobo Arenas” llamó como el “nuevo modo de operar”. En esto hay una cosa central: cómo la izquierda, las FARC incluidas, y el movimiento guerrillero en su conjunto valoraron el paro cívico del 14 de septiembre de 1977. Esa movilización, que cobró unas proporciones inesperadas, incluso para sus mismos organizadores, puso en la historia contemporánea de Colombia una separatoria de aguas. Es una fecha decisiva porque allí se imponía un viraje, como yo lo estimo y sobre lo cual he escrito: las FARC, para referirme a la fuerza que convoca y da nacimiento a la UP, estimaron que el paro cívico había sido una insurrección que no culminó porque habían faltado ellos. Un nuevo paro cívico debía ser la resultante de la concurrencia, en el mismo terreno, del movimiento armado de las guerrillas colombianas, con un levantamiento, digamos, cívico popular. Ésa sería la gran carta de la revolución y por eso las FARC entraron en un diseño nuevo en sus formas organizativas, elaborando nuevos planes militares. Todo esto se consolidó en la VII Conferencia Nacional de las FARC de 1982. La adecuación la realizaron con cierta lentitud. Lo primero que hicieron en esos años, después del paro cívico, fue la creación de grupos de trabajo especial que operaban al margen de la organización más

global del partido, destinados a abrirle camino al trabajo urbano, ya con tintes militares dirigidos por las FARC. Eso fue deshecho de la manera más terrible por los servicios secretos del Estado; fueron asesinados compañeros que andaban en semejantes prácticas y finalmente el mecanismo no operó. El trabajo de adecuación de las FARC prosiguió y tuvo éxito en el plano militar, menos en el político.

Volviendo al por qué ese proceso de paz fracasó, Betancur no sopesó en qué estaban las FARC, por un lado, y por otro, no valoró que un proceso de paz verdadero, eficaz, debe pasar por una consulta, por un consenso de sectores claves que yo llamo los poderes fácticos. Que un Presidente saque del bolsillo la iniciativa de un proceso de paz y lo aplique en esas condiciones, es algo que nace con el ala rota.

Y por otro lado no hubo compromisos reales de los sectores del Establecimiento.

—Belisario no se tomó un tiempo para decidir y consultar con la ANDI, con la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), la ANIF, el Establecimiento y por supuesto con los militares. Ni siquiera había un acuerdo previo de los partidos. Si había algún rechazo, debía buscar convencerlos, pero no podía salir a un camino de diálogo sin tener algún arreglo claro con su propio campo y una idea diáfana respecto a en qué andaba el destinatario del proceso de paz; es una lucidez a posteriori y de ahí no podía salir un tratado de paz.

¿Por qué actuó de esa manera?

—Porque Betancur es conservador; su visión de la política, aunque tenga rasgos

avanzados, es conservadora, autoritaria y paternalista en relación con el movimiento social. Con respecto a las FARC, su visión era, “hay que darle una oportunidad a esos muchachos” y la oportunidad fue una amnistía generosa. Ya que salen a un proceso de paz y como no se les ha escuchado y tenido en cuenta, un buen padre de familia debe abrir la puerta a los hijos descarriados. Una visión autoritaria en su aspecto paternalista.

¿No vale esa misma precisión para la otra parte? ¿No fueron ingenuos? Quizás pensaron que un proceso de paz era posible sin el aval del Establecimiento o de la opinión pública, a través de un referendo, por ejemplo. Recuerde usted que por la época estaban más activos que nunca los grupos paramilitares, con el MAS a la cabeza, y se acababa de salir del Estatuto de Seguridad bajo Turbay, de manera que toda esa maquinaria represiva permanecía bien aceiteada para entrar en acción contra el nuevo germen de unidad popular.

—Yo no soy tan partidario de pensar que las FARC vieron con ingenuidad ese proceso de paz. Más bien creo que la dirección acordó utilizar este respiro de la tregua para continuar su programa de readecuación. Yo no creo que hubieran tenido una genuina voluntad de paz; este es un elemento que hay que tener en cuenta para el debate histórico y si alguien tiene pruebas en sentido contrario, magnífico. Pero repito, no creo que haya habido ingenuidad alguna de parte de ellos. A comienzos de 1986 estuve visitando al Secretariado de las FARC en un momento en que se veía el fracaso del proceso de paz, y cuando ya la UP estaba sometida al más tremendo castigo, e iba

naturalmente con esa preocupación que nos agobiaba a todos de que nos estaban matando. Ese sentimiento se lo expresé a “Jacobo Arenas” y cuando le pregunté qué iban a hacer las FARC frente al exterminio, me dijo: “Los compañeros se hicieron ilusiones; con un Ejército vendido al imperialismo y unas oligarquías profascistas, aquí no puede haber paz”. Quedé frío con semejante respuesta porque efectivamente lo que se estaba viendo era el arrasamiento de todo ese proceso firmado dos años atrás.

¿Cómo entender históricamente que la UP se comprometiera en ese proceso, desde la civilidad plena, pero hay un grupo armado tradicional muy grande que no tiene esa vocación de paz que usted afirma y siga por ese camino impotente, al garete de los acontecimientos de la guerra, sufriendo la peor violencia? ¿Qué fue lo que ocurrió?

—Como una víctima que va al matadero. Todo esto hay que examinarlo con la mayor serenidad y seguramente un examen juicioso tiene consecuencias todavía. En ese momento lo que se planteaba era, o las FARC renunciaban a la combinación de todas las formas de lucha y lo mismo hacia el Partido Comunista, es decir, desistían de tener un aparato militar y acogerse al proyecto político, o se inhibían de darle curso a ese mismo proyecto político y pasaban a otro tipo de acción, a ser un partido clandestino al servicio de un proyecto armado.

Pero no tras la legalidad de la UP

—No. Eso que dicen tanto, que la combinación de todas las formas de lucha es una tesis leninista es el peor chiste que han inventado porque es muy trágico.

Lenin habló que un partido de nuevo tipo debería distinguirse por ser capaz de pasar de la acción ilegal a la acción legal, pero en etapas sucesivas. Lenin nunca pretendió la creación de aparatos armados; su modelo residía en qué hacer con el ejército zarista, cuál debía ser el trabajo del partido allí. Es decir, en esa política el PCC tuvo una equivocación garrafal. Aún con todo lo que se avanzaba, nunca hubo la posibilidad de decir, en medio de la tragedia, paremos, cambiemos el rumbo.

La idea de que toda expresión alternativa está condenada a ser ahogada en sangre es una verdad a medias

El debate está en ese punto: si las FARC y el Partido Comunista abandonan la táctica de combinar todas las formas de lucha y sigue creciendo la UP —esa esperanza de paz que la gente estaba saludando—, ¿hubiera parado el genocidio? O aquí hay una tradición, como dice Álvaro Vásquez, exsecretario general del PCC, consistente en que la burguesía se ha dedicado toda la vida a eliminar cualquier germen que apunte al fortalecimiento del comunismo, que esa ha sido su misión histórica.

—Conozco desde hace muchos años esa argumentación y si se persiste en no reexaminar ese tipo de argumentos, no llegaremos a una nueva visión, más ajustada a la realidad de lo que fue la UP, esa esperanza y tragedia del pueblo. No es cierto. No hay un mandato fatalista, como intentan probar Álvaro Vásquez y otros, de manera más torpe en distintos casos, de que existe una ley sociológica que testimonie que en este país cualquier movimiento alternativo

es ahogado en sangre. ¿Por qué no ver los casos en el mismo Partido Comunista? Examinemos, por ejemplo, lo que fue ese movimiento coetáneo de la lucha en el sur y oriente del Tolima, en Sumapaz, encabezado por Juan de la Cruz Varela. Allí los campesinos no se dejaron sacar a las malas y empuñaron las armas; organizaron la autodefensa y sólo entregaron los fusiles en octubre de 1953, sin contraprestaciones, y volvieron a su tierra. Al ser nuevamente atacados por la Policía y los latifundistas, volvieron a tomar las armas y tan pronto hubo alguna posibilidad de apaciguamiento, retornaron a las conversaciones, no sólo los campesinos paperos del Sumapaz, relativamente prósperos, sino todos los labriegos de la región. No fueron expulsados y tampoco permitieron que les arrebataran sus tierras. Sí, fueron castigados, pero persistieron allí como sector social y políticamente hay que mirar cómo han sido las elecciones en Cabrera y otros municipios del Sumapaz: siempre las ha ganado el partido. La idea de que toda expresión alternativa está condenada a ser ahogada en sangre, creo que es una verdad a medias y las peores mentiras son hechas de medias verdades.

Algunos señalan, como Álvaro Delgado, que el fracaso de la UP es el fracaso de la combinación de todas las formas de lucha.

—Sería algo muy unilateral atribuir solamente a ese factor el proceso de exterminio de la UP, el genocidio. Por supuesto que tenemos unas tradiciones sanguinarias de las clases dominantes en Colombia. Nunca me hice la ilusión en este tipo de análisis, de que una vez desmovilizadas las FARC se abrirían con la UP unas

avenidas casi bucólicas de realización de esta formación política. Se hubieran presentado los asesinatos, la represión y mucho de lo que hubo, pero cuál es la variable que yo proyecto: que si se hubiera levantado un movimiento masivo de apoyo a la UP y a unas guerrillas que habían pactado la paz, hubieran podido despertar dentro del mismo Establecimiento fuerzas que no necesariamente ven que el camino sangriento es el único para llegar a acuerdos de paz; liberar esas posibilidades era imposible porque grandes sectores de la opinión se hicieron a la idea de que allá están con las armas, aquí les contestan de una u otra manera, y ésa es la guerra. De forma tal que la posibilidad de que fluyera un movimiento de apoyo para que sirviera de dique al genocidio, no se podía dar en esas circunstancias.

Entonces era imposible pensar que el Establecimiento aceptara de buena manera que existiera un movimiento armado fortalecido y en pleno crecimiento, que incluso se daba el lujo de contestar con grandes golpes militares los intentos de ruptura de la tregua y, paralelo a esto, ver cómo un movimiento popular y antioligárquico avanzaba sin pausa.

—Eso era imposible. Yo recuerdo discusiones dentro del partido, a veces muy episódicas, en donde discutíamos, por ejemplo, sobre las quejas, que en actos de la UP los miembros de las FARC aparecían en esos eventos armados. Un camarada del Comité Ejecutivo Central manifestaba que debíamos dejar de ser tan ingenuos y añadía: “el pueblo debe acostumbrarse a ver a su ejército en funciones”. Y claro, la oligarquía tomó también nota de esto.

En ese sentido esto era como una especie de suicidio político del movimiento, mientras las masas no salieron a rechazar el genocidio y frenar a los violentos. El PCC, el brazo fundamental de la UP, quedó liquidado en regiones enteras con centenares de cuadros asesinados, todo su tejido social destruido.

—Desde el paro cívico de 1977, la izquierda siguió mirando la realidad colombiana con las matrices del pensamiento que venían de antes y los cambios que se procesaron en Colombia comenzaron a darse a finales de los años setenta, pero no entraron en la cabeza de los dirigentes y desde ahí comienza todo esto. En algún momento llegué a esas conclusiones y viendo históricamente la protesta urbana en Colombia, como dicho paro cívico, estaba claro que la protesta había puesto sobre la mesa unas tendencias que hacían curso y exigían un cambio como expresión de una nueva política. ¿Qué pasó? El PCC fue la fuerza de organización fundamental del paro cívico, era lo decisivo, pero no se midieron las consecuencias, es decir, no se registró la cultura política que había hecho posible esa formidable protesta y se siguió trabajando con las matrices del viejo pensamiento.

Bernardo Jaramillo se había deslindado de las FARC en su famoso discurso en el encuentro de paz de Ibagué de febrero de 1989, donde condena abiertamente las acciones armadas de la guerrilla. Después de su asesinato, cuando la UP no lanza un candidato que lo reemplace, viene el rompimiento del movimiento y se retira un grupo importante que engrosa el M-19,

encabezado por el presidente Diego Montaña Cuéllar y el vicepresidente, Angelino Garzón.

—Allí en la práctica hubo un rompimiento del PCC con la UP, pero hay en esa coyuntura una cosa interesante y en la que participaron Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo y Antonio Navarro; me refiero al intento de Jaramillo, a finales de 1989 y comienzos de 1990, de crear un partido de confluencia que agrupara a toda la izquierda. Cuando Navarro toma la alternativa tras el asesinato de Pizarro, no prosigue en esas consultas y se va en forma independiente con el M-19. Esa carta de unidad no se jugó, se intentó pero se frustró. La decisión de Navarro fue que eso no era bueno y terminó sobrevalorando las posibilidades de su movimiento. El M-19 se presentó solitario, mientras la UP resolvió abstenerse de la contienda presidencial de 1990.

¿A futuro, qué lección deja la UP, en su creación, desarrollo y tragedia, con miras a un nuevo proceso de paz?

—En primer lugar, antes que salir directamente a un proceso de paz es necesario llegar a unos mínimos consensos, pues no todos estarán de acuerdo. Cuando un Gobierno lance una idea de paz debe haber llegado a ese consenso en su propio campo. En segundo término, se requiere una voluntad real del movimiento armado, ¿y qué entiendo por voluntad real?, que antes de decidir involucrarse en el proceso debe haber decidido la reinserción a la vida civil. Si entran a un

proceso de paz pensando, “vamos a ver por el camino qué obtenemos”, eso ya es un camino muerto; para qué entonces un proceso si ya antes hay una decisión de ese calibre. Claro, la fase de discusión hace falta y yo no estoy por la entrega incondicional sino por una salida política del conflicto, negociada, pero hay unas premisas para entrar en ese proceso. Yo no soy de los que claman un proceso ya, pues una de las lecciones es asimilar todo lo que pasó en Colombia entre 1982 y comienzos de 1990, para proyectar cosas mejores. Mientras tanto, discutir en todos los medios lo que sería un proceso de paz y no dejar a las FARC solas operando en ese sentido. He propuesto una interlocución franca, sincera, cruda, sobre cuál es la propuesta para que este país salga de la espiral de la violencia, porque de todos modos algún día tendremos que llegar a cambios sociales y políticos importantes.

¿Qué significado tiene el genocidio contra la UP y para la cultura política de Colombia?

—Recoge unas tendencias de incorporación de las pautas de violencia en la política colombiana muy fuertes. La experiencia que deja es que la violencia sí paga. Sin embargo, en el plano dialéctico, la idea a discutir es que, desde lo nacional y social, la violencia no es productiva, no es fecunda para generar un país nuevo, con pautas humanistas, con mayores posibilidades de desarrollo.



El 13 de marzo de 1988, en una de las calles del barrio Nuevo Chile, se dio este encuentro entre la candidata a la Alcaldía de Bogotá por la coalición democrática, integrada por el Nuevo Liberalismo Independiente, A Luchar, el Frente Popular y la Unión Patriótica, Clara López Obregón, y el presidente del movimiento, Bernardo Jaramillo. En el medio, de sombrero, Mario Upegui. (Foto: Lara, Voz)

Mario Upegui ———

Ante la guerra sucia, las FARC nos llamaron a unirnos, pero decidimos no renunciar a las conquistas obtenidas por la UP

Mario Upegui ocupa actualmente la presidencia de la Unión Patriótica y, como tal, es su representante legal. Se vinculó en los años sesenta al Partido Comunista en el movimiento de los destechados, llegando a ser por varios años presidente de la Central Nacional Provivienda. En esta actividad, fue uno de los fundadores del barrio Policarpa en Bogotá, tras unas duras escaramuzas con la Policía que dejaron víctimas fatales, hasta ganar los terrenos para centenares de familias pobres de la capital. Fue concejal de Bogotá por varios periodos, el último en 1996, cuando reemplazó a la presidenta de la UP, Aída Abella, quien tuvo que asilarse tras un grave

atentado contra su vida. Hace parte del Comité Central del Partido Comunista desde 1966 y ha integrado su Comité Ejecutivo durante varios años.

Éramos los más interesados en poder desarrollar un movimiento político amplio como la UP

Como esta es una historia de la Unión Patriótica y usted tiene tanta ligazón con todo ese proceso fundacional del movimiento, del cual fue concejal por Bogotá en varios periodos y actualmente es su presidente, ¿qué recuerda de estos pasos iniciales dentro del Partido Comunista?

—En el partido, una vez se conoció que estaban conversando la guerrilla y el Gobierno y que esto podría abrir un proceso de paz, de inmediato todo ello fue recibido con mucha simpatía, porque el pueblo colombiano ha sido siempre muy golpeado con la violencia, sobre todo en el campo, donde nuestra organización siempre ha llevado la peor parte en décadas. El partido sufrió mucho bajo las dictaduras de los gobiernos conservadores y en la de Rojas Pinilla y después con el Frente Nacional y el bipartidismo. En esa época, entre 1958 y 1970, no teníamos derechos políticos como el de ser elegidos a puestos de representación popular. Y menos tener nuestro propio candidato a la Presidencia de la República por la alternación, bajo la cual se repartían liberales y conservadores cada cuatro años el poder. Era la más odiosa discriminación.

Esto explica, en parte, el surgimiento de varios movimientos guerrilleros en los años sesenta, ante la falta de garantías ciudadanas y la represión del movimiento popular.

Belisario Betancur se comprometió con la paz firmando los acuerdos con las FARC en La Uribe, lo que recibimos con alborozo en el partido, siempre los más golpeados por la violencia de todos estos largos años. Entonces nos dimos de inmediato a la tarea de apoyar la iniciativa que surgió de esos acuerdos: la creación de un nuevo movimiento político, la Unión Patriótica.

Nosotros éramos los más interesados en poder desarrollar un movimiento político amplio, democrático, pluralista. El Partido Comunista acogió, entonces, con mucho entusiasmo la propuesta de las FARC de crear la Unión Patriótica como un espacio para su ingreso a la vida política legal y poder dejar las armas. Comenzamos el trabajo ayudando a construir las juntas patrióticas de la UP en todas las ciudades y en veredas, encontrando gran entusiasmo de las gentes que saludaban el nuevo movimiento.

De allí los resultados en las primeras elecciones en que participa la UP, las parlamentarias y para Presidente en 1986 con Jaime Pardo Leal, que llega a tener la votación más alta para un candidato de la izquierda en Colombia, con cerca de un cinco por ciento. Desgraciadamente desde el mismo momento en que se crea la Unión Patriótica comienzan la persecución y los intentos de destruir el proyecto político que le apuntaba a la paz. Principalmente de parte de los militares que no quisieron aceptar la tregua y los Acuerdos de Paz firmados por Belisario Betancur.

Hemos entrevistado a varios exdirigentes de la UP y todos coinciden en que sin el respaldo político de los militares al proceso y de los mismos sectores dominantes,

era impensable que se avanzara hacia una paz final, ¿cuál es su opinión?

—Betancur destituyó al ministro de Defensa, el general Landazábal, porque se oponía a los acuerdos, ordenaba irrespeter la tregua con las FARC cuando las guerrillas permanecían en paz en las zonas convenidas buscando el desarrollo de esta política de la Unión Patriótica. Las tropas asaltaban los campamentos guerrilleros y mataban a muchos combatientes desmovilizados, dedicados a las actividades políticas abiertas según lo pactado. Entonces el proceso siempre estuvo en riesgo de fracasar y más aún con el asesinato continuo de los militantes de la UP que nunca habían tenido ligazón alguna con la guerrilla o eran desmovilizados. Los alzados, ante semejante situación, decidieron no acudir a las poblaciones a hacer trabajo político, como lo venían realizando, sin armas y de civil. Obviamente los militantes del partido y de la UP no podían hacer lo mismo, además porque nunca se habían alzado en rebelión con un fusil en la mano. Siempre habían estado en la legalidad y ahora se comprometían con el nuevo proyecto.

Avances sin precedentes

Pero el partido seguía apareciendo ante el país ligado a esa expresión original de la FARC que era la UP, lo que no desaprovecharon los enemigos del proceso, sirviéndose de esa confusa aleación para comenzar a liquidar lo que se estaba construyendo y con grandes perspectivas políticas. ¿Ustedes no pensaron en una suspensión del proceso de construcción de la UP ante una situación tan dramática?

—El hecho es que la Unión Patriótica nace de los Acuerdos de Paz de Belisario

con la guerrilla de las FARC y por iniciativa de estas. Pero cuando ellos acusan las primeras acciones militares y se rompe la tregua, simplemente regresan a su vida de campamento. Cuando llega esa situación ya nosotros habíamos andado un buen tramo: habíamos recorrido todo el país construyendo las Juntas Patrióticas, eligiendo representantes a los concejos municipales, más de trescientos logramos sacar en la primera prueba electoral a la que nos presentamos y dos docenas de diputados a las asambleas, y contábamos con un sólido núcleo de parlamentarios, cinco senadores y nueve representantes a la Cámara, entre ellos dos comandantes guerrilleros desmovilizados, “Braulio Herrera” e “Iván Márquez”. Y la UP tenía apenas un año de nacida.

¿Y ya no había lazos con las FARC?

—No, nosotros nos desligamos. Las FARC incluso invitaron al Partido Comunista a que nos fuéramos al monte, que nos integráramos a su movimiento alzado en armas porque no había condiciones para la lucha legal y abierta. En una palabra, que pasáramos a la clandestinidad y nos fuéramos para la guerrilla. Claro que las condiciones para desarrollar nuestra actividad cada vez empeoraban y los mensajes llegaban todos los días con la muerte en campos y ciudades, y los dos primeros congresistas a los que no les permitieron prácticamente posesionarse, como el representante Leonardo Posada y el senador Pedro Nel Jiménez, dirigentes comunistas asesinados con dos días de intervalo en Villavicencio y Barrancabermeja, el 30 de agosto y 1° de septiembre de 1986. Nosotros no

aceptamos esa propuesta, dijimos “no señor, nuestra posición es la de la lucha abierta legal y en eso estamos comprometidos con nuestro pueblo y vamos a seguir trabajando en ello”.

Sin embargo, el genocidio siguió su curso, se habla de una catástrofe histórica.

—La ultraderecha no se quedó cruzada de brazos viendo el ascenso del nuevo movimiento, y menos cuando Jaime Pardo Leal, en una campaña de pocos meses, obtuvo en las elecciones presidenciales de 1986 cerca del 5% del electorado. Vino la masacre, con las características que usted recuerda, de una verdadera catástrofe histórica. El caso de Urabá es muy representativo cuando la UP se alzó con casi todas las alcaldías de esa rica región bananera y agrícola de Antioquia. Los paramilitares, en connivencia con sectores de las Fuerzas Armadas, arrasaron con la UP en una verdadera operación de exterminio con generales como Rito Alejo del Río, el famoso pacificador estilo Morillo. Allí pusieron en práctica la famosa Operación Retorno, acuñada por el propio Ejército y que no era otra cosa que permitir las condiciones para que regresaran, a sangre y fuego, los viejos barones de la politiquería liberal conservadora que habían sido derrotados pacíficamente en las urnas por la UP.

El terror contra la UP llenó de zozobra al pueblo colombiano

Pero en cierta forma las fuerzas sociales y democráticas quedaron paralizadas ante el exterminio y no salieron a respaldar la propuesta pacifista de la Unión Patriótica, dejándola abandonada por completo.

—Bueno, el terror ejercido desde el Estado y sus cómplices del paramilitarismo

llenó de zozobra al pueblo colombiano y, atemorizado —pues eso es lo que buscaban—, se fue marginando de nuestras banderas. Y claro, otros sectores políticos, lo digo francamente, se acomodaron en el oportunismo rehuendo cualquier conflicto. Se cambió la persecución por los puestos burocráticos en instituciones y hasta embajadas y nos fueron dejando poco a poco solos; gente que estuvo con nosotros nos dio la espalda, y otra gente que hubiera podido llegar, pues no se atrevió finalmente a acompañarnos.

Y se llega hasta un solo senador en 1994, Manuel Cepeda, después de haber tenido cinco senadores y nueve representantes a la Cámara en 1986.

—Finalmente, cuando nos mataron al último senador de la UP, Manuel Cepeda, el que iba a reemplazarlo, Hernán Motta, tuvo que marcharse al exilio pues le hicieron dos intentos de meterse a su casa, mientras las amenazas contra la familia no cesaban. Y cuando nos quedamos sin representación parlamentaria nos quitaron la personería jurídica porque la ley electoral así lo establece, sin tener en cuenta que teníamos derecho a ella pues se nos había sacado literalmente a tiros del Congreso, en un hecho insólito y no por otras razones. Para un partido estar inscrito necesita cincuenta mil votos de respaldo o cincuenta mil firmas o tener representación en el Parlamento, y a nosotros como nos mataron a nuestros representantes no pudimos llenar semejantes requisitos en medio de un exterminio que no cesaba y no sufría ningún otro partido. Como no volvimos a presentar candidatos para la Cámara y el Senado, nos limitamos a

presentar listas en el Concejo de Bogotá y por ahí en alguna que otra región donde habían unas medianas condiciones de seguridad. Aída Abella, la formidable dirigente sindical, presidenta de la UP, logró salir electa al Concejo de Bogotá en 1992 y 1996, pero pocas semanas después tuvo que irse al exilio tras un fallido atentado que conoció todo el país. Me tocó reemplazarla en ese periodo legal y asumo, hasta hoy, la presidencia de la UP.

Una vez asesinado Cepeda, víctima de la Operación Golpe de Gracia que comenzó con el atentado que le costó la vida al secretario nacional de organización del Partido Comunista, Miller Chacón, en septiembre de 1993, la UP prácticamente desaparece del panorama político nacional.

—En la década de la guerra sucia se termina destrozando la organización a nivel nacional. Quedan liquidadas las miles de Juntas Patrióticas de base que habíamos construido, así como las juntas municipales y departamentales que cubrían casi todo el país ante el asesinato de sus dirigentes o su obligado exilio para salvar la vida. Los pocos sobrevivientes que quedamos mantenemos una Dirección Nacional, muy menguada, pero conservamos viva la llama de la Unión Patriótica. Una de las tareas es la persistencia en recobrar nuestra personería jurídica, una pelea legal que lleva diez años y en la que no cejaremos, y la otra, no menos importante, el impulso a la demanda por el genocidio contra el Estado colombiano que hace curso desde 1993 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instaurada por la Corporación Reiniciar y con la asesoría de la

Comisión Colombiana de Juristas, con el aval del Partido Comunista y la UP, en representación de las víctimas. En este sentido, seguimos en las pesquisas para encontrar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes, que son todos de lesa humanidad, es decir, que jamás prescriben. Entonces, buscamos cómo seguir alimentando ese proceso, con nuevos datos y testimonios, promoviendo en la gente que acopie información que nos pueda ayudar, con testigos o documentos, etc. Algo se ha logrado, pero no es nada fácil, gente que presencié alguno de estos crímenes ha sido asesinada o se ha marchado para no declarar y reina así la impunidad.

No desmayaremos hasta que se conozca la verdad, haya justicia y reparación integral para las miles de víctimas del genocidio de la UP. Políticamente el Estado, tarde que temprano, tendrá que resarcir al movimiento. No sabemos cómo, devolviendo las curules de la Unión Patriótica que nos arrebataron, no en franca lid, tantas sedes dinamitadas, en fin, todo, son tantos los daños causados. Mientras tanto, nos vamos anudando con los nuevos sectores que están surgiendo y manteniendo los lazos con los antiguos compañeros consecuentes.

Para algunos, el genocidio contra la Unión Patriótica hace parte de uno de los factores de la clausura de una salida política al conflicto armado interno, es decir, esta situación puede hacerlos pensar que nunca existirán condiciones para la lucha legal de masas, como lo intentó este movimiento, justificándose así la insurgencia armada.

—El ambiente a nivel internacional y en lo interno, no es muy propicio para el

desarrollo de la lucha armada. La gente, por todo esto que ha ocurrido, está muy cansada y no quiere más guerra, lo que desea es la paz, anhelo de siempre de todo el pueblo colombiano. Por eso se explica todo ese apoyo que recibió la Unión Patriótica. Trataron de liquidar nuestra organización, pero esto no puede ser eterno. La realidad es que estamos viviendo un proceso mundial y también latinoamericano de cambios hacia la democracia, con unas fuerzas de izquierda que han venido avanzando. Todo esto tendrá que influir aquí en nuestro país; en ese sentido, hay experiencias nuevas como la del Polo Democrático

Alternativo que en 2006 se constituyó, con un programa de avanzada, como la segunda fuerza en las elecciones presidenciales con más de dos millones trescientos mil votos, lo que habla bien de las grandes reservas democráticas que hay en el país.

Tenemos que seguir luchando por la unidad y la organización del pueblo, por la construcción de un movimiento político que pueda ser la salida a toda esta situación que ha vivido el país y llegue la paz. Como lo soñaron los miles de mártires y perseguidos de la Unión Patriótica.



Marcha de campesinos en el Sumapaz, en mayo de 1985, con las banderas y consignas de la Unión Patriótica apoyando la Apertura Democrática. (Foto: Voz)

Omer Calderón ———

El genocidio contra la UP era la expresión política más acabada del exterminio contra todo el movimiento popular

Omer Calderón es un curtido dirigente de la UP y, como tal, es su secretario general desde el año 2000, cuando el último Congreso de la organización lo eligió para ese cargo. Hace parte de las filas del Partido Comunista desde 1975 y llegó a ser secretario general de la Juventud Comunista en 1988. Hizo parte del Comité Ejecutivo Central del PCC desde ese año hasta el 2006. Con estudios universitarios de Pedagogía, su profesión, está vinculado hace más de una década a la Universidad Distrital de Bogotá.

¿Cómo son sus comienzos en la vida del Partido Comunista y su integración a la Unión Patriótica?

—Yo inicio mi militancia comunista en el Colegio Nacional Santa Librada en Neiva, donde hice parte del Consejo Estudiantil desde el primer grado de bachillerato, ahí me vinculé en 1975 a la Juventud Comunista (JUCO) y posteriormente en el Huila integré las organizaciones estudiantiles. Después llegué a la Dirección Nacional de la JUCO cuando era secretario general José Antequera. En 1988 la organización propicia un proceso de renovación de cuadros. Antequera ya era dirigente nacional de la Unión Patriótica, responsable de asuntos internacionales. Entonces se promovió la primera elección directa por parte del Comité Central de la JUCO del secretario general, recayendo en mi nombre. De 1988 a 1991 estuve en la Dirección del partido con un equipo muy importante que nos correspondió todo lo que tenía que ver con tres grandes procesos como las negociaciones de los Acuerdos de La Uribe, la continuación de las conversaciones que se adelantaban con las FARC, el desarrollo de la Unión Patriótica y el desenvolvimiento de la Asamblea Nacional Constituyente.

Las intensas discusiones en el Partido sobre los Acuerdos de La Uribe

Cuando usted se integra a la Dirección del partido en 1988, la UP tiene ya tres años de vida, ¿cómo se daba esa discusión en el seno de la dirección sobre el proceso del movimiento, su consolidación, la ampliación de sus lazos y su relación con las FARC?

—Era una discusión permanente, pero había una posición del partido que fue la

que quedó consignada en el XIV Congreso del Partido en 1984, donde participó una delegación de las FARC y el mismo “Raúl Reyes” se hizo presente leyendo un saludo en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez en Bogotá. Se trataba, primero, de forjar una apertura política y la tesis básica era que si se lograba una serie de transformaciones democráticas que permitiesen un cambio en las reglas del juego civilista, impidiendo que continuara la violencia política del Estado contra los sectores populares y de izquierda, se estarían dando posibilidades de potenciar la lucha política en ese aspecto y, dos, lo que tenía que ver con lo que en aquel entonces también proponíamos desde la Juventud Comunista: la consolidación de fórmulas de poder compartido, o sea, la idea de cómo también un proceso de negociaciones permitiría, a través del cambio de las reglas, la creación de unas condiciones sociales distintas; estamos hablando entonces, de esas condiciones que partían, entre otros aspectos, del problema de la tierra. Sobre la base de unas condiciones estructurales básicas, como reforma agraria, cambios en el régimen económico para que este fuera democrático y una serie de medidas políticas como la elección popular de alcaldes y la designación de un ministro de Defensa civil. Eran aspectos que se planteaban y existía la disposición para implementar todo este proceso a nivel nacional y con esa visión. La discusión giraba en torno a la proyección estratégica de las reformas políticas y sociales, de manera que garantizaran y consolidaran una serie de cambios para que tales reformas pudiesen tener efecto. La idea era que

no bastaba simplemente con unas reglas políticas si no había unas condiciones sociales que le correspondiesen. Y también la discusión giraba en torno a la actitud y la perspectiva que planteaba el Gobierno, el Estado en general. Una de las situaciones que se presentaba era la total desconfianza frente a la acción gubernamental, que estaba sustentada en el permanente incumplimiento de los acuerdos de delimitación territorial que se habían establecido con las guerrillas, una vez se inició el proceso con la UP.

Las FARC destacan una serie de cuadros para el trabajo abierto y legal como UP, pero el Establecimiento reacciona con el asesinato de varios de ellos. En aquel entonces las FARC perdieron muchos más miembros en el proceso de impulso de la UP que los que habían perdido en la confrontación armada. En esas condiciones, buena parte de la discusión versaba en la ruptura o persistir en el proceso de paz, debate que fue muy agudo porque de una parte estaba la tesis de que la acción política abierta permitía al enemigo actuar con la fuerza contra los sectores que estaban en la búsqueda de una solución negociada al conflicto y, de otra parte, la idea de persistir en la búsqueda de una salida política para crear un espacio que condujera a cambios en la vida nacional; contra esta posición, reitero, se levantaban quienes afirmaban que en buena medida el proceso de negociación permitía crearle condiciones al Establecimiento, al Estado y a las fuerzas oscuras, para actuar en forma violenta, como lo venían haciendo de años, contra la izquierda. La acción abierta iba a facilitar la liquidación de los cuadros políticos, independientemente que tuvieran un origen en las FARC o no.

La solución al conflicto por la vía política siempre primó en la UP

Como sabemos, a la UP se vincularon una serie de sectores y fuerzas políticas diferentes a los comunistas y además surgió a la vida política en una estrecha alianza con el Partido Liberal en numerosas regiones. También hay que tener en cuenta que la mayoría de los representantes al Congreso de la República, Cámara y Senado, fueron elegidos en 1986, en la primera salida electoral de la UP, y en coaliciones con el Partido Liberal. De ahí los nueve senadores y quince representantes. De manera que ese movimiento, amplio y de coalición, enfrentaba una acción sistemática de exterminio. Y de nuevo el debate: unos veían, la minoría, que esa situación violenta era una consecuencia de la acción abierta, y otros, como yo, seguíamos sosteniendo que la razón de la liquidación no radicaba en la acción pública y abierta del proyecto político que representábamos, sino en la acción permanente y coordinada del Establecimiento para impedir el desarrollo y surgimiento de una alternativa política. El propósito de esa acción era justamente impedir que se consolidara un proyecto político amplio y obligarnos a un retroceso en los procesos de negociación y búsqueda de una solución pacífica a la confrontación como era, y es, el querer del pueblo colombiano, y llevarnos a una situación de conflicto, que a nuestro juicio es lo que al Establecimiento más le conviene. La posición de buscar una solución al conflicto por la vía política y no por las armas, como hoy persistimos, siempre primó en la UP. Y claro, la otra posición era que las soluciones políticas podrían

estar anteceditas del incremento de los planes de acción insurgente, que es también la que se ha venido desarrollando y que finalmente, después de un punto de encuentro, llegó con las negociaciones de El Caguán. Pero en buena parte, entonces, la discusión radicaba en la idea de si habían o no habían condiciones para la lucha política abierta y de masas o si, por el contrario, estaba cerrada totalmente esa vía y la única opción era la acción insurgente armada.

¿Pero qué pasó entonces? ¿Por qué empezó todo el periodo de la violencia contra la Unión Patriótica? El 86 y el 87 fueron los años más álgidos. Sin embargo, no se estaban cumpliendo los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz que se habían firmado con Belisario Betancur. Había ruptura en muchos frentes de lucha y sin embargo la UP seguía insistiendo en esa relación con las FARC. ¿No ocasionó esto el castigo al movimiento político amplio, mientras la insurgencia realizaba acciones, puede ser que en defensa ante los ataques? ¿Por qué no se planteó la necesidad de un deslinde con la guerrilla desde un comienzo, y no tan tarde, en 1988, deslinde reafirmado con fuerza por las propias FARC?

—Obviamente esa discusión estaba en la mesa, pero matizada por las condiciones de la situación política. No hay que olvidar que existían unos acuerdos y espacios que se habían conquistado. La UP y sus aliados habían obtenido también una buena representación en el Congreso, asambleas y concejos, que para la época era una cifra altamente significativa. Así mismo tengamos en cuenta otros aspectos de esos años, como los procesos de unidad, bien significativos

en el movimiento popular. Hablamos de la unidad sindical con el surgimiento de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con una fuerza muy importante en la vida política nacional. El movimiento estudiantil lograba converger en una unidad que prácticamente abarcaba todas las expresiones. Los sectores agrarios realizaban grandes marchas por la tierra con tomas de latifundios. Es decir, existía una relación de fuerzas favorable para la lucha política y la acción social de masas en la búsqueda de fortalecer la unidad popular y jalonar su desarrollo. En ese plan también estaban actuando las FARC, que reiteraban su fidelidad a los acuerdos con el gobierno de Betancur. Sin embargo, se estaba presentando una situación difícil ante los constantes incumplimientos de la tregua por parte de los militares. Uno de los puntos de quiebre fue que finalmente no estaban operando las Comisiones de Verificación del Cese al Fuego, especialmente las regionales.

Las FARC mantenían cuadros dedicados a tareas netamente civiles, incluso dos de sus comandantes habían salido electos al Congreso. Aquí quiero destacar una cosa: en esa dialéctica de los acontecimientos lo que se mantuvo fue el proyecto político, que aún persiste, de buscar una proyección y un espacio político para la acción de quienes se vieron en la necesidad de impulsar los cambios por la vía de las armas. Esa idea política la compartimos, o sea, el programa que propone la insurgencia armada de las FARC es una propuesta de transformaciones democráticas y está consignada en el programa que estableció la Unión Patriótica en 1985 y que, en

términos generales, sigue teniendo vigencia. Sus aspectos fundamentales fueron consignados en los Acuerdos de La Uribe y hacen parte de una plataforma política. Quiero también resaltar algo nodal: la insurgencia armada es una expresión política, evidentemente en armas, pero es un proyecto político, y lo otro no descalifica esa plataforma cuyo contenido está encaminado a las transformaciones democráticas. Tanto la insurgencia armada, como el movimiento social y progresista, como la izquierda en su conjunto, siguen planteando temas como el de la reforma agraria, que hoy en día es parte fundamental de las contradicciones sociales. El Estado, a la vez que se comprometía en una serie de acuerdos, desarrollaba toda una gama de operaciones encubiertas. La Unión Patriótica se sostuvo en la idea y la perspectiva, que hoy plantea el Polo Democrático, que la solución al conflicto es sólo a través de una negociación, y que no se trata, desde aquel entonces hasta hoy, de una transacción sino de abocar una serie de elementos de fondo que el país sigue requiriendo hacia una transformación profunda de sus estructuras.

No había otra alternativa que hacer política y respetar los Acuerdos de La Uribe

El Establecimiento dejó prácticamente solo a Betancur y no se comprometió a fondo con los Acuerdos de Paz con las FARC, en esas circunstancias, ¿por qué seguir con un proceso que perdía toda seriedad?

—No había otra alternativa que hacer política y respetar los acuerdos, además, insisto, la UP estaba convencida que no

había salida diferente al conflicto armado que la salida política. La otra opción era que todo el mundo pasara a la clandestinidad y se vinculara a la lucha armada. Pero el punto era que las condiciones políticas no daban para eso, porque los caminos de la insurrección no se presentan de manera espontánea ni como resultado de una determinación, sino que son fruto de las relaciones de fuerza, de la lucha política en general. Baste citar dos casos, Nicaragua y El Salvador. Y en el país, cuando se daba un proceso de unidad y de incremento de la lucha social, la acción genocida contra la Unión Patriótica era la expresión política más acabada de una operación de exterminio contra todo el movimiento popular. Igualmente, con la liquidación de centenares de cuadros de la Unión Patriótica, se estaba exterminando toda una pléyade de dirigentes sindicales, agrarios, estudiantiles. Era total e históricamente imposible retroceder para hacer un repliegue y preparar una nueva ofensiva, cuando estábamos avanzando, como nunca antes, en la construcción de un amplio movimiento social.

Los crímenes fueron orquestados desde las esferas del Estado con sus Fuerzas Armadas

Todos los días veíamos en los titulares de prensa la matanza, sin embargo la sociedad colombiana quedó paralizada. ¿A qué se debió esa situación, por qué no hubo una movilización?

—Sí hubo una reacción y acuérdesese de las grandes protestas por el asesinato de Jaime Pardo Leal, entre otras. Pero la violencia sistemática comenzó a debilitar al movimiento de protesta y la indecisión del conjunto del régimen, que

no contribuyó a frenar esta situación, lo que lo hacía cómplice del exterminio, por acción o por omisión, cuando su primer deber era defender la vida, lo que corrobora es que estábamos frente a un crimen de Estado. Quiero enfatizar que esa acción planeada, sistemática y contundente, con ingentes recursos que se destinaron para cometer tantos crímenes, con el apoyo y la alianza de sectores del narcotráfico, fue orquestada desde las esferas del Estado con sus Fuerzas Armadas. Pero también hubo una percepción por parte del movimiento insurgente, una idea que ha estado muy presente en la izquierda y el Partido Comunista, de que a mayor agudización de las contradicciones sociales y políticas, mayor va a ser la respuesta del movimiento popular. Cosa que no opera necesariamente así. Lo que se vio con esa acción metódica del Estado contra la UP y las fuerzas populares, fue contener la marcha de la unidad sindical, replegar al estudiantado y resquebrajar el movimiento agrario por los paramilitares en todas las regiones, sin contar con los serios efectos ideológicos y políticos, como la pérdida de las perspectivas por los cambios ante el terrorismo de Estado. Toda esta ofensiva podría llevar incluso a pensar que la causa del genocidio se encuentra en la debilidad propia del movimiento político, que no tuvo la capacidad para responder. Pero no, la causa del genocidio reside en el ejercicio permanente del Estado, con todo su poder, de exterminar cualquier proyecto alternativo.

¿En el fondo no estábamos frente a una especie de guerra preventiva, aprovechando

la situación que traía el surgimiento de la UP con su amplio trabajo de masas, el papel creciente de sus cuadros, su influencia nacional? Es decir, liquidar en su cuna esa perspectiva, porque como afirma Álvaro Vásquez, dirigente histórico del PCC, lo que siempre ha tenido en mente la burguesía es derrotar, como sea posible, al Partido Comunista, que con la UP se podría haber convertido en una alternativa real de poder.

— El general Rafael Samudio Molina, ministro de Defensa de Betancur, afirmaba que no había que atacar Casa Verde, sede del Secretariado de las FARC, sino la sede principal del Partido Comunista en Bogotá y así se acababa, de una vez por todas, el conflicto. El expresidente Alfonso López Michelsen, en alguna ocasión posterior al paro cívico del 14 de septiembre de 1977, que paralizó al país como no se había visto en décadas, a una pregunta sobre el temor que había por la izquierda y el Partido Comunista si electoralmente no eran gran cosa, respondía que a esas fuerzas no se les mide por los votos sino por su influencia en los sindicatos y el movimiento social. Y lo digo también a propósito del paro de 1977, sí hubo una guerra preventiva. En ese entonces discutíamos en torno a la situación que se estaba presentando en Nicaragua con las fuerzas que operaban desde el extranjero, pero que incursionaban y actuaban dentro de ese país, los denominados “Contras”. Ese modelo de reacción estaba dirigido a minar al Gobierno sandinista. Observábamos que semejante esquema, de cierta manera, se estaba aplicando en Colombia. Efectivamente, el tema de la guerra preventiva o de una confrontación estratégica dirigida a liquidar a los cuadros políticos de la izquierda se había

puesto en marcha. Mire los cuadros que fueron liquidados: en su gran mayoría tenían una inmensa proyección, eran relativamente jóvenes, con unas posturas y una visión política audaz, dispuestos a las alianzas con los sectores más diversos del país, y sobre todo, con posiciones unitarias que era lo que se estaba fortaleciendo en ese momento; no olvidemos que el Establecimiento siempre le ha tenido temor a los procesos de unidad. No está solamente la influencia del Partido Comunista, que ha sido muy significativa en la historia del país, sino la presencia también de otras fuerzas de izquierda y sociales, que estando dispersas no representan ningún problema, pero en esa década del ochenta tenía presencia la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y la CUT nacía llena de vida, para volver a citar los casos más importantes. Entonces buena parte de esa guerra sucia era también contra la unidad de las fuerzas populares y funcionaba además como advertencia. El Establecimiento ha estado tranquilo y cómodo en el país en la medida en que el Partido Comunista apenas tenga una influencia mínima, pero una vez se vinculan a él amplias fuerzas sociales y políticas, cuando estas se acercan, ello genera una serie de temores que van en contra del ejercicio de la democracia. Pero lo mismo ocurre con los sindicatos, ¿o cómo se explica que en 2011 tengamos una cifra igual de afiliados a la que había en 1950? ¿Fue una guerra? Yo comparto eso, lo discutíamos y lo veíamos en el ejemplo de Nicaragua.

La UP pierde su personería jurídica al no obtener cincuenta mil votos en las elecciones de 1998, ni tampoco representación

electoral, pero ustedes insisten en la permanencia del movimiento.

—Nuestra última participación electoral triunfante fue con Manuel Cepeda, quien salió electo al Senado en 1994 por el Partido Comunista, como fue inscrito su nombre, con el apoyo de la UP, pero después del asesinato de Cepeda perdimos la representación que había quedado en manos de Hernán Motta, su suplente, quien tuvo que marcharse del país por amenazas contra su vida. La UP, pues, no alcanzó representación en el Congreso. Esto condujo de manera formal a que la UP perdiera la personería jurídica, pero con un debate de fondo: no se alcanzó esa representación en el Congreso porque en buena parte del país habían liquidado sus cuadros y estábamos frente a una acción sistemática de desplazamiento, en poblaciones enteras de afiliados y simpatizantes de la organización. De ahí lo justo de las reclamaciones legales instauradas ante las Cortes y el Consejo de Estado, donde hace curso otra demanda para que se nos restituya la personería a que tenemos derecho pues fuimos sacados del escenario electoral literalmente a sangre y fuego. En el año 2000 hicimos el último Congreso de la UP, donde fue escogido Mario Upegui como presidente y yo como secretario general. La idea del Congreso era renovar la dirección y mantener la causa del proyecto de la Unión Patriótica, una idea que no ha perdido vigencia y que estriba, en esencia, en hallar condiciones para que la acción política no tenga que recurrir a la resistencia armada, para que también el Estado abandone definitivamente las operaciones encubiertas que lleva a cabo, a través de los grupos

paramilitares, y directamente, contra el movimiento popular. Esto debe desaparecer definitivamente de las costumbres políticas del país. La propuesta de buscar una salida política al conflicto y que levantó la UP, sigue presente en la agenda nacional. Hoy mantenemos el nombre y la organización, la dirección y, por otro lado, sigue en pie el proceso contra el Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el delito de

genocidio. La UP se apresta a convocar un nuevo Congreso.

El país debe saber muy bien que si no se aclara y no se resuelve el tema del genocidio contra una fuerza política como la Unión Patriótica, difícilmente se podrá avanzar hacia otros procesos que conduzcan a una negociación de paz. El Estado ha tenido que defenderse todos estos años, casi dos décadas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya salió un fallo histórico en su contra en el caso Manuel Cepeda.



Ángelino Garzón, vicepresidente de la Unión Patriótica, en un recorrido por los barrios de Bogotá durante la jornada electoral del 11 de marzo de 1990, levanta la mano del candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa, quien saldría electo al Senado. A su izquierda el dirigente de la UP, Óscar González. (Foto: Lara, Voz)

Óscar Dueñas ———

No haber participado en las elecciones presidenciales de 1990 fue el más grave error de la Unión Patriótica

Óscar Dueñas, oriundo de Tunja y abogado egresado de la Universidad del Rosario de Bogotá, comienza su vida política desde las filas de los sectores cristianos de Boyacá, pero siempre con una vocación progresista influida por el movimiento de los curas rebeldes de Golconda. Más tarde hace parte del Frente Democrático, siendo el primer concejal que tiene la izquierda en la capital del departamento. En 1990, tras el asesinato de Bernardo Jaramillo, se convierte en el tercer presidente de la Unión Patriótica.

Se margina del movimiento ante el asedio y las amenazas contra su vida. En 1995 es nombrado magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y en 2006 decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Es especialista en el tema de la tutela y acaba de publicar *El camino de Santiago*, una novela sobre el genocidio de la UP. Es un consumado ajedrecista y, como tal, ha pertenecido a varias ligas.

Los primeros pasos antes de llegar a la dirección

¿Cómo fueron esos momentos previos a su ingreso a la Unión Patriótica y los albores mismos del nuevo movimiento?

—Habría que remontarse un poco a la década del sesenta, en donde el Frente Nacional obligaría a quienes no compartían el bipartidismo a ubicarse, bien fuere dentro de los movimientos insurgentes que nacían, o dentro del Movimiento Revolucionario Liberal que conducía Alfonso López Michelsen. Pero si se provenía de sectores liberales en esa época, también estaba la posibilidad de hacer parte de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), bajo las banderas de Rojas Pinilla, que también contaba con un ala liberal, si bien la mayoritaria era la conservadora.

Entonces políticamente yo nazco en la ANAPO conservadora, porque bajo el sistema bipartidista uno debía jurar que era conservador o liberal, de lo contrario no tendría ninguna ubicación dentro del espectro político de Colombia. En la ANAPO había corrientes muy interesantes, una de ellas católica, en donde estaba Germán Zabala, que había impulsado el grupo de Golconda. También hacía parte el exsacerdote rebelde René García, así como toda una serie de curas

contestatarios cuyas tesis oscilaban entre los planteamientos marxistas de Zabala y los cristianos del doctor Vergara, un conocido psiquiatra de la época. De manera que se va formando un movimiento dentro de la ANAPO, de un profundo contenido social, pero sin dejar su raigambre cristiana. La ANAPO entra en crisis y muchos de quienes estábamos en esa posición de lucha, hacemos filas en la Unión Nacional de Oposición (UNO). Allí están el Partido Comunista y el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), entre otros, profundamente comprometidos en la defensa de los trabajadores, lo que atrae a vastos sectores.

Después vendría, ante la división de la UNO y su posterior desaparición, el Frente Democrático (FD), de un contorno un poco más intelectual con la presencia del doctor Gerardo Molina. Yo fui, por este movimiento, el primer concejal de izquierda en Tunja. Con los embriones del FD se posibilitaría el nacimiento de la Unión Patriótica, que en el caso de Boyacá tenía su fuerte en Puerto Boyacá. Allí fue como el bautizo exterminador del nuevo movimiento, con el arrasamiento paramilitar -con la complicidad oficial- de diecisiete células del Partido Comunista, hasta el punto que allí la UP no podía participar en las elecciones municipales después de haber sido, con el FD, la primera fuerza. Los ocho concejales que teníamos en esta población quedaron reducidos a cero. Puerto Boyacá se convirtió en lo que han llamado, incluso expuesto aún en una valla a la entrada de la ciudad, como el bastión contra el comunismo. Cuando se iniciaron las conversaciones de paz, quienes estábamos en el Frente Democrático nos vinculamos

de inmediato al naciente proyecto de la Unión Patriótica. Había muchísimo entusiasmo porque se ampliaba el horizonte con el ingreso de liberales y sectores conservadores. La UP no era solamente el Partido Comunista.

¿Por qué la toma del Palacio de Justicia se produjo pocos días antes del Congreso Constitutivo de la Unión Patriótica?

—Cuando se constituyó la UP, la situación comenzó a presentarnos serias dificultades, impensables antes para un nuevo movimiento político en el país: trabajar alrededor de la candidatura presidencial de “Jacobo Arenas”, el segundo hombre de las FARC después de “Marulanda”. Esto de por sí ya era un reto. Se le quería dar nacimiento a la Unión Patriótica con un acto público masivo en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde llegaría “Arenas” en helicóptero para aceptar la postulación. No se trataba de una patraña, como lo he leído en algunos libros sobre la Unión Patriótica. Se había invertido muchísimo tiempo, trabajo y dinero en esa campaña, y ya estaba toda la publicidad en carteles, volantes, cuñas, etcétera, anunciando al comandante “Arenas”. Desafortunadamente cinco días antes del evento se presentó la toma del Palacio de Justicia y se frustró lo que hubiera sido un acontecimiento sin precedentes. Yo pregunto por qué no se ha querido analizar históricamente que la toma del Palacio de Justicia se haya producido precisamente cuando faltaban pocos días para el evento más trascendental de la Unión Patriótica. Los preparativos para esa operación llevaban con seguridad meses y sus organizadores sabían muy bien que la toma iba a

coincidir con la aparición en la plaza pública de la UP, lo que mantenía en la expectativa a todo el país.

A la UP le tocó realizar su aparición pública una semana después de los trágicos acontecimientos del 5 de noviembre de 1985, realizando una manifestación en la esquina de la Avenida Jiménez con Séptima, en medio de toda suerte de medidas de intimidación policial. “Jacobo Arenas” había renunciado a su candidatura al conocerse planes para atentar contra su vida al llegar a Bogotá.

Por fortuna teníamos la gran carta de Jaime Pardo Leal, el mejor cuadro que haya tenido la UP en toda su historia y cuyo asesinato fue la peor desgracia, no sólo para el movimiento sino para el país al perder el más grande caudillo popular después de Jorge Eliécer Gaitán. De eso no hay ninguna duda. Ya venían asesinando a decenas de militantes, pero la muerte de Pardo Leal fue determinante para golpear lo que ya se vislumbraba como una alternativa real de poder en el país.

El Primer Congreso de la UP es en noviembre de 1985, pocos días después de la sangrienta toma y retoma del Palacio de Justicia, ¿usted asiste al evento?

—Llegué con un día de retraso porque mi casa en Tunja había sido cercada por los servicios de inteligencia, entonces me tocó planificar con unos compañeros salir a las tres de la mañana, aprovechando que en ese momento iban a tomar tinto en un caspete ahí cercano, por eso no estuve en el primer día.

¿Lo eligen en la Dirección Nacional de la Unión Patriótica?

—Bueno, la Dirección Nacional estaba compuesta como por trescientas personas, de las cuales hacía parte, pero al Comité Ejecutivo, un aparato central de nueve personas, accedí tres años después. Cada compañero caído era reemplazado de inmediato pero otros, ante los asesinatos, decidieron regresar al monte, como los congresistas “Iván Márquez” y “Braulio Herrera”, o pasar a la clandestinidad. Antes de ser presidente hacía parte de los nueve, que éramos Bernardo Jaramillo, Luis Emiro Valencia, Angelino Garzón, Diego Montaña Cuéllar, Napoleón Vane-gas, Guillermo Banguero, Carlos Romero, Mario Upegui y yo. Cuando mataron el 22 de marzo de 1990 a Bernardo Jaramillo, nuestro candidato presidencial que ya tenía una enorme audiencia nacional, en el segundo golpe más artero a la UP después del magnicidio de Pardo Leal, cinco dirigentes de los ocho que quedábamos se marcharon al M-19, quedando solamente Romero, Upegui y yo en el Comité Ejecutivo Nacional. Todos ellos se fueron a respaldar la candidatura presidencial de Carlos Pizarro León Gómez, a quien también asesinaron un mes después, por lo que terminaron apoyando la opción de Antonio Navarro Wolff.

Entonces el Partido Comunista, fuerza principal de la UP, en una reunión en el Concejo de Bogotá, determinó que fuera yo el nuevo presidente. Con las nuevas fuerzas que vienen de la UP, el grupo de Pizarro se convierte en la Alianza Democrática M-19 con los citados cuadros, más Alberto Rojas Puyo. El resto de la historia ya la conoce bien el país. La Alianza Democrática M-19, después de las elecciones

presidenciales de mayo de 1990, ingresa al gobierno de César Gaviria, quien nombra como ministro de Salud a Navarro Wolff y Rojas Puyo es enviado a la embajada de Colombia en Hungría, además otorga otros cargos a varios miembros de esa agrupación. Ya había empezado el proceso de decaimiento de la Unión Patriótica.

Bueno, aquí entramos en un punto que me parece de suma importancia en la historia de la UP ¿cómo fue posible que el Partido Comunista, en esa reunión del Concejo de Bogotá, pocos días después del asesinato de Bernardo Jaramillo, lograra la no participación en las elecciones presidenciales cuando todo el país daba muestras de su apoyo al movimiento? ¿No fue acaso un grave error semejante paso? Y la paradoja, el Partido Comunista, una vez Navarro Wolff obtiene 750 mil votos, saluda como un gran triunfo de la izquierda el resultado, después de mostrar poca simpatía por su candidatura, como lo revelan las páginas del *Semanario Voz*.

—Fue el más tremendo error del cual yo también fui partícipe, al plantear la abstención por falta de garantías, pero lo que hicimos con eso fue abrirle el camino al M-19. Ahora, ¿quién hubiera podido ser el candidato? indudablemente Diego Montaña Cuéllar; sin embargo, hay que tener en cuenta que el Partido Comunista siempre tuvo recelo de él. Bueno, y había otra serie de circunstancias que pesaban en nuestra decisión, como el asesinato de Diana Cardona, alcaldesa de Apartadó, un centro urbano de casi total influencia electoral de la UP. Eso fue un golpe muy duro.

Ahora bien, Montaña Cuéllar, figura histórica del movimiento social

colombiano, estaba rodeado de otras figuras de la UP que ya no veían muy bien a la organización de los comunistas. La culpa no se le puede achacar al Partido Comunista porque algunos de quienes se fueron para el M-19, encabezados por Montaña en ese momento, lo hacían con todo agrado. Es que ya desde hacía meses en la dirección de la UP se veía esa corriente, mayoritaria por cierto, que tenía casi como su principal contradictor al Partido Comunista.

Sin embargo la UP llama a votar por el Sí para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, pero en blanco para Presidente, ¿cómo para una cosa no hay garantías y por eso se retiran de la contienda presidencial, pero para otras sí, como la consulta?

— Puede ser, pero es que en ese momento el clima era realmente de gran peligro, entonces un voto en blanco apenas es el voto del militante más comprometido, pero sólo alcanzamos setenta mil votos.

¿En la Unión Patriótica qué opinaron cuando vieron los resultados de Navarro?

— Bueno, la burguesía apoyó a Navarro, de eso no hay la menor duda y no creo que el movimiento insurgente hubiera estado interesado en la abstención por la sencilla razón de que cualquiera sospecharía que con ese paso se le estaba abriendo el camino al M-19; es que estábamos enfrentando los más duros golpes dados a un movimiento popular, dos candidatos presidenciales asesinados en menos de tres años, centenares de cuadros, de los más brillantes del movimiento popular, asesinados, y todas las estructuras organizativas maltrechas por la persecución en una

actividad criminal con complicidad del Estado, como ha quedado demostrado y, lo peor, la falta de solidaridad de la izquierda que abandonaba a la UP.

Entonces, en esa dura situación, comenzar a construir de nuevo otra dirección de la UP.

— Era muy difícil que los candidatos que teníamos aceptaran hacer parte de la Dirección, pues el temor era obvio. Y yo acepté la presidencia, cuyos antecesores habían sido Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo, en medio de un aparato de protección muy grande de la Policía, el DAS y la UP, en una escolta tripartita. Yo era muy juicioso pues no daba las posibilidades que pudieron haber dado otros compañeros, desafortunadamente. Me tocó salir dieciséis veces al exilio, pero volvía una y otra vez. Cuando mataron a Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987, a los ocho días hubo un atentado contra mí en Bogotá, por parte de un miembro de la Sijin, que casi me cuesta la vida. De ese tamaño era el panorama de seguridad para los dirigentes de la UP: nos tocó pagar el más alto precio para que se abrieran caminos de democracia auténtica en el país.

Cuando fuimos con Ovidio Salinas, otro dirigente nacional de la UP, hoy exiliado, a hablar con César Gaviria sobre los intentos de atentados contra nuestra vida, el Presidente nos dijo: ¿y ustedes qué me aconsejan que haga? De inmediato caímos en cuenta que la Unión Patriótica estaba completamente desprotegida por parte de quienes como Estado tenían esa obligación suprema. Esa frase de César Gaviria fue determinante.

¿Era inevitable el genocidio de la Unión Patriótica?

¿Usted cree que el genocidio de la Unión Patriótica era inevitable? Álvaro Vásquez, el exsecretario general del Partido Comunista, tiene la teoría de que la burguesía colombiana se ha empeñado en toda su historia en liquidar a esa organización, no dejarla crecer y que no tenga ninguna influencia en la vida nacional.

—Por lo menos el 95% de las víctimas de la UP pertenecían al Partido Comunista, de manera que en eso Álvaro Vásquez tiene toda la razón. El anticomunismo como ideología y como política no ha dejado de estar presente un solo momento en la vida nacional; grandes segmentos de la población colombiana, no es que vean el exterminio del comunismo como algo natural, pero callan y no protestan, y otros sectores de las clases dominantes que son rabiosamente anticomunistas, no se paran en pelos a la hora de ponerle obstáculos al crecimiento de los comunistas. Otros factores ideológicos que actúan en la esfera política son el nacional catolicismo y el militarismo, y la Unión Patriótica nace en medio de este panorama de la realidad nacional.

Frente al genocidio de la UP no se vio ninguna reacción de parte del pueblo, mientras el movimiento seguía sacrificando a sus mejores cuadros, hasta Gilberto Vieira, siendo secretario general del Partido Comunista, reconoce en una entrevista en *Voz* que no había en Colombia un partido con más vocación de sacrificio.

—Es muy curioso ese espíritu cristiano de sacrificio, como se vio tan claro dentro de la militancia comunista, es decir, sin ser cristianos típicamente estábamos

trabajando como cristianos. Era una generación completa que tenía como gran virtud el sacrificio.

Entonces, ¿qué había que hacer frente a esta actitud violenta del Establecimiento, frente a estos verdaderos crímenes de Estado, ¿disolver la Unión Patriótica? ¿Exiliarse? ¿Pasar a la clandestinidad o irse al monte?

—Quizás el único camino hubiera sido el exilio, como hicieron varios compañeros de la UP, y tener una dirección política en el exterior, eso alcanzamos a pensarlo en un momento. Cierta vez copamos la embajada canadiense aproximadamente media docena de personas, en plena manzanilla y antes del asesinato de Jaramillo. Él, que se encontraba en Medellín, nos indicó que fuéramos a buscar la protección de la Iglesia, pero nosotros entramos a la embajada de Canadá para pedir asilo en masa. Angelino Garzón, Diego Montaña, Óscar González y otros, accedimos a la legación diplomática. Los canadienses nos dijeron que ellos no daban protección, y terminamos discutiendo entre nosotros. Demostramos debilidad y no hubo más salida que retirarnos.

Era simplemente publicitar el tema porque a la UP nunca le faltó la prensa todos los días. Y una de las grandes equivocaciones fue pensar que por salir en los medios, incluida la televisión, se estaba desarrollando el movimiento.

Y eso de la combinación de todas las formas de lucha, que una vez proclamara el Partido Comunista como expresión de una realidad nacional, ya no se blandía, pero se le castigaba a la UP sin razón alguna pues las FARC, a menos de dos años de creado el movimiento, en plena vida de Jaime Pardo

Leal, habían señalado que no tenían ya ningún lazo con dicha organización.

—Ésa era una frase de la dirección del partido, fundamentalmente de Gilberto Vieira en sus análisis de la situación colombiana. Y se le castigaba con la pena de muerte a la UP porque la lucha armada seguía y las continuas treguas no duraban; entonces las Fuerzas Militares se dedicaron a exterminar lo poco que quedaba de la Unión Patriótica en un verdadero crimen de Estado, como lo demostró el asesinato del senador de la UP, Manuel Cepeda.

¿Qué lecciones le deja a la sociedad colombiana, a las futuras generaciones, esta experiencia de la Unión Patriótica que usted vivió tan cerca como dirigente nacional?

—Uno siente un gran orgullo de haber estado en ese momento histórico, porque la lucha política era completamente desinteresada, el compromiso era defender los ideales que se tenían y defenderlos a costa de la propia vida. A nadie le pasaba por la cabeza el tema monetario. Era el caso concreto de Bernardo Jaramillo, que su salario como parlamentario lo entregaba casi todo a la Unión Patriótica. Como presidente del movimiento

recibía veinticinco mil pesos mensuales y con eso no se pagaban ni los almuerzos. Toda esa generación que vino de Camilo Torres, del cura Laín, de Martínez Quiroz, de la gente de la Universidad Nacional, tan importante, que no era de la Unión Patriótica, incluso, pero que sí fue exterminada, fue muy brillante. No eran simplemente activistas políticos sino que en su medio representaban lo mejor. Todo esa pléyade fue aniquilada y no eran personas que proclamaran la combinación de las formas de lucha ni mucho menos, como tampoco lo proclamó la UP, pero esos crímenes fueron tan graves como los de nuestro movimiento. Hoy siguen vivos esos principios que levantó la Unión Patriótica. Hay una cosa muy interesante que yo he apreciado en Reiniciar, que organiza y defiende a las víctimas de la UP: en sus reuniones anuales dedicadas también a las nuevas generaciones, luchan por mantener vivo el recuerdo de la UP, que al margen del exterminio a la que fue sometida, elaboró una teoría política para el cambio de este país y muchas propuestas que se reflejaron en la Constitución de 1991. A la UP ni siquiera la mencionaron.



Momentos después de conocerse la noticia del asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990, la gente comienza a reunirse frente a la sede nacional de la Unión Patriótica en Bogotá, calle 23 con carrera 19. Desde una ventana, Roberto Sáenz arenga a los presentes; a la derecha el vicepresidente de la Unión Patriótica, Luis Emiro Valencia. (Foto: Lara, Voz)

Carlos Lozano

La Unión Patriótica recibió un bautismo de fuego, impidiendo que fuera una alternativa de oposición

Carlos Lozano es un destacado dirigente del Partido Comunista, miembro de su Comité Ejecutivo Nacional desde 1990. Ingresó a sus filas en 1965 en Ibagué, haciendo parte de su organización juvenil, la Juventud Comunista, donde llegó a ser su secretario general. Abogado del Externado, prácticamente nunca ha ejercido su profesión pues siempre ha estado al frente de las tareas políticas que le asigna el partido, entre ellas la dirección del *Semanario Voz* desde hace veinte años. Se ha destacado en los procesos de paz con la guerrilla y en las labores humanitarias por la liberación de los cautivos en manos de la insurgencia, haciendo parte del Movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz. Precisamente atiende, por designación del partido,

el tema de la paz en Colombia. Es integrante de la Dirección Nacional del Polo Democrático Alternativo.

Tuvimos la iniciativa de buscar una solución política negociada

En 1984 Belisario Betancur abre esa etapa de negociación con la guerrilla, fundamentalmente con las FARC, periodo de tregua y cese al fuego. ¿Cómo observó esa parte fundacional de la UP?

—Sin duda que este fue uno de los más grandes desafíos para el Partido Comunista y su organización juvenil, la JUCO, porque hasta ese momento no teníamos experiencia de un proceso de negociación de paz entre la guerrilla y el Gobierno y por lo demás propuesto por nuestro partido, que fue el que tuvo la iniciativa de que había que buscar una solución política negociada al conflicto y levantó la bandera de la Apertura Democrática,

como condición para un proceso de negociación de paz. Así que no había la experiencia, había que construirla, pero lo hicimos. Yo estuve inicialmente trabajando sobre el tema en un equipo cuando aún no había referencias de La Uribe. Se hablaba de que Dolores, Tolima, iba a ser como el epicentro del primer encuentro del Gobierno y la guerrilla y viajamos con un grupo de camaradas a mediados de 1983; a mí me incluyeron por el hecho de ser tolimense y conocer un poco esa región. Allí estuvimos tratando de crear las condiciones para que dentro del perímetro urbano de este municipio pudiera comenzar la negociación. Sin embargo, hubo un gran operativo militar que se tomó toda esta región y puso en peligro, incluso, los contactos que estaba adelantando el gobierno de Belisario Betancur con la guerrilla de las FARC. La guerrilla, según sus análisis de estrategia militar,



Campaña electoral de Clara López a la Alcaldía de Bogotá. Manifestación en la Plaza de Bolívar. De izquierda a derecha, Víctor Manuel Mojica, del Frente Popular, Carlos Romero, Gilberto Vieira, Bernardo Jaramillo y Clara López, del Nuevo Liberalismo Independiente, marzo de 1988. (Foto: Lara, Voz)

nos comunicó que consideraba que Dolores no reunía todas las condiciones para proteger a los negociadores y a quienes se pusieran al frente del proceso. Por esta razón se decidió suspender lo de Dolores y ya posteriormente fue la guerrilla de las FARC, que era a quien le correspondía con sus contactos con el Gobierno, señalar el sitio más adecuado para las conversaciones y que no sería otro que La Uribe, en el departamento del Meta.

Dada la influencia que tenía en esa época el Partido Comunista con la insurgencia de las FARC, ¿qué discusiones se dieron en su organización en torno a esta iniciativa, que también nace de las FARC, del cese al fuego, tregua y paz en medio de la violencia que azotaba al país?

—Yo creo que el partido fue muy importante en la decisión que asumieron las FARC de realizar esos diálogos con el gobierno de Belisario Betancur. No diría, por supuesto, que el partido fue el que orientó o dio la orden, como suele decirse, pero sí ejerció cierta influencia porque desde un comienzo le apostamos al diálogo, destinando un grupo de camaradas muy importantes, encabezado incluso por Gilberto Vieira, su secretario general, y del cual hacían parte otros compañeros como Alberto Rojas Puyo, quien posteriormente se retiraría de las filas, pero que en este proceso jugó un papel destacado. Entonces, el partido desde un comienzo le apuesta al proceso, que abría una nueva esperanza de paz, y como de alguna manera influía sobre la guerrilla de las FARC, el partido siempre estuvo cerca e hizo parte de las comisiones de verificación de los acuerdos de tregua. Alberto Rojas Puyo estableció una comunicación

muy fluida, en especial con “Jacobo Arenas”, segundo al mando de las FARC, que después recogió en un texto que publicó la Editorial Oveja Negra. Y, desde el comienzo también, el Partido Comunista se convirtió en la principal fuerza para impulsar la Unión Patriótica, que fue el proyecto más importante para la incursión de la guerrilla de las FARC en la actividad política, sobre la base de un mínimo tratado de paz en el escenario de la vida pública nacional. Así que creo que el partido estuvo muy cerca, jugó un papel muy importante y sobre todo, animó siempre el proceso de negociación y para que no fuera a tener el resultado que tuvo, de una primera gran frustración para el país y para los amantes de la paz.

Nunca hubo propiamente una mesa de negociación

¿Entonces qué fue lo que pasó? ¿Estábamos frente a una real apertura democrática y en medio de una tregua cierta o este proceso nació bajo un clima de sabotaje permanente de parte de sectores militaristas y tras esto el genocidio de la Unión Patriótica?

—Realmente no hubo un proceso de diálogo. Quizá la principal debilidad de La Uribe, y lo que concernía al gobierno de Belisario Betancur al respecto, es que nunca hubo propiamente una mesa de negociación con su agenda respectiva. Hay que reconocer que el proceso comienza bien porque empieza con una tregua que le bajó la intensidad al conflicto armado y que excluyó del ambiente propicio para la paz, los combates diarios y digamos, el fragor de una guerra. Claro que se presentaron violaciones a la tregua por parte del Gobierno, e incluso, también, por parte de algunos sectores de

la guerrilla, tema que ocupaba a la Comisión de Verificación, pero realmente fuera de eso, no había nada qué hacer pues no existía una mesa dinámica donde se tratara una agenda concreta de negociación. En los Acuerdos de La Uribe, el gobierno de Betancur asume unos compromisos relacionados con el tema agrario, las reformas políticas y sociales, entre otros, que era una manera, pienso yo, de suplir el vacío de la negociación y que por vía institucional, a través del parlamento, se pudieran elevar a normas constitucionales o legales los cambios que estaban proponiendo las FARC. Pero el Gobierno, que había asumido ese compromiso, no lo cumplió como lo demuestra todo ese periodo de no presentación de proyectos de ley y mucho menos de enmiendas constitucionales. La única enmienda que se presentó en esa legislatura, y que no aportó precisamente Betancur sino Álvaro Gómez Hurtado, curiosamente, fue la elección popular de alcaldes, que era una propuesta original de la guerrilla de las FARC.

Me parece que aquí fue como un primer “conejo” que hubo por parte de Betancur, y no sólo de él, sino de todo el Establecimiento que nunca vio con buenos ojos las tratativas de paz con las FARC. Esto quizás influyó en que el proceso fuera muy frágil, que no se blindara con esas reformas, con esos acuerdos que pudieran haber resultado afianzados en el Congreso de la República a través de cambios constitucionales. Entonces, poco a poco se va debilitando el camino emprendido ante lo cual toma la iniciativa la derecha, los enemigos de la paz, el señor Lewis Tambs, embajador norteamericano que acuña el mote de la narcoguerrilla

para señalar a las FARC. Mientras tanto, el militarismo, a través del ministro de Defensa, el general Landazábal Reyes, a quien llamaban lanzabalas, se dedicó a torpedear la tregua y el proceso político dañando el ambiente propicio para la paz. Yo creo que todo eso fue minando las posibilidades para que pudiera afianzarse el diseño establecido en La Uribe en marzo de 1984. Para colmo, se presentaron después los hechos del Palacio de Justicia, la ruptura de la tregua con las FARC y con ello la reanudación de los enfrentamientos con el Ejército. Y paralelo a todo esto, comienza el genocidio de la Unión Patriótica. La aparición de este movimiento fue quizás el único logro en concreto de los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz, y de eso que podría llamarse una negociación de paz, pero que en el fondo no lo fue. Y el resultado de todo esto fue que la Unión Patriótica recibió un bautismo de fuego, no un bautismo de democracia, para sus senadores, representantes, todos sus dirigentes, militantes de base y simpatizantes. No se les respetó el derecho a la vida, y a la Unión Patriótica el derecho político a ser una alternativa al bipartidismo liberal-conservador. De esta manera se frustró lo que hubiera podido ser un buen proceso de paz.

¿En medio de ese genocidio que horrorizaba al país, perdiendo el Partido Comunista, columna vertebral de la UP, sus mejores cuadros, la organización no llegó en un momento dado a pensar en un repliegue, en retirarse de esa iniciativa en vista de que no estaba funcionando y conllevaba, por la intolerancia de los enemigos de la paz, su exterminio?

—Sobre esta gravísima situación tuvimos en el partido intensos debates. Me acuerdo de una polémica en torno a la idea de que el Partido Comunista debería pasar a la clandestinidad para poder preservar su seguridad. Entonces se decía: “El partido está exponiendo sus cuadros y esto no nos deja otro camino que unirnos prácticamente a la lucha armada”. Recordemos que la guerrilla de las FARC, una vez se acabó la tregua en 1990 y se reanudó la guerra, proclamó su plan de ocho años y el objetivo de tomarse el poder por la vía de las armas. Entonces dijo al Partido Comunista y a toda la izquierda que para preservar su integridad, la vida de sus dirigentes y militantes, les invitaban a entrar a la clandestinidad y se convirtieran en un soporte de la lucha armada. Ése fue uno de los debates. Otro sector señalaba que como el Partido Comunista no había guardado la diferencia, la prudente distancia con la guerrilla y, de cierta forma entonces, ante el imaginario de mucha gente y principalmente del Establecimiento, respecto a que la organización estaba asociada al movimiento guerrillero y se identificaba en sus propósitos, había que producir una ruptura pública con las FARC y un cuestionamiento a fondo de la lucha armada. Una tercera posición, que fue la que primó y se adoptó en el XV Congreso del Partido, en diciembre de 1988, indicó que el partido entendía que estábamos frente a un genocidio y al exterminio de nuestra agrupación, lo que era una expresión de antidemocracia, de la intolerancia del régimen y del carácter violento del Estado colombiano, pero que justamente la lucha por la paz, por la solución política del conflicto, por la apertura democrática, se orientaba a

cambiar las condiciones de tal suerte que no se permitiera ese aniquilamiento de la izquierda. En buena medida el porvenir y la vida del Partido Comunista guardaban estrecha relación con los cambios de fondo del panorama nacional, que posibilitaran ese accionar político público. Eso fue lo que se impuso en forma democrática, y por supuesto, por esa razón, el partido no se fue a la clandestinidad.

Escondarse de la vida pública no es la forma de preservar a un partido revolucionario

Bueno, pero el partido y la UP siguieron recibiendo los más duros golpes, que tienen su más alta expresión con los asesinatos de sus candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, decenas de cuadros y la Operación Golpe de Gracia con la muerte del único senador de la UP, Manuel Cepeda, el 9 de agosto de 1994.

—Claro, como los sigue recibiendo aún, y como los recibió antes, casi en toda su vida. Pero el esconderse de la vida pública no es propiamente la forma de preservar a un partido revolucionario de esos golpes, así que yo creo que el partido hizo lo que tenía que hacer y justamente si por algo está hoy viva la llama de su existencia, muy debilitada y precaria por cierto, tras un exterminio que no ha padecido partido alguno en años, es en buena medida porque se insistió en mantener un margen de vida pública abierta, el periódico, su participación electoral y sobre todo, que el partido se convirtiera en un bastión de la unidad popular que gestó lo que hoy tenemos, el Polo Democrático Alternativo.

Cuando ocurre el magnicidio de Jaime Pardo Leal, en octubre de 1987, el movimiento inclusive tiene un ascenso en lugar de dispersarse bajo el terror. Algo similar ocurrió con Bernardo Jaramillo, el otro candidato presidencial asesinado, la ira popular ante el crimen se refleja en un nuevo ascenso. Ante la desaparición violenta de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, del Partido Liberal y Carlos Pizarro, del M-19, estos partidos no resuelven irse a la abstención y son reemplazados para la contienda electoral. ¿No hubiera sido una buena oportunidad que la UP y el Partido Comunista lanzaran otro candidato en reemplazo de Jaramillo y no quedar aislados de las masas en ese momento crucial, llamando a no acudir a las urnas?

—El partido no tuvo sino dos opciones: persistir en una candidatura propia, de cierta forma improvisada, tras el asesinato de Bernardo, porque no estábamos preparados a quedarnos sin candidato, o unirnos a la candidatura de Antonio Navarro, del M-19. El Partido Comunista no aceptó la alternativa de Navarro puesto que su programa no nos identificaba con él. El M-19 partía de la base de que ya la paz estaba lograda y que lo que había que construir era otra cosa, un proceso democrático distinto al que nosotros aspirábamos y que no colmaba nuestras expectativas.

Pero le insisto, ¿por qué no un candidato propio de la Unión Patriótica?

—A todos nos sorprendió la muerte de Bernardo. Tal vez se hubiera podido hacer en el momento, pero no tuvimos la capacidad o quizá la audacia, porque no creo que no hubiera una figura dentro de la UP, había muchas, sin embargo, le repito, nos agarró fuera de lugar

el asesinato de Bernardo y no nos dejó ver sino dos opciones, la de no tener candidato o la de respaldar a Navarro. Ante esa falsa disyuntiva, quizás en ese momento la que escogimos fue la de quedarnos sin candidato. Pero sí, tal vez faltó nuestro candidato.

Separando cobijas con las FARC

El Partido Comunista, como se dice popularmente, separa cobijas con las FARC a comienzos de los noventa —sin decir con esto que tuvieran una mutua dependencia aunque sí había cierta influencia histórica—, y sigue su propio sendero con la Unión Patriótica. ¿Por qué no se dio tal paso antes y quitarse así esa coyunda?

—No hubo una ruptura, pues nunca existieron lazos orgánicos o algo parecido, como se ha tratado de presentar nuestra relación con las FARC y justificar así lo injustificable, la guerra sucia contra nosotros. Fue una decisión de cada quien por su lado, es decir, el Partido Comunista entendió que la única forma de resolver el conflicto era la solución política negociada y no otra. La vía militar para el Partido Comunista había fracasado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no podía seguir pensando en aplastar al movimiento insurgente, pero tampoco la guerrilla estaba en condiciones de capturar el poder por las armas. Por eso nosotros hemos insistido siempre en la necesidad de mantener viva la posibilidad de un proceso de negociación de paz. Las FARC, por su lado, ante la situación grave que representaba el aniquilamiento de la Unión Patriótica, la negativa de la oligarquía colombiana de adelantar una negociación política, social y económica, pues decidió volver a las acciones

armadas, en la idea de persistir en un triunfo revolucionario armado, y esa fue una decisión que cada quien adoptó. Y en este sentido, también, cada quien asumió su papel histórico.

Las fuerzas sociales y democráticas se quedaron paralizadas ante el genocidio de la UP y no se vieron las grandes acciones de respuesta popular, a pesar de los llamados para que cesara el exterminio.

— El exterminio de la Unión Patriótica se cruza con el derrumbe del muro de Berlín y la caída del campo socialista, que afecta mucho al movimiento social y popular y que comienza a finales de los ochenta y se extiende hasta la década de los años noventa. La verdad es que fueron dos cosas muy poderosas, de un lado el miedo, el temor, la intimidación que significó el genocidio de la Unión Patriótica, que en buena medida fue la aniquilación de parte destacada del movimiento sindical y popular, porque la gran mayoría de los cuadros comunistas, centenares de dirigentes muy calificados y jóvenes por cierto, que estaban al frente de la lucha social en Colombia, fueron sacrificados. Ellos eran congresistas, diputados, concejales en las regiones, alcaldes, líderes obreros, estudiantiles o agrarios. Todos ellos recibieron el peso de la guerra sucia. De alguna manera se diezma parte vital del movimiento social y comienza a darse el pánico en muchos sectores, bajando el nivel de la lucha popular. Hay que ver las estadísticas de estos años en que se van al suelo las huelgas de los trabajadores y la lucha de masas, pero al lado de eso viene lo que significó una derrota para todo el movimiento comunista internacional y el movimiento popular mundial:

el derrumbe soviético. Entonces eso fue demasiado fuerte puesto que generó, más que pánico, confusión y desasosiego, así como tendencias liquidacionistas en los partidos comunistas. El nuestro no fue la excepción y hay deserciones de quienes consideraban que la opción del Partido Comunista ya no era válida y que lo mejor era buscar otra distinta. Con este cuadro era muy complicado que se dieran las grandes movilizaciones contra el genocidio.

Los Acuerdos de Paz de La Uribe, que dieron nacimiento a la UP, jamás contaron con el apoyo de los militares y mucho menos de los más encumbrados gremios económicos a pesar de los reiterados llamamientos de las FARC, incluso nunca participaron las Fuerzas Armadas en las conversaciones. ¿No se pecó de ingenuidad política al meterse en un proceso como estos sin contar con la anuencia de quienes realmente detentan el poder?

— Mire, la guerrilla, el Partido Comunista, el movimiento social, todas las fuerzas democráticas que trabajaron por la paz, que fueron numerosas en determinado momento, fracasamos en algo que se decía de una manera un poco coloquial: “meterle pueblo a la paz”; es decir, no fuimos capaces de mover a la gente en función de la paz, porque movilizar a los ciudadanos en función de la paz no era solamente exigirle al Gobierno una negociación de paz, sino también, al lado de eso, poder construir un poderoso movimiento democrático en Colombia que pudiera acceder incluso, al poder, y nosotros no nos preocupamos por eso. De alguna manera creímos, sí, con ingenuidad creo yo, que las soluciones nos saldrían de una mesa de negociación,

aquello que llamó Alfonso López Michelsen “la revolución por contrato”. Y aunque nunca creímos que la revolución se hiciera en una ronda de conversaciones, sí creímos que el movimiento político y democrático de Colombia iba a salir de ahí, así como el movimiento de unidad popular; la realidad nos demostró que no es así, porque el Polo Democrático Alternativo, hoy con toda su crisis que tiene, surgió al margen de un proceso de negociación de paz, no fue otra Unión Patriótica. Entonces yo creo que en eso sí se cometieron errores, hubo falta de agudeza política, y de haber entendido bien aquello de que meterle pueblo a la paz era presionar y al mismo tiempo construir un movimiento alternativo de masas sobre el cual hablamos en aquella época.

Finalmente, qué lecciones le deja al pueblo colombiano, a la historia, esta experiencia de la Unión Patriótica.

—Yo pienso que con todo lo efímero que casi fue el proceso de la Unión Patriótica, fue una organización de mucho compromiso con los cambios que requería Colombia. Se demostró que desde la izquierda se pueden unir los más disímiles sectores políticos para tratar de transformar el país, sin que el movimiento político democrático esté condenado a ir a la

cola de los partidos de la oligarquía y del Establecimiento o a pactar coincidencias con ellos, como es uno de los debates que tenemos hoy en la izquierda. La UP hizo alianzas, algunas malas en algunas regiones, unas buenas e importantes en otras, pero preservó su identidad siempre. Era una organización popular de convergencia democrática, abierta a la izquierda para cambiar el país con un programa revolucionario. Igual que el Polo, en la UP no se hablaba de socialismo, pero sí era un proyecto revolucionario de cambio, de transformación política. Me parece que ésa es la lección, porque es parte del debate que tenemos hoy, el debate de que la izquierda debe ser eso y debe tener identidad, no debe pedir nada prestado ni tratar de disfrazarse para presentar su proyecto político. En eso la UP fue franca, abierta y sobre todo, con la candidatura presidencial de Jaime Pardo Leal, que tuvo tanta importancia, repercusión y tan buenos resultados, se demostró mucha coherencia al tiempo que buscábamos atraer a otros sectores, pero sin renunciar a lo fundamental: tratar de cambiar la sociedad que es, al fin y al cabo, lo que puede garantizar una paz duradera.



Bernardo Jaramillo en la Plaza de Chinchiná, Caldas, en una manifestación en la campaña electoral cuando era candidato presidencial por la Unión Patriótica, 23 de noviembre de 1989. (Foto: Voz)

— — — — — Álvaro Delgado

Las veces que las FARC plantearon la paz se les respondió con fuego, que después continuó contra la Unión Patriótica

Álvaro Delgado permaneció en las filas comunistas por espacio de cuarenta años y ocupó un cargo, casi siempre en las labores de educación, en el Comité Ejecutivo Nacional por más de dos décadas. Se especializó en el estudio del tema sindical y año tras año llevaba las estadísticas, labor que aún realiza, de las luchas y huelgas del movimiento sindical, que se publicaban siempre en el *Semanario Voz* y que esperaban todos. Conoció de primera mano parte de la historia de la fundación de la Unión Patriótica y se retiró de la militancia en 1990 por divergencias con el partido, precisamente por el tema del movimiento. Hace unos años publicó un libro crítico

de la organización titulado *Todo tiempo pasado fue peor*. Nunca ha ejercido el anticomunismo y por el contrario, sigue siendo un hombre de profundas convicciones progresistas.

Siempre le aposté al partido

Bueno, usted es uno de los veteranos comunistas sobrevivientes de todos estos años de convulsión, pues comenzó a militar por allá en 1951 en las filas de la Juventud Comunista en Popayán y sólo se retiró en 1990, aunque no expulsado, con la primera gran crisis de la UP, después del asesinato de Bernardo Jaramillo.

—No, en el partido, que yo conozca, los expulsados se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos. No creo que ésa sea la actitud que tenga el partido y lo ha demostrado a través de toda su historia. Los excluyen o ellos se excluyen. Yo inicié la militancia en 1951 cuando se crearon las juventudes comunistas que hoy conocemos y en 1956, que fue la época en que ilegalizaron al comunismo, yo pasé al partido. No es que yo buscara ser el as de los revolucionarios, sino que no me di cuenta —a esa edad a uno le importa muy poco que una cosa esté legalizada o no—, entonces uno se goza la revolución y no le para bolas a esas cosas. Además ya había estado en la cárcel dos años atrás y sin ser miembro aún del partido, de manera que para mí estar en la clandestinidad no era un gran problema.

Yo nunca he sido de ningún partido sino del comunista. Es simpático porque la gente casi no lo cree, pero la generación que conocí en Popayán, de la cual hoy día todavía queda vivo Álvaro Mosquera y de la que hizo parte Manuel Cepeda, nunca tuvo una militancia diferente a la

del Partido Comunista. Y así ocurrió con esa generación en la época heroica del comunismo, o sea años cincuenta, una generación ya descontinuada con esa esencia liberal de la juventud que se había formado durante la lucha contra las dictaduras de derecha. Entonces yo siempre he sido comunista, nunca he tenido otra militancia ni me ha interesado, además.

¿Cuándo ingresa al Comité Central?

—Al Comité Central accedo en 1962, pero ya en 1958 fui el candidato de Filiberto Barrero, el segundo hombre del Partido después de Gilberto Vieira, en uno de esos congresos, y yo inmediatamente dije que no, pues sentía que aún no estaba preparado para eso. Apenas tenía veintiocho años. Acepté cuatro años después, en 1962, con un grupo de nuevos miembros del Comité Central, entre ellos “Manuel Marulanda”, el fundador de las FARC, quien militó en el partido hasta 1990.

Después llega usted al Comité Ejecutivo Central...

—No recuerdo exactamente cuándo llego al Comité Ejecutivo pero creo que fue a comienzos de los ochenta.

¿Y se retira en 1990?

—En ese año me alejé del partido por una razón muy sencilla: estaba en desacuerdo con el trabajo de los compañeros de la UP que andaban montando una nueva alianza con el M-19. A mí nunca me dieron ningún dato sobre ello porque seguramente sabían que yo no iba a estar en una jugada semejante, pues yo siempre le aposté al partido, es decir, al partido como tal, que tenía que salir de sus problemas avanzando él mismo hacia una

transformación. Siempre creí que eso era posible y por eso permanecí tantos años. Yo admiraba a los compañeros que andaban metidos en el trabajo de la UP porque sabía que querían modernizar las viejas estructuras, mostrar una cara diferente del partido, y en general de la izquierda, pero no estaba muy convencido de ese tejermeje marginándome del tema.

La derecha impuso la tesis de que la negociación era solamente sobre la base de la entrega de armas

La Unión Patriótica nace como fruto del acuerdo entre las FARC y el gobierno de Betancur en 1984, quisiéramos saber, ya que usted era miembro del Comité Ejecutivo Central del partido y este tenía mucha influencia en las FARC, ¿cómo se dio ese proceso en la organización para llegar a un arreglo con el Gobierno?

—Eso fue un proceso muy simpático porque uno trata de ver cómo comenzó todo esto, dónde está el origen mismo, el embrión, y yo no lo encuentro en otra parte que en las FARC; es decir, los encuentro a ellos pensando en una fórmula para resolver el problema del conflicto, pero sobre la base de que el movimiento guerrillero quedara incluido en la solución y no solamente en la fórmula —bueno, dejamos las armas y llegamos a un acuerdo y nos dejan de matar—; no es una receta para ver cómo quedamos incrustados en el poder. Creo que ellos siempre lo vieron así y entonces a través de la UP se plantearon la idea de que por el camino de buscar una negociación de paz podría la guerrilla tener acceso al poder, yo no sé exactamente a través de qué forma, si llegando a un

acuerdo arriba en el monte o abajo en el Congreso, pero de todas maneras sin el desarme del movimiento, muy distinto a lo que planteaban otros sectores. Ellos en el fondo dudaban mucho y eso lo vi muy patente en el caso de “Manuel Marulanda”. Él era muy claro al respecto, es decir, se mostraba escéptico de que se pudiera hacer en Colombia un acuerdo de paz, porque en repetidas oportunidades en que ellos lo propusieron, a lo largo de todos los años sesenta y parte de los setenta, fueron burlados por las fuerzas oficiales, por el Estado.

Es que siempre se impusieron las tesis ultraderechistas de que la negociación era solamente sobre la base de la entrega de armas y entonces eso paralizaba siempre cualquier proceso. Las veces que ellos plantearon la paz se les respondió con fuego y con la fuerza, hasta el mismo momento de la creación de la UP, a donde también se trasladó la guerra siendo ya un movimiento civilista. Así fueron las cosas. Es que la guerrilla llega a los acuerdos con el gobierno de Betancur, pero el Ejército tiene otro plan, y seguramente la embajada norteamericana cuenta con el suyo y el objetivo es seguir dando bala. Estamos, pues, ante un Acuerdo de Paz que nace dentro de la tirantez y la guerra contra las FARC, que nunca cesó. El Establecimiento jamás dejó de tener a las FARC como su enemigo y de dispararles apenas se asomaran a la esquina. Y los compañeros, en mi opinión, no ayudaron a Betancur en el sentido de no asomarse demasiado. Y le pongo el ejemplo de la fuerza que alcanzó a tener el proyecto de la UP en el campo. Yo no sé si hubo una región en el país en la cual la UP tuviera la fuerza civil, no armada, que tuvo en el

Caquetá; es posible que eso hubiera ocurrido en otras regiones, pero yo no conozco sino lo del Caquetá. Allí la afluencia de la gente del campo, de las pequeñas poblaciones, (no tanto de Florencia, la capital, que es la excepción, donde está la burocracia y la derecha y no hay movimiento) hacia la UP es inmensa. Nunca la izquierda tuvo un apoyo tan grande como cuando apareció la UP: hubo una transformación sin precedentes. Es que yo vi finqueros, ganaderos, comerciantes, gente de dinero, acercándose a afiliarse a la UP. Estaban convencidos que ese proyecto era bueno para el departamento porque le daba salida a sus negocios, a su capital, al progreso de la región. No se trataba de simples campesinos sino de los que poseían ganado de raza y tenían ya la concepción de lo qué debía ser una producción agropecuaria moderna, con establos, sin movimiento del ganado por las selvas o en los potreros; tenían proyectos de pesca extraordinarios que las mismas FARC apoyaron. Es decir, allí había un escenario civil muy fuerte y sin embargo también se produjeron asesinatos de decenas de compañeros del movimiento, porque exageraban dejándose ver demasiado con las armas en la mano. Es que si te dejas ver desarmado ya es una cosa diferente, pero si vas con un fusil y te paseas así por los pueblos, estás dando la idea de que hay una guerra por encima de todo. Me parece que en eso las FARC cometieron un error.

¿Y el partido, en las discusiones de la dirección, no les aconsejaba a sus compañeros y a quienes influenciaba de que esa presencia no debía ser tan evidente, como usted lo recuerda ahora?

— Eso se analizaba, pero insisto que la idea que había en los jefes de las FARC, comenzando por “Marulanda”, era algo así como, “vamos a hacer ese intento, pero acuérdense que nosotros manejamos algo que se llaman las armas, que seguimos siendo guerrilleros, el ejército del pueblo y no vamos a deponerlas”. Jamás le oí a él una cosa parecida a acudir a una reunión sin las armas en la mano.

¿Incluidas reuniones con la UP?

— Pues yo no sé si con la UP exactamente, pero que un guerrillero no portara sus armas, era impensable. Es que uno iba a dictar charlas sobre la situación del país, porque era lo único que hacíamos los cuadros del partido en nuestras visitas, pues no éramos guerrilleros y siempre estaban armados.

¿Era posible pensar en un proyecto de paz y a la vez de construcción de la Unión Patriótica, paralelo a la existencia de un movimiento guerrillero en crecimiento constante que había firmado una tregua, incumplida por todas las partes? ¿Cómo podría resolverse un panorama semejante?

— El proyecto nunca contó con la aprobación de la oligarquía y su Ejército, y por el otro lado, la insurgencia jamás pensó en un proyecto desarmado, entonces las dos cosas se combinaron y su acuerdo hizo fracasar el proceso.

¿Es decir, la UP quedó en el medio?

— Claro, porque las fuerzas de la derecha vieron la oportunidad de eliminar a la gente de izquierda argumentando que si a fulanito lo hemos visto aquí y lo hemos visto allá, en la ciudad y en el monte, eso no es permisible para nosotros.

Entonces es cierto el fatalismo de que en Colombia, mientras exista la insurgencia, que tiene para algunos motivos valederos en su levantamiento armado, la presencia de un movimiento civil que propugne por una salida diferente a la guerra, como fue la divisa de la UP, además porque ello lo condujo a ganar una influencia inaceptable para los círculos del poder, debe recibir el castigo del exterminio. ¿Cómo se podrá resolver eso en Colombia pensando en el caso de un nuevo proceso de paz cuando la guerrilla pretenda desmovilizarse y de nuevo hacer política sin armas?

—En mi opinión, las FARC nunca han creído de verdad en una negociación de paz, siempre han insistido en que la toma del poder en Colombia es por la vía de las armas. Piensan que no hay otra salida porque el enemigo nunca les ha brindado la oportunidad de una verdadera negociación y lo ha demostrado históricamente —cuántas veces hemos llegado a la mesa de acuerdos, se han burlado de nosotros y después nos dan bala—. Están convencidos que es importante desplegar una lucha civil en las ciudades, una actividad de masas, como la participación en las elecciones, todo eso, pero no creen que tal sea el camino definitivo para la transformación de Colombia. La principal vía que ellos ven es la lucha armada para ganarle la batalla al enemigo y tomarse el poder. Tienen ese esquema todavía en la cabeza.

Lo novedoso del experimento

Pero siendo el partido la fuerza principal de la Unión Patriótica, la que formó y movió a la gente, ¿cómo se permitió el genocidio, o no fue como una especie de suicidio?

—Yo creo sinceramente que la idea de la creación de la UP no nació tanto del

partido, me parece que partió más de allá que de acá. Tengo la impresión de que el Secretariado del partido se preguntó, por qué no, probemos, vamos a ver. Los hilos de la cosa no se movían por el partido; por ejemplo, las reuniones de la UP en las zonas donde no había combates como las capitales o los pequeños poblados que no tenían guerrilla cerca, no eran dirigidas por gente del partido sino por compañeros de la UP. Habían sido miembros activos de la guerrilla, pero esta les decía: ustedes dejan las armas acá y se van a tal parte a trabajar como civiles y con una condición, deben dirigir todo el asunto. Ellos llegaban con recursos financieros, no sé de dónde, pero era así; digámoslo como es, había que darle comida a la gente, organizar reuniones, pagar los gastos de transporte, etc., y el partido no tenía dinero para eso, de modo que los guerrilleros desplazados eran los que mandaban realmente la parada en la actividad de la UP. Lo novedoso del experimento era eso, ver a tantas personas que venían de la lucha armada a hablar en un lenguaje civil. Me parece que cuando las cosas comenzaron a andar mal, las relaciones con el partido se deterioraron hasta el punto que las FARC terminaron por romper en la práctica sin hacer ningún alboroto, con la idea de que la dirección del proceso hacia la paz, no la iba a dar el Comité Central del Partido sino ellos. Fue tan cierto que cuando se trató de ver cómo iba a ser eso en las ciudades, terminaron por fundar el llamado Partido Comunista Colombiano Clandestino, el llamado PC3. Ya no creen que el partido sea capaz de llevar a cabo la combinación de todas las formas de lucha, que para mí ya fracasó. Ese partido clandestino es un partido de estructura militar, no es un partido político común y

corriente sino de órdenes militares, allí hay que obedecer las consignas de los mandos y punto.

Pero volviendo atrás, ¿no se pecó un poco de ingenuidad al creer que se podría dar un proceso de paz mientras como usted lo señala, los partidos gobernantes, la oligarquía misma y sobre todo el Ejército, nunca se comprometieron, y al contrario, encontraron aquí una oportunidad para liquidar al partido, ¿entonces por qué se seguía insistiendo en ese camino mientras continuaba el genocidio?

—Sí, fue una trampa muy bárbara y dura, pero me parece que la gente que creyó en este proyecto lo hizo porque el país no quiere la guerra. Pero no olvidemos un instante que Colombia es un país godo, de derecha. Yo veo la diferencia enorme que tiene nuestro pueblo, por ejemplo, con un pueblo que aparentemente no tiene significación como el Ecuador. Allí la gente está organizada desde hace tiempo y tiene una idea de la movilización y de la lucha, es mucho más hondo el sentido democrático. Lo mismo ocurre en Venezuela. En esos países jamás se presentó una matanza, a pesar de las dictaduras que los asolaron. Aquí la derecha ha sido tradicionalmente muy fuerte y los sectores populares han terminado por apoyarla. Conseguir que en nuestro país la gente se movilice, así sea para simples demandas de barrio, es un completo lío y la protesta está casi ausente. La izquierda se movilizó en forma con la UP y ahora con el Polo, pero para mí son apenas expresiones aisladas. De ahí se explica la indiferencia con que se miró el genocidio de la UP para beneplácito del Establecimiento y de los enemigos de la izquierda.

El genocidio contra la Unión Patriótica se ha convertido en uno de los factores más poderosos para quienes argumentan que aquí no hay otra salida que la guerra o la defensa a ultranza de un levantamiento armado.

—Yo no veo otra salida conveniente para los trabajadores, para el pueblo, que una salida pacífica, pues no creo que en Colombia estén dadas las condiciones para una victoria de las fuerzas armadas de la revolución, pero así no lo estiman en las FARC. Ellos siguen creyendo que su proyecto es viable porque tienen con qué hacerlo, es decir su conexión con el narcotráfico, pues es evidente que eso da para sostener una guerra en Colombia por veinte o treinta años más sin obtener ningún triunfo político sino persistiendo en una idea equivocada, en mi opinión, de pensar que la solución de nuestro conflicto es por la vía de las armas. Y desde otro ángulo está lo siguiente: no hay una fuerza de izquierda, no existe un sentido democrático de la vida, nuestras organizaciones de masas, como los sindicatos y las asociaciones, no son democráticas y persiste la tendencia a que las cúpulas ejerzan el autoritarismo, mientras los periódicos de la izquierda nunca abren sus páginas para un debate de verdad pues les da temor que se conozcan sus problemas. Por ejemplo, nos aterra pensar que el movimiento sindical hoy es la mitad de lo que era hace una década y esto a nadie le importa y nunca se plantea una discusión sobre el tema. Los sindicatos, uno de los soportes más grandes del proceso social, se están acabando, pero eso no conmueve a nadie.

Las gentes no quieren una vida de guerra

¿Qué significado tuvo para el país la experiencia de la Unión Patriótica, qué lecciones nos deja veintiséis años después de haber sido fundada?

—La lección más grande que deja el paso de la UP por la historia del país estriba en que la gente se comprometió en una lucha civil y no militar, que no quiere una vida de guerra y de enfrentamientos violentos, busca que el país cambie, pero por las vías democráticas de participación. Yo no sé cuánto se demorará llegar a esos cambios, pero el proceso de la UP lo que demostró fue eso. La UP tomó un tremendo impulso, inédito para el país, porque estaba ofreciendo una fórmula de paz y de progreso en medio de un debate, sobretodo pacífico y no por la senda armada.

¿Y si la UP hubiera roto desde un principio con el movimiento armado y seguido su propia dinámica, como usted señala, ateniéndose a la vocación de paz del pueblo colombiano?

—No hubiera tenido jamás el apoyo de las FARC, que eran su núcleo. Ellos sí separaron eso completamente. Yo les oí de su propia boca, algo como esto: “ustedes los de la UP están allá y allá es donde tienen que resolver sus problemas; nosotros no vamos a ir a hacerlo; por ejemplo, ¿que los están matando los paramilitares y que nosotros sabemos dónde están y que entonces caigámosles?, no señor, ustedes se comprometieron en esa lucha, entonces verán cómo la resuelven; nosotros estamos acá y somos un ejército, pero no estamos para ir a defender a los compañeros en las ciudades y evitar que los maten”.

¿Era una tragedia anunciada?

—Sí. Los compañeros en los pueblos decían, “sabemos dónde están los asesinos del movimiento, pero no tenemos cómo acabarlos”. “No señor”, les decían, “nosotros también sabemos, pero eso es un problema de ustedes”.

Pero el resultado fue la desaparición de todo un movimiento político y de un tejido social que se había construido en años, con la muerte de centenares de cuadros. El partido no existe prácticamente en regiones enteras, ésa fue otra consecuencia de semejante experimento.

—Claro, pero no podemos decir que eso ocurrió porque se hizo el esfuerzo, que valió mucho la pena, y no podíamos dejar de transitar por ese camino de paz que se abría con grandes expectativas para nuestro pueblo. Eso pasó a causa de la diagramación que tiene esta sociedad nuestra. Yo insisto, vivimos en un país godo y la clase dirigente colombiana está fogueada tremendamente en exterminar toda expresión democrática que surja. Es una gran mentira que Colombia haya sido democrática alguna vez.

Pero, le insisto, ¿eso no justifica para algunos, como las FARC, la necesidad de la presencia de la insurgencia armada?

—Claro que sí y no es que lo justifique sino que lo explica en cierta forma. Ahora, que esa fórmula haya demostrado que es la correcta, parece que no. Es un desangre que nunca termina.



Demostración de un grupo de sobrevivientes de la Unión Patriótica, organizada por la Corporación Reiniciar el 12 de octubre de 2010, en Bogotá, como todos los años en el Día Nacional de las Víctimas del Genocidio contra la UP. (Foto: Betty Monzón, Reiniciar)

Jahel Quiroga Carrillo ———

De nada sirve una reparación política sólo para la Unión Patriótica, si el país que causó el genocidio no se transforma

Jahel Quiroga es una de más aguerridas luchadoras por los derechos humanos en Colombia. Lleva tres décadas en la brega social que desplegó en Barrancabermeja al lado de los trabajadores, labriegos del Magdalena Medio, mujeres y jóvenes. En 1986 se vinculó a la Unión Patriótica donde aún permanece ocupando un cargo en la Dirección Nacional. Fue víctima de un atentado donde perdió la vida la secretaria de la organización de la cual era cofundadora, por lo que tuvo que salir del puerto. En Bogotá fundó con otros colegas la Corporación Reiniciar, que despliega su actividad en defensa de las víctimas de crímenes de Estado, en especial, las de la UP. Instauró

en diciembre de 1993 una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los centenares de asesinatos cometidos contra militantes de esta organización, lo que fue un verdadero genocidio. Es miembro de la Junta Directiva Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos desde 1992.

¿Cómo empieza Reiniciar después de esas duras experiencias en Barrancabermeja?

—Reiniciar es una organización no gubernamental de derechos humanos. Nos llamamos Reiniciar porque tuvimos que volver a comenzar aquí en Bogotá. Antes, en 1986, habíamos fundado a Credhos, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, en el Magdalena Medio, con sede en Barrancabermeja. Es un proyecto humanista, raizal del Magdalena Medio, que trabaja con las comunidades de Yondó, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Bajo Simacota, San Pablo, entre otras. Por su compromiso social recibió las agresiones de los grupos paramilitares y agentes del Estado que se unieron para atacar a la corporación, a los líderes de sindicatos como la Unión Sindical Obrera, a la Organización Femenina Popular, la Asociación de Campesinos del valle del río Cimitarra, y otras agrupaciones tradicionales del Magdalena Medio. Nosotros comenzamos este proyecto con la Iglesia Católica, que ha sido decisiva, para bien, en los destinos de Barrancabermeja y que siempre ha estado al lado de su pueblo. En Barranca, por ejemplo, se libraron luchas definitivas por la nacionalización del petróleo, la clase obrera colombiana nace en esta ciudad con los braceros del río Magdalena y con las expectativas en

Ecopetrol, convirtiéndose Barranca en el centro de la solidaridad del Magdalena Medio. La gente llegaba allí, ya sea por catástrofes naturales como el desbordamiento de los ríos o por los éxodos campesinos en la lucha por la tierra, por sus derechos. El paramilitarismo finalmente se tomó a Barranca a sangre y fuego, en una guerra anunciada contra la población. Yo misma fui víctima de un atentado en el que desafortunadamente murió la secretaria de Credhos. Tuvimos que salir todos de la región, cerramos la corporación durante un año. No era aconsejable seguir allí, ya nos habían asesinado a seis compañeros. Con el apoyo del Servicio de Consultoría de Proyectos (PCS por sus siglas en inglés) nos desplazamos forzosamente a Bogotá, donde fundamos a Reiniciar. Pero persistimos con la solidaridad de todas las organizaciones internacionales. Por eso Reiniciar es volver a comenzar y está lleno de nostalgia, pero también de mucha esperanza.

¿Cómo fue la relación de Reiniciar con la Unión Patriótica?

—Como organización defensora de derechos humanos en Barrancabermeja, nacimos en 1986 y la UP en 1985. Nosotros permanecemos en el puerto hasta 1992 y fuimos testigos en el Magdalena Medio del genocidio contra la Unión Patriótica. Obviamente hicimos todas las denuncias relacionadas con los asesinatos y la persecución genocida encaminada a exterminar el joven movimiento.

Yo fui concejal de la UP en 1988 la primera vez, en una convergencia con diversos sectores sociales como la Unión Sindical Obrera (USO), las mujeres, el Frente Amplio del Magdalena Medio,

liderado por Ricardo Lara Parada, exdirigente del ELN, incorporado a la lucha civilista. Orlando Higueta encabezaba la lista al Consejo, él había recibido amenazas y tuvo que marcharse a Bogotá, donde permaneció tres meses, sin embargo, antes de su partida se habían identificado las personas que presuntamente lo iban a matar y fueron a dar a la cárcel, pero por porte ilegal de armas. No obstante, unos meses después de su detención “se volaron” sin que la guardia lo hubiera evitado y dicen que ellos mismos participaron en el asesinato de Orlando el 2 de junio de 1989 en Barrancabermeja.

Ya para 1990 no quedaban prácticamente dirigentes de los que comenzaron la UP en Barrancabermeja y tuve que, a solicitud de la militancia, asumir la presidencia departamental del movimiento en Santander. Y entonces lanzamos una lista al Concejo que encabezaba Rafael Gómez Serrano, siendo yo su suplente para el periodo 1990-1992, la cual no pudimos culminar porque nos vimos forzados a salir de la región para preservar nuestras vidas.

Por Orlando Higueta tomé la decisión de demandar al Estado colombiano. Pero no me imaginaba la magnitud del genocidio a nivel nacional. Y permítame una referencia de Orlando: era un gran dirigente popular, hombre amoroso, un revolucionario ese sí de verdad, lleno de cariño con su esposa y sus hijos, con sus camaradas. Con él nos propusimos implementar el programa de la UP, un programa democrático y popular que ni siquiera era una propuesta para tomarse el poder e instaurar el comunismo; no, se trataba sencillamente de una plataforma de reformas sociales. Todos nos casamos

con esa propuesta, pero la respuesta del Estado fueron amenazas, desapariciones forzadas, homicidios, y a mí me tocó ir recogiendo los muertos como defensora de derechos humanos, exigiendo medidas de protección, gestando paros cívicos por la vida, por la reivindicación de la vida misma.

Son más de 4.500 las víctimas del genocidio contra la UP

¿Cuántas víctimas deja hasta ahora el genocidio contra la UP?

—Nosotros tenemos un listado de aproximadamente 7.500 casos, de ellos 4.500 corresponden a homicidios, desapariciones forzadas y torturas, el resto son casos de otras violaciones como detenciones arbitrarias, montajes judiciales, allanamientos sin orden judicial y desplazamiento forzado, que es incontable. De todas maneras es un subregistro, dado que no hemos podido documentar en regiones que aún hoy están paramilitarizadas, como Córdoba, Sucre, Guajira, Cesar, porque pondríamos en riesgo a los familiares de las víctimas que todavía se encuentran en esos lugares.

Cuando llegamos a Bogotá, por supuesto con el corazón herido y con la promesa de que lo que pasó con la UP no podía de ninguna manera quedarse así, en el sentido de realizar todas las acciones legales conducentes a obtener justicia, verdad y reparación integral para las víctimas, empezamos a trabajar en Reiniciar el caso con el acompañamiento de Aída Abella, quien era la presidenta nacional de la UP. Y como yo hacía parte del Ejecutivo Nacional de la UP por Santander, asumí el cargo de responsable de derechos humanos a nivel nacional y nos propusimos

llevar este caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, instancia con la que veníamos trabajando en Credhos desde 1990.

Los crímenes que me tocó sufrir en Barrancabermeja de entrañables compañeros de la Unión Patriótica, me llevaron a comprometerme con esa causa, para lo cual prometí que mi vida entera la dedicaría a exigir justicia, consideré que como era evidente iba a ser un caso corto, y ya llevo más de quince años.

Según la Fiscalía, con datos de junio de 2011, sólo hay noventa implicados en los asesinatos contra la UP que han aceptado cargos, y las sentencias no pasan de 138, cuando se habla de más de 1.600 víctimas, ¿estamos frente a uno de los casos de mayor impunidad en el país?

—En el caso de la UP creo que la impunidad es emblemática en este país, es impresionante. Se entablan todas las acciones legales para que haya justicia y mire los resultados. Por ejemplo, en los casos del diputado Gabriel Jaime Santamaría y del senador Pedro Luis Valencia, representativos en Medellín, la Fiscalía reconoció que los investigadores anteriores habían desviado las investigaciones judiciales hacia caminos donde no iban a producir resultados.

Precisamente, uno de los argumentos para llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1993 fue ese, la impunidad. Porque antes de enviar el caso ante la CIDH, nosotros identificamos los primeros 1.163 homicidios de la UP, en ese entonces, los enviamos a la Fiscalía mediante derechos de petición preguntando en qué estado se encontraban las investigaciones sobre esos

casos. Lo asombroso era que los pocos que conocían estaban en etapa preliminar.

Posteriormente tuvimos conocimiento que un compañero de la UP, que murió en Cúcuta recientemente, instauró en 1992 una tutela por el derecho a la vida. La Corte Constitucional ordenó, entonces, que la Defensoría del Pueblo hiciera un estudio sobre los homicidios contra la UP y el EPL y lo presentara ante el Congreso en tres meses. Jaime Córdoba Triviño, quien fue el primer defensor del pueblo, entregó ese informe en octubre de 1992, y recoge, tras una rápida consulta a nivel regional, 717 homicidios de la Unión Patriótica, de los cuales solamente en diez casos había una decisión de fondo, cuatro condenas y seis absoluciones, cantidad absolutamente diciente de la grave impunidad frente a semejante tragedia. Con esos resultados y con los casos que nosotros habíamos identificado, radicamos la demanda por genocidio contra la UP en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Y cómo es esa relación con la Fiscalía?

—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasladó al Estado colombiano los listados de nombres de víctimas que nosotros suministramos y que hacen parte de la demanda. Sin embargo, no es una lista cerrada porque Reiniciar y las coordinaciones regionales de víctimas siguen buscando e identificando víctimas y familiares de víctimas.

Hubo una etapa muy importante en la que nosotros pudimos documentar bastante, fue aquella dentro del proceso ante la Comisión Interamericana llamada “solución amistosa” entre las partes, es decir, las víctimas y el Estado. Nosotros aceptamos dicha etapa y en el marco de

la Mesa de Solución Amistosa, la Fiscalía y la Procuraduría se comprometieron con nosotros a identificar a las víctimas de la UP en sus propias bases de datos regionales. En ese sentido, estas dos entidades se comprometieron a reunirse con nosotros cada dos meses para entregarnos información sobre avances en la investigación y ubicación de procesos.

Sin embargo, lo que en ese entonces y ahora sostenemos, después de la ruptura de la solución amistosa, es que la Fiscalía debe trabajar por intermedio de Reiniciar con las coordinaciones de víctimas en las regiones, porque es la única forma de avanzar realmente en las investigaciones, toda vez que ellas no tienen confianza en las instituciones del Estado, tanto porque no han sido capaces de detener a los perpetradores como por la revictimización de que han sido objeto por parte de algunos operadores de justicia quienes los han intimidado con preguntas tales como: “¿Su familiar era de la guerrilla?” “¿No sería que la guerrilla mató a su familiar?” “¿Cuándo fue dado de baja...?”.

En efecto, en la UP hubo delegados de la guerrilla de las FARC que se incorporaron como población civil, desarmados, sin uniforme, no como combatientes, y porque ése era el compromiso del Gobierno con las FARC, darles protección y garantías para hacer política dentro de la Unión Patriótica. Fue una apuesta por la paz. No obstante la Fiscalía no tiene por qué asumir que todas las víctimas de la UP eran delegados de las FARC y que los mataron en combate. Todo lo contrario, a los miembros de la Unión Patriótica, incluyendo a algunos delegados de las FARC, los asesinaron

en la calle, en su casa o en el trabajo. Ésa es la única verdad, producto de nuestra investigación en el caso del genocidio contra la Unión Patriótica.

El caso de la Unión Patriótica en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

¿En qué estado se encuentra el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH?

— El caso está en la Etapa de Fondo, etapa que iniciamos en 2006 después de la ruptura de la solución amistosa, proceso fallido por el tratamiento de enemigo que le dio Álvaro Uribe Vélez a las víctimas y familiares de las víctimas.

En esta etapa la Comisión Interamericana debe tomar una decisión sobre la responsabilidad del Estado colombiano en la comisión del exterminio de la Unión Patriótica.

Existen suficientes evidencias en el expediente para demostrar que el Estado colombiano no solamente faltó al respeto de los derechos humanos de los upecistas con los casos atribuidos directamente a sus agentes, sino que tampoco garantizó que tuvieran protección oportuna, es decir, habiendo podido evitar el exterminio de la Unión Patriótica, no lo hizo.

¿Por qué se rompió la solución amistosa entre el Estado y las víctimas del genocidio contra la UP, avalada por la CIDH?

— La búsqueda de una solución amistosa se inició en el gobierno de Andrés Pastrana Arango, quien aceptó como requisito, exigido por los peticionarios y las víctimas, la creación de un programa de protección para los sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista

Colombiano. Este programa ha sido un hecho y ha contribuido a mejorar, no solamente las condiciones de seguridad personal de los dirigentes, sino que también ha paleado de alguna manera la situación económica de las víctimas, en especial los desplazados.

Este programa ha proveído algunos esquemas de seguridad para los dirigentes, incluyendo escoltas de confianza. Así mismo, a los más necesitados se les ha dado apoyo de vivienda, medios de comunicación, auxilios de transporte, asistencia psicosocial y últimamente médica y psicológica para las personas con algún grado de discapacidad sobrevivientes de atentado personal.

Habíamos avanzado también, antes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en una propuesta de creación y montaje de catorce oficinas regionales con las coordinaciones de víctimas para identificar y documentar los casos de violaciones de derechos humanos. Estas oficinas estarían acompañadas de la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, así como de una estrategia de medios de comunicación, de tal suerte que las víctimas tuvieran un reconocimiento regional que contribuyera a garantizar su protección.

Pero llegó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y se desencadenó una serie de ataques verbales y estigmatizantes contra los sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. Todo lo que no pudo hacer contra la guerrilla de las FARC en sus operaciones militares, lo trasladó contra las víctimas de la UP, afirmando que ellos eran los únicos responsables porque habían “combinado las formas de lucha”. Esta situación contribuyó a que en el primer periodo de gobierno

de Uribe Vélez fueran asesinadas más de ciento cuarenta personas, treinta y ocho desaparecidas y cientos de familias desplazadas de los departamentos del Guaviare, Tolima y Meta, especialmente. Más de cincuenta discursos remitidos a la Comisión Interamericana corroboran esta afirmación.

Adicionalmente, y para el colmo de la estigmatización, en la campaña de reelección, en 2006, lanzó una propaganda radial donde un supuesto exmilitante de la Unión Patriótica le pedía al presidente en campaña, entre otras, que combatiera a los de la Unión Patriótica porque se habían desviado “del camino de la paz”.

Finalmente y ante esta situación, por supuesto que no podía mantenerse la búsqueda de una solución que no era para nada amistosa. De manera que solicitamos inmediatamente a la Comisión Interamericana dar por concluida esta etapa y pasar a la de fondo, a fin de determinar la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio de la Unión Patriótica.

Tiene que haber una reparación política

¿Qué esperan las víctimas de la UP?

—Las víctimas de la Unión Patriótica esperan justicia en el sentido integral del concepto, que incluya el esclarecimiento de los hechos, la persecución, juzgamiento y sanción de los victimarios y, por supuesto, una reparación integral que consulte el daño y la situación de desigualdad en que quedaron por las graves violaciones de derechos humanos. Es decir, debe ser una reparación que transforme las condiciones de miseria en que quedaron las familias como resultado de la persecución política. Así mismo, una reparación política que

cree las condiciones necesarias para que la Unión Patriótica se integre con garantías al espectro político colombiano. En este sentido, no se trata únicamente de que le devuelvan la personería jurídica a la Unión Patriótica, se trata de crear condiciones especiales y suficientes para mantenerla, por ejemplo, absteniéndose de exigir las mismas condiciones que aplican para los otros partidos políticos, que no han sufrido tal persecución. Se trata de una reparación política por graves violaciones de derechos humanos contra sus militantes, en un caso que se encuentra en el Sistema Interamericano porque en Colombia no hubo justicia.

La Ley de Víctimas, que el Gobierno sancionó este año, no cumple con los estándares internacionales en materia de reparación integral. Así el Gobierno siga afirmando en todos los foros nacionales e internacionales que las víctimas de la UP son beneficiarias de esta ley, ellas diferencian perfectamente entre una reparación integral y una reparación administrativa que no tiene en cuenta la persecución y sanción a los perpetradores, tal como está en la ley, que obliga a las víctimas a renunciar al derecho a la justicia mediante la suscripción del “contrato de transacción”, que no es más que un reconocimiento de que el Estado colombiano deniega justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

¿Por qué no se pudo cristalizar el experimento de la UP?

—Yo creo que hay muchos intereses económicos de por medio. Así mismo, existe una cultura política excluyente que no deja prosperar partidos políticos diferentes al

conservador y liberal. La Unión Patriótica fue una alternativa real de poder con la cual esas élites temieron perder los beneficios amasados durante una hegemonía de cientos de años, porque el programa que promocionó la Unión Patriótica rompía con la concentración de la riqueza, de la tierra, de los frutos del Estado, en manos de una clase dirigente a la que no le importaba que amplias masas del pueblo colombiano carecieran de sus necesidades básicas. Es así como la Unión Patriótica proponía que el 50% del presupuesto nacional fuera dedicado a beneficios sociales como salud, educación, vivienda y empleo. Así mismo, que se democratizara la vida nacional superando el Estado Permanente de Sitio (hoy Estado de Excepción) y donde la autoridad civil estuviera por encima de la autoridad militar, entre otros.

Entonces, la Unión Patriótica, según ellos, subvertía el orden que el Establecimiento había impuesto durante tantos años, y la votación de la UP en 1986 hacía prever que prontamente iba a ostentar el poder político en todo el territorio nacional, pues la Unión Patriótica había obtenido la más alta votación de un partido diferente a los tradicionales en Colombia en la historia escrita hasta ese momento. Es así como obtuvo catorce congresistas, 350 concejales, veinticuatro diputados y veintitrés alcaldes. Por supuesto, eso asustó a la oligarquía, a los terratenientes, militares y paramilitares, a los caciques electorales de la región y hasta a varios sectores de la Iglesia Católica que sintieron con preocupación que los comunistas-ateos se iban a tomar el poder en Colombia.

Todo esto desató una persecución política, orquestada desde diferentes flancos, en el Congreso de la República contra

los congresistas de la UP, en los medios de comunicación, en las Fuerzas Armadas y de inteligencia del Estado, en las entidades de investigación judicial y de protección, todas contribuyeron a que se consumara el genocidio contra la Unión Patriótica. El argumento central con el que el Estado ha justificado el exterminio, es que los de la Unión Patriótica combinaban las formas de lucha, tesis a la cual se han sumado muchos académicos cooptados por el Estado, otrora dizque de izquierda. Si esto hubiera sido cierto, lo que debió haber hecho el Estado, era individualizar estas personas judicializándolas, garantizando su derecho a la defensa, y no matarlos, desaparecerlos o torturarlos. Con esta aseveración lo que hace el Estado es reconocer su responsabilidad en el exterminio de la Unión Patriótica.

¿Qué lecciones le deja a Colombia el genocidio contra la UP?

—En muchos países de América Latina han acabado con la oposición política, con la diferencia de que ha sido bajo dictaduras militares como en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, entre otras, pero en Colombia acabaron a la Unión Patriótica en el país con la “democracia” más antigua de América.

La lección principal que deja el genocidio contra la Unión Patriótica es que este hecho no se puede volver a repetir.

Para lo cual debe haber sanción para los responsables, que se encuentran todavía en la estructura del Estado, en los cuarteles, en las mesas de trabajo de algunos medios de comunicación, en el Congreso, en las diversas organizaciones gremiales, entre otras, es decir, en todos estos lugares donde se planearon las masacres, la exclusión, la discriminación, los que hicieron y los que fustigaron, en últimas hay que superar la grave impunidad de hecho y de derecho de los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica.

Con el crimen contra la Unión Patriótica lesionaron, no solamente a ella, sino a la democracia colombiana, por eso una reparación política tiene que ver con una transformación del régimen político que le dé garantías reales a la oposición, consecuente con un Estado Democrático de Derecho.

Una decisión de la Corte Interamericana contra el Estado colombiano por el genocidio contra la Unión Patriótica, tiene que ser el precedente más importante de los últimos tiempos, para que ningún Gobierno del continente se atreva nunca más a acabar con la oposición política.

Texto basado en una entrevista de Juan Carlos Jiménez, colaborador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación



Manifestación de clausura del Primer Congreso Nacional de la Unión Patriótica, el 16 de noviembre de 1985, en la Av. Jiménez con Carrera Séptima, Bogotá. Interviene Jaime Pardo Leal ante más de veinte mil personas. (Foto: Lara, Voz)

Gustavo Gallón

El fallo de la Corte Interamericana en el caso Cepeda hace pensar que adopte una medida similar por el genocidio de la UP

Director de la Comisión Colombiana de Juristas desde su creación en 1988. Fue representante especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Guinea Ecuatorial entre 1999 y 2002. Fundador y primer presidente del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y miembro de su Consejo Directivo. Abogado graduado en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá (1974), máster en ciencia política de la Universidad de París I (1978) y estudios de doctorado en Sociología Política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (1978-1983). Profesor invitado en la Universidad de Notre Dame (Indiana, USA) entre 1998 y 1999. Profesor de

las Universidades Nacional, Externado de Colombia, Los Andes y Javeriana, en Bogotá, desde 1979. Autor y editor de varias publicaciones sobre derechos humanos en Colombia. Asesora a Reiniciar en el proceso contra el Estado por los crímenes de la UP.

¿En qué estado se encuentra la demanda por el genocidio de la UP en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

—La demanda ha surtido prácticamente todos sus trámites. Está pendiente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tome una decisión en relación con las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. Fue objeto de admisión en noviembre de 1997, cuando la Comisión, mediante una resolución, la aceptó. En aquel entonces no existía la costumbre de pronunciarse sobre la admisión en todos los casos, sin embargo se adoptó una resolución teniendo en cuenta la gravedad del asunto, pero sólo como exterminio político y no como genocidio político, como se presentó, dado que la Convención Americana de Derechos Humanos no podía admitirla bajo ese precepto pues el genocidio político no lo contemplaba.

Después, en el año 2000, se dio inicio a una etapa especial en el proceso que se llamó de “búsqueda de una solución amistosa”, donde la CIDH se puso a disposición de las partes, el Estado colombiano y las víctimas, para allanar un arreglo satisfactorio a los demandantes. La etapa de solución amistosa, sin embargo, se rompió en 2006 cuando la campaña reeleccionista de Álvaro Uribe lastimó en forma grave a la UP y a los

sobrevivientes con una cuña radial que ponía a los militantes de esta organización como personas que se “torcieron” al servicio de la guerrilla. El incidente colmó la copa de la paciencia de las víctimas que ya venían recibiendo un sinnúmero de malos tratos de parte de la Presidencia de la República. Del 2006 al 2011 se han presentado alegatos de conclusión y ahora le corresponde a la Comisión fijar una posición y trasladarla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decidirá finalmente sobre la demanda.

Hay casos que pueden quedarse sólo en la decisión de la Comisión. Hace años esta era la regla. Lo excepcional era que se pasaran los casos a la Corte. Hoy es a la inversa y los procesos van a la Corte a menos que las partes tengan otra consideración especial. Se trata de dos instancias previstas por la convención, primero se va a la Comisión y luego, si es pertinente, lo que defina esta pasa a la Corte, que es el último peldaño. Pero en el caso de la UP se va a ir a la propia Corte por la severidad de los hechos si la Comisión encuentra una violación, pero aquí hay múltiples, en un proceso que lleva ya catorce años. El caso estuvo suspendido en la etapa de solución amistosa.

Habrá que preguntarle a la CIDH si está dispuesta a abordar todos los casos denunciados de la UP

¿Pero aún es posible volver a una solución amistosa?

—En teoría sí, sin embargo a estas alturas ya están muy agotados los términos y se debe estar ante una decisión final de la Comisión, a menos que esta se demore aún más ante la magnitud de los casos, 1.163 homicidios, aunque sabemos

que las víctimas mortales del genocidio contra la UP pueden estar entre las 2.500 y las 4.000; es algo bien difícil para dicho organismo. Habrá que preguntarle a la Comisión si está dispuesta a abordar todos los casos.

Pero volviendo a la calificación del delito, ¿no es algo enredado si tenemos en cuenta los estatutos de la Convención Internacional sobre el Genocidio que no lo acepta por razones políticas, que sí recoge la Convención Americana de Derechos Humanos, como la Corte Penal Internacional y la misma Corte Suprema de Justicia?

—El enredo es cada vez menor porque en 1998 se aprobó el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional, donde sí se incluye el genocidio por razones políticas, que no hizo parte de la Convención Internacional sobre Genocidio de 1948 por oposición de la antigua Unión Soviética. No se trataba de una consideración de orden jurídico profundo, no, es que un Estado que era muy poderoso dijo yo no firmo un tratado que contemple el genocidio por razones políticas. Eso es todo. Pero repito que eso comenzó a cambiar con el Estatuto de Roma, sin embargo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció antes sobre la admisibilidad de la demanda de la UP y en ese momento tenía para invocar la Convención Internacional sobre Genocidio, hizo esa declaración señalando que no podía admitirla como genocidio político. La Comisión, a pesar de que explicitó su sometimiento al instrumento jurídico vinculante en ese momento, al mismo tiempo minimizó la importancia de la discusión y dijo, no importa, esto es gravísimo, llámese como se llame y lo

voy a señalar como exterminio político. Y así quedó establecido cuando aceptó la demanda de la UP. La Corte Suprema de Justicia de Colombia sí reconoce el delito del genocidio político, donde cabe el caso de la UP. La Corte Penal Internacional incluye el genocidio político en su legislación.

El fallo de la CIDH en el caso Cepeda favorece la demanda contra el Estado por el genocidio contra la Unión Patriótica

Una de las víctimas, el senador de la UP, Manuel Cepeda Vargas, fue desglosada del listado inicial por parte de sus apoderados y el resultado final es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos finalmente condenó al Estado por el crimen y lo obligó al resarcimiento, como vimos el 9 de agosto de 2011 cuando pidió perdón. ¿Cómo toca esto el caso de la demanda colectiva siendo que se trata de una situación similar?

—Los hechos son semejantes. El desglose de algunos casos, como el de Manuel Cepeda, que aparecía en el caso colectivo, fue asumido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente la Corte Interamericana tomó esa histórica decisión, que por supuesto favorece el tema general sobre la demanda contra el Estado por el genocidio contra la UP, o sea, se trata de una situación similar. Lo que ocurre es que no todos los asuntos tienen igual grado de evidencia. En el caso de Cepeda había unas pruebas muy fuertes en relación con el homicidio. En la demanda colectiva hay casos en que las pruebas son menos fuertes contra los autores. Hay elementos por supuesto. La decisión que produjo la Corte Interamericana en

relación a Manuel Cepeda permite pensar que se adopte una medida semejante; pero está la dificultad de cómo abordará la Comisión el asunto ante semejante magnitud, con centenares de víctimas.

¿Cómo ve la situación de impunidad en el caso de las víctimas de la UP, donde el panorama de condenas no pasa del 7%, cuando la Fiscalía General tiene cerca de mil casos de homicidio en sus carpetas?

—La impunidad es enorme y la situación no ha mejorado en nada, a pesar de la voluntad que hubo tras la búsqueda de una solución amistosa, que implicaba que la Fiscalía debía acelerar las investigaciones y llevarlas a buen término, y a pesar de los valiosos esfuerzos de colaboración de personas y organizaciones, que se han preocupado por encontrar justicia, las condenas son escasas y nada significativas. La verdad es que no hay una acción vigorosa de la justicia y no vemos que haya grandes movimientos por esclarecer el exterminio de que fue víctima la UP. Y lo más grave es que aún siguen las persecuciones y asesinatos contra los sobrevivientes que se atreven a entablar demandas, denunciar a los culpables o proseguir su camino político.

¿Esta impunidad no lleva a que las víctimas apliquen sus quejas ante la Corte Penal Internacional, estando frente a crímenes de lesa humanidad y que como tales no prescriben?

—La Corte Penal Internacional tiene competencia sobre casos ocurridos después del 1° de noviembre de 2002, competencia que fue aceptada por el Gobierno colombiano el 5 de agosto de 2002, dos días antes de terminar la Administración Pastrana y

la entrada en vigencia se produjo sesenta días después, ya bajo el gobierno de Uribe. Los hechos sucedidos antes del 1° de noviembre de 2002 no son de competencia de la Corte Penal Internacional. Los eventos posteriores a 2002 que constituyan delitos de lesa humanidad, sí. Y desde 2009 los que constituyan crímenes de guerra son delitos de lesa humanidad. Colombia, por esta situación, tiene una investigación preliminar en ese organismo internacional. En ese sentido se debió conocer un pronunciamiento en octubre de 2010. Esperemos que pronto salga a la luz.

¿Qué pasa en los casos que la Fiscalía General de la Nación declaró como de lesa humanidad, es decir que no prescriben, como el magnicidio de Bernardo Jaramillo, presidente de la UP y candidato presidencial asesinado en marzo de 1990? ¿Quién va a juzgar a los responsables?

—En lo penal solamente la justicia colombiana. Esos delitos no prescriben, la Fiscalía los declaró como de lesa humanidad y si esa decisión se mantiene, si no es controvertida por un juez, por supuesto que continuaría con esa calidad en los estrados judiciales colombianos, en lo penal. En materia de responsabilidad estatal, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana pueden tener competencia, pero ya no sería responsabilidad penal, como tampoco se está discutiendo dicha competencia en el caso de la UP en la CIDH, sino la responsabilidad estatal.

La Unión Patriótica fue un experimento muy valioso para la sociedad colombiana

La Ley de Víctimas sancionada en julio de 2011 por el presidente Santos ordena

resarcirlas, incluidas por supuesto las miles de la UP, pero habiendo un proceso en curso ante la CIDH, ¿cómo quedaría la situación, estaríamos frente a un caso de doble reparación?

—Las víctimas pueden reclamar, bien sea ante una instancia nacional como un juzgado, o en virtud de la Ley de Víctimas ante la entidad que se va a crear. En su reconocimiento como víctimas y su reparación no habría doble resarcimiento si ellas también lo solicitan internacionalmente, en la medida en que ésa es una regla claramente establecida: si la persona ya ha sido reparada y si hay otra decisión judicial que ordena repararla, pues sencillamente se toma nota del hecho de que ya ha sido compensada. Sin embargo, sí puede haber doble declaración de responsabilidad porque en lo interno puede declararse responsable a una persona o al Estado, y en lo internacional, puede declararse responsable al Estado. No es incompatible esa doble responsabilidad.

¿Qué lecciones le deja al país el genocidio de la UP?

—Es una historia muy grave esa decisión de personas vinculadas al Estado y grupos paramilitares de exterminar a un partido creado por un acuerdo que buscaba una fórmula de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, para crear un movimiento que permitiera un desarrollo de las reivindicaciones que planteaba en ese momento la guerrilla.

Fue una salida original en la que el Gobierno aceptó que en ese movimiento podrían participar personas que habían sido guerrilleros y que también estuvieran quienes no lo habían sido. En verdad expusieron su vida al participar en ese experimento, pero un experimento muy valioso porque si hubiera sido respetado, realizado con lealtad, quizá hubiera dado lugar a la consecución de la paz negociada en Colombia. Pero lo que se generó fue una reacción violenta. Recordamos un general de la República, ya fallecido, que recorrió batallones exaltando a la tropa a organizar y fortalecer los grupos paramilitares para luchar contra ese Acuerdo de Paz celebrado entre el Gobierno y las FARC. Y efectivamente, se fortalecieron los grupos paramilitares en ese entonces, y se produjo esta muerte masiva de personas vinculadas a una agrupación política, que por otra parte estaba siendo exitosa, ya que logró elegir una gran cantidad de miembros a los cuerpos colegiados, como senadores, representantes, diputados, concejales y también alcaldes, e iba ganando fuerza. El genocidio contra la UP es una experiencia histórica muy dolorosa y negativa para el país, que no ha logrado superar esta tragedia y que espera verdad, justicia y reparación integral para las víctimas. Estamos convencidos que las nuevas generaciones van a superar esta barbarie, esta ausencia de civilidad en la resolución de los conflictos.



Reunión del Secretariado de las FARC con la Comisión de Paz y de Verificación de los Acuerdos de La Uribe, 16 de noviembre de 1984. De izquierda a derecha, John Agudelo Ríos, "Manuel Marulanda Vélez", Gilberto Vieira. (Foto: Roberto Romero Ospina, Voz)

— — — Alberto Rojas Puyo

Los Acuerdos de La Uribe son la mejor prueba de que sí es posible buscar caminos de paz

Alberto Rojas Puyo fue uno de los artífices del proceso de La Uribe. El presidente Betancur lo nombró en la Comisión de Paz contando con su experiencia como político del Partido Comunista y con algún entronque en las FARC. Todos los que han visto la película *Ríochiquito*, de los cineastas franceses Bruno Muel y Pierre Sergent, premiada en muchos festivales y que narra la intervención de las Fuerzas Armadas en las llamadas zonas de autodefensa campesina, comandadas por "Manuel Marulanda", en 1964, y que abrió este periodo de guerra que parece no tener fin, recordarán la voz del narrador. Se trata de Rojas Puyo, quien vivía por aquel entonces en París y mostraba así su solidaridad con los guerrilleros. Allí también redactó una famosa carta firmada por lo más granado de la intelectualidad francesa en protesta

por los operativos militares contra los campesinos de Marquetalia, y que encabezaba el Nobel de Literatura, Jean Paul Sartre. Seguramente toda esta escuela y su activa militancia en el partido, cuya influencia era innegable en las FARC por esos años, hicieron que fuera vinculado al importante organismo que buscaba un horizonte de paz. Rojas Puyo alcanzó en 1986, en una coalición de la UP con el Partido Liberal del Huila, un escaño en el Senado como suplente. La lista la encabezaba Plazas Alcid, quien le cedió a Rojas prácticamente todo el periodo en el Congreso. En 1990, tras el asesinato de Bernardo Jaramillo y la casi inmediata separación de un importante núcleo de la UP, pasó a las filas del M-19 y entró a hacer parte del gobierno de Gaviria como embajador de Colombia en Hungría.

La pregunta que abrió un camino

¿Cómo fue ese proceso inicial de los Acuerdos de Paz con las FARC bajo el gobierno de Betancur y que dio nacimiento a la UP?

— Antes de la toma de posesión de Belisario Betancur como nuevo Presidente de la República en 1982, en el sonajero de los periódicos comenzó a figurar el nombre de Rodrigo Escobar Navia para ocupar el cargo de ministro de Gobierno. Rodrigo era un gran amigo y resolví invitarlo a cenar en mi casa con Jorge Edgar Revéiz, director del CEDE de la Universidad de los Andes, y a la hora de postres le lancé esta frase: quiero decirte algo que me ronda la cabeza hace tiempo, ¿por qué no iniciar unas conversaciones con los movimientos armados y en especial con las FARC, para ver si esto desemboca en una salida civil y pacífica que ahorre

tanto desastre en muertos, atentados, dineros perdidos en armas? A Rodrigo se le prendió la chispa y estuvimos hablando hasta las cinco de la mañana sobre el tema. Él, después de reflexionar unos días y ya en vísperas del 7 de agosto, me llamó para decirme que preparara un memorando con aquellas ideas que había expuesto esa noche, cosa que le presenté pocos días más tarde. Rodrigo, ya como ministro, trabajó en eso y un mes después supe que me habían nombrado para hacer parte de la Comisión de Paz con el objetivo de buscar caminos de diálogo con la guerrilla.

El nombramiento, a pesar del gran honor, me complicaba la vida con el Partido Comunista, del que hacía parte desde 1954, ya que algunos destacados miembros de la dirección no estaban de acuerdo con dicha escogencia. Gilberto Vieira, el secretario general, me informó que el asunto se había discutido y que la mayoría decidió que no renunciase a la Comisión, como lo pedían varios dirigentes del partido.

Ya en la Comisión, inicié contactos con “Jacobo Arenas” a través de algunos conocidos, y recuerdo que después de haber cruzado varios papelitos con él sobre el tema, le escribí una carta a las FARC, que en principio era dirigida al comando de un Frente que actuaba en el Cauca.

No recuerdo el número de ese Frente pero sí que su jefe era el famoso “Sargento Pascuas”. En la misiva me refería al caso del secuestro de unos parientes políticos del doctor John Agudelo Ríos, miembro de la Comisión de Paz, también nombrado por el Presidente. Entonces les señalé, ya en mi calidad de miembro de dicha misión, que en mi sentir, el secuestro es política y éticamente inaceptable y

les pido que si están en sus manos esos señores, los liberen cuanto antes. Y les añado que Agudelo Ríos, siendo un dirigente conservador, tiene voluntad para llegar a soluciones de paz. Esa carta se multiplicó en mimeógrafo y después vi copias de ella en manos de gente del partido.

Los primeros pasos

En el Valle ese documento tuvo cierta repercusión entre los afectados directamente por las actividades del grupo guerrillero. Después entablé relaciones con Alberto Campos, llamado “El Abuelo” y a través de él logré una relación más sólida con las FARC. Otto Morales Benítez, presidente de la Comisión, John Agudelo y yo, conversamos largas horas sobre el tema de cómo abordar el diálogo. Yo tenía un documento que se llamaba “Primeros pasos”, un conjunto de ideas para una aproximación a las FARC que había presentado en una de las primeras reuniones de la Comisión, previamente a la sesión –muy solemne por cierto–, de instalación en la Casa de Nariño. Allí propuse un encuentro entre la Comisión y el Estado Mayor del grupo insurgente. Eso fue cuajando poco a poco y luego vino la correspondencia con “Jacobo Arenas”, que comenzó a finales de 1982 y buena parte de 1983. Habíamos empezado a avanzar en las relaciones con miras a un encuentro en medio de un accidentado proceso luego de la renuncia de Morales como presidente de la Comisión. John Agudelo entró en su reemplazo y me responsabilizó de la comunicación con las FARC, proceso que tenía de hecho bastante avanzado. Así pudimos llegar al único acuerdo de suspensión de los combates que esa agrupación guerrillera

haya firmado con un Gobierno. Eso la gente lo olvida y no solamente se firmó un cese al fuego, sino que este tuvo vigencia durante casi tres años, muy agresivo por cierto, con violaciones de parte y parte, pero se transitó por esa experiencia que demuestra que sí es posible llegar a tratados semejantes. No hubo entrega de áreas ni de armas y cada frente seguía en su sitio. No podían hacerse operaciones bélicas de parte del Estado en las zonas aledañas a La Uribe, sede del Secretariado. Y la guerrilla se comprometió a que no se presentaran violaciones a la ley penal por parte de nadie y, si las había, la Fuerza Pública y la justicia estaban en su pleno derecho constitucional y legal de intervenir para impedir esas infracciones y castigar a los culpables. No fue, como se ha pretendido descalificar, una entrega de la legalidad a los alzados en armas. El Ejército no estaba maniatado y no hubo cesión de territorios.

“‘Jacobo’, y ahora qué va a seguir”

Se preveía en el acuerdo que las FARC, según su voluntad, se podrían organizar políticamente con la intención de hacer el tránsito a la legalidad, en el movimiento civilista de su preferencia, de modo que ese punto, una vez firmado y acompañado del cese al fuego, dio surgimiento a la Unión Patriótica, el nombre que ellos escogieron para su actividad abierta y bajo dichos compromisos. Recuerdo que después de suscrito el acuerdo ese mismo día le pregunté a “Jacobo” y a “Manuel Marulanda”, “y ahora una vez que ustedes pusieron su firma qué va a seguir”, y entonces “Jacobo” se rió y me dijo, “Alberto, justamente hemos pensado invitarte para

que nos visites en otro lugar y hablemos, pues ésa preocupación tuya está en nuestras filas; de eso estamos conversando". Días más tarde me encontré atravesando esas inmensas comarcas heladas del Sumapaz para departir con ellos. Hablé con "Jacobo" y "Alfonso Cano" y me dijeron que había diferentes posibilidades, una de ellas, ingresar al Partido Comunista, y otra, la formación de un partido aparte, o comenzar a organizar un frente político amplio. "Tú qué piensas", me preguntaron.

Les manifesté, sin tapujos, que se debía descartar la idea de hacer parte de las filas del PCC pues era mejor presentar una opción mucho más amplia, pues lo otro seguramente tendría mala presentación ante la opinión pública, tan cargada de anticomunismo. La otra fórmula, crear un partido político propio, de las FARC, tampoco tendría sentido. Ellos creían lo mismo. Estaban pensando en algo mucho más amplio, un frente con presencia de fuerzas de todo tipo, un movimiento en el que sus integrantes, partidos o grupos, no tuvieran que disolverse. Coincidimos en que allí se podría ingresar individualmente o como partido político y podrían estar representadas las mayores tendencias democráticas de Colombia. En esa cita no se tomó ninguna decisión, sólo querían conocer un punto de vista. Poco después me enteré de la fórmula final: la creación de un movimiento y "Jacobo" dio la idea del nombre, Unión Patriótica. Yo lo noté muy entusiasmado con la posibilidad de su ingreso a la actividad política y ser candidato presidencial.

Ellos me lo dijeron en noviembre de 1985 y luego "Jacobo" lo afirmó públicamente en un video que envió al Congreso de la UP: se había descubierto un complot

para asesinarlo y por eso renunciaba a la candidatura presidencial, campaña que ya se había lanzado con afiches y propaganda en todo el país. Pero si no llegó su asesinato sí se extendió la ola de crímenes contra los dirigentes y militantes de la naciente UP.

La idea de la UP, esa nueva formación política en un país bipartidista, se constituyó de entrada en una gran esperanza para salir, en primer término, de la violencia, y para impulsar la vida democrática que tanto le hace falta al país. Pero esa esperanza, la de no volver a poner en la boca de los fusiles el destino de los colombianos, se frustró.

La reacción interviene, como suele hacerlo, mediante la violencia

Previamente al proceso de paz con las FARC, proseguía esa campaña de exterminio contra la izquierda a través de aparatos paramilitares como el MAS. Sin embargo, ¿la no exigencia de su desmonte dio pie a que continuaran su ofensiva, esta vez contra el nuevo proyecto? ¿Aquí no se pecó de exceso de confianza dado que los sectores dominantes del Establecimiento, en primer lugar los militares, no se comprometieron con los Acuerdos de La Uribe?

— La preocupación existía por la presencia de esos elementos que usted señala. Los sectores de la reacción intervienen como suelen hacerlo, mediante la violencia; es que ellos fueron los creadores de la combinación de todas las formas de lucha, actuando en la legalidad o creando ejércitos privados donde les conviene. Por supuesto que nosotros pensamos en esa situación. Cuando fue declarado el nacimiento de la UP, dirigimos una carta al entonces jefe de la cartera de Gobierno, Jaime Castro, cuyo

texto fue consultado con las FARC, donde le solicitamos al ministro de la Política que nos precisara cuál era la voluntad real del gobierno de Betancur con respecto a brindar plenas garantías para el movimiento, que contribuiría a que la guerrilla de las FARC hiciera tránsito a la vida política legal del país.

Pocos días después el ministro convocó una rueda de prensa donde respondió la misiva que le habíamos entregado, afirmando que la nueva corriente política, a la que le brindaba un saludo, contaría con todas las garantías para su actividad proselitista. Esto, desde luego, no podía consistir sólo en brindar seguridad, porque todos sabemos lo que un Gobierno está dispuesto a realizar, se trataba de voluntad política para hacer cumplir los acuerdos. Pero ahora se necesitaba también que alguien diera un primer paso. Yo, por mi parte, pensé y sigo pensando, y es de interés de la izquierda en su camino democrático, en la necesidad de cesar la política de la combinación de todas las formas de lucha, estrategia que sólo sirve a los intereses de la extrema derecha, que alienta el militarismo, que fortalece esas posiciones retrógradas.

Pero los civiles que no estaban en la lucha armada, que luchaban por reformas, caían a diario en uno de los peores genocidios contra un movimiento político, ¿por qué esto tenía que multiplicar la violencia? ¿Por qué la sociedad no pudo impedir el exterminio?

—Obviamente que eso era una barbarie. En el terreno de matar quien tiene las mejores posibilidades es la extrema derecha, la izquierda no, y no debe entrar en ese engranaje bajo ninguna circunstancia. Lo

rechazaba en medio del exterminio. Que nos mataron a alguien, entonces vamos a liquidar a zutano o perencejo, no, así no podían ser las cosas. Las fuerzas que estamos por la democracia teníamos que rechazar esos métodos propios del fascismo. Pero al mismo tiempo no hubo una gran movilización en rechazo al exterminio. Los sindicatos, los partidos políticos, no organizaron la protesta. El Partido Comunista hacía permanentes llamados que no calaban en la opinión. Hay que pensar que las masas no estaban con la lucha armada y se les había vendido la idea de que la UP era el brazo político de las FARC. Aquí nunca hubo un apoyo de masas a la lucha armada. Por consiguiente, era de nuestro interés prescindir de cualquier lazo con la guerrilla, porque si algo nos hizo daño era querer jugar en los dos terrenos, seguir al mismo tiempo en el partido y en las FARC. Estas querían ganar terreno político a través de la UP, que estaba en la legalidad y con los frentes, ampliar su espacio militar sometiendo territorios enteros con tributaciones a los finqueros y hacendados. Siempre pensé así y lo sostuve ante la dirección del Partido Comunista y las FARC, que a la paz había que jugársela por entero, con claridad y decisión. Protesté públicamente porque había guerrilleros que hacían su actividad política de la UP, con uniforme y armados. Por ello fui llamado a una discusión con el Secretariado del PCC y tras defender mis puntos de vista, alguien me dijo: “compañero, el país tiene que acostumbrarse a que aquí hay dos ejércitos” y añadió que eso estaba reconocido en los Acuerdos de La Uribe. Según eso, ya había una interpretación de que existían dos Fuerzas Armadas. Para mí esto era un

estado de delirio. Yo nunca vi entusiasmo a Gilberto Vieira con este tipo de planteamientos y me decía, “explica bien allá arriba tus puntos de vista sobre eso”. Y fíjate que en decenas de encuentros en Casa Verde, sede del Secretariado, con los más diversos estamentos del país, ellos, empezando por “Marulanda”, siempre asistían de civil, sin despliegue de armas, así como sus séquitos de seguridad.

Eso cambió totalmente doce años después en las conversaciones en El Caguán

—Sí, así fue, todos aparecían con todo tipo de armas y bien uniformados.

¿Qué experiencia le queda al país de este proceso de paz que dio nacimiento a la Unión Patriótica?

—Que de todas maneras el alto al fuego decretado al mismo tiempo por las FARC y el Gobierno, el surgimiento de ese acuerdo que permitió que naciera la UP, el hecho que durante tres años se pudo, mal que bien, mantener la tregua entre las partes, constituyen pruebas de que sí es posible buscar caminos que no sean los de la violencia para obtener la paz. Sigo pensando hoy, como en aquella época, que la paz no se construye con violencia. Ésa es mi convicción más profunda; puede haber un exterminio, es posible, de la guerrilla, dadas las tecnologías militares de hoy, no hay selva que proteja. Lo único que puede haber es el acompañamiento de las

masas en la tarea política de transformar la sociedad y, si el exterminio llega a darse, difícilmente puede surgir una real situación de paz; quedará siempre el germen de la revancha, heridas que tardarán años en cicatrizar. Lo mejor para el país es que la paz llegue por medio de la democracia.

Y habría que destacar como enseñanza que la ceguera, el empecinamiento de la extrema derecha, de impedir cualquier transformación de las estructuras económicas y sociales, como la reforma agraria, ha significado una grave perturbación de la vida social, y como el terreno de la izquierda no puede ser el de la violencia, ella tiene que responder a la violencia mediante la movilización política de masas, como nos lo enseñaron los grandes clásicos del marxismo. La transformación de la sociedad no puede ser el fruto de pequeños grupos aislados investidos de una misión providencial para salvar el país. “Sin las masas nada, con las masas todo”, era la divisa. Ahondando cada día más en toda esa experiencia saco en claro que hay que jugarle limpio a la paz y la democracia. Hubo una exploración muy positiva para buscar esa vía de transformaciones políticas y democráticas, pero fuerzas contrarias llevaron al fracaso ese experimento de paz, hicieron abortar esa esperanza. Unos y otros dijeron, “esto lo arreglamos a tiros”, dando al traste con el proceso de paz.



Activistas de la Unión Patriótica de Soacha, agitando la campaña de la UP en la jornada electoral del 9 de mayo de 1986. (Foto: Lara, Voz)

— Carlos Romero

La experiencia de transitar por ese camino inédito para la paz, abierto por la UP, era una tarea histórica inaplazable

Carlos Romero comenzó a militar en las filas comunistas en 1950, tras haber pertenecido a las juventudes del Partido Comunista Argentino, en Buenos Aires, donde había ido a estudiar Medicina. Romero es oriundo de Santa Marta. De regreso a Colombia, se vinculó a la Juventud Comunista, siendo su secretario general en el periodo 1966-1972. Terminó en 1970 sus estudios de Derecho en la Universidad Libre de Bogotá. Miembro del Comité Central del Partido desde 1966 y de su Comité Ejecutivo Nacional en el periodo 1970-1991, cuando se retira. Fue presidente de la UP después del asesinato de Bernardo Jaramillo y participó en la fundación del movimiento. Fue concejal de Bogotá durante varios periodos y actualmente ocupa un

cargo en el Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo.

En el proceso de paz se decretó la pena de muerte contra quienes aspiraban integrarse a la vida civil

Cuando surge la Unión Patriótica usted era ya un destacado dirigente del Partido Comunista, columna vertebral del nuevo movimiento, ¿cómo fue esa discusión en el seno del partido para apuntarse a esa iniciativa, surgida de los Acuerdos de Paz de Betancur con las FARC?

—Yo creo que la verdad es la siguiente, en el Partido Comunista, como en otros sectores de la izquierda, se discutió seriamente el tema de la necesidad de construir un movimiento político alternativo posbélico. La Unión Patriótica es el resultado y el resumen de un proceso de posconflicto armado que se daba en América Latina. Como usted recordará, los Tupamaros en Uruguay, los guerrilleros venezolanos, los de Guatemala y Nicaragua, los de El Salvador y Perú, realmente habían iniciado una etapa creciente de la lucha armada en el continente y dentro de ese proceso se inscribía el fragor de la insurgencia colombiana, encabezada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cuando llega Belisario Betancur a la Presidencia de la República, plantea la necesidad de que se haga un compás, que comencemos a conversar sobre el tema de una solución negociada al conflicto armado. Y eso, entonces, en el contexto de lo que estaba ocurriendo en América Latina, era muy importante porque en todos los países de la región el surgimiento de unas corrientes civiles alrededor de la desmovilización despertaba un entusiasmo muy

grande. Todos, incluso los de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, se convirtieron en agrupaciones que se proyectaban hacia la Presidencia de la República en cada uno de esos países.

Lo mismo ocurrió en Colombia. La Unión Patriótica concitó un interés enorme porque, ni más ni menos, canalizaba toda la fuerza del movimiento guerrillero y del movimiento civil y revolucionario en un solo haz, en una sola dirección. Desgraciadamente en el país, como decía el expresidente de la primera Comisión de Paz de Betancur, Otto Morales Benítez, existían los enemigos agazapados de la paz, y mientras el Gobierno Nacional trabajaba en función de permitir que un nuevo amanecer político surgiera con la presencia de las guerrillas en trance de desmovilización, dentro del mismo Ejército se daban fenómenos increíbles, como aquella célebre circular que hizo llegar la comandancia general a todos los estamentos armados. El ministro de Defensa de entonces, Llandzábal Reyes, decía que donde hubiera un guerrillero armado había que matarlo, es decir que en el proceso de paz prácticamente se decretaba la pena de muerte contra quienes aspiraban a desmovilizarse e integrarse a la vida civil para realizar actividades pacíficas. Por eso es interesante el dato de que la guerrilla tuvo más muertos en dos años de proceso de paz, de 1985 a 1987, que en toda la etapa de guerra. Eso quiere decir que a pesar del proceso de paz, organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas continuaron disparando contra los guerrilleros, contra sus amigos y simpatizantes, dándole así comienzo al genocidio contra la Unión Patriótica.

Entonces yo creo que el surgimiento de la Unión Patriótica hay que registrarlo

dentro de un proceso de paz frustrado. Es necesario tenerlo en cuenta porque ésa es todavía una deuda que tenemos con Colombia, la necesidad de una solución negociada del conflicto armado y al respecto aquí el Polo Democrático Alternativo también va a jugar un papel muy importante en el sentido de tratar de asegurar que se le den garantías a los guerrilleros, para que cuando entablen de nuevo la negociación puedan ser respetadas sus vidas, sus bienes, y logren incorporarse a la vida civil en forma pacífica y con todas las protecciones.

De tal manera que la Unión Patriótica fue un movimiento malogrado porque el ambiente de guerra predominó sobre el ambiente de paz. Sin embargo, hay que decir que nosotros como Unión Patriótica logramos copar, en un corto tiempo, espacios políticos muy grandes. Elegimos, por ejemplo, más de 350 concejales en todo el país, por lo menos veinte alcaldes en distintas ciudades, incluso llegamos al Senado y la Cámara con diecinueve parlamentarios electos a nombre del movimiento. Desgraciadamente el genocidio de que fuimos víctimas impidió que ese proceso continuara en forma ascendente. Quienes estamos ahora trabajando, yo como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, una de las tareas fundamentales que tenemos es que se reinicie ese proceso, ahora con garantías, con control popular y vigilancia internacional, para impedir que la masacre se repita.

La UP nace al calor de una lucha ideológica y política muy seria

La aparición de la UP en el escenario nacional tuvo que causar muchos debates

en la izquierda y dentro del mismo Partido Comunista.

— Hay que señalar también que la Unión Patriótica surge en medio de un gran debate ideológico y político en el seno de la izquierda, entre el Partido Comunista, las FARC, el ELN y otras fuerzas que estaban prosperando como el MOIR, el EPL y el ELN. La UP nace al calor de una lucha ideológica y política muy seria. Yo recuerdo que cuando se abrió la posibilidad de iniciar el proceso de paz en 1984, el Partido Comunista, aunque no por unanimidad en su Comité Ejecutivo Nacional, del cual yo formaba parte, resolvió participar y de inmediato se envió un mensaje a las FARC en el que planteábamos dicha conveniencia. Yo participé en algunas discusiones que hicimos con el Estado Mayor de las FARC. Algunos compañeros planteaban que no había condiciones para lograr la paz, mientras otros entendían la importancia de este camino que se abría paso desde el punto de vista político. Yo creo que finalmente la sensatez triunfó y la experiencia de transitar por ese camino inédito para la paz de Colombia teníamos que hacerla. Por supuesto que se cometieron errores que habrá que señalar en el futuro, entre ellos el cuidado que debíamos haber tenido con nuestros cuadros y la falta de disciplina de algunos, que les permitieron a los enemigos del proceso actuar con cierta facilidad; eran fallas, digamos, de carácter organizativo y de prevención. Pero yo creo que el error más grande fue el de no entender que tener relaciones amistosas con la guerrilla y mantener un movimiento pacífico y legal en las ciudades era algo supremamente peligroso, porque lo que se discutía allí era el poder y lo que no lográbamos nosotros

vislumbrar a tiempo era que con el poder no se juega.

Cuando se va a luchar por el poder se necesita ofrendar la vida, si es necesario, y está en peligro la vida de quienes aspiran llegar al mando de la Nación para remplazar a las clases dominantes; es decir, ésa es una verdad que conocía muy bien el marxismo y conoce la historia política de la humanidad, pero yo creo que no supimos asimilarla a tiempo, con la suficiente fuerza. Me parece que nosotros tuvimos muchas dificultades para organizar nuestro aparato de trabajo clandestino, que en ese momento era absolutamente necesario para garantizar la vida de centenares de cuadros que perdió la izquierda en esa etapa. Yo creo que ése fue un error que en alguna ocasión tendremos que resumir, no para golpear a nadie, ni para hacer reclamos históricos, sino simplemente para que no nos vuelva a ocurrir. La izquierda no puede cometer nuevamente el error de estar en una parte y estar en otra al mismo tiempo, sin tomar las precauciones suficientes y sin justificarlas ante el pueblo. Considero que ésa fue una equivocación que la historia nos permitirá ir dilucidando poco a poco, en un debate que tendremos que hacer en forma armoniosa y, digamos, constructiva, y no con el criterio de establecer errores y responsables históricos, sino con la idea de que los que cometimos, y yo por eso hablo en plural, no vuelvan a ocurrir.

Pero que pasó en ese sentido, porque cuando nace la Unión Patriótica en marzo de 1985 con el proceso previo de 1984, que trajo los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz de La Uribe, ya venía todo un camino de exterminio contra los dirigentes del

Partido Comunista y gentes de la izquierda; es decir, el paramilitarismo estaba muy acentuado en esos momentos preliminares con grupos como el MAS en 1981. ¿No se pecó un poco de ingenuidad en creer que ese proceso de la UP se pudiera dar paralelo con la existencia de un fuerte movimiento armado, cuando los militares y el gran capital no se comprometieron jamás con el proceso de paz?

— Yo creo que el tema de la violencia contra los movimientos revolucionarios y de izquierda, contra los movimientos democráticos, ha sido una constante histórica en Colombia; podemos afirmar que a principios y a mediados del siglo pasado se dio el exterminio, pasando por la masacre de las bananeras, el asesinato de Gaitán y el Bogotazo posterior, el cobro de cuentas a los guerrilleros liberales de los Llanos y sus familiares y toda esa etapa llamada de La Violencia. Es decir, aquí siempre hubo una violencia organizada e institucionalizada contra los movimientos insurgentes. Por eso nosotros y el movimiento guerrillero entendíamos que no era fácil lograr ni siquiera un inicio de un proceso de paz. Por eso las FARC no entregaron las armas, y en ese sentido creo que no hubo ningún gesto de ingenuidad de su parte. No hay que olvidar que las FARC iniciaron el proceso de paz sin dejación de los fusiles porque sabían que detrás del mismo había poderosos enemigos incrustados en el seno de las Fuerzas Armadas, capaces de liquidarlos a bala. La violencia se recrudeció precisamente cuando vieron en la Unión Patriótica un factor real de poder.

A pesar de eso, yo creo que la guerrilla también se fortaleció, multiplicó sus efectivos, o sea que esto es algo de doble filo, hubo violencia contra la guerrilla,

contra los desmovilizados que se incorporaban a la Unión Patriótica, pero también hubo un fortalecimiento numérico y popular, y digamos de ascendencia en las masas por parte de la guerrilla. Cualquiera podría estar convencido de que no era fácil lograr una paz bajo un gobierno tan pusilánime como el de Belisario Betancur.

Jaime Pardo Leal era una figura estelar llamada a ser Presidente de Colombia

La UP fue el fenómeno político de mayor crecimiento en la historia reciente del país. Casi un año después de su aparición, la candidatura presidencial de Jaime Pardo Leal obtiene más de 323 mil votos, el 4,5% del electorado, pero ya había comenzado el genocidio. ¿Por qué no se pudo impedir, qué pasó con el pueblo colombiano?

—El tema no fue la votación misma que obtuvo Pardo Leal, muy alta en tan poco tiempo y con una campaña de escasos recursos. Pardo, pocas semanas después de esas elecciones que usted comenta, ya se alzaba con el 32% del apoyo de la opinión pública nacional, según varias encuestas. Era un hombre que estaba predestinado a llegar a la Presidencia de la República, lo que demostraba la enorme confianza que despertaba en el pueblo colombiano, era una figura extraordinaria; entonces los enemigos de la paz procedieron a incrementar la violencia ante la inminencia de perder el poder. Lo mismo sucedió con los otros candidatos de la izquierda como Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, demostrándose que las figuras populares iban ganando terreno con grandes posibilidades de llegar a la Presidencia, como lo habían logrado ya en Nicaragua. La ultraderecha, empotrada en el poder, resolvió liquidar eso de raíz.

El plan de exterminio contra la Unión Patriótica era algo premeditado para impedir el ascenso de la izquierda democrática al poder, ésa es la realidad.

¿Pero por qué el pueblo colombiano no logró abortar esos planes de exterminio y darle paso al nuevo movimiento?

—La verdad es que una de las fallas grandes que tiene cualquier movimiento de izquierda en este país es la falta de organización del pueblo colombiano, que ahora comienza a superarse. El Polo Democrático está diciendo que necesitamos construir el poder destituyente, que es el poder de las masas para destituir las políticas anti-populares. Ya lo vimos en Santa Marta, en donde el paro de mayo de 2011 puso en jaque al Gobierno Distrital de esa ciudad, y en la lucha del pueblo santandereano en marzo del mismo año contra el intento de explotar las minas de oro de Santurbán; es decir, estamos viendo ya la presencia del pueblo organizado imponiendo su voluntad, su poder destituyente. Yo creo que mientras no tengamos un poder destituyente, que es el que tienen las masas para movilizarse y destituir, no podemos hacer nada. Pienso que ésa ha sido una de las fallas de la izquierda y que también acusó la Unión Patriótica, cuando no contábamos con la clase obrera unificada y un pueblo organizado capaz de hacer defender su futuro progresista y democrático.

¿No fue un error que la Unión Patriótica no sacara rápidamente un candidato de recambio cuando asesinaron a Bernardo Jaramillo y estaba en un gran momento de apoyo popular?

—Sí, es cierto. Yo creo que nos colocaron en una situación muy difícil y no tuvimos

la audacia de promover un cuadro, que aun cuando hubiera sido un desconocido en ese momento, se iba a convertir rápidamente en figura. Uno de los problemas que ha tenido la izquierda colombiana es que casi siempre ha tenido candidatos prestados, traídos de otras partes que no corresponden a los intereses de la izquierda y, cuando lo hicimos con candidatos propios como en el caso de Jaime Pardo Leal, nos fue muy bien. Sin embargo, fíjese que con otros candidatos ya había problemas en la concepción que se tenía sobre las luchas de la izquierda, ya había dificultades de carácter ideológico y político que impedían unificarse alrededor de un nuevo candidato, pero yo creo que ésa es una observación correcta, era necesario sacar un candidato de recambio, un candidato que hubiera podido recoger la ira, el dolor, la protesta general que había contra el exterminio de la Unión Patriótica.

En este sentido que usted habla, de errores y la constante histórica de la violencia en Colombia, sobre todo contra la izquierda, Álvaro Vásquez plantea en una entrevista que le hicimos también, que uno de los sellos que marca a las clases dominantes es su intención permanente de no dejar crecer a la izquierda, de impedir el avance de los comunistas, de los revolucionarios. ¿Cómo romper ese fatalismo histórico para que los sectores democráticos realmente puedan tener un espacio y no sean aniquilados físicamente como ocurrió con la UP?
—Yo creo que afortunadamente a partir de 1990 ocurre un cambio en la situación internacional; hoy en día por ejemplo, es más difícil que se repita el genocidio contra la Unión Patriótica que en 1985, pues hay una corriente de opinión internacional

muy fuerte que influye y define muchas cosas. Por ejemplo, Colombia es un país en cierta forma aislado del continente, su Gobierno reaccionario de derecha y los de derecha no son bien recibidos en ninguna parte del mundo. Yo creo que la única manera de garantizar que el genocidio de la Unión Patriótica no se repita es mediante la organización de las masas y el fortalecimiento del único partido de izquierda democrática que existe en Colombia, en el cual hemos confluído todas las tendencias de la izquierda tradicional colombiana. Así es que fortalecer el Polo Democrático Alternativo, animar la organización popular, crear el poder destituyente y ligarnos seriamente al movimiento democrático internacional, son las condiciones básicas para poder sacar adelante un proceso de democratización en Colombia. De esa manera lograremos derrotar la tendencia que señalas cuando dices que el sello de la clase dominante colombiana es el de una clase sanguinaria. Aquí no se les ha respetado la vida ni a Gaitán, ni a los dos galanes, Galán el comunero y Galán el del Nuevo Liberalismo, ni a Jaime Pardo Leal, aquí no se le ha respetado la vida a nadie. Quienes estamos vivos es porque tomamos medidas serias de protección, incluso emprendimos el camino del exilio. Llegó un momento en que el acorralamiento era tan fuerte, que me tocó irme del país; fueron tres años y apenas medio se respiró, pero decidimos regresar a pelear, a trabajar por esto y en eso estamos. Yo creo que vamos bien en el Polo a pesar de las dificultades internas que hemos tenido en el caso de Bogotá. A pesar de ello, el Polo comienza a dar señas de un reagrupamiento extraordinario.

¿Qué legado histórico le deja la Unión Patriótica al pueblo colombiano, a sus luchadores, y qué perspectivas se pueden sacar después de semejante experiencia tan clave para el país?

— Yo creo que lo más importante de todo, lo que enseñó la Unión Patriótica, es que el camino es la paz. Es decir, nosotros necesitamos lograr una solución negociada al conflicto armado actual. Si logramos eso vamos a destrabar el proceso y va a haber un salto. En ese sentido, el Polo está orientándose muy bien. En una

entrevista en abril de 2011 entre el presidente Santos y la Dirección Nacional del Polo, afirmó que él va a hacer la paz y señaló que el Polo tendrá que participar en ese proceso. Estas son cosas importantes que diferencian a Santos con Uribe y que debemos tener en cuenta. Estamos convencidos que él es continuista del modelo de desarrollo económico y social neoliberal, pero sabemos también que existen diferencias políticas importantes entre él y lo que representó el gobierno autoritario de Uribe.



Bernardo Jaramillo interviene en el acto de cierre de campaña de la Unión Patriótica en el Coliseo Cubierto de Bogotá, 25 de febrero de 1990. (Foto: Lara, Voz)

Sebastián González ———

Nos metimos en este proceso bajo el lema de Bernardo Jaramillo y José Antequera: “por la vida, hasta la vida misma”

A Sebastião González ahora se le ve más ajetreado que nunca. Se ha propuesto sacar adelante el proyecto de reconstrucción de la UP, a la que le ha puesto un apellido, Bolivariana, pues considera que en su ideario bulle el pensamiento de El Libertador. Fue uno de los fundadores del movimiento cuando hacía parte de las filas comunistas, de cuyo pensamiento nunca ha renegado. Afirma que hacia la UP, que encabeza el exconcejal Mario Upegui, sólo le unen vínculos de solidaridad y de respeto total y que su batalla, con una pléyade de sobrevivientes por sacar adelante el movimiento de Jaime Pardo Leal, no se contrapone en nada con el trabajo de sus compañeros. “La UP

es una sola y todos unidos la volveremos a sacar adelante”, afirma quien fue un aguerrido dirigente sindical de Caldas y quien llegó a ser secretario general de la agrupación entre 1987 y 1988, en una de las épocas más duras del genocidio.

¿Cómo fueron sus comienzos en la Unión Patriótica?

—Nosotros comenzamos el trabajo de la Unión Patriótica a finales de 1984, en el oriente antioqueño, en San Rafael y San Carlos. Después fuimos al oriente de Caldas, por Samaná, La Victoria, Pensilvania, Manzanares y llegamos a los límites de Caldas con el norte del Tolima. En todos esos recorridos hicimos el lanzamiento público de la UP. Estando en Mariquita conocí al compañero Jaime Pardo Leal y, en Armero, antes de la catástrofe, hicimos un acto multitudinario. En 1986 volvimos a hacer todo ese recorrido y reemplacé a Pardo, que era el responsable sindical de la UP, cuando asumió la candidatura presidencial a comienzos de 1986, tomando yo dicha vocería en la UP. Tras su asesinato, en un convenio de seguridad con el gobierno de Barco Vargas, la Dirección Nacional me encargó ser el coordinador de la protección del movimiento y luego terminé siendo el secretario general entre 1987 y 1988.

Yo inicié la actividad política cuando fui presidente del sindicato de gaseosas de Caldas, militante de la JUCO y luego del PCC, con Rubén Castaño en Manizales y Angelino Castro, quienes fueron mis formadores ideológicos.

El escalonamiento de la violencia

¿Cómo asumieron ustedes esa situación de tanto riesgo con matanzas diarias?

—Cuando aparece la UP en forma arrolladora, empezamos a ver ese escalonamiento de violencia que se llama el genocidio contra la UP. ¿Cómo empieza el genocidio? Con llamadas telefónicas a las sedes anunciando que van a poner una bomba; y en efecto, yo recuerdo que en aquel entonces la Casa Nacional del PCC, en la calle 19 con Caracas, en Bogotá, fue bombardeada. Lo mismo ocurrió en las sedes de la JUCO, de la UP en Kennedy, la del barrio Siete de Agosto, y así en diferentes partes del país. Luego llegaron, o al mismo tiempo, los sufragios anunciando la muerte de este o de aquel compañero. No demoraron tampoco las desapariciones, que se inician en 1984 contra la naciente UP cuando, el 24 de septiembre, desaparecen en Puerto Boyacá a los compañeros Miguel Ángel Díaz y Faustino López, además de los asesinatos de carácter selectivo. Por ejemplo, el compañero Dionisio Calderón, destacado dirigente sindical, es asesinado en el Valle del Cauca. Rubén Castaño es acribillado en Manizales el 28 de noviembre de 1985, pocos días después de ese formidable Primer Congreso Nacional de la UP, por miembros del Batallón Ayacucho. Poco después se presentan las masacres de Piñalito, en el Meta, la de Honduras y La Negra, en Urabá, en marzo de 1988. El ministro de Defensa era Rafael Samudio Molina, a quien recuerdo muy bien porque me tocó confrontarlo telefónicamente por los crímenes. En la Dirección Nacional de la UP discutíamos sobre el origen de los atentados, que para algunos provenían de organismos paramilitares, pero nosotros sabíamos que se hacían con la anuencia y el ropaje de las Fuerzas Armadas. La inteligencia militar

hacía el trabajo con los sicarios y los paramilitares y las actividades del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, eran la prueba más fehaciente de los crímenes contra la UP. A raíz de la masacre de La Honduras y La Negra, di unas declaraciones a Caracol y a RCN afirmando tajantemente que los paramilitares no habían sido los autores. Me salí, más o menos, de la línea que estábamos manejando en la Dirección Nacional y señalé al Ejército, bajo el mando del general Miguel San Buenaventura, comandante de la XVII Brigada, en Carepa, como responsable. Luego vienen los magnicidios, el de Pardo Leal el 11 de octubre de 1987, el de Bernardo Jaramillo el 22 de marzo de 1990. Y paralelo a todo esto, el más infame aparataje que dejaba una secuela de docenas de muertos cada mes.

Ustedes en el Partido Comunista y en la UP discutían el tema de cómo detener esta violencia y hacían llamados a la resistencia y al rechazo popular del genocidio, incluso a organizar la autodefensa, pero seguía la matanza.

—El recurso que tuvimos, de primera mano, fue la denuncia pública. Le doy un ejemplo: Pardo Leal señaló a los asesinos con charreteras, títulos y nombre propio, sin dejar de lado a capitanes, coroneles y generales del Ejército, la Policía y el DAS, y hasta demandó personalmente en los despachos judiciales de Paloquemao al general Landazábal. La UP implementó el trabajo de la seguridad poco después del asesinato de Jaime Pardo, bajo órdenes del presidente Barco. El DAS se encargaría de la protección de los compañeros más amenazados y se habló para el efecto con el jefe de ese organismo, el general Maza

Márquez, hoy detenido por el asesinato de Luis Carlos Galán. Se acordó nombrar un equipo por parte de la UP y el PCC para coordinar con ese aparato del Estado y me delegaron para semejante responsabilidad. La Policía se encargaría de las sedes y las casas de los dirigentes y el Ejército facilitaría los salvaconductos para la adquisición de las armas de protección de guardaespaldas y escoltas. ¿Pero qué sucedió? Las fuerzas opositoras comenzaron a azuzar a los medios de comunicación contra la UP, lo mismo los gamonales y los púlpitos, orquestándose toda la campaña. Carlos Lemos Simmonds, ministro de Gobierno de Barco, declaró que la UP era el brazo político de las FARC, lo que concitó el rechazo de los sectores democráticos, y hasta se publicaron caricaturas contra el jefe de la Cartera política, tras la protesta de Bernardo Jaramillo, que afirmó que con semejante señalamiento oficial se le había puesto una lápida al cuello. Pocas semanas después Jaramillo fue asesinado en el Puente Aéreo de Bogotá, en un crimen que no puede olvidar el país.

Recordemos que bajo los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz entre las FARC y el gobierno de Betancur, las FARC propusieron al pueblo colombiano, en la vía de cambiar la cultura de violencia y por los cambios pacíficos, la creación de un nuevo movimiento que vino a llamarse Unión Patriótica. Las FARC, entonces, promovieron cuadros y dirigentes para ese trabajo político, civilista. Su primer coordinador nacional fue Carlos Enrique Cardona, llamado comandante “Braulio Herrera,” que vino también con Luciano Marín, alias “Iván Márquez”. Llegan al Congreso colombiano a través de la contienda electoral, sin echar bala, con sus

discursos y propuestas como el programa de veinte puntos de la UP, que era sólo de reformas, nada radical, como el desmonte del IVA, hacer una nueva Constitución, la vivienda, la elección popular de alcaldes y gobernadores. En 1986 la UP logró obtener cinco senadores y nueve representantes a la Cámara. Hoy, veintiséis años después, tenemos dos representantes menos con el Polo en el Congreso, después de tantos años de brega.

Una frase que lo explica todo

¿Por qué el Establecimiento no se comprometió con este proceso de paz?

—Yo he escuchado de gente muy joven una frase que siempre me ha tocado y es que la oligarquía colombiana es la más astuta, la más audaz, la más corrupta y la más sanguinaria de América Latina. Y con esa frase me explico por qué, para conservar sus privilegios, llegan a cometer el genocidio, que reconoce la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo del caso Manuel Cepeda; porque alguien es culpable y solamente ellos han gobernado este país. Es decir, semejantes crímenes de lesa humanidad se cometieron bajo su mandato. Y no solamente este genocidio, que nosotros los sobrevivientes luchamos para que no quede en la impunidad, porque si nos remontamos a 1948, por ejemplo, con el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, se cometió otro crimen colectivo contra los gaitanistas, con la muerte de decenas de miles de colombianos. Me aterra que en Bogotá exista una biblioteca con el nombre de Virgilio Barco Vargas, cuando en su gobierno fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales.

¿Sabiendo que todo esto era así, con esas tradiciones que usted señala de las oligarquías, por qué se llega a negociar con el Establecimiento?

—Como decían Bernardo Jaramillo y José Antequera, “por la vida, hasta la vida misma”, y por eso nos metimos en este proceso, que apuntaba finalmente a eso que nos infundieron nuestros camaradas, de tener una patria libre y soberana. El pueblo sabe que tiene que enfrentar grandes enemigos con todo lo que tiene a su mano. Y con ese desgastado sambenito contra nosotros, de la combinación de todas las formas de lucha, se cometió el genocidio contra la UP. Ésa fue una tesis y no podemos seguir permitiendo que los enemigos de la paz hagan uso de esos argumentos para avalar sus crímenes. Quien adecuó, utilizó y puso en práctica esa táctica fueron ellos y aún lo siguen haciendo. ¿O acaso, para citar un solo ejemplo, el asesinato de Fabriciana Córdoba en abril de 2011, exmilitante de la UP, prima de la senadora Piedad Córdoba y destacada luchadora por los derechos de los desplazados, no obedece a esta política?

Hay un momento de fractura de la UP con el asesinato de Bernardo Jaramillo, ¿no se cometió un grave error al no lanzar un candidato presidencial que lo reemplazara de inmediato?

—Al respecto se discutió mucho en la UP, incluso Bernardo había adelantado varias conversaciones con Carlos Pizarro, el jefe del M-19, para llegar a la unidad. Ellos representaban en ese momento la juventud, el cambio, la renovación, precisamente por eso fueron asesinados. Vimos que la situación era muy compleja y optamos por no participar con un candidato

porque no había garantías ni un candidato que copara ese vacío. Sin embargo, nosotros continuamos en la brega así no fuéramos a las elecciones presidenciales, no nos quedamos de brazos cruzados. Por ejemplo, el compañero Octavio Sarmiento salió a la Cámara por el departamento de Arauca y continuamos con los sobrevivientes que nos quedaban, para demostrarle a la oligarquía y al país que la Unión Patriótica es un movimiento que nace con una propuesta de cambiar la cultura política del país y que tiene hoy plena vigencia. Al mismo tiempo hay que señalar la pasividad en que cayó el pueblo colombiano frente a los crímenes, manipulado por los sectores dominantes. A la sociedad aún le corresponde una autocrítica histórica frente a algo tan grave como el genocidio contra la UP.

Pero en esas mismas elecciones se votaba también por el Sí o el No a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La UP llamó a votar por la Constituyente, pero a la abstención en los comicios presidenciales que tenían lugar el mismo día, mientras se aducía que no había garantías.

—Yo repito que no había un candidato que llenara el vacío dejado por Bernardo Jaramillo.

Pero sí había una cantera de cuadros allí.

—Sí, puede haber sido un error haber dejado ese espacio vacío. Desafortunadamente por ese resquebrajamiento de la UP no lo comprendimos quizás en ese momento.

La gente nos acompaña en la tarea de reconstruir la UP

Y entonces entró en crisis la UP y se fueron al M-19 destacados cuadros. Llegó la

Constituyente de 1991 y se obtienen sólo dos representantes y noventa y ocho mil votos. La UP ya comienza a desdibujarse porque se lanza para esa contienda de la ANC, no como tal, sino bajo la sigla por la Vida y los Derechos Humanos. Y se da otra ruptura con la salida de su presidente Carlos Romero y la nueva presidente, Aída Abella, se ve obligada a marcharse al exilio. Ahora ustedes, de la UP Bolivariana, intentan reinventar el proyecto.

—El 9 de agosto de 1994 asesinan a Manuel Cepeda Vargas, el último senador de la UP, en el marco de la Operación Golpe de Gracia, pero el proyecto de la UP tiene plena vigencia. ¿Por qué no se pudo desarrollar? Por el asesinato de gran parte de sus dirigentes, porque el terrorismo de Estado fue tan violento que prácticamente exterminó a la UP. Hoy hay compañeros que no quieren hablar de la UP, les da temor y los lacera esa memoria. Necesitamos que la memoria sea la acción política para que no vuelvan a repetirse estos crímenes. Después los sobrevivientes de la UP participamos activamente en el Frente Social y Político que se crea en 2001 en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez, con Lucho Garzón a la cabeza, expresidente de la CUT, exdirigente del PCC y que obtiene 750 mil votos en las elecciones presidenciales de 2002, una cifra nada despreciable que daba cuenta de las inmensas reservas democráticas del país. Y que demostraba también que no nos habían eliminado del todo. Luego aparece el Polo Democrático Alternativo, donde se vincula todo ese resto de la UP. Con Carlos Gaviria, que apoyamos todos con entusiasmo, se sacan más de dos millones trescientos mil votos, la más alta votación de la izquierda en toda su historia y cuyo

camino fue abierto por Jaime Pardo Leal. Desde 2009 estamos tratando de retomar todo lo andado en estos años con un grupo de sobrevivientes. Hicimos una rueda de prensa en la librería de la Universidad Nacional del centro de Bogotá para anunciar la reactivación de la UP y lanzamos la candidatura del exmagistrado Jaime Araújo Rentería, a la Presidencia de la República.

Y presentamos, el 19 de mayo de 2010, una demanda entre Jaime Araújo, yo, y otros firmantes, ante el Tribunal de Cundinamarca para rescatar la personería jurídica de la UP, arrebatada a bala por los enemigos de la democracia y avalada en el 2002 por la Corte Nacional Electoral. En el estudio del caso, la magistrada Susana Buitrago citó el 26 de enero de 2011 a los expresidentes Belisario Betancur, Andrés Pastrana y al Consejero para la Rehabilitación del gobierno de Barco, Carlos Ossa Escobar.

Ossa Escobar había dado unas declaraciones en 2010 en la conmemoración de los veinticinco años de la UP, que sostuvo en junio de 2011 ante el Notario Tercero de Bogotá. Allí afirmó que las Fuerzas Armadas azuzaban el genocidio contra nosotros y señaló al general Rafael Samudio. En estos últimos meses hemos visto que hay un fuerte sentimiento de los sobrevivientes hacia la UP, pero también de los jóvenes que, sin haber vivido esa experiencia, quieren saber más acerca del movimiento y están dispuestos a integrar sus filas. Eso lo estamos viendo en las universidades, al tiempo que seguimos luchando para que desde los tribunales, en una tarea muy dura, se nos devuelvan nuestros derechos. Y proseguimos consiguiendo firmas para

la personería jurídica y si nos toca ir a los tribunales internacionales, pues lo vamos a hacer. Estamos seguros que mucha gente nos va a acompañar.

Pero hay un ala en la UP que dirige Mario Upegui, como presidente, que también instauró una demanda para recuperar la personería jurídica y fue negada, ¿no es un contrasentido que con tantos enemigos anden desunidos?

—No, de ninguna manera, con ellos sólo guardamos relaciones de amistad y respeto. Le añadimos Bolivariana a la UP, precisamente para evitar cualquier roce con su presidente Mario Upegui, nuestro compañero de tantas luchas, y con el Partido Comunista, que también respetamos profundamente. Nosotros nos enteramos que Mario Upegui iba a entablar una demanda en el último Congreso que realizó la UP, el 11 y 12 de noviembre de 2000. Desde entonces no se han vuelto a realizar congresos. En ese evento fue elegido Upegui como presidente de la UP y en el 2002 interpuso el recurso que fue denegado por el Consejo de Estado. A nosotros nos llamó la atención, porque a raíz de la querrela que presentamos con Jaime Araújo Rentería descubrimos que los magistrados tuvieron que remover todo lo anterior para poder darle curso a la otra. La nuestra no ha tenido ningún ocultamiento. Creemos que para el mes de octubre de 2011 ya debe haber un pronunciamiento sobre nuestra demanda.

¿En caso de que no sea favorable el fallo, ustedes van a seguir en el proceso de reconstrucción de la UP?

Por supuesto que sí, porque hay un caso muy especial en la sentencia de la

demanda presentada por el compañero Mario Upegui. Allí, en la página dieciocho, se argumenta que lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del magnicidio de Manuel Cepeda Vargas, el último senador de la UP, fue un horror contra la humanidad, al tiempo que señalan que la Ley 30 de 1994 reza que si usted no obtiene los votos necesarios no puede tener una personería jurídica. Entonces cómo es posible que los magistrados en Colombia reconozcan que estamos frente al horror del genocidio, pero se desconozca la doctrina del CIDH. Yo me apoyo en lo que dice Jaime Araújo: “Como ciudadano colombiano tengo la obligación histórica de no permitir que quede en el olvido este genocidio cometido contra la UP”. A los enemigos de la paz no les interesa que se mantenga la memoria. Creo que todos los presidentes, desde Betancur hasta Uribe, deben responder por el genocidio.

¿Qué legado histórico le deja la Unión Patriótica al pueblo colombiano?

—La herencia política que deja la UP es algo fundamental y está relacionado con

la ética, con la moral pública, la abnegación, la entrega, la capacidad de estudio, de trabajo, esa ligazón con la cultura. Se trata de un ejemplo vivo para las futuras generaciones y debemos recoger esta historia de veintiséis años. Las generaciones venideras tienen que guardar el legado histórico de la UP, porque la UP no se puede comparar, de ninguna manera, ni con la Unión Nacional de Oposición, ni con el Frente Democrático, ni con el Frente Social y Político, ni con el Polo Democrático Alternativo. Yo comparo a la UP con las gestas libertarias de Bolívar, y la reparación que tiene que hacer el Establecimiento colombiano no debe ser de tipo económico con las víctimas, tiene que ser de carácter integral, desde la academia, las escuelas, deben tener una cátedra que se llame UP, como existe ya en la Universidad Nacional y en la Universidad Autónoma, que los parques, las calles y avenidas lleven los nombres de los mártires de la UP, para que la gente tenga viva esa memoria del genocidio y no permita que se vuelva a cometer algo tan infame en Colombia.

8

Anexos de historia



Página anterior: marzo 28 de 1984, firma de los Acuerdos de La Uribe. De izquierda a derecha, "Alfonso Cano", César Gómez Estrada, "Manuel Marulanda", "Raúl Reyes", John Agudelo Ríos, Margarita Vidal, Jaime Guaracas, Samuel Hoyos Arango, Alberto Rojas Puyo, "Jacobo Arenas" y Rafael Rivas Posada.
(Foto: *Semanario Voz*)

_____ Acuerdos de La Uribe



De izquierda a derecha "Jacobo Arenas", Rafael Rivas Posada, Alberto Rojas Puyo y César Gómez Estrada, reunidos después de la firma de los Acuerdos de La Uribe, marzo de 1984. (Foto: Margarita Vidal, Voz).

Con el fin de afianzar la paz nacional, que es el requisito indispensable para la prosperidad general del pueblo colombiano, y para lograr el desarrollo de la actividad social y económica sobre bases de libertad y de justicia, la Comisión de Paz y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, acuerdan los siguientes puntos.

1. Las FARC-EP ordenarán el cese al fuego y demás operativos militares a todos sus frentes en el país, a partir del día 28 de mayo de 1984 a las 0:00 horas, fecha que podrá posponerse, como máximo, hasta por dos meses si fuere necesario.
La orden de que antes se habla se mantendrá indefinidamente si el señor presidente de la República, doctor Belisario Betancur, corresponde a este gesto efectivo de paz con una orden semejante suya, dada a todas las autoridades civiles y militares bajo su jurisdicción, en la oportunidad debida.
2. Las FARC-EP condenarán y desautorizarán nuevamente el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su práctica, como

atentados que son contra la libertad y la dignidad humanas.

3. La orden del señor Presidente de la República se cumplirá únicamente respecto de los grupos y personas que acaten y respeten estas bases y no infrinjan la ley penal.
4. Una comisión nacional amplia y representativa de las fuerzas implicadas en los enfrentamientos, designada por el señor Presidente de la República, será encargada de la verificación de todas las disposiciones contenidas en este acuerdo, con la finalidad de consolidar el proceso de pacificación. La comisión creará subcomisiones en Florencia (Cauquetá), Vistahermosa (Meta), Barrancabermeja (Santander), Saravena (Arauca), Santa Marta (Magdalena), Medellín (Antioquia), Neiva (Huila), Orito (Putumayo) y Cali (Valle), y podrá asesorarse de personas extrañas a ella para estudiar, con su concurso, en las regiones o sitios en que fueren conducentes sus servicios, las quejas o reclamos por hechos que pudieran interferir al anhelo nacional de paz y seguridad. La comisión funcionará por todo el tiempo que fuere necesario y podrá acordar sus propios reglamentos.
5. La Comisión Nacional de Verificación funcionará en Bogotá, y se trasladará periódicamente para sesionar, con plenas garantías de acceso y libre tránsito, a una de las siguientes localidades, a elección del señor Presidente de la República: a) San Juan de Arama, Granada, Vistahermosa, (Meta); b) San Vicente del Caguán (Cauquetá); c) Colombia (Huila); d) Dolores y Prado (Tolima), y e) La Uribe (Meta).
6. El Gobierno dotará a la comisión de todos los elementos necesarios de

comunicación para el mejor desempeño de sus funciones y expedirá a sus miembros las credenciales indispensables para garantizar su libre tránsito y seguridad.

7. Cuando a juicio de la Comisión Nacional de Verificación, hayan cesado los enfrentamientos armados, se abrirá un periodo de prueba o espera de un (1) año para que los integrantes de la agrupación hasta ahora denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), puedan organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión. El Gobierno les otorgará, de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes.
Durante este mismo periodo el Gobierno tomará las medidas necesarias para restablecer en las zonas de violencia la normalidad civil.
8. Los integrantes de las FARC-EP podrán acogerse a los beneficios de la Ley 35 de 1982 y decretos complementarios, cuando llenen las condiciones en ella y en ellos establecidos. En el Plan Nacional de Rehabilitación el Gobierno dará prelación a los colombianos que han padecido, directa o indirectamente, los estragos de la violencia y estimulará la creación de los medios jurídicos necesarios para el restablecimiento de derechos injustamente conculcados como consecuencia de la alteración del orden público y la inseguridad social.
9. La Comisión de Paz da fe de que el Gobierno tiene una amplia voluntad de:
 - a) Promover la modernización de las instituciones políticas, dirigida a enriquecer la vida democrática de la Nación, e insistir ante

las cámaras en la pronta tramitación de los proyectos sobre reforma política, garantías a la oposición, elección popular de alcaldes, reforma electoral, acceso adecuado de las fuerzas políticas a los medios de información, control político de la actividad estatal, eficacia de la administración de justicia, impulso al proceso de mejoramiento de la administración pública y nuevas iniciativas encaminadas a fortalecer las funciones constitucionales del Estado y a procurar la constante elevación de la moral pública.

- b) Impulsar vigorosamente la aplicación de una política de reforma agraria en reconocimiento a que

los problemas de la tierra están presentes en los actuales conflictos sociales, y las demás acciones de las agencias del Estado dirigidas a ampliar permanentemente los servicios al campesinado para mejorar la calidad de vida y la normal producción de alimentos y de materias primas para la industria, para lo cual dispone del instrumento jurídico contenido en el Artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece la dirección de la economía por el Estado.

- c) Robustecer y facilitar la organización comunal de usuarios campesinos y de indígenas, las asociaciones



Instalación de la Comisión de Verificación del Cese al Fuego y Tregua en el campamento del Secretariado de las FARC en Casa Verde, octubre 14 de 1984. De izquierda a derecha, "Alfonso Cano", "Jacobo Arenas", "Raúl Reyes", John Agudelo Ríos, "Manuel Marulanda", Jorge Mario Eastman, Jaime Arias, Alberto Rojas Puyo, Gilberto Vieira y Germán Bula Hoyos (Foto: Roberto Romero Ospina, *Voz*).

cooperativas y sindicales, a favor de todos los trabajadores urbanos y rurales, así como sus organizaciones políticas.

d) Hacer constantes esfuerzos por el incremento de la educación a todos sus niveles, así como de la salud, la vivienda y el empleo.

e) Mantener su propósito indeclinable de que para la protección de los derechos que a favor de los ciudadanos consagran la Constitución y las leyes y para la conservación y restablecimiento del orden público, sólo existan las fuerzas institucionales del Estado, de cuyo profesionalismo y permanente mejoramiento depende la tranquilidad ciudadana.

f) Promover, una vez restablecida la paz y tal como ocurrió en otras oportunidades, iniciativas para fortalecer las mejores condiciones de la fraternidad democrática, que requiere perdón y olvido, y del mejor estar en lo económico, político y social de todo el pueblo colombiano.

10. La Comisión de Paz estima que los enunciados anteriores representan un notable mejoramiento de las condiciones objetivas para la acción política y electoral y reitera su invitación a los sectores comprometidos en acciones disturbadoras del orden público, a que se acojan a la normalidad y apliquen sus talentos y prestigio a la conquista de la opinión pública por procedimientos democráticos y pacíficos.

11. El presente acuerdo será válido respecto de cualquiera otro grupo alzado en armas que exprese su decisión de acogerse a él, previa manifestación de tal voluntad hecha al Gobierno por intermedio de la Comisión de Paz.

Para facilitar la adhesión a este acuerdo de los grupos que deseen hacerlo, se realizará una reunión con todos ellos en el lugar y la fecha que las partes convengan.

12. Este acuerdo, para su validez, requiere la ratificación del señor Presidente de la República.

Para constancia se firma el presente documento en La Uribe, municipio de Mesetas, departamento del Meta, a los 28 días del mes de marzo de 1984.

Por la Comisión de Paz:

John Agudelo Ríos, presidente
Rafael Rivas Posada
Samuel Hoyos Arango
César Gómez Estrada
Alberto Rojas Puyo
Margarita Vidal de Puyo.

Por el Estado Mayor de las FARC-EP:

"Manuel Marulanda Vélez"
"Jacobo Arenas"
Jaime Guaracas
"Raúl Reyes"
"Alfonso Cano"

Plataforma de lucha de la Unión Patriótica



Más de veinte mil personas se congregaron en la Avenida Jiménez con carrera Séptima en Bogotá, en el evento de clausura del Primer Congreso de la Unión Patriótica. Interviene el comandante de las FARC "Braulio Herrera" (Foto: Lara, Voz).

Propuesta del Estado Mayor Central de las FARC-EP, 11 de mayo de 1984

1. Las FARC-EP encabezarán en unión con otros partidos y movimientos democráticos y de izquierda, la lucha de las masas populares por el retorno a la normalidad, a la controversia civilizada, por una apertura democrática que garantice el libre ejercicio de la oposición y su acceso a todos los medios de comunicación social, su organización, su lucha y movilización hacia crear un clima de participación popular en las gestiones de Estado.
2. Dentro del marco de la apertura democrática, las FARC-EP, en unión con otros partidos y corrientes de izquierda, lucharán utilizando todos los medios a su alcance por una reforma de las costumbres políticas, en dirección a desmontar el monopolio de la opinión ejercido por los partidos tradicionales para abrir cauce a la participación de las mayorías nacionales en los asuntos del Gobierno.
3. La lucha por una reforma electoral ocupará un lugar destacado en la política de las FARC-EP. Llevaremos al Parlamento un proyecto de ley que reviva la vieja disposición en Colombia, del medio cuociente y el medio residuo para los partidos políticos que obtengan en las elecciones menos de un millón de votos. Para los partidos que obtengan más de un millón de votos seguirá vigente la norma del cuociente y residuo tradicionales.
4. La reforma electoral incluirá el acceso de las minorías a las vicepresidencias de las corporaciones públicas, de las comisiones respectivas y la participación directa en las juntas de administración de las empresas del Estado.
5. Se luchará por la elección popular de alcaldes y gobernadores.

6. Se luchará porque el municipio sea elevado a la categoría de célula viva de la Nación, con un presupuesto del 30% proveniente de los impuestos y la renta nacional. Los concejos municipales y las asambleas departamentales jugarán un rol determinado conforme a las necesidades del desarrollo económico, social y político del país.
7. Se luchará por la aprobación de una ley de reforma agraria democrática que le entregue gratuitamente la tierra a los campesinos que no la poseen, sobre la base de la expropiación de la gran propiedad latifundista.
8. Se luchará por la vigencia de un plan nacional de incremento de la producción agrícola con la introducción de técnicas modernas, vías adecuadas de comunicación y prestamos a largo plazo y bajo interés a los campesinos productores por parte de las instituciones del Estado.
9. Se luchará por la aprobación de una ley de reforma urbana y un plan de construcción de vivienda para los destechados a precios de producción con cuotas que no pasen del 15% de los sueldos o salarios de los usuarios.
10. Se luchará por una reforma sustancial de la justicia esperando la ordinaria de la castrense para que esta última no pueda inmiscuirse en los asuntos que le competen a la primera.
11. Se crearán amplios comités compuestos por amas de casa, representantes de las centrales sindicales y de las juntas de acción comunal para que ejerzan el control de los precios de las mercancías de amplio consumo de la población y la fiscalización de las loterías y las licoreras departamentales.
12. Las FARC-EP encabezarán la lucha nacional contra el impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta que sea derogado por ser el peor elemento antisocial surgido en los últimos tiempos contra los consumidores.
13. Se luchará porque la educación en las universidades y colegios para gente de menores ingresos sea gratuita.
14. Se luchará por la reducción del Impuesto Patrimonial, predial y sobre la renta en un 50% a los propietarios cuyo patrimonio no pase de los dos millones de pesos.
15. La movilización y la lucha de las masas están dirigidas hacia que las empresas y compañías extranjeras sean nacionalizadas, y de la misma manera la banca, el sistema financiero y el transporte. Las tarifas de los servicios públicos mediante la lucha de las masas serán rebajadas en un 40%. Los sueldos y salarios de los trabajadores serán elevados en relación directa con el costo de vida.
16. Las FARC-EP en unión con otros partidos y movimientos democráticos encabezarán la lucha por la aplicación de la solución de los problemas fundamentales del campesinado del programa agrario de los guerrilleros.
17. Se luchará por una política internacional independiente, libre de la injerencia del imperialismo yanqui, por restaurar la soberanía patria lesionada por intereses extranjeros y por la teoría gringa de la seguridad.
18. Se luchará por el pleno ejercicio de las libertades políticas y sindicales, contra las secuelas de la violencia y el terror y su encarnación delictiva: el MAS, "Los Tiznados" del Magdalena Medio, "El Embrión", "Los Grillos", "Los

Menudos”, “Alfa 83” y otros escuadrones de inspiración mafiosa, dirección y financiación militar, por la desmilitarización de la vida colombiana, por la democratización de las Fuerzas Armadas Oficiales, por el retorno de las tropas oficiales a sus cuarteles, por un ministro de Defensa Civil, por la reducción del presupuesto militar, por una indemnización justa a las víctimas de la violencia y por desterrar del país la teoría de la seguridad, vil instrumento de violencia y muerte del imperialismo yanqui.

19. Todo lo expuesto en esta plataforma es alcanzable si las masas populares se movilizan y luchan. En este sentido las FARC y la UP hacen un cálido llamamiento a las masas populares para que se alcen a la lucha por las grandes transformaciones que a gritos el país reclama.
20. Esta plataforma igualmente es la base para el paso inmediato a la organización de los comandos departamentales, regionales, municipales y amplios comités de base de la Unión Patriótica. El Estado Mayor de las FARC se convierte provisionalmente en el Comando Nacional de la Unión Patriótica hasta cuando la primera Convención Nacional de la UP elija en firme su Comando Nacional.

En la UP caben liberales, conservadores, socialistas y gentes sin partido, obreros, campesinos, intelectuales, artistas, estudiantes y en general toda la gente Colombiana que quiera cambios en la vida del país. Adelante hombres y mujeres de Colombia, el porvenir es de la Unión Patriótica, el nuevo movimiento

político de las grandes masas del país nacional.

Plataforma de la Unión Patriótica. Conclusiones generales del Primer Congreso Nacional, Bogotá, noviembre 14-16 de 1985

La Unión Patriótica, como frente amplio, en el cual tienen cabida todos los sectores sociales, partidos políticos, organizaciones gremiales, etcétera interesados en impulsar el Proceso de Apertura Democrática y defender la soberanía e independencia de la Nación, propone a los colombianos la siguiente plataforma de lucha.

1. Por el levantamiento del Estado de sitio, el respeto a los derechos humanos, la proscripción de la tortura, de las desapariciones y de los crímenes por las fuerzas militaristas, los grupos paramilitares y terroristas.
2. Por una reforma de las costumbres políticas en dirección a desmontar el monopolio de la opinión ejercida por los partidos tradicionales para abrir cruce a la participación de las mayorías nacionales en los asuntos del Gobierno a través de:
 - » Una reforma electoral democrática que elimine el monopolio bipartidista en el aparato de control electoral, y en la cual se garantice una efectiva representación de las minorías mediante el sistema de cuociente nacional.
 - » Elección popular de alcaldes, gobernadores, Contralor y Procurador General de la Nación.
 - » Eliminación del parágrafo del Artículo 120 de la Constitución Nacional que ha impedido en la



Las primeras piezas publicitarias (Foto: Voz).

práctica la presencia de una oposición legal y con garantías.

- » Eliminación de las normas que exigen la paridad política para la integración de la Corte suprema de Justicia, el Consejo del Estado y el resto de la rama Jurisdiccional.
- 3. Por la restitución del principio democrático de soberanía popular y el derecho del pueblo a decidir cuestiones centrales de la vida nacional, reconociéndose la iniciativa legislativa popular, así como la consulta a través del plebiscito simple o referéndum y la participación popular en las juntas directivas de los institutos de prestación de servicios públicos y en los organismos de planeación.
- 4. Por una asamblea popular constituyente que adopte una nueva Carta Fundamental, acorde con la realidad socioeconómica y política del país, suprimiendo los recursos

constitucionales de represión popular que hoy están vigentes.

- 5. Por la subordinación efectiva de la Fuerza Pública a la autoridad civil, pasando la Policía a órdenes del Ministerio de Gobierno y las Fuerzas Militares regresando a cumplir su deber constitucional de guarda de fronteras y la soberanía nacional, desmilitarizando la vía nacional y eliminando los grupos paramilitares.
- 6. Por la dotación de los recursos fiscales para los municipios y regiones en cantidad suficiente para garantizar su desarrollo y la autonomía.
- 7. Por la reactivación de la economía que beneficie a las mayorías nacionales y no a la oligarquía y al capital transnacional.
 - a) Por el alza general de sueldos y salarios y su reajuste de acuerdo con el incremento en el coste de vida; por la congelación de los precios de

- los artículos de la canasta familiar, de los insumos agropecuarios, de la gasolina y de las tarifas de los servicios públicos. Por el control de los precios por las juntas comunales, comités de amas de casa, las centrales y las federaciones sindicales.
- b) Por planes de empleo en una semana laboral máxima de treinta y seis horas, la protección de la producción nacional, planes de incremento a la industrialización y apoyo a las cooperativas de producción y pago de subsidio a los desempleados.
8. Por la derogatoria del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la reducción de impuestos para propietarios con patrimonio inferior a ciento cincuenta salarios mínimos mensuales y aumento a la tributación de los monopolios y los terratenientes.
 9. Por la reducción de los gastos militares y de Policía, de manera que no podrán ser superiores al presupuesto de ninguno de los siguientes ministerios: Salud, Educación, Ciencia y cultura, Agricultura y Obras Públicas.
 10. Por la nacionalización del petróleo, carbón, gas, uranio y níquel. Serán sustituidos todos los contratos de asociación y concesión vigentes para la exploración de estos recursos por contratos en que la empresa estatal sea el propietario único y el contratista extranjero duplique las regalías pagadas.
Nacionalización de la banca y los monopolios; rechazo a la autorización de compra por extranjeros de los bancos quebrados y a la nacionalización de la deuda de los monopolios. Por la municipalización de las empresas de transporte.
 11. Por la declaratoria de la deuda externa como socialmente impagable por el pueblo colombiano y como un problema global contemporáneo que afecta toda posibilidad de nuestro desarrollo social y crecimiento económico independiente. Contra la imposición de los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional y la banca extranjera. Por el freno a la devaluación del peso y por la solidaridad latinoamericana para el no pago de la deuda externa.
 12. Por la aprobación de una ley de reforma agraria democrática que le entregue gratuitamente la tierra a los campesinos sobre la base de la expropiación de la gran propiedad latifundista y con apoyo a la colonización de los baldíos nacionales, basada en el respeto fundamental de los recursos naturales. Se pondrá en práctica un plan nacional de incremento de la producción agropecuaria con la introducción de técnicas modernas, vías adecuadas de comunicación, desarrollo de cooperativas de producción y comercialización; préstamos a largo plazo y bajos intereses a los campesinos y colonos productores por parte de las instituciones del Estado. Estas deberán considerar a la mujer campesina en igualdad de condiciones y derechos como usuarios de los servicios y eliminarán la discriminación que se hace por motivos de edad para los prestatarios. Se exige cumplir los acuerdos de Diálogo Nacional sobre la Ley de la Reforma Agraria y Ley de Garantía de los Derechos Laborales y de Asociación Sindical en el Campo.
 13. Por el respeto a los derechos de las comunidades indígenas sobre las tierras

de resguardo y a la autonomía de los cabildos y demás formas de organización. Por la ampliación de los resguardos, por el desarrollo de la cultura indígena, el derecho a la educación bilingüe y el uso de la propia lengua. Por la prohibición de la entrega de tierras habitadas por indígenas como si fueran baldíos.

14. Por una reforma urbana que expropie los lotes de engorde y por el desarrollo de un plan de construcción de viviendas, cuyas cuotas no pasen el 15% del ingreso mensual del usuario.

15. Por el derecho al trabajo asalariado sin discriminación salarial ni sexual y con garantías sociales para ejercerlo. Por el cumplimiento de las disposiciones legales que establecen la igualdad de la mujer y el hombre en los diferentes terrenos. Reglamentar la Ley 51 de 1981 contra toda forma de discriminación de la mujer. Por la eliminación de la subordinación de la mujer en su relación con el hombre. Por guarderías, lavanderías y restaurantes populares creados por el Estado y la empresa privada. Condiciones democráticas para la procreación de la familia; puesta en marcha por el Estado de métodos de planeación familiar efectivos y gratuitos, sin que ello indique injerencia estatal. Abolición del delito del aborto.

16. Porque el Estado asuma la totalidad de la financiación de la educación en todos los niveles. Por una reforma universitaria democrática que le devuelva la autonomía a la Universidad Pública y garantice la elección de sus directivos por los estamentos universitarios. Por el Bienestar Estudiantil y la legalización de las organizaciones

estudiantiles, tarifa diferencial en el transporte de estudiantes y por la ampliación de cupos en colegios y universidades. Por una recreación deportiva gratuita y masiva, con una racionalización de desarrollo del deporte a través de la educación pública.

17. Por la creación de un sistema nacional de salud que garantice la adecuada atención sanitaria a todos los colombianos. Por la congelación del precio de las medicinas y el establecimiento de la producción de medicamentos por cuenta del Estado. Por el establecimiento de programas de protección a los ancianos y el reajuste de las pensiones de jubilación de acuerdo con el alza del costo de vida. Por énfasis en los planes estatales para la protección, formación y desarrollo de la población infantil.

18. Por el cumplimiento de los objetivos sociales de defensa ecológica y del medio ambiente, mediante suficientes recursos económicos y acciones coercitivas eficientes para frenar los abusos actuales de la propiedad privada sobre este bien social.

19. Porque se le garantice a los colombianos residentes en el extranjero el pleno ejercicio de sus derechos por parte de los diplomáticos nacionales, representándolos ante las autoridades locales y garantizándoles a su regreso la incorporación a la vida económica y política del país.

20. Por una política internacional independiente, libre de la injerencia del imperialismo yanqui. Por restaurar la soberanía patria lesionada por intereses extranjeros y por la teoría de la "seguridad nacional". Por la integración económica

latinoamericana y caribeña y la formación de un nuevo orden económico internacional.

Para ser viables las propuestas anteriores se requiere acción política de la Unión Patriótica, una actitud consciente y generalizada de aplicar formas de planificación científica, llevando a la práctica

normas constitucionales vigentes, como la contenida en el Artículo 2° de la Constitución Política que señala que el desarrollo económico, debe tener como objetivo principal: “La justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad y de las clases proletarias en particular”.

Pido perdón ———



El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se dirige al país en el acto público de perdón del Estado por el crimen del senador Manuel Cepeda Vargas. A su izquierda, Iván Cepeda; el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo y el presidente de la Cámara, Simón Gaviria. (Foto: Centro de Memoria)

Discurso del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, de reconocimiento público de responsabilidad del Estado colombiano en el caso Manuel Cepeda Vargas, 9 de agosto de 2011 con el Congreso de la República en pleno.

Renuevo mi saludo a los familiares del senador Manuel Cepeda Vargas que se encuentran presentes en este acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado colombiano, que se realiza en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proferida el 26 de mayo de 2010.

Señoras y señores:

Colombia se enfrenta en la actualidad a uno de sus más grandes retos: la reivindicación de la memoria y la vida de todas aquellas personas víctimas de la violencia, originada en variadas causas y con funestas consecuencias que recaen en el Estado, la democracia, la sociedad y en sus familias.

Esta reivindicación exige al Estado la búsqueda de alternativas que permitan la reconciliación y el perdón y, por sobre todas las cosas, el hallazgo definitivo de una paz duradera. Nuestra historia, marcada por episodios de violencia y amargura, no ha logrado empañar el anhelo ni obstruir ciertamente el trabajo incansable de mujeres

y hombres valiosos en el terreno de la democracia, que hasta con su vida, han defendido sus ideales y principios políticos y han procurado el ejercicio de los derechos y las libertades propias, y de los otros.

El senador Manuel Cepeda Vargas fue uno de ellos; a quien su vida le fue segada en medio de lo incomprensible de la violencia.

Hoy, hace diecisiete años, la sociedad y, en particular los partidos políticos, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, lamentaron la pérdida del senador Cepeda Vargas: un hombre que defendió incansablemente sus ideas y los valores democráticos, y que a su vez, me es preciso enfatizar, se destacó notablemente por su férreo carácter de luchar por sus más profundas convicciones políticas.

El asesinato de Manuel Cepeda Vargas se produjo el 9 de agosto de 1994, en la ciudad de Bogotá, y en momentos en los que se desplazaba desde su vivienda hacia el Congreso de la República. En aquella época ostentaba la condición de senador en representación del Partido Político Unión Patriótica, luego de haber ejercido la investidura como representante a la Cámara entre 1991 y 1994.

Diversas decisiones judiciales en el orden nacional y la sentencia proferida contra el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de este caso, constataron que el homicidio contra el senador Cepeda Vargas: fue cometido por agentes estatales, es decir desde el Estado mismo, y en conjunto con miembros de grupos paramilitares.

Esta acción repudiable y vergonzosa truncó el proyecto de vida del hombre

público que era el senador: un líder político y un miembro activo de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Santafé de Bogotá subrayó, al momento de proferir condena contra personas que participaron de los hechos, que el móvil del homicidio de Manuel Cepeda Vargas fue su militancia política de oposición, expresada en su labor como dirigente activo de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, en sus actividades en el Congreso de la República y en sus publicaciones como comunicador social. Estos hechos lamentables tienen una connotación vergonzante y a ello debe agregarse lo expresado también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia ya referida, en el sentido de que la ejecución del senador Cepeda Vargas:

“[Fue] cometida en el contexto de violencia generalizada contra miembros de la Unión Patriótica, por acción y omisión de funcionarios públicos”.

Un Estado como el nuestro, no debe ni puede permitir la repetición de hechos similares, y por tanto, este acto debe entenderse como una forma de evocar su memoria y una forma de decirle a la sociedad en su conjunto, que quienes hoy hacemos las veces de voceros del Estado colombiano, repudiamos cualquier acción violenta contra un ciudadano, y aún más, cuando esta es cometida con participación o consentimiento de agentes estatales.

En nombre del Estado de Colombia, en representación del Gobierno Nacional, y en mi condición de ministro del Interior y de Justicia, pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Cepeda Vargas. Mis condolencias más

sinceras a sus hijos, al representante Iván Cepeda Castro y a María Cepeda Castro, a Claudia Girón Ortiz, a sus hermanas María Estella, Ruth y Gloria María Cepeda Vargas, a su hermano Álvaro Cepeda Vargas, a los demás familiares aquí presentes y a los familiares fallecidos, Olga Navia Soto y Cecilia Cepeda Vargas.

Este execrable crimen causó la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la honra y a la dignidad, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación y a los derechos políticos del senador.

También hoy, y en representación del Estado, reconocemos que la justicia tardó un tiempo más allá de lo razonable en adelantar la investigación, e incluso hoy, se desconocen con precisión las circunstancias y los autores intelectuales que participaron en estos hechos. Por sí solos, tales acontecimientos constituyen violaciones de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio del senador Cepeda y sus familiares quienes, a su vez, fueron víctimas de la violación de sus derechos a la integridad personal, protección de la honra y la dignidad y el derecho de circulación y residencia, todos ellos reconocidos en el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Este conjunto de circunstancias deplorables hacen imperioso que hoy, tras cumplirse diecisiete años del homicidio del senador Cepeda Vargas, debamos reconocer la responsabilidad del Estado colombiano por la acción de sus agentes, y por la omisión de no haber otorgado la protección suficiente, en su momento.

En este recinto, y ante ustedes honorables asistentes, el Estado expresa su solidaridad con los familiares, amigos y copartidarios del senador Manuel Cepeda Vargas. Así mismo, quisiera reiterar nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia en Colombia.

El Gobierno Nacional, actúa bajo la convicción de que sólo sus acciones y decisiones serán legítimas en la medida en que estén fundadas en el respeto absoluto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Un Estado como el nuestro, no puede permitir la repetición de hechos similares. En este contexto, este acto se entiende como una forma de decirle a la sociedad que estas acciones violentas contra todo ciudadano deben ser repudiadas. En este caso, el ciudadano es Manuel Cepeda Vargas.

Hoy decimos: nunca más. Ése es nuestro compromiso inquebrantable.

Muchas gracias.

Colombia no llegará a la paz sin que se esclarezca el genocidio de la UP



En el Salón Elíptico, el Congreso en pleno durante la ceremonia en la que el Estado, a nombre de la Nación, pide perdón por el crimen del senador Manuel Cepeda Vargas, 9 de agosto de 2011 (Foto: Voz).

Palabras del representante a la Cámara Iván Cepeda Castro en el acto solemne de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, 9 de agosto de 2011.

Me complace que hoy sea en este recinto donde se lleva a cabo el acto solemne de reconocimiento de responsabilidad estatal por el asesinato de mi padre. Él fue en sus últimos años congresista: primero elegido como representante a la Cámara para el periodo legislativo 1990-1994, y acababa de posesionarse como senador de la República cuando lo mataron.

Una franja tricolor señala la curul que él ocupaba en esta sala. En este mismo recinto en el que nos encontramos, el 19 de octubre de 1993, denunció que iban a atentar en

su contra tres generales del Ejército Nacional e integrantes de grupos paramilitares bajo la Operación Golpe de Gracia; un plan macabro que terminó con la vida de otros miembros de la dirección de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, así como le costó el exilio a la concejal Aída Abella y al senador Hernán Motta. Meses después, el 9 de agosto de 1994, sin que las autoridades hubieran tomado ninguna clase de medidas para evitar su inminente asesinato, ocurrió el crimen anunciado, exactamente tal y como él lo había descrito en la sesión del agitado debate de control político.

En un operativo mixto, militares y paramilitares lo asesinaron cuando venía aquí, a la Comisión Segunda Constitucional, a defender en calidad de ponente el proyecto de ley que ratificaba la adopción del Protocolo Segundo Adicional a los Convenios del Derecho Internacional Humanitario. Acompañando ese operativo estuvo presente el propio jefe paramilitar Carlos Castaño. Así lo narró en el libro *Mi confesión*. Según los paramilitares, había recibido esa orientación de los generales a través de uno de sus asesores, José Miguel Narváez, quien dictaba un curso en los centros de sicarios de las Autodefensas Unidas de Colombia llamado: “¿Por qué es legítimo matar comunistas en Colombia?”.

Esa misma suerte la corrió buena parte de la bancada parlamentaria de la Unión Patriótica. Uno tras otro, siete de sus congresistas fueron asesinados. Algunos de ellos murieron abaleados en sus casas, delante de sus familias. El sucesor de mi padre, el senador Hernán Motta, como ustedes lo han visto en este acto, vive en el exilio. Lo amenazaron a él y a su familia, la cual había ya sufrido

el homicidio del hermano de Hernán, también militante de la Unión Patriótica. Llegará el día, señoras y señores parlamentarios, en que a esa bancada aniquilada por la violencia, se le rinda un merecido homenaje. En esa luctuosa época a diario caían asesinados los militantes de la UP, y el ritual semanal era ir a enterrar a un nuevo líder inmolado. Eran días como aquel, en que a mi tía Stella, a quien ustedes escucharon aquí, le dinamitaron su casa por ser dirigente de la colectividad en el Cauca; un atentado del que ella y su familia se salvaron milagrosamente. Días como aquel en que nos despertamos con la noticia del asesinato de Bernardo Jaramillo, de Jaime Pardo Leal o de José Antequera. En los que las noticias eran como aquella, que tanto recuerdo, acerca de que en el sepelio de un concejal de la UP en el Meta, los paramilitares habían puesto ante la funeraria un potente equipo de sonido, habían montado una fiesta y al salir el cortejo fúnebre dispararon matando e hiriendo a algunos de los familiares y dolientes.

Y mientras ocurría este baño de sangre, como lo manifestó ante notario público el exconsejero de Paz, Carlos Ossa Escobar, el general, entonces ministro de Defensa, Rafael Samudio Molina dijo un día cuando este fue a visitarlo a su despacho para expresarle suma preocupación porque cada día estaban matando a un miembro de la UP: “Carlos, a ese ritmo no van a acabar nunca”. Sobran los comentarios. No ha sido fácil el camino de diecisiete años para llegar a esta tarde en la que se reconoce la responsabilidad estatal en este crimen de lesa humanidad. Dicho camino ha consistido en una sucesión de exilios, atentados, amenazas, que han incluido el

espionaje de nuestra vida privada y repetidas campañas de desprestigio. Nada de eso nos hizo desfallecer, y debemos decir hoy, sin presunción pero con orgullo que buena parte del proceso de justicia en este caso se ha logrado gracias a nuestra perseverancia, a la de nuestros incansables abogados y abogadas del Colectivo José Alvear Restrepo y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y al trabajo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.



La curul que ocupó Manuel Cepeda Vargas en el Senado, engalanada con el tricolor en el acto de homenaje a su memoria el 9 de agosto de 2011 (Foto: Voz).

Para sólo mencionar uno de los innumerables episodios de esta persecución que buscaba dejar en la impunidad el caso Cepeda y el genocidio de la UP, baste recordar el desacato de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del anterior Gobierno. El anterior Presidente de la República, cuando fue notificado de la sentencia internacional que hoy respetuosamente se acata, hizo una declaración en la que so pretexto de pedir perdón por el asesinato de mi padre, en realidad agraviaba nuevamente a las víctimas con calumnias como que habíamos formulado “falsas acusaciones” contra el país y como que habíamos procedido “con odio a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos”.

Esa actitud es lastimosamente reveladora del sentimiento de complicidad con los autores de muchos de los crímenes contra la humanidad que se han cometido en Colombia, de la persistencia de algunos sectores de la extrema derecha del país en seguir justificando sus actuaciones violentas y del desafío a la justicia internacional para mantener la impunidad de crímenes estatales en Colombia.

Hoy, a diferencia de tales comportamientos, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos hace oficialmente el reconocimiento de responsabilidad por el crimen perpetrado contra el senador Manuel Cepeda Vargas, y solicita en esta sesión solemne perdón por este hecho. Como lo hemos afirmado en otras oportunidades, la petición de perdón en situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne. Para que sea auténtico requiere que admita sin ambigüedad la verdad de los hechos, la demostración de la

voluntad para esclarecerlos, la enunciaci3n de los destinatarios de la petici3n, el reconocimiento p3blico del da1o causado y la expresi3n del compromiso de no repetir en el futuro acciones similares.

Al cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno Nacional no s3lo honra su deber de acatar y poner en pr3ctica las medidas de reparaci3n dictaminadas por el tribunal internacional en un caso particular. Al mismo tiempo, realiza una acci3n simb3lica que tiene al menos cuatro significados profundos para la sociedad colombiana, que quiero destacar brevemente. En primer lugar, al reconocer oficialmente su responsabilidad en el caso del asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, se cumple con un acto de justicia en uno de los miles de hechos del genocidio contra la Uni3n Patri3tica.

La Corte Interamericana estableci3 n3tidamente que el Estado colombiano, adem3s de ser responsable por acci3n y omisi3n del homicidio pol3tico contra el senador Cepeda, fue responsable de haber violado un conjunto de derechos fundamentales: haber negado la justicia y mantener la impunidad sobre los m3ximos responsables que ordenaron y planificaron el asesinato; haber negado la alianza criminal al m3s alto nivel entre sectores de las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares; haber atentado contra la libertad de expresi3n y de asociaci3n pol3tica de Manuel Cepeda en tanto comunicador social y l3der de la Uni3n Patri3tica y del Partido Comunista; intentar destruir o tergiversar la memoria del hecho y da1ar gravemente nuestra honra y dignidad; desarrollar una incesante persecuci3n contra quienes buscamos

justicia en este caso, llegando incluso a llevarnos al exilio, etc3tera, etc3tera.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenci3 que el asesinato perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda tiene las caracter3sticas de un crimen de Estado. Cito la sentencia en su p3rrafo 124: “La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violaci3n del derecho a la vida del senador Cepeda Vargas no s3lo se encuentra comprometida por la acci3n de los dos suboficiales ya condenados por su ejecuci3n, sino tambi3n por la acci3n conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de car3cter complejo, que debi3 ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los v3nculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales. La planeaci3n y ejecuci3n extrajudicial del senador Cepeda Vargas, as3 realizada, no habr3a podido perpetrarse sin el conocimiento u3rdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondi3 a una acci3n organizada, dentro de un contexto general de violencia contra la UP”.

Sobre este particular no puedo dejar de subrayar que la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Cepeda, se inscribe en el hist3rico movimiento que est3 en curso actualmente en nuestra sociedad en el que se llevan a cabo trascendentales procesos judiciales, y en el que se adoptan las leyes que comienzan a consagrar algunas medidas tendientes a satisfacer los derechos de las v3ctimas. Es el proceso en el que est3 surgiendo, tal vez por primera vez en nuestra historia,

el principio de proscripción de los crímenes contra la humanidad.

Deseo decir, señor ministro, que el Congreso de la República debe defender y no debilitar este movimiento por la justicia. Reformar la Justicia es necesario pero sólo para fortalecerla; no para socavar su autonomía, anular sus poderes, someter su independencia a la voluntad de los intereses políticos o favorecer el regreso al reino de la impunidad, en el que se han encontrado casos como el que hoy es objeto de una medida de reparación. Debemos fortalecer la actuación de las Altas Cortes, de la justicia constitucional, de la Fiscalía General de la Nación y de los órganos de control. En segundo lugar, el acto de hoy tiene el significado de ser un reconocimiento de la verdad histórica y, en ese sentido de nuestra dignidad y de la dignidad del senador Manuel Cepeda Vargas.

Este reconocimiento comienza a cerrar definitivamente la discusión acerca de la naturaleza de los crímenes que se han cometido en las últimas décadas contra miles de miembros de la oposición política en nuestro país, y se constituye en un precedente fundamental para esclarecer el carácter del genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Ha quedado clara la esencia política de este crimen, y que los móviles que impulsaron a sus autores intelectuales eran los de acabar de raíz la Unión Patriótica, como opción que tenía un programa de cambios sustanciales. No fueron el narcotráfico, ni la venganza personal los que acabaron con un movimiento político entero.

La verdad de este caso es que Manuel Cepeda era un líder político de oposición, quien fue asesinado para dar un golpe de gracia a la colectividad política

a la que perteneció, que en el momento de su muerte había sido debilitada por miles de otros crímenes y que había sido declarada objetivo de planes genocidas que cumplieron rigurosamente su propósito, hasta lograr debilitar sus estructuras organizativas y su influencia política. El tercer aspecto que tiene el reconocimiento del Estado es que este es un acto con hondo significado para la democracia, y para el comienzo del procedimiento de la reparación política en el caso de la Unión Patriótica.

La lección auténticamente democrática del sacrificio de los miles de miembros y líderes de la UP, debe quedar por fuera de cualquier duda malintencionada. A pesar de que eran plenamente conscientes de que su vida corría un extraordinario riesgo, prefirieron asumir el peligro y, muchos de ellos, eligieron permanecer en sus puestos y actividades a sabiendas que ello les costaría su vida. Lo hicieron porque creían firmemente en la democracia y en la acción política no violenta. Esa convicción la defendieron con su vida y con la de los suyos.

Quiero citar a ese propósito lo que ha dicho el hijo de uno de los dirigentes de la UP asesinados, José Antequera: “En lo que se refiere a la Unión Patriótica es claro que la opción demostrada con la propia vida de sus militantes, una y mil veces, fue la de la paz y la democracia, y eso, en vez de ser un motivo de vergüenza, es un orgullo y un legado generalizable. El día que vengan las disculpas que tiene que pedir el Estado colombiano, lo que debe venir es el reconocimiento de esa verdad: que en Colombia no es delito ser comunista, como lo fue Manuel Cepeda; que la Unión Patriótica fue una

esperanza real de paz; que los derechos humanos deben ser garantizados sin distinción de raza, género, credo u opinión política". No es legítimo matar comunistas, ni conservadores, ni liberales. No es legítimo matar a nadie por sus convicciones políticas. Ésa es la verdadera lección que debemos aprender como parte de un proceso de civilización política. Esa es la democracia: el diario ejercicio del diálogo y la decisión sobre asuntos vitales de la sociedad, en medio de las contradicciones más álgidas, pero en la convicción de que podemos encontrar el acuerdo, o cuando menos un ambiente propicio a la contradicción sana.

Por último, la petición oficial de perdón en el caso Manuel Cepeda Vargas, es un acto que renueva la esperanza en que Colombia podrá poner fin al prolongado conflicto armado que destruye al país. Dificilmente puede pensarse que Colombia llegará a la paz y a la reconciliación sin que se esclarezca el genocidio contra la UP. Se trata de uno de los grandes crímenes de nuestra historia que dejó una trágica enseñanza: no puede responderse a un pacto de paz o a un proceso de paz con la traición y el asesinato de quienes crean en la promesa de respetar la palabra empeñada en ese pacto. Y esta afirmación la dirijo a todas las partes del conflicto a las que exijo no sólo que respeten el Derecho Humanitario, a la población civil y a sus propios contrincantes; sino además que respeten los pactos y los procesos en los que se llegue a acuerdos para finalizar el conflicto armado.

Señor ministro Germán Vargas Lleras, señoras y señores congresistas, señoras y señores: en nombre de mi familia, en mi calidad de defensor de derechos humanos y de representante a la Cámara, acepto esta petición de perdón como signo de un tiempo nuevo en Colombia, en el que sea posible la participación democrática de todas las fuerzas políticas. Acepto esta petición solemne de perdón como un acto que simboliza la convicción de que al eliminar sectores de la oposición se hizo un daño irreparable a la sociedad colombiana, y que el Gobierno afirma que es una situación que no puede ni debe volver a repetirse.

Acepto este acto de reconocimiento de responsabilidad como un acto de esperanza de que es posible que entre todos construyamos la paz en Colombia, fundada en la democracia y en la justicia. Es importante pedir perdón y perdonar, pero más importante aún es trabajar para que en nuestra patria no se vuelvan a cometer crímenes que obliguen al Estado colombiano a pedir perdón y a las víctimas a perdonar.

"Nos creíamos inmortales, pero sopló el viento", decía mi padre en un escrito póstumo dedicado a mi madre Yira Castro, y recordando a muchos de sus colegas y compañeros inmolados. Las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica no han muerto. Vivirán por siempre en la memoria de nuestra sociedad. Su vida, como lo demuestra este acto, no pudo destruirla la impunidad.

Muchas gracias.

La segunda edición de este libro
anticipa la inauguración
del Edificio del Centro de
Memoria.

Se terminó de imprimir
en la ciudad de Bogotá
en el mes de octubre de 2012.

Con la reimpresión de esta obra fundamental para la comprensión de uno de los aspectos más graves de la violencia política que asola a nuestro país, la Alcaldía Mayor de Bogotá reivindica el derecho a no olvidar, parte integral de su política pública. No olvidar para que jamás se vuelvan a repetir estos hechos que avergüenzan el alma nacional”.

**ANA TERESA BERNAL, Alta Consejera para los
Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.**

“Este libro es una radiografía de esa matanza que acabó con uno de los partidos de izquierda más prometedores de la historia reciente de nuestro país, y que surgió como resultado de los Diálogos de Paz de 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC”.

El Espectador

“Me impresiona la cantidad de fotografías, el buen recuento de los militantes de la Unión Patriótica que cayeron y que eran muy importantes en su época tratando de pelear dentro de la democracia. La obra es una gran recopilación de esta historia de horror”.

JULIO SÁNCHEZ CRISTO, *La W radio*

“El periodista Roberto Romero Ospina encontró que las investigaciones de la mayoría de los asesinatos contra los miembros de la Unión Patriótica, que registra su libro, siguen en la impunidad y la justicia tardaría unos sesenta años en esclarecerlos”.

VerdadAbierta.com, proyecto asociado de revista *Semana*

“*Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido*, es un aporte a la necesaria reparación a las víctimas y en el camino de vencer la impunidad como presupuesto para construir nuevos caminos de paz y reconciliación”.

CLARA LÓPEZ OBREGÓN, ex Alcaldesa Mayor de Bogotá

“Un valioso documento que empieza con una escabrosa lista de asesinados y desaparecidos de la Unión Patriótica, entre 1984 y 1997, continúa con las semblanzas de algunas víctimas y concluye con las reflexiones y testimonios de los líderes que sobrevivieron al aniquilamiento”.

Kien&Ke

“Roberto Romero ha sido uno de los mejores reporteros y cronistas que haya pasado por el *Semanario Voz*, de la escuela de Manuel Cepeda, y para muestra este contundente trabajo sobre la historia de la Unión Patriótica”.

CARLOS LOZANO, director del *Semanario Voz*

<http://www.centromemoria.gov.co/>

ISBN-13: 978-958-6411-52-1



9 789588 411521